República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	ANA GRISEL TORRES ROBERTO
Parte demandada	PORVENIR S.A. Y DUGOTEX EN REORGANIZACIÓN
Radicación	11001310500520170058601
Fecha de la decisión	18 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Motivo	APELACION
Tema	PENSION DE INVALIDEZ
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310500520170058601
No. de Acta	042

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada PORVENIR S.A. contra la sentencia proferida el día 18 de septiembre de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (capeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (PDF 01 SUBSANACIÓN DEMANDA)

La señora ANA GRISEL TORRES ROBERTO, presentó demanda ordinaria laboral con el fin de que se condenara a las entidades Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., Caja de Compensación Familiar Compensar y Dugotex S.A., al pago de su pensión de invalidez desde la fecha de su causación. Además, solicitó intereses moratorios y sanción moratoria por no pagar oportunamente dicha prestación, así como el pago de incapacidades pendientes desde la fecha de incapacidad, con sus respectivas actualizaciones monetarias, aplicando incluso los principios ultra y extra petita, y las costas procesales.

Fundamentó sus pedimentos en que fue incapacitada desde el 19 de junio de 2013 (fols. 26-28), incapacidad que se prolongó más allá de 360 días, superando el 50% de pérdida de capacidad laboral, sin que se haya podido recuperar. Afirmó además que las demandadas han negado el pago tanto de las incapacidades como de la pensión reclamada. Adujo que actualmente se encuentra postrada, que había realizado

solicitudes previas a las entidades demandadas recibiendo respuestas negativas, asimismo se duele de la falta de pagos por incapacidad ni pensión alguna.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 02 de octubre de 2017 (pdf 03), complementado posteriormente con auto del 05 de marzo de 2018 (pdf 04), disponiendo el traslado correspondiente a las entidades demandadas. Posteriormente, mediante auto del 06 de octubre de 2020 (pdf 16), se tuvo por no contestada la demanda por parte del Fondo de Pensiones Porvenir S.A. y se ordenó valorar a la demandante por medicina laboral de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Por otra parte, tuvo por contestada la demanda por parte de Dugotex S.A. con auto del 26 de septiembre de 2018 (pdf 7); luego, el 05 de diciembre de 2019, aceptó el desistimiento de la demanda respecto de la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR (pdf 12); ,más adelante, mediante providencia del 07 de marzo de 2022 (pdf 40), en audiencia del artículo 77, el juzgador de instancia, de oficio, ordenó realizar dictamen de la demandante, por parte de la Junta Regional, asimismo, incorporó las documentales allegadas en la contestación de Porvenir S.A.

Luego, el *A Quo,* mediante auto del 24 de julio de 2023 (pdf 48) puso en conocimiento de las partes, el dictamen proferido por la JRC de Bogotá y Cundinamarca del 10 de febrero de 2023. Por lo cual, la demandada Porvenir S.A., solicitó la contradicción del dictamen (pdf 49); y, en la audiencia que trata el artículo 80 del CPT y SS, el Juzgador expuso que el dictamen presentado en contradicción iba a ser valorado como simples observaciones, ello teniendo en cuenta que no se citó a la demandante para ser valorada.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

DUGOTEX S.A.

En la contestación presentada por Dugotex S.A., la empresa se opuso a las pretensiones de la demanda, proponiendo varias excepciones que denominó como "Falta de causa para pedir por inexistencia de la obligación", "Prescripción", "Mala fe por parte de la actora", "buena fe de la demandada", "Pago", y "No causación del derecho a la pensión de invalidez"

Respecto a los hechos, Dugotex argumentó que las incapacidades médicas siempre fueron pagadas mientras estuvo obligada legalmente, es decir, hasta que estas fueron asumidas por la EPS Compensar y posteriormente por la AFP Porvenir. Precisó que la última incapacidad presentada por la trabajadora data del 26 de marzo de 2015, y desde entonces no presentó más incapacidades, aunque permanecía vigente la relación laboral. Además, reiteró que no estaba obligada al pago de incapacidades que correspondieran legalmente a las entidades del Sistema General de Seguridad Social, siendo éstas las responsables directas.

Finalmente, solicitó la absolución total frente a todas las pretensiones de la demanda.

PORVENIR S.A (pdf 14)

Se tuvo por no contestada la demanda, sin embargo; el *A Quo* incorporó como pruebas las documentales aportadas por esta entidad.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (Video 28)

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 18 de septiembre de 2023, decidió acceder parcialmente a las pretensiones formuladas en la demanda, condenando exclusivamente a la entidad Porvenir S.A. al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez a favor de la señora Ana Gricel Torres Roberto, a partir del 12 de diciembre de 2020, fecha en la que se estructuró su invalidez, en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente con mesada adicional y sus respectivos ajustes. Por su parte, absolvió totalmente a la empresa Dugotex S.A. de todas las pretensiones de la demanda, debido a que la demandante no cumplió con su carga probatoria respecto a las incapacidades reclamadas, al no haber aportado el reporte actualizado que el despacho le solicitó previamente en la audiencia del artículo 77, sin imponer costas procesales.

Para llegar a esta decisión, el Juez señaló que no hubo discusión respecto a la vinculación laboral de la señora Ana Gricel Torres Roberto con Dugotex S.A. en dos etapas, la primera desde el 16 de febrero de 2012 y la segunda a partir del 8 de enero de 2013. Indicó que existieron incapacidades médicas continuas desde el 7 de junio de 2013 hasta el 26 de marzo de 2015, y que se encontraba demostrado en el expediente que la empresa había cumplido con su obligación legal, realizando el pago oportuno de dichas incapacidades y efectuando puntualmente los aportes al sistema integral de seguridad social.

Sin embargo, la sentencia destacó que la demandante incurrió en incumplimiento de su carga probatoria al no haber aportado oportunamente al proceso el reporte actualizado de incapacidades, documento requerido desde hacía más de un año, generando una insuficiencia probatoria que impidió determinar con precisión qué incapacidades no habrían sido pagadas.

En relación con la pensión de invalidez solicitada por la actora, el *A Quo* enfatizó que inicialmente los dictámenes allegados por la demandante mostraban una pérdida de capacidad laboral inferior al requisito legal del 50% exigido por la Ley 100 de 1993, siendo estos del 19.8% y posteriormente del 29.6%. Por esta razón, y pese a que la demandante no solicitó inicialmente un dictamen adicional, el despacho decretó oficiosamente una nueva valoración, obteniendo finalmente un dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que estableció una pérdida de capacidad laboral definitiva del 52.62%, con fecha de estructuración del 12 de diciembre de 2020.

El Juzgador señaló que el documento aportado por Porvenir no constituía realmente un dictamen pericial válido, sino un escrito en formato de dictamen, que contenía observaciones frente a la calificación realizada por la Junta Regional. Precisó que dicho documento intentó introducir, indebidamente, una nueva valoración médica

asignando un porcentaje de pérdida de capacidad laboral a la demandante sin haberla examinado directamente, lo cual podría constituir un fraude procesal.

El juez destacó enfáticamente que, aunque la entidad Porvenir tenía derecho a presentar objeciones o reparos frente al dictamen oficial, era completamente improcedente que intentara efectuar una nueva calificación sin haber realizado directamente la valoración médica correspondiente.

Expresó que, aun cuando Porvenir S.A. presentó observaciones al dictamen, planteando reparos técnicos especialmente sobre la valoración del trastorno somatomorfo, fibromialgia y otras patologías relacionadas, así como respecto de la afección renal, estas objeciones fueron aclaradas y desestimadas por la perito médica, explicando suficientemente que el diagnóstico y porcentaje asignado se ajustaban adecuadamente a los parámetros establecidos por el Manual Único para la Calificación de la Invalidez.

Finalmente, y teniendo en cuenta la valoración integral realizada, el juez concluyó que estaba acreditado plenamente que la demandante cumplía los requisitos exigidos en la Ley 100 de 1993, específicamente haber perdido más del 50% de su capacidad laboral y tener 50 semanas cotizadas dentro de los últimos tres años anteriores a la estructuración de su invalidez.

1.5. RECURSO DE APELACIÓN PORVENIR S.A.

Porvenir S.A., fundamentó su recurso en que desde un inicio se había acreditado, a través del dictamen emitido por Seguros de Vida Alfa el 29 de noviembre de 2014, que la demandante tenía un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 19.8%, con fecha de estructuración del 29 de agosto de 2014, y que, por lo tanto, no cumplía con el requisito mínimo del 50% exigido por la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de invalidez.

Porvenir reiteró que, conforme a la normatividad vigente, la calificación de invalidez debía realizarse en primera instancia por las aseguradoras o EPS con las cuales la persona se encontrara afiliada, y que, en caso de inconformidad, la decisión podía ser revisada por las Juntas Regionales y posteriormente por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Insistió en que la parte demandante fue quien, al momento de contestar la demanda, aportó el dictamen de la aseguradora en el cual se reflejaba que no cumplía con el porcentaje mínimo requerido. En este sentido, señaló que la valoración inicial debía tenerse en cuenta como elemento probatorio fundamental.

La apelante también argumentó que, si bien en el proceso se decretó de oficio un nuevo dictamen por parte de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, dicho documento contenía elementos que fueron oportunamente controvertidos por su representada a través de las observaciones emitidas por Seguros de Vida Alfa, en ejercicio del derecho de contradicción. Precisó que, aunque el juez de primera instancia desestimó el documento presentado por Porvenir por considerar que se trataba de un nuevo dictamen sin que la demandante hubiese sido valorada directamente, este contenía observaciones técnicas y científicas relevantes que

merecían ser valoradas probatoriamente con el mismo rigor que la calificación de la Junta Regional.

En consecuencia, solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Laboral, que revisara detalladamente los aspectos en los que la aseguradora había manifestado su desacuerdo con la calificación de la Junta Regional, comparando las observaciones expuestas en el documento allegado por Porvenir con los fundamentos de la perita que emitió el dictamen oficial. Asimismo, destacó que las aseguradoras, como parte del sistema de seguridad social, tenían la obligación legal de atenerse a criterios técnicos y científicos para la calificación de la invalidez, por lo que su participación en la contradicción de dictámenes debía ser considerada con la misma validez que la pericia ordenada de oficio por el juez de primera instancia.

Reiteró que el documento presentado por la aseguradora contenía argumentos técnicos suficientes para ser tenidos en cuenta en la decisión, lo que justificaba la revisión del fallo por parte del Tribunal.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada.

Por tanto, se dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, con auto de 29 de mayo de 2024 (pdf 03 Segunda Instancia)

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022, la parte demandada Porvenir S.A., alegó en los siguientes términos.

PORVENIR S.A. (pdf 04)

La entidad recurrente insistió en la revocatoria de la condena impuesta en su contra, argumentando que la demandante no cumplía con los requisitos legales para acceder a la pensión de invalidez. La apoderada reiteró que el dictamen inicial de Seguros de Vida Alfa determinó una pérdida de capacidad laboral del 19.8%, lo que evidenciaba que la demandante no alcanzaba el 50% exigido por la Ley 100 de 1993.

Además, sostuvo que el dictamen de la Junta Regional, ordenado de oficio en primera instancia, no tuvo en cuenta las observaciones técnicas y científicas presentadas por la aseguradora, las cuales debían ser valoradas con el mismo peso probatorio. Criticó que el juez de primera instancia desestimara el documento aportado por Porvenir, señalando que, aunque no era un dictamen pericial, contenía precisiones relevantes que justificaban su consideración en el proceso.

Finalmente, Porvenir solicitó al Tribunal analizar detalladamente las diferencias entre el dictamen de la Junta Regional y las observaciones de la aseguradora, con el fin de determinar si la demandante realmente cumplía los requisitos para acceder a la pensión. Con base en ello, pidió la revocatoria del fallo y la absolución total de su representada.

III. CONSIDERACIONES

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la accionada le corresponde a esta Sala de Decisión desatar los siguientes problemas jurídicos: i) ¿Las objeciones realizadas por la parte demandada al dictamen decretado de oficio y realizada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez tienen el alcance necesario para desestimarlo?, en caso de que la respuesta al anterior interrogante sea negativo establecer si ii) ¿la demandante cumple con los requisitos exigidos para obtener su pensión de invalidez?.

3.2. SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

HECHOS NO DISCUTIDOS

Dentro del plenario se encuentran acreditados y no son objeto de discusión los siguientes hechos:

(i) Que la demandante, estuvo vinculada laboralmente con Dugotex S.A. bajo contratos a término fijo inferior a un año desde el 16 de febrero de 2012 y posteriormente desde el 08 de enero de 2013 (fol. 23 pdf 01).

(ii) Que la aseguradora Seguros de Vida Alfa S.A. emitió un dictamen el 10 de febrero de 2015 en el cual estableció que la demandante tenía un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 19.8% con origen común y fecha de estructuración del 29 de agosto de 2014 (fols. 50-52 pdf 01).

(iii) Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca emitió un dictamen el 16 de junio de 2015, en el cual determinó que la demandante presentaba una pérdida de capacidad laboral del 29.60%, también con origen común (fols. 32-38 pdf 01).

(iv) Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez emitió un nuevo dictamen el 10 de febrero de 2023, en el cual estableció que la demandante presentaba una pérdida de capacidad laboral del 52.62%, con fecha de estructuración del 12 de diciembre de 2020 (pdf 46).

Requisitos para obtener la pensión de invalidez

Teniendo en cuenta que, no se encuentra en discusión el origen de las patologías de la demandante, sino el porcentaje de PCL de la misma, es pertinente memorar, que

tal como lo expone el artículo 38 de la ley 100 de 1993, se considera inválida a la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral, por su parte el articulo 39 *ibídem,* expone que, para obtener la pensión de invalidez, la persona que sea declarada como inválida, debe acreditar las siguientes condiciones:

> *"1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.*
> *2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma."*

En ese sentido, la Sala analizará, inicialmente, si se logró acreditar que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la demandante es igual o superior al 50%, ello teniendo en cuenta que el tema crucial y de debate, según la apelación formulada por la parte actora, es este aspecto, pues nada se reprochó respecto a las 50 semanas de cotización, ello porque de la relación histórica de movimientos de la demandante, aportada por Porvenir S.A., se extrae ello como superado.

PORCENTAJE DE PCL Y REVISIÓN DEL DICTAMEN

Resulta menester recordar que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, junto con sus modificaciones, establece el procedimiento para calificar el origen y la condición de invalidez en el sistema de seguridad social, siguiendo el Manual Único de Calificación de Invalidez (MUCI). Este proceso tiene dos etapas que se han categorizado por la Corte Suprema de Justicia, en varios pronunciamientos, como calificación en primera oportunidad y las calificaciones de instancia[1].

La primera calificación es realizada por aseguradoras y administradoras de los subsistemas de Seguridad Social como COLPENSIONES, EPS, y ARL, que evalúan la pérdida de capacidad laboral y revisan el porcentaje de las secuelas y las calificaciones de instancia, a cargo de las Juntas Regionales y Nacionales, abordan las inconformidades con la calificación inicial y determinan la invalidez y su origen, según el mencionado artículo.

A su vez, el Decreto 2463 de 2001, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, regula los requisitos y la organización de las juntas de calificación, y por su parte el artículo 44 del Decreto 1352 de 2013, establece que las controversias que se susciten sobre los dictámenes emitidos por las Juntas de Calificación de Invalidez, serán dirimidas por la Justicia Ordinaria.

Con lo anterior, es acertado afirmar que tales dictámenes no tienen vocación de cosa juzgada, y en ese sentido, aun cuando exista firmeza de tal experticia, el mismo puede

---

[1] Sentencias CSJ SL1958-2021, CSJ SL1063-2022, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, República de Colombia.

ser revisado, al encontrar otros medios de prueba, ante el juez laboral, tal como lo refirió la Sala de Casación Laboral de la Alta Corporación, en sentencia SL 4571-2019:

> *"(…) Al respecto, vale destacar que en numerosas oportunidades la Corte ha precisado que la existencia de una experticia emitida por alguna de las entidades competentes en el procedimiento de determinación de invalidez en el sistema de seguridad social no es vinculante ni ata al juez al momento de resolver en sede jurisdiccional las controversias que se susciten respecto al mismo (…).*

En síntesis, aunque los dictámenes de las Juntas de Calificación resulten ser importantes, técnicos y científicos, los jueces laborales pueden revisar y cuestionar sus conclusiones al analizar las circunstancias reales que dieron origen a la incapacidad, y así encontrar, atreves de medios distintos, ya sea el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y/o su origen.

Por su parte, también ha fijado la Corte, que los funcionarios judiciales en el marco de la libertad probatoria gozan de plena competencia y aptitud para examinar los hechos demostrados en el proceso y establecer a través de medios técnicos y científicos el verdadero grado de invalidez de una persona y el origen de sus patologías.

Asimismo, recuerda esta Corporación que las calificaciones que realicen las entidades encargadas de ejercer este tipo de funciones, deberán hacerlo de manera integral, tal como lo regula el Decreto 1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en su artículo 2.2.5.1.50, así:

> *"Las solicitudes que lleguen a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y la Nacional por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales o las Administradoras de Fondos de Pensiones, las Entidades Promotoras de Salud o las compañías de seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, las Administradoras del Sistema General de Pensiones, deben contener la calificación integral para la invalidez de conformidad la Sentencia C-425 de 2005 de la honorable Corte Constitucional y su precedente jurisprudencial, esto mismo aplicará para el correspondiente dictamen por parte de las Juntas de Calificación de Invalidez Regional o Nacional."*

Ahora bien, en pronunciamientos recientes, nuestro Órgano de Cierre jurisdiccional, indicó que, teniendo en cuenta que la invalidez es un estado susceptible de progresividad o regresividad, es posible que se genere evolución de las patologías posteriores a los dictámenes que se encuentren en firme, y por ello, estos pueden ser susceptibles de revisión, tal como lo estipuló en Sentencia SL 3131 de 2023, M.P. Dra. Clara Inés López Dávila, así:

> *"Asimismo, más recientemente la Sala subrayó que la invalidez constituye un estado susceptible de progresividad o regresividad y, en tal medida, pueden existir solicitudes del mismo procedimiento en diversos momentos o etapas, conforme la evolución de las patologías o la* ***aparición de nuevos diagnósticos del mismo o diferente origen****, de forma tal que incluso pueden revisarse dictámenes que se encuentran en firme con el objetivo de realizar una calificación integral y, en consecuencia, precisar*

rigurosamente la situación material de invalidez del interesado." (negrita y subraya por fuera)

Con todo lo anterior, y adentrándonos al caso concreto, se tiene que la demandante, fue calificada por la aseguradora Seguros de Vida Alfa S.A., mediante dictamen del 10 de febrero de 2015, donde determinó que presentaba un 19.8% de pérdida de capacidad laboral con origen común y fecha de estructuración del 29 de agosto de 2014. Posteriormente, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, en dictamen del 16 de junio de 2015, concluyó que la demandante tenía una pérdida de capacidad laboral del 29.60%, también con origen común.

Finalmente, con dictamen No. 0 23315554 – 1151 del 10 de febrero de 2023, ordenado por el *A Quo,* la Junta Regional de Calificación de Invalidez estableció que la demandante presentaba una pérdida de capacidad laboral del 52.62%, con fecha de estructuración del 12 de diciembre de 2020 (pdf 50), mismo que fue puesto en conocimiento de las partes por el termino de 3 días, mediante publicado el 25 de julio de 2023 (pdf 48).

Al respecto, la parte demandada, Porvenir S.A., solicitó contradicción del mentado dictamen, con fundamento en el artículo 228[2] del Código General del Proceso, mismo que, se extrae, fue presentado dentro de la oportunidad procesal pertinente, toda vez que su oposición se realizó el 28 de julio de 2023 (pdf 49), solicitud en la que aportó el dictamen No. 3913591 del 28 de julio de 2023, y solicitó la comparecencia del médico ponente del dictamen, la doctora ANA LUCÍA LÓPEZ VILLEGAS.

En ese sentido, corresponde a esta Sala, efectuar un análisis integral entre los dictámenes oficiales emitidos por la Junta Regional de Calificación de Invalidez (2015 y 2023), y las observaciones presentadas por Seguros Alfa, como se realiza a continuación (observación del 25/03/2025).

En primer lugar, se analizó el dictamen inicial emitido por la Junta Regional en junio de 2015, donde se estableció una pérdida de capacidad laboral del 29.60% con fecha de estructuración del 6 de junio de 2014. En dicho dictamen se tuvieron en cuenta patologías como síndrome doloroso lumbar con hernia discal L3-L4, neuropatía del nervio peronero izquierdo diagnosticada el 17 de julio de 2013, fibromialgia leve con una asignación del 10%, lesiones en muñeca izquierda identificadas mediante artroresonancia el 4 de marzo de 2014 y ectasia renal sin porcentaje significativo. En consecuencia, para esa época, la señora Ana Grisel Torres Roberto no alcanzaba el mínimo legal exigido del 50% para obtener la invalidez.

Posteriormente, mediante un nuevo dictamen decretado de oficio por el juez de primera instancia y expedido por la misma Junta Regional en febrero de 2023, se

[2] ARTÍCULO 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor (…)

determinó una pérdida de capacidad laboral del 52.62%, con fecha de estructuración el 12 de diciembre de 2020. Este dictamen valoró patologías agravadas y adicionales como fibromialgia severa clasificada como trastorno somatomorfo clase II, asignándole un 40% debido a su evolución superior a cinco años y su considerable impacto funcional, hernias discales cervicales y lumbares severas, síndrome del manguito rotador derecho con gran afectación de la movilidad, fascitis plantar bilateral con espolón calcáneo, ectasia renal con hidronefrosis acompañada de disfunción vesical residual luego de cirugía, esófago de Barrett (5%), ruptura del ligamento en rodilla izquierda y diversas condiciones previas agravadas como discopatía lumbar con hernia discal diagnosticada en 2013, neuropatía del nervio peronero izquierdo y ectasia pielica diagnosticada desde octubre de 2009.

Frente a este segundo dictamen, Porvenir S.A. presentó objeción argumentando que debía prevalecer la valoración anterior realizada por Seguros Alfa en 2014 que indicaba solo un 19.8% de pérdida de capacidad laboral. También cuestionó específicamente la aplicación de la Tabla 5.2 del Manual de Calificación, señalando que se omitieron pruebas específicas como la depuración de creatinina y valoración nefrológica para la ectasia renal, así como la aplicación de la Tabla 13.3 referente a la fibromialgia, dado que no existía valoración psiquiátrica específica en la historia clínica, agregando además que no había fundamento para la calificación de insuficiencia venosa crónica por ausencia de estudios vasculares específicos. Consideró además que las áreas ocupacionales resultaron sobrevaloradas debido a estos supuestos errores.

Es así, que en audiencia se contó con el testimonio esclarecedor de la Dra. Ana Lucía López Villegas, perita ponente del dictamen de la Junta Regional, quien afirmó que, aunque lo ideal para la fibromialgia hubiera sido contar con valoración psiquiátrica, la Junta tuvo en consideración el diagnóstico mediante múltiples evaluaciones previas realizadas desde 2013 por especialistas en neurocirugía, ortopedia, clínica del dolor y fisiatría, aclarando que la Tabla 13.3 permite una calificación independiente cuando la evolución supera los cinco años y cuando se descartan causas estructurales, condiciones ambas cumplidas en este caso. Respecto a la ectasia renal, sostuvo que la deficiencia del 8.80% asignada consideró claramente la documentación clínica existente sobre la dilatación renal, hidronefrosis y secuelas vesicales postquirúrgicas acreditadas por urología, resultando técnicamente apropiada, pese a la ausencia formal del examen de depuración de creatinina. Sobre la insuficiencia venosa crónica, la perita precisó que no se asignó calificación alguna, precisamente por ausencia de los estudios especializados requeridos, como el eco Doppler y valoración por cirugía vascular, aclarando con ello la objeción planteada. Igualmente confirmó la asignación de un 5% por esófago de Barrett.

Ahora bien, la Sala realizará una comparación y análisis del dictamen ordenado por el *A Quo* junto con las observaciones esbozadas en la contradicción del mismo, teniendo en cuenta el Manual Único de Calificación de Invalidez, con el fin de establecer si tales objeciones resultan acertadas, en contraste con lo dicho por la perita en cada aspecto.

Respecto a la Deficiencia por trastornos del Tracto Urinario Superior la JRC de Bogotá y Cundinamarca la Asignó clase 1 con deficiencia del 4%, lo que indica síntomas leves u ocasionales, sin compromiso renal grave o sostenido.

Por otro lado, el Manual exige, frente a lo anterior, síntomas ocasionales sin necesidad de tratamiento continuo, así como también prueba de función renal *depuración de creatinina* entre 75 a 90 L/24h (52 a 62,5 ml/min), de igual manera requiere historia clínica con antecedentes del trastorno, con recuperación completa o funcionamiento normal.

Por su parte, en la observación realizada por la parte contradictora, refirió que hubo ausencia de medición de depuración de creatinina, ni valoración por nefrología.

Ahora, al respecto, la perita en audiencia señaló que se identificó claramente una dilatación en la *pielocalicial* (*ectasia renal*), evidenciándose también hidronefrosis, indicando que se tuvo en cuenta una cirugía previa de vejiga con secuelas de motilidad, documentadas por urología, sin embargo; no mencionó si contaba o no con medición de la depuración de creatinina o valoración nefrológica específica requerida por el manual.

De lo anterior, para la Sala, aunque se omitió el requisito formal estricto, examen de depuración de creatinina, la explicación de la perita sustentó convincentemente que a tal resultado se llegó luego de estudiar hallazgos clínicos sólidos, lo que permite concluir que, en términos prácticos y clínicos, la calificación del 4% resulta técnicamente sustentada y proporcional. Por ende, para esta Corporación se desvirtúa satisfactoriamente la observación en este punto.

Continuando con este análisis, la JRC, calificó la fibromialgia separadamente en clase II con un 40%, destacando síntomas sostenidos por más de 5 años, claramente alterantes de la actividad habitual.

Lo que establece el Manual, en este punto, para determinar la deficiencia en Clase II, se debe cumplir con un cuadro clínico de evolución mayor de 5 años, presencia actual de síntomas y signos que afectan la actividad habitual de forma considerable,

En consecuencia, la observación realizada por la demandada, expuso que no existe valoración psiquiátrica, requisito que, según esta, es necesario para considerar fibromialgia primaria, sosteniendo que al existir patologías concomitantes, la fibromialgia no debería calificarse separadamente, ello teniendo en cuenta que la Directriz Nacional 001 de 2018, precisa que debe calificarse como trastorno primario sólo cuando se descarten causas orgánicas, por tanto, debió tenerse tal valoración psiquiátrica.

Aquí, la deponente experta, admitió que una valoración psiquiátrica sería lo ideal, pero sostuvo que la Junta sí podía asignar el 40% porque la historia clínica estaba muy bien documentada por especialidades como neurocirugía, ortopedia, clínica del dolor y fisiatría, aclarando que la fibromialgia está documentada desde hace más de 10 años, cumpliendo con el requisito temporal (más de 5 años) para asignar clase II según

la Tabla 13.3, y que la fibromialgia se calificó separadamente debido a que presentaba compromiso muscular generalizado (*puntos gatillo positivos en toda la musculatura),* adicional al compromiso articular.

Al respecto, este colegiado, acoge plenamente la aclaración clínica entregada por la perita, especialmente porque se valoró la robusta documentación clínica integral y el carácter presencial del examen médico realizado a la actora. Por lo tanto, aunque no se contó formalmente con valoración psiquiátrica expresa, que además no se encuentra como fundamento obligatorio dentro del Manual, se considera plenamente fundamentada y proporcional la calificación realizada por la Junta Regional, desvirtuándose la observación del contradictorio.

Finalmente, respecto a la observación que realizó la convocada, frente a la deficiencia por Insuficiencia venosa crónica (Diagnóstico I872), la Sala se percata que dicha patología no fue calificada, precisamente, como lo expresó la experta, por ausencia de requisitos técnicos específicos.

Con todo lo anterior, y tras un detenido análisis integral del material probatorio aportado, considerando el dictamen aportado por la JRC de Bogotá y Cundinamarca, y el testimonio aclaratorio de la perita en audiencia, además de que tal dictamen se realizó con una valoración clínica presencial realizada a la paciente el 11 de noviembre de 2022, la Sala concluye que las objeciones formuladas por la parte demandada carecen de fundamento suficiente. De esta manera, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que establece que el juez no está sujeto a tarifa legal de pruebas y es libre de formar su convencimiento, estima este Tribunal que resultó más convincente, sólido y técnicamente sustentado el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación en febrero de 2023, mismo que estableció una pérdida de capacidad laboral del 52.62%, con fecha de estructuración del 12 de diciembre de 2020, aceptando sus explicaciones técnicas y médicas como suficientes, claras y acordes con la realidad médica integralmente acreditada.

Por lo que, como se explicó inicialmente, cumplido el requisito de haber superado el 50% exigido para ser catalogada como una persona en estado de invalidez, la actora es beneficiaria de la pensión de invalidez, que pretendió con su demanda.

En razón a lo anterior, la Sala estima prudente y jurídicamente pertinente reconocer en favor de la señora Ana Grisel Torres Roberto la pensión de invalidez declarada por el juzgado de primera instancia, de forma retroactiva desde el pago de la última incapacidad reconocida a la actora, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en Sentencia SL5170-2021, rad. 88003, en la que la sostuvo:

> *"Así, en la incapacidad temporal el subsidio se paga a partir de la aparición del hecho causante, que lo es la enfermedad o lesión que le impide desempeñar la labor por un tiempo determinado, hasta que otro hecho causante introduce una nueva situación protegida en lugar de la anterior, como cuando se declara que las lesiones se convierten en definitivas, de tal manera que los efectos económicos de*

la pensión de invalidez, en los supuestos en los que su declaratoria esté precedida de una incapacidad temporal, se producen a partir de la extinción de la última incapacidad y, sino lo está, se producen a partir de la fecha de estructuración del estado de invalidez. (…) el eje central de delimitación está en el momento en que se califica el estado de invalidez, quedando a partir de allí extinguida la incapacidad temporal, pero limitándose la retroactividad de la nueva prestación al momento en que se efectuó el último pago de la prestación que la antecede, dado el carácter secuencial de la acción protectora de la seguridad social, donde los efectos económicos de las prestaciones no siempre coinciden con el hecho causante en sentido material, pues la previsión legal es muy clara en relacionar la fecha inicial de la prestación por invalidez con la fecha de finalización formal de la incapacidad temporal. (…) Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar su doctrina, en el sentido de señalar que ***cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad, postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios*** (SL1562-2019)." (Negrita y subraya por fuera)

Para la Sala, resulta relevante indicar que los parámetros para determinar la fecha de reconocimiento de la pensión de invalidez, fueron asentados por nuestro máximo órgano de cierre en sentencia SL 1562 de 2019, pero que fueron rectificados en sentencia SL 5170 de 2021, reiterados en sentencia SL 4299 de 2022 y más recientemente en proveído SL 2223 de 2023, en el sentido de reconocer la prestación a partir del día en que se estructuró la invalidez, salvo los casos en que posteriormente a dicha data se hayan pagado incapacidades médicas:

"… Memora la Corte con precisión, lo anterior, para acentuar que el entendimiento correcto de los artículos 40 de la Ley 100 de 1993 y 3° del Decreto 917 de 1999, genera una regla general según la cual, la pensión de invalidez se reconoce a partir de la fecha de estructuración de la invalidez y, dos excepciones, aplicables a aquellos casos en los cuales, el afiliado ha disfrutado de incapacidades médicas continuas o discontinuas con posterioridad a esa data, a saber:

1) el pago de la prestación se realizará a partir de la última de las incapacidades, en el caso en que el reclamante, entre la fecha de estructuración de la invalidez y de la última incapacidad, se encuentre aportando tanto al subsistema pensional como al de salud.

2) el pago de la prestación se realizará a partir de la fecha de estructuración de la invalidez descontando las incapacidades que se hubieren presentado entre esa fecha y la última de las licencias concedidas, sí y solo sí en ese interregno el afiliado no aportó al subsistema pensional…"

En ese sentido, luego de realizar una revisión en el plenario, se desprende que la actora se encontraba cotizando al sistema pensional según consta en la relación Histórica de Movimientos, aportada por Porvenir (fols 22-25 pdf 14), y siendo que no se encuentra prueba alguna que acredite que la actora se encontraba aportando al subsistema de Salud, ni que se hayan realizado pagos por concepto de incapacidades, la Sala no podría dar aplicación directa a las hipótesis reseñadas previamente, por tanto será la entidad demandada y encargada de efectuar el reconocimiento y pago de la prestación pensional, quien deberá aplicarlo.

Por tanto, la Sala adicionará la decisión de instancia, para que la parte demandada, pague el retroactivo pensional a partir de la fecha de la ultima incapacidad de la accionante, en el caso en que esta haya aportado a pensión y a salud, o, en caso de no haberse realizado aportes al sistema pensional, se realizará desde la fecha de estructuración, esto es el 12 de diciembre de 2012.

4. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dadas las resultas del proceso, y que la alzada no prosperó, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada PORVENIR S.A. en favor la demandante.

5. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. ADICIONAR el numeral PRIMERO de la Sentencia la sentencia proferida el día 18 de septiembre de 2023 en el proceso de la referencia, por el JUZGADO QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, por las razones vertidas en el presente proveído. Mismo que quedará así:

> ***"PRIMERO: CONDENAR** a la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. a reconocer a la señora ANA GRISEL TORRES ROBERTO, una pensión de invalidez a partir de la fecha de la última incapacidad de la accionante, en el caso en que esta haya aportado al sistema de pensión y a salud, o, en caso de no haberse realizado aportes al sistema pensional, el pagó se realizará desde la fecha de estructuración, esto es el 12 de diciembre de 2012. en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente al momento de su causación, esto es de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS ($877.803), junto con los reajustes legales y mesada 13 adicional, mesadas que deben ser indexadas teniendo en cuenta como IPC inicial el del mes que se cause cada mesada y como IPC final el del mes en que se efectúe el pago, se aclara que el reconocimiento y pago del retroactivo pensional se hará desde el pago de la última incapacidad reconocida a la actora.*

Del valor del retroactivo se autoriza a la entidad a descontar lo correspondiente al sistema general en salud."

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la parte demandada, en favor de la parte demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 042.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada Ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	ALICIA ISABEL GUZMAN GONZALEZ
Parte demandada	COLPENSIONES – PORVENIR
Radicación	11001310500520200028502
Fecha de la decisión	09 de octubre de 2023
Motivo	Recurso de apelación y Consulta
Tema	PENSIÓN DE VEJEZ – REGIMEN DE TRANSICIÓN-INEFICACIA TRASLADO
Acta de Discusión	065
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310500520200028502

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el día 09 de octubre de 2023 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en el proceso de la referencia, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La señora ALICIA ISABEL GUZMAN GONZALEZ, quien actúa como demandante en el presente asunto, mediante apoderada judicial, pretende por esta vía ordinaria laboral, se declare la nulidad absoluta del traslado que realizó en el año 2001, cuando se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado en su momento por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por la AFP Porvenir S.A.

Que, como consecuencia de la deprecada nulidad, pidió que se reconociera que siempre estuvo válidamente afiliada al RPM y, por tanto, se le aplicaran las disposiciones del régimen de transición contempladas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que implicaría el reconocimiento de su pensión de vejez bajo las normas del RPM, desconociendo los efectos legales del traslado al RAIS. Además, demandó la reliquidación de su pensión conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el

artículo 20 del Decreto 758 de 1990, que establecen las condiciones más favorables para los beneficiarios del régimen de transición.

Afirmó que dicho traslado se hizo sin contar con la información adecuada sobre las implicaciones del cambio de régimen, lo que vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, debido proceso y a la libertad de escoger su régimen pensional con pleno conocimiento.

Argumentó que inició sus cotizaciones al ISS en febrero de 1975 y que estas continuaron de manera ininterrumpida hasta noviembre de 2001 (fols. 48-54), momento en que fue trasladada al RAIS (fol. 32). Posteriormente, en febrero de 2004, retornó al RPM, donde continuó cotizando hasta la fecha de presentación la demanda como se puede percibir en la historia laboral.

Adujo que, en octubre de 2009, el ISS le reconoció una pensión de vejez por hijo en estado de invalidez, bajo las reglas del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, lo cual desconoció el régimen de transición al que tenía derecho.

Expuso que, en octubre de 2017, solicitó a Porvenir S.A. toda la documentación relativa al traslado de régimen (fols. 25-26), incluyendo las proyecciones y explicaciones brindadas en el momento del cambio, pero la respuesta obtenida en noviembre de 2017 fue insatisfactoria, ya que la AFP indicó que la asesoría se había dado verbalmente y que no contaban con soporte documental (fols. 17-29). Posteriormente, en noviembre de 2017, la demandante radicó una solicitud en Colpensiones para que se declarara la nulidad del traslado al RAIS y se reconociera su pensión conforme a las condiciones del RPM (fols. 33-34), lo cual fue rechazado por Colpensiones en diciembre de 2017 con SUB294199 del 21 de diciembre de 2017 (fols. 35-41).

Como fundamentos de sus peticiones, se apoyó en el artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo No. 01 de 2005. También se basó en varias disposiciones de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797 de 2003, así como en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha reiterado la responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones de brindar información clara, completa y veraz a los afiliados, a fin de garantizar una elección informada del régimen pensional.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, admitió y ordenó correr traslado de la demanda mediante Auto de 15 de septiembre de 2020 (pdf 03), luego, admitió la contestación de la demanda presentada por PORVENIR S.A. y tuvo por no contestada la demanda por parte de COLPENSIONES (pdf 11), por lo que dicha entidad presentó recurso de apelación respecto a dicha decisión, misma que fue confirmada en segunda instancia.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. CONTESTACIÓN PORVENIR S.A. (PDF 07)

Esta entidad, contestó la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones formuladas por la demandante. En su defensa presentó las excepciones de *prescripción*, argumentando que, aún cuando la Corte Suprema de Justicia ha sostenido la imprescriptibilidad de la acción de ineficacia, la entidad considera que dicha acción debería estar sujeta a prescripción, como lo está cualquier acto jurídico.

También planteó la excepción de *buena fe*, defendiendo que en todo momento actuó conforme a la ley y en cumplimiento de su deber de información. Además, argumentó *la inexistencia de la obligación de invalidar la afiliación*, sosteniendo que la decisión de la demandante fue tomada de manera libre e informada, y que no existe fundamento jurídico para acceder a las pretensiones de la demandante.

Explicó que la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en el año 2001 fue producto de una decisión libre, voluntaria e informada, después de haber recibido una asesoría adecuada sobre las implicaciones de su decisión y el funcionamiento del régimen, decisión que plasmó en el formulario de vinculación en el que declaró haber sido asesorada y consciente de las implicaciones de su traslado de régimen, lo cual, según la entidad, cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 100 de 1993.

En cuanto a los hechos, negó la veracidad de algunos, como la falta de asesoría adecuada, argumentando que la demandante fue plenamente informada en su momento. Además, sostuvo que desde el año 2004, la demandante ya no estaba afiliada a Porvenir, dado que su afiliación fue asumida por Colpensiones, lo que, según la entidad, invalidaría las pretensiones de la demandante en cuanto a la nulidad de la afiliación.

Finalmente, estableció la presunción de autenticidad de los documentos firmados por la demandante, como el formulario de vinculación, y en la presunción de buena fe en la actuación de la entidad. También argumentó que la declaración de ineficacia solicitada por la demandante no procedía, pues, según Porvenir, no se presentaron actos dolosos que afectaran el derecho de afiliación de la demandante al sistema de seguridad social.

1.3.2. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 11)

Se tuvo por no contestada la demanda por parte de Colpensiones.

1.3.3. INTERVENCIÓN PROCURADURÍA

El Procurador 7 Judicial I para Asuntos del Trabajo, consideró que, en caso de prosperar las pretensiones de la demanda sobre la reliquidación de la pensión tras declarar la ineficacia del traslado, debe aplicarse la prescripción trienal según los artículos 151 del CPT y 488 del CST. Esto implicaría que las mesadas reliquidadas, no reclamadas oportunamente, estarían parcialmente prescritas, ya que la reclamación

administrativa finalizó en diciembre de 2017 y la demanda se presentó en septiembre de 2020, a pesar de que las pretensiones datan de 2007.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 15 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 07 de marzo de 2024, decidió condenar a Colpensiones a reconocer una pensión de vejez en favor de la demandante, conforme al régimen de transición establecido en a ley 100 de 1993, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, a partir del momento en que cumplió 55 años de edad, es decir, desde el año 2013, en la suma inicial de $728,669. Asimismo, declaró la incompatibilidad de esta pensión con la pensión especial por hijo inválido que la demandante ya estaba recibiendo, autorizando a Colpensiones a descontar lo pagado por esta última.

Además, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto a las mesadas anteriores al 3 de septiembre de 2017. Finalmente, declaró la ineficacia del traslado de la demandante al régimen de ahorro individual administrado por Porvenir, aunque sin consecuencias prácticas para esta entidad, dado que los fondos ya habían sido transferidos al Instituto de Seguros Sociales.

El fundamento de la decisión del Juez se basó en que la demandante cumplía con los requisitos para acceder al régimen de transición, ya que a 1° de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, lo que la hacía beneficiaria de dicho régimen. Sin embargo, al no haber completado 15 años de servicios, y tras haberse trasladado voluntariamente al régimen de ahorro individual, la demandante perdió inicialmente el régimen de transición. No obstante, el *A Quo* concluyó que dicho traslado fue ineficaz, dado que no se demostró que la demandante hubiese recibido una adecuada información sobre las consecuencias de su decisión, lo que vulneró su derecho a la seguridad social.

El Juzgador de instancia, se apoyó en la Ley 100 de 1993, particularmente en su artículo 36, así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, incluyendo la sentencia C-782 de 2002, que establece que quienes se trasladaron voluntariamente de un régimen a otro renunciaban al régimen de transición, excepto quienes ya contaban con 15 años de servicios a 1° de abril de 1994. Asimismo, mencionó la sentencia C-758 de 2014, que aclaró que la pensión especial por hijo inválido es aplicable tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual.

El fallador aplicó criterios como la protección de los derechos fundamentales de la demandante, el análisis de la suficiencia y veracidad de la información proporcionada por la administradora de fondos de pensiones al momento del traslado, y la importancia de asegurar que las decisiones respecto a la seguridad social sean plenamente informadas y voluntarias. Todo ello llevó al juez a considerar que el traslado al régimen de ahorro individual no cumplió con las garantías necesarias, por lo que debía declararse su ineficacia, garantizando así el acceso de la demandante a los beneficios del régimen de transición.

1.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE (min 01:37:00 video 35)

La apoderada de la parte demandante, interpuso recurso de apelación de manera parcial frente a la decisión tomada por el juzgador de instancia, solicitando que se revise el monto de la mesada pensional establecido en la decisión de primera instancia, pues considera que, según sus cálculos, el valor del IBL para el año 2013 debería ser $912.031 lo que arrojaría una mesada pensional de $766.106 y no la cantidad liquidada por el despacho, lo que genera una diferencia de $37,437, y por ello, la mesada para el año 2017 la mesada debería ser de $914,059 y no de $869,392, como lo estableció el despacho.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, así mismo como el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, sin limitaciones de ninguna naturaleza por así disponerlo el artículo 69 del C.P.L. y S.S., modificado por el art. 14 de la Ley 1149 de 2007.

Con auto de 01 de marzo de 2024 (pdf 04), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se refirieron al respecto así:

DEMANDANTE (pdf 05 segunda instancia)

En sus alegatos de conclusión, la parte demandante, por medio de su apoderado, argumentó que se logró demostrar con las pruebas aportadas y practicadas durante el proceso que la señora ALICIA ISABEL GUZMÁN GONZÁLEZ, tenía derecho al traslado de régimen pensional debido a que su consentimiento estuvo viciado por la falta de información adecuada proporcionada por los fondos de pensiones demandados. Sostuvo que las administradoras de fondos de pensiones tienen una responsabilidad profesional que incluye la obligación de proporcionar información clara, completa y oportuna a los afiliados, para garantizar que estos puedan tomar decisiones informadas sobre su régimen pensional.

Enfatizó que la falta de información o la entrega de información parcial por parte de las AFP constituye un vicio en el consentimiento, dado que el afiliado toma una decisión sin la asesoría suficiente y sin comprender completamente las consecuencias adversas de su elección, justificando su argumento en atención a la Sentencia SL-12136-2014 de la Corte Suprema de Justicia, que establece que no puede considerarse una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen la incidencia de su decisión sobre sus derechos prestacionales, y que la carga de la prueba recae en la administradora de fondos para demostrar que brindó una asesoría adecuada.

Finalmente, solicitó al Tribunal confirmar la sentencia de primera instancia, argumentando que la demandante estaba válidamente afiliada a Colpensiones debido a la ineficacia del traslado al fondo privado.

PORVENIR S.A. (PDF 06)

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., reiteró su oposición a las pretensiones de la demandante, en cuanto a la declaración de ineficacia del traslado del régimen pensional considerando que el traslado realizado en noviembre de 2001 fue plenamente válido y que la demandante tomó la decisión de manera libre e informada, habiendo recibido la asesoría adecuada por parte de la administradora de fondos de pensiones.

El apoderado sostuvo que no se evidenció ningún vicio en el consentimiento de la demandante al momento del traslado, y que la decisión de la primera instancia, que declaró la ineficacia del traslado y ordenó la reliquidación de la pensión, fue errada. Sin embargo, Porvenir no presentó recurso de apelación contra esta decisión, limitándose a señalar que la orden de reliquidar la pensión fue dirigida a Colpensiones, y no a Porvenir, por lo que la responsabilidad en el cumplimiento de dicha orden recae exclusivamente en Colpensiones.

Finalmente, Porvenir solicitó que se confirmara la decisión en cuanto a la orden de reliquidación dirigida a Colpensiones, aclarando que la entidad no tiene responsabilidad adicional en el proceso, y reiterando la validez del traslado de la demandante al régimen de ahorro individual.

COLPENSIONES (PDF 07)

En sus alegatos de conclusión, Colpensiones solicitó la revocatoria de la sentencia que declaró la ineficacia del traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual (RAIS) y la condenó a reconocer la pensión de vejez, puesto que la demandante, al momento de solicitar el retorno al Régimen de Prima Media (RPM) en noviembre de 2017, ya estaba legalmente impedida para hacerlo debido a que le faltaban menos de diez años para cumplir la edad de pensión, según la Ley 797 de 2003.

También sostuvo que no se probó la existencia de vicios en el consentimiento de la demandante al momento del traslado en 2001, y que, aun si hubieran existido, estos se habrían saneado con el tiempo. Además, cuestionó la interpretación realizada respecto a la carga de la prueba y el deber de información, argumentando que la normativa que establece claramente este deber solo surgió después de 2001.

Finalmente, Colpensiones expresó su preocupación por la posible descapitalización del sistema pensional en caso de que se confirme la ineficacia del traslado y solicitó, de manera subsidiaria, que, si se confirma la sentencia, se condicione su cumplimiento a la devolución de todos los aportes y rendimientos por parte de Porvenir, y que Colpensiones no sea condenada, ya que no fue parte del acto que se pretende invalidar.

III. CONSIDERACIONES

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, y el otorgamiento del grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada Colpensiones, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Es ineficaz el traslado de la demandante del RPM al RAIS? En caso afirmativo dilucidar si ¿la demandante es beneficiaria del régimen de transición de la ley 100 de 1993? Y en caso afirmativo resolver si ¿es procedente otorgar a la demandante una pensión de vejez en aplicación del acuerdo 049 de 1990, y en qué monto?

3.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Se encuentran acreditados dentro del proceso i) la fecha de nacimiento de la demandante, esto es el 22 de julio de 1958 (fol. 24 pdf 02 primera instancia), ii) que la demandante se trasladó al RAIS el 16 de noviembre de 2001 (fol. 32 pdf 02 primera instancia), asimismo no es objeto de discusión iii) que a la actora retornó al régimen público de pensiones en mayo de 2004 según se avizora en su historia laboral (fols. 132-140 pdf 10 primera instancia), tampoco es objeto de discusión el hecho de iv) que le fue reconocida una pensión de vejez por hijo en condición de invalidez el 21 de octubre de 2009 (fols. 42 – 45 pdf 02 primera instancia); (v) que la demandante requirió el reconocimiento de su pensión de vejez el 19 de junio de 2014 ante Colpensiones (fols 313-314 pdf 10) recibiendo respuesta negativa a su solicitud con resolución del 01 de diciembre de 2014 (fols 300-308 pdf 10); (vi) y que solicitó nuevamente su reconocimiento el 30 de noviembre de 2017 (fols. 315-316 pdf10) siendo resuelta de manera negativa con resolución del 21 de diciembre 2017 (fols. 326-322 pdf 10)

DE LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN

Sea lo primero señalar que, si bien la demandante efectuó su traslado del Régimen de Prima Media RPM al Régimen del Ahorro individual con solidaridad RAIS en el año 2001 y posteriormente a ello, en el año 2004 retornó a su régimen original (RPM), ese primer traslado, según la Resolución 48505 del 21 de octubre de 2009 que otorgó la pensión de vejez a la actora (fols. 42-45 pdf 2 primera instancia) y la contestación de demanda realizada por Colpensiones, se tuvo por no efectuado, teniendo en cuenta la decisión de un comité de múltiple vinculación que a través de ODA No. 07-8688 del 15 de agosto de 2007, que determinó que la administradora responsable de tramitar y decidir la prestación económica, era el Seguro Social, acta o documento que no se encuentra dentro del expediente, y que deja concluir que la mentada nulidad o inexistencia de la afiliación que según tal documento del mentado comité dedujo, se realizó con el fin de otorgar o no el derecho a la peticionaria para acceder a la pensión de vejez por hijo en condición de invalidez, pues para ese preciso instante, esta prestación solamente se otorgaba en el RPM, entonces al haber existido una afiliación al RAIS, no podría haberse entregado dicha prestación económica; sin embargo, no

podía tenerse, hasta ese momento, como un traslado nulo, porque la afiliada se encontraba dentro de los tiempos otorgados por la ley, para realizar dicho traslado, es así, que este despacho comparte la posición del Juez, de analizar en estrados la deprecada ineficacia y así dilucidar la aplicabilidad del régimen de transición a la actora.

SOBRE EL DEBER DE INFORMACIÓN AL SURTIRSE EL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL

Con lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021 y SL 509 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993:

> *"…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…"*

Ello, hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un paralelo entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en Sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

	Circular Externa n. 016 de 2016.	

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, donde puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas. Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.
(…)
También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.
También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

Conforme a las anteriores consideraciones, y en aplicación a nuestro caso concreto, la Sala advierte inicialmente que para la fecha en la que la accionante se trasladó al RAIS el 16 de noviembre de 2001 a través de porvenir S.A. (fol. 32 pdf 02 primera instancia), tal traslado se enmarcaba en el periodo antes referido, según el cual debía entregar información suficiente y transparente que le permitiera elegir *libre y voluntariamente* la opción que mejor se ajustara a sus intereses, lo cual implicaba la

ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales.

SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA – FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar que al demandante, al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de las AFP demandadas, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Sin embargo, dicha postura fue modulada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de*

traslados hechos del RPM al RAIS…"

En tal sentido, y al ponderarse los lineamientos trazados por la Corte Constitucional dentro del caso concreto, la Sala llega a la misma conclusión que el *A Quo* sostuvo en su fallo, ello teniendo en cuenta el caudal probatorio que fuese acreditado en juicio por todos los sujetos que integran el contradictorio, debidamente decretado, inclusive el interrogatorio de parte practicado a la aquí demandante señora ALICIA ISABEL GUZMAN GONZALEZ, pues no se aprecia algún medio de convicción suficiente que permita demostrar que la AFP PORVENIR, con la que la actora realizó el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en el año 2001 hubiese llevado a cabo una asesoría con los pormenores mínimos de información sobre el régimen privado, como tampoco las ventajas y desventajas que existían entre este y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

De otro lado, la actora no confesó que se le hubiese brindado una asesoría ajustada a derecho para la conformación del supuesto de que trata el artículo 191 del C.G.P., incluidas las implicaciones, ventajas y desventajas entre ambos regímenes pensionales, y otras situaciones de asesoría que entendiera de manera fehaciente la total información suministrada, sin advertirle características propias incluso del mismo Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tales como la cuenta de ahorro individual, aportes voluntarios, modalidades por vejez dentro del régimen privado, el derecho de retracto, etc.

De allí que se pueda colegir la notoria falta de información por parte de la AFP Porvenir, por cuanto no se obtuvo confesión alguna de la debida asesoría al tenor de los preceptos emanados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, carga probatoria que por demás guarda plena consonancia con lo dispuesto en el artículo 167 del C.G.P., 176 y 242 del C.G.P. según las reglas para el análisis probatorio expuestas por la Corte Constitucional. Pues la única confesión que se obtuvo por parte de la demandante, fue que suscribió el formulario de afiliación.

Por otro lado, tal como lo regulan ambas Cortes, no puede atenderse el formulario de afiliación de cambio de régimen pensional, para la demostración de una asesoría necesaria acerca de los pormenores que condujeran a que el potencial afiliado en su momento hubiese sido informado de aspectos mínimos que repercutirían la consecuencia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Aunado a lo antes expuesto, es preciso poner de presente que la tesis de que la afiliación de la demandante y su permanencia en el RAIS genera un acto de relacionamiento que implica su voluntad de permanecer en dicho régimen, resultan inadmisible ya que nuestro máximo órgano de cierre ha reiterado que los traslados horizontales o la permanencia en el mismo no convalidan el traslado inicial, como se estudió en sentencia SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, en la medida que el punto neurálgico a analizar en esta clase de procesos es si al momento del traslado del RPM al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión, mas no la permanencia del afiliado ni sus deberes como tal (SL1055-2022).

En síntesis, conforme el artículo 61 del C.P.T y de la S.S, que dispone que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que sirven de norte para acometer adecuadamente la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, a fin de llevar al juzgador la suficiente convicción para decidir con certeza sobre el objeto materia de litigio, colige la Sala que, la decisión de trasladarse de régimen pensional, la aquí demandante no la adoptó de manera informada, autónoma y consciente, habida cuenta que no se encuentra acreditado de manera alguna que los asesores que gestionaron la afiliación de régimen pensional RAIS, le explicara las implicaciones que le generaba el traslado solicitado y si dicho cambio le reportaba o no beneficio a sus intereses pensionales, los riesgos propios del RAIS, las posibilidades de efectuar cotizaciones adicionales, las consecuencias que tendría el no reunir el capital mínimo exigido para pensionarse por vejez, la garantía de la pensión mínima, la devolución de saldos, las modalidades pensionales que existen en el RAIS, entre otros aspectos básicos de funcionamiento del régimen.

Información esta que debió suministrarse al gestionar la afiliación del accionante y mutuo propio por la demandada, toda vez que la información técnica, clara y precisa que se le exige a tales entidades resulta necesaria e indispensable, como ya se dijo, para la toma de la decisión de afiliación inicial, pues con base en ella es que el posible afiliado realiza la escogencia del régimen pensional al cual desea pertenecer para que tal manifestación se torne en libre y voluntaria (CSJ SCL SL3179 de 2023).

Así las cosas, la Sala concluye que le asiste razón al fallador de instancia al declarar la ineficacia del traslado, dado que la demandada AFP Porvenir S.A., no probó el cumplimiento del deber de información en el momento del traslado de régimen de la promotora, por tanto, los traslados verticales realizados por la aquí demandante, sufren la misma consecuencia.

Finalmente, respecto al traslado de los recursos, esta Corporación se releva de hacer análisis, pues los mismos fueron restituidos a Colpensiones en su debida oportunidad.

DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN A LA DEMANDANTE

Así entonces pasa la Sala a revisar si la demandante tiene derecho al reconocimiento pensional deprecado y cuál es la normatividad que lo regula. En el plenario se acreditó que la actora nació el 22 de julio de 1958, por lo que al 1.º de abril de 1994 contaba con 35 años de edad, por lo que en principio resulta ser beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Establecido lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Acto Legislativo 01 de 2005 limitó el tiempo para acceder a los derechos pensionales en aplicación del régimen de transición, señalando que este no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo para los afiliados que tengan cotizadas al menos 750 semanas a la entrada en vigencia de dicha norma. De modo que el Acto Legislativo 01 de 2005 tampoco afectó los intereses de la actora, pues para julio de 2005, fecha en que entró en vigencia la norma, la demandante contaba con más de 750 semanas como se puede evidenciar

en la historia laboral aportada en el expediente administrativo (fols. 132-140 pdf 10 primera instancia).

Finalmente, frente al cumplimiento del requisito de edad antes del 31 de diciembre de 2014, que fue la extensión que brindó el Acto Legislativo para personas que pudieran acceder a su derecho pensional con base en la norma más favorable, este se encuentra cumplido pues cumplió la edad, esto es 55 años, el 22 de julio de 2013, puesto que en aplicación en nuestro caso concreto, la norma más favorable para la actora resulta ser el decreto 758 de 1990 por medio del cual se aprobó el acuerdo 049 de 1990, que estableció, en su artículo 12 que para obtener la pensión de vejez para las mujeres, debía cumplir con 55 años de edad y contar con un mínimo de 500 semanas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, o haber acreditado 1.000 semanas en cualquier tiempo, concluyendo así que la actora es beneficiaria del régimen de transición antes reseñado.

Con lo anterior, la Sala entra a verificar el cumplimiento por parte de la actora, de los requisitos de la pensión de vejez, de acuerdo a la normatividad aplicable a la demandante, esto es, el artículo 12 del decreto 758 de 1990, donde se estipuló que:

> *"Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:*
>
> *a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,*
>
> *b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo."*

Es así, que, una vez revisado el plenario, esta Corporación encuentra que la demandante, cumplió con los requisitos antedichos, pues cumplió con la edad de 55 años el 22 de julio de 2013 (fol. 24 pdf 02 primera instancia), y además contaba con más de 1.000 semanas en cualquier tiempo, antes del 31 de diciembre de 2014 (fols. 132-140 pfd 10 primera instancia), por ello, resulta ser beneficiaria de la pensión de vejez que trata el citado artículo, no obstante; resulta oportuno señalar que ante el cumplimiento de esos requisitos se podría concluir que a la demandante le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, empero que no se puede perder de vista que dicha densidad de cotización corresponde a la misma que fue tomada o tenia en cuenta por Colpensiones para el reconocimiento de la pensión por hijo invalido, y que en razón a ello como quiera que la demandante ya tenía una situación jurídica consolidada como pensionada, contrario a lo declarado por el a quo, no puede accederse a dicho reconocimiento pensional y declarar la incompatibilidad con la pensión ya reconocida, sino que lo procedente es la reliquidación.

Ahora bien, resulta necesario precisar que el *A Quo,* decidió condenar a Colpensiones a pagar la pensión de vejez a partir del 03 de septiembre de 2017, sin embargo; para este tribunal, lo que en realidad se deberá aplicar es la reliquidación de la pensión de

vejez por hijo invalido de la actora, ello en consonancia con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL1015 de 2022, al esbozar lo siguiente:

"En consecuencia resulta necesario resaltar que cuando el parágrafo 4º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, señala como uno de los requisitos para la causación de la pensión especial de vejez por hijo invalido que, el afiliado « (…) haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez», debe entenderse que, por regla general se ha de acreditar al número de cotizaciones establecidas por el artículo 33 de Ley 100 de 1993, con sus respectivas modificaciones; de manera excepcional y únicamente para aquellos afiliados al sistema general de pensiones que sean beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuyo sistema pensional anterior sea el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual anualidad, deberá acreditarse la densidad de cotizaciones previstas en el artículo 12 de ese cuerpo normativo, por las razones señaladas en precedencia.

Bajo el anterior escenario, la Sala deberá realizar una precisión jurisprudencial en torno al alcance de parágrafo 4º del artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y, en ese sentido rectificar y recoger cualquier otro criterio que sobre el mismo existiere para señalar, que: ***si quien pretende la pensión especial de vejez por hijo invalido acredita además de los requisitos previstos en la citada norma, su condición de ser beneficiario del tránsito legislativo y tener derecho a que se le aplique el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, para establecer el monto de su prestación deberá acudirse a lo dispuesto en esta última normativa,*** *pues se recuerda que, en virtud del régimen transición se mantiene la edad (que no se exige en este caso), el tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto; no así lo relacionado al ingreso base de la liquidación, pues éste se obtiene de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 (CSJ SL 3355-2021)*

Para una mayor claridad de lo anteriormente expuesto, el derecho de acceder al reconocimiento y pago de la pensión especial por hijo invalido, de que trata el parágrafo 4 del artículo 9 de la Ley 797 de 2003, no excluye la aplicación del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando se tenga a su favor tal beneficio, pues estos no son excluyentes, sino que por el contrario se complementan.

Así las cosas, como el juez de primera instancia determinó la cuantía de la pensión especial de vejez que le otorgó al demandante, aplicando lo establecido en la Ley 100 de 1993, procede la Sala a calcularla conforme a los parámetros antes señalados, ya que no está en discusión que el demandante es beneficiario del régimen de transición, en razón a que nació el 13 de abril de 1953, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 40 años de edad y conforme lo aceptó Colpensiones en la Resolución GNR222259 de 2013, «acredita 15 años o más de servicios y/o cotizaciones a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones»." (negrita y subraya por fuera)

En ese sentido, la Sala modificará el numeral tercero de la sentencia, para en su lugar condenar a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez por hijo invalido de la demandante y revocará igualmente los numerales cuarto y quinto.

PRESCRIPCIÓN

Teniendo en cuenta que el ministerio publico presentó como excepción la de prescripción en favor de Colpensiones la misma se encuentra llamada a prosperar de manera parcial, como lo estableció el *A Quo,* pues la demandante, presentó reclamación administrativa ante la demandada Colpensiones el 19 de junio de 2014, con el fin de que se reliquidara su pensión especial de vejez (fols 313-314 pdf 10) misma que fue resuelta de manera negativa mediante resolución del 01 de diciembre de 2014 (fols 300-308 pdf 10), interrumpiendo así el termino prescriptivo, debiendo interponer la demanda hasta los tres años después de dicha data; sin embargo, lo que realizó la demandante fue una nueva reclamación el 30 de noviembre de 2017, pero por el reconocimiento de un pensión de vejez por hijo invalido, mas no por la reliquidación que aquí se alega (fols. 33-34 pdf 02 y fols 315-316 pdf 10), siendo resuelta de manera negativa con resolución del 21 de diciembre 2017 (fols. 326-322 pdf 10), presentando la demanda solamente hasta el 03 de septiembre de 2020; por tanto, en aplicación del artículo 489 del Código Sustantivo del Trabajo, la prescripción se aplicará respecto a las mesadas anteriores a los 3 años de la presentación de la demanda (03 de septiembre de 2020), es decir antes del 03 de septiembre de 2017, lo anterior teniendo en cuenta la Sentencia SL4340 de 2019, que señaló que el derecho pensional no prescribe, pero si las mesadas las cuales admiten prescripción trienal.

> *"…Esta Corporación ha sido enfática en cuanto a que el derecho pensional no prescribe, contrario a lo que sucede con las mesadas, toda vez que al tratarse de importes que se hacen exigibles periódicamente, admiten prescripción trienal, cuyo cómputo corre de manera independiente para cada período, desde que se hace exigible la mensualidad:*
>
> > *La imprescriptibilidad del derecho pensional y la vocación prescriptible de las mesadas pensionales obedece, además, a lo siguiente: respecto al estado jurídico de pensionado, si bien puede predicarse su existencia y la consecuente posibilidad de que sea declarado judicialmente, junto con todos sus componentes definitorios, no puede aseverarse su exigibilidad y, por ende, su vocación prescriptible, dado que, se itera, no existe un plazo específico para solicitar la definición de los estados jurídicos que acompañan a los sujetos de derecho. En cambio, en relación con cada una de las mesadas pensionales, en tanto expresiones económicas de la situación jurídica de pensionado, sí puede sostenerse su exigibilidad, para, a partir de allí, empezar a contar el término trienal de prescripción (CSJ SL 0052, 26 may. 1986)."*

Por lo anteriormente reseñado, se confirmará en este aspecto la decisión del juzgado de conocimiento.

DEL MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ A LA DEMANDANTE Y REQLIQUIDACIÓN

Dicho lo anterior, después de dar por concluido que la normatividad aplicable a la aquí demandante, con ocasión al régimen de transición antes señalado, es el Decreto 758 de 1990 por medio del cual se aprobó el Acuerdo 049 de 1990, resulta necesario realizar la reliquidación de la mesada pensional a la actora, teniendo en cuenta dicha norma, que expone al tenor de su artículo 20 en su numeral 2, que el porcentaje de reemplazo, para las personas con un numero de semanas de 1.150, como en el caso de la demandante, será de 84%, como lo estableció el *A Quo.*

Luego del análisis correspondiente, la Sala, en asocio con el grupo liquidador de este Tribunal, reliquidó la pensión inicialmente desde octubre de 2007 por el antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, que reconoció una mesada pensional por valor de $474.258, y tras realizar nuevamente el cálculo en debida forma, en conjunto con los aumentos legales respectivos, la mesada pensional definitiva, que debió haberse otorgado inicialmente, resultó ser de $596.179. Así las cosas, al establecer la diferencia entre ambos valores y aplicando los incrementos legales correspondientes hasta la fecha actual, surgió una diferencia a favor la demandante por valor de $10.571.020, teniendo en cuenta la prescripción antes establecida. Ello con fundamento en las liquidaciones que se pasan a revisar:

Cálculo Toda la vida Laboral							
AÑO	***Nº. Días***	***IPC inicial***	***IPC final***	***Factor de indexación***	***Sueldo promedio mensual***	***Salario actualizado***	***Salario anual***
1975	*122*	*0,250*	*61,33*	*245,320*	*$ 1.411,97*	*$ 346.383,80*	*$ 1.408.627,44*
1976	*366*	*0,290*	*61,33*	*211,483*	*$ 1.770,00*	*$ 374.324,48*	*$ 4.566.758,69*
1977	*340*	*0,360*	*61,33*	*170,361*	*$ 2.078,65*	*$ 354.120,62*	*$ 4.013.367,06*
1982	*184*	*1,140*	*61,33*	*53,798*	*$ 7.470,00*	*$ 401.872,89*	*$ 2.464.820,42*
1986	*164*	*2,380*	*61,33*	*25,769*	*$ 25.530,00*	*$ 657.880,21*	*$ 3.596.411,82*
1987	*365*	*2,880*	*61,33*	*21,295*	*$ 31.319,64*	*$ 666.956,17*	*$ 8.114.633,35*
1988	*366*	*3,580*	*61,33*	*17,131*	*$ 42.201,01*	*$ 722.957,54*	*$ 8.820.082,01*
1989	*365*	*4,580*	*61,33*	*13,391*	*$ 53.466,49*	*$ 715.960,70*	*$ 8.710.855,23*
1990	*365*	*5,780*	*61,33*	*10,611*	*$ 69.037,07*	*$ 732.533,46*	*$ 8.912.490,46*
1991	*305*	*7,650*	*61,33*	*8,017*	*$ 85.222,13*	*$ 683.225,27*	*$ 6.946.123,56*
1992	*128*	*9,700*	*61,33*	*6,323*	*$ 123.052,27*	*$ 778.020,15*	*$ 3.319.552,64*
1993	*319*	*12,140*	*61,33*	*5,052*	*$ 183.641,10*	*$ 927.735,46*	*$ 9.864.920,40*
1994	*360*	*14,890*	*61,33*	*4,119*	*$ 240.679,50*	*$ 991.327,99*	*$ 11.895.935,85*
1995	*350*	*18,250*	*61,33*	*3,361*	*$ 316.628,57*	*$ 1.064.045,50*	*$ 12.413.864,11*
1996	*347*	*21,800*	*61,33*	*2,813*	*$ 361.455,33*	*$ 1.016.883,28*	*$ 11.761.949,92*
1997	*307*	*26,520*	*61,33*	*2,313*	*$ 350.358,31*	*$ 810.236,61*	*$ 8.291.421,32*
1998	*360*	*31,210*	*61,33*	*1,965*	*$ 469.166,67*	*$ 921.947,83*	*$ 11.063.373,92*
1999	*360*	*36,420*	*61,33*	*1,684*	*$ 535.333,33*	*$ 901.482,52*	*$ 10.817.790,23*
2000	*360*	*39,790*	*61,33*	*1,541*	*$ 583.083,33*	*$ 898.730,86*	*$ 10.784.770,29*
2001	*360*	*43,270*	*61,33*	*1,417*	*$ 616.083,33*	*$ 873.223,73*	*$ 10.478.684,77*
2002	*250*	*46,580*	*61,33*	*1,317*	*$ 436.800,00*	*$ 575.116,87*	*$ 4.792.640,62*
2003	*360*	*49,830*	*61,33*	*1,231*	*$ 399.694,44*	*$ 491.937,79*	*$ 5.903.253,53*
2004	*356*	*53,070*	*61,33*	*1,156*	*$ 506.432,58*	*$ 585.255,52*	*$ 6.945.032,16*
2005	*356*	*55,990*	*61,33*	*1,095*	*$ 490.960,67*	*$ 537.785,64*	*$ 6.381.722,96*
2006	*356*	*58,700*	*61,33*	*1,045*	*$ 465.056,18*	*$ 485.892,60*	*$ 5.765.925,50*
2007	*267*	*61,330*	*61,33*	*1,000*	*$ 504.842,70*	*$ 504.842,70*	*$ 4.493.100,00*
Total días	***8138***	***Total devengado actualizado a:***				***2007***	***$ 192.528.108,24***
Total semanas	***1162,57***	***Ingreso Base Liquidación***					***$ 709.737,44***
Total Años	***22,46***	***Porcentaje aplicado***					***84%***
		Primera mesada					***$ 596.179,45***
		Salario Mínimo Mensual Legal Vigente Año				***2007***	***$ 433.700,00***

Tabla Retroactivo Pensional							
Fecha inicial	**Fecha final**	**Incremento %**	**Valor mesada calculada**	**Mesada otorgada**	**Diferencia**	**N°. Mesadas**	**Subtotal**
01/01/07	31/12/07	4,48%	$ 596.179,45	$ 474.258,00	$ 121.921,45	0,00	$ 0,0
01/01/08	31/12/08	5,69%	$ 630.102,00	$ 501.243,00	$ 128.859,00	0,00	$ 0,0
01/01/09	31/12/09	7,67%	$ 678.431,00	$ 539.688,00	$ 138.743,00	0,00	$ 0,0
01/01/10	31/12/10	2,00%	$ 692.000,00	$ 550.482,00	$ 141.518,00	0,00	$ 0,0
01/01/11	31/12/11	3,17%	$ 713.936,00	$ 567.932,00	$ 146.004,00	0,00	$ 0,0
01/01/12	31/12/12	3,73%	$ 740.566,00	$ 589.116,00	$ 151.450,00	0,00	$ 0,0
01/01/13	31/12/13	2,44%	$ 758.636,00	$ 603.490,00	$ 155.146,00	0,00	$ 0,0
01/01/14	31/12/14	1,94%	$ 773.354,00	$ 616.000,00	$ 157.354,00	0,00	$ 0,0
01/01/15	31/12/15	3,66%	$ 801.659,00	$ 644.350,00	$ 157.309,00	0,00	$ 0,0
01/01/16	31/12/16	6,77%	$ 855.931,00	$ 689.455,00	$ 166.476,00	0,00	$ 0,0
01/09/17	31/12/17	5,75%	$ 905.147,00	$ 737.717,00	$ 167.430,00	5,00	$ 837.150,0
01/01/18	31/12/18	4,09%	$ 942.168,00	$ 781.242,00	$ 160.926,00	13,00	$ 2.092.038,0
01/01/19	31/12/19	3,18%	$ 972.129,00	$ 828.116,00	$ 144.013,00	13,00	$ 1.872.169,0
01/01/20	31/12/20	3,80%	$ 1.009.070,00	$ 877.803,00	$ 131.267,00	13,00	$ 1.706.471,0
01/01/21	31/12/21	1,61%	$ 1.025.316,00	$ 908.526,00	$ 116.790,00	13,00	$ 1.518.270,0
01/01/22	31/12/22	5,62%	$ 1.082.939,00	$ 1.000.000,00	$ 82.939,00	13,00	$ 1.078.207,0
01/01/23	31/12/23	13,12%	$ 1.225.021,00	$ 1.160.000,00	$ 65.021,00	13,00	$ 845.273,0
01/01/24	**31/12/24**	9,28%	$ 1.338.703,00	$ 1.300.000,00	$ 38.703,00	13,00	$ 503.139,0
01/01/25	**31/03/25**	5,20%	$ 1.462.934,64	$ 1.423.500,00	$ 39.434,64	3,00	$ 118.303,9
				Total retroactivo			**$ 10.571.020,92**

Tabla Liquidación	
Retroactivo pensional	$ 10.571.020,9
Total	**$ 10.571.020,9**

Con lo anterior, encuentra la Sala que la apelación presentada por la parte actora se encuentra llamada a prosperar, y en consecuencia, como se expuso en precedencia se modificará el numeral tercero de la decisión para condenar a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez por hijo invalido de la actora, por valor mensual de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($596.179), a partir del 01 de octubre de 2007, y en consecuencia condenar al pago de las diferencias entre las mesadas pagadas y las que realmente debió pagar, ocasionadas a favor de la demandante desde el mes de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2025, aplicando la prescripción de las diferencias anteriores a septiembre de 2017, por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($10.571.020) y los valores que se causen hasta la fecha de su pago efectivo. En consecuencia, la mesada a partir de abril de 2025 equivale a $1.462.934,64.

Del valor del retroactivo se autoriza a la entidad a descontar lo correspondiente al sistema general de salud.

3.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, sin costas en esta instancia dada la prosperidad del recurso presentado por la parte actora.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el día 09 de octubre de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído. mismo que quedará así:

***"TERCERO: CONDENAR** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** a pagar y reconocer a la señora ALICIA ISABEL GUZMÁN GONZÁLEZ, la reliquidación de la pensión de vejez por hijo invalido de la actora, por valor mensual de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS ($596.179), desde el 01 de octubre de 2007 y en consecuencia condenar al pago de las diferencias entre las mesadas pagadas y las que realmente debió pagar, ocasionadas a favor de la demandante desde el mes de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2025, aplicando la prescripción de las diferencias anteriores a septiembre de 2017, por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($10.571.020) y los valores que se causen hasta la fecha de su pago efectivo, con sus reajustes legales y mesada 13 adicional". La mesada para abril de 2025 equivale a* $1.462.934,64. *Del valor del retroactivo se autoriza a la entidad a descontar lo correspondiente al sistema general de salud.*

SEGUNDO. REVOCAR los numerales cuarto y quinto**.**

TERCERO. SIN LUGAR a condena en **COSTAS** en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 065.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Ríos B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada-

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON
Parte demandada	COLPENSIONES
Radicación	11001310500520220027301
Fecha de la decisión	8 de agosto de 2023
Motivo	Recurso de apelación
Tema	PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE
Acta de Discusión	043
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310500520220027301

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere sentencia en forma escrita y procede a resolver los recursos de apelación presentado por la parte demandada COLPENSIONES, así como también, se analizará en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada Colpensiones contra la sentencia proferida el día 8 de agosto de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D.C.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 02 primera instancia)

La señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑÓN, quien actúa como demandante en el presente asunto, mediante apoderado judicial, pretende por esta vía ordinaria laboral, se condene a ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes en su favor, tras el fallecimiento de su esposo LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.), ocurrido el 8 de julio de 2019 (pág. 10), el pago del retroactivo y de los intereses moratorios, a cargo de la demandada COLPENSIONES, junto a las costas y agencias en derecho generadas por el proceso.

Para sustentar sus pedimentos, la actora expuso que convivió con el causante en unión marital de hecho, compartiendo techo, lecho y mesa, desde 1º de abril de 1988. Luego, el 14 de septiembre de 2013, celebraron compromiso de matrimonio ante la Notaria 2ª del Círculo de Bogotá. (fol. 9)

Adujo que, el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) adquirió el status de pensionado el 29 de julio de 1998, a través de Resolución No. 008220 del 29 de julio de 1998. No obstante, no fue aportado por el demandante al proceso.

Afirmó que, tras la muerte de su esposo, radicó solicitud de sustitución pensional el 2 de septiembre de 2019 ante Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, la cual fue negada mediante Resolución SUB.285815 del 17 de octubre de 2019 (fols. 12-15).

Luego, tras dicha negativa, presentó recurso de apelación contra la decisión de Colpensiones; sin embargo, la entidad mediante Resolución SUB.331621 del 3 de diciembre de 2019, resuelve rechazarlo por considerarlo extemporáneo y mantiene su decisión de negar la pensión de sobreviviente (fols. 17-22).

Señaló que su cónyuge la tenía afiliada al sistema de salud en Compensar EPS desde el 18 de octubre de 2013 hasta su fallecimiento, según certificado de EPS (fol. 34), y refirió que también era quien efectuaba los aportes a pensión, al figurar como empleador de la demandante desde el 1º de febrero de 1995, según historial de semanas cotizadas (fols. 35-36).

Agregó, que el 23 de julio de 2013 adquirieron un bien inmueble en donde se ubica su domicilio familiar (fols. 96-102).

Por último, afirmó que su esposo, había radicado ante Colpensiones una sustitución provisional con radicado No. 2013-4684158 del 12 de julio de 2013, en donde solicitaba que la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON sea la única beneficiaria de su pensión (fols. 37-39)

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 18 de noviembre de 2022, admitió la demanda y ordenó su traslado a la parte demandada (pdf 03). Más adelante, con Auto del 5 de junio de 2023, el Juzgado tuvo por contestada la demanda por parte de Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y fijó la fecha de audiencia (pdf 10).

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA PRINCIPAL

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (pdf 06)

En la contestación de la demanda, Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, y planteó la excepción de *inexistencia del derecho reclamado,* al no cumplirse los requisitos para el reconocimiento pensional solicitado; *cobro de lo no debido* por cuanto no se adeuda por parte de la demandada derecho alguno a la demandante; *presunción de legalidad de los actos administrativos; no configuración del derecho al pago de intereses ni indemnización moratoria,* debido a que al demandante no se le adeuda suma alguna por concepto de mesadas pensionales, considerando

también las mesadas pensionales de la prestación económica ya reconocida, las cuales se han pagado oportunamente al beneficiario; *no configuración del derecho al pago del I.P.C. ni indexación o reajuste alguno,* pues afirma que a la demandante no le asiste el reconocimiento y pago de ningún tipo de corrección monetaria; *buena fe de Colpensiones; prescripción* sobre todos los derechos que no se alegaron oportunamente; la *excepción de compensación* y *la innominada o genérica.*

Argumentó que, a través de informe investigativo adelantado por Colpensiones (pdf 12 primera instancia), se concluyó que no se acreditó el contenido y la veracidad de la solicitud al no lograr comprobarse la convivencia entre el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ (Q.E.P.D.) y DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON durante el periodo manifestado por la solicitante, pues no se precisó la fecha exacta en que inició su convivencia, además de encontrarse contradicciones en las declaraciones obtenidas en las labores de campo, y lo dicho por la solicitante. Por último, sostienen que el registro civil de matrimonio no es prueba fehaciente que demuestre la convivencia en los últimos 5 años de vida del causante.

Para tal efecto se basó inicialmente en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 en relación con los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, y en la sentencia SL 9762 de 2016 de la Corte Suprema de Justicia a fin de establecer la norma aplicable al momento del deceso del causante. Así también citó la sentencia C-515 de 2019 de la Corte Constitucional, en relación con el requisito de la convivencia.

En cuanto a los hechos de la demanda, refirió como ciertos los relacionados con el reconocimiento de status de pensionado del señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ (Q.E.P.D.), su fallecimiento acreditado mediante registro civil de defunción (fol. 10 pdf 02 primera instancia), posteriormente la reclamación por parte de la demandante para que le sea reconocida la sustitución pensional en calidad de cónyuge supérstite, la negativa de dicha solicitud por Colpensiones, a través de Resolución SUB285815 del 17 de octubre de 2019 (fols. 12-15 pdf 02), así como también el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la demandante, a través de Resolución SUB 331621 del 3 de diciembre de 2019 (fols. 17-21 pdf 02), y por último, el reconocimiento y pago del auxilio funerario a favor de la demandante, a través de Resolución SUB 261547 del 23 de septiembre de 2019 (fols. 24-28 pdf 02).

Sobre la improcedencia de los intereses moratorios, citó el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y varias sentencias de la Corte Constitucional, argumentando que la demandante no cuenta con reconocimiento prestacional alguno por parte de Colpensiones, para exigir el pago de intereses moratorios.

Con respecto a la indexación de mesadas pensionales adeudadas, citó la sentencia SL16440-2014 radicado No. 42343 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, donde se establece que los intereses moratorios y la indexación son incompatibles. Frente al retroactivo pensional, reiteró que no se cumplía con los requisitos para un reconocimiento pensional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 13 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 8 de agosto de 2023, condenó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a reconocer y pagar a la demandante, DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del pensionado LUIS ENRIQUE GONZALEZ ÁVILA (Q.E.P.D.), desde el 9 de julio de 2019, junto con sus reajustes legales y mesada 13 adicional. Asimismo, condenó a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES a pagar los intereses moratorios a partir del 3 de noviembre de 2019 y hasta que se haga efectivo el pago, condenando a la demandada en costas.

El *A Quo* concluyó que dentro del proceso se acreditó el vínculo matrimonial de la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON y el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ ÁVILA (Q.E.P.D.) (fol.9 pdf 02 primera instancia), teniendo por hecho cierto la condición de pensionado del señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ ÁVILA (Q.E.P.D.), también expuso que se acreditó el fallecimiento del pensionado el 8 de julio de 2019 (pág. 10 pdf 02 primera instancia), así como también la negativa de Colpensiones a reconocer la pensión de sobrevivientes (págs. 12-15 pdf 02 primera instancia) y el rechazo del recurso interpuesto por la demandante por considerarse extemporáneo (págs. 17-22 pdf 02 primera instancia).

El Juez fundamentó su decisión en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que estableció los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, particularmente la convivencia durante cinco años continuos antes del fallecimiento del causante. Citó jurisprudencia relevante, en la cual la Corte Suprema de Justicia ha interpretado la convivencia como una comunidad de vida estable y permanente, caracterizada por la ayuda mutua y el acompañamiento espiritual, particularmente la sentencia SL1399 de 2018 radicación 45779, que desarrolla el concepto de convivencia, la cual debe ser durante los 5 años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado, aclarando que para el caso de los cónyuges, estos 5 años pueden demostrarse en cualquier tiempo, no es necesario que deban ser inmediatamente anteriores al fallecimiento.

Analizó el cuestionario realizado a la demandante DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON, quien afirmó que convivió con el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) desde el año 1988 cuando ella cumplió la mayoría de edad, hasta la fecha de su fallecimiento, esto es el 8 de julio de 2019. Así como también analizó las pruebas testimoniales de las señoras MIRYAM YOLANDA CASTRO CAÑON y SOFIA CAÑON SANCHEZ, quienes proporcionaron certeza respecto de la convivencia de los tiempos señalados por la demandante en su demanda y en el interrogatorio, en razón a que fueron suficientes para determinar la mencionada relación y los tiempos en que se mantuvo la misma.

Además, valoró las pruebas documentales como las declaraciones rendidas en vida del causante las cuales dan fe de la convivencia que tenía la pareja desde el año 1987 o 1988 (fols. 40-42 pdf 02 primera instancia), y la manifestación expresa realizada por

el causante para incluir como única beneficiaria a su cónyuge, la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON (fols 37-39 pdf 02 primera instancia), el registro civil de matrimonio que les otorga la condición de cónyuges (fol. 9 pdf 02 primera instancia), el contrato de arrendamiento celebrado por la pareja con un tercero el cual da cuenta de la comunidad de vida y el ánimo de compartir el domicilio en pareja (fols. 49-50 pdf 02primera instancia), y posteriormente la adquisición de un bien inmueble a través de escritura de compraventa del 23 de julio de 2013 (fols.96-102 pdf 02 primera instancia).

Se refirió también al informe investigativo, señalando que el mismo no tiene una argumentación sólida para concluir que no se acreditó la convivencia durante los 5 años anteriores al fallecimiento del causante, pues solo tuvieron en cuenta las entrevistas de personas lejanas al núcleo familiar de la pareja, quienes desde un principio no eran los indicados para rendir una declaración certera sobre lo que sucedía al interior de la relación, además, agregó que la inexactitud sobre el día inicial en que surgió la convivencia resulta ser un argumento débil para negar el reconocimiento de la pensión.

El Juzgador de instancia, destacó que no había discusión en el derecho a la pensión de sobrevivientes que efectivamente surgió a favor de la demandante, al día siguiente al fallecimiento del causante, esto es el 9 de julio de 2019, en igual monto del que se venía percibiendo, junto con los ajustes legales y mesadas adicionales, y por lo tanto que no había razón alguna para que Colpensiones negara la referida prestación pensional.

Respaldó su decisión en la Ley 717 de 2001, y el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para el cobro de los intereses moratorios y por último declaró no probada la excepción de prescripción pues con la presentación de la reclamación ante Colpensiones se interrumpió el término, mismo que fue contabilizado de nuevo a partir de la respuesta de la administradora de pensiones, y finalmente instaurada la demanda el 26 de abril de 2022, es decir dentro del término, por tal motivo resolvió que ninguna de las mesadas pensionales quedaría cobijada por la excepción de prescripción.

1.4. RECURSO DE APELACIÓN (min 1:58:48 video 13)

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

El apoderado de la demandada solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que revise la decisión del juez, pues consideró que el reconocimiento de la sustitución pensional en favor de la actora resulta vulneratorio frente a lo que debe ser endilgado como de responsabilidad de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones.

Para tal efecto, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como la SL1130 de 2022 y la SL5270 de 2021, en donde se instruyó frente al tópico del requisito de la acreditación de la convivencia, que desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara esta Corporación, en afirmar que, la intención del legislador de establecer la diferencia entre los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por muerte del

afiliado y los beneficiarios de la pensión por muerte de pensionado, no es otra que la de evitar conductas fraudulentas o evitar una acreditación deficiente de los requisitos para hacerse beneficiario de una prestación vitalicia por muerte de quien ya venía disfrutando una pensión.

Respecto de los intereses moratorios, refirió que no son procedentes y citó la sentencia SL11877 del 2016 de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que no fueron acreditados en sede administrativa los requisitos para el reconocimiento de la pensión o sustitución pensional, y en ese sentido tampoco procede el pago del retroactivo indicado, pues mi representada expuso su defensa de buena fe no reconociendo esta prestación adicional ya que considera que no existe causa para que le sea reconocida prestación alguna.

Expuso también que la condena impuesta por el Juzgado genera una afectación al principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional que administra Colpensiones y genera un costo fiscal a los recursos del sistema, debido a que permite que un importante número de solicitantes de personas que no logran acreditar o acreditan de manera incompleta los requisitos para acceder a la prestación pensional, puedan acceder a ella, sin tener en cuenta requisitos esenciales como el socorro mutuo y la dependencia económica durante los años previos al fallecimiento del causante. También citó la sentencia SL1130 DE 2022 de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente solicitó sea revocada la sentencia del *A Quo* incluyendo en lo relacionado en costas y agencias en derecho, argumentando ser excesivas puesto que Colpensiones ejerció debidamente su derecho de defensa y contradicción dentro del presente proceso judicial, y en ese sentido solicitó la exoneración de cada una de las suplicas impetradas en la demanda.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (carpeta segunda instancia)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, en dicho sentido, el despacho de conocimiento, con auto de 04 de marzo de 2024 (pdf 02), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes no se pronunciaron

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada, así como también, se analizará en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la demandada Colpensiones.

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Acreditó la demandante, en su calidad de cónyuge, la convivencia con el causante durante cinco años en cualquier tiempo, para ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente? En caso afirmativo ¿resulta procedente la condena impetrada por el *A Quo* en contra de la demandada Colpensiones?

3.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Con todo lo anterior, se tiene que, no es objeto de discusión que la demandante DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON contrajo matrimonio con LUIS ENRIQUEZ GONZALEZ ÁVILA (Q.E.P.D.) el 14 de septiembre de 2013 (fol. 9 pdf 02 primera instancia); que LUIS ENRIQUEZ GONZALEZ ÁVILA (Q.E.P.D.) le fue reconocida la pensión de vejez por el I.S.S. mediante Resolución No. 008220 del 29 de julio de 1998; que el causante falleció el 8 de julio de 2019 (fol. 10 pdf 02 primera instancia); y tampoco se discute la Resolución SUB 285815 del 17 de octubre de 2019 que resolvió negar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la demandante (fols. 12-15 pdf 02 primera instancia) y la Resolución SUB 331621 del 3 de diciembre de 2019 que resolvió rechazar por extemporáneo el recurso de apelación (fols. 17-22 pdf 02 primera instancia). Así como tampoco se discute el reconocimiento por concepto de auxilio funerario a través de Resolución SUB 261547 del 23 de septiembre de 2019 (fols. 24-28 pdf 02 primera instancia).

DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES Y LA CONVIVENCIA

En tal sentido, y de acuerdo con los argumentos de la demandante, y al haberse determinado que el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.), falleció el 8 de julio de 2019, la norma llamada a regir la presente controversia es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual dispone:

> *"ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:*
> *"[...]*
> *"1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca..."*

A su turno el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece:

> *"ARTÍCULO 47. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES.*
> *"Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*
> *"a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del*

causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y ***haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte****;*

En consecuencia, de cumplirse con los presupuestos entregados por la citada norma, el monto de la pensión se reconocerá, según lo estipulado en el artículo 48 *ibídem*[1].

Ahora bien, resulta apropiado recordar, lo que la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, ha establecido en cuanto a la convivencia sostenida entre el causante y la reclamante, cuando esta posee la calidad de cónyuge, como lo hizo en Sentencia SL 1493 de 2024:

"Al analizar la referida norma, esta corporación ha estimado que el cónyuge separado de hecho o no con vínculo matrimonial vigente, para acceder a la pensión de sobrevivientes debe ***acreditar una convivencia durante un periodo de cinco años, desarrollada en cualquier tiempo.***

La anterior postura ha tenido como finalidad proteger a quien desde el matrimonio aportó a la construcción del beneficio pensional, materializando el principio fundamental de la solidaridad, que se predica de quien acompañó al causante en una etapa de su vida y con quien hasta el momento de su muerte mantuvo el lazo matrimonial vigente.

En tal dirección, se ha estimado que la hipótesis de que el cónyuge con vínculo matrimonial vigente a la muerte acceda a la pensión de sobrevivientes siempre que acredite cinco años de cohabitación en cualquier tiempo, equilibra la situación que se origina cuando una pareja que decidió formalizar su relación y que entregó parte de su existencia a la conformación de un común proyecto de vida, quien con su compañía y fortaleza ayudó a que el trabajador construyera la pensión, se ve desprovista del soporte que aquel le proporcionaba; situación que es más evidente «cuando es la mujer quien queda sin ese apoyo, en tanto su incorporación al mercado laboral ha sido tardía, relegada históricamente al trabajo no remunerado o a labores periféricas que no han estado cubiertas por los sistemas de seguridad social» (CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 41637)." (Negrita y subraya por fuera)

Por lo anterior, y atendiendo lo establecido en la legislación aplicable y lo dictado por la Jurisprudencia de nuestro Órgano de cierre, así como la apelación impetrada, se entrará a estudiar por esta Sala, si se logró demostrar la convivencia entre la demandante, en su calidad de cónyuge, y el causante, durante cinco años en cualquier tiempo.

En consecuencia, y con ánimo de verificar lo inmediatamente anterior, resulta adecuado abordar los interrogatorios y las pruebas testimoniales que dentro del plenario se encuentran. De esta manera cobra importancia la declaración rendida por

---

[1] ARTÍCULO 48. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. (…) El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON, quien afirmó haber convivido de manera ininterrumpida y permanente durante un lapso de 31 años con el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.), convivencia que surgió luego de que ella cumpliera la mayoría de edad, esto es el 1º de abril de 1988, y se extendió hasta el fallecimiento de su cónyuge el 8 de julio de 2019, por lo que dejó entrever en sus respuestas, que hasta en los últimos años de vida del fallecido, ella le proporcionó la ayuda y las atenciones necesarias para su delicado estado de salud, refiriendo que su esposo empezó a presentar problemas cardiacos, los cuales lo llevaron a su deceso.

De igual manera, se aprecia lo dicho por la señora MIRYAM YOLANDA CASTRO CAÑON en su testimonio, afirmó ser hermana de la demandante, y conocer al señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.), cuando ella era menor de edad, aseguró que en ese entonces era el jefe de su hermana y luego entre ellos montaron una distribuidora de cosméticos en la ciudad de Bogotá D.C., indicó que la pareja comenzó su convivencia cuando su hermana DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON cumplió la mayoría de edad, y luego se unieron en matrimonio ante la Notaria 2ª de Chapinero.

Esta Corporación también analizó el testimonio rendido por la señora SOFYA CAÑON SANCHEZ, quien afirmó ser la madre de la demandante, y manifestó haber conocido al señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) cuando trabajaron juntos en el laboratorio, además expuso que cuando su hija cumplió la mayoría de edad inició la convivencia con el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.), manifestando que tenían un negocio, situación que conocía directamente debido a que vivió un tiempo con ellos para colaborarles en el negocio. Aseguró que el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) era una persona alentada, y que la razón de su fallecimiento fue por un paro cardiaco.

Ahora bien, al apreciar y valorar las pruebas documentales, esta Corporación encuentra, que se tiene probado que la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON, fue la cónyuge del causante desde el 14 de septiembre de 2013 como lo demuestra el registro civil de matrimonio (fol. 9 pdf 02 primera instancia); que el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) falleció el 8 de julio de 2019, según el acta de defunción (fol.10 pdf 02 primera instancia); que entre los cónyuges constituyeron una sociedad comercial denominada EXCLUSIVES LD LTDA, debidamente registrada el 12 de marzo de 2004 y liquidada el 6 de noviembre de 2013, según los certificados de Cámara de Comercio de Bogotá D.C. (fols. 29-33 pdf 02 primera instancia); que el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) tenía registrada como beneficiaria a su esposa la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON desde el 18 de octubre de 2013 hasta 02 de agosto de 2019 (fol 34 pdf 02 primera instancia); que el causante a través de petición expresa ante Colpensiones, solicitó sea incluida como única beneficiaria de su pensión a la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON (fols. 37-39 pdf 02 primera instancia); que a través de declaraciones juramentadas se constata inicialmente, la convivencia en unión marital de hecho de la pareja (fols 40-42 pdf 02 primera instancia); que se aportó el certificado de libertad y tradición del inmueble donde se ubica el domicilio familiar (fols. 96-102 pdf 02 primera instancia). De la misma forma, el contrato de arrendamiento aportado por la actora, suscrito por la mentada pareja como

arrendatarios, por el lapso de un (1) año a partir de 31 de mayo de 2003 (fols. 49-50 pdf 02 primera instancia), el cual deja entrever la predicada convivencia entre la mentada pareja.

Por otra parte, se tiene que la demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, adelantó la respectiva investigación administrativa, no obstante, sus argumentos se basaron en que no existe precisión en el día inicial de la convivencia, y en que se encontraron supuestas contradicciones en los testimonios recolectados en labores de campo, lo que este Tribunal no comparte, pues de dicha investigación, no es posible concluir tal aseveración.

Por lo que este Tribunal confirma lo dicho por el *A Quo,* en el sentido de que las pruebas fueron suficientes para determinar que existió convivencia entre la demandante y su cónyuge, y por ende, es evidente el desacierto de Colpensiones en negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, cuando debió ser concedida desde un principio, considerando que dentro de la investigación administrativa solo se tuvo en cuenta las entrevistas realizadas a personas lejanas al núcleo familiar de la pareja, quienes por obvias razones no podían constatar de manera precisa los periodos de convivencia entre el señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) y la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON, ni tampoco determinar con certeza el vínculo o parentesco de la pareja.

Se tiene que, la conclusión de COLPENSIONES no tuvo en cuenta las otras entrevistas realizadas en las labores de campo, las cuales en ningún momento contradicen lo relatado por la demandante, en primer lugar la declaración del señor WILLIAM MARTÍNEZ OSPINA, testigo notarial quien afirmó ser durante un tiempo el contador de la empresa de propiedad del señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.), que conocía a los implicados hace 11 años, tiempo para el cual afirma, ellos ya convivían bajo un mismo techo, y agregó que nunca hubo separaciones entre la solicitante y el causante. Y la declaración del señor OMAR ENRIQUE LEMUS GÓMEZ, quien afirmó conocer al señor LUIS ENRIQUE GONZALEZ AVILA (Q.E.P.D.) y a la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON hace 10 años, manifestó que incluso son los padrinos de su hijo, que eran esposos y que no se habían separado sino hasta el fallecimiento del causante.

Por lo anterior, es claro para la Sala, que la convivencia quedó demostrada por la parte actora, pues se logró establecer que la misma perduró durante un lapso superior a 5 años anteriores al fallecimiento del causante, no solo la declaración de la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON sino también los testimonios y demás pruebas documentales dieron cuenta de ello, por lo que se concluye que se forjó una comunidad de vida estable y permanente entre la pareja, donde se logró denotar que hubo acompañamiento espiritual, un proyecto familiar común, apoyo económico, y un compartir de vida en pareja, durante un lapso de 31 años.

En este punto, resulta pertinente precisar que, aun cuando la pensión fue reconocida por al causante a partir del 01 de agosto de 1998, el número de mesadas a reconocer debió ser de catorce (14) y no de trece (13) como lo concluyó el *A Quo*; asimismo, tal como lo ha decantado la Corte Suprema de Justicia, la pensión de sobreviviente se

debe otorgar a partir del día en que se causó la muerte del pensionado, que en nuestro caso sería desde el 08 de julio y no desde el 09 julio de 2019 como se concluyó en primera instancia; sin embargo, como estos puntos no fueron objeto de apelación y en razón al grado de consulta en favor de Colpensiones, el Tribunal no puede modificar dichos puntos, empero, la sentencia debe dejar constancia de estas circunstancias para evitar interpretaciones erróneas o futuras controversias sobre la liquidación de la prestación.

Por todo lo anterior, la actora, tiene derecho a que le sea reconocida la pensión de sobreviviente en un monto total del 100% del valor que percibía en vida el causante, esto es $1.252.754 , desde el día siguiente a la fecha de fallecimiento del actor, es decir a partir del 09 de julio de 2019, teniendo derecho a que se cancele el retroactivo desde la mentada fecha, como se pasa a liquidar:

Tabla Retroactivo Pensional					
Fecha inicial	***Fecha final***	***Incremento %***	***Valor mesada calculada***	***N°. Mesadas***	***Subtotal***
09/07/19	*31/12/19*	*3,18%*	*$ 1.252.754,00*	*5,73*	*$ 7.182.456,3*
01/01/20	*31/12/20*	*3,80%*	*$ 1.300.359,00*	*13,00*	*$ 16.904.667,0*
01/01/21	*31/12/21*	*1,61%*	*$ 1.321.295,00*	*13,00*	*$ 17.176.835,0*
01/01/22	*31/12/22*	*5,62%*	*$ 1.395.552,00*	*13,00*	*$ 18.142.176,0*
01/01/23	*31/12/23*	*13,12%*	*$ 1.578.648,00*	*13,00*	*$ 20.522.424,0*
01/01/24	*31/12/24*	*9,28%*	*$ 1.725.147,00*	*13,00*	*$ 22.426.911,0*
01/01/25	***31/01/25***	*5,20%*	*$ 1.814.855,00*	*1,00*	*$ 1.814.855,0*
Total retroactivo				***$ 104.170.324,27***	

De esta manera, y teniendo en cuenta que el *A Quo* omitió realizar la liquidación del mentado retroactivo, se adicionará este valor al numeral primero de la decisión.

DE LOS INTERESES MORATORIOS.

Como quiera que, dentro de las pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó el pago de intereses moratorios respecto a las condenas que se llegasen imponer, resulta apropiado traer a colación lo que emana de la legislación aplicable en los casos en que se logre demostrar la mora en el pago de la pensión, como lo es el artículo 141 de la ley 100 de 1993:

> *"ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 10. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago."*

Al respecto, cabe memorar lo que ha estipulado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral ha establecido que los mismos proceden en retardo de una mesada pensional sin ninguna distinción[2], estableciendo además que ello no se

[2] Sentencia SL 1440 de 2018, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.

configura como una sanción para el deudor, sino como una reparación al pago tardío de dicha prestación[3].

Es así que de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 717 de 2001[4], los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se generan a partir de la culminación del plazo consagrado por la norma precitada, esto es de 2 meses para resolver la petición de reconocimiento de pensión de sobreviviente.

Por su parte, resulta pertinente traer a colación lo establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en Sentencia SL1079 de 2024, donde recordó que no en todos los casos es imperativo la condena por este concepto, estableciendo algunas excepciones a dicho criterio, solo en eventos puntuales, como cuando:

> *"1. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013).*
> *2. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL787-2013, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016).*
> *3. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema (CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018).*
> *4. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016).*
> *5. Existe «algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la justicia ordinaria» (CSJ SL454-2021, reiterada, entre otros, en los fallos CSJ 1476-2021 y CSJ SL2893-2021), con la precisión de que, en esta última hipótesis, la controversia entre el derecho pensional debe implicar una disputa real y no supuesta ni eventual entre beneficiarios excluyentes de la prestación (CSJ SL5654-2021).* "

Sin embargo, para esta Sala, es evidente que ninguno de los presupuestos antes citados, se cumple en el presente caso. Por lo tanto, este Tribunal conservará la decisión de condenar por intereses moratorios a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, a partir de la fecha en la cual la actora realizó la solicitud de pensión, esto es el 02 de septiembre de 2019, tal como lo refiere la demandada en la Resolución SUB 285815 del 17 de octubre de 2019 (fols. 12-15 pdf 02), y en atención al mandato del artículo 1º de la ley 717 de 2001, la convocada a juicio contaba con 2 meses después de radicada la solicitud, para efectuar el reconocimiento pensional, es decir, que Colpensiones tenía hasta el 02 de noviembre de 2019 para ello, lo que no sucedió, por tanto, los intereses moratorios que trata el artículo 141 de la ley 100 de1993, correrán a partir del 03 de noviembre de 2019, hasta que se haga efectivo su pago, tal y como lo estableció el *A Quo*.

---

[3] Sentencia SL 2558 de 2023, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.
[4] Ley 717 de 2001, "*Artículo 1º. El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho.*"

EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR COLPENSIONES

La demandada COLPENSIONES, al contestar el escrito inaugural, propuso además las excepciones de fondo que denominó *inexistencia del derecho reclamado*; *cobro de lo no debido*; *presunción de legalidad de los actos administrativos; no configuración del derecho al pago de intereses ni indemnización moratoria*; *no configuración del derecho al pago del I.P.C. ni indexación o reajuste alguno*; *buena fe; prescripción*; *compensación;* y *la excepción innominada o genérica,* sin que ninguna de ellas alcance prosperidad porque con ellas se buscaba enervar las pretensiones elevadas por la parte activa de la Litis y ello, como ya se analizó, no ocurrió.

En lo que respecta a la excepción de *prescripción*, de conformidad con lo estatuido en los artículos 488 y 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., y teniendo en cuenta que la actora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑÓN, elevó la reclamación administrativa el 2 de septiembre de 2019, circunstancia que interrumpió el término de la prescripción, debiendo contabilizarse de nuevo a partir del reclamo, en ese sentido, al ser interpuesta la demanda el 26 de abril de 2022, se constata que esta no operó.

IV. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dado que no ha prosperado el recurso impetrado por parte de COLPENSIONES, se condenará a esta entidad al pago de costas en favor de la demandante, la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON.

Sin lugar a referirse respecto de la apelación por el monto de la condena en costas impuestas por el *A Quo,* pues la oportunidad legal para controvertirlas se deberá realizar al momento de su liquidación.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. ADICIONAR el numeral **PRIMERO** de la Sentencia proferida en primera instancia el 8 de agosto de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por las razones vertidas en el presente proveído, mismo que quedará de la siguiente manera:

> *"PRIMERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES a pagar a favor de la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑÓN una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del pensionado Luis Enrique González Ávila a partir del 9 de julio de 2019 en la cuantía que estuviere recibiendo el pensionado fallecido junto con los ajustes legales y mesada adicional, teniendo derecho al retroactivo calculado desde el 09 de julio de 2019 hasta el 31 de*

enero de 2025, por valor de ***$104.170.324,27****. Se autoriza a la demandada a descontar del retroactivo lo correspondiente a los aportes a seguridad social en salud."*

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la Sentencia apelada.

TERCERO: CONDENAR en costas de segunda instancia a Colpensiones, en favor de la demandante, la señora DIANA ESPERANZA CASTRO CAÑON.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 043.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De Los Rios B.

Diana Martinez M.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA **DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ**
Magistrada **Magistrada**

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Karen L. Castro O.

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	WILLIAM HERNANDO BENAVIDES SARMIENTO
Parte demandada	COLPENSIONES, SKANDIA y COLFONDOS
Radicación	11001310500520220029101
Fecha de la decisión	05 DE JULIO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA DE TRASLADO
Acta de Discusión	053
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310500520220029101

AUTO

SKANDIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS solicita la terminación del proceso, para lo cual invoca la figura de la carencia actual de objeto debido a un hecho sobreviniente relacionado con la entrada en vigor del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Argumenta que esta disposición otorga a los afiliados la posibilidad de acceder de manera libre y voluntaria a una doble asesoría que les permita comparar los regímenes pensionales y tomar decisiones informadas, incluso si anteriormente estaban inhabilitados para trasladarse. En este sentido, señaló que el objeto del proceso judicial quedaba superado, pues el demandante podía obtener directamente el traslado de régimen mediante los mecanismos administrativos previstos en dicha ley.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

La Sala se remite a lo dispuesto por los artículos 312 a 317 del CGP, sección quinta, sobre causales de terminación anormal del proceso, transacción y desistimiento.

Los preceptos en cita permiten concluir la improcedencia de la solicitud de la peticionaria, en tanto, no se fundamenta en las causales legales previstas para finiquitar el proceso de manera anormal.

Aunado a lo anterior, la Corporación no desconoce que es viable el estudio en segunda instancia de las peticiones del extremo en litigio tendiente a la terminación del proceso, sea por solicitud unilateral del deprecante, o por acuerdo, convenio o transacción realizados en el trámite del recurso, siempre que se ajusten al plexo normativo, es lo cierto que el objeto de la litis no es equiparable al acto puro y simple

de traslado entre regímenes pensionales autorizado por la Ley 2381 de 2024 y el canon 16 del Decreto 1225 de 2024.

Es que, el fondo demandado apoyó su petición en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 sobre oportunidad de traslado, en cuyos términos *"Las personas que tengan setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas, para el caso de las mujeres, y novecientas (900) semanas cotizadas, para el caso de los hombres, y que les falten menos de diez años para tener la edad de pensión, tendrán dos (2) años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen respecto de la normatividad anterior, previa la doble asesoría de que trata la Ley 1748 de 2014"*, además en el presente asunto la parte demandada COLPENSIONES presentó recurso de apelación.

En consecuencia, se niega la solicitud de terminación del proceso por carencia actual de objeto de litigio.

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 05 de julio del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 02 primera instancia)

William Hernando Benavides Sarmiento, actuando a través de su apoderada, presentó demanda contra Colpensiones y las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías Porvenir S.A., Skandia S.A., y Colfondos S.A., solicitando mediante esta acción ordinaria laboral que se declarara la ineficacia jurídica de los traslados efectuados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Fundamentó esta pretensión en la alegada omisión del deber de información por parte de las entidades demandadas, a quienes acusó de no haber desplegado una asesoría integral, objetiva, comparativa y ajustada a los principios de transparencia y suficiencia requeridos para garantizar una decisión informada respecto de los regímenes pensionales. Como consecuencia, solicitó que se declarara su afiliación válida y continuada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones, junto con las condenas correlativas, incluidas la activación de su afiliación al RPM y el traslado íntegro de los recursos acumulados en el RAIS.

En el plano fáctico, el demandante detalló su historial de cotización, señalando su inicial vinculación al RPM y los sucesivos traslados al RAIS, que, según afirmó, se llevaron a cabo en ausencia de la información exhaustiva y comparativa que exigía la normativa aplicable. Adujo que las entidades demandadas omitieron el cumplimiento del deber de asesoría pensional, consistente en ilustrar al afiliado sobre las ventajas,

desventajas y riesgos inherentes a los regímenes en cuestión, así como en realizar un análisis detallado de sus circunstancias particulares. En este contexto, argumentó que los formularios de afiliación suscritos no constituyeron prueba idónea del cumplimiento del deber de información, y que las gestiones posteriores adelantadas por las administradoras no tuvieron la virtualidad de subsanar las omisiones cometidas en el momento del traslado.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la demanda se sustentó en los postulados constitucionales de seguridad social y protección al trabajador (artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política de Colombia), en el régimen normativo contenido en la Ley 100 de 1993, y en las disposiciones reglamentarias que consagran el deber de información en cabeza de las administradoras de fondos de pensiones. Enfatizó que la omisión de este deber configuró un vicio insubsanable en la voluntad del afiliado, lo que dio lugar a la sanción de ineficacia del traslado conforme al artículo 271 de la Ley 100 y a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en materia de responsabilidad pensional. Con base en este marco jurídico, el demandante solicitó el restablecimiento de su situación en el régimen público y la imposición de sanciones a las entidades demandadas, exigiendo que asumieran las implicaciones jurídicas y económicas derivadas de su actuar negligente e incumplido.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 18 de noviembre de 2022 (pdf 04), luego, con providencia del 28 de julio de 2023 (pdf 14), tuvo por contestada la demanda por **COLPENSIONES, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A**. Seguidamente, mediante auto del 07 de junio del 2024, se fijó fecha para celebración de audiencias de que tratan los artículo 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 09)

Colpensiones, respondió la demanda, oponiéndose a las pretensiones, presentando las excepciones de inoponibilidad de la responsabilidad derivada de las AFP privadas, prescripción de la acción, buena fe, cobro de lo no debido, el error de derecho no vicia el consentimiento, la inobservancia del principio de sostenibilidad financiera del sistema y responsabilidad sui generis de las entidades de la seguridad social. En su defensa, argumentó que cualquier omisión en el deber de información recaía exclusivamente en las administradoras de fondos privados, sin que fuera posible trasladar dicha responsabilidad a su representada, y sostuvo que el demandante no demostró vicios del consentimiento que justificaran la declaratoria de ineficacia solicitada. Además, enfatizó que las actuaciones de la entidad se ajustaron a la

normativa vigente, bajo el principio de buena fe, y que las pretensiones del actor carecían de fundamento jurídico.

En cuanto a la excepción de sostenibilidad financiera del sistema, **Colpensiones** indicó que la procedencia de las pretensiones afectaría gravemente el equilibrio económico del Régimen de Prima Media, poniendo en riesgo el derecho pensional de otros afiliados, en contravención del Acto Legislativo 01 de 2005. También alegó que la excepción de prescripción operaba debido a que el actor no ejerció sus derechos dentro del término legal previsto, lo que imposibilitaba el análisis judicial de sus pretensiones. Respecto a la excepción de responsabilidad sui generis, destacó que, como administradora del Régimen de Prima Media, su rol se encuentra limitado al manejo de las pensiones del sistema público y no abarca omisiones cometidas por terceros.

Finalmente, **Colpensiones** planteó que cualquier omisión en la asesoría debía probarse y no ser presumida, rechazando la aplicación de la carga dinámica de la prueba al presente caso. En virtud de lo anterior, solicitó al juez desestimar las pretensiones del actor, declarar probadas las excepciones planteadas y reiterar que cualquier responsabilidad económica derivada de la declaratoria de ineficacia, de ser procedente, debía ser asumida por las AFP involucradas y no por **Colpensiones**, en defensa del principio de sostenibilidad del sistema pensional.

I.3.2. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (pdf 07)

Porvenir S.A., respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones, presentando las excepciones de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación y restituciones mutuas. En su contestación, argumentó que el traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue realizado de manera libre y consciente, como consta en el formulario de afiliación suscrito, el cual cumple con los requisitos legales y se presume auténtico conforme a las disposiciones normativas. Sostuvo que el actor fue informado de manera suficiente, clara y comparativa sobre las implicaciones de su decisión, descartando cualquier irregularidad o vicio del consentimiento.

En relación con la excepción de prescripción, Porvenir alegó que el demandante dejó transcurrir un término excesivo sin cuestionar el traslado, configurándose la extinción del derecho a reclamar. Además, invocó la buena fe, argumentando que todas las actuaciones de la administradora se ajustaron al marco legal vigente y al principio de confianza legítima en los actos jurídicos suscritos. Porvenir también sostuvo que no existe obligación jurídica exigible a su cargo, planteando la excepción de inexistencia de la obligación, así como la de compensación, en caso de que prosperaran las pretensiones del demandante.

Finalmente, Porvenir presentó la excepción de restituciones mutuas, afirmando que cualquier declaratoria de ineficacia del traslado debería conllevar un restablecimiento patrimonial entre las partes. Por lo anterior, solicitó que se desestimaran las

pretensiones de la demanda y que se declararan probadas las excepciones propuestas, exonerando a la entidad de toda responsabilidad.

I.3.3. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS (pdf 08)

Colfondos S.A., respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones, presentando las excepciones de inexistencia de la obligación, falta de legitimación en la causa por pasiva, buena fe, ausencia de vicios del consentimiento, validez de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y prescripción de la acción. En su contestación, sostuvo que la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue realizada de manera libre, espontánea y en cumplimiento de todos los requisitos legales. Aseguró que no se configuraron vicios del consentimiento, ni situaciones que justificaran la declaratoria de ineficacia pretendida, dado que el actor fue informado de las características, ventajas y desventajas del régimen en el momento de su afiliación.

Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentó que Colfondos no es la entidad responsable de los hechos que sustentan la demanda, destacando que el traslado de régimen y la gestión de los requisitos no recaen en su representada. Además, invocó la excepción de buena fe, afirmando que todas las actuaciones de la administradora se ajustaron a la normativa vigente y se realizaron conforme a los principios de transparencia y lealtad.

Por último, Colfondos planteó la excepción de prescripción de la acción, al considerar que el término legal para cuestionar la afiliación al RAIS ya había transcurrido, y advirtió que la ratificación del demandante al continuar cotizando durante más de dos décadas refuerza la validez del acto jurídico. En virtud de estas razones, solicitó que se declararan probadas las excepciones propuestas y se absolviera a la entidad de cualquier responsabilidad en el presente proceso.

I.3.4. SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (pdf 10)

Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones y presentando las excepciones de no participación ni intervención en el momento de la selección del régimen, asesoría particular al afiliado, inhabilidad para traslado de régimen, configuración de reintegro de prima de seguro previsional, compensación, prescripción de la acción y buena fe. En su contestación, afirmó que no tuvo participación directa ni responsabilidad en el acto inicial de selección del régimen por parte del demandante y que, en consecuencia, cualquier falta en la información o asesoría no podía ser atribuida a su representada. Sostuvo que todas sus actuaciones se ajustaron a las exigencias legales aplicables y que el traslado se realizó cumpliendo con los requisitos normativos.

Respecto a la excepción de prescripción, **Skandia** señaló que el demandante dejó transcurrir un término considerable sin ejercer acciones para cuestionar su traslado, configurándose la extinción del derecho conforme a los plazos establecidos en la ley. Además, invocó la excepción de compensación, argumentando que, de ser

procedentes las pretensiones del demandante, debería realizarse un ajuste patrimonial recíproco que contemplara las obligaciones económicas de ambas partes. Asimismo, alegó que, en caso de una declaratoria de ineficacia, sería necesario aplicar la excepción de configuración de reintegro de prima de seguro previsional, dado que los recursos utilizados para cubrir la cobertura previsional no podrían ser restituidos sin un ajuste en los términos de la afiliación.

Finalmente, **Skandia** destacó que actuó bajo el principio de buena fe, asegurando que las decisiones del afiliado y las gestiones realizadas por su representada estuvieron enmarcadas en la normativa vigente. Por estas razones, solicitó que se declararan probadas las excepciones propuestas y que se absolviera a Skandia de toda responsabilidad frente a las pretensiones del demandante.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 15 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia proferida el 5 de julio de 2024, resolvió declarar la ineficacia del traslado del régimen pensional realizado por el señor William Hernando Benavides Sarmiento. En virtud de esta decisión, ordenó su retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, entidad que deberá recibirlo nuevamente como afiliado, procediendo a la actualización de su historia laboral. Adicionalmente, se dispuso que Skandia Pensiones y Cesantías S.A. traslade la totalidad de los recursos existentes en la cuenta de ahorro individual del demandante, junto con los rendimientos, frutos, intereses y el porcentaje correspondiente a la garantía de pensión mínima.

El despacho absolvió a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. de todas las pretensiones formuladas en su contra, declarando probada a su favor la excepción de inexistencia de la obligación, al determinar que esta administradora actuó únicamente como un ente de tránsito entre regímenes pensionales, limitándose a cumplir con la transferencia de los recursos en los términos exigidos por la normativa. No obstante, se condenó en costas a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías y a Skandia Pensiones y Cesantías S.A., imponiéndoles el pago de agencias en derecho, fijadas en tres salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de estas entidades, al encontrar que su actuación careció de la diligencia requerida para garantizar el cumplimiento del deber de información.

En sus consideraciones, el operador judicial destacó que el traslado de régimen pensional realizado por el demandante no estuvo precedido de un consentimiento verdaderamente informado, dado que las administradoras de fondos de pensiones involucradas no acreditaron haber cumplido con el deber de asesoría integral y cualificada exigido por el Decreto 720 de 1994 y las disposiciones subsiguientes. Se enfatizó que dicho deber no se agota en la entrega formal de formularios o documentos, sino que comprende una obligación constante de suministrar información amplia, suficiente y oportuna durante toda la vinculación del afiliado, especialmente en lo relacionado con los riesgos inherentes al régimen de ahorro individual. En este contexto, el juzgado concluyó que la omisión de este deber vulneró

el derecho fundamental a la seguridad social del demandante, haciendo necesario el restablecimiento de su situación al régimen público de pensiones.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDADA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (min 00:48:40 video 24)

El apoderado de Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando a los honorables magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá su revocatoria en su integridad, fundamentando su petición en tres argumentos principales. En primer lugar, manifestó su desacuerdo con la no aplicación de la prohibición legal contenida en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, la cual impide el traslado de régimen a los afiliados que se encuentren a menos de diez años de cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de vejez. Sostuvo que dicha norma no vulnera los derechos fundamentales ni pensionales del demandante, ya que este sería pensionado en uno u otro régimen al cumplir los requisitos legales, enfatizando que su aplicación no tiene carácter prescriptivo ni extintivo de derechos.

En segundo lugar, el apelante cuestionó la valoración probatoria realizada en la sentencia, afirmando que las pretensiones del demandante no se basan en una vulneración al deber de información, sino en su inconformidad con el valor proyectado de su mesada pensional. Argumentó que, aunque corresponde a los fondos privados demostrar el cumplimiento de dicho deber, en este caso no se configuró falta alguna, ya que no se aportaron pruebas que acreditaran omisiones en la asesoría brindada al demandante. Según el apoderado, la sentencia confunde el descontento del demandante con una presunta falta de información, cuando en realidad esta no se encuentra acreditada en el expediente.

Finalmente, el apoderado señaló que, si bien la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la ineficacia del traslado en casos de incumplimiento del deber de información, este criterio no es aplicable al caso concreto, pues no se demostró tal incumplimiento. Con base en estos argumentos, solicitó a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que revocaran la decisión y absolvieran a Colpensiones de las pretensiones incoadas en su contra.

SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (min 00:51:17 video 24)

El apoderado de Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. interpuso recurso de apelación parcial contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, específicamente respecto del numeral cuarto, que impone condena en costas a su representada. Fundamentó su recurso en dos argumentos principales. En primer lugar, señaló que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y al precedente establecido en la sentencia SU-107, el análisis sobre la ineficacia del traslado de régimen pensional debe centrarse en las

circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon el acto jurídico de traslado, del cual Skandia no participó directamente. En este sentido, argumentó que, al no haber intervenido en el acto inicial de traslado del régimen, no es jurídicamente procedente imponerle condena en costas, especialmente considerando que su rol en el proceso se limitó a ser una administradora de tránsito en una primera instancia y la entidad afiliadora en una segunda.

En segundo lugar, destacó que el juez de primera instancia fundamentó la declaratoria de ineficacia del traslado en la omisión del deber de información, responsabilidad que corresponde a las administradoras que gestionaron directamente el traslado del demandante. Subrayó que el fallo mismo reconoce que esta carga probatoria no recaía sobre Skandia en tanto no tuvo intervención en el acto jurídico cuestionado, lo que refuerza la improcedencia de la condena en costas.

Adicionalmente, señaló que el proceso no generó un desgaste probatorio significativo para el demandante, dado que gran parte de los hechos y documentos presentados ya se encontraban plenamente acreditados en el expediente.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, el despacho de conocimiento, con auto de 23 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente manera:

SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (pdf 04 y 08 segunda instancia)

En los alegatos presentados por Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., la apoderada sostuvo que su representada no participó ni intervino en el momento de la selección inicial del régimen pensional por parte del demandante, enfatizando que esta decisión fue tomada previamente con otra administradora. Argumentó que, dado este contexto histórico y jurisprudencial, no era procedente imponerle una condena en costas por hechos en los que no tuvo injerencia. Además, alegó que, conforme al principio de carga de la prueba, correspondía al actor demostrar que no recibió la información adecuada al momento del traslado, y destacó que cualquier obligación de información recaía en las administradoras activas al momento de dicha decisión.

Posteriormente, en su solicitud de terminación del proceso, Skandia invocó la figura de la carencia actual de objeto debido a un hecho sobreviniente relacionado con la entrada en vigor del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Argumentó que esta disposición otorga a los afiliados la posibilidad de acceder de manera libre y voluntaria a una doble asesoría que les permita comparar los regímenes pensionales y tomar decisiones informadas, incluso si anteriormente estaban inhabilitados para trasladarse. En este sentido, señaló que el objeto del proceso judicial quedaba superado, pues el demandante podía obtener directamente el traslado de régimen mediante los mecanismos administrativos previstos en dicha ley.

Expone que previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, se declare la terminación del proceso y se disponga la aplicación de esta norma, evitando así una decisión judicial innecesaria.

Adicionalmente, solicitó que no se le impusieran costas, reiterando que su actuación se ajustó al principio de buena fe y que las circunstancias sobrevinientes hacen innecesario un fallo sobre el fondo del litigio.

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES (PDF 05 segunda instancia)

El apoderado de Colpensiones, en los alegatos de conclusión presentados dentro del proceso, solicitó la revocatoria de la decisión de primera instancia, argumentando que el traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se efectuó en pleno ejercicio de su derecho de libre escogencia y con su consentimiento informado. Señaló que, según los documentos aportados y las declaraciones rendidas en el proceso, no se evidenció incumplimiento del deber de información por parte de las administradoras involucradas. Resaltó que la suscripción de los formularios de afiliación reflejaba la voluntad libre y espontánea del demandante de trasladarse de régimen, en respeto de los principios de autonomía y voluntariedad consagrados en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones.

El apoderado también alegó que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la ineficacia del traslado no puede declararse de manera automática, sino que debe estar fundamentada en un perjuicio claro, cierto y específicamente determinable para el afiliado. En este caso, afirmó que no se acreditaron las falencias en la información suministrada ni la inexistencia del consentimiento informado que alegaba el demandante. Por el contrario, argumentó que la insatisfacción del actor con el valor proyectado de su mesada pensional no constituye un motivo válido para invalidar el traslado, especialmente cuando este ha cotizado al RAIS por más de dos décadas con pleno conocimiento de las condiciones y requisitos del régimen.

Finalmente, destacó que la sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional cuestionó el precedente jurisprudencial que impone cargas probatorias desproporcionadas a las administradoras de pensiones y enfatizó la necesidad de

valorar las pruebas bajo las reglas de la sana crítica. Con base en estos argumentos, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, declarando válido el traslado del demandante al RAIS y absolviendo a Colpensiones de las pretensiones formuladas en su contra. Subsidiariamente, pidió que se revocara cualquier condena en costas o agencias en derecho, invocando el principio de buena fe y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales por parte de su representada.

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (pdf 06 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión presentados por la apoderada de Porvenir S.A., se solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia en todos sus términos, destacando que su representada fue absuelta de las pretensiones formuladas en su contra. La apoderada argumentó que el demandante suscribió de manera voluntaria y consciente el formulario de afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) administrado por Porvenir, cumpliendo con los requisitos legales y normativos vigentes. Señaló que, además de ser un acto jurídico válido, la vinculación de la parte demandante con Porvenir se limitó a un traslado horizontal dentro del RAIS, sin que existieran obligaciones pendientes a cargo de la administradora.

Adicionalmente, fundamentó su posición en el principio de libertad de elección reconocido en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, destacando que este derecho incluye la facultad del afiliado para escoger el régimen pensional al que desea pertenecer, decisión que en este caso fue informada y libre. También argumentó que, conforme a la jurisprudencia constitucional y laboral, no existieron pruebas que acreditaran incumplimientos en el deber de información al demandante durante su afiliación a Porvenir, reafirmando que el traslado de recursos a la siguiente administradora se realizó en cumplimiento de la normativa aplicable.

Finalmente, la apoderada de Porvenir resaltó que su rol en el caso se limitó a actuar como administradora de tránsito y que la vinculación del demandante con su representada no generó perjuicio alguno que ameritara la declaratoria de ineficacia del traslado. Por lo anterior, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá confirmar la sentencia de primera instancia, reiterando la inexistencia de obligaciones a cargo de su representada y la improcedencia de cualquier condena en su contra.

WILLIAM HERNANDO BENAVIDES SARMIENTO (pdf 07 segunda instancia)

La apoderada del señor William Hernando Benavides Sarmiento, en sus alegatos de conclusión, solicitó confirmar el fallo de primera instancia que declaró la ineficacia del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Fundamentó su petición en el incumplimiento por parte de las administradoras demandadas del deber legal de información consagrado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 720 de 1994, el cual exige asesoría integral, suficiente y personalizada para garantizar decisiones informadas sobre traslados de régimen pensional. Afirmó que la ausencia de dicha información vulneró el derecho

fundamental a la seguridad social del demandante, configurándose una causal suficiente para declarar la ineficacia del acto jurídico.

Asimismo, señaló que las pruebas documentales y testimoniales presentadas demostraron que los formularios de afiliación suscritos no constituyen evidencia de un consentimiento informado, dado que no reflejan un análisis adecuado de la situación particular del demandante ni explican los riesgos inherentes al RAIS. Rechazó los argumentos de las demandadas sobre la inexistencia de perjuicio, subrayando que el impacto de la decisión judicial debe valorarse en términos de la protección efectiva de derechos fundamentales y no desde perspectivas financieras o administrativas. Por lo tanto, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que confirmara íntegramente la sentencia apelada.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por las partes demandadas y el grado jurisdiccional de consulta.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada, y otorgado en favor de la demandada, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el traslado efectuado por el demandante del RPM al RAIS resulta ineficaz, y de salir avante tal declaración se procederá a verificar cuáles son las consecuencias jurídicas que tal declaratoria de ineficacia conllevaría.

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del análisis fáctico y probatorio del presente litigio, resulta indispensable delimitar los hechos que, por su naturaleza incontrovertida, no requieren de mayor análisis, así como aquellos que, por su controversia, constituyen el núcleo de la Litis y deberán ser objeto de valoración jurídica por parte del despacho. Esta distinción no solo facilita la precisión en la conducción del proceso, sino que también permite centrar el debate en los puntos neurálgicos de la controversia, conforme al principio de economía procesal y al mandato de garantizar una resolución justa y expedita.

No son objeto de controversia los siguientes hechos: (i) la afiliación inicial del señor William Hernando Benavides Sarmiento al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones; (ii) su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en virtud de un primer acto de afiliación a Colfondos en junio de 1996, seguido de traslados sucesivos a Skandia en enero del 2008, Horizonte (ahora Porvenir S.A.) en noviembre del 2012 y nuevamente a Skandia en junio del 2013, según consta en los formularios de afiliación aportados; (iii) la validez formal de dichos documentos en cuanto a la suscripción y recepción por parte de las administradoras de pensiones; y (iv) el hecho de que el demandante alcanzó 656 semanas cotizadas al momento de su traslado inicial al RAIS, continuando actualmente como afiliado de este régimen bajo la administración de Skandia.

Por el contrario, subsisten como aspectos objeto de controversia: (i) la verificación del cumplimiento del deber de información cualificada por parte de las administradoras demandadas, el cual implica la entrega de asesoría amplia, suficiente y oportuna respecto de los beneficios, riesgos y características inherentes a los regímenes pensionales; (ii) la existencia de vicios en el consentimiento del demandante al momento de los traslados, derivados de la presunta omisión de dicho deber de información; (iii) la procedencia de las excepciones propuestas por las demandadas, tales como la prescripción de la acción, la falta de legitimación en la causa y la inexistencia de la obligación; y (iv) la responsabilidad que podría recaer sobre las administradoras por el presunto impacto negativo en los derechos pensionales del demandante, particularmente en relación con su congrua subsistencia y la protección de su seguridad social.

Esta distinción preliminar permite encauzar el análisis hacia la determinación de si el traslado al RAIS estuvo acompañado de las garantías mínimas legales y constitucionales, así como si concurren los presupuestos jurídicos para declarar su ineficacia y, en consecuencia, restablecer la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Sobre el deber de información al surtirse el traslado de régimen pensional

Sentado lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021, SL 509 de 2024 y SL 2999 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales

de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 "*…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…"*, lo cual hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el

		asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, pues frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas.

Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.

(…)

También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía

trasladarse.

También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

De este modo, habida cuenta de que el accionante, conforme a la respuesta del derecho de petición radicado por el demandante con radicado 220413-000270 del 19 de abril del 2022 y a la solicitud de vinculación con n° 725461 del 01 de junio de 1996 (archivo 02, folio 177-180) , efectuó su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en junio de 1996, a través de la AFP Colfondos S.A., y atendiendo tanto los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL 2999 de 2024) como los desarrollos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024 la carga probatoria recae sobre la administradora de fondos de pensiones para demostrar que el traslado de régimen fue adoptado por el afiliado de manera libre y voluntaria, habiéndole proporcionado información suficiente, veraz y comprensible acerca de las características, condiciones de acceso, implicaciones y riesgos inherentes a cada uno de los regímenes pensionales disponibles.

Sobre la carga de la prueba – frente al cumplimiento del deber de información

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar en este caso que al demandante al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de la AFP demandada, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Empero dicha postura, fue modulada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS..."

Así pues, al sopesarse los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Corte Constitucional en la decisión previamente referida, se advierte que, en el caso sub examine, se arribaría a la misma conclusión a la que llegó el a quo, esto es, la procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

Caso concreto

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala concluye que no existe en el plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento cabal del deber de información por parte de la AFP Colfondos al momento del traslado del demandante del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), pues los formularios aportados por las demandadas, no son tan siquiera prueba somera del cumplimiento al deber de información que les acaecía.

Aunado a lo antes expuesto, resulta improcedente la tesis esgrimida por la parte demandada, según la cual la permanencia del demandante en el RAIS convalida el traslado inicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en las sentencias SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, ha reiterado que los traslados horizontales entre AFP del mismo régimen no subsanan la falta de información en el momento del traslado inicial desde el RPM. El análisis central en estos litigios radica en verificar si, al momento del traslado, el afiliado recibió una información adecuada que le permitiera tomar una decisión consciente y fundamentada, y no en evaluar su permanencia posterior en el RAIS ni los deberes adquiridos como afiliado (CSJ SL1055-2022).

De otro lado, debe destacarse que el argumento de la AFP demandada, relativo a que la sola firma del formulario de afiliación implica una manifestación libre y voluntaria

de voluntad por parte del afiliado, es insuficiente para cumplir con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.). En este contexto, incumbía a Colfondos S.A. demostrar que el asesor de servicios responsable de la afiliación cumplió con el deber legal de brindar una asesoría integral, proporcionando al afiliado una información comprensible y exhaustiva. La falta de acreditación de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que el traslado no se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables atrás vertidos.

En síntesis, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T. y S.S.), que faculta al juzgador para formar libremente su convicción mediante una apreciación integral y crítica del acervo probatorio, esta Sala concluye que la decisión del demandante de trasladarse al RAIS adolece de los elementos de validez derivados de una elección consciente, autónoma e informada. No se encuentra acreditado que el asesor responsable del traslado hubiera desplegado una asesoría adecuada que incluyera una exposición clara y pormenorizada sobre las repercusiones del cambio de régimen, tales como los riesgos inherentes al RAIS, la necesidad de realizar cotizaciones adicionales, las consecuencias de no cumplir con el capital mínimo requerido para la pensión de vejez, la garantía de la pensión mínima, el régimen aplicable a la devolución de saldos, así como las diversas modalidades pensionales disponibles en el sistema. La omisión de estos aspectos esenciales evidencia un incumplimiento sustancial del deber de información, viciando así la decisión adoptada y afectando el derecho fundamental del afiliado a contar con una orientación precisa y completa que le permitiera sopesar los riesgos y beneficios de manera adecuada, conforme a los estándares de diligencia exigidos en el marco de la seguridad social integral.

En lo relativo a los efectos jurídicos derivados de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, resulta pertinente acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-107 de 2024, en la cual se señaló:

> "*…En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)*
>
> *(…)*
>
> *y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 327)."*

La decisión en cuestión, cabe señalar, se extiende de manera vinculante a todas las

demandas que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria laboral, según lo establece el ordinal octavo, razón por la cual esta Sala acoge dicho pronunciamiento en su integridad. No obstante, se precisa que se mantendrá la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo que respecta al deber originario de las AFP de proporcionar asesoría integral y adecuada a sus potenciales afiliados, cuya omisión inevitablemente acarrea la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen.

Vale la pena resaltar que la orden emitida respecto a la devolución del porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima no tendrá modificación alguna pese a que la Corte Constitucional indicó que la misma no era factible retornar; lo anterior por cuanto ello beneficia a Colpensiones y la Sala se encuentra vedada hacer más gravosa su situación en el grado jurisdiccional de consulta, como quiera que dicha condena no fue objeto de recurso de apelación.

En virtud de lo anterior, se procederá a confirmar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por la demandante, al haber sido cambiado del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Análisis de las Excepciones Propuestas por Colpensiones

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se concluye que estas carecen de soporte jurídico para prosperar dentro del contexto del presente litigio. Respecto de la inoponibilidad de la responsabilidad derivada de las AFP privadas, debe señalarse que las consecuencias inherentes a la declaratoria de ineficacia del traslado, así como la afiliación originaria del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), imponen a Colpensiones la obligación de readmitirlo como afiliado. Este deber encuentra sustento en la normativa vigente y en los principios rectores de solidaridad y eficiencia que gobiernan el sistema de seguridad social integral. Aunque Colpensiones no tuvo participación directa en el acto jurídico de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), su posición como administrador del régimen inicial establece un vínculo jurídico ineludible que la obliga a asumir las consecuencias legales del restablecimiento del derecho pensional del demandante.

En lo concerniente a la excepción de inexistencia de la obligación resulta improcedente, ya que las responsabilidades de Colpensiones derivan directamente de su rol en la administración del RPM, así como de los efectos legales que emanan de la afiliación originaria del demandante. Asimismo, el principio de **buena fe**, si bien invocado por Colpensiones, no opera como un mecanismo eximente de las responsabilidades inherentes a su condición de entidad garante del derecho fundamental a la seguridad social. Finalmente, la excepción de **compensación** resulta inaceptable, en la medida en que no se configura una relación obligacional recíproca susceptible de extinguirse mediante este mecanismo, especialmente cuando se trata de derechos de carácter irrenunciable y vinculados al núcleo esencial del sistema de seguridad social.

De la excepción de prescripción

En lo que atañe a la excepción de prescripción planteada, se concluye que este medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, puesto que la determinación del régimen pensional al cual se encuentra adscrita la demandante constituye un requisito sine qua non para la estructuración del derecho pensional, lo que implica que, al hallarse dicho derecho en fase de consolidación, su exigibilidad resulta jurídicamente inviable. En este contexto, la acción que le asiste al afiliado para solicitar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen carece de prescriptibilidad, según ha sido reiteradamente precisado por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en pronunciamientos como las sentencias SL 3937-2018, SL 1688-2019 y SL 1949-2021.

En consecuencia, las excepciones propuestas por Colpensiones deben ser desestimadas en su totalidad, confirmando su obligación de garantizar el retorno pleno del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, así como de asumir las responsabilidades legales y administrativas necesarias para la protección efectiva de sus derechos fundamentales.

Sobre la Imposición de Costas a Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A.

El instituto de las costas procesales, consagrado en el artículo 361 del Código General del Proceso (C.G.P.), en concordancia con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T.S.S.), constituye una herramienta jurídica orientada a garantizar la reparación de los gastos razonables en que incurre la parte triunfante en el marco de un litigio, como resultado directo de la actuación procesal de la parte vencida. Este precepto no solo busca resarcir los costos derivados de la defensa de los derechos del litigante victorioso, sino que también desempeña una función disuasiva frente a actuaciones procesales carentes de fundamento o abiertamente temerarias, contribuyendo al principio de eficiencia y celeridad en la administración de justicia.

La Corte Suprema de Justicia, en múltiples pronunciamientos, ha señalado que la imposición de costas encuentra su justificación en el principio de reparación integral y en la necesidad de preservar el equilibrio entre las partes procesales, obligando a quien ha resultado vencido a asumir las consecuencias económicas de su actuación en el proceso.

En el caso sub examine, Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. fue vencida en sus pretensiones al haberse demostrado que incumplió el deber de información cualificada exigido normativamente, elemento determinante para declarar la ineficacia del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. En este contexto, la imposición de costas resulta no sólo procedente, sino también imperativa, dado que su actuación procesal, además de carecer de sustento probatorio suficiente, generó un desgaste innecesario en la actividad judicial y en los recursos del demandante.

Por lo tanto, conforme al marco normativo aplicable y en atención al principio de reparación económica a favor de la parte vencedora, este despacho considera que es jurídicamente procedente imponer las costas del proceso a Skandia S.A., incluidas las agencias en derecho, en cuantía que será determinada de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 365 del C.G.P., en aras de garantizar una justa compensación por los gastos razonables asumidos por la parte demandante en la defensa de sus derechos.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por las partes demandadas, se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo lo la sentencia proferida el día 05 de julio del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** y **SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A**.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 053.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Ríos B.

Diana Martinez M.

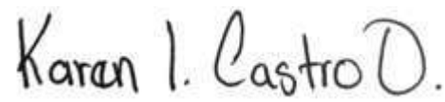
DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente COLPENSIONES y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de uno y medio (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	REINALDO ROJAS PEÑA Y ANA MARLEN PINILLA GONZLEZ
Parte demandada	PORVENIR S.A.
Radicación	11001310500620190061801
Fecha de la decisión	23 DE JUNIO DE 2023
Motivo	CONSULTA
Tema	PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE
Acta de Discusión	066
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310500620190061801

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere sentencia en forma escrita y procede a resolver el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante, con ocasión de la sentencia proferida el día 23 de junio de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

Los señores REINALDO ROJAS PEÑA y ANA MARLEN PINILLA GONZÁLEZ, actuando a través de su apoderado judicial, presentaron demanda laboral contra el fondo de pensiones PORVENIR S.A., pretendiendo el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente tras el fallecimiento de su hijo CRISTIAN CAMILO ROJAS PINILLA Q.E.P.D, y en consecuencia condenar a Porvenir al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente desde la fecha del fallecimiento del causante, al pago del retroactivo correspondiente, los intereses moratorios y las costas del proceso.

Para sustentar sus pedimentos, expusieron que su hijo falleció el 11 de septiembre de 2018 (fol 36), dejando cumplidos los requisitos legales establecidos en la Ley 100 de 1993 para que ellos fueran beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta que era soltero, no tenía hijos y ellos dependían económicamente de él.

Alegaron que el causante cotizó al sistema de pensiones un total de 226 semanas de forma ininterrumpida (fols 21-24), habiendo trabajado como independiente hasta agosto de 2018; sin embargo, el Fondo de Pensiones Porvenir S.A. negó el reconocimiento de la pensión mediante comunicación fechada del 22 de marzo de 2019 (fols. 19-20), por no haberse demostrado dependencia económica.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, admitió y corrió traslado de la demanda mediante Auto de 29 de agosto de 2019 (fols 38-39 pdf 01), para finalmente tener por contestada la demanda por medio de curador *ad litem* de la demandada Porvenir, con auto del 18 de julio de 2022 (pdf 12)

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

PORVENIR S.A. (pdf 11)

En su contestación, la entidad demandada, representada por su curador *ad litem*, se opuso a las pretensiones de los demandantes, proponiendo como excepciones las que denominó como *cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa, pago por compensación y retribución a los demandantes,* argumentando que la parte actora no logró demostrar la dependencia económica que exigían los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003.

La demandada aceptó algunos hechos como la afiliación del causante al sistema de pensiones y el tiempo de cotización de 226 semanas, pero se opuso a las afirmaciones sobre la dependencia económica, señalando que las pruebas aportadas, como declaraciones extrajuicio, eran insuficientes. Asimismo, indicó que los padres del causante habían declarado ser trabajadores independientes, lo que reflejaba que tenían recursos propios para su sustento.

Finalmente, destacó que el fondo ya había realizado un pago de $2.500.000 a los demandantes, correspondiente a valores compensatorios tras la muerte del causante.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 22 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, la operadora judicial a cargo del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, en audiencia de juzgamiento llevada a cabo el 23 de junio de 2023, decidió absolver al Fondo de Pensiones Porvenir S.A. de las pretensiones presentadas por los demandantes, considerando que no se demostró la dependencia económica que exige el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificado por la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Para arribar a su decisión, la Juzgadora de instancia tuvo en cuenta la documentación y los testimonios aportados, por los cuales se demostró que el causante, falleció el 11 de septiembre de 2018 y cumplía con las semanas de cotización requeridas por el

artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la controversia se centró en la dependencia económica de los demandantes respecto del causante. En este aspecto, el juzgado recordó la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia C-111 de 2006, que eliminó el requisito de dependencia económica "*total y absoluta*", dejando a los jueces determinar si los padres son económicamente autosuficientes con base en un análisis del mínimo vital cualitativo.

Asimismo, tuvo en cuenta los testimonios de la señora ESTELA CASTIBLANCO GÓMEZ y ALFONSO IGNACIO ROJAS JIMÉNEZ, quienes afirmaron que los progenitores del causante dependían económicamente de él; sin embargo, estos testimonios fueron cuestionados por la *A Quo* dada su inconsistencia y falta de conocimiento directo de los hechos, así como contradictorios.

El Juzgado concluyó que no se probó de manera suficiente la dependencia económica relevante de los demandantes frente al causante. Además, que los testimonios no ofrecían certeza, y no se aportaron otros medios probatorios que superaran estas deficiencias.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón del grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante, en dicho sentido, el despacho de conocimiento, con Auto de 22 de enero de 2024 (pdf 03 segunda instancia), dispuso admitir el grado jurisdiccional de consulta, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la parte demandante se refirió así:

DEMANDANTE (pdf 04 segunda instancia)

En los alegatos, la parte demandante argumentó que el fallo de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas, ignorando que los padres del causante dependían económicamente de él. Sostuvo que las inconsistencias en los montos declarados por los testigos no desvirtúan dicha dependencia, ya que la Corte Constitucional eliminó el requisito de dependencia "total y absoluta" (sentencia C-111 de 2006).

Destacó la precaria situación económica de los demandantes, con ingresos variables como vendedor ambulante y Ana Marlen Pinilla incapacitada por trastorno esquizoafectivo. Solicitó al Tribunal revocar la sentencia, reconocer la pensión de sobreviviente desde el fallecimiento del causante, con retroactivo e intereses, y enfatizó que los aportes del causante fueron esenciales para la subsistencia familiar.

III. CONSIDERACIONES

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se logró demostrar la dependencia económica de los padres en relación a su hijo fallecido?, y en caso afirmativo ¿es procedente conceder la pensión de sobreviviente, el retroactivo y los intereses moratorios a favor de la parte demandante?

1. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS (pdf 01 primera instancia)

No son objeto de discusión los siguientes hechos, pues se encuentran demostrados en el plenario, (i) los demandantes REINALDO ROJAS PEÑA y ANA MARLEN PINILLA GONZÁLEZ acreditaron la calidad de padres del causante CRISTIAN CAMILO ROJAS PINILLA Q.E.P.D (fols. 29-30); (ii) que el causante cotizó un total de 226 semanas (fols 21-25); (iii) que el causante falleció el 11 de septiembre de 2018 (fol 36); y (iv) que Porvenir negó la pensión de sobrevivientes a los aquí demandantes (fols 19-20)

DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES PARA LOS PADRES

Al respecto, el artículo 73 de la Ley 100 de 1993, señala los requisitos y monto de la prestación objeto de análisis, así:

> *"Los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes en el régimen de capitalización individual con solidaridad, así como su monto, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos 46 y 48, de la presente Ley."*

De esa forma, el artículo 46 *ibidem*, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, indica en su numeral 2º que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

> *"2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:"*

Adicionalmente, el artículo 74 del mismo compendio normativo, modificado por artículo 13 de la Ley 797 de 2003 en su literal d), estableció al respecto:

> *ARTÍCULO 74. BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:*
> *"(...)*
> *d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de este".*

De lo expuesto, resulta diáfano, que los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes, implican que el afiliado fallecido debe acreditar cincuenta (50) semanas de cotización en los últimos tres años anteriores a su fallecimiento, y que

sus beneficiarios, para el caso sus padres, acrediten la dependencia económica respecto de su hijo fallecido.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en Sentencia SL964-2023, señaló:

> *"En punto a la dependencia económica que exige el literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para tener por beneficiarios de la pensión de sobrevivientes a los ascendientes del causante, como con acierto lo asentó el Tribunal, de tiempo atrás esta Corporación ha adoctrinado, que ella no implica una sujeción total y absoluta del posible beneficiario a los ingresos económicos que percibía del causante, por manera que no excluye la existencia de distintas fuentes de recursos, propios o provenientes de otras personas, pues no es necesario que se encuentre en estado de pobreza o indigencia (sentencias CSJ SL400-2013 y CSJ SL3630-2014, entre muchas otras). Así quedó definido, además, en el fallo CC C111-2006, que declaró inexequible la expresión «…de forma total y absoluta…» contenida en la versión original de la mencionada disposición.*
> *"Ahora bien, la carga de la prueba de la dependencia económica corresponde a quien la alega, en este caso el padre de la afiliada fallecida, y el convocado deberá desvirtuar esa sujeción material, mediante el aporte de los medios de convicción que acrediten la autonomía financiera del progenitor (CSJ SL, 24 nov. 2009, rad. 36026).*
> *"Además, el cumplimiento de la consabida exigencia debe ser verificado en cada caso concreto, por lo que deben valorarse las particularidades de quienes la alegan, en relación con la contribución que recibían del causante y su incidencia en la atención de sus necesidades básicas, en condiciones de dignidad y suficiencia."* (Subrayado por fuera)

La misma Corporación, en Sentencia SL1273-2023, se refirió respecto a la autosuficiencia económica de los padres, y la prueba de lo aportado por el hijo fallecido, al expresar:

> *"Al margen del carácter fáctico de la acusación, es menester precisar que la subordinación financiera no requiere ser absoluta, pero debe acreditarse que el padre o madre reclamante, recibía una contribución significativa de su hijo fallecido. Esta Sala de la Corte tiene adoctrinado, que la dependencia económica de los padres no está supeditada a la prueba de un nivel de pobreza extrema que roce con la mendicidad, pues el hecho de recibir ingresos de otra fuente no desvirtúa la subordinación, siempre que no los convierta en autosuficientes (CSJ SL1168-2019)."*
> *(…)*
> *"Además esta Corporación ha enseñado, entre otras sentencias CSJ SL18980-2017 y CSJ SL3113-2018 que no resulta trascendental demostrar «[…] a cuánto ascendían los recursos y gastos del causante» y, en la CSJ SL3721-2020, que «[…] para la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, no es necesario acreditar el monto exacto de lo aportado por el causante»."*

Así mismo, en Sentencia SL5027 de 2021, al memorar lo adoctrinado por esa misma Corporación en proveídos CSJ SL14923-2014 y CSJ SL1448-2020, sobre la acreditación de la dependencia económica, recordó lo siguiente:

"De lo dicho se sigue que la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta, esto es, que se tiene que demostrar efectivamente el suministro de recursos de la persona fallecida hacia el presunto beneficiario, y no se puede construir o desvirtuar a partir de suposiciones o imperativos legales abstractos como el de la obligación de socorro de los hijos hacia los padres; ii) la participación económica debe ser regular y periódica, de manera que no pueden validarse dentro del concepto de dependencia los simples regalos, atenciones, o cualquier otro tipo de auxilio eventual del fallecido hacía el presunto beneficiario; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste; por lo que, tales asignaciones deben ser proporcionalmente representativas, en función de otros ingresos que pueda percibir el sobreviviente, de tal manera que si, por ejemplo, recibe rentas muy superiores al aporte del causante, no es dable hablar de dependencia." (Subraya por fuera)

Ahora, descendiendo al sublite, es menester recordar, que los demandantes solicitaron ante la entidad aquí demandada, el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes dejada por su hijo, quien falleció el 11 de septiembre de 2019, la que fue negada por la sociedad convocada a juicio, aduciendo que no le asistía derecho a su reconocimiento por no haberse superado el requisito de dependencia económica respecto al causante (fols 19-20 pdf 01 primera instancia)

De tal manera, como no es tema de discusión el requisito del cúmulo de semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores, como requiere la norma, este Tribunal pasa a realizar un estudio minucioso de las pruebas obrantes en el proceso, tanto documentales como las testimoniales allegadas al proceso para deducir la condición de beneficiarios o no de la pensión por parte de los actores.

Para ello, se cuenta inicialmente en el acervo probatorio con el interrogatorio rendido por los demandantes, donde se extrae que el señor Reynaldo Rojas Peña, manifestó que se dedicaba al comercio independiente, específicamente a la venta de productos de lencería, con ingresos variables que dependían de las ventas, oscilando entre $700,000 y $1.000,000 mensuales antes del fallecimiento de su hijo, reconociendo que no tenía un ingreso fijo y que las ventas eran impredecibles. Detalló que su hijo les ayudaba económicamente, con montos entre $200,000 y $500,000, destinados a cubrir necesidades familiares como alimentos y otros gastos del hogar, y para sus hermanos, explicando que tienen 6 hijos. Además, indicó que la ayuda era frecuente y se daba en forma de dinero o compras directas en supermercados.

Por otra parte, del interrogatorio rendido por ANA MARLENE PINILLA GONZÁLEZ resulta importante resaltar que afirmó que no participaba en las actividades económicas de su esposo debido a una enfermedad de bipolaridad que, según mencionó, padecía desde hacía más de 10 años, lo que la limitaba para trabajar. Confirmó que no tenía ingresos propios y que su hijo contribuía al sostenimiento familiar, principalmente con aportes económicos que variaban entre $50,000,

$200.000 y $500.000, lo que él podía, así como compras de alimentos y útiles escolares para sus hermanos. Resaltó que sus otros 6 hijos estudiaban y trabajaban, sin capacidad para aportar económicamente a sus padres.

De los interrogatorios de parte, resulta acertado concluir que ambos coincidieron en que la contribución de su hijo era esencial para la estabilidad económica del hogar, señalando que sus ingresos propios como pareja eran escasos e irregulares; sin embargo, para esta Sala, sus declaraciones no establecieron con claridad la magnitud o regularidad del aporte del causante, ni lograron demostrar una dependencia económica, pues ambos refirieron que los aportes realizados oscilaban entre $200.000 y $500.000 pesos, y que con estos cubrían parte de los gastos familiares, como útiles escolares o mercados, por lo que, dichos aportes, comparados con los ingresos que el padre del causante estableció, por la venta de lencería como independiente, que era entre $700.000 a $1.000.000, no resultan ser significativos para concluir tal dependencia. Además, señala la Sala que las partes no pueden construir prueba a su favor mediante sus propios interrogatorios, dado que la finalidad de estos es obtener confesiones sobre hechos que les resulten adversos, y no generar elementos probatorios en su propio beneficio.

Ahora, al escuchar los testimonios de los deponentes traídos por la parte demandante, así como las declaraciones extraproceso rendidas de estos, se extrae que el señor ALFONSO IGNACIO ROJAS JIMÉNEZ declaró conocer a la familia Rojas Pinilla por vínculo familiar, afirmando que CRISTIAN CAMILO ROJAS PINILLA Q.E.P.D, era un apoyo económico importante para sus padres, indicando que Cristian vivía con ellos y contribuía al hogar, aunque desconocía los montos exactos. Señaló que el padre del fallecido era vendedor ambulante con ingresos moderados y que la familia enfrentaba dificultades económicas. Comentó que los padres demandantes estaban afiliados al SISBÉN y no recibían apoyos adicionales.

Luego, con el testimonio de la señora ESTELA CASTIBLANCO GÓMEZ quien declaró conocer a la familia Rojas Pinilla desde hacía 14 años, afirmó que CRISTIAN CAMILO ROJAS PINILLA Q.E.P.D., ayudaba económicamente a sus padres, aunque basó esta afirmación en comentarios de ellos, asimismo refirió que la madre no trabajaba debido a problemas de salud y que los ingresos familiares del señor Rojas como vendedor ambulante, no eran suficientes. Y no pudo precisar los aportes económicos de Cristian a la familia.

Con estos dos testimonios, que además de ser considerados de oídas, por cuanto su dicho no les consta, sino que proviene de comentarios no ofrecieron mayor claridad de la dependencia que aquí se predica, máxime cuando del interrogatorio realizado a los demandantes, se extrae que no hubo tal dependencia, sin que se haya demostrado de forma clara y fehaciente el valor del aporte y su periodicidad.

Por todo lo anterior, la Sala estima que no hay pruebas que den cuenta de la dependencia económica requerida, de los demandantes con el causante, razón por la cual no hay razón para fustigar la sentencia de primera instancia, y, en consecuencia, la misma se confirmará.

2. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Sin costas en esta instancia, dado el grado jurisdiccional de consulta en favor de la parte demandante.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,** Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 23 de junio de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO. SIN LUGAR A CONDENA en costas.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 066.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De Los Ríos B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	JULIAN VILLARUEL TORO
Parte demandada	COLPENSIONES
Radicación	11001310500720220054701
Fecha de la decisión	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Motivo	APELACION
Tema	RELIQUIDACION PENSION
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310500720220054701
No. de Acta	044

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita, y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la Sentencia proferida el 06 de septiembre de 2024, por el Juzgado Cuarenta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

El señor JULIÁN VILLARRUEL TORO instauró demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, solicitando que se condenara a la entidad demandada a reliquidar y pagar su pensión de vejez en el tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV) para el año 2022, equivalentes a $25.000.000, argumentando que sus aportes pensionales fueron realizados sobre un Ingreso Base de Liquidación (IBL) de 40,63 SMLV. Como pretensión subsidiaria, se requirió que la pensión fuera reconocida en $16.000.000, efectiva a partir del 1 de enero de 2022, basándose en un IBL de 25 SMLV y con una tasa de reemplazo del 64 %, además de exigir, de manera subsidiaria, la devolución de los aportes pagados en exceso. Asimismo, solicitó que la pensión se reajuste a partir del 1 de enero de 2023 y en los años subsiguientes conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, el reconocimiento y pago de las diferencias en las mesadas pensionales junto con su respectiva indexación, la condena al pago de intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la mencionada ley, y una condena extra y ultra petita, y el pago de las costas y agencias en derecho.

Para sustentar sus pedimentos, relató que nació el 06 de mayo de 1959 (fol 3), que se encontraba afiliado al régimen de prima media con prestación definida desde 1983, hasta finales del año 2021, y que había acumulado un total de 1649 semanas cotizadas (fols 4-19). Expuso que, según lo evidenciado en su historia laboral, los aportes realizados superaron consistentemente el límite de 25 SMLV, alcanzando un promedio mensual de 40,63 SMLV entre diciembre de 2011 y diciembre de 2021. A pesar de esto, mediante la Resolución SUB 33194 de febrero de 2022 (fols 29-36), Colpensiones reconoció su pensión con un IBL de 21 SMLV y una mesada inicial de $13.574.542, misma que fue impugnada por el demandante (fols 37-45), por lo que la entidad, a través de la Resolución DPE 4140 de abril de 2022 (fols 46-65), incrementó la mesada a $13.958.372, manteniendo un cálculo basado en un IBL de 20,64 SMLV y un porcentaje de reemplazo del 64 %.

Por otra parte, expuso que Colpensiones aceptó mes a mes los aportes que excedían el tope máximo de 25 SMLV sin objeción alguna, lo que constituye, según el demandante, una aceptación tácita de los mismos, lo que habría generado un enriquecimiento sin causa por parte de la entidad demandada, al no reflejarse estos valores en el cálculo pensional. Además, destacó que la omisión reglamentaria del Gobierno Nacional respecto al manejo de bases de cotización superiores a 25 SMLV no debería trasladarse como perjuicio a los afiliados que realizaron aportes por montos superiores.

Como fundamentos de sus pretensiones, citó en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, así como en los artículos 13, 18, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003. También se hizo referencia al Acto Legislativo 01 de 2005, que establece el tope máximo pensional de 25 SMLV, y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, que han reiterado dicho límite en favor de la sostenibilidad del sistema pensional.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda, y corrió traslado de la misma a la convocada, mediante Auto del 08 de marzo de 2023 (pdf 04), luego, tuvo por contestada la demanda por parte de demandada Colpensiones mediante providencia del 17 de octubre de 2023 y ordenó remitir el expediente al Juzgado Cuarenta y Dos Laboral del Circuito, teniendo en cuenta la redistribución de procesos que se ordenó mediante Acuerdo CSJBTA23-15 del 22 de marzo de 2023 (pdf 10)

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. CONTESTACIÓN COLPENSIONES (PDF 07)

En la contestación de demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones formuladas, presentando como excepciones las que denominó Inexistencia del derecho reclamado; Buena fe; Presunción de legalidad de los actos administrativos; Cobro de lo no debido; No configuración del derecho al pago del IPC, indexación o reajuste alguno; No configuración del derecho al pago de intereses

moratorios o indemnización moratoria; Carencia de causa para demandar y Prescripción.

Argumentó que las decisiones adoptadas por la entidad en torno a la pensión del demandante se ajustaron estrictamente a la normativa vigente, afirmando que el demandante no cumplía con los requisitos legales para acceder a la reliquidación de su pensión en los términos solicitados, ya que los aportes que sustentaban el ingreso base de liquidación (IBL) no superaban el tope máximo de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

También explicó que actuó de buena fe al liquidar la pensión del demandante, aplicando las normas vigentes y las resoluciones que regulan el Sistema General de Pensiones. En apoyo de esta posición, invocó la presunción de legalidad de los actos administrativos que expidió, como las resoluciones SUB 33194 y DPE 4140, las cuales reconocieron y liquidaron la pensión de vejez del señor Villarruel. Según la administradora, estas decisiones fueron adoptadas tras un análisis técnico y jurídico riguroso de las cotizaciones del demandante, tomando en cuenta los límites establecidos para la base de cotización. En consecuencia, sostuvo que no existe fundamento jurídico para acceder a las pretensiones del demandante, ni para ordenar la devolución de los aportes en exceso, dado que dichos valores hacen parte del Fondo Común de Naturaleza Pública y contribuyen a garantizar la sostenibilidad del sistema.

En su análisis de los hechos de la demanda, Colpensiones reconoció algunos como ciertos, como la edad del demandante, su afiliación al régimen de prima media desde 1983 y el número de semanas cotizadas hasta 2021. Sin embargo, negó otros, como la afirmación de que el IBL del demandante superara los 25 SMLMV o que su pensión de vejez debiera ser reliquidada con base en un IBL mayor al reconocido. Argumentó que el cálculo de la pensión se realizó con base en las cotizaciones reales del demandante y en los topes legales aplicables. Asimismo, enfatizó que la normativa vigente no permite calcular pensiones con ingresos base superiores a 25 SMLMV, salvo que exista una reglamentación del Gobierno Nacional que autorice cotizaciones hasta de 45 SMLMV.

La administradora también rechazó las pretensiones relacionadas con el reajuste de la pensión, el pago de intereses moratorios y la indexación de las mesadas, solicitando que se declararan probadas todas las excepciones propuestas y que se desestimaran las pretensiones del demandante en su totalidad, incluyendo el pago de costas procesales. Argumentó que la correcta aplicación de las normas pensionales y la existencia de un sistema limitado por los principios de sostenibilidad y equidad justifican la negativa a reconocer cualquier reliquidación o pago adicional en este caso.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 14 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, la operadora judicial del Juzgado Cuarenta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá, decidió absolver a Colpensiones de todas y cada una de las pretensiones.

Para arribar a su decisión, la jueza, expuso inicialmente que el derecho pensional del demandante estaba regulado por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, y que, de acuerdo con dichas normas, se requería un mínimo de 1300 semanas cotizadas y una edad de 62 años para acceder a la pensión de vejez. Reconoció, además, que el demandante cumplía estos requisitos, habiendo acumulado más de 1657 semanas cotizadas hasta enero de 2022. Sin embargo, resaltó que la legislación vigente imponía un límite tanto al monto máximo de la pensión (25 SMLMV) como a la base de cotización (también 25 SMLMV), lo que resultaba determinante para liquidar la pensión.

La Jueza recordó que, aunque la Ley 100 y sus modificaciones permitieron la cotización sobre ingresos superiores a 25 SMLMV bajo ciertas condiciones, estas disposiciones solo fueron efectivas tras la expedición del Decreto 2322 de 2022, que entró en vigor en noviembre de dicha anualidad. Este decreto estableció que solo podrían cotizarse hasta 45 SMLMV si se cumplían requisitos macroeconómicos específicos, los cuales no aplicaban al caso del demandante. Por tanto, coligió que la pensión fue correctamente liquidada con base en un ingreso equivalente a 25 SMLMV por año, ajustado al índice de precios al consumidor (IPC) para calcular un IBL de $20.649.457, al cual se aplicó la tasa de reemplazo del 64%, resultando en una mesada inicial de $13.958.372 en 2022.

La jueza concluyó que no era posible acceder a la solicitud del demandante de reconocer una pensión en cuantía de 25 SMLMV para el año 2022, ya que ello implicaría considerar cotizaciones por montos superiores a los permitidos por la legislación aplicable. Además, enfatizó que las normas del sistema de seguridad social tienen carácter taxativo y no admiten interpretaciones extensivas por parte del juzgador.

Por su parte, en cuanto a la pretensión subsidiaria de devolver los valores cotizados en exceso, la jueza señaló que las cotizaciones a pensión son contribuciones parafiscales que no se relacionan directamente con el valor de la prestación económica, sino que buscan sostener financieramente el sistema de seguridad social bajo principios de universalidad y solidaridad. Por lo tanto, no procedía la devolución de tales valores.

1.5. APELACIÓN

1.5.1. DEMANDANTE

En el recurso de apelación presentado por la parte demandante solicitó que se revocara la sentencia proferida por el Juzgado de primera instancia, argumentando que, aunque se reconoció la taxatividad de la normatividad en materia de seguridad social, debía prevalecer el principio de favorabilidad en beneficio del demandante.

La apelante enfatizó que las cotizaciones realizadas por su representado superaron consistentemente el tope de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el propósito de obtener una pensión superior, acorde con su mínimo vital y con el

principio de proporcionalidad que rige el sistema de seguridad social sosteniendo que, aún cuando la normativa vigente en el momento de las cotizaciones no reglamentaba aportes por encima de los 25 salarios mínimos, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 permitía la posibilidad de obtener pensiones hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales, sujeto a una reglamentación posterior.

Repuso que, a pesar de que dicha reglamentación solo entró en vigor con el Decreto 2322 de 2022, el espíritu del sistema de seguridad social debe garantizar que los aportes realizados, incluso aquellos por encima del límite reglamentado, se reflejen en el cálculo de la prestación pensional.

Asimismo, señaló que las cotizaciones realizadas por el señor Villarruel no fueron simplemente una decisión aislada, sino un esfuerzo consciente dirigido a garantizar una pensión que protegiera su mínimo vital. Este esfuerzo, según se explicó, incluyó la decisión de cotizar consistentemente por encima del límite de 25 salarios mínimos, lo que, aunque no reglamentado en ese momento, respondía a un legítimo interés por alcanzar una mejor garantía económica en su vejez. Considerando que era desproporcionado y contrario a los principios de justicia social que dichos aportes no se tradujeran en una mesada pensional proporcional a la magnitud de las cotizaciones realizadas.

En conclusión, solicitó al Tribunal, estudiar el caso no únicamente desde la perspectiva literal de la normativa vigente en el momento de las cotizaciones, sino considerando las realidades económicas y el impacto social de las decisiones del demandante. Y, en consecuencia, se reconociera la pretensión principal de la demanda, consistente en la reliquidación de la pensión de vejez con un ingreso base de liquidación que incluyera los montos superiores a los 25 salarios mínimos legales mensuales, y que se otorgara al demandante una pensión acorde con los principios de equidad, favorabilidad y proporcionalidad que rigen el sistema de seguridad social.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante JULIAN VILLARUEL TORO, por lo que el despacho de conocimiento, con Auto de 23 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se refirieron al respecto así:

JULIAN VILLARUEL TORO (PDF 04)

En sus alegatos, la parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y ordenara la reliquidación de la pensión del demandante, argumentando que, aunque Colpensiones aplicó el límite de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el ingreso base de liquidación (IBL), omitió considerar la totalidad de los aportes realizados por el demandante, incluyendo aquellos provenientes de dos empleadores simultáneos, lo que resultó en un cálculo incorrecto del IBL.

Resaltó que el demandante cotizó consistentemente por ingresos superiores a los 25 SMLMV, y que el sistema de seguridad social aceptó estos aportes sin objeción, lo que debe interpretarse como una aceptación tácita. Además, alegó que la falta de reglamentación gubernamental no debería trasladar efectos negativos al afiliado, quien cumplió con sus obligaciones contributivas. Según el análisis presentado, el IBL correcto permitiría reconocer al demandante una pensión de $25.000.000 para 2022, ajustada al tope legal.

COLPENSIONES (PDF 05)

En los alegatos de conclusión, Colpensiones solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, argumentando que la liquidación de la pensión del demandante se ajustó a la normatividad vigente. Resaltó que el límite máximo de cotización y pensión es de 25 SMLMV, según la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, y que cualquier reglamentación para aportes superiores (hasta 45 SMLMV) solo fue emitida en 2022, ello después de causarse el derecho pensional del demandante.

La apoderada señaló que la pensión fue correctamente calculada con un IBL de $20.264.457, aplicando una tasa de reemplazo del 64 %, lo que resultó en una mesada de $13.958.372, cumpliendo con las disposiciones legales, argumentó que el sistema de seguridad social opera bajo principios de solidaridad y sostenibilidad, lo que justifica los límites establecidos, y que no procede la devolución de aportes en exceso, ya que estos son contribuciones parafiscales.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante JULIAN VILLARUEL TORO.

PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Es procedente reliquidar la pensión de vejez del actor teniendo en cuenta los valores pagados como cotización, que exceden los 25 SMLMV?

SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Es correcto afirmar que los hechos que se encuentran acreditados dentro del proceso son, la fecha de nacimiento del demandante, esto es el 06 de mayo de 1959 (fol 3 pdf 01 primera instancia), que el actor cotizó un total de 1.657 semanas en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (fols 43-61 pdf 07 primera instancia); que Colpensiones reliquidó, mediante Resolución No. DPE 4140 del 19 de abril de 2022 (fols 46-65 pdf 01 primera instancia), la pensión del demandante teniendo en cuenta el tope máximo de 25 SMLMV en cuanto a las cotizaciones realizadas para definir el IBL, tampoco es objeto de reproche la tasa de reemplazo del 64% del IBL; así como tampoco lo es la fecha de causación de su derecho pensional y su disfrute, esto es el 01 de enero de 2022, ni el número de semanas mínimas requeridas para su pensión (1.300), pues así lo aceptaron las partes en sus escritos y se logró avizorar en el plenario.

DE LA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL Y EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

Sea lo primero advertir que, en atención a la fecha de causación del derecho pensional del actor, esto es enero de 2022, los requisitos para obtener su pensión, se encuentran determinados en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, con las modificaciones de la ley 797 de 2003, que como se expuso, fueron cumplidos por el demandante, en tanto cumplió 62 de años de edad el 06 de mayo de 2021 y que registra un total de 1.657 en su historia laboral, cuya última cotización fue el 31 de enero de 2022 (fols 43-61 pdf 07 primera instancia).

Igualmente, la forma como se liquida su pensión de vejez, se encuentra determinada en el artículo 34 *ibídem*, lo que la parte demandada tuvo en cuenta y aplicó en debida forma al momento de haberse realizado la liquidación de la pensión de vejez del (fols 46-65 pdf 01 primera instancia).

El punto de controversia, entonces, se centra en que la demandada Colpensiones, no tuvo en cuenta los valores que fueron superiores a 25 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, cotizados por el actor, para la determinación del IBL, mismos que, como se logra extraer de su historia laboral, a partir de marzo de 2015, sus cotizaciones fueron sobre la base de 50 SMLMV, hasta el 31 de enero de 2022, por dos empleadores diferentes (fols 43-61 pdf 07 primera instancia).

Al respecto, resulta menester, inicialmente, traer a colación el artículo 18 de la mentada legislación, modificado por la ley 797 de 2003, que estableció:

> *"ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual.*
> *El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.*
> *El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.*
> *El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado.* ***Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno***

nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales." (negrita y subraya por fuera)

Por lo anterior, el Gobierno Nacional, mediante Decreto 2322 de 28 de noviembre de 2022, adicionó el parágrafo 2 al artículo 2.2.3.1.7 del Decreto 1833 de 2016, así:

"PARÁGRAFO 2. El límite de la base de cotización del sistema general de seguridad social integral será como máximo de cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre y cuando: i) el crecimiento real de la economía colombiana sea superior al 4% durante al menos las últimas tres vigencias fiscales, y ii) el gasto fiscal en pensiones sea inferior a 2 puntos porcentuales del PIB"

Por ello, nótese que para la fecha en la que se causó el derecho pensional del demandante, la precitada norma aún no se encontraba en vigor, y en consecuencia, en atención al artículo 18 de la ley 100, las cotizaciones efectuadas por el afiliado, no podrían superar los 25 SMLMV, como en efecto hizo Colpensiones.

Ahora bien, la parte actora refirió en su apelación, que a la normatividad reglamentaria debe aplicarse al caso concreto, ello en atención al principio de favorabilidad del afiliado; sin embargo, la Sala considera que, tal apreciación no se ajusta en el presente asunto, pues a este principio debe acudirse cuando el Juzgador se encuentre con dos o más normas aplicables al mismo pleito, donde acogerá la que resulte más favorable al trabajador o afiliado en este caso; empero, aquí el decreto 2322 de 28 de noviembre de 2022 no se predica aplicable, pues tal disposición normativa, resulta ser posterior al reconocimiento del derecho del actor.

Respecto al mencionado principio, la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL3424 del 22 de julio de 2020, expresó que:

"Tampoco por la vía del principio de favorabilidad se dan las condiciones para hacer vale, en el sub lite, las previsiones de la ley de seguridad social integral proferida años después del fallecimiento del cónyuge de la actora, pues, tal como acertadamente lo sostuviera el juez plural, ninguna duda se cierne en torno a la norma aplicable para resolver la solicitud pensional, siendo ese elemento -la duda-, el presupuesto que abre paso a invocar aquel principio.
Sobre la aplicación del principio de favorabilidad, dijo la Corte en la sentencia CSJ SL10146-2017, lo siguiente:
"Tampoco le asiste razón a la censura cuando alega que la aplicación de la Ley 797 de 2003 se deriva del principio de favorabilidad constitucional y que, en tal sentido, se encuentran los precedentes emitidos por la Corte Constitucional, puesto que la jurisprudencia de antaño ha destacado que este principio remite a los eventos en que el juez se encuentra frente a dos o más normas aplicables (regla más favorable) o ante dos comprensiones diferentes derivadas de la misma norma (in dubio pro operario), situaciones ante las cuales el ordenamiento jurídico optó por favorecer a la parte débil de la relación laboral a fin de acoger la comprensión más acorde a su situación particular.

Claramente, en el presente asunto, no se encuentra el juez ante ninguno de los dos casos atrás referidos como para predicar la obligatoriedad del mandato de favorabilidad constitucional, dado que no existe hesitación alguna respecto de que la norma que gobierna la pensión de sobrevivientes pretendida en juicio es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, tal como lo asentó el fallador de segundo grado, al haber ocurrido el deceso del causante en el año 1996, lo cual elimina la posible aplicación de leyes expedidas posteriormente, como es la Ley 797 de 2003 y, con ello, la presunta coexistencia de normas aplicables, tal como lo quiere hacer ver la censura."

Luego, resulta pertinente mencionar, que, de dar aplicación a la normatividad posterior a la consolidación del derecho del reclamante, se estaría reconociendo la aplicación retroactiva de la norma, lo que se encuentra prohibido por el Código Sustantivo del Trabajo, al establecer en su artículo 16 que:

"ARTICULO 16. EFECTO. 1. Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores. (...)"

Referente a ello, nuestro Órgano de Cierre, en la Sentencia previamente mencionada, recordó que:

"En el derecho del trabajo y en el de la seguridad social ha prevalecido la tesis según la cual las normas legales que consagran derechos laborales o prestacionales son inmediatamente aplicables sin ser verdaderamente retroactivas. Se ha admitido que la nueva ley pueda regular contratos de trabajo o situaciones jurídicas surgidas con anterioridad a su promulgación pero que se hallen en curso, esto es, que no se hayan extinguido o consolidado. A este fenómeno jurídico, bien se sabe, se le ha denominado retrospectividad de la ley.

"En tratándose de derechos para cuya adquisición se precisa del transcurso de un período de tiempo prolongado, cual acontece con las prestaciones que atienden la vejez, es claro que una reciente ley que se expida modificando los requisitos para obtener el derecho, necesariamente deberá mirar hacia el pasado, pues habrá de encontrarse con una o varias situaciones que se encuentren en desarrollo; así, el tiempo de prestación de servicios o de cotizaciones al sistema y, desde luego, la edad de quien aspira a beneficiarse de la prestación.

"No puede considerarse, entonces, que exista una aplicación retroactiva de la ley nueva cuando se utilice respecto de situaciones surgidas con anterioridad a su vigencia, pero que no estén consumadas, porque sería tanto como admitir que el deudor de la obligación consolidó, estando en vigor la ley antigua, un derecho a no pagar.

"Por esa razón, ha dicho esta Sala de la Corte: "una cosa es tomar en consideración hechos acaecidos en el pasado para hacerles producir efectos futuros y otra muy diferente, y que nuestra ley no consagra, es la transformación ex post facto de tales hechos por virtud de una ley que no regía al momento en que tuvieron ocurrencia"

En conclusión, el Decreto 2322 de 2022 no puede aplicarse al caso del señor Villarruel Toro toda vez que su derecho a la pensión ya estaba consolidado antes de su entrada en vigor, y en dicho sentido, la controversia debe resolverse con base en las normas vigentes al momento de causarse el derecho pensional, mismas que establecían un tope máximo de 25 SMLMV para la base de cotización, como lo memoró nuestro órgano de cierre en Sentencia SL3501 de 2022, donde incluso hizo a alusión a lo dicho por la Corte Constitucional en Sentencia C1054 de 2004[1]; de igual manera, resulta acorde recordar que el artículo 3 del decreto 510 de 2003 reglamentó el tope de caotización en 25 SMLMV. Razones de más para confirmar la Sentencia objeto de apelación.

3.1. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dado que no tuvo prosperidad el recurso presentado, las costas en esta instancia quedarán a cargo del demandante, en favor de la demandada Colpensiones.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 06 de septiembre de 2024, por el Juzgado Cuarenta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá**.** Por las razones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO. CONDENAR en **COSTAS** de segunda instancia a la parte demandante JULIAN VILLARUEL TORO, en favor de la parte demandada COLPENSIONES.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

---

[1] Con relación a la base máxima de cotización, la Corte Constitucional en sentencia CC C-1054-2004 explicó que, Ahora bien, el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, en la nueva redacción introducida por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que ahora se examina, se ubica en el Título I de "Disposiciones Generales" del Sistema de Seguridad Social en Pensiones que regula dicha Ley 100, por lo cual el tope fijado a la base salarial de cotización se aplica en los dos subsistemas previstos: el de prima media con prestación definida que administra el Instituto de Seguros sociales, y el de ahorro individual con solidaridad que Radicación n.° 92207 SCLAJPT-10 V.00 29 administran los fondos privados de pensiones. Sin embargo, es necesario tener presente que este tope salarial al que se refiere la norma acusada se aplica para efectos de liquidar la cotización obligatoria a pensiones en ambos subsistemas, pero que en el régimen el ahorro individual con solidaridad los afiliados pueden cotizar, periódica u ocasionalmente, valores superiores a los límites mínimos establecidos como cotización obligatoria, con el fin de incrementar los saldos de sus cuentas individuales de ahorro pensional, para optar por una pensión mayor o un retiro anticipado.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 044.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente JULIAN VILLARUEL TORO y en favor de la demandada, se fija como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MARIA CLAUDIA CARREÑO RODRIGUEZ
Parte demandada	COLPENSIONES - PORVENIR - SKANDIA - MAPFRE
Radicación	11001310501020220051301
Fecha de la decisión	31 DE OCTUBRE DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA DE TRASLADO
Acta de Discusión	054
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310501020220051301

AUTO

Se reconoce personería adjetiva a la Doctora VALERY JULIANA GORDILLO MARTINEZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.018.480.277 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, abogado titulada e inscrita, portadora de la Tarjeta Profesional número 326.984 del C.S. de la J., para actuar en nombre y representación de Colpensiones, de conformidad con la sustitución del poder efectuada por el Doctor OMAR TRUJILLO POLANIA en su condición de representante legal de la la Sociedad TRUJILLO POLANIA & ASOCIADOS S.A.S., (pdf 07 Cdno 2da insta)

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 31 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La señora MARIA CLAUDIA CARREÑO RODRIGUEZ, quien actúa a través de apoderado, presentó demanda contra Porvenir S.A., Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. y Colpensiones, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral que se declare la ineficacia de su afiliación y de los traslados de

régimen pensional al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), argumentando que estos fueron realizados sin la información suficiente y transparente por parte de las administradoras de fondos de pensiones demandadas. Como consecuencia, solicita su reintegro al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad, con el traslado de todos los aportes, rendimientos y semanas cotizadas al fondo estatal, así como la condena en costas y agencias en derecho.

Los hechos expuestos en la demanda indican que la señora Carreño Rodríguez se afilió inicialmente al régimen de prima media en 1985 y que, en septiembre de 2001, fue persuadida por un asesor comercial de Porvenir S.A. para trasladarse al RAIS, sin haber recibido la debida información sobre las implicaciones de dicho cambio. Posteriormente, en enero de 2005, fue nuevamente trasladada, esta vez de Porvenir S.A. a Skandia S.A., sin que se le informara sobre la posibilidad de regresar al Instituto de Seguros Sociales. Alega que estas omisiones le impidieron tomar una decisión informada y le generaron un perjuicio patrimonial. En el año 2022, al realizar reclamaciones administrativas ante Colpensiones y las AFP demandadas, éstas reconocieron que no cuentan con documentación que acredite la información proporcionada al momento de los traslados.

Desde el punto de vista jurídico, la demanda se fundamenta en el derecho a la seguridad social, el principio de primacía de la realidad y el deber de información de las administradoras de pensiones, alegando que la falta de asesoría derivó en un traslado ineficaz y perjudicial para la demandante. Se citan disposiciones constitucionales (artículos 4, 48 y 53), la Ley 100 de 1993, el Código Civil (culpa leve y restitución por nulidad), el Decreto 656 de 1994 y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, consolidada en fallos sobre la ineficacia de traslados pensionales por omisión de información. Adicionalmente, se alude al principio de carga dinámica de la prueba, indicando que corresponde a las administradoras demandadas demostrar que cumplieron con el deber de asesoría.

En conclusión, la demanda busca el reconocimiento de la ineficacia de los traslados pensionales y el retorno de la demandante al Régimen de Prima Media, argumentando que la omisión en el deber de información impidió una decisión libre e informada. La estructura del escrito está sólidamente basada en normas de seguridad social, derecho laboral y precedentes jurisprudenciales, lo que refuerza la solicitud de traslado de aportes a Colpensiones y la imposición de sanciones a las administradoras demandadas.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá admitió la demanda y corrió traslado de la misma mediante auto del 1 de junio de 2023 (PDF 04). Posteriormente, mediante providencia del 26 de enero de 2024 (PDF 18), tuvo por contestada la demanda por COLPENSIONES y Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., y admitió el llamamiento en garantía solicitado por esta última a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. Finalmente, mediante auto del 22 de mayo de

2024 (PDF 25), se tuvo por contestada la demanda por la llamada en garantía y por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. (PDF 09)

La sociedad Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., a través de su apoderada, respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones y formulando excepciones de mérito. En su contestación, argumenta que la afiliación de la señora María Claudia Carreño Rodríguez al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue realizada de manera libre, voluntaria y consciente, cumpliendo con los requisitos legales vigentes en la época de los traslados. Adicionalmente, sostiene que cumplió con su deber de información y asesoría, proporcionando a la demandante los elementos necesarios para que tomara una decisión informada sobre su afiliación.

En su defensa, Skandia propuso diversas excepciones de mérito. En primer lugar, planteó que no participó ni intervino en el momento de la selección de régimen, pues la demandante inicialmente se trasladó desde el Instituto de Seguros Sociales (ISS) a Porvenir S.A., por lo que no puede ser responsabilizada por decisiones tomadas antes de su afiliación. En segundo lugar, invocó que la asesoría brindada fue clara, comprensible y circunscrita a la situación particular de la afiliada, asegurando que, al momento de su vinculación en 2005, la demandante contaba con la información suficiente sobre las características del RAIS y que, conforme a la normativa vigente en la época, la asesoría no requería constancia escrita, sino que podía ser verbal. En tercer lugar, adujo que la demandante se encuentra inhabilitada para el traslado de régimen en razón de la edad y el tiempo cotizado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que impide el retorno al Régimen de Prima Media cuando faltan menos de diez años para cumplir la edad de pensión.

Asimismo, formuló la excepción de configuración de reintegro de la prima de seguro previsional, señalando que los aportes destinados a la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia ya fueron aplicados y no pueden ser objeto de restitución. Igualmente, invocó la excepción de compensación, argumentando que, en caso de prosperar alguna pretensión de la demandante, debe reconocerse el derecho de la administradora a descontar valores ya erogados en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. También propuso la excepción de prescripción del porcentaje de los gastos de administración, en virtud de que estos valores, al estar sujetos a un régimen normativo específico, no pueden ser objeto de restitución después de transcurrido el término legal. De igual manera, planteó la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro, alegando que cualquier reclamación sobre este aspecto debía ejercerse dentro del plazo legalmente establecido.

Finalmente, la administradora alegó la excepción de buena fe, sosteniendo que actuó conforme a la normatividad vigente, garantizando la transparencia en sus

procedimientos y cumpliendo con las disposiciones aplicables en la época de la afiliación.

En el mismo escrito, Skandia formuló llamamiento en garantía en contra de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., argumentando que, en virtud del contrato de seguro previsional suscrito entre ambas entidades, cualquier eventual condena que recaiga en su contra debe ser asumida total o parcialmente por la aseguradora. Sostiene que el seguro contratado tenía como propósito cubrir contingencias derivadas del sistema pensional, incluidas eventuales reclamaciones judiciales relacionadas con la administración de los aportes de los afiliados. Por lo tanto, solicita que, en caso de una decisión adversa, se ordene a la llamada en garantía asumir las consecuencias económicas derivadas de la sentencia, en los términos de la póliza vigente al momento de la afiliación de la demandante.

I.3.2. Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES (pdf 10)

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a través de su apoderada, respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones y formulando diversas excepciones de mérito. En su contestación, argumentó que la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se realizó conforme a la normatividad vigente y que la solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) resulta improcedente. En este sentido, enfatizó que Colpensiones no es la entidad competente para responder por decisiones adoptadas por la demandante en su afiliación a un régimen distinto al administrado por ella y que, en todo caso, la actora no cumple con los requisitos para acceder a la pensión bajo el régimen que pretende.

En su defensa, Colpensiones propuso la excepción de prescripción y caducidad, argumentando que cualquier derecho derivado de la afiliación y traslado de la demandante ha prescrito, de conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo, en virtud de que han transcurrido más de tres años desde la fecha en la que pudo haberse cuestionado la afiliación. También planteó la inexistencia del derecho y de la obligación por falta de cumplimiento de los requisitos legales, pues la demandante no cumple con los supuestos normativos para obtener la pensión bajo el régimen de prima media, y el reconocimiento de una pensión sin cumplir las condiciones establecidas implicaría un desconocimiento del marco legal vigente. En consecuencia, formuló la excepción de imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal, señalando que Colpensiones, como entidad pública, solo puede actuar dentro de los límites establecidos por la ley, y no puede reconocer prestaciones sin el cumplimiento estricto de los requisitos normativos.

Adicionalmente, la entidad demandada propuso la excepción de cobro de lo no debido, al considerar que cualquier obligación que se pretenda derivar en su contra carece de fundamento, toda vez que la demandante ha realizado aportes y cotizaciones bajo un régimen de capitalización individual y no bajo el régimen solidario de prima media. Así mismo, invocó la excepción de buena fe, enfatizando que Colpensiones ha actuado con apego a la normatividad y jurisprudencia aplicable,

sin haber incurrido en actuaciones irregulares o que justifiquen una eventual condena en su contra. Finalmente, planteó la imposibilidad de condena en costas, sosteniendo que, dado el carácter público de la entidad y la ausencia de conducta temeraria en su actuación, no procede una condena en este sentido, de acuerdo con los principios que rigen la materia procesal laboral. En consecuencia, solicitó ser absuelta de todas las pretensiones formuladas en su contra.

I.3.3. Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (pdf 20)

La sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a través de su apoderado, respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones y formulando diversas excepciones de mérito. En su contestación, sostuvo que la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se efectuó conforme a la normatividad vigente de la época, por lo que no puede aplicarse con carácter retroactivo una regulación posterior que imponga obligaciones no exigibles en el momento del traslado. En este sentido, argumentó que cumplió con su deber de información, conforme a los estándares normativos aplicables en la fecha de afiliación, descartando la existencia de vicio en el consentimiento o falta de asesoría.

En su defensa, Porvenir propuso como excepción el deber de información a cargo de las AFP y la imposibilidad de exigir obligaciones retroactivamente, afirmando que no existía un deber legal expreso que impusiera requisitos adicionales en la asesoría brindada al momento del traslado. Así mismo, alegó que, en caso de prosperar la declaratoria de ineficacia del traslado, deben aplicarse los efectos jurídicos propios de la ineficacia de un acto jurídico, lo que conllevaría la aplicación de la figura de restituciones mutuas, pues de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin causa en favor de la demandante. En línea con lo anterior, planteó que, de ordenarse la reversión del traslado, Colpensiones debería devolver los valores efectivamente cotizados y rendimientos generados, evitando que la demandante se beneficie de las características del RAIS mientras reclama simultáneamente los derechos del Régimen de Prima Media.

Adicionalmente, invocó la improcedencia de la devolución de los gastos de administración y la prima del seguro previsional, argumentando que estos conceptos corresponden a costos operativos de la administración de fondos de pensiones y a la cobertura de riesgos de invalidez y sobrevivencia, por lo que su restitución carece de fundamento legal. También propuso la excepción de buena fe, asegurando que actuó conforme a la normatividad vigente y en cumplimiento de sus deberes de administración y asesoría. De igual manera, señaló la ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, pues no se ha demostrado la existencia de un vicio en el consentimiento ni la concurrencia de una causal que justifique la reversión del acto de afiliación.

Porvenir también formuló la excepción de aceptación tácita de las condiciones del RAIS, en tanto la demandante permaneció afiliada a dicho régimen durante un extenso periodo de tiempo, sin manifestar inconformidad ni adelantar acciones legales para revertir su traslado. Finalmente, invocó la prescripción de la acción,

señalando que cualquier reclamación respecto del traslado de régimen ha superado el término legal establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que los derechos invocados han prescrito. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se le absuelva de todas las pretensiones y se rechace cualquier condena en su contra.

I.3.4. Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (pdf 22)

La compañía MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A., a través de su apoderada, respondió el llamamiento en garantía formulado por Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., manifestando que no se opone ni se allana a las pretensiones del escrito demandatorio, así mismo, formuló excepciones de mérito. En su contestación, argumentó que el llamamiento en garantía es improcedente, ya que Skandia carece de amparo y/o cobertura frente a la acción material ejercida por la parte demandante, pues el riesgo objeto de protección asegurativa no guarda relación con el objeto material de las pretensiones formuladas en la demanda principal. En consecuencia, señala que el seguro previsional contratado con Skandia solo cubría riesgos de invalidez y sobrevivencia, por lo que la reclamación en curso no puede derivar en una obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora.

En su defensa, MAPFRE formuló la excepción de inexistencia de derecho contractual por parte de Skandia, argumentando que la relación contractual entre ambas entidades se limita a los términos específicos de la póliza suscrita, la cual no ampara eventuales controversias derivadas de la asesoría prestada en el traslado de régimen pensional. También planteó que MAPFRE no está obligada, en caso de una sentencia de condena contra la llamante en garantía, a efectuar la devolución de las primas ni de ningún otro valor que corresponda a la contraprestación del seguro, dado que las primas fueron legalmente devengadas y los riesgos efectivamente amparados durante la vigencia del contrato de seguro previsional.

Asimismo, invocó la excepción de inoponibilidad de los efectos de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda, argumentando que cualquier condena impuesta a Skandia no genera una obligación de restitución a cargo de MAPFRE, ya que la aseguradora no fue parte en la relación contractual entre la demandante y la administradora de pensiones. En el mismo sentido, destacó la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, alegando que cualquier reclamación que pretenda derivarse de la póliza de seguro ha superado los términos legales establecidos en el Código de Comercio para la prescripción de las acciones contractuales en materia asegurativa. En consecuencia, solicitó que se le excluya de cualquier condena derivada del proceso y se niegue la totalidad de las pretensiones del llamamiento en garantía.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 33 y 34 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 31 de octubre de 2024, decidió declarar ineficaz el traslado

de régimen pensional efectuado por la señora María Claudia Carreño Rodríguez el 7 de mayo de 1998, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), a través de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., así como la afiliación posterior realizada el 31 de enero de 2005 a Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. En consecuencia, resolvió que la demandante quedará válidamente vinculada al Régimen de Prima Media sin solución de continuidad y ordenó a Skandia S.A. y Porvenir S.A. la transferencia de todos los valores que reposan en la cuenta de ahorro individual de la demandante a Colpensiones, incluidos las cotizaciones, frutos e intereses, los gastos de administración, bonos pensionales, primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y los porcentajes destinados a la garantía de pensión mínima, con cargo a sus propias utilidades, debidamente indexados.

Si bien el juzgado acogió la doctrina de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-107 de 2024 respecto a la ineficacia del traslado pensional por la falta de asesoría suficiente, se apartó del precedente en lo relativo a las consecuencias económicas de la ineficacia, al disponer la restitución de valores que, según la Corte Constitucional, no pueden ser objeto de devolución ni indexación, tales como los gastos de administración, primas de seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, por tratarse de situaciones consolidadas en el tiempo. En su lugar, el juzgado acogió la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, que ha sostenido que, declarada la ineficacia del traslado, deben restituirse íntegramente los valores descontados al afiliado, sin restringir la devolución de montos destinados a costos administrativos o aseguramiento.

Finalmente, respecto del llamamiento en garantía formulado por Skandia S.A. contra Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., el juzgado lo declaró improcedente, al concluir que la póliza de seguro previsional suscrita entre Mapfre y Skandia no cubre las consecuencias derivadas de la ineficacia del traslado pensional, sino únicamente los riesgos de invalidez y sobrevivencia dentro del RAIS. Por lo tanto, absolvió a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. de cualquier responsabilidad derivada del presente litigio.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADAS

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (min 00:21:05 video 35)

El apoderado de Porvenir S.A. interpuso recurso de apelación, impugnando la declaratoria de ineficacia del traslado pensional al estimar que se acreditó la suscripción del formulario de afiliación en ejercicio libre y espontáneo de la voluntad de la demandante, por lo que su desconocimiento configura una transgresión al precedente vinculante de la Sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional, que exige la valoración individualizada del acervo probatorio en cada caso concreto. En esa línea, arguyó que la decisión judicial incurre en un exceso interpretativo, pues Porvenir S.A. ya efectuó la transferencia de las cotizaciones y rendimientos

generados al momento en que la demandante optó por su afiliación a Skandia S.A., por lo que no le es dable asumir restituciones adicionales.

Adicionalmente, adujo que la condena impuesta en primera instancia contraviene la doctrina constitucional, en tanto las erogaciones por gastos de administración, las primas del seguro previsional y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima no son susceptibles de restitución ni indexación, pues constituyen rubros que se consolidaron en el tiempo y no pueden ser retrotraídos por el solo hecho de la ineficacia del traslado, conforme lo dispone la Sentencia SU-107 de 2024. Aunado a ello, manifestó que la indexación resulta improcedente, pues la rentabilidad inherente a la cuenta de ahorro individual absorbe la pérdida de poder adquisitivo del capital, razón por la cual la orden de restitución impuesta comporta una afectación gravosa e injustificada en perjuicio de la administradora de pensiones. En consecuencia, solicitó la revocatoria parcial de la sentencia en lo atinente a la devolución de rubros distintos a los aportes efectivamente cotizados y sus respectivos rendimientos.

Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. (min 00:29:52 video 35)

El apoderado de Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. interpuso recurso de apelación, controvirtiendo la decisión de primera instancia en cuanto a la restitución de rubros adicionales a las cotizaciones y rendimientos, señalando que la condena impuesta desborda el marco normativo y desconoce los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-107 de 2024. Sostuvo que la administradora gestionó y administró la cuenta individual de la demandante en estricto cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes, por lo que la orden de reversión de valores como gastos de administración, primas de seguros previsionales y aportes a la garantía de pensión mínima deviene improcedente. Adicionalmente, arguyó que el traslado de dichos recursos a Colpensiones conllevaría un enriquecimiento sin causa en favor de la entidad pública, configurando una afectación patrimonial desproporcionada en perjuicio de la AFP.

Asimismo, en aras de salvaguardar el equilibrio económico y la distribución equitativa de las cargas, solicitó que, en el evento en que se confirme la condena respecto a los montos correspondientes a seguros previsionales, se ordene a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. asumir dichas obligaciones en calidad de aseguradora, dada su vinculación con la póliza suscrita para la cobertura de los afiliados al RAIS. Finalmente, impugnó la indexación de cualquier valor a restituir, argumentando que la rentabilidad generada dentro del sistema de ahorro individual absorbe la pérdida del poder adquisitivo del dinero, razón por la cual la actualización monetaria impuesta por el a quo resulta excesiva e injustificada. En virtud de lo expuesto, solicitó la revocatoria parcial de la sentencia en lo atinente a la restitución de valores distintos a los aportes efectivamente cotizados y rendimientos financieros, así como la exclusión de la indexación de cualquier monto objeto de devolución.

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES (min 00:34:12 video 35)

El apoderado de Colpensiones interpuso recurso de apelación, alegando que la sentencia de primera instancia vulnera el principio de sostenibilidad pensional, pues impone una carga financiera al régimen de prima media sin considerar los efectos actuariales sobre el fondo común que administra la entidad. Argumentó que la orden de restitución de aportes y otros valores desconoce la necesidad de realizar un cálculo actuarial previo para determinar el impacto de la reincorporación de la demandante al régimen estatal, particularmente en lo que respecta a la financiación de su mesada pensional y su reajuste futuro. En esa línea, advirtió que, aun sumando todos los conceptos ordenados en la sentencia, persiste una diferencia sustancial entre lo efectivamente recaudado y el capital que habría acumulado la demandante de haber permanecido en el Régimen de Prima Media desde el inicio de su vida laboral, lo que genera un detrimento patrimonial y una descapitalización del sistema solidario.

Asimismo, sostuvo que Colpensiones no tuvo injerencia en los hechos que dieron origen al traslado de la demandante al RAIS, pues su rol se limitó a acoger la solicitud de reincorporación presentada por la afiliada conforme a las normas vigentes, sin intervenir en el proceso de asesoría ni en la decisión inicial de traslado. En virtud de ello, solicitó que se revoque cualquier condena en costas, ya que la entidad no incurrió en conducta temeraria ni dilatoria dentro del proceso, sino que simplemente actuó en cumplimiento de su función como administradora del régimen de prima media. En consecuencia, pidió que se reconsidere el alcance de la restitución impuesta, de manera que se garantice la sostenibilidad financiera del sistema y se evite una afectación desproporcionada a los recursos comunes que garantizan el pago de las prestaciones pensionales.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, el despacho de conocimiento, con auto del 06 de abril de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (pdf 04 segunda instancia)

El apoderado de Porvenir S.A., en sus alegatos de conclusión, reiteró que en el presente caso no se configuró incumplimiento del deber de información en el traslado pensional de la demandante, solicitando que el Tribunal valore el material probatorio

conforme al precedente establecido en la Sentencia SU-107 de 2024, que exige una evaluación individualizada de cada caso concreto. En este sentido, sostuvo que, de mantenerse la declaratoria de ineficacia, se debe aplicar el principio de restituciones mutuas para evitar un enriquecimiento sin causa, permitiendo a las AFP descontar los costos de administración y demás expensas en las que incurrieron para la gestión de los recursos de la afiliada. Afirmó que, en caso de ordenarse la restitución de los rendimientos generados en el RAIS, también se debe reconocer a las administradoras de pensiones el derecho a descontar los valores que permitieron la obtención de dichos rendimientos, evitando así una afectación desproporcionada en perjuicio de Porvenir.

Asimismo, insistió en la improcedencia de la devolución de los gastos de administración, primas de seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, citando expresamente la Sentencia SU-107 de 2024, la cual establece que estos valores no pueden ser objeto de restitución ni indexación, ya que constituyen erogaciones consolidadas en el tiempo. Aseguró que la estructura del sistema de ahorro individual se sustenta en el financiamiento de estos costos y que su reversión alteraría el equilibrio financiero de la administradora. Finalmente, señaló que, de haberse mantenido la demandante en el Régimen de Prima Media, no habría generado rendimientos individuales, razón por la cual el traslado de los recursos administrados por Porvenir no puede implicar la restitución de valores adicionales a los estrictamente cotizados y sus respectivos rendimientos. En virtud de lo expuesto, solicitó la revocatoria de la condena en lo atinente a la restitución de valores distintos a los aportes efectivamente cotizados y sus rendimientos, así como la exclusión de cualquier indexación sobre estos montos.

MARIA CLAUDIA CARREÑO RODRIGUEZ (pdf 05 segunda instancia)

El apoderado de la parte demandante, en sus alegatos de conclusión, solicitó la confirmación integral de la sentencia de primera instancia, argumentando que la decisión del Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá se ajusta a los lineamientos jurisprudenciales vigentes en materia de ineficacia del traslado pensional. Sostuvo que la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado una línea jurisprudencial uniforme, en la que ha señalado que la responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones es de naturaleza profesional y que su deber de información debe cumplir con los principios de suficiencia, claridad y oportunidad, con el fin de garantizar un consentimiento informado en la elección del régimen pensional. En este sentido, afirmó que las pruebas recaudadas en el proceso evidencian que ni Porvenir S.A. ni Skandia S.A. brindaron la asesoría adecuada a la demandante, lo que vicia de nulidad los traslados efectuados.

Asimismo, refirió que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que el deber de información y asesoría no se satisface con la sola firma del formulario de afiliación, sino que exige una gestión activa por parte de la administradora para ilustrar al afiliado sobre las consecuencias económicas y jurídicas de su decisión. En este marco, destacó que las administradoras demandadas no acreditaron haber cumplido con este estándar, por lo que la declaratoria de ineficacia del traslado pensional es la única solución jurídica viable. Finalmente, reiteró que, en aplicación del principio de

favorabilidad en materia laboral y de seguridad social, la decisión adoptada en primera instancia se ajusta a los postulados de protección constitucional de los derechos pensionales, razón por la cual debe ser confirmada en su integridad.

Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. (pdf 06 segunda instancia)

El apoderado de Skandia Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A., en sus alegatos de conclusión, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia, argumentando que el proceso ha perdido actualidad jurídica en virtud de un hecho sobreviniente, conforme al artículo 21 numeral 2 del Decreto 1225 de 2024 y el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, los cuales permiten que la demandante acceda voluntariamente a una asesoría integral sobre los regímenes pensionales y tome una decisión informada sobre su afiliación. Señaló que, ante esta nueva normatividad, el pronunciamiento del Tribunal sobre la ineficacia del traslado resulta innecesario, pues el legislador ha previsto un mecanismo que garantiza la libre elección del régimen pensional bajo parámetros de información y asesoría adecuados.

Adicionalmente, reiteró que Skandia S.A. cumplió con su deber de asesoría conforme a la normatividad vigente al momento del traslado, señalando que el deber de información no implicaba la obligación de entregar un documento con proyecciones pensionales detalladas, sino una explicación suficiente sobre las características del régimen de ahorro individual. Sostuvo que la demandante no demostró el supuesto de hecho de la norma que invoca, pues la suscripción del formulario de afiliación constituye prueba suficiente de la manifestación libre y espontánea de su voluntad. Por otro lado, solicitó que no se ordene la devolución de los gastos de administración, primas previsionales ni el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima, en aplicación de la Sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional, la cual estableció que estos valores no son susceptibles de restitución ni indexación. Finalmente, alegó que la orden de restitución impuesta en la sentencia afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional y configura un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones, por lo que solicitó la revocatoria de la condena impuesta y, en subsidio, que se revoque la indexación de los valores ordenados a restituir.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por las partes demandadas.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante y las partes demandadas, y otorgado en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el traslado efectuado por la demandante del RPM al RAIS resulta ineficaz, y de salir avante tal declaración se procederá a verificar cuáles son las consecuencias jurídicas que tal declaratoria de ineficacia conllevaría.

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del análisis fáctico y probatorio del presente litigio, resulta indispensable delimitar los hechos que, por su naturaleza incontrovertida, no requieren de mayor análisis, así como aquellos que, por su controversia, constituyen el núcleo de la Litis y deberán ser objeto de valoración jurídica por parte del despacho. Esta distinción no solo facilita la precisión en la conducción del proceso, sino que también permite centrar el debate en los puntos neurálgicos de la controversia, conforme al principio de economía procesal y al mandato de garantizar una resolución justa y expedita.

No son objeto de controversia los siguientes hechos: (i) la afiliación inicial de la señora María Claudia Carreño Rodríguez al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por el extinto Instituto de los Seguros Sociales (ISS), hoy COLPENSIONES, desde junio de 1985 hasta el 16 de septiembre del 2001; (ii) su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) mediante la suscripción de un formulario de afiliación con AFP Porvenir S.A. el 13 de septiembre del 2001, con efectividad a partir del 01 de noviembre del 2001, y una segunda vinculación con SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. con fecha de solicitud de vinculación del 31 de enero del 2005 y fecha de efectividad del 01 de marzo del 2005; y (iii) la validez formal de dichos documentos de afiliación, en cuanto a su suscripción y recepción por parte de la administradora de pensiones.

Por el contrario, subsisten como aspectos objeto de controversia: (i) la verificación del cumplimiento del deber de información cualificada por parte de las administradoras demandadas, Porvenir S.A. y Skandia S.A., que exige la entrega de asesoría clara, precisa y suficiente sobre los beneficios, riesgos y características diferenciadoras de ambos regímenes pensionales, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la reciente sentencia de unificación SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional; (ii) la existencia de vicios en el consentimiento del señor Serna Tapias al momento de los traslados, derivados de la presunta omisión de dicho deber de información, y la posible nulidad o ineficacia de dichos actos jurídicos; (iii) la procedencia de las excepciones propuestas por las demandadas, tales como la prescripción de la acción, la aceptación tácita de las condiciones del RAIS por la permanencia prolongada en el régimen, y la inexistencia de la obligación de revertir el traslado por falta de prueba de desinformación efectiva; y (iv) la responsabilidad que podría recaer sobre Porvenir S.A. y Skandia S.A. por el presunto impacto negativo en los derechos pensionales de la demandante, en términos de su congrua subsistencia y la protección de su derecho a la seguridad social, así como la obligación de transferir valores adicionales como los gastos de administración, seguros previsionales y aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuya devolución ha sido controvertida en sede de apelación.

Esta distinción preliminar permite encauzar el análisis hacia la determinación de si el traslado al RAIS estuvo acompañado de las garantías mínimas legales y constitucionales, así como si concurren los presupuestos jurídicos para declarar su

ineficacia y, en consecuencia, restablecer la afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Sobre el deber de información al surtirse el traslado de régimen pensional

Sentado lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021, SL 509 de 2024 y SL 2999 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 "*…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…",* lo cual hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de

beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	**Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información**	**Contenido mínimo y alcance del deber de información**
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, pues frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, puntualmente señaló que a las

mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas.

Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.

(…)

También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.

También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

De este modo, habida cuenta de que la accionante, conforme a la solicitud de vinculación del 13 de septiembre del 2001 (archivo 20, folio 84), efectuó su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en septiembre del 2001, a través de la AFP Porvenir S.A., el posterior traslado a la SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. con número de solicitud No. 72568 del 31 de enero del 2005 (archivo 09, folio 24) y atendiendo tanto los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL 2999 de 2024) como los desarrollos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024 la carga probatoria recae sobre la administradora de

fondos de pensiones para demostrar que el traslado de régimen fue adoptado por el afiliado de manera libre y voluntaria, habiéndole proporcionado información suficiente, veraz y comprensible acerca de las características, condiciones de acceso, implicaciones y riesgos inherentes a cada uno de los regímenes pensionales disponibles.

Sobre la carga de la prueba – frente al cumplimiento del deber de información

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar en este caso que a la demandante al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de la AFP demandada, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Empero dicha postura, fue modulada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y*

conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS…"

Así pues, al sopesarse los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Corte Constitucional en la decisión previamente referida, se advierte que, en el caso sub examine, se arribaría a la misma conclusión a la que llegó el a quo, esto es, la procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

Caso concreto

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala concluye que no existe en el plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento cabal del deber de información por parte de la AFP Porvenir S.A. y SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. al momento del traslado de la demandante del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y los traslados horizontales realizados, pues los formularios aportados por las demandadas, no son tan siquiera prueba somera del cumplimiento al deber de información que le acaecía.

Aunado a lo antes expuesto, resulta improcedente la tesis esgrimida por la parte demandada, según la cual la permanencia de la demandante en el RAIS convalida el traslado inicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en las sentencias SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, ha reiterado que los traslados horizontales entre AFP del mismo régimen no subsanan la falta de información en el momento del traslado inicial desde el RPM. El análisis central en estos litigios radica en verificar si, al momento del traslado, el afiliado recibió una información adecuada que le permitiera tomar una decisión consciente y fundamentada, y no en evaluar su permanencia posterior en el RAIS ni los deberes adquiridos como afiliado (CSJ SL 1055-2022).

De otro lado, debe destacarse que el argumento de las AFP demandadas, relativo a que la sola firma del formulario de afiliación implica una manifestación libre y voluntaria de voluntad por parte del afiliado, es insuficiente para cumplir con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.). En este contexto, incumbía a Porvenir S.A. y Skandia S.A. demostrar que el asesor de servicios responsable de la afiliación cumplió con el deber legal de brindar una asesoría integral, proporcionando al afiliado una información comprensible y exhaustiva. La falta de acreditación de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que el traslado no se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables atrás vertidos.

En síntesis, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T. y S.S.), que faculta al juzgador para formar libremente su convicción mediante una apreciación integral y crítica del acervo probatorio, esta Sala concluye que la decisión de la demandante de trasladarse al RAIS adolece de los elementos de validez derivados de una elección consciente,

autónoma e informada. No se encuentra acreditado que los asesores responsables del traslado hubieran desplegado una asesoría adecuada que incluyera una exposición clara y pormenorizada sobre las repercusiones del cambio de régimen, tales como los riesgos inherentes al RAIS, la necesidad de realizar cotizaciones adicionales, las consecuencias de no cumplir con el capital mínimo requerido para la pensión de vejez, la garantía de la pensión mínima, el régimen aplicable a la devolución de saldos, así como las diversas modalidades pensionales disponibles en el sistema. La omisión de estos aspectos esenciales evidencia un incumplimiento sustancial del deber de información, viciando así la decisión adoptada y afectando el derecho fundamental del afiliado a contar con una orientación precisa y completa que le permitiera sopesar los riesgos y beneficios de manera adecuada, conforme a los estándares de diligencia exigidos en el marco de la seguridad social integral.

En lo relativo a los efectos jurídicos derivados de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, resulta pertinente acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-107 de 2024, en la cual se señaló:

> "…*En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)*
>
> *(…)*
>
> *y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 327)."*

La decisión en cuestión, cabe señalar, se extiende de manera vinculante a todas las demandas que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria laboral, según lo establece el ordinal octavo, razón por la cual esta Sala acoge dicho pronunciamiento en su integridad. No obstante, se precisa que se mantendrá la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo que respecta al deber originario de las AFP de proporcionar asesoría integral y adecuada a sus potenciales afiliados, cuya omisión inevitablemente acarrea la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen.

Con fundamento en el precedente constitucional citado, esta Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de acoger parcialmente el recurso de apelación presentado por Porvenir S.A. y Skandia S.A. En tal virtud, se dispone que no resulta viable ordenar el traslado del porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima, los gastos de administración ni las primas de seguros provisionales indexados, tal como lo señala la sentencia SU-107 de 2024, limitando los efectos de la declaratoria de ineficacia al traslado de los recursos disponibles en la

cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional, si este ha sido efectivamente redimido, por lo que tampoco se accederá a la petición de Colpensiones.

Finalmente, respecto de la manifestación que realiza Porvenir S.A. al momento de sustentar el recurso de apelación, en cuanto a que los recursos que se le ordena devolver ya fueron trasladados, se precisa que efectivamente este fondo no fue el último al cual se encontraba afilada la actora, por lo que al momento en que se realizó el traslado a SKANDIA S.A., PORVENIR debió trasladar todo el saldo que la demandante tenía en su cuenta a dicha sociedad. Aunado a ello, las implicaciones que se señalan en la sentencia SU-107 de 2024, también le cobijan, razón por la cual se revocara dicha condena.

Análisis de las Excepciones Propuestas por Colpensiones

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se concluye que estas carecen de soporte jurídico para prosperar dentro del contexto del presente litigio. Respecto del cobro de lo no debido, debe señalarse que las consecuencias inherentes a la declaratoria de ineficacia del traslado, así como la afiliación originaria de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), imponen a Colpensiones la obligación de readmitirlo como afiliado. Este deber encuentra sustento en la normativa vigente y en los principios rectores de solidaridad y eficiencia que gobiernan el sistema de seguridad social integral. Aunque Colpensiones no tuvo participación directa en el acto jurídico de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), su posición como administrador del régimen inicial establece un vínculo jurídico ineludible que la obliga a asumir las consecuencias legales del restablecimiento del derecho pensional de la demandante.

En lo concerniente a la excepción de inexistencia del derecho resulta improcedente, ya que las responsabilidades de Colpensiones derivan directamente de su rol en la administración del RPM, así como de los efectos legales que emanan de la afiliación originaria de la demandante. Asimismo, el principio de buena fe, si bien invocado por Colpensiones, no opera como un mecanismo eximente de las responsabilidades inherentes a su condición de entidad garante del derecho fundamental a la seguridad social.

En lo que respecta a la excepción de prescripción planteada, se concluye que este medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, toda vez que el traslado de régimen pensional afecta derechos inherentes al ser humano, los cuales, por su naturaleza fundamental, son imprescriptibles. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en pronunciamientos como las sentencias SL 3937-2018, SL 1688-2019 y SL 1949-2021, al reconocer que la acción para solicitar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen no puede estar sujeta a términos de prescripción, dado que no se trata de derechos de carácter patrimonial, sino de garantías esenciales vinculadas a la dignidad humana y a la seguridad social.

Sobre la Imposición de Costas a COLPENSIONES.

El instituto de las costas procesales, consagrado en el artículo 361 del Código General del Proceso (C.G.P.), en concordancia con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T.S.S.), constituye una herramienta jurídica orientada a garantizar la reparación de los gastos razonables en que incurre la parte triunfante en el marco de un litigio, como resultado directo de la actuación procesal de la parte vencida. Este precepto no solo busca resarcir los costos derivados de la defensa de los derechos del litigante victorioso, sino que también desempeña una función disuasiva frente a actuaciones procesales carentes de fundamento o abiertamente temerarias, contribuyendo al principio de eficiencia y celeridad en la administración de justicia.

La Corte Suprema de Justicia, en múltiples pronunciamientos, ha señalado que la imposición de costas encuentra su justificación en el principio de reparación integral y en la necesidad de preservar el equilibrio entre las partes procesales, obligando a quien ha resultado vencido a asumir las consecuencias económicas de su actuación en el proceso.

En el caso sub examine, Colpensiones fue vencida en sus pretensiones. En este contexto, la imposición de costas no solo resulta procedente, sino imperativa conforme al marco normativo aplicable y en atención al principio de reparación económica a favor de la parte vencedora, este despacho considera que es jurídicamente procedente imponer las costas del proceso a COLPENSIONES., incluidas las agencias en derecho, en cuantía que será determinada de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 365 del C.G.P., en aras de garantizar una justa compensación por los gastos razonables asumidos por la parte demandante en la defensa de sus derechos, por lo que la decisión sobre su absolución será revocada para condenar en costas de primera instancia a cargo de Colpensiones.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala procederá a la modificación parcial de la sentencia de primera instancia, confirmando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante. Tal determinación se adopta en observancia estricta del marco normativo y jurisprudencial vigente, atendiendo particularmente al precedente establecido en la sentencia SU-107 de 2024, cuyo alcance y obligatoriedad fueron analizados en el desarrollo del presente litigio.

Así las cosas, se declaran resueltas las apelaciones interpuestas por las partes, estimando parcialmente los argumentos del apelante Porvenir S.A. y Skandia S.A. en lo concerniente a la improcedencia del traslado del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás conceptos no contemplados dentro de los límites señalados por el precedente constitucional. De igual forma, se desestiman las excepciones presentadas por Colpensiones, concluyendo su improcedencia en atención a la fundamentación jurídica previamente desarrollada.

Con lo anterior, se da por agotado el análisis de las cuestiones litigiosas, configurándose la ejecutoria de lo resuelto en los términos que se han indicado, en estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales que subyacen en el régimen de seguridad social integral.

I.1. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad parcial de los recursos presentados por las AFP Porvenir S.A. y Skandia S.A., no se condenará en costas de segunda instancia a esta parte procesal; sin embargo, se condena en costas a Colpensiones a quien no le prosperó el recurso presentado.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,** Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral **TERCERO** de la sentencia proferida el día 31 de octubre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, el cual quedará así:

> ***TERCERO: CONDENAR*** *a* ***SKANDIA ADMINISTRADORA DE PENSIONES*** *Y* ***CESANTÍAS SKANDIA S.A.*** *a transferir a la* ***ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES****, todos los valores que reposan en la cuenta de ahorro individual de la señora* ***MARIA CLAUDIA CARREÑO RODRIGUEZ****, incluidos sus rendimientos financieros y los bonos pensionales. Y deberá entregar a Colpensiones los documentos correspondientes que den cuenta de lo pagado a Colpensiones por la demandante y la documental correspondiente que dé cuenta de lo recibido por AFP PORVENIR S.A., para que se pueda establecer por esta entidad que la devolución se hace en los términos ordenados en esta sentencia y deberá realizarse la devolución a Colpensiones en el término de los 15 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia de conformidad a la parte motiva.*

SEGUNDO: REVOCAR el numeral **CUARTO** de la sentencia proferida el día 31 de octubre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia proferida el día 31 de octubre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

CUARTO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

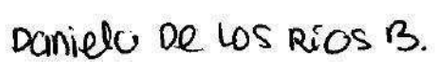
Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará

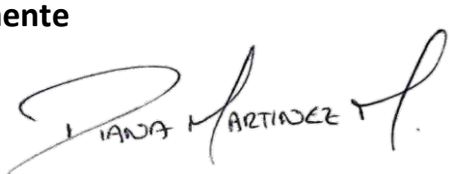
copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 054.



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente



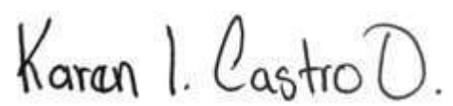


DANIELA DE LOS RIOS BARRERA **DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ**
Magistrada **Magistrada**

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO Y OTRO
Parte demandada	COLPENSIONES
Radicación	11001310501220220054901
Fecha de la decisión	15 DE NOVIEMBRE DE 2023
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	RELIQUIDACIÓN DE INDEMNIZACIÓN
Acta de Discusión	045
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310501220220054901

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, esto es FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO, y la demandada COLPENSIONES; así como también se estudiará el grado de consulta en favor de demandada COLPENSIONES, en razón a la sentencia proferida el día 15 de noviembre de 2023, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 - primera instancia)

Los señores FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO y JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO, quienes actúan a través de apoderado, presentaron demanda contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral, se declare la compatibilidad de la pensión sanción devengada por ambos con la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, así como también se ordene a la demandada, a la reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez incluyendo los periodos de cotizaciones del 01 de abril del 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019 respecto al señor FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO, y al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez respecto al señor JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO, además de condenarla a la cancelación de las sumas de dinero por concepto de intereses moratorios, incluyendo el pago de las costas procesales.

En cuanto a los hechos, señalaron que laboraron al servicio de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y fueron retirados por liquidación de la entidad, razón por la cual actualmente se encuentran devengando una pensión sanción a cargo del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales (fols. 27-32; fols. 75-80).

Posteriormente, refiere que los demandantes, radicaron ante Colpensiones solicitud de reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, teniendo en cuenta todas las semanas cotizadas por parte de FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO (fols. 45-54), y por las 640,43 semanas cotizadas por parte de JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO (fols. 81-89), por los servicios prestados a diferentes empleadores del sector privado.

Frente a estas solicitudes, Colpensiones resolvió negar la indemnización sustitutiva de pensión a JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO mediante resolución SUB322626 de 24 de noviembre de 2022 (fols.129-133), y negar la reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez que fuera reconocida por el extinto ISS a FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO con resolución SUB300957 de 31 de octubre de 2022 (fols. 57-66).

Las pretensiones de la demanda se fundamentan en disposiciones como el artículo 8 de la Ley 171 de 1961 y el artículo 74 del Decreto 1848 de 1961, que reconocen el derecho a la pensión por despido sin justa causa para quienes cumplan con los requisitos de edad y tiempo que para el caso establece la norma citada. Además, citó sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que reconocen la compatibilidad de la pensión especial o proporcional de jubilación con una pensión de vejez obtenida por aportes al sector privado.

Subrayó que, a pesar de que los demandantes ya gozaban de una pensión a cargo del Fondo de pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, la prestación aquí reclamada correspondía exclusivamente a sus aportes en el sector privado, por lo cual ambas pensiones eran compatibles y no debían considerarse como provenientes del Tesoro Público.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 24 de marzo de 2023 y a su vez ordenó la notificación a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO (pdf 03), luego, con providencia del 2 de junio de 2023 (pdf 11), tuvo por contestada la demanda por COLPENSIONES.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 06)

Colpensiones, respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones, proponiendo las excepciones de *prescripción y caducidad*, argumentando que cualquier derecho que eventualmente se hubiese causado en favor del demandante estaría cobijado por el fenómeno de la prescripción; también formuló la excepción de *inexistencia del derecho y de la obligación por falta de reunir los requisitos legales y la imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal*, sosteniendo que lo pretendido por los demandantes es carente de todo asidero jurídico puesto que va en contravía con las normas dispuestas, además de manifestar que no se puede reconocer derechos que no se encuentran dentro del ordenamiento legal; *cobro de lo no debido*, alegando que no adeuda ningún derecho al demandante, ya que no le asiste derecho legal sobre las peticiones solicitadas; *buena fe*, afirmando que siempre ha actuado dentro de los parámetros legales y constitucionales; así como también, *la imposibilidad de condena en costas* toda vez que afirma haber actuado de buena fe; y la declaratoria de otras excepciones, que se reconozcan de oficio.

Arguyó, que existe incompatibilidad pensional entre la pensión que los demandantes reciben del Fondo del pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y la indemnización sustitutiva de vejez que solicitan a Colpensiones. Por esta razón, la entidad sostuvo que no ha incurrido en mora y que no es procedente el reconocimiento de las pretensiones de los demandantes.

Reconoció que el demandante FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO acreditó un total de 4.919 días laborados, correspondientes a 702 semanas, pero señaló que la incompatibilidad entre las pensiones impide el reconocimiento de una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, exponiendo que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, es incompatible recibir simultáneamente una indemnización sustitutiva de vejez con una pensión de vejez. También citó la jurisprudencia de la Corte Constitucional y otras normas, como el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia, que prohíbe la percepción de más de una asignación del Tesoro Público.

Respecto del señor JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO, agrega que de igual manera le fue reconocida la pensión sanción a cargo del Fondo pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y se sostiene en la incompatibilidad de la indemnización sustitutiva de vejez con la pensión de jubilación que se encuentra devengando, con fundamento en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y otras normas, como el artículo 128 de la Constitución Política de Colombia.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 20 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, la operadora judicial a cargo del Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 15 de noviembre de 2023, decidió condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a reconocer y pagar al señor FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO, la reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, que le había sido otorgada a través de la Resolución 100239 del 13 de febrero de 2012, pero solamente teniendo en cuenta los aportes realizados hasta el mes de enero de 2012 en cuantía de $ 7'063.785, también ordenó la indexación al momento de su pago, igualmente, resolvió condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, a reconocer y pagar la indemnización sustitutiva de pensión de vejez al señor JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO, en cuantía única de $ 15'367.949, de la cual ordenó la indexación al momento de su pago. Por último, decidió absolver a Colpensiones de las demás pretensiones de la demanda y la condenó en costas.

Para llegar a esta decisión, la Jueza consideró en primer lugar, que procede la compatibilidad entre la pensión sanción recibida por los demandantes a cargo del Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, y la posible indemnización sustitutiva de pensión de vejez a cargo de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, señalando que son dos fuentes de financiación distintas. En su análisis, la *A Quo* revisó sentencias de la Corte Suprema de Justicia, tales como la SL 5171 de 2021, SL 2161 de 2023, SL 815 de 2021, SL 5792 de 2014, y la SL 4538 de 2018, que abordan la compatibilidad de pensiones y la naturaleza jurídica de los fondos de pensiones. También tuvo en cuenta las disposiciones de la Ley 171 de 1961, la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 224 de 1996, el Decreto 3041 de 1966 y el artículo 128 de la Constitución Nacional.

Luego, respecto a la reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez solicitada por el accionante FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO, la Juzgadora de primera

instancia, constató que le había sido otorgada por el ISS, una indemnización sustitutiva de pensión de vejez mediante Resolución 100239 del 13 de febrero de 2012, por acumular 252 semanas que datan del 01 de agosto de 1999 hasta el 30 de marzo de 2010, sin embargo se detiene el Juzgado a analizar los aportes realizados con posterioridad dada la vinculación del accionante a Ferrocarriles Nacionales del Norte SA - Fenoco SA, empresa que reconoció y pagó de forma retroactiva el 14 de abril de 2022, los aportes a pensión de abril de 2010 a diciembre de 2019, en virtud de una sentencia judicial. Motivos por los cuales el *A quo* accedió a la reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez teniendo en cuenta solo los aportes realizados hasta el 31 de enero de 2012, en virtud de que el empleador no estaba obligado a seguir efectuando las cotizaciones pese a la existencia de una relación laboral. Para arribar a esta determinación, el juzgador se basó en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 5969 de 2021, y en las normas contenidas en los literales C y D del artículo 2º del Decreto 758 de 1990 y en el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001.

Respecto de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez de JOSE LUIS AGURRE SALGADO, el juzgado constata la negativa del ISS de reconocer dicha prestación, decisión plasmada mediante Resolución sub 322626 del 24 de noviembre de 2022, al ser improcedente por encontrarse devengando una pensión a cargo del Fondo pasivo social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, situación que fue aclarada por el juzgador, al señalar la procedencia del reconocimiento y pago de la prestación de indemnización sustitutiva de pensión de vejez en los términos del artículo 37 de la Ley 100 de 1993, al considerar la compatibilidad con la prestación otorgada en virtud de la Ley 171 de 1961.

En razón a la naturaleza de las prestaciones solicitadas por los demandantes, determinó que no es procedente el cobro por concepto de intereses moratorios en virtud de que no se está ante una prestación periódica sino de un pago único como lo es la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, no obstante, ordenó el pago de la indexación de la referida prestación económica.

1.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO (min 42:06 - video 20)

El apoderado del demandante formuló recurso de apelación basando su censura en el reparo único de que la reliquidación de la indemnización sustitutiva debe realizarse incluyendo los aportes a seguridad social correspondientes al 1º de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019. Por esa razón solicita la reliquidación de la indemnización sustitutiva, teniendo en cuenta el pago efectuado a través de cálculo actuarial, por la empresa Fenoco S.A.

1.6. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA (min 46:41 – video 20)

Por otro lado, el extremo pasivo, también interpuso recurso de apelación sosteniéndose en la incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de pensión de vejez e invalidez con la pensión de vejez e invalidez, con fundamento en el artículo 6º del Decreto 1730 de 2001, y el artículo 2º del Decreto 758 de 1990. También se fundamenta en la sentencia C-601 de 2000 de la Corte Constitucional, y la SL 4754 del 2019, en lo relacionado con el cobro de intereses de mora consagrados el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. En ese sentido, solicita se revoque la sentencia y se absuelva a su representada de todas las pretensiones formuladas por los demandantes.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de las partes, el despacho de conocimiento, con auto de 11 de abril de 2024 (pdf 04), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la única que se pronunció al respecto fue la parte demandante, así:

FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO (pdf 05 segunda instancia)

En sus alegatos de conclusión, el apoderado del demandante solicitó la modificación de la condena impuesta a la parte demandada, en el sentido de que en la reliquidación de indemnización sustitutiva se tenga en cuenta todas las semanas cotizadas por el demandante, esto es las semanas cotizadas a partir del 1º de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019. Argumentando la compatibilidad de la pensión sanción con la pensión que eventualmente deba reconocer El I.S.S., debido a que su derecho pensional se causó antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y además porque las referidas prestaciones provienen de diferentes fuentes de financiamiento, pues la primera está a cargo exclusivamente del empleador mientras que la segunda en el ISS.

Su alegación se centró en preceptos jurisprudenciales particularmente en la sentencia STL1198 radicación 82767 del 30 de enero de 2019, y en otras sentencias que determinaron la procedencia de la compatibilidad pensional, como la SL4255-2010, radicado 58608.

En relación con la condena al reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de pensión a favor del señor JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO, manifestó estar conforme con la decisión.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandante.

3.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante y parte demandada, otorgado en favor de las partes el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿es compatible la pensión sanción con la indemnización sustitutiva de pensión de vejez? Y en caso afirmativo ¿debe tenerse en cuenta para la reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, las cotizaciones efectuadas con posterioridad al reconocimiento de dicha prestación?

3.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS (carpeta primera instancia)

Luego de lo anterior, es correcto afirmar que los hechos que se encuentran acreditados son que el demandante FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO se encuentra devengando una

pensión sanción a cargo del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles nacionales de Colombia, a partir del 29 de octubre de 2007 (fols. 27-32); que el señor FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO cumplió 76 años de edad el 29 de octubre de 2023 (fol 24 pdf 01 primera instancia); que el demandante se desempeñó como inspector de vías en la división Santander de Ferrocarriles Nacionales de Colombia desde el 1º de febrero de 1978 al 30 de noviembre de 1991 (fol 33); posteriormente se desempeñó como Caporal I, para la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia sa – Fenoco S.A., desde el 1º de enero de 2007 hasta el 7 de febrero de 2020 (fol 42); así como tampoco se discute, la negativa del reconocimiento de la pensión de vejez y la concesión de una indemnización sustitutiva de pensión de vejez mediante resolución 100239 del 13 de febrero de 2012, emitida por el ISS (fol 34-35); el acumulado de semanas cotizadas por el actor que dan un total de 745,14 semanas desde el 1º de agosto de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2019 (fols 45-54); ni la negativa del reconocimiento de la reliquidación de indemnización sustitutiva de pensión de vejez por parte de Colpensiones (fols. 57-66).

Respecto del demandante JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO, es correcto afirmar que los hechos que se encuentran acreditados son, que cumplió 64 años de edad el 8 de junio de 2024 (fol 70 pdf 01 primera instancia); que se encuentra devengando una pensión sanción a cargo del Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, a partir del 8 de junio de 2020 (fols. 75-80); que acreditó un total de 630 semanas cotizadas a la administradora colombiana de pensiones Colpensiones (fols 81-89); tampoco es de discusión la negativa del reconocimiento de la indemnización sustitutiva por parte de Colpensiones (fols. 129-133).

Teniendo en cuenta lo anterior, se continuará con el estudio y análisis de la Litis que aquí nos ocupa, para la consecuente decisión de fondo.

COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN SANCIÓN CON LA PENSIÓN QUE DEBA RECONOCER EL ISS.

Al respecto resulta necesario hacer hincapié en lo establecido por el artículo 128 constitucional, debido a que esta norma prohíbe que se reciban dos asignaciones del erario público, para ello la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 895 de 2024 del veintitrés (23) de abril de dos mil veinticuatro (2024), con ponencia de la Doctora ANA MARÍA MUÑOZ SEGURA, recordó la interpretación que debe entenderse frente a esta norma superior, señalando que las prestaciones económicas del Sistema General de Pensiones no provienen del tesoro público, así:

> "*Ya en la providencia CSJ SL3452-2022 esta Corporación había señalado que: Con respecto a la doble erogación del tesoro público que afirma la demandante, cabe mencionar que esta Sala ha señalado en varias ocasiones que las prestaciones a cargo del sistema general de pensiones no corresponden a una asignación proveniente del erario, pues son el producto de las cotizaciones efectuadas a lo largo de la vida laboral del trabajador, razón por la cual no hacen parte del presupuesto público y tienen el carácter de recurso parafiscal. Es así como en la sentencia CSJ SL2083-2022 en la que se memoró la SL2170-2019 la Corte explicó: Lo anterior, si se tiene en cuenta que las pensiones de vejez reconocidas por el ISS hoy Colpensiones no son una asignación proveniente del erario, por ser este un mero administrador de modo que la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política no aplica en estos eventos (CSJ SL 24062, 14 feb. 2005, CSJ SL4413-2014, CSJ SL16083-2015, CSJ SL10671-2016).*

Frente a la naturaleza de los recursos administrados por Colpensiones, esta Sala en sentencia CSJ SL 5792 de 2014, reiterada en CSJ SL4538-2018, dijo que:
[…] en relación a si la accionante no puede recibir dos pensiones del erario […], esta Corporación ha dicho que las prestaciones que tienen su fuente en el sistema general de pensiones, no provienen del tesoro público, pues sus recursos ostentan la condición de parafiscales, ya que los mismos son un patrimonio de afectación, es decir, los bienes que lo conforman se destinan a la finalidad que indica la ley; en tal sentido, sobre esos patrimonios no puede ejercerse disposición alguna, razón por la cual, solo se otorga el carácter de administradoras a las entidades que conforman los diferentes regímenes (artículos 52 y 90 de la ley (sic) 100 de 1993), a quienes se confía su gestión."

Por lo anterior, respecto al artículo 128 *ibídem* debe entenderse que los bienes que hacen parte del erario público solo son aquellos que sean de su propiedad, y no los recursos destinados al pago de pensiones y demás prestaciones a su cargo que realicen los afiliados por medio de sus empleadores privados. Y de manera muy precisa lo ha dejado en claro también la Corte Suprema de Justicia en otra oportunidad, con la sentencia SL1198 de 2019, así:

"Lo anterior, toda vez que se avizora que los juzgados incurrieron en una vía de hecho, pues, en primer lugar, si bien es cierto que Colpensiones administra un fondo común, también lo es que este no corresponde al tesoro público y, en segundo término, la pensión sanción al ser asumida por el empleador no choca con la prestación que, eventualmente, deba ser reconocida por el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (…)".

Y respecto de la indemnización sustitutiva de pensión, la Corte Suprema de Justicia en esta sentencia hace la misma apreciación señalando que,

"Ahora, en cuanto a que la pensión sanción del artículo 8 de la Ley 171 de 1961, resulta incompatible con la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, consagrada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, se reitera que la primera es independiente a la que deba reconocer Colpensiones y, por tanto, son a cargo exclusivo del empleador."

De igual manera, lo hizo lo reiteró la Corte en Sentencia STL 233 DE 2023, al referir que:

"En ese orden, es posible afirmar que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez consagrada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 es compatible con la pensión restringida de jubilación del artículo 8.º de la Ley 171 de 1961, en tanto la primera es asumida únicamente por el empleador, mientras que la segunda se financia con los aportes que ha efectuado el trabajador."

Pues bien, en lo que a este asunto interesa y de conformidad con las pruebas obrantes, se advierte que la pensión sanción reconocida a los señores FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO Y JOSÉ LUIS AGUIRRE SALGADO, son independientes de las prestaciones a cargo del ISS, hoy Colpensiones, pues como se puede corroborar con las resoluciones por medio de las cuales les fue reconocida la mentada pensión (fols. 27-32, 75 – 80 pdf 01 primera instancia), esta, en realidad si le fue otorgada y fue reconocida a los actores, con recursos públicos provenientes del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, en atención a las disposiciones del artículo 8 de ley 171de 1961 y el Decreto 1848 de 1969.

Sin embargo, no sucede lo mismo con los aportes que administra en el presente caso la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, pues aquellos derivan de las

cotizaciones que los aquí demandantes realizaron por medio y en razón a haber prestado sus servicios a empresas de carácter particular, tal como se puede verificar con la historia laboral de estos (fols. 45-54, 81-89 pdf 01 primera instancia).

En ese sentido resulta correcto afirmar, que la pensión sanción percibida por los señores convocantes, y la indemnización sustitutiva de pensión de vejez son compatibles, y en consecuencia, no hay razón que justifique la negativa de la demandada, a otorgar la prestación que le corresponde máxime cuando ambos cumplen con los requisito para acceder a ella, en tanto ninguno alcanzó el mínimo de semanas exigidas para ser acreedores a una pensión de vejez, tal como lo trata el artículo 37 de la ley 100 de 1993, al haber cumplido la edad mínima para pensionarse.

Es así que, frente a este aspecto se procederá a confirmar la decisión del *a quo.*

APORTES REALIZADOS DESPUES DEL RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIÓN DE VEJEZ

Tratándose de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, debe señalarse que es una prestación de tipo económico preceptuada en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, mediante la cual a los afiliados al régimen de prima media se les reconoce un monto económico cuando estos cumplen con el requisito de la edad de pensión, pero no cumplen con el requisito de semanas cotizadas que exige la ley, además de manifestar la imposibilidad de seguir cotizando sus aportes.

Asimismo, resulta apropiado traer a colación lo que emana de la legislación aplicable en el reconocimiento de las prestaciones económicas del Sistema General de Pensiones, como lo señala el artículo 2, literal d del Decreto 758 de 1990, así:

> *"Artículo 2° **Personas excluidas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.** Quedan excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte:*
> *(...)*
> *d) Las personas que se hayan pensionado por el Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios o hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común, salvo para el caso de invalidez, que ésta hubiere cesado o desaparecido, en virtud de los programas de readaptación y rehabilitación por parte del Instituto"*

En ese orden de ideas, se entiende que los afiliados a quienes se les haya reconocido una pensión de vejez, invalidez o muerte, o una indemnización sobre el mismo riesgo, quedan excluidos del seguro que cubre estas contingencias, debido a que la administradora le otorgó el reconocimiento y pago de la referida prestación económica.

Por su parte, respecto a los aportes que realice el afiliado al sistema, luego de haber sido otorgada una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, resulta apropiado mencionar, que como lo ha establecido en reiterada jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia, estos aportes se pueden tener en cuenta para otras contingencias, como lo hizo en Sentencia con radicado 34014 del 25 de marzo de 2009 y en Sentencia SL 2053 de 2014, donde indicó lo siguiente:

> *"Consecuente con su reiterada postura, la Sala debe decir que, después de haberse concedido por el ISS una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, si el beneficiario de ésta*

continúa cotizando al Sistema para otras contingencias, no hay impedimento para que las semanas tenidas en cuenta para otorgar dicha indemnización se considera para reconocer otra prestación correspondiente a una contingencia diferente (…)"

De igual manera, es importante traer a colación lo dicho por la Corte Suprema de Justicia en sentencia STL17201-2015, M.P. LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS, donde se enfatiza en la finalidad de los aportes dentro del sistema general de pensiones en el régimen de prima media con prestación definida:

"Lo anterior, por cuanto la lógica de financiación del sistema de prima media con prestación definida, implica conservar los valores cotizados por los afiliados en un fondo común, dado que son los que cimientan su equilibrio económico y garantizan su buen funcionamiento en pos de cumplir con las prestaciones que le asisten a los demás. Si se permitiera que los afiliados pudieran, bajo su simple capricho, obtener cuantas veces quisieran y a título de indemnización lo consignado en materia de aportes, tal circunstancia generaría un colapso al interior de la administración del sistema pensional y desvirtuaría el esquema de reparto simple bajo el cual fue creado, ni qué decir del menoscabo a la sostenibilidad financiera, que vale resaltar, hoy goza de respaldo constitucional (Art. 48 C.P.). "

Luego, en pronunciamiento realizado en Sentencia SL4101 de 2022 con ponencia del Doctor OMAR DE JESÚS RESTREPO OCHOA, del 29 de noviembre de dos mil veintidós (2022), explicó que dichos montos no pueden ser tenidos en cuenta para ser utilizados para el mismo fin, esto es, la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, al expresar que:

"En ese orden, la Corte no encuentra error en el planteamiento del Tribunal, porque, como quedó establecido desde lo fáctico, en el momento en que ella reclamó la indemnización no tenía los requisitos para pensionarse por vejez, luego, el reconocimiento de la indemnización sustitutiva se apegó a lo que expresamente manifestó la actora.

*A lo manifestado se suma que, al recibir la prestación subsidiaria, la censora agotó la cobertura por el riesgo de vejez, de modo que, según la jurisprudencia de la Sala, no podría aspirar a que las cotizaciones posteriores a ese pago se pudieran acumular al mismo riesgo, por el contrario, se ha ilustrado por esta Sala que podrían utilizarse para estructurar el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia**, pero ya no para los fines que persigue la iniciadora del litigio**.*

*Para ilustrar lo dicho, téngase en cuenta que esta corporación, en la providencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 35896, ya concluyó que la solicitud y posterior recepción de la indemnización sustitutiva de la prestación por vejez tiene plena eficacia —salvo que, en la fecha en que se solicitó ese reconocimiento, de manera efectiva, la persona afiliada hubiera alcanzado la densidad de aportes para pensionarse—; también se le dio a ese acto la consecuencia de hacer imposible la suma de las semanas que fueron incluidas en su cálculo, con las que se lleguen a cotizar posteriormente, pero para efectos de obtener el crédito de vejez, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 1730 de 2001, norma que no ha sido declarada inexequible. De esa manera, no se avizora una excepción por el hecho de que la persona resarcida haya seguido contribuyendo en pensiones, ante la ausencia de objeción de Colpensiones, **toda vez que la afiliación al sistema continúa, pero para efectos de cubrir los otros riesgos amparados por las administradoras pensionales, como la invalidez o la muerte**. Este punto ha sido ampliamente reproducido desde las providencias CSJ SL, 24 may. 2011, rad. 39504 y CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 37902, que, entre otros casos, han sido reiteradas en la CSJ SL2648-2022" (Subraya y negrita por fuera)*

Del caso sub-examine, se tiene acreditado que a través de Resolución No. 100239 del 13 de febrero de 2012, al demandante, FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO (fols 34-35 pdf 01 primera instancia); le fue negada la pensión de vejez por no cumplir con el requisito de semanas cotizadas, por lo tanto, el ISS procedió a reconocer la indemnización sustitutiva de pensión solicitada por el afiliado, además, por existir manifestación expresa de la imposibilidad de seguir cotizando al sistema pensional y solicitando dicha prestación (fols 189 – 190 pdf 12 primera instancia). Ello teniendo en cuenta únicamente las cotizaciones realizadas a partir de 01 de agosto de 1999 hasta el 30 de marzo de 2010.

Luego, según el demandante, la empresa Ferrocarriles del Norte Colombia S.A., por orden judicial, realizó aportes al sistema general de pensiones, a través de cálculo actuarial, respecto a los tiempos laborados por el demandante, desde el 1º de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2019, sin que dicha orden judicial se logre avizorar en el plenario ni demostrado por el demandante; sin embargo, la Sala avizora que dichos aportes si fueron realizados por tal empleado de manera posterior, como se puede concluir de la historia laboral del actor, pagados en el mes de febrero de 2022.

De esta manera, se puede inferir inicialmente, que le asiste derecho al demandante a la reliquidación de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, por las cotizaciones realizadas con posterioridad, pero respecto a los aportes anteriores al reconocimiento de la mentada indemnización, esto es anteriores a febrero de 2012, como en efecto lo ordenó la *A Quo*.

Con todo y siguiendo los preceptos jurisprudenciales, es dable concluir que no es procedente la reliquidación apelada, toda vez que al señor Florencio Muñoz Chaparro le había sido reconocida la indemnización sustitutiva de pensión de vejez debido a que no alcanzó los requisitos para la pensión y a su vez manifestó la imposibilidad de seguir cotizando para la referida prestación; por lo tanto, aquellos aportes realizados con posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de pensión, esto es después del 13 de febrero de 2012, están llamados a cubrir contingencias diferentes a la de vejez, pues como bien lo señala la Honorable Corte Suprema de Justicia, permitir que los afiliados puedan acceder a una indemnización por la misma contingencia cada vez que hayan reunido las semanas, generaría un colapso en la administración del sistema pensional, además de terminar afectándose el principio de sostenibilidad financiera que rige en este sistema.
Finalmente, y dado el grado de consulta en favor de la demandada Colpensiones, esta Sala, en apoyo del equipo liquidador del Tribunal, una vez realizada y revisada la liquidación de la indemnización sustitutiva de los demandantes, se da cuenta que la misma se encuentra errada, pues el promedio ponderado, en ambos casos, resultó ser menor, en el caso del señor JOSE AGUIRRE de 9,813% y del señor FLORENCIO MUÑOZ de 12.585%, como se pasa a ver a continuación:

DEMANDANTE : JOSE AGUIRRE
DEMANDADO: COLPENSIONES

Cálculo Toda La Vida Laboral							
AÑO	**Nº. Días**	**IPC inicial**	**IPC final**	**Factor de indexación**	**Sueldo promedio mensual**	**Salario actualizado**	**Salario anual**
1979	253	0,560	111,410	198,946	$ 3.835,26	$ 763.011,00	$ 6.434.726,00
1980	281	0,720	111,410	154,736	$ 4.410,00	$ 682.386,00	$ 6.391.682,00
1981	335	0,900	111,410	123,789	$ 5.790,00	$ 716.738,00	$ 8.003.574,00
1993	332	12,140	111,410	9,177	$ 89.070,00	$ 817.404,00	$ 9.045.938,00
1994	222	14,890	111,410	7,482	$ 149.228,63	$ 1.116.559,00	$ 8.262.537,00
1995	360	18,250	111,410	6,105	$ 183.094,25	$ 1.117.728,00	$ 13.412.736,00
1996	294	21,800	111,410	5,111	$ 176.741,01	$ 903.244,00	$ 8.851.791,00
1997	360	26,520	111,410	4,201	$ 172.005,00	$ 722.590,00	$ 8.671.080,00
1998	3	31,210	111,410	3,570	$ 204.000,00	$ 728.217,00	$ 72.822,00
2011	91	73,450	111,410	1,517	$ 530.307,69	$ 804.378,00	$ 2.439.947,00
2012	330	76,190	111,410	1,462	$ 566.700,00	$ 828.666,00	$ 9.115.326,00
2013	360	78,050	111,410	1,427	$ 589.500,00	$ 841.463,00	$ 10.097.556,00
2014	360	79,560	111,410	1,400	$ 616.000,00	$ 862.601,00	$ 10.351.212,00
2015	360	82,470	111,410	1,351	$ 644.350,00	$ 870.462,00	$ 10.445.544,00
2016	291	88,050	111,410	1,265	$ 673.201,20	$ 851.804,00	$ 8.262.499,00
2017	181	93,110	111,410	1,197	$ 733.779,34	$ 877.998,00	$ 5.297.255,00
Total días	**4413**	**Total devengado actualizado a**				**2022**	**$ 125.156.225,00**
Semanas Cotizadas S.C.	630,43	Salario Base de La Liquidación Promedio Semanal - S.B.L.P.S.					$ 198.525,62
		Promedio Ponderado De Los Porcentajes de Cotización P.P.C.					9,813%
		VALOR INDEMNIZACION SUSTITUTIVA a				**2022**	**$ 12.281.220,00**

DEMANDANTE : FLORENCIO MUÑOZ
DEMANDADO: COLPENSIONES

Cálculo Toda La Vida Laboral							
AÑO	**Nº. Días**	**IPC inicial**	**IPC final**	**Factor de indexación**	**Sueldo promedio mensual**	**Salario actualizado**	**Salario anual**
1999	54	36,420	76,190	2,092	$ 748.555,56	$ 1.565.965,00	$ 2.818.737,00
2000	31	39,790	76,190	1,915	$ 783.354,84	$ 1.499.970,00	$ 1.549.969,00
2002	121	46,580	76,190	1,636	$ 331.989,01	$ 543.028,00	$ 2.190.213,00
2003	181	49,830	76,190	1,529	$ 682.038,67	$ 1.042.836,00	$ 6.291.777,00
2004	30	53,070	76,190	1,436	$ 358.000,00	$ 513.963,00	$ 513.963,00
2005	10	55,990	76,190	1,361	$ 103.871,70	$ 141.346,00	$ 47.115,00
2006	112	58,700	76,190	1,298	$ 823.366,07	$ 1.068.693,00	$ 3.989.787,00
2007	360	61,330	76,190	1,242	$ 1.017.833,33	$ 1.264.450,00	$ 15.173.400,00
2008	360	64,820	76,190	1,175	$ 1.251.833,33	$ 1.471.416,00	$ 17.656.992,00
2009	360	69,800	76,190	1,092	$ 1.321.750,00	$ 1.442.753,00	$ 17.313.036,00
2010	360	71,200	76,190	1,070	$ 1.318.916,67	$ 1.411.352,00	$ 16.936.224,00
2011	360	73,450	76,190	1,037	$ 1.337.000,00	$ 1.386.876,00	$ 16.642.512,00
2012	31	76,190	76,190	1,000	$ 1.413.000,00	$ 1.413.000,00	$ 1.460.100,00
Total días	**2370**	**Total devengado actualizado a**				**2012**	**$ 102.583.825,00**
Semanas Cotizadas S.C.	338,57	Salario Base de La Liquidación Promedio Semanal - S.B.L.P.S.					$ 302.990,20
		Promedio Ponderado De Los Porcentajes de Cotización P.P.C.					12,585%
		VALOR INDEMNIZACION SUSTITUTIVA a				**2012**	**$ 12.909.763,00**

Por tanto, se modificarán los numerales primero y segundo de la Sentencia, para otorgar al señor FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO el valor de ($12.909.763) como indemnización sustitutiva, menos el valor de ($8.573.283) que previamente fue otorgado por la demandada como indemnización, resultando un valor de ($4.336.480). Y para el señor JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO, un valor total de ($12.281.220).

DE LOS INTERESES MORATORIOS

Resulta apropiado traer a colación lo que emana de la legislación aplicable en los casos en que se logre demostrar la mora en el pago de la pensión, como lo es el artículo 141 de la ley 100 de 1993:

"ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 10. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago."

Al respecto, cabe memorar lo que ha estipulado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral al establecer que los mismos proceden en retardo de una mesada pensional sin ninguna distinción[1], señalando además que ello no se configura como una sanción para el deudor, sino como una reparación al pago tardío de dicha prestación[2].

Sobre este tópico, este Despacho no se detendrá hacer mayores apreciaciones teniendo en cuenta que la decisión del *a quo* fue de absolver a la parte demandada del cobro de intereses de mora al tratarse de prestaciones económicas de un solo pago, además de que tal absolución tampoco fue motivo de apelación por la parte demandante.

Por lo anterior, se confirma la decisión de primer grado, por lo motivos anteriormente expuestos, respecto a este punto.

EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR COLPENSIONES

La demandada COLPENSIONES, al contestar el escrito inaugural, propuso además las excepciones de fondo que denominó *prescripción y caducidad, inexistencia del derecho y de la obligación por falta de reunir los requisitos legales y la imposibilidad jurídica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal*; *cobro de lo no debido, buena fe*, *la imposibilidad de condena en costas,* sin que ninguna de ellas alcance prosperidad porque con ellas se buscaba enervar las pretensiones elevadas por la parte activa de la Litis y ello, como ya se analizó, no ocurrió.

En lo que respecta a la excepción de *prescripción*, de conformidad con lo estatuido en los artículos 488 y 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., y teniendo en cuenta que el actor FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO, elevo la reclamación administrativa el 11 de mayo de 2022, y el señor JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO la realizó el 7 de julio de 2022, y la demanda las interpusieron el 30 de noviembre de 2022, se constata que esta no operó.

3.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, teniendo en cuenta que no prosperó recurso alguno presentado por las partes, no se dispone condena en costas en esta instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

---

[1] Sentencia SL 1440 de 2018, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.
[2] Sentencia SL 2546 de 2020, Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral.

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia proferida el día 15 de noviembre de 2023, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído. Mismos que quedarán así:

> ***PRIMERO**: **CONDENAR** a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor FLORENCIO MUÑOZ CHAPARRO la reliquidación de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue otorgada a través de la resolución 100239 del 13 de febrero de 2012, en cuantía única de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA ($4.336.480), la cual deberá indexarse al momento de su pago, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.*
>
> ***SEGUNDO**: **CONDENAR** a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor JOSE LUIS AGUIRRE SALGADO la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez en cuantía única de DOCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS ($12.281.220), la cual deberá indexarse al momento de su pago, según lo dicho en esta sentencia.*

SEGUNDO. SIN LUGAR a condenar en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 045.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MARÍA DEL CARMEN ROSA MORALES VILLAMIL
Parte demandada	NET COM CO S.A.S.
Radicación	11001310501620190061601
Fecha de la decisión	01 DE AGOSTO DE 2023
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	DESPIDO INDIRECTO
Acta de Discusión	055
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310501620190061601

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en razón de la sentencia proferida el día 01 de agosto de 2023, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 02 primera instancia)

María Carmen Rosa Morales Villamil, quien actúa a través de su apoderado, presentó demanda contra NET COM CO S.A.S., pretendiendo por esta vía ordinaria laboral el reconocimiento y pago de diversas acreencias laborales derivadas de la relación laboral que sostuvo con la demandada. La actora afirma que inició labores el 20 de abril de 2017, desempeñándose como auxiliar contable bajo un contrato a término indefinido, percibiendo un salario mensual de un millón de pesos ($1.000.000) más subsidio de transporte, que fue ajustado a un millón ciento cincuenta y nueve mil pesos ($1.159.000) en 2018. La relación laboral finalizó el 30 de marzo de 2018, según la demandante, por causas atribuibles al empleador, quien incumplió con sus obligaciones legales, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales y cesantías.

En sus pretensiones, la actora solicita, entre otras, que se declare que la terminación del contrato de trabajo fue por despido indirecto atribuible al empleador, y que, como consecuencia, se condene a NET COM CO S.A.S. al pago de indemnizaciones por

despido sin justa causa, sanción moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales, así como indemnización por la mora en la consignación de las cesantías correspondientes al año 2017. Además, exige el pago de los intereses causados y de las costas procesales.

Fundamenta su demanda en los artículos 57, 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, argumentando que el empleador incumplió con su deber de pagar oportunamente las obligaciones salariales y prestacionales, vulnerando derechos irrenunciables del trabajador. También invoca el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 respecto a las consecuencias de la mora en la consignación de las cesantías. La demandante asegura haber realizado un requerimiento escrito en septiembre de 2019 al correo electrónico registrado por la empresa, sin obtener una respuesta satisfactoria. Considera que el empleador actuó de mala fe al no cumplir con sus obligaciones, lo que constituye un desmedro patrimonial en su contra.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 29 de enero del 2020 (pdf 01, fl. 25); luego, mediante auto del 28 de junio del 2021 (pdf 01, fl. 45) se ordenó el emplazamiento de la sociedad demandada, así como se procedió con la designación de Curador Ad-Litem para que representara a la accionada; finalmente con providencia del 17 de mayo del de 2023 (pdf 03), tuvo por contestada la demanda por **NET COM CO S.A.S.**, y fijó fecha para celebración de audiencia de tratan los artículo 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. NET COM CO S.A.S. (PDF 01, FLS. 71-73)

NET COM CO S.A.S., representada en este proceso por el curador ad litem, respondió la demanda indicando que no le constan los hechos afirmados por la parte demandante, justificando esta postura en la imposibilidad de establecer contacto con la sociedad demandada. En consecuencia, manifestó que se atiene a lo que se demuestre dentro del proceso.

Respecto a las pretensiones, expresó oposición frente a cada una, argumentando que corresponde a la parte accionante acreditar la existencia del vínculo laboral y la certeza de sus afirmaciones, señalando que las pruebas documentales aportadas no permiten extraer evidencia suficiente que respalde dichas afirmaciones. Como excepciones, propuso la inexistencia de la obligación, el cobro de lo no debido, la buena fe, la compensación y la prescripción, resaltando que su defensa está condicionada por la falta de material probatorio que sustente sus argumentos.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 15 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del

primero (1°) de agosto de 2023, decidió absolver a NET COM CO S.A.S., hoy en liquidación, de todas las pretensiones formuladas por la demandante, María del Carmen Rosa Morales Villamil. Así mismo, declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por el curador ad litem y se abstuvo de pronunciarse sobre las demás excepciones planteadas, sin condena en costas.

El fallo se fundamentó en que la parte demandante no logró demostrar los elementos esenciales del contrato de trabajo, tales como la prestación personal del servicio, los extremos temporales de la relación laboral y el salario pactado. Si bien la actora afirmó haber iniciado labores el 20 de abril de 2017 y terminado el contrato el 30 de marzo de 2018 bajo un contrato a término indefinido, no se aportaron pruebas documentales ni testimoniales que permitieran acreditar estas afirmaciones. El único material probatorio presentado correspondió a documentos elaborados por la propia demandante, que carecían de fuerza probatoria para acreditar los hechos alegados.

En términos jurídicos, el juzgado destacó que, conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, corresponde al trabajador demostrar la prestación personal del servicio como base para la presunción del contrato de trabajo. Al no haberse cumplido esta carga probatoria, resultó imposible para el despacho inferir la existencia de la relación laboral o de las obligaciones derivadas de esta. Además, el curador ad litem, en calidad de representante procesal de la demandada, carecía de facultades para aportar pruebas o confesar hechos, lo que limitó aún más el alcance del debate probatorio. Por estas razones, el juzgado concluyó que no había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE (min 01:19:25 video 05)

El apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación, señalando que la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia fue errónea al considerar que no se demostró la existencia de la relación laboral. Argumentó que las pruebas aportadas, incluyendo el interrogatorio de parte, evidenciaban la prestación personal de servicio, la subordinación y el salario, elementos esenciales del contrato de trabajo. Además, destacó que la demandante explicó detalladamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la relación laboral, y señaló maniobras dilatorias del empleador, como la no entrega de documentos contractuales y recibos de pago, lo que imposibilitó aportar pruebas adicionales.

El apelante también cuestionó el incumplimiento del deber del juez de primera instancia de aplicar la carga dinámica de la prueba, conforme a la sentencia SU-129 de 2021 de la Corte Constitucional. Alegó que el juez debió adoptar medidas activas para superar las incertidumbres probatorias, especialmente considerando que la empresa demandada estaba en liquidación y representada por un curador ad litem. Solicitó que, en virtud de estos argumentos, se revoque la decisión absolutoria y se acceda a las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Concluido el trámite en esta instancia y sin advertirse causal de nulidad que afecte la validez de lo actuado, procede la Sala a analizar la decisión objeto de apelación presentada por la parte demandante. Mediante auto del 2 de octubre de 2024 (PDF 05), este despacho avocó conocimiento del proceso, el cual contaba con auto admisorio del recurso emitido el 7 de junio de 2024 (pdf 03), disponiendo el traslado a las partes para la presentación de sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; se advierte que ninguna de las partes ejerció dicho derecho, omitiendo así pronunciarse sobre los aspectos objeto de debate en esta instancia.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentra plenamente acreditada, a partir de las pruebas aportadas al proceso, la existencia de una relación laboral entre las partes, considerando los elementos esenciales del contrato de trabajo previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, los principios de primacía de la realidad y presunción de la relación laboral?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En un proceso judicial ordinario laboral, la determinación de los hechos no controvertidos constituye una etapa procesal esencial para delimitar el ámbito del litigio y centrar el análisis probatorio. No obstante, en el presente caso, dicha labor resulta impracticable debido a que la contestación de la demanda fue presentada por un curador ad litem, quien, al ser designado en virtud de la imposibilidad de contacto con la parte demandada, manifestó que no le constaba ninguno de los hechos expuestos en la demanda. Esta circunstancia procesal, caracterizada por la ausencia de una defensa sustantiva por parte del extremo demandado, introduce una complejidad adicional al momento de valorar los hechos y las pruebas.

La apelación presentada por la parte demandante plantea cuestionamientos específicos relacionados con la valoración probatoria efectuada en la primera instancia. Según la apelante, el juzgado de conocimiento incurrió en un error al no reconocer la existencia de la relación laboral invocada, a pesar de los elementos aportados y las afirmaciones realizadas en el proceso. Además, aduce que no se respetó el principio de carga dinámica de la prueba, conforme a la doctrina establecida por la Corte Constitucional, en particular, en la sentencia SU-129 de 2021, que enfatiza la labor activa del juez en la búsqueda de la verdad material,

especialmente en contextos donde una de las partes se encuentra en condiciones de vulnerabilidad probatoria.

En atención a lo anterior, resulta imprescindible abordar, en primer término, un análisis normativo que delimite los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables a este tipo de procesos, en particular los principios que rigen la carga probatoria y la dirección judicial del proceso laboral. Este análisis incluirá el alcance del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que consagra los elementos esenciales del contrato de trabajo, así como las disposiciones constitucionales y legales que establecen el principio de primacía de la realidad y la presunción de la existencia de una relación laboral.

Posteriormente, se procederá a la verificación del acervo probatorio allegado al expediente, evaluando de manera técnica y rigurosa si los documentos, declaraciones y demás medios de prueba permiten inferir razonablemente la configuración de los elementos esenciales de la relación laboral alegada. En este examen, se valorará la pertinencia, la suficiencia y la eficacia probatoria de los elementos aportados, teniendo en cuenta las particularidades del proceso, la ausencia de defensa activa por parte de la demandada y los estándares de valoración probatoria exigidos en el marco del derecho laboral.

Análisis de la Configuración, Prueba del Contrato de Trabajo: Elementos Esenciales y Carga Probatoria en el Derecho Laboral

El contrato de trabajo, según lo establece el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), es un acuerdo mediante el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo subordinación y a cambio de una remuneración. Este vínculo constituye el eje fundamental del derecho laboral, diferenciándose de otras figuras contractuales por su naturaleza de orden público y la prevalencia de derechos mínimos e irrenunciables del trabajador. Conforme al artículo 23 del CST, los elementos esenciales del contrato de trabajo son la prestación personal del servicio, que debe ejecutarse directamente por el trabajador sin posibilidad de delegación; la subordinación, entendida como la facultad del empleador de impartir órdenes y controlar las condiciones en las que se realiza el trabajo; y la remuneración, que es la contraprestación económica recibida por el trabajador. La presencia de estos elementos define la existencia de una relación laboral, independientemente del nombre o las formalidades que las partes atribuyan al vínculo, en aplicación del principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas, consagrado en el artículo 53 de la Constitución.

En cuanto a su prueba, el contrato de trabajo puede acreditarse por cualquier medio probatorio idóneo, en virtud del principio de libertad probatoria consagrado en el artículo 165 del Código General del Proceso (CGP). Pruebas documentales, testimoniales, declaraciones de las partes y cualquier otro medio que genere convicción son válidos para establecer los elementos esenciales del contrato. Adicionalmente, el artículo 24 del CST establece una presunción de laboralidad, según la cual toda relación de trabajo personal se presume realizada mediante un contrato de trabajo, salvo que el empleador demuestre lo contrario. Por lo tanto, el

trabajador únicamente debe probar la prestación personal del servicio, y una vez acreditado este hecho, la carga de desvirtuar la presunción recae en el empleador, quien debe demostrar, entre otros aspectos, que la relación no fue subordinada, que la prestación del servicio no tenía carácter remunerado o en su defecto, que cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

En materia procesal, la carga probatoria en los litigios laborales sigue los lineamientos del artículo 167 del CGP, según el cual quien afirma hechos que fundamentan sus pretensiones debe probarlos. Sin embargo, en el ámbito laboral, este principio se complementa con la doctrina de la carga dinámica de la prueba, que establece que esta debe recaer en la parte que esté en mejores condiciones de probar el hecho controvertido. La Corte Suprema de Justicia ha señalado de manera reiterada que al trabajador corresponde demostrar la prestación personal del servicio, los extremos temporales de la relación laboral y, en caso de alegarlo, las circunstancias del despido. Por su parte, al empleador le compete probar la inexistencia de subordinación, la naturaleza distinta del vínculo y/o el cumplimiento de sus obligaciones legales.

Caso concreto

Una vez delimitadas las cargas probatorias que recaen sobre cada parte dentro del proceso laboral, resulta indispensable proceder a la evaluación del acervo probatorio aportado por la parte actora, el cual incluye: (i) una liquidación laboral confeccionada con miras a la presentación de la demanda; (ii) una copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandada NET COM CO S.A.S.; y (iii) una copia de la reclamación remitida por la señora Carmen Rosa Morales Villamil a la sociedad demandada, en la que presuntamente se solicitaba el pago de las acreencias laborales adeudadas.

Respecto del cuadro de liquidación laboral, se advierte que este constituye un documento carente de cualquier firma, identificación o elemento que le confiera autenticidad o fuerza probatoria. Dicho documento, elaborado ex profeso para los fines de la presente demanda, carece de la objetividad necesaria para servir como medio probatorio idóneo, pues no contiene respaldo externo que permita considerarlo siquiera como un indicio que acredite la existencia de la relación laboral invocada. En cuanto a la carta de reclamación dirigida a la demandada, esta no permite inferir la configuración de una relación laboral entre las partes, toda vez que no obra en el expediente respuesta alguna por parte de NET COM CO S.A.S. que pueda interpretarse como un reconocimiento o aceptación de los hechos allí expuestos. Así las cosas, los documentos presentados por la demandante carecen de suficiencia probatoria para acreditar siquiera la prestación personal del servicio, elemento esencial para activar la presunción de laboralidad consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

Es preciso destacar que los documentos elaborados unilateralmente por la demandante no constituyen prueba válida ni generan convicción sobre los hechos alegados. Tal como se ha señalado, la accionante contaba con plena libertad probatoria para demostrar la prestación personal del servicio, pudiendo haber recurrido a testimonios de terceros, registros de pagos, constancias de afiliación a la

seguridad social, correos electrónicos, mensajes de texto u otros documentos que, de manera objetiva, evidenciaran la existencia de la relación jurídica entre las partes. La omisión de estos medios de prueba implica un incumplimiento de la carga mínima exigida para acreditar la prestación personal del servicio, lo que imposibilita la aplicación de la presunción de laboralidad.

En el marco del interrogatorio de parte rendido por la demandante, esta manifestó que, en la actualidad, se dedica a brindar asesorías contables a diversas empresas en modalidad de tiempo parcial. En relación con la supuesta relación laboral que sustentó su demanda, afirmó haber sido contratada por el señor Samuel Rojas para prestar servicios en la empresa NET COM CO S.A.S. y que dicho vínculo se formalizó mediante un contrato escrito. Sin embargo, sostuvo que el documento nunca le fue entregado a pesar de haberlo solicitado en reiteradas oportunidades, alegando que la firma del contrato se realizó por instrucción de una asesora vinculada a la empresa, pero que el empleador se negó a proporcionarle copia del mismo.

Sobre las condiciones de ejecución del trabajo, indicó que su cargo era el de auxiliar contable, desempeñando funciones relacionadas con la contabilidad de la empresa en un horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m., de lunes a viernes, y los sábados en jornada rotativa con su compañera Andrea Rincón, a quien señaló como testigo de su labor, junto con otros operarios y trabajadores administrativos, sin precisar nombres adicionales ni aportar información de contacto que permitiera su localización para efectos probatorios. Expuso que su jefe directo era el señor Samuel Rojas, de quien recibía instrucciones en el ejercicio de sus funciones.

Respecto de la terminación de la relación laboral, la demandante afirmó que esta tuvo lugar a inicios del año 2018 y que la situación económica de la empresa se tornó crítica, generando retrasos en el pago de salarios. Indicó que, en reiteradas ocasiones, solicitó el pago de sus remuneraciones, obteniendo como respuesta que no había disponibilidad de recursos, a pesar de que, según su conocimiento, ingresaban sumas de dinero que oscilaban entre 10 y 20 millones de pesos. Relató que el empleador le ofrecía pagos parciales mediante vales, cuyos montos variaban entre 100.000 y 150.000 pesos, manifestándole que no era posible cancelarle de manera íntegra. Sostuvo que estos pagos fraccionados se extendieron hasta el 30 de mayo del año 2018, fecha a partir de la cual el empleador dejó de efectuarle pagos.

Al ser interrogada sobre la ausencia de pruebas documentales que acreditaran estos pagos parciales, indicó que los vales eran firmados por ella, pero que las copias quedaban en poder de la empresa y que no le fue posible obtener duplicados de estos. Asimismo, manifestó que su salario le era pagado en efectivo en la mayoría de los casos y que las consignaciones bancarias eran esporádicas, sin aportar pruebas que acreditaran dichos pagos o la existencia de la relación laboral alegada. Finalmente, al ser cuestionada sobre la falta de documentación adicional que respaldara sus afirmaciones, reiteró que los documentos se encontraban bajo el control del empleador y que, en consecuencia, no contaba con soportes que evidenciaran la existencia del vínculo laboral ni la forma en que se efectuaban los pagos.

En lo que respecta al interrogatorio de parte rendido por la demandante, es necesario precisar que este no puede ser considerado como prueba de la existencia de la relación laboral, toda vez que las manifestaciones de la propia parte no constituyen prueba en su favor. En materia probatoria, el interrogatorio de parte tiene la finalidad de obtener la confesión, más no de generar elementos que respalden su versión de los hechos en ausencia de otros medios de prueba. En este sentido, las afirmaciones vertidas en el interrogatorio no tienen la aptitud jurídica para demostrar la prestación personal del servicio ni los extremos temporales de la relación laboral, ya que se trata de un medio que, por su naturaleza, no puede fundamentar una decisión en favor de la parte que lo rinde. Así, no resulta viable pretender que el solo dicho de la demandante sea suficiente para acreditar un hecho cuya demostración, en virtud de la distribución de la carga probatoria, le correspondía respaldar con elementos objetivos adicionales.

En este contexto, los argumentos de apelación carecen de fundamento, pues no basta con la mera alegación de hechos que solo constan a la parte demandante; estas afirmaciones deben estar respaldadas por pruebas que, aunque someras, ofrezcan indicios razonables de su ocurrencia. La ausencia de tales elementos probatorios desvirtúa la pretensión de que se haya impuesto una carga probatoria desproporcionada a la accionante. Cabe enfatizar que no se le exigía demostrar la subordinación o la remuneración, sino tan sólo la prestación personal del servicio, elemento sobre el cual recaía su carga probatoria inicial. La incapacidad de cumplir con esta exigencia mínima, razonable y proporcionada, conduce inevitablemente a la desestimación de sus pretensiones, corroborando que el juicio de primera instancia no incurrió en error alguno en cuanto a la valoración de las pruebas y la distribución de la carga probatoria.

Ante la imposibilidad primigenia de demostrar la existencia de la relación laboral, resulta igualmente inviable la determinación de un despido indirecto, como lo plantea la demandante. El despido indirecto presupone necesariamente la configuración previa de un contrato de trabajo, pues este solo puede derivarse de una relación laboral válida y existente. En ausencia de pruebas que acrediten la prestación personal del servicio y los elementos esenciales del vínculo laboral, no es posible establecer que se haya producido un incumplimiento grave por parte del empleador que justifique la terminación unilateral del contrato por parte del trabajador. En consecuencia, el alegato de la demandante carece de sustento probatorio suficiente, lo que imposibilita que prospere su pretensión en esta instancia.

En el marco del análisis del proceso y de las actuaciones realizadas por el juez de primera instancia, resulta indispensable evaluar si las decisiones adoptadas se enmarcaron en el cumplimiento de los deberes procesales y en la garantía de los derechos de las partes. La apelación presentada sostiene que el juez no desplegó una actividad suficiente para esclarecer los hechos controvertidos, lo que, según el apelante, habría derivado en un desconocimiento de los principios de dirección activa y búsqueda de la verdad material. Sin embargo, tras una revisión minuciosa de las actuaciones procesales y del acervo probatorio allegado, este despacho encuentra que las decisiones y diligencias realizadas se ajustaron plenamente a los lineamientos legales y jurisprudenciales aplicables.

Se concluye que el juez de primera instancia obró con la debida diligencia y dentro del marco normativo aplicable, como se desprende del archivo 01 del expediente digitalizado, en el cual consta la realización de las diligencias de notificación personal al demandado y, ante su fracaso, la implementación de la notificación por aviso y el posterior decreto de Curador Ad Litem para darle continuidad al proceso, en estricto cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia. En este orden de ideas, no se advierte sustento alguno para afirmar, como lo sostiene la parte apelante, que el juzgador haya incurrido en omisiones o dejado de adoptar medidas activas en la dirección del proceso.

De igual forma, del examen del interrogatorio de parte rendido por la señora María Carmen Rosa Morales Villamil, se observa que el juez optó por no formular preguntas adicionales, decisión que puede explicarse por considerar que los aspectos sustanciales ya habían sido suficientemente abordados por el abogado del curador ad litem, o porque estimó que las declaraciones unilaterales de la demandante, desprovistas de respaldo probatorio objetivo, no podían erigirse en prueba concluyente. Tal actuación resulta jurídicamente admisible y acorde con los postulados de la sana crítica, constituyendo un ejercicio legítimo de su facultad de valoración probatoria.

En consecuencia, este despacho no encuentra mérito para acoger los argumentos del apelante y, por el contrario, confirma en su integridad la sentencia de primera instancia.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandante, se condenará en costas de segunda instancia a favor de la parte demandada.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo la sentencia proferida el día 01 de agosto del 2023, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante y en favor de la demandada.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el

mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 055.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la demandante y a favor de la demandada, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MARTHA DIDIMA AHUMADA CASTAÑEDA
Parte demandada	COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Y OTROS
Radicación	11001310501620210019901
Fecha de la decisión	31 DE ENERO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE
Acta de Discusión	056
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310501620210019901

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en razón de la sentencia proferida el día 31 de enero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La señora Martha Didima Ahumada Castañeda, quien actúa a través de apoderado, presentó demanda contra la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral que se declare su derecho a una pensión mensual vitalicia de sobreviviente por el fallecimiento de su hijo, Miguel Octavio Luque Ahumada. La demandante también busca que se le reconozcan y paguen las mesadas atrasadas desde el 2 de mayo de 2020, fecha de fallecimiento del causante, hasta que sea incluida en la nómina de pensionados, además del pago de los intereses moratorios establecidos en la ley.

Los hechos relevantes indican que el causante, Miguel Octavio Luque Ahumada, quien falleció el 2 de mayo de 2020 a causa de un coma diabético, cotizó en el régimen de prima media administrado por Colpensiones y en el régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por Colfondos, acumulando un total de 566.57 semanas cotizadas. Se afirma que el causante vivía con su madre desde el año 2008 y se

encargaba de los gastos del hogar, hecho que sustenta la dependencia económica de la demandante hacia su hijo fallecido.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la demanda se basa en la protección constitucional que otorga la seguridad social a las personas de la tercera edad, consagrada en los artículos 46 y 48 de la Constitución Política. Se argumenta que la demandada vulneró el derecho a la seguridad social de la señora Ahumada Castañeda al negar la prestación, al no aplicar correctamente los artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, que establecen que, a falta de cónyuge e hijos con derecho, los padres del causante son beneficiarios de la pensión de sobreviviente si dependían económicamente del fallecido.

Finalmente, la demandante argumenta que la decisión de COLFONDOS de negar la pensión fue arbitraria, dado que no se investigó a fondo la realidad económica del hogar del causante y se basó únicamente en la existencia de su padre, quien no convivía con la madre ni contribuía a su sostenimiento, por lo que solicita que se declare su derecho a la pensión de sobreviviente.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 28 de julio del 2021 (pdf 02), luego, con providencia del 03 de junio del 2022 (pdf 06), tuvo por contestada la demanda por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., y vinculó en condición de tercero excluyente a Octavio Luque Bulla. Posteriormente, mediante auto del 2 de febrero del 2023 (pdf 11), se admite el llamamiento en garantía de la sociedad COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. y, por último, mediante auto del 26 de octubre del 2023 (pdf 15) tuvo por contestado el llamamiento garantía por SEGUROS BOLÍVAR y tuvo por no contestada la demanda por Octavio Luque Bulla.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (PDF 04)

La Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., a través de su apoderada, presentó contestación a la demanda interpuesta por la señora Martha Didima Ahumada Castañeda. En su escrito, COLFONDOS se opone a la prosperidad de las pretensiones de la demandante, negando el derecho a la pensión de sobreviviente solicitada, argumentando que la señora Ahumada no cumplía con los requisitos legales exigidos para acceder a dicho derecho, en particular, la dependencia económica respecto de su hijo fallecido.

En relación con los hechos de la demanda, COLFONDOS manifestó que no le constan la mayoría de los hechos alegados por la demandante, solicitando que se prueben con documentos idóneos. En particular, destacó que no es cierto que la demandante dependiera económicamente de su hijo, ya que, según el informe de la aseguradora Seguros Bolívar S.A., lo devengado por el causante era destinado a cubrir sus propios gastos y era la señora Ahumada quien sostenía el hogar en su totalidad. Asimismo,

señaló que la investigación realizada por la aseguradora concluyó que no se configuraba la dependencia económica reclamada.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la demandada señaló que la señora Ahumada no cumple con los requisitos legales para ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente, establecidos en los artículos 46 y 74 de la Ley 100 de 1993, ya que no se acreditó la dependencia económica respecto del causante. Se argumentó, además, que la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exigen que la dependencia económica no sea meramente ocasional, sino fundamental para la subsistencia del solicitante.

La contestación de COLFONDOS también se fundamenta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, enfatizando que la mera ayuda o apoyo económico del fallecido no es suficiente para demostrar la dependencia económica. De igual manera, la contestación refuerza que la falta de prueba de la dependencia económica desvirtúa la pretensión de la demandante, quien no ha cumplido con la carga probatoria que la ley le impone para acreditar su derecho.

Por último, la apoderada de COLFONDOS solicitó que se absuelva a su representada de las pretensiones de la demanda, sustentando la inexistencia de derecho a la pensión de sobreviviente a favor de la demandante y oponiéndose a cualquier condena de retroactivo pensional, intereses moratorios o costas del proceso.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

I.4.1. COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. (pdf 13)

La Compañía de Seguros Bolívar, contestó la demanda y el llamamiento en garantía en el proceso interpuesto por Martha Didima Ahumada Castañeda contra COLFONDOS. En su contestación, Seguros Bolívar argumenta que la demandante no tiene derecho a la pensión de sobreviviente, ya que no dependía económicamente de su hijo fallecido, Miguel Octavio Luque Ahumada, para la fecha de su fallecimiento. La compañía asegura que la demandante ha fallado en cumplir con el requisito legal de demostrar una dependencia económica sustancial y directa.

La aseguradora sostiene que, según la investigación realizada por la empresa Consultando, fue la demandante quien sufragaba los gastos del hogar en su totalidad, y que el fallecido no se encontraba trabajando al momento de su deceso, ya que su contrato había terminado en marzo de 2020. Además, los informes presentados detallan que los ingresos del hogar provenían principalmente de la señora Ahumada y otros miembros de su familia, como su ex compañero Octavio Luque y su hijo Jorge Andrés Luque Ahumada, quienes también contribuían económicamente. A este respecto, la aseguradora enfatiza que el fallecido solo cubría sus propios gastos personales, lo que desvirtúa la alegación de dependencia.

En respaldo de su posición, Seguros Bolívar se apoya en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, destacando que la dependencia económica no tiene que ser absoluta, pero sí debe demostrarse que los ingresos del causante eran necesarios

para la subsistencia del reclamante. La compañía cita decisiones de la Corte que han señalado que una simple ayuda económica por parte del hijo fallecido no es suficiente para establecer una dependencia que dé lugar al reconocimiento de la pensión de sobreviviente. En este caso, la aseguradora argumenta que no existe prueba de que el señor Luque Ahumada hubiera aportado ingresos esenciales para el sostenimiento de su madre.

Por último, Seguros Bolívar solicita que se la absuelva de todas las pretensiones de la demanda y que se rechace el llamamiento en garantía, argumentando que no existe obligación alguna de pago de pensión de sobreviviente. Además, se opone al pago de intereses moratorios, indexación y costas procesales, ya que considera que ha actuado de buena fe en la administración del seguro previsional, cumpliendo con las obligaciones estipuladas en la póliza.

I.5. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 15 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 31 de enero de 2024, decidió condenar a COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la demandante, Martha Didima Ahumada Castañeda, madre del fallecido Miguel Octavio Luque Ahumada. Ordenó que la pensión debía pagarse desde el 3 de mayo de 2020, con los reajustes anuales y mesadas adicionales previstas por la ley. Asimismo, declaró la obligación de la Compañía de Seguros Bolívar S.A. de sufragar la suma adicional para el financiamiento de la pensión.

El juzgado fundamentó su decisión en la Ley 100 de 1993, que establece los requisitos para acceder a la pensión de sobreviviente, entre ellos haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años previos al fallecimiento. En este caso, se constató que el causante había cumplido con dicho requisito, sumando un total de 95.7 semanas cotizadas en ese periodo, lo que habilita a la demandante para reclamar la prestación.

En cuanto a la dependencia económica, el juzgado valoró las pruebas documentales y testimoniales aportadas, concluyendo que la señora Martha Dídima dependía económicamente de su hijo fallecido. Se destacó que, aunque el causante había dejado de trabajar poco antes de su muerte, seguía siendo el principal proveedor del hogar, y la demandante no contaba con ingresos suficientes para su subsistencia. Asimismo, el juez resaltó que la madre no tenía una fuente de ingresos formal, y los trabajos esporádicos que realizaba no eran suficientes para su manutención.

El juzgado también tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente la sentencia C-111 de 2006, que aclara que la dependencia económica no debe ser total ni absoluta para acceder a la pensión de sobreviviente. Se subrayó que la pérdida del apoyo económico del causante generó un impacto significativo en el nivel de vida de la demandante, lo que reafirma su derecho a la pensión.
Finalmente, se ordenó la indexación del retroactivo pensional, rechazándose el pago de intereses moratorios, al no encontrarse acreditada una mora injustificada por

parte de COLFONDOS. El juzgado también condenó en costas a COLFONDOS, mientras que absolvió a la Compañía de Seguros Bolívar de cualquier condena en costas, limitándose su responsabilidad a la financiación de la pensión conforme a la Ley 100 de 1993.

I.6. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDADA

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (min 01:13:13 video 23)

La apoderada de la demandada COLFONDOS S.A., interpuso recurso de apelación, cuestionando la sentencia de primera instancia que condenó a su representada al pago de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Martha Didima Ahumada Castañeda. En su apelación, argumentó que no se acreditó la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo fallecido, Miguel Octavio Luque Ahumada, ya que, según la reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL2428 de 2023, la simple convivencia no implica necesariamente una dependencia económica total y sustancial.

La apoderada resaltó que, conforme a los testimonios y pruebas documentales, los gastos del hogar eran compartidos por varios miembros de la familia, incluyendo la demandante, su exesposo y otro hijo que aún reside con ellos. Este aspecto, según la apelación, demuestra que el fallecido no era el único que sostenía económicamente a su madre, y que la colaboración económica que brindaba no era indispensable para la subsistencia de la demandante. Además, se destacó que, tras la pérdida de empleo del causante, la demandante asumió la responsabilidad de los gastos del hogar, lo que contradice la tesis de dependencia total.

La apelante también cuestionó los hallazgos de primera instancia que daban por demostrada la dependencia, argumentando que la investigación realizada por la Compañía de Seguros Bolívar reveló que los ingresos de la demandante y otros familiares eran suficientes para garantizar sus necesidades básicas. En consecuencia, no se configuraba el nivel de necesidad exigido por la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, ya que no se probó una situación de vulnerabilidad extrema que justificara la prestación.

Finalmente, la apoderada solicitó al Tribunal Superior de Bogotá la revocatoria total de la sentencia, incluyendo la condena en costas, argumentando que COLFONDOS actuó de buena fe con base en los estudios e investigaciones realizadas, que desvirtuaron la existencia de una dependencia económica real.

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. (min 01:18:26 video 23)

La apoderada de la demandada Seguros Bolívar S.A. interpuso recurso de apelación, cuestionando la totalidad de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá. En su argumentación, señaló que el reconocimiento y pago de pensiones debe sustentarse en la demostración fáctica del cumplimiento de los requisitos legales, y no en deducciones que haga un funcionario judicial. Resaltó que, en este caso, la propia versión de la demandante indicó que el fallecido únicamente

contribuía al pago de servicios menores como el plan de celular y la televisión, lo cual no acredita una dependencia económica real.

La apoderada subrayó que, de acuerdo con los testimonios presentados, no quedó claro cuánto dinero aportaba Miguel Octavio Luque Ahumada al hogar y que las versiones de los testigos eran inconsistentes y basadas en suposiciones. Señaló que la mayoría de los testigos afirmaron creer que el fallecido contribuía al sostenimiento del hogar, pero ninguno aportó detalles precisos sobre los montos ni las circunstancias en las que se realizaban dichos aportes. En cambio, la investigación realizada por la empresa Consultando, no desvirtuada por la demandante, reveló que los gastos principales del hogar eran asumidos por la propia señora Ahumada.

La apelante argumentó que el concepto de dependencia económica fue mal interpretado, confundiendo una colaboración familiar con una verdadera dependencia. Explicó que la coexistencia en un mismo hogar y la contribución de cada miembro para pagar los gastos comunes no implica que la demandante dependiera económicamente del fallecido. Además, destacó que la propia demandante, tras el fallecimiento de su hijo, se fue a vivir con su exesposo y otro hijo, lo que demuestra que no quedó en una situación de indefensión ni necesidad económica extrema.

Finalmente, la apoderada solicitó que se revoque la sentencia en cuanto a las condenas impuestas a Seguros Bolívar, destacando que su responsabilidad solo abarca el pago de la suma adicional necesaria para la pensión de sobreviviente, sin incluir indexaciones ni emolumentos adicionales. Solicitó que el Tribunal Superior de Bogotá revise detenidamente las pruebas, contrastando los testimonios con la investigación realizada, y que se exima a Seguros Bolívar de las responsabilidades que excedan su obligación legal.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, el despacho de conocimiento, con auto de 01 de marzo del 2024 de 2024 (pdf 04), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. (pdf 05 segunda instancia)

La Compañía de Seguros Bolívar, a través de su apoderada Ana María Giraldo Rincón, presentó sus alegatos de conclusión solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia que condenó a la aseguradora al pago de la pensión de

sobreviviente. En su defensa, Seguros Bolívar argumenta que la señora Martha Didima Ahumada Castañeda no dependía económicamente de su hijo fallecido, Miguel Octavio Luque Ahumada, de acuerdo con la investigación realizada por la empresa Consultando S.A.S.

La aseguradora indicó que el causante residía con su madre en Mosquera, Cundinamarca, desde hace aproximadamente cuatro años y siete meses, pero no trabajaba al momento de su fallecimiento, pues su contrato había finalizado en marzo de 2020. Según la investigación, para el momento del fallecimiento, los gastos totales del hogar ascendían a $968,000, los cuales eran cubiertos en su totalidad por la señora Ahumada, quien aportaba los recursos necesarios. Adicionalmente, se afirmó que el señor Luque Ahumada solo cubría sus propios gastos personales, los cuales ascendían a $132,000 mensuales.

En apoyo de su posición, Seguros Bolívar destacó que actualmente los gastos del hogar de la señora Ahumada ascienden a $1,034,000, de los cuales ella aporta $550,000, mientras que su excompañero Octavio Luque y su hijo Jorge Andrés Luque Ahumada contribuyen con $240,000 cada uno. Este análisis, según la aseguradora, evidencia que no existía dependencia económica entre la demandante y su hijo fallecido, lo que desvirtúa el derecho a la pensión de sobreviviente.

Para reforzar su argumento, Seguros Bolívar citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, señalando que la dependencia económica no debe ser absoluta, pero sí debe probarse que los ingresos del causante eran necesarios para la subsistencia del reclamante. En este caso, la mera ayuda económica del fallecido no configura una verdadera dependencia. La aseguradora también subrayó que, según los hechos probados, la señora Ahumada contaba con otras fuentes de ingresos, lo cual hace inaplicable el beneficio de la pensión de sobreviviente.

Por lo tanto, Seguros Bolívar solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se absuelva a la aseguradora de cualquier obligación relacionada con el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, argumentando que no se cumple con los requisitos legales para su procedencia.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (pdf 06 segunda instancia)

La apoderada de COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantías, Nereidys Elena Solano Arévalo, presentó sus alegatos de conclusión solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia que condenó a su representada al pago de la pensión de sobreviviente a la señora Martha Didima Ahumada Castañeda. En su escrito, COLFONDOS argumentó que, tras un análisis detallado de las pruebas y testimonios recaudados, no se demostró que la demandante cumpliera con los requisitos para acceder a dicha prestación, especialmente en lo que respecta a la dependencia económica.

Sostuvo que los testigos aportados por la demandante basaron sus declaraciones en afirmaciones no corroboradas documentalmente, en las que indicaban que el causante sostenía económicamente a su madre. Sin embargo, COLFONDOS señaló

que, en la entrevista realizada por Seguros Bolívar, se contradijo esta versión, ya que el fallecido no aportaba al sostenimiento del hogar, limitándose a cubrir sus propios gastos personales. La investigación administrativa también reveló que la señora Ahumada convivía con su excompañero y sus hijos, quienes también contribuían económicamente al hogar, lo que demuestra que no existía una verdadera dificultad para cubrir sus necesidades básicas.

La apoderada citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, destacando que la dependencia económica no tiene que ser total ni absoluta para tener derecho a la pensión de sobreviviente. No obstante, debe probarse que la falta de los ingresos del fallecido genera una dificultad significativa para la subsistencia del solicitante.

Por lo anterior, COLFONDOS solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y se absuelva a la administradora de pensiones de todas las condenas impuestas, basándose en la falta de prueba de la dependencia económica requerida para la procedencia de la pensión de sobreviviente.

MARTHA DIDIMA AHUMADA CASTAÑEDA (pdf 07 segunda instancia)

El abogado de la demandante, William Ballén Núñez, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia que reconoció la pensión de sobreviviente a favor de la señora Martha Didima Ahumada Castañeda, madre de Miguel Octavio Luque Ahumada. Señaló que quedó demostrado en el debate probatorio que la demandante dependía económicamente de su hijo fallecido, cumpliendo con los requisitos legales para acceder a dicha prestación. La señora Ahumada dejó de trabajar en 2018 y, debido a su edad y problemas de salud, su hijo asumió la responsabilidad de cubrir sus gastos esenciales, como alimentación, vivienda y salud.

Durante el proceso, varios testigos confirmaron que el fallecido asumía la mayor parte de los gastos del hogar, y que los ingresos que la demandante podía obtener a través de trabajos esporádicos de aseo eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Entre ellos, Jorge Andrés Luque Ahumada, hijo de la demandante, declaró que su madre dependía económicamente de Miguel Octavio, y que ni él ni su otro hermano podían contribuir de manera significativa al sostenimiento de su madre.

El abogado refutó los argumentos de las apelantes, quienes afirmaban que la dependencia económica no era absoluta. Basado en jurisprudencia de la Corte Constitucional, explicó que no se requiere una carencia total de ingresos para acceder a la pensión de sobreviviente, sino que basta con demostrar que la falta del apoyo económico afecta el mínimo vital. En este caso, la pérdida del sustento de Miguel Octavio comprometió gravemente la calidad de vida de la señora Ahumada.

Por último, solicitó respetuosamente a los magistrados que confirmen la sentencia de primera instancia, argumentando que la demandante cumple con todos los requisitos legales y que las pruebas aportadas acreditan su dependencia económica hacia su hijo fallecido.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandada y la vinculada por llamamiento en garantía.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada y la vinculada por llamamiento en garantía, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentra debidamente acreditado el requisito de la dependencia económica de la madre del causante, o, por el contrario, como lo sostienen los recurrentes, los aportes efectuados por el hijo fallecido estaban destinados exclusivamente a la cobertura de sus propios gastos personales?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

El Concepto de Dependencia Económica en la Legislación Colombiana: Análisis General y su Aplicación en el Derecho a la Pensión de Sobreviviente

El concepto de dependencia económica en el ámbito de la seguridad social, particularmente en lo atinente al reconocimiento de la pensión de sobreviviente para los progenitores del causante, ha sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de la jurisprudencia. Este tipo de dependencia no puede abordarse de manera genérica, ya que las disposiciones legales varían conforme a la relación existente entre el causante y el beneficiario. En el caso específico de los padres, la normativa impone criterios particulares que no pueden ser extrapolados indiscriminadamente a otras relaciones jurídicas. El fin primordial de la pensión de sobreviviente es atenuar el impacto económico que el fallecimiento del causante produce sobre aquellos que dependían significativamente de sus aportes económicos, garantizando así la salvaguarda del mínimo vital del beneficiario conforme a los principios establecidos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

A este respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en señalar que la dependencia económica no requiere una situación de total exclusividad. La jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que los aportes realizados por el causante no tienen que ser la única fuente de subsistencia del beneficiario, sino que deben tener un carácter relevante y sustancial en la estructura económica del hogar. Es decir, se exige que dichos aportes sean determinantes para garantizar una vida digna, sin que ello implique la ausencia absoluta de otros ingresos. Este criterio ha sido recogido en múltiples pronunciamientos, en los cuales se aclara que lo relevante es el grado de incidencia de los aportes del causante en el sostenimiento de los beneficiarios, más que la exclusividad de tales contribuciones. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha reiterado esta premisa en la sentencia SL2440 de 2024 de la siguiente forma:

> *"Sin perder de vista la orientación de la acusación, conviene recordar que esta Corporación reiteradamente ha manifestado que la pensión de sobrevivientes tiene como objetivo primordial disminuir el impacto económico que genera en el núcleo*

familiar, la muerte de uno de sus integrantes que contribuye sustancialmente a su sostenimiento. Ello con el propósito de aminorar el cambio «[…] abrupto de las condiciones de subsistencia de aquellos que dependían del causante y que han sido considerados beneficiarios de esta protección» (CSJ SL2117-2022).

Ahora bien, se ha insistido por la Sala que la dependencia económica de los padres respecto del causante, en los términos del literal d) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no requiere ser total y absoluta (CSJ SL1169-2019, CSJ SL1913-2019, CSJ SL3783-2019, CSJ SL4167-2020 y CSJ SL3776-2022).

También se ha enfatizado que la exigencia de la sumisión financiera debe analizarse en cada caso en particular, con miras a que el juzgador pueda constatar si los ingresos que obtienen los padres del asegurado, los hace autosuficientes económicamente para llevar una vida en condiciones decorosas. Sobre esta temática en la sentencia CSJ SL4509-2020 que reiteró la CSJ SL14923-2014, se explicó:

> *En tales términos, aunque no debe ser total y absoluta, en todo caso, debe existir un grado cierto de dependencia, que la Corte ha identificado a partir de dos condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.*

Debe agregarse además que la dependencia económica debe ser cierta, periódica y significativa respecto de aquellas ganancias que tengan los beneficiarios (CSJ SL2117-2022)".

De manera concomitante, la Corte ha precisado que no se requiere que los progenitores se encuentren en un estado de indigencia o pobreza extrema para que se configure la dependencia económica. El análisis de la dependencia no puede limitarse a verificar si la falta de los aportes del causante deja al beneficiario en una situación de total carencia de recursos, sino que debe evaluarse si la falta de tales aportes genera una afectación significativa en la calidad de vida del reclamante. En este sentido, el propósito de la pensión de sobreviviente es evitar que la muerte del causante provoque un deterioro sustancial en las condiciones de vida del beneficiario, razón por la cual no se exige una condición precaria para configurar el derecho a la prestación, sino que basta con que la ausencia de los aportes comprometa el mínimo vital, como se ha mencionado en la sentencia SL2351 del 2024 de la Corte Suprema de Justicia.

"Conforme a lo anterior, recuérdese que la Corte en sentencia CSJ SL652-2020 reiterada en decisión CSJ SL564- 2024 y CSJ SL1551-2024 frente a la evocada dependencia, puntualizó:

> *La dependencia económica que exige la norma en cita no puede comprenderse en términos absolutos, de modo que el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido no excluye su derecho a obtener*

una pensión de sobrevivientes. La única condición que debe cumplirse es que esos ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas.

(…)
En efecto, esta Corte ha identificado como elementos estructurales de la dependencia: i) la falta de autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital en un grado significativo.

(…)
Puesto en otros términos, no significa que es cualquier estipendio, ayuda o colaboración que se otorgue a los progenitores, el que tiene la virtualidad de configurar la subordinación económica que se requiere para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, sino aquel que tiene la connotación de ser relevante, esencial y preponderante para el mínimo sostenimiento de la familia, en tanto la finalidad prevista por el legislador para obtener la referida prestación, es la de servir de amparo a quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba, realmente, a mantener unas condiciones de vida determinadas (CSJ SL18517-2017y CSJ SL1243-2019)".

En cuanto al plano probatorio, la Corte ha señalado que no resulta exigible una precisión rigurosa en la cuantificación de los aportes que realizaba el causante. En lugar de una exactitud matemática, lo que se exige es la acreditación de que los aportes realizados eran regulares, periódicos y sustanciales para el sostenimiento del hogar. La jurisprudencia ha dejado claro que el análisis probatorio en estos casos debe efectuarse de manera flexible, valorando las pruebas de forma razonada y sin requerir una determinación exacta de los montos aportados. Este criterio ha sido reiterado en varias decisiones, donde se ha subrayado que lo relevante no es el monto preciso de los aportes, sino la importancia de los mismos en la estructura económica del hogar y su capacidad para asegurar la subsistencia del beneficiario.

En el caso concreto, el análisis debe centrarse en determinar si los aportes realizados por el causante, Miguel Octavio Luque Ahumada, cumplían con el criterio de relevancia y sustancialidad para el sostenimiento de su madre, Martha Didima Ahumada Castañeda. A pesar de que se ha acreditado la existencia de otras fuentes de ingreso en el hogar, el objeto del análisis radica en establecer si la falta de las contribuciones del causante generó una afectación significativa en las condiciones de vida de la demandante. Esto implica evaluar si los aportes eran necesarios para garantizar el mantenimiento de su mínimo vital, conforme a los criterios establecidos por la Corte, y si el grado de dependencia económica se configuraba dentro de los parámetros que permiten el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

Por lo tanto, la Corte ha enfatizado que el examen de la dependencia económica no puede ser generalizado ni aplicado de manera rígida, sino que debe ajustarse a las circunstancias particulares de cada caso. Cada situación es única y debe ser evaluada en su propio contexto, con el fin de determinar si la ausencia de los aportes del

causante afecta de manera significativa la calidad de vida del beneficiario. En este orden de ideas, la Corte ha establecido que lo esencial es que los aportes del fallecido fueran indispensables para mantener unas condiciones de vida decorosas, sin que ello implique la necesidad de un estado de carencia absoluta para acceder a la prestación.

Este enfoque jurisprudencial ha sido desarrollado para permitir que el análisis de la dependencia económica sea adecuado a las condiciones particulares de cada beneficiario, garantizando así que la valoración probatoria no se convierta en un obstáculo desproporcionado para el acceso al derecho, pero que a su vez preserve la coherencia y rigurosidad exigidas por el sistema normativo de seguridad social.

La Valoración de la Prueba en el Reconocimiento de la Pensión de Sobreviviente: Estándares Legales y Jurisprudenciales en Colombia

El recurso de apelación interpuesto centra su argumento en la supuesta incorrecta valoración de la investigación realizada por la empresa Consultando S.A.S., la cual fue presentada como fundamento para negar el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la señora Martha Didima Ahumada Castañeda. Dicha investigación, visible a folio 31 del PDF correspondiente a la contestación de Seguros Bolívar, recoge información supuestamente obtenida mediante una teleconferencia realizada el 20 de agosto de 2020. No obstante, la ausencia de un registro documental que autentique dicha teleconferencia, y la falta de confrontación adecuada de las declaraciones atribuidas a la demandante, generan interrogantes significativos respecto de la fiabilidad y veracidad de las conclusiones consignadas en dicho documento.

Es importante destacar que, según lo plasmado en la investigación, la información fue obtenida de manera remota debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no consta en el expediente ninguna evidencia que permita verificar de manera fehaciente que la versión final del documento haya sido puesta a consideración de la demandante para que ella pudiera confirmar o rectificar las afirmaciones allí contenidas. De acuerdo con el contenido del documento, se menciona que la demandante habría manifestado que poseía créditos activos y un vehículo automotor (motocicleta), elementos que resultan controvertidos, toda vez que, en la declaración rendida en juicio bajo interrogatorio de la abogada de Seguros Bolívar, en la cual la demandante aduce nunca haber rendido tales declaraciones, pues manifiesta concretamente *"yo, ningún momento contesté de motos que yo me acuerde, nunca contesté de motos" "No, yo nunca contesté eso me da mucha pena, pero yo nunca contesté eso"*, lo cual deja una vacante importante en la verificación de estas afirmaciones.

En este sentido, la investigación adolece de un elemento fundamental: la autenticación de las manifestaciones atribuidas a la demandante. Dado que no obra en el expediente una firma de la demandante o de alguna de las personas mencionadas en el informe, ni existe registro de la teleconferencia que pudiera ser contrastado con lo allí afirmado, el documento presenta serios vacíos en términos de valor probatorio. El juez de primera instancia, si bien no abordó este punto con suficiente detalle, otorgó mayor peso a los testimonios rendidos en juicio, los cuales

fueron congruentes y bajo juramento, circunstancia que permite una evaluación más directa de los hechos controvertidos.

La alegación central de la apelación radica en la falta de valoración adecuada de este documento, el cual sirvió de base para que las demandadas negaran el derecho a la pensión de sobreviviente. Sin embargo, este tribunal plural considera que dicho documento, lejos de ser una prueba concluyente, presenta inconsistencias que comprometen su idoneidad. La metodología empleada en la investigación, que se basó en una teleconferencia no registrada formalmente, así como la falta de firma o confrontación posterior con la demandante, debilita su fuerza probatoria, especialmente en un caso donde la dependencia económica es el punto central de la Litis.

Contrario a ello, el conjunto de testimonios permite establecer la dinámica económica y familiar entre la demandante y su hijo fallecido, así como las circunstancias en las que este último contribuía al sostenimiento del hogar. En primer lugar, en la declaración rendida por la señora Martha Didima Ahumada Castañeda indicó que dejó de laborar de manera estable en el año 2018 debido a problemas de salud, lo que la llevó a depender completamente de su hijo y de ingresos esporádicos producto de labores ocasionales. Menciona que en los momentos en los que su hijo no contaba con empleo, recurrían a sus ahorros para cubrir los gastos del hogar. Asimismo, afirma que el último aporte económico de su hijo se produjo en febrero de 2020, pocos meses antes de su fallecimiento.

El testimonio de Jorge Andrés Luque Ahumada, hermano del causante, refuerza esta versión al indicar que su madre no se encontraba laborando para la fecha del fallecimiento de su hermano y que, si bien había trabajado en el pasado en una empresa de aseo, dejó de hacerlo aproximadamente un año y medio antes de los hechos. Adicionalmente, señala que la demandante carecía de ingresos fijos y que el fallecido asumía la totalidad de los gastos del hogar, indicando "*No, pues ella, prácticamente en la casa, haciendo los quehaceres, ayudando, pues el tema de alimentación de mi hermano, nose, a cocinarle el tema de la ropa y pues mi hermano es el que cubría los gastos, pues que implicaban así mensualmente*". Así mismo, fue contundente en señalar que la dependencia económica de su madre recaía exclusivamente en su hermano fallecido, por cuanto el testigo solo aportaba lo que le fuera posible, mencionó que su madre para la época de 2019 lavaba su ropa, y que le aportaba $50.000 o $100.000.

Por su parte, Octavio Luque Bulla, padre del causante y exesposo de la demandante, afirma que la demandante convivía exclusivamente con su hijo Miguel Octavio Luque y que los ingresos de este último constituían la fuente principal de sostenimiento del hogar. Relata que, tras el fallecimiento del causante, la demandante tuvo que buscar alternativas para su manutención, lo que motivó su decisión de compartir vivienda con su exesposo y otro de sus hijos. "*claro, pagaban arriendo y ya después de eso, pues por eso nos reunimos para coger un piso, un primer piso para poder porque le queda difícil pagar una vivienda de un apartamento a ella sola, imagínese, sí fue el que aportaba*".

El testimonio de Tulio Abdón Rosero Pinza, propietario del inmueble en el que residían la demandante y el causante, resulta determinante al afirmar que el pago del arriendo era asumido directamente por el señor Miguel Octavio Luque, lo que corrobora el pago del canon mensual por parte del causante.

Asimismo, los testimonios de John Jairo Arena Sánchez y Flor Esmeralda Valenzuela Carabalí permiten corroborar la dinámica familiar y las condiciones de convivencia entre la demandante y el causante. John Jairo Arena Sánchez, amigo de la familia, al señalar que el fallecido era el encargado de cubrir los gastos del hogar, mientras que la demandante se limitaba a realizar labores domésticas esporádicas sin percibir una retribución económica fija. Su testimonio concuerda con las versiones anteriores en lo que respecta a la dependencia económica de la demandante respecto de su hijo.

Por su parte, Flor Esmeralda Valenzuela Carabalí, nuera de la demandante, coincide en señalar que la demandante no contaba con un empleo estable y que el causante era quien asumía los costos de vivienda, alimentación y demás necesidades básicas del hogar.

En virtud de lo expuesto, y conforme al artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, que otorga al juez la facultad de formar libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, este Tribunal estima que los testimonios rendidos en audiencia merecen mayor credibilidad que un documento cuya autenticidad no ha sido debidamente corroborada. Si bien la investigación recoge hechos que, en teoría, fueron manifestados por la demandante, la falta de registro formal, así como la contradicción entre lo allí expuesto y las declaraciones hechas bajo juramento en audiencia, generan dudas razonables sobre la veracidad de la información contenida en el informe de Consultando S.A.S.

Adicionalmente, la falta de interrogatorio directo sobre las conclusiones de dicha investigación por parte de la primera instancia limita aún más la fiabilidad de dicho documento. En la audiencia de juicio, la demandante no fue preguntada directamente sobre varios puntos clave de la investigación, lo que abre una laguna probatoria sobre los hechos allí mencionados. Esta omisión revela una importante brecha entre el procedimiento seguido en la recolección de información por parte de la empresa investigadora y la debida confrontación de los hechos con la parte afectada, lo que afecta gravemente la capacidad de este Tribunal para otorgarle un valor probatorio significativo.

Además, considerando los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad que rigen la valoración probatoria, es necesario subrayar que la conducencia se refiere a la idoneidad legal de una prueba para demostrar determinado hecho, lo que implica que se debe verificar que la prueba sea capaz de probar de manera adecuada los hechos que pretende demostrar. En este caso, la investigación presentada no cumple con este criterio, ya que no se verificó su autenticidad ni la exactitud de la información recabada, lo que afecta su capacidad para desvirtuar la dependencia económica alegada.

Al considerar la investigación como un todo, resulta evidente que la misma no cumple con los estándares de prueba documental idónea para ser considerada como determinante en el resultado del proceso. La ausencia de pruebas que acrediten de manera objetiva y verificable las afirmaciones contenidas en dicho documento impide que este sea considerado como un medio de prueba que pueda desvirtuar los hechos alegados por la demandante en juicio, los cuales fueron corroborados por la prueba testimonial recogida en el proceso.

En ese contexto, y bajo el principio de la libre valoración de la prueba, este Tribunal otorga mayor credibilidad a los testimonios practicados, los cuales fueron recibidos bajo las formalidades de rigor, que a un documento cuya recolección de información fue realizada mediante una teleconferencia informal y cuya veracidad no pudo ser corroborada mediante firma o confirmación posterior por parte de la demandante. La falta de estos elementos impide que se pueda considerar el informe de la empresa Consultando como una prueba concluyente para negar el derecho reclamado.

Por otro lado, los testimonios rendidos en audiencia, recibidos bajo juramento, permiten una evaluación más precisa de la situación económica de la demandante y ofrecen mayor credibilidad. Los ingresos del fallecido eran fundamentales para su sustento, y las alternativas económicas a las que recurrió tras el fallecimiento de su hijo no desvirtúan dicha dependencia, ya que no se ha demostrado que contara con una fuente de ingresos fijos y suficientes para su subsistencia.

Por lo tanto, no queda sino confirmar la sentencia de primera instancia al encontrar acreditada la condición de dependencia económica de la actora frete a su hijo fallecido.

En lo que concierne a la argumentación esgrimida por la apoderada de Seguros Bolívar S.A. en sede de apelación, en la que propugna por la revocatoria de la condena impuesta a su representada, bajo la consideración de que su responsabilidad se encuentra estrictamente delimitada al pago de la suma adicional necesaria para la financiación de la pensión de sobreviviente, sin que ello implique la asunción de indexaciones u otros emolumentos adicionales, se impone un análisis de la providencia de primera instancia a efectos de determinar la exactitud de su planteamiento.

De la lectura del ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia recurrida, se desprende con absoluta claridad que el fallo del a quo se circunscribió a "DECLARAR que asiste obligación conforme a derecho a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A. a sufragar el valor de la suma adicional a cargo de la aseguradora para el financiamiento de la pensión en favor de la aquí demandante, en los estrictos términos de Ley conforme el artículo 77° de la Ley 100 de 1993." Bajo tal premisa, se advierte que el juzgador de primer grado no impuso condena distinta a la expresamente establecida en el marco normativo aplicable, limitando su decisión a reconocer la responsabilidad de la aseguradora en los términos que corresponden a su naturaleza jurídica y a las disposiciones legales vigentes.

En este contexto, la pretensión revocatoria de la aseguradora se erige sobre una inferencia errónea respecto del alcance de la sentencia de primera instancia, pues de su contenido no se deriva la imposición de obligaciones adicionales a las Seguros Bolívar considera aplicables. No se evidencia la existencia de un pronunciamiento que hubiere extendido la carga económica de la aseguradora más allá de la cobertura de la suma adicional exigida para garantizar la financiación de la prestación pensional reconocida, ni que hubiere atribuido a la entidad demandada una responsabilidad que supere los estrictos límites del artículo 77 de la Ley 100 de 1993.

En consecuencia, dado que la sentencia impugnada no impone a Seguros Bolívar S.A. una condena que trascienda las obligaciones inherentes al seguro previsional, no se configura una causal válida que justifique la revocatoria solicitada, por cuanto el pronunciamiento del a quo se encuentra enmarcado dentro de los parámetros normativos y contractuales que regulan la materia, sin que exista desviación o extralimitación alguna en la determinación de su responsabilidad.

Sobre la procedencia de la condena en costas

El instituto de las costas procesales, consagrado en el artículo 361 del Código General del Proceso (C.G.P.), en concordancia con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T.S.S.), constituye un mecanismo destinado a reparar los gastos en que incurre la parte vencedora dentro de un proceso judicial, como consecuencia directa de la actuación procesal de la parte vencida. Este precepto no solo busca resarcir los costos derivados de la defensa de los derechos del litigante victorioso, sino que también tiene una función disuasiva respecto de estrategias procesales infundadas, evitando el uso abusivo del aparato judicial y garantizando la eficiencia en la administración de justicia.

La Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha sostenido que la imposición de costas se fundamenta en el principio de reparación integral, así como en la necesidad de preservar el equilibrio entre las partes procesales, estableciendo que la parte vencida debe asumir las consecuencias económicas de su actuación en el proceso. En este sentido, el artículo 366 del C.G.P. establece el procedimiento para la liquidación de las costas, determinando que estas incluyen no solo los gastos procesales efectivamente causados, sino también las agencias en derecho, fijadas conforme a los criterios normativos aplicables.

En el caso sub examine, COLFONDOS S.A. resultó vencida en juicio tras oponerse a todas las pretensiones de la parte demandante, sustentando su negativa en una supuesta falta de acreditación de la dependencia económica de la actora respecto del causante, fundamentación que se vio desvirtuada dentro del debate probatorio.

Por lo tanto, en atención al marco normativo aplicable y al principio de resarcimiento de los gastos en que incurrió la parte demandante en la defensa de su derecho, este despacho considera jurídicamente procedente mantener la condena en costas impuesta en primera instancia a COLFONDOS S.A., en los términos establecidos por la legislación vigente. La cuantificación de dichas costas, incluidas las agencias en

derecho, deberá determinarse conforme a los parámetros fijados en el artículo 366 del C.G.P., asegurando así una justa compensación para la parte vencedora.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad de los recursos presentados por la parte demandada y la vinculada por llamamiento en garantía, se condenará en costas de segunda instancia a favor de la demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el día 31 de enero de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a **COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS S.A**. y **COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.** en favor de la demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 056.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	PEDRO IGNACIO MENDEZ MENDEZ
Parte demandada	COLPENSIONES
Radicación	11001310501820220014601
Fecha de la decisión	17 DE OCTUBRE DE 2023
Motivo	APELACION
Tema	RELIQUIDACION REAJUSTE PENSION
Acta de Discusión	047
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310501820220014601

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere sentencia en forma escrita y procede a resolver la apelación presentada por la parte demandante contra la sentencia proferida el día 17 de octubre de 2023 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES

El señor Pedro Ignacio Méndez Méndez, presentó, por intermedio de apoderada, demanda ordinaria laboral contra Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, pretendiendo que se condene a dicha entidad al pago de intereses moratorios según lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 debido a la demora injustificada en la reliquidación de su pensión de vejez y retroactivos desde el 5 de diciembre de 2004 hasta la fecha en que se efectúe el pago correspondiente, así como las costas del proceso.

Para fundamentar sus pedimentos, el demandante afirmó que había solicitado inicialmente el reconocimiento de su pensión de vejez ante el Instituto de Seguro Social (ISS), el cual la reconoció en el año 2006, pero con una liquidación incorrecta. Posteriormente, en 2018 mediante Resolución SUB268599 de octubre de 2018 (fols. 13-25), Colpensiones procedió a reliquidar la pensión, lo que generó un retroactivo pensional, pero nuevamente con errores en la mesada. Ante esta situación, en 2021, solicitó una nueva reliquidación, que Colpensiones realizó, pero negando los intereses moratorios correspondientes, con Resolución SUB135883 de 08 de junio de 2021 (fols.

29-36). Con esta negativa se agotó la vía gubernativa, quedando únicamente la vía judicial para la resolución del conflicto.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, con Auto de 22 de julio de 2022, admitió la demanda presentada por el actor (pdf 03), para luego, con providencia de 28 de marzo, inadmitir la contestación de la demanda por Colpensiones (pdf 06), que luego de subsanada, tuvo por contestada la demanda el 08 de septiembre de 2023 (pdf 08).

1.3. CONTESTACIÓN DEMANDA

COLPENSIONES (PDF 05)

Colpensiones, a través de su apoderado, contestó la demanda interpuesta en su contra, solicitando al juzgado ser absuelta de todas las pretensiones propuestas por el demandante, presentando las excepciones de *inexistencia de la obligación*, dado que la ley no permite su imposición sobre el retroactivo pensional. También alegó *prescripción*, invocando los términos de prescripción de tres años aplicables en materia pensional según el Código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, argumentó que siempre actuó de *buena fe* y que todas sus decisiones estuvieron fundamentadas en la ley.

Respecto a los hechos, Colpensiones aceptó el reconocimiento de la pensión por parte del ISS y su posterior reliquidación. Sin embargo, negó la existencia de error en la mesada pensional inicial y rechazó que hubiese habido mora en el pago de las pensiones, argumentando que la reliquidación efectuada en 2018 se realizó conforme a la ley, señalando que dichos intereses solo proceden cuando se verifica un reconocimiento prestacional tardío, y que, en este caso, no hubo tal tardanza.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (Audiencia 11 primera instancia)

En Sentencia de 17 de octubre de 2023, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, luego de analizar los argumentos y pruebas presentadas por ambas partes en el proceso, decidió absolver a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra, concluyendo que no había lugar a reconocer los intereses moratorios solicitados por el demandante, al considerar que Colpensiones había actuado dentro de los términos legales en el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

Para arribar a tal decisión, el Juez motivó su decisión en la interpretación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que establece que los intereses moratorios solo son procedentes cuando la entidad encargada del reconocimiento pensional incurre en mora injustificada en el pago de las mesadas pensionales. En este caso, se determinó que Colpensiones había cumplido con los plazos establecidos, tanto en el reconocimiento inicial de la pensión en 2006 como en las posteriores reliquidaciones solicitadas en 2018 y 2021.

El Juzgador de instancia, valoró la jurisprudencia relevante de la Corte Suprema de Justicia, la cual sostiene que los intereses moratorios no aplican en los casos donde no se evidencia un retraso injustificado por parte de la entidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Además, de Sentencias donde se exponía que la aplicación del artículo 141 de la ley 100 de 1993, respecto a los intereses moratorios, solo se aplicaba a las pensiones reconocidas por esa misma normatividad.

Valoró las pruebas documentales aportadas por las partes, especialmente los actos administrativos emitidos por Colpensiones, y concluyó que no hubo evidencia de mora en el reconocimiento y pago de la pensión del demandante. Por lo tanto, las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido propuestas por Colpensiones fueron declaradas probadas, lo que llevó a la absolución de la entidad.

1.5. RECURSO DE APELACIÓN

DEMANDANTE

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante interpuso recurso de apelación, solicitando que los magistrados del Tribunal reexaminen el caso y reconozcan el pago de los intereses moratorios a favor de su representado. La apoderada argumentó que Colpensiones se demoró injustificadamente más de cuatro meses en reconocer la pensión de vejez en los términos correctos, lo que constituye una mora que debe ser compensada mediante los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

Además, sostuvo que, aunque Colpensiones reconoció la pensión de su poderdante en 2006, la reliquidación adecuada solo se efectuó en 2021, y con efectos fiscales a partir de junio de 2015. Esta situación, según la apoderada, evidencia una demora sustancial en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la entidad, que excede ampliamente el término de cuatro meses previsto por la ley para el reconocimiento de prestaciones pensionales. En consecuencia, el apoderado afirmó que su representado tenía derecho a los intereses moratorios desde la fecha en que debió ser pagada correctamente la pensión.

Con base en estos precedentes, el apelante pidió al Tribunal que revocara la decisión del juez de primera instancia y ordenara el reconocimiento y pago de los intereses moratorios a favor del señor Pedro Ignacio Méndez Méndez.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, con auto de 05 de junio de 2024 (pdf 03 segunda instancia)

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

DEMANDANTE (pdf 04 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión presentados por la apoderada de la parte demandante, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revocara la decisión emitida por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, argumentando que el *A Quo* cometió un error al contabilizar el término de cuatro meses para el reconocimiento de la pensión desde cada solicitud independiente, en lugar de hacerlo desde la primera solicitud realizada en 2004. Según la apoderada, este enfoque permite que la entidad demandada evite las consecuencias de un mal reconocimiento inicial, lo cual no debería ser permitido.

La apoderada afirmó que Colpensiones había incurrido en una demora injustificada en el reconocimiento de la pensión de vejez de su poderdante, desde que se realizó la primera solicitud en diciembre de 2004. Aunque la pensión fue reconocida en 2006, la reliquidación correcta solo se realizó en 2021, lo que generó un retroactivo significativo y, en opinión de la apoderada, la obligación de pagar intereses moratorios debido a la demora prolongada.

En apoyo de su argumentación, la apoderada citó varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que establecen que los intereses moratorios deben ser reconocidos no solo en casos de retraso en el reconocimiento inicial de la pensión, sino también en casos de reajustes y reliquidaciones. Resaltó que estos intereses no tienen un carácter sancionatorio, sino resarcitorio, destinados a compensar al pensionado por el perjuicio sufrido debido a la mora en el pago de su mesada pensional.

Finalmente, la apoderada solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y se ordenara el pago de los intereses moratorios solicitados por su poderdante, en conformidad con la jurisprudencia aplicable y los derechos consagrados en la ley.

DEMANDADA COLPENSIONES (pdf 07 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión presentados por la parte demandada, Colpensiones, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que confirmara la sentencia emitida en primera instancia por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, absolviéndola de todas las pretensiones formuladas en su contra.

El apoderado argumentó que la entidad había actuado en todo momento conforme a la ley y con buena fe, cumpliendo con los plazos legales para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez del demandante, Pedro Ignacio Méndez Méndez. Según su defensa, los intereses moratorios solo proceden cuando se verifica un reconocimiento prestacional tardío, es decir, cuando el pago de las mesadas pensionales no se realiza dentro del plazo establecido por la ley. En este caso, Colpensiones sostuvo que no hubo tal tardanza, ya que la reliquidación de la pensión se efectuó conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

También destacó que la solicitud inicial de pensión del demandante fue reconocida en 2006, y que las posteriores reliquidaciones, realizadas en 2018 y 2021, se

efectuaron dentro de los términos legales. Además, la entidad argumentó que no es procedente el pago de intereses moratorios sobre el valor del retroactivo pensional, ya que la ley no lo permite.

Finalmente, solicitó que se confirmara el fallo de primera instancia, que absolvió a la entidad de todas las pretensiones, reiterando que las decisiones tomadas por Colpensiones estuvieron fundamentadas en la ley y en la correcta aplicación de los términos prescriptivos.

II. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

II.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿resulta procedente ordenar el pago de intereses moratorios que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 por demora en la reliquidación de la pensión?

II.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO Y CASO CONCRETO

HECHOS NO DISCUTIDOS

No es objeto de discusión dentro del presente asunto, la edad de 69 años del demandante (fol. 12 pdf 01 primera instancia); la calidad de pensionado por el ISS a partir del 05 de diciembre de 2004 mediante resolución No. 02940 de 2006 (fols. 34 – 35 pdf 07); la solicitud de reliquidación realizada por el actor ante Colpensiones el 14 de agosto de 2018 (fols 16-17 pdf 07 primera instancia); la reliquidación de la pensión efectuada por Colpensiones al actor con Resolución SUB268599 del 12 de octubre de 2018; tampoco es discutido el hecho de haber sido solicitada otra reliquidación de la pensión el 05 de abril de 2021 y la Resolución SUB135883 de 08 de junio de 2021 por medio de la cual se realizó dicho ajuste.

DE LOS INTERESES MORATORIOS

Al respecto, es importante estudiar lo previsto por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que dispone:

> *"ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 10. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago."*

Estos intereses se refieren expresamente a la procedencia de una consecuencia económica por el pago inoportuno de mesadas pensionales, teniendo en cuenta para

ello que las administradoras cuentan con un término de cuatro (04) meses para decidir lo referente al reconocimiento de las pensiones, tal y como se dispuso en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, al señalar que *«[…] El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses[…]»*

Es de advertir que esta procede siempre y cuando haya retardo en el pago de las mesadas, independientemente de la buena o mala fe en la conducta del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional, en tanto cuentan con un carácter resarcitorio, encaminado a aminorar los efectos adversos que producen al acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de una obligación.

Ahora bien, resulta acertado poner de presente que, los intereses antes mencionados, si bien los trajo consigo la ley 100 de 1993, ello no es impedimento para que se apliquen a pensiones que se otorguen y reconozcan por mandato de legislación pensional distinta a aquella, pues como lo ha sostenido actualmente la Corte Suprema de Justicia, luego de haber cambiado su postura en la Jurisprudencia, la demora en el pago de la mesada causa perjuicios a todos los pensionados y no solo a quienes se les aplique la precitada ley 100. Y así se refirió en Sentencia CSJ SL1681-2020:

> *"1. El pago oportuno de las mesadas pensionales es un derecho de todos los pensionados, sin importar el tipo de pensión legal adquirida.*
>
> *El pago puntual de la pensión es un derecho que cuenta con sustento constitucional. Al respecto, el artículo 53 de la Carta Política enuncia dentro de los principios mínimos de la legislación social «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.*
>
> *El mandato constitucional de garantizar «el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales», no distingue entre los diferentes tipos de pensiones legales. En consecuencia, tanto un pensionado con base en las previsiones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como uno que lo fue en virtud del régimen de transición, tiene el poder jurídico de reclamar los intereses moratorios por el pago impuntual de su mesada pensional a la entidad que se atrase en su cancelación.*
>
> *Aunque existen notables diferencias normativas en los tipos prestacionales (L. 33 de 1985, L. 71 de 1988, A. 049 de 1990, art. 33 de la L. 100 de 1993, entre otras), ello no significa que solo los pensionados de un régimen legal específico sufran los perjuicios derivados de la mora en el pago de las mesadas, mientras que otros no. Para todos ellos, la pensión representa su fuente de subsistencia y, desde este punto de vista, deben contar con un mecanismo legal que permita la reparación de los perjuicios ocasionados por el retardo en el pago de las mismas"*

Asimismo, la Corte ha modulado y evolucionado su postura respecto a la condena de los intereses moratorios frente a los valores que se produzcan luego de hacerse un

reajuste a la pensión, pues en antaño, se ilustraba, que dichos intereses solamente se causaban por la falta de las mesadas pensionales en su totalidad, y no cuando se presentaba un reajuste a la mesada; sin embargo, al efectuarse un nuevo análisis, dicha Corporación concluyó que ello iba en contravía de la ley y la jurisprudencia laboral, por lo que aquellos réditos también se deberían aplicar a las pensiones reajustadas, pero únicamente sobre el saldo debido y no reconocido inicialmente, conclusión a la que arribó luego de hacer un análisis juicioso, en Sentencia SL3130 de 2020:

> *"En efecto, si se observa con detenimiento el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se puede notar que el legislador no hizo diferenciación alguna a la hora de establecer los intereses moratorios, ni en función de la clase de pensión legal que les sirviera de base, como se dijo recientemente en la sentencia CSJ SL1681-2020, ni teniendo en cuenta si se trataba del pago completo de la mesada pensional o* ***tan solo de algún saldo.***
>
> *Siendo ello así, lo primero que se debe consentir es que ni siquiera una interpretación literal de la norma llevaría a la conclusión que hasta ahora sostenía la Corte, en virtud de la cual los intereses moratorios solo proceden en los casos de mora en el pago completo de la mesada pensional y no como consecuencia de algún reajuste, pues eso no es lo que reza el texto de la disposición.*
>
> *Para dar cuenta del anterior aserto es importante tener en cuenta que la norma consagra los intereses moratorios, en forma pura y simple, «[…] en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales […]», además de que, en términos jurídicos, la mora en el cumplimiento de una obligación, como el pago de la mesada pensional, se produce tanto por la insatisfacción de todo lo debido como por su pago incompleto o deficitario. En este punto la mora esta conceptualmente ligada al pago de las obligaciones, entendido este, según el artículo 1627 del Código Civil, como «la prestación de lo que se debe», de manera que, mientras no se produzca este pago, en forma adecuada, oportuna y completa, la mora sigue produciendo todas sus consecuencias materiales y reales."* (negrita y subraya por fuera)

De igual manera, resulta menester memorar lo que la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 4942 de 2021, donde recordó cómo debe determinar la prescripción que tratan los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del C.P.T y S.S. en casos como el de nuestro estudió, así:

> *"En sede de instancia, bastan las mismas consideraciones vertidas en casación para concluir que el demandante tiene derecho a que se le reconozcan los intereses moratorios pretendidos, pues real y efectivamente hubo retardo o tardanza en el cubrimiento de las mesadas pensionales adeudadas.*
>
> *La liquidación de los mentados réditos se calculará desde el 16 de marzo de 2005 hasta el 16 de febrero de 2009 (fecha de pago del retroactivo pensional adeudado al actor según la Res. 005929 de 2009). El citado extremo inicial de causación de los réditos por tardanza se adopta teniendo en cuenta que los 4 meses de gracia que tenía la administradora demandada para reconocer la pensión empezaron a correr el 16 de noviembre de 2004, fecha en que el demandante solicitó el reconocimiento de la*

prestación pensional (folio 4 del cuaderno del Juzgado), luego, entonces, dicho plazo venció el 16 de marzo de 2005."

Con todo lo anterior, es necesario realizar un recuento de lo acontecido, inicialmente se tiene que:

(i) El actor solicitó el reconocimiento de su pensión ante el ISS, el 22 de diciembre de 2004 (fol 21 pdf 07 primera instancia), misma que fue reconocida por dicha entidad el 30 de mayo de 2006 el ISS a partir del 05 de diciembre de 2004 mediante resolución No. 02940, por un valor de $1.613.777 a partir del 05 de diciembre de 2004 (fols. 34 – 35 pdf 07);
(ii) Posteriormente, el 14 de agosto de 2018, el actor solicitó ante Colpensiones la reliquidación de su pensión, aduciendo que la misma se encontraba mal liquidada (fols. 16-17 pdf 07), cuyo ajuste fue realizado por la demandada mediante con Resolución SUB268599 del 12 de octubre de 2018 (fols. 13-25 pdf 01) obteniendo una pensión de 3.209.910 a partir del 14 de junio de 2015, obteniéndose un retroactivo de $32.913.039;
(iii) El demandante, solicitó el 30 de marzo de 2021, que le fueran reconocidos intereses moratorios por la demora injustificada en el pago completo de su pensión (fol.-27 pdf 01)
(iv) Con petición del 05 de abril de 2021 solicitó una nueva reliquidación, la cual fue resuelta mediante Resolución SUB135883 de 08 de junio de 2021 (fols. 29-36 pdf 01), misma que dejó como resultado una pensión por valor de 3.210.439, con un retroactivo de $45.343.
(v) La demanda fue interpuesta el 06 de abril de 2022.

De esta manera, resulta acertado establecer que la queja de la parte demandante cobra razón, en el entendido que, desde la fecha en que el actor solicitó al ISS, su pensión, esta se encontraba en la obligación de atenderla con diligencia, cuidado y de liquidarla de manera correcta, por lo que, los intereses deprecados deberán concederse a partir de los 4 meses después de la solicitud pensional, que para nuestro caso sería desde el 22 de abril de 2005, sin embargo; los intereses que sean objeto de condena, tal como lo refirió acertadamente la Corte, solo se producen frente al saldo insoluto de la respectiva liquidación, y sobre los cuales no hayan sido afectados por el fenómeno de la prescripción.

En ese sentido, y para los efectos del caso de marras, los mentados intereses deberán cancelarse respecto a la diferencia que se produzca entre el valor resultante después de la reliquidación y el valor reconocido inicialmente, que para el caso puntual, sería la mesada correspondiente para el 14 de junio de 2015, antes de ser reajustada, que si bien no se logra evidenciar dentro de la resolución del 12 de octubre de 2018, ni con algún otro medio cual era ese valor, lo cierto es que aplicando los incrementos legales a la mesada reconocida inicialmente a partir del 2004 ($1.613.777), hasta aquella fecha, se obtiene un valor de ($2.507.896), como se observa a continuación:

PERIODO	VALOR MESADA	PORCENTAJE INCREMENTO	VALOR INCREMENTO	VALOR MESADA

2004	**$ 1.613.777**	-	-	-
2005	$ 1.613.777	5,50%	$ 88.758	$ 1.702.535
2006	$ 1.702.535	4,85%	$ 82.573	$ 1.785.108
2007	$ 1.785.108	4,48%	$ 79.973	$ 1.865.080
2008	$ 1.865.081	5,69%	$ 106.123	$ 1.971.204
2009	$ 1.971.204	7,67%	$ 151.191	$ 2.122.395
2010	$ 2.122.395	2,00%	$ 42.448	$ 2.164.843
2011	$ 2.164.843	3,17%	$ 68.626	$ 2.233.468
2012	$ 2.233.469	3,73%	$ 83.308	$ 2.316.777
2013	$ 2.316.777	2,44%	$ 56.529	$ 2.373.306
2014	$ 2.373.306	1,94%	$ 46.042	$ 2.419.348
2015	$ 2.419.348	3,66%	$ 88.548	**$ 2.507.896**

Ahora bien, la diferencia suscitada entre el valor antedicho ($2.507.896) y el valor reajustado ($3.209.910) resulta ser de ($702.014), mismo que, teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento de los intereses moratorios, se realizó el 30 de marzo de 2021, únicamente se condenará al pago de los intereses a partir del 30 de marzo de 2018, pues los anteriores a esta fecha, se encuentran prescritos, y hasta la fecha en la que le fue pagada en su nómina el retroactivo de ($32.913.039), que fue en la de noviembre, por tanto, será hasta el 30 de noviembre de 2018. Lo que arroja un valor total de ($495.940), como se pasa a verificar:

TABLA LIQUIDACION DE INTERESES MORATORIOS				***Fecha de Corte***		***30/11/2018***
Fecha Inicial	***Fecha Final***	***Número de días en mora***	***Interés moratorio anual***	***Tasa de interés de mora diario***	***Capital***	***Subtotal Interés***
30/03/18	*31/10/18*	*216*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 97.032,00*
01/04/18	*31/10/18*	*214*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 96.133,00*
01/05/18	*31/10/18*	*184*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 82.657,00*
01/06/18	*31/10/18*	*153*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 68.731,00*
01/07/18	*31/10/18*	*123*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 55.254,00*
01/08/18	*31/10/18*	*92*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 41.328,00*
01/09/18	*31/10/18*	*61*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 27.402,00*
01/10/18	*31/10/18*	*31*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 13.926,00*
01/11/18	*30/11/18*	*30*	*26,30%*	*0,0640%*	*$ 702.014,00*	*$ 13.477,00*
TOTAL INTERESES MORATORIOS						*$ 495.940,00*

De igual manera, de la reliquidación realizada en junio de 2021, donde la mesada anterior de $3.209.910 se ajustó a $3.210.439, quedando una diferencia de $529 pesos, como se puede apreciar en la Resolución de junio de 2021, por lo que se condenará a la demandada a pagar los intereses moratorios respecto al saldo insoluto de ($529), mismo que, al haberse interpuesto la demanda el 06 de abril de 2022, se condenará al pago de los intereses de los últimos tres años anteriores a dicha data, esto es desde el 06 de abril de 2019, y hasta la fecha en que fue incluido el pago del retroactivo de ($45.343) , que fue en julio de 2021, por ello, se establecerá hasta el 31 de julio de 2021. Resultando un valor de ($4.181), así:

TABLA LIQUIDACION DE INTERESES MORATORIOS				Fecha de Corte		31/01/2025
Fecha Inicial	Fecha Final	Número de días en mora	Interés moratorio anual	Tasa de interés de mora diario	Capital	Subtotal Interés
06/04/19	31/07/21	848	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 287,00
01/05/19	31/07/21	823	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 279,00
01/06/19	31/07/21	792	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 268,00
01/07/19	31/07/21	762	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 258,00
01/08/19	31/07/21	731	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 247,00
01/09/19	31/07/21	700	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 237,00
01/10/19	31/07/21	670	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 227,00
01/11/19	31/07/21	639	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 216,00
01/12/19	31/07/21	609	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 206,00
01/01/20	31/07/21	578	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 196,00
01/02/20	31/07/21	547	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 185,00
01/03/20	31/07/21	518	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 175,00
01/04/20	31/07/21	487	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 165,00
01/05/20	31/07/21	457	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 155,00
01/06/20	31/07/21	426	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 144,00
01/07/20	31/07/21	396	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 134,00
01/08/20	31/07/21	365	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 124,00
01/09/20	31/07/21	334	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 113,00
01/10/20	31/07/21	304	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 103,00
01/11/20	31/07/21	273	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 92,00
01/12/20	31/07/21	243	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 82,00
01/01/21	31/07/21	212	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 72,00
01/02/21	31/07/21	181	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 61,00
01/03/21	31/07/21	153	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 52,00
01/04/21	31/07/21	122	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 41,00
01/05/21	31/07/21	92	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 31,00
01/06/21	31/07/21	61	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 21,00
01/07/21	31/07/21	31	26,30%	0,0640%	$ 529,00	$ 10,00
TOTAL INTERESES MORATORIOS						$ 4.181,00

EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR COLPENSIONES

La demandada COLPENSIONES, al contestar el escrito inaugural, propuso además las excepciones de fondo que denominó *inexistencia de la obligación y cobro de lo debido*, *prescripción*, *buena fe y la innominada,* alcanzando únicamente prosperidad la de *prescripción,* como quedó resuelto anteriormente.

Respecto a las demás excepciones, se declaran no probadas por el resultado del recurso de alzada.

Por todo lo anterior, se revocará la Sentencia de instancia, para condenar a Colpensiones a pagar intereses moratorios únicamente del valor insoluto de ($702.014) a partir del 30 de marzo de 2018, hasta el 31 de octubre de 2018, que resultó un valor total de ($482.463). Así como también el pago de intereses moratorios únicamente sobre el valor impago de ($529) desde el 06 de abril de 2019 hasta el 30 de junio de 2021, cuyo valor es de ($3.889)

II.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad del recurso, se condenará en costas de primera y segunda instancia a la parte demandada COLPENSIONES, en atención al número 4 del artículo 365 del Código General del Proceso.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR la Sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, para en su lugar:

> ***"PRIMERO: RECONOCER*** *que el demandante* ***PEDRO IGNACIO MENDEZ MENDEZ,*** *es acreedor de COLPENSIONES, sobre los intereses moratorios respecto de los saldos dejados de pagar. Según las consideraciones vertidas en el presente proveído.*
>
> ***SEGUNDO: CONDENAR*** *a* ***COLPENSIONES*** *a pagar intereses moratorios al señor* ***PEDRO IGNACIO MENDEZ MENDEZ****, únicamente del valor insoluto de ($702.014) a partir del 30 de marzo de 2018, hasta el 31 de octubre de 2018, que resultó un valor total de ($495.940). Así como también el pago de intereses moratorios únicamente sobre el valor impago de ($529) desde el 06 de abril de 2019 hasta el 30 de junio de 2021, cuyo valor es de ($4.181), como lo ordena el artículo 141 de la ley 100 de 1993. Según las consideraciones vertidas en el presente proveído.*
>
> ***TERCERO: DECLARAR*** *probada parcialmente la excepción de* ***PRESCRIPCIÓN*** *y no probadas las demás.*
>
> ***CUARTO: CONDENAR*** *en costas de primera instancia a la parte demandada COLPENSIONES, en favor del demandante, fijando como agencias en derecho la suma de 1 s.m.l.m.v".*

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a COLPENSIONES.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 047.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada Ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada -

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte vencida, COLPENSIONES y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Proceso especial de cancelación del registro sindical, disolución y liquidación de la organización sindical
Parte demandante	INDEGA S.A.
Parte demandada	LA NACIÓN- MINISTERIO DEL TRABAJO Y Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ASOTRAINDEGA)
Radicación	11001310501920110048803
Fecha de la decisión	09 DE FEBRERO 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	SOLICITUD DE CANCELACIÓN REGISTRO SINDICAL
Acta de Discusión	039
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310501920110048803

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. – ASOTRAINDEGA -, así como también se estudiará el grado de consulta en favor la Nación - Ministerio del Trabajo, en razón de la sentencia proferida el día 09 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La **Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.**, quien actúa a través de su apoderado Juan Pablo López Moreno, presentó demanda contra la **Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ASOTRAINDEGA)** y la **Nación - Ministerio de la Protección Social**, pretendiendo por esta vía, Proceso especial de cancelación del registro sindical, disolución y liquidación de la organización sindical, para que se declare la ilegalidad de la constitución del sindicato mencionado. El demandante solicita que se deje sin efectos el acto constitutivo del sindicato, la inscripción del mismo ante el Ministerio de la Protección Social, y la totalidad de los actos realizados por **ASOTRAINDEGA** desde su creación, con base en que los miembros fundadores no ostentan la calidad de

trabajadores de la Industria Nacional de Gaseosas S.A.S., sino que pertenecen a una empresa contratista denominada Contactamos Servicios Ltda.

Los hechos que sustentan esta demanda indican que, el 27 de marzo de 2011, se llevó a cabo la fundación de ASOTRAINDEGA, que se presenta como un sindicato de base o de empresa. Sin embargo, se alega que ninguno de sus miembros fundadores tenía vínculo laboral con la **Industria Nacional de Gaseosas S.A.S**., ya que la mayoría de ellos eran empleados de **Contactamos Servicios Ltda.**, empresa que prestaba servicios independientes y autónomos a la **Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.**, pero sin una relación directa de subordinación con esta última. A pesar de ello, en el acta de fundación del sindicato se consignó de manera inexacta que **ASOTRAINDEGA** estaba conformado por trabajadores de la **Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.**, lo cual, según el demandante, constituye una falsedad que afecta la validez de su constitución y funcionamiento.

Desde el punto de vista jurídico, el demandante basa su argumento en la interpretación del artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que no existe relación laboral entre la empresa contratante y los trabajadores del contratista. En consecuencia, no es jurídicamente viable que un sindicato de empresa esté conformado por personas que no son empleados de dicha empresa, y menos que se utilicen las facultades sindicales para representar a trabajadores que no tienen un vínculo contractual con la **Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.** Además, se hace énfasis en que el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo establece como requisito indispensable para la existencia de un sindicato de empresa que cuente con al menos 25 afiliados que sean trabajadores de la misma empresa, lo cual no se cumple en este caso.

Finalmente, se sostiene que el **Ministerio de la Protección Social** incumplió con su obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución de la organización sindical, al haber registrado el sindicato sin comprobar que sus afiliados eran trabajadores de la empresa que pretendían representar. Esto constituye una vulneración de las normas de orden público, por lo que se solicita que se deje sin efectos tanto el registro del sindicato como todos los actos realizados en su nombre desde su fundación.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, admitió y corrió traslado de la demanda mediante auto de 18 de octubre del 2011 (pdf 05), luego, con providencia del 15 de mayo del 2013 (pdf 13), tuvo por contestada la demanda por **la Nación - Ministerio del Trabajo Y Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ASOTRAINDEGA)**, y fijó fecha para la celebración de audiencia de que trata el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.

En el trámite de primera instancia, mediante auto del 5 de diciembre de 2013, se concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, **ASOTRAINDEGA**, contra la decisión que declaró no probadas las excepciones

previas propuestas por las demandadas, concretamente en lo relativo al agotamiento de la vía administrativa y la falta de legitimación en la causa por pasiva, decisión que fue confirmada por la Sala Séptima de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante providencia de 5 de diciembre de 2013.

Posteriormente, se interpuso recurso de apelación contra el auto del 8 de agosto de 2017 (grabación 60), proferido por el despacho de conocimiento, en el que se negaba la excepción de cosa juzgada al considerar que esta no fue propuesta dentro del término legal, por lo que se entendió precluida la oportunidad para su presentación. No obstante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante acta del 9 de octubre de 2017 (pdf 65), resolvió dejar sin efectos el referido auto y, en consecuencia, inadmitir el recurso de apelación presentado.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. La Nación - Ministerio del Trabajo (PDF 07)

La Nación - Ministerio de Trabajo, respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones y presentando las excepciones previas de agotamiento de la vía gubernativa y falta de legitimación en la causa por pasiva.

En lo que respecta a la excepción de agotamiento de la vía gubernativa, el Ministerio alega que la parte actora, **Industria Nacional de Gaseosas S.A.S.**, no presentó previamente una reclamación administrativa ante el **Ministerio del Trabajo**, conforme lo exige el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, modificado por la Ley 712 de 2001. Al no haberse cumplido este requisito de procedibilidad, la acción judicial carece de fundamento jurídico, por lo que se solicita su rechazo de plano.

En relación con la excepción de falta de legitimación por pasiva, se argumenta que el **Ministerio del Trabajo** no es parte legitimada para responder por los hechos planteados en la demanda, dado que su intervención en el registro sindical se limita a actuar como un órgano de recepción documental, cumpliendo exclusivamente con las funciones de registro que le asignan los artículos 365 y 366 del Código Sustantivo del Trabajo. Por tanto, el Ministerio no tiene la competencia para evaluar la legalidad material de la constitución sindical, ya que dicho análisis corresponde a la jurisdicción laboral ordinaria.

En virtud de lo anterior, el Ministerio solicita al juez que declare probadas las excepciones propuestas, exonerando a **la Nación - Ministerio del Trabajo** de toda responsabilidad en los hechos alegados y que se absuelvan todas las pretensiones dirigidas en su contra.

I.3.2. Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ASOTRAINDEGA) (PDF 12)

ASOTRAINDEGA, a través de apoderado judicial, respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones y presentando las excepciones previas de inepta demanda por falta de requisito de procedibilidad y vinculación del Ministerio

de Trabajo, prescripción de la acción y la inexistencia de justa causa invocada por la demandante para solicitar la disolución, liquidación y cancelación en el registro sindical.

En cuanto a la excepción de inepta demanda por falta de requisito de procedibilidad y vinculación del **Ministerio de Trabajo**, se alega que la empresa demandante no agotó la vía gubernativa ante el **Ministerio de Trabajo**, entidad encargada de resolver sobre la inscripción y cancelación de los registros sindicales. Según lo dispuesto en el artículo 6 del Código Procesal del Trabajo, es un requisito indispensable agotar dicha instancia administrativa antes de acudir a la jurisdicción laboral ordinaria. Al no cumplirse con este requisito, la demanda debe ser desestimada por inepta.

Respecto a la excepción de prescripción, **ASOTRAINDEGA** sostiene que la acción se encuentra prescrita, dado que la demanda fue admitida el 18 de octubre de 2011 y notificada al demandado hasta el 8 de marzo de 2013, excediendo el término de un año previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. La tardanza en la notificación vulnera el plazo legal, impidiendo la interrupción de la prescripción con la sola presentación de la demanda.

Finalmente, sobre la excepción de inexistencia de justa causa, se argumenta que la constitución de **ASOTRAINDEGA** fue legal y cumplió con todos los requisitos normativos. Los trabajadores fundadores del sindicato son empleados de la Industria Nacional de Gaseosas S.A., por lo que la relación laboral invocada por la demandante es real. No existe fundamento legal para disolver, liquidar o cancelar el registro sindical, ya que no se ha demostrado la inexistencia de un vínculo laboral ni la violación de las normas de constitución sindical.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 93 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia 09 de febrero del 2024, decidió declarar la ilegalidad de la constitución de la **Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ASOTRAINDEGA)** y, en consecuencia, ordenó la cancelación de su registro sindical ante el Ministerio de Trabajo, así como la liquidación de la asociación, conforme a lo solicitado por la parte demandante.

En sus consideraciones, el despacho examinó la naturaleza jurídica de ASOTRAINDEGA y determinó que, debido a la ausencia de una relación laboral directa entre los fundadores del sindicato y la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.S., no se cumplían los requisitos legales para la creación de un sindicato de empresa, conforme al artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. El juez consideró que, a pesar de que los miembros de **ASOTRAINDEGA** prestaban sus servicios en la empresa demandante, dicha prestación de servicios se realizaba a través de una intermediaria, Contactamos Servicios Ltda., lo que desvirtuaba la relación laboral necesaria para la constitución de un sindicato de base o empresa.

Respecto de las excepciones propuestas por la parte demandada, el juez declaró no probadas las excepciones previas de inepta demanda por falta de agotamiento de la vía administrativa y falta de legitimación por pasiva. El despacho estimó que la parte demandante cumplió con los requisitos procesales pertinentes y que el Ministerio de Trabajo actuó dentro del marco de sus competencias al registrar el sindicato, pero que dicho registro debía ser anulado por la inexistencia de una relación laboral directa entre los afiliados al sindicato y la empresa demandante.

Finalmente, el juzgado condenó a **ASOTRAINDEGA** en costas, al considerar que las pruebas aportadas fueron suficientes para acreditar la ilegalidad de su constitución, y remitió el caso al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en grado de consulta, dado que la decisión resultaba totalmente adversa a la demandada sindicalizada.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA (min 00:46:20 video 93)

El apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación, cuestionando la sentencia de primera instancia al considerar que se vulneraron garantías del debido proceso y los derechos fundamentales de **ASOTRAINDEGA**. En primer término, argumentó que el despacho realizó una valoración sesgada del material probatorio, limitándose a examinar las pruebas documentales aportadas por la parte demandante, sin efectuar un análisis integral de la totalidad del acervo probatorio. El apelante sostuvo que las certificaciones de Contactamos, que demuestran que los fundadores del sindicato tenían contratos de obra o labor, pero prestaban servicios en las instalaciones de la empresa demandante, fueron desestimadas injustificadamente.

Asimismo, el apoderado objetó la omisión del juzgado en pronunciarse sobre la excepción de prescripción, pese a que la notificación a **ASOTRAINDEGA** se efectuó más de 18 meses después de la admisión de la demanda, excediendo el término de un año previsto por la normatividad aplicable. Tal dilación, a juicio del apelante, debió conducir a la extinción de la acción por prescripción.

Además, el apoderado destacó que el juzgado no valoró la existencia de una sentencia sobreviniente emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Zipaquirá, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Cundinamarca, y en la que se reconoció la legalidad de la constitución del sindicato. La omisión de dicha sentencia en el fallo de primera instancia genera, según el apelante, una violación al principio de cosa juzgada, dado que existe una contradicción entre decisiones judiciales que versan sobre los mismos hechos.

Por último, el apoderado solicitó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, la revocatoria total de la sentencia, argumentando que no se configuran las causales legales para la disolución de **ASOTRAINDEGA** y que la constitución del sindicato se ajusta a los parámetros legales establecidos.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Si bien al presente proceso se le dio trámite bajo las reglas del procedimiento ordinario, se advierte que su naturaleza jurídica corresponde a un proceso especial de disolución, liquidación y cancelación de la organización sindical; sin embargo y dado que no se configuró vulneración alguna al derecho de defensa y contradicción de las partes y el mismo ya se encuentra pendiente de fallo, se adecua el trámite procesal, garantizando así la regularidad del procedimiento.

Surtido el trámite en esta instancia, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión impugnada en virtud de la apelación interpuesta por la parte demandada. El despacho de conocimiento, mediante auto del 21 de agosto de 2024 (PDF 07), resolvió avocar el conocimiento del recurso, el cual contaba con auto admisorio del 3 de mayo de 2024 (PDF 03), disponiendo el traslado a las partes para la presentación de sus respectivos alegatos de conclusión. Adicionalmente, este Tribunal procederá a estudiar, en favor de la Nación - Ministerio del Trabajo, el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ASOTRAINDEGA) (pdf 04 segunda instancia)

El apoderado de **ASOTRAINDEGA**, en sus alegatos de conclusión, manifestó que, tras el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado 19 Laboral del Circuito de Bogotá, el cual ordenó la liquidación del sindicato, la organización ha enfrentado un estado de inestabilidad jurídica. Este fallo ha generado una serie de renuncias voluntarias por parte de sus afiliados, motivadas por el temor a posibles represalias por parte de las empresas **Contactamos** e **Indega**, lo cual ha comprometido gravemente la subsistencia del sindicato.

En ese sentido, se argumentó que, debido a las circunstancias descritas, la organización sindical actualmente no cumple con el número mínimo de afiliados requerido por el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo para continuar su existencia legal. Por tanto, el sindicato se encuentra en proceso de liquidación, conforme a lo dispuesto en sus estatutos, y ha sido imposible captar nuevos afiliados, lo que evidencia que su desaparición como persona jurídica es inminente.

El apoderado solicitó que el Tribunal tenga en consideración este estado de cosas al momento de emitir su fallo de segunda instancia, dado que la organización sindical se encuentra inmersa en un proceso irreversible de liquidación, lo que incide

directamente en el análisis de fondo respecto a su disolución y cancelación del registro sindical. En consecuencia, el devenir del proceso y cualquier decisión adicional que pueda tomarse deberán considerar esta situación de facto.

Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (pdf 05)

El apoderado de **Industria Nacional de Gaseosas S.A. (INDEGA)**, en sus alegatos de conclusión, sostuvo que la constitución de **ASOTRAINDEGA** fue ilegal desde su inicio, ya que los trabajadores fundadores no cumplían con los requisitos establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo para conformar un sindicato de empresa.

Argumentó que los trabajadores vinculados al sindicato eran empleados de Contactamos Servicios Ltda., una empresa contratista independiente, y no de **INDEGA**, lo que quebranta los principios fundamentales que rigen la creación de sindicatos de base o de empresa.

El apoderado enfatizó que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo establece de manera clara que los contratistas, como **Contactamos**, son los verdaderos empleadores de los trabajadores que contratan, y que no existe vínculo laboral entre esos trabajadores y la empresa contratante de los servicios. En consecuencia, **INDEGA** no puede ser considerada como el empleador de los trabajadores afiliados a **ASOTRAINDEGA**, lo que invalida la conformación del sindicato bajo su denominación actual.

Además, el apoderado argumentó que **ASOTRAINDEGA** no cumplía con el número mínimo de afiliados exigido por el artículo 359 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que al menos 22 de los 27 miembros fundadores eran empleados de **Contactamos** y no de **INDEGA**. Esta situación, según el apoderado, constituye una violación de las normas de orden público y los propios estatutos de la organización sindical, lo que justifica su disolución y cancelación del registro sindical.

Finalmente, el apoderado de **INDEGA** solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que confirme la sentencia de primera instancia, ordenando la disolución, liquidación y cancelación del registro sindical de **ASOTRAINDEGA**, al considerar que su constitución fue contraria a derecho y que no existen elementos que justifiquen la permanencia del sindicato.

III. CONSIDERACIONES

Atenido este Juez Colegiado al principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del Ordenamiento Procesal Laboral y de la Seguridad Social, debe examinar los temas puestos a su consideración por la apelante, exclusivamente en cuanto los aspectos de inconformidad planteados. Igualmente, se estudiará la sentencia en el grado jurisdiccional de consulta en favor de la Nación - Ministerio del Trabajo.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada, así como también el estudio del grado de consulta en favor la Nación - Ministerio del Trabajo, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar los siguientes problemas jurídicos: i) ¿Se configura la institución de cosa juzgada en relación con la disolución y liquidación de ASOTRAINDEGA, conforme a los presupuestos normativos y jurisprudenciales que rigen esta figura? y ii) ¿Se encuentra ajustada a derecho la decisión de primera instancia al ordenar la disolución y liquidación de **ASOTRAINDEGA**, considerando los principios de debido proceso, prescripción y valoración probatoria?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En esta instancia, la Sala no solo debe resolver el recurso de apelación interpuesto por la demandada **ASOTRAINDEGA**, sino también abordar el grado jurisdiccional de consulta en favor de **la Nación - Ministerio del Trabajo**, conforme a lo establecido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La apelación se centra en dos aspectos clave de la sentencia de primera instancia: en primer lugar, la supuesta prescripción extintiva de la acción, derivada de una notificación extemporánea de la demanda; y, en segundo lugar, la vulneración del principio del debido proceso, por la falta de una valoración integral del acervo probatorio.

Cabe señalar que en esta fase no se discute la existencia de una relación laboral entre los miembros fundadores de **ASOTRAINDEGA** y la empresa demandante, ni la formalidad en la constitución del sindicato. Lo que está en debate es si la sentencia que ordenó la disolución y liquidación del sindicato se ajustó a derecho, teniendo en cuenta la posible prescripción procesal y la correcta valoración de las pruebas. Estos puntos resultan determinantes tanto para la apelación como para el control en sede de consulta que debe efectuar la Sala.

Inexistencia de Cosa Juzgada por Falta de Identidad Jurídica de Partes.

En lo que concierne a la excepción de cosa juzgada, se advierte que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral, mediante auto del 9 de octubre de 2017 (PDF 65), resolvió inadmitir el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que negó dicha excepción, toda vez que el auto atacado no resolvió de fondo la excepción previa, sino que se limitó a señalar que esta no sería objeto de pronunciamiento por haber sido propuesta de forma extemporánea, razón por la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dicha decisión no era susceptible de apelación.

No obstante, en la presente instancia se plantea nuevamente la discusión sobre la configuración de la cosa juzgada, en virtud del alegato de la parte apelante que introduce como elemento novedoso la existencia de un fallo previo en un proceso distinto. Resulta necesario efectuar un análisis jurídico a fin de determinar si se satisfacen los presupuestos normativos y jurisprudenciales que rigen esta institución y, en consecuencia, si la decisión adoptada en primera instancia se ajusta a derecho.

Acorde con la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia, la configuración de la cosa juzgada exige, entre otros presupuestos estructurales, la

triple identidad procesal, esto es, la coincidencia en objeto, causa y sujetos procesales. En este sentido, del análisis de la documental aportada por la parte demandante, visible en el PDF 69, se constata que en el proceso identificado bajo el radicado 25899-31-05-001-2016-00428-01, la parte demandante fue **Expertos Servicios Especializados LTDA** en tanto que la parte demandada correspondió a la **Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. – ASOTRAINDEGA**. Así las cosas, al verificarse que los sujetos procesales en el presente litigio difieren de aquellos involucrados en la decisión previamente invocada –toda vez que la demandante en este proceso es **Industria Nacional de Gaseosas S.A. – INDEGA**–, resulta palmario que no concurre el presupuesto de identidad subjetiva, condición sine qua non para la configuración del instituto de la cosa juzgada.

Asimismo, se advierte que tampoco se configura el requisito de identidad de causa, pues los fundamentos fácticos que dieron origen al proceso con radicado 25899-31-05-001-2016-00428-01 difieren sustancialmente de los que sustentan el presente litigio. En dicho proceso, la discusión giró en torno a la creación de una subdirectiva de ASOTRAINDEGA en Zipaquirá, a pesar de que en los estatutos originales del sindicato no se preveía disposición alguna que facultara la creación de subdirectivas, y a la inexistencia de trabajadores afiliados a la organización sindical que prestaran servicios en dicho municipio. Por el contrario, en el presente caso, la controversia se centra en la ausencia de un vínculo laboral entre los miembros de ASOTRAINDEGA e INDEGA, lo que impide su reconocimiento como sindicato de empresa conforme al marco normativo aplicable. En consecuencia, dado que el fundamento causal de ambos procesos es distinto, no es posible predicar la existencia de cosa juzgada respecto de la controversia objeto del presente trámite.

> *"Con todo, a modo doctrina, en aras de la claridad y la trasparencia, la Sala estima pertinente iterar que, frente al instituto de la cosa juzgada, tiene decantado: 1. Que de acuerdo con el artículo 303 del CGP, aplicable a los litigios laborales en virtud de la remisión autorizada por el artículo 145 del CPTSS, para que una sentencia ejecutoriada proferida en el marco de un proceso contencioso adquiera la fuerza de la cosa juzgada, es necesario que «el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes» (CSJ SL2235-2021, recordada en CSJ SL3367-2021), puesto que, con ello, lo que se busca es «preservar el principio de seguridad jurídica y evitar que respecto de unos mismos hechos, se produzcan decisiones contradictorias» (CSJ SL5121-2018)." (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral SL3299-2024).*

En consecuencia, el presupuesto de apelación aludido carece de viabilidad jurídica en esta sede, en tanto no se satisface el requisito estructural de identidad de partes, lo que impide conferir a la decisión referida efectos vinculantes en el marco del presente litigio.

Aplicación de la Prescripción Extintiva en Procesos Laborales: Análisis de la Notificación Fuera del Término Legal.

Este Despacho entiende la prescripción como un instituto jurídico que opera para extinguir derechos y acciones cuando el titular, dentro de un plazo preestablecido por la ley, no realiza los actos necesarios para su preservación o ejercicio. La prescripción extintiva se configura cuando, tras el transcurso del tiempo señalado, el derecho o la acción dejan de ser exigibles, perdiéndose así la posibilidad de su reconocimiento judicial. La Corte Suprema de Justicia ha definido este mecanismo como una garantía de estabilidad en las relaciones jurídicas, evitando su incertidumbre prolongada en el tiempo (CSJ SL 2501-2018).

La Corte Suprema de Justicia, en sentencias como las de 2 de mayo de 2003 (rad. 19854), SL385-2020, SL 5159-2020 y SL 4286-2022, ha señalado que la prescripción responde a la necesidad de dotar de seguridad jurídica a las relaciones laborales, exigiendo que las disputas no se prolonguen indefinidamente. Asimismo, la Corte Constitucional, en la sentencia C-412-1997, subrayó que la prescripción laboral cumple una doble función: por un lado, protege al trabajador al otorgarle un plazo claro para ejercer sus derechos y, por otro, resguarda la seguridad jurídica al poner fin a las controversias dentro de un tiempo razonable, evitando la perpetuación de los conflictos laborales.

En el ámbito del derecho laboral, el término de prescripción de las acciones para reclamar derechos laborales está establecido en tres años, según lo dispuesto en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Este término se cuenta a partir de la fecha en que el derecho se hace exigible, y, conforme a la jurisprudencia reiterada (CSJ SL 13155-2016, SL 1785-2018, SL 2885-2019), dicho plazo puede ser interrumpido por el "reclamo escrito" del trabajador al empleador, una figura que permite la suspensión del término por una única vez, generando así un nuevo plazo de tres años.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 94 del Código General del Proceso, aplicable supletoriamente a los procesos laborales en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la prescripción puede ser interrumpida con la presentación de la demanda, siempre que el auto admisorio o el mandamiento ejecutivo sean notificados al demandado dentro del término de un año desde la notificación al demandante. Si este plazo no se cumple, la interrupción de la prescripción sólo surtirá efecto a partir de la notificación efectiva del auto admisorio.

Frente al particular la CSJ SCL, en sentencia SL308 de 2021, señaló:

> *"…Interrupción de la prescripción*
> *El artículo 90 del CPC modificado por el 10 de la Ley 794 de 2003, vigente para la fecha en la que se accionó la jurisdicción y que es aplicable al proceso laboral por remisión del 145 del CPTSS, dispone que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre y cuando se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación al demandante del auto admisorio de la demanda. Pasado ese término, tales efectos sólo se producen con la notificación al llamado a juicio.*

De acuerdo con el precepto 91 ibidem, modificado por el 11 de la Ley 794 de 2003, no se consideraba interrumpida la prescripción, entre otras razones, cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda. Dicha norma fue objeto de acción de constitucionalidad y declarada exequible por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia CC C-227-2009 «en el entendido que la no interrupción de la prescripción y la operancia de la caducidad sólo aplica cuando la nulidad se produce por culpa del demandante». Lo anterior, entre otras razones, por cuanto el accionante que actúe de manera diligente y oportuna a reclamar ante la justicia no se puede ver perjudicado por circunstancias ajenas a su voluntad ni recibir igual trato de quien no ha actuado bajo esos criterios.

En lo que respecta al caso *sub examine*, se constata que la constitución del sindicato **ASOTRAINDEGA** tuvo lugar el 27 de marzo de 2011, hecho admitido por ambas partes y acreditado en los folios 5 y 6 del PDF 48, que contienen el acta de fundación del sindicato. Asimismo, la demanda fue admitida el 18 de octubre de 2011 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá D.C., evidenciándose la diligencia del demandante, quien informó al despacho sobre las gestiones realizadas para notificar a **ASOTRAINDEGA** del presente proceso, adjuntando los respectivos oficios y el trámite efectuado a través de la empresa de mensajería INTERPOSTAL, con constancias de notificación fechadas el 22 de noviembre de 2012 y el 18 de enero de 2013 (según consta en PDF 10). Igualmente, mediante la subsanación de la demanda, se allegaron nuevos citatorios dirigidos a la demandada a través de la empresa INTERPOSTAL, con fechas del 31 de enero de 2012, los cuales indican que, en diversas ocasiones, el resultado de la gestión fue "*Quien atiende la diligencia no se identifica e informa que la empresa a notificar ya no funciona en esta dirección, se trasladaron*"; mismos hechos registrados el 15 de febrero de 2012, el 13 de febrero de 2012 y el 31 de enero de 2012 (documentos visibles en el PDF 04 – subsanación de demanda).

No obstante, conforme a la normativa aplicable para la época de los hechos, esto es, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, vigente en ese entonces y aplicable supletoriamente al proceso laboral en virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la carga procesal para efectuar la notificación personal recaía sobre la parte demandante. En ese sentido, del análisis del expediente digital se desprende que se realizaron las gestiones necesarias para la notificación de la demanda, como se expuso en precedencia, sin embargo, dicha notificación no pudo perfeccionarse dentro del término legal debido a que, en reiteradas ocasiones, se informó que la empresa demandada se había trasladado, situación que impidió su efectiva citación dentro del plazo correspondiente.

Por tanto, en aplicación de los precedentes jurisprudenciales, no es procedente que el demandante sea afectado con la prescripción de la acción, toda vez que se evidencia la realización de las gestiones necesarias para la notificación dentro de los parámetros normativos aplicables. Asimismo, el demandante no puede ser sancionado por circunstancias ajenas a su actuar, tales como la imposibilidad de notificación derivada del cambio de domicilio de la demandada, cuya intención de eludir el proceso no puede ser determinada en esta instancia. En consecuencia, la prescripción alegada por el recurrente no puede prosperar en este caso, dado que se encuentra acreditado el cumplimiento de las diligencias procesales exigibles.

Examen del Principio del Debido Proceso en la Valoración del Material Probatorio en el Caso de ASOTRAINDEGA.

El análisis del principio de debido proceso en la valoración del material probatorio exige un examen detallado de las disposiciones legales que rigen la constitución de organizaciones sindicales en Colombia, y, en particular, el cumplimiento de los requisitos esenciales para la creación de sindicatos de empresa, conforme al artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo. En este contexto, no se evidencia vulneración del principio de debido proceso, toda vez que el despacho de primera instancia, al abordar las pretensiones de la parte demandada, limitó su análisis a la cuestión planteada y a la legalidad de la constitución de **ASOTRAINDEGA**, sin incurrir en una extensión *in procedendo* que derivara en la posible declaración de contratos realidad respecto de sus miembros y la empresa demandante, **INDEGA**, como acertadamente expuso el apelante.

Al constituirse **ASOTRAINDEGA** bajo la calidad de sindicato de empresa, tal y como lo establece expresamente el artículo 1 de sus estatutos –documento visible en el folio 7 del PDF 48–, y según se corroboró en el interrogatorio de parte del representante legal de la organización demandada, se deja en claro que su estructura es la de una organización sindical de primer grado y de empresa. Esta calidad obliga a los integrantes del sindicato a satisfacer los requisitos contenidos en el artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual dispone en su literal [1]a): "*De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución*." De esta disposición normativa, se infiere una exigencia *sine qua non*: la existencia de un vínculo laboral entre los integrantes del sindicato y la empresa a la cual, formalmente, debería pertenecer.

En relación con la argumentación de la apelación, donde se alega una valoración sesgada del material probatorio, se advierte que, tras la revisión exhaustiva del expediente digital, **ASOTRAINDEGA** sólo aportó en la contestación de la demanda una copia del certificado de existencia y representación legal de la organización, copia de la nómina de la junta directiva y copia de la nómina de los fundadores de la organización sindical. Es preciso señalar que la parte demandada desistió de los testimonios previamente solicitados, limitando así los elementos probatorios ofrecidos en su defensa. De esta situación se desprende que no le corresponde a la parte demandante probar un hecho negativo, es decir, la inexistencia de un vínculo laboral entre los miembros de **ASOTRAINDEGA** e **INDEGA**. Tanto la contestación de la demanda como el interrogatorio de parte rendido por el representante legal del

---

[1] **ARTÍCULO 356. SINDICATOS DE TRABAJADORES.** <Artículo modificado por el artículo 40 de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los sindicatos de trabajadores se clasifican así:
a). De empresa, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución;
b). De industria o por rama de actividad económica, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica;
c). Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad,
d). De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número mínimo requerido para formar uno gremial, y sólo mientras subsista esta circunstancia.

sindicato dejan en claro que los trabajadores afiliados a ASOTRAINDEGA son empleados de Contactamos, no de **INDEGA**. Así, de haberse pretendido el reconocimiento de una relación laboral con la empresa demandante, esta cuestión debería ser objeto de un proceso ordinario en el que se persigan formalmente dichas pretensiones.

Aun cuando el apelante arguye la falta de análisis respecto de la legalidad de los contratos laborales, cabe precisar que el debate en esta instancia se circunscribe a determinar la legalidad de la constitución del sindicato en función de su naturaleza y estatutos, no a la verificación o creación de relaciones laborales con la empresa demandante. Dicho de otro modo, este despacho no se encuentra en el foro adecuado para juzgar la relación laboral entre los miembros de **ASOTRAINDEGA** e **INDEGA** como lo pretende el apelante, sino que procede en aras de verificar la adecuación jurídica de la constitución sindical según los lineamientos normativos que regulan este tipo de asociaciones en Colombia.

Bajo esta óptica, no se vislumbra afectación al debido proceso, ya que los miembros de **ASOTRAINDEGA**, al no ostentar el vínculo laboral directo exigido por el artículo 356, no cumplen con los requisitos sustanciales para constituirse como un sindicato de empresa. De ser **ASOTRAINDEGA** un sindicato de industria, por ejemplo, su estructura jurídica y naturaleza organizativa responderían a un régimen distinto que, potencialmente, podría cobijar la afiliación de trabajadores sin relación contractual directa con una empresa específica. Sin embargo, la definición autoimpuesta en sus propios estatutos como organización de empresa impone la necesaria existencia de un vínculo laboral con **INDEGA**, lo cual, al no estar debidamente acreditado en el proceso, deriva en la inexistencia de los requisitos esenciales para su constitución y permanencia como tal.

En conclusión, y conforme a la *lex artis*, la valoración del material probatorio y de los alegatos presentados en la instancia se encuentra ajustada al derecho. La constitución del sindicato en calidad de sindicato de empresa carece de sustento jurídico al no acreditarse la pertenencia de sus integrantes a la estructura laboral de **INDEGA**, y, por ende, procede la confirmación de la sentencia de primera instancia que dispuso la disolución y liquidación de **ASOTRAINDEGA,** en cumplimiento del principio de legalidad y del debido proceso.

Procedencia de la Disolución y Liquidación de Sindicatos a la Luz del Incumplimiento de Requisitos Legales.

En vista de los aspectos revisados a lo largo del proceso, este despacho concluye que la disolución y liquidación de **ASOTRAINDEGA** resulta jurídicamente procedente al haberse verificado el incumplimiento de los requisitos fundamentales para su constitución en calidad de sindicato de empresa. La normativa laboral vigente exige un vínculo laboral directo y verificable entre los integrantes de un sindicato de empresa y la entidad empleadora en la cual dicho sindicato se constituye, vínculo que, en el presente caso, no fue acreditado. En consecuencia, la organización sindical carece de legitimidad para operar bajo la modalidad de sindicato de empresa, y su

estructura deviene en un incumplimiento de la normatividad que regula el derecho de asociación sindical en Colombia.

La exigencia de estos requisitos responde a una necesidad de orden y seguridad en el ámbito laboral, al asegurar que las organizaciones sindicales respeten la naturaleza jurídica que les confiere el ordenamiento. La disolución de **ASOTRAINDEGA**, en razón de la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, responde entonces a una aplicación del principio de legalidad, en la medida en que el incumplimiento estructural del vínculo laboral directo con **INDEGA** excluye cualquier posibilidad de reconocer su conformación como sindicato de empresa.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandada, se condenará en costas de segunda instancia en favor de la parte demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

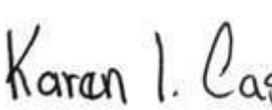
RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo la sentencia proferida el 09 de febrero del 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte **Asociación Nacional de Trabajadores de la Empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A. (ASOTRAINDEGA)** en favor de la parte demandante**.**

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 039.



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada -

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente demandada y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	WILLIAM ALBERTO SEGURA MORENO
Parte demandada	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
Radicación	11001310501920230006201
Fecha de la decisión	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA TRASLADO
Acta de Discusión	057
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310501920230006201

AUTO

PORVENIR S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS solicita la terminación del proceso, para lo cual invoca la figura de la carencia actual de objeto debido a un hecho sobreviniente relacionado con la entrada en vigor del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024. Argumenta que esta disposición otorga a los afiliados la posibilidad de acceder de manera libre y voluntaria a una doble asesoría que les permita comparar los regímenes pensionales y tomar decisiones informadas, incluso si anteriormente estaban inhabilitados para trasladarse. En este sentido, señaló que el objeto del proceso judicial quedaba superado, pues el demandante el 8 enero de 2025 fue traslado al RPM administrado por COLPENSIONES, la cual se hará efectiva en marzo del presente año.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA

La Sala se remite a lo dispuesto por los artículos 312 a 317 del CGP, sección quinta, sobre causales de terminación anormal del proceso, transacción y desistimiento.

Los preceptos en cita permiten concluir la improcedencia de la solicitud de la peticionaria, en tanto, no se fundamenta en las causales legales previstas para finiquitar el proceso de manera anormal.

Aunado a lo anterior, la Corporación no desconoce que es viable el estudio en segunda instancia de las peticiones del extremo en litigio tendiente a la terminación del proceso, sea por solicitud unilateral del deprecante, o por acuerdo, convenio o transacción realizados en el trámite del recurso, siempre que se ajusten al plexo normativo, es lo cierto que el objeto de la litis no es equiparable al acto puro y simple

de traslado entre regímenes pensionales autorizado por la Ley 2381 de 2024 y el canon 16 del Decreto 1225 de 2024.

Es que, el fondo demandado apoyó su petición en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 sobre oportunidad de traslado, en cuyos términos *"Las personas que tengan setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas, para el caso de las mujeres, y novecientas (900) semanas cotizadas, para el caso de los hombres, y que les falten menos de diez años para tener la edad de pensión, tendrán dos (2) años a partir de la promulgación de la presente ley para trasladarse de régimen respecto de la normatividad anterior, previa la doble asesoría de que trata la Ley 1748 de 2014"*.

En consecuencia, se niega la solicitud de terminación del proceso por carencia actual de objeto de litigio.

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 06 de septiembre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

William Alberto Segura Moreno, quien actúa a través de apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), pretendiendo que se declare la ineficacia del traslado realizado en 1998 del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Solicita, además, que se declare que estuvo válidamente afiliado al RPM administrado por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y que se condene a Porvenir S.A. a trasladar la totalidad de los recursos acumulados en su cuenta individual, junto con sus rendimientos, a Colpensiones. Como consecuencia de lo anterior, pide que se le reconozca una mesada pensional acorde con las condiciones del RPM, junto con el pago de costas procesales.

El demandante fundamenta sus pretensiones en la falta de cumplimiento del deber de información y asesoría por parte de Porvenir S.A., al momento del traslado de régimen pensional. Alega que no se le proporcionaron las ilustraciones necesarias sobre las características, ventajas, riesgos y consecuencias del cambio de régimen, especialmente respecto a su futuro pensional. Sostiene que el consentimiento prestado al firmar el formulario de afiliación fue viciado, toda vez que no fue informado adecuadamente de las implicaciones del cambio, lo cual afectó su derecho a una pensión digna y proporcional a los aportes realizados en el RPM. Afirma,

además, que los cálculos y proyecciones financieras sobre la prestación futura fueron omitidos, lo que indujo al demandante a tomar una decisión desventajosa.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 16 de junio del 2023 (pdf 05), luego, con providencia del 31 de octubre de 2023 (pdf 10), tuvo por contestada la demanda por COLPENSIONES y PORVENIR S.A., ordenó la notificación a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO y fijo fecha para la celebración de audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 07)

Colpensiones respondió la demanda oponiéndose a todas las pretensiones y proponiendo como primera excepción la aplicación del precedente establecido en la sentencia SL373 de 2021, según el cual no procede la declaratoria de ineficacia o nulidad del traslado de régimen pensional cuando el demandante es una persona que ya se encuentra pensionada en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en cualquiera de sus modalidades, lo que deriva en la figura de devolución de saldos. La entidad argumenta que este criterio es aplicable para garantizar la seguridad jurídica y la estabilidad del sistema pensional.

Adicionalmente, Colpensiones plantea que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, destacando que el traslado fue realizado de manera libre y espontánea, conforme a las disposiciones vigentes al momento de los hechos. La entidad sostiene que el demandante firmó el formulario de afiliación al RAIS con pleno conocimiento de sus efectos y que, en ausencia de prueba que demuestre una falta de información clara y precisa, no es posible considerar que su voluntad haya sido afectada.

Finalmente, Colpensiones fundamenta su defensa en la prescripción de la acción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, y en la presunción de legalidad de los actos administrativos, enfatizando que el traslado cumplió con las formalidades legales y fue ratificado implícitamente por la conducta del demandante al permanecer en el RAIS por más de 24 años. La entidad invoca también la buena fe, resaltando que el sistema actuó de manera diligente y dentro del marco normativo aplicable.

I.3.2. PORVENIR S.A. (PDF 08)

Porvenir S.A. respondió la demanda oponiéndose a todas las pretensiones y proponiendo varias excepciones de fondo. Como primera excepción, invoca la prescripción, argumentando que, si bien no se desconoce la imprescriptibilidad del

derecho pensional, la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional no comparte esa naturaleza. Señala que el debate en este proceso se centra en la legalidad del traslado de régimen y no en el derecho pensional propiamente dicho, lo cual permite aplicar los términos de prescripción establecidos en el artículo 1750 del Código Civil y el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Según la entidad, este término de cuatro años para solicitar la nulidad relativa ya ha expirado, haciendo improcedentes las pretensiones del demandante.

En segundo lugar, plantea la excepción de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, indicando que el traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue válido y realizado conforme a las disposiciones legales vigentes. Porvenir afirma que no existe obligación alguna de su parte para acceder a las solicitudes del demandante, dado que la afiliación y permanencia en el RAIS estuvieron respaldadas por actos jurídicos válidos y eficaces.

Finalmente, la administradora invoca las excepciones de buena fe e innominada o genérica, destacando que su actuación siempre estuvo ajustada a derecho y en cumplimiento de sus deberes legales y reglamentarios. Alega que el demandante recibió asesoría adecuada antes del traslado, lo que desvirtúa cualquier acusación de conducta indebida. Adicionalmente, pide que, en caso de que la juez encuentre probados hechos constitutivos de otras excepciones no alegadas específicamente, estas sean reconocidas oficiosamente conforme al artículo 282 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al procedimiento laboral.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 18 primera instancia)

Adelantadas las etapas procesales propias del trámite ordinario laboral y agotado el recaudo probatorio, el despacho del Juzgado Laboral del Circuito, mediante providencia del día 06 de septiembre del 2024, resolvió declarar la ineficacia del acto jurídico que materializó el traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), efectuado por el señor William Alberto Segura Moreno en enero del año 1998. En virtud de dicha declaratoria, se dispuso que el demandante permaneciera afiliado de manera continua y retroactiva al RPM administrado por Colpensiones. Adicionalmente, ordenó a la Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A. efectuar el traslado de los aportes correspondientes a Colpensiones, incluyendo rendimientos financieros e intereses generados, así como los valores destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

El despacho dio aplicación a los criterios modulados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024, que aborda de manera específica la carga probatoria en los traslados de régimen pensional y delimita los recursos susceptibles de transferencia y aquellos no afectados por la medida.

En su análisis, el despacho concluyó que Porvenir S.A. incumplió su deber de proporcionar información suficiente, clara y objetiva al demandante en el momento del traslado. Se enfatizó que las administradoras de fondos de pensiones, por su doble calidad de entidades de seguridad social y financieras, están obligadas a

cumplir con un estándar elevado de diligencia, dado que de sus actuaciones dependen derechos fundamentales asociados a la protección de la vejez, la invalidez y la muerte. Finalmente, el juzgado declaró la improcedencia de las excepciones propuestas por Porvenir S.A., incluidas las relacionadas con la prescripción, la inexistencia de la obligación y la buena fe, consolidando así la condena en su contra.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA PORVENIR S.A. (min 00:31:28 video 18)

La apoderada de la demandada, Porvenir S.A., interpuso recurso de apelación cuestionando la decisión de primera instancia, solicitando que se revoque la declaratoria de ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) del demandante, así como las condenas impuestas en su contra. Fundamenta su impugnación señalando que los precedentes jurisprudenciales deben ser aplicados atendiendo las circunstancias particulares de cada caso, y que en el traslado efectuado en 1998 se cumplió con la normativa vigente para la época en materia de deber de información, sin que pueda darse aplicación retroactiva a disposiciones legales posteriores.

Sostiene, además, que la conducta del demandante de permanecer en el RAIS durante 26 años sin manifestar inconformidad alguna constituye una ratificación tácita de su intención de permanencia en dicho régimen, lo cual refuerza la validez del traslado. Argumenta que, como consumidor financiero, el demandante tenía el deber de actuar con una mínima diligencia respecto de su derecho pensional, responsabilidad que no puede ser trasladada a la administradora. Asimismo, invoca la sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional, señalando que, en virtud de dicha decisión, no debe ordenarse el traslado de recursos al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, al tratarse de situaciones consolidadas y valores que ya no se encuentran bajo la administración de Porvenir.

En atención a estos argumentos, solicita que se revoque la decisión adoptada en primera instancia y se declare la improcedencia de las pretensiones del demandante, exonerando a la administradora de todas las condenas impuestas.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, el despacho de conocimiento, con auto de 11 de octubre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la única que se pronunció al respecto fue la parte demandada PORVENIR S.A. así:

PORVENIR S.A. (pdf 04 segunda instancia)

La apoderada de Porvenir S.A., en los alegatos de conclusión, reiteró su desacuerdo con la declaratoria de ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), ordenada en la sentencia de primera instancia. En este sentido, destacó que la normativa vigente al momento del traslado, en 1998, no contemplaba obligaciones como el deber de doble asesoría o el buen consejo, limitando las exigencias informativas a la presentación del formulario de afiliación, el cual fue diligenciado conforme a las disposiciones legales aplicables. Asimismo, argumentó que exigir la prueba de un cumplimiento normativo no previsto para la época constituye una carga probatoria desproporcionada, lo que desconoce principios procesales fundamentales, según lo establecido en la sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional.

Adicionalmente, señaló que el demandante tuvo múltiples oportunidades legales para retornar al RPM, pero no ejerció su derecho de retracto ni manifestó inconformidad alguna durante los 26 años posteriores al traslado, evidenciando una aceptación tácita de las condiciones del RAIS. Porvenir S.A. También manifestó que no corresponde ordenar el traslado de recursos al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debido a que dichos aportes tienen destinaciones específicas e irrevocables que no pueden ser modificadas por una decisión judicial. Finalmente, insistió en que la ineficacia declarada genera un desequilibrio en la sostenibilidad financiera del sistema pensional, al crear un impacto fiscal significativo para el RPM, y solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada y el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada y otorgado en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el traslado efectuado por el demandante del RPM al RAIS resulta ineficaz, y de salir avante tal declaración se procederá a verificar cuáles son las consecuencias jurídicas que tal declaratoria de ineficacia conllevaría.

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del análisis fáctico y probatorio del presente litigio, resulta indispensable delimitar los hechos que, por su naturaleza incontrovertida, no requieren de mayor análisis, así como aquellos que, por su controversia, constituyen el núcleo de la Litis y

deberán ser objeto de valoración jurídica por parte del despacho. Esta distinción no solo facilita la precisión en la conducción del proceso, sino que también permite centrar el debate en los puntos neurálgicos de la controversia, conforme al principio de economía procesal y al mandato de garantizar una resolución justa y expedita.

No son objeto de controversia los siguientes hechos: (i) la afiliación inicial del señor William Alberto Segura Moreno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones; (ii) su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en virtud de acto de afiliación a fondo de pensiones Colpatria el 18 de enero de 1998; y (iii) la validez formal de dicho documento en cuanto a la suscripción y recepción por parte de la administradora de pensiones.

Por el contrario, subsisten como aspectos objeto de controversia: (i) la verificación del cumplimiento del deber de información cualificada por parte de la administradora demandada, el cual implica la entrega de asesoría amplia, suficiente y oportuna respecto de los beneficios, riesgos y características inherentes a los regímenes pensionales; (ii) la existencia de vicios en el consentimiento del demandante al momento de los traslados, derivados de la presunta omisión de dicho deber de información; (iii) la procedencia de las excepciones propuestas por las demandadas, tales como la prescripción de la acción, aceptación tácita de las condiciones del RAIS y la inexistencia de la obligación; y (iv) la responsabilidad que podría recaer sobre las administradoras por el presunto impacto negativo en los derechos pensionales del demandante, particularmente en relación con su congrua subsistencia y la protección de su seguridad social.

Esta distinción preliminar permite encauzar el análisis hacia la determinación de si el traslado al RAIS estuvo acompañado de las garantías mínimas legales y constitucionales, así como si concurren los presupuestos jurídicos para declarar su ineficacia y, en consecuencia, restablecer la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Sobre el deber de información al surtirse el traslado de régimen pensional

Sentado lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se

configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021, SL 509 de 2024 y SL 2999 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 "*…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…"*, lo cual hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información

Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, pues frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

> *"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas.*
>
> *Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993*

según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.

(…)

También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.

También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

De este modo, habida cuenta de que el accionante, conforme a la solicitud de vinculación del 18 de enero de 1998 (archivo 08, folio 28) , efectuó su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en enero de 1998, a través del fondo de pensiones Colpatria, y que posteriormente, efectuó traslado horizontal a la AFP Horizonte, hoy Porvenir S.A. mediante la solicitud de vinculación No. 99-0036827 del 04 de febrero de 1999 (archivo 08, folio 29), resulta pertinente atender tanto los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL 2999 de 2024) como los desarrollos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024 la carga probatoria recae sobre la administradora de fondos de pensiones para demostrar que el traslado de régimen fue adoptado por el afiliado de manera libre y voluntaria, habiéndole proporcionado información suficiente, veraz y comprensible acerca de las características, condiciones de acceso, implicaciones y riesgos inherentes a cada uno de los regímenes pensionales disponibles.

Sobre la carga de la prueba – frente al cumplimiento del deber de información

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar en este caso que a la demandante al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y

voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de la AFP demandada, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Empero dicha postura, fue modulada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS..."*

Así pues, al sopesarse los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Corte Constitucional en la decisión previamente referida, se advierte que, en el caso sub examine, se arribaría a la misma conclusión a la que llegó el a quo, esto es, la procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

Caso concreto

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala concluye que no existe en el plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento cabal del deber de información por parte de la AFP Porvenir S.A. al momento del traslado del

demandante del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), pues el formulario aportado por la demandada, no es tan siquiera prueba somera del cumplimiento al deber de información que le acaecía.

Aunado a lo antes expuesto, resulta improcedente la tesis esgrimida por la parte demandada, según la cual la permanencia del demandante en el RAIS convalida el traslado inicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en las sentencias SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, ha reiterado que los traslados horizontales entre AFP del mismo régimen no subsanan la falta de información en el momento del traslado inicial desde el RPM. El análisis central en estos litigios radica en verificar si el afiliado recibió una información adecuada que le permitiera tomar una decisión consciente y fundamentada, y no en evaluar su permanencia posterior en el RAIS ni los deberes adquiridos como afiliado (CSJ SL1055-2022).

De otro lado, debe destacarse que el argumento de la AFP demandada, relativo a que la sola firma del formulario de afiliación implica una manifestación libre y voluntaria de voluntad por parte del afiliado, es insuficiente para cumplir con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.). En este contexto, incumbía a Porvenir S.A. demostrar que el asesor de servicios responsable de la afiliación cumplió con el deber legal de brindar una asesoría integral, proporcionando al afiliado una información comprensible y exhaustiva. La falta de acreditación de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que el traslado no se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables atrás vertidos.

En síntesis, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T. y S.S.), que faculta al juzgador para formar libremente su convicción mediante una apreciación integral y crítica del acervo probatorio, esta Sala concluye que la decisión de la demandante de trasladarse al RAIS adolece de los elementos de validez derivados de una elección consciente, autónoma e informada. No se encuentra acreditado que el asesor responsable del traslado hubiera desplegado una asesoría adecuada que incluyera una exposición clara y pormenorizada sobre las repercusiones del cambio de régimen, tales como los riesgos inherentes al RAIS, la necesidad de realizar cotizaciones adicionales, las consecuencias de no cumplir con el capital mínimo requerido para la pensión de vejez, la garantía de la pensión mínima, el régimen aplicable a la devolución de saldos, así como las diversas modalidades pensionales disponibles en el sistema. La omisión de estos aspectos esenciales evidencia un incumplimiento sustancial del deber de información, viciando así la decisión adoptada y afectando el derecho fundamental del afiliado a contar con una orientación precisa y completa que le permitiera sopesar los riesgos y beneficios de manera adecuada, conforme a los estándares de diligencia exigidos en el marco de la seguridad social integral.

En lo relativo a los efectos jurídicos derivados de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, resulta pertinente acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-107 de 2024, en la cual se señaló:

"…En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)

(…)

y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 327)."

La decisión en cuestión cabe señalar, se extiende de manera vinculante a todas las demandas que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria laboral, según lo establece el ordinal octavo, razón por la cual esta Sala acoge dicho pronunciamiento en su integridad. No obstante, se precisa que se mantendrá la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo que respecta al deber originario de las AFP de proporcionar asesoría integral y adecuada a sus potenciales afiliados, cuya omisión inevitablemente acarrea la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen.

Con fundamento en el precedente constitucional citado, esta Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de acoger parcialmente el recurso de apelación presentado por Porvenir S.A. En tal virtud, se dispone que no resulta viable ordenar el traslado del porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima, tal como lo señala la sentencia SU-107 de 2024, limitando los efectos de la declaratoria de ineficacia al traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional, si este ha sido efectivamente redimido.

Análisis de las Excepciones Propuestas por Colpensiones

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se concluye que estas carecen de soporte jurídico para prosperar dentro del contexto del presente litigio. Respecto del cobro de lo no debido, debe señalarse que las consecuencias inherentes a la declaratoria de ineficacia del traslado, así como la afiliación originaria del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), imponen a Colpensiones la obligación de readmitirlo como afiliado. Este deber encuentra sustento en la normativa vigente y en los principios rectores de solidaridad y eficiencia que gobiernan el sistema de seguridad social integral. Aunque Colpensiones no tuvo participación directa en el acto jurídico de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), su posición como administrador del régimen inicial establece un vínculo jurídico ineludible que la obliga a asumir las consecuencias legales del restablecimiento del derecho pensional del demandante.

En lo concerniente a la excepción de inexistencia del derecho resulta improcedente, ya que las responsabilidades de Colpensiones derivan directamente de su rol en la administración del RPM, así como de los efectos legales que emanan de la afiliación originaria del demandante. Asimismo, el principio de buena fe, si bien invocado por Colpensiones, no opera como un mecanismo eximente de las responsabilidades inherentes a su condición de entidad garante del derecho fundamental a la seguridad social.

En lo que respecta a la excepción de prescripción planteada, se concluye que este medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, toda vez que el traslado de régimen pensional afecta derechos inherentes al ser humano, los cuales, por su naturaleza fundamental, son imprescriptibles. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en pronunciamientos como las sentencias SL 3937-2018, SL 1688-2019 y SL 1949-2021, al reconocer que la acción para solicitar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen no puede estar sujeta a términos de prescripción, dado que no se trata de derechos de carácter patrimonial, sino de garantías esenciales vinculadas a la dignidad humana y a la seguridad social.

En relación con la excepción basada en el precedente establecido en la sentencia SL 373 de 2021, reiterado posteriormente en la SU 107 de 2024, esta Sala considera imperioso delimitar su aplicabilidad dentro del marco del caso concreto. Dichos precedentes estipulan que la calidad jurídica de pensionado constituye un estado consolidado que imposibilita la declaratoria de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), habilitando únicamente la vía para reclamar una indemnización de perjuicios, conforme Decreto 758 de 1990 y el Decreto 1833 de 2016. Sin embargo, su aplicación requiere de condiciones objetivas que, en el presente asunto, no se acreditan, por cuanto el demandante no ostenta la calidad de pensionado.

A partir de lo anterior, es claro que el estado jurídico del accionante no encuadra en los supuestos que impiden la declaratoria de ineficacia del traslado. La falta de consolidación de su calidad de pensionado implica que el traslado al RAIS puede ser examinado bajo los parámetros de legalidad y cumplimiento del deber de información, sin que ello suponga una colisión con el precedente judicial. En efecto, el análisis de las garantías mínimas que debían asistir al acto de traslado sigue siendo un aspecto susceptible de control judicial, máxime cuando se alega la ausencia de información cualificada, lo cual impacta de manera directa en los derechos fundamentales de la accionante.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala procederá a la modificación parcial de la sentencia de primera instancia, confirmando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante. Tal determinación se adopta en observancia estricta del marco normativo y jurisprudencial vigente, atendiendo particularmente al precedente establecido en la sentencia SU-107 de 2024, cuyo alcance y obligatoriedad fueron analizados en el desarrollo del presente litigio.

Así las cosas, se declara resuelta la apelación interpuesta por la parte demandada,

estimando parcialmente los argumentos del apelante Porvenir S.A. en lo concerniente a la improcedencia del traslado del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás conceptos no contemplados dentro de los límites señalados por el precedente constitucional.

Con lo anterior, se da por agotado el análisis de las cuestiones litigiosas, configurándose la ejecutoria de lo resuelto en los términos que se han indicado, en estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales que subyacen en el régimen de seguridad social integral.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad parcial del recurso presentado por la parte demandada, no se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral **TERCERO** de la sentencia proferida el día 06 de septiembre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, el cual quedará así:

> ***TERCERO: CONDENAR*** *a la* ***SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.,*** *identificada con NIT. 800.144.331-3 a devolver a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del señor WILLIAM ALBERTO SEGURA MORENO identificado con C.C. No. 79.257.313, como cotizaciones, aportes adicionales y los rendimientos financieros causados incluidos intereses, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, donde COLPENSIONES está obligada a recibir dichas sumas.*

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia proferida el día 06 de septiembre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído

TERCERO. SIN LUGAR a condenar en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará

copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 057.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	José Yofrel Lugo Cabezas
Parte demandada	Liebre LTDA José Lenin Jaramillo Aguilar Manuel Andrés Jaramillo Medina Luz Mónica Jaramillo Medina José Manuel Andrés Jaramillo Ortiz
Radicación	11001-31-05023-2023-00173 01
Fecha de la decisión	7 DE MARZO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	CONTRATO REALIDAD
Acta de Discusión	040
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502320230017301

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en razón de la sentencia proferida el día 7 de marzo del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

El demandante, José Yofrel Lugo Cabezas, actuando a través de su apoderado, presentó demanda ordinaria laboral contra la empresa La Liebre LTDA y sus socios, José Lennin Jaramillo Aguilar, Manuel Andrés Jaramillo Medina, Luz Mónica Jaramillo Medina y José Manuel Andrés Jaramillo Ortiz.

Relata en el escrito de demanda que la relación laboral, inició el 7 de octubre de 1993, desempeñándose como ajustador de motores bajo un contrato verbal y recibiendo un salario equivalente al mínimo legal vigente. Esta relación laboral culminó el 1 de marzo de 2003, por decisión unilateral del empleador, sin que se hayan cumplido con todas las obligaciones legales correspondientes.

Durante el tiempo de vinculación, el demandante sostiene que se le realizaron los descuentos salariales correspondientes a sus aportes al sistema de pensiones: sin embargo, estos aportes no fueron efectivamente trasladados al fondo de pensiones COLPENSIONES.

Que el demandante descubrió esta omisión al solicitar su historia laboral en dicho fondo, donde se evidenció que solo se realizaron aportes por 93.86 semanas, a pesar de haber laborado durante aproximadamente una década. Esto dejó un saldo de 390.14 semanas sin pagar, lo que constituye una violación a las obligaciones legales del empleador en materia de seguridad social.

Ante esta irregularidad, el demandante acudió inicialmente a la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), entidad quien, mediante comunicación oficial, indicó su falta de competencia para gestionar el cobro de los aportes correspondientes a períodos anteriores a junio de 2017, sugiriendo al demandante recurrir a la jurisdicción laboral para reclamar sus derechos. Este pronunciamiento motivó la presentación de la demanda, en la que se busca que se declare la existencia del contrato de trabajo entre las partes, se reconozca el derecho del demandante a que se realicen los aportes adeudados a COLPENSIONES, y se condene a la empresa demandada al pago de los montos no consignados, debidamente indexados, junto con las costas procesales.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 24 de agosto del 2023 (pdf 04), luego, con providencia del 13 de diciembre del 2023 (pdf 11), tuvo por contestada la demanda por todos menos por Manuel Andrés Jaramillo Medina y fijó fecha de audiencia de que tratan los artículos 77 y 80 del CPT y SS

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. Liebre LTDA (pdf 08)

En respuesta a la demanda interpuesta por José Yofrel Lugo Cabezas, la apoderada de la sociedad La Liebre LTDA, en representación de su poderdante presentó contestación en la que se opone a la totalidad de las pretensiones del demandante.

Sostiene que no existió una relación laboral entre las partes, sino una relación de naturaleza civil. Argumenta que el demandante prestaba servicios de manera ocasional, sin subordinación, horario determinado, ni salario, lo cual impide que se configure un contrato de trabajo conforme a lo establecido en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

La apoderada señala que los pagos realizados a COLPENSIONES hasta 1996 se efectuaron únicamente como un favor al demandante, quien aportaba los recursos necesarios para tales efectos. La relación contractual cesó en septiembre de 1996, cuando el demandante optó por iniciar su propio emprendimiento, momento a partir

del cual dejó de entregar los valores requeridos para continuar con los aportes a la seguridad social. Por tanto, la demandada alega que no se generó ninguna obligación de carácter laboral ni subsiste deuda alguna relacionada con aportes a la seguridad social.

Además, la contestación cuestiona la idoneidad de las pruebas presentadas por el demandante, en particular la constancia laboral expedida por la empresa, argumentando que esta fue emitida exclusivamente con fines educativos para que el demandante pudiera obtener su certificación en el SENA, y no como reconocimiento de una relación laboral. La demandada reitera que dicha constancia no constituye prueba suficiente para acreditar la existencia de un contrato de trabajo.

Durante el transcurso del proceso, todos los demandados respondieron a la demanda en los mismos términos, manteniendo una defensa coherente y uniforme en relación con los argumentos presentados por la apoderada de la empresa La Liebre LTDA.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video pdf 14 y 16 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 7 de marzo de 2024, decidió condenar a la sociedad La Liebre LTDA y a sus socios, José Lenin Jaramillo Aguilar, Manuel Andrés Jaramillo Medina, Luz Mónica Jaramillo Medina y José Manuel Andrés Jaramillo Ortiz, al pago de los aportes a pensión correspondientes a los períodos no cotizados. La condena se fundamentó en la determinación de que entre José Yofrel Lugo Cabezas y La Liebre LTDA existió una relación laboral bajo un contrato de trabajo a término indefinido, vigente desde el 7 de octubre de 1993 hasta el 1 de marzo de 2003.

El juez basó su decisión en la valoración del material probatorio, que incluyó el reconocimiento del representante legal de la empresa sobre la prestación de servicios por parte del demandante desde 1993 hasta 1997, el testimonio de un compañero de trabajo que confirmó la relación laboral hasta 2001, y una constancia de trabajo emitida el 12 de septiembre de 2002, que contribuyó a establecer la continuidad del vínculo laboral hasta la fecha de terminación del contrato. Estos elementos fueron determinantes para acreditar la existencia de una relación laboral en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, el juzgado condenó a los demandados a efectuar los pagos insolutos de aportes a pensión correspondientes a los períodos comprendidos entre el 12 de noviembre de 1993 y el 4 de diciembre de 1994, entre el 2 de septiembre de 1996 y el 30 de junio de 1997, y entre el 1 de septiembre de 1997 y el 1 de marzo de 2003, teniendo como salario el mínimo mensual legal vigente de cada periodo y a través de un cálculo actuarial que determine la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES.

Finalmente, el juzgado declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y condenó en costas a los demandados, en favor del demandante.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA (min 00:35:47 video 16)

La apoderada de la parte demandada interpuso un recurso de apelación basado en una presunta indebida valoración probatoria por parte del juzgado de primera instancia. En su argumentación, sostiene que no se acreditó suficientemente la existencia de una relación laboral posterior a septiembre de 1996, fecha en la que se formalizó el retiro del demandante por parte de la empresa. Además, el recurso señala que las inconsistencias y contradicciones del demandante en su interrogatorio refuerzan la postura de que la relación fue de naturaleza civil y no laboral, lo cual, según la apoderada, evidencia que la empresa actuó de buena fe y en cumplimiento de los acuerdos pactados.

Asimismo, la apoderada subraya que el demandante no presentó ningún requerimiento a la empresa ni a sus socios durante más de 28 años, lo que pone en duda la legitimidad de sus reclamaciones. Además, destaca la falta de pruebas concluyentes que demuestren que la relación laboral se extendió hasta el 1 de marzo de 2003, argumentando que, en todo caso, cualquier responsabilidad debería limitarse al año 1997, según lo señalado por el representante legal de la empresa. Por estas razones, solicitó que se conceda el recurso de apelación, para revalorar las pruebas y reconsiderar la decisión adoptada en primera instancia.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, el despacho de conocimiento, con auto de 11 de abril de 2024 (pdf 04), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; Se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

Liebre Ltda. (pdf 5 y 6 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión presentados por la parte demandada, se sostiene que la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá adolece de una incorrecta valoración probatoria, lo que condujo a una conclusión errónea sobre la naturaleza y duración de la relación entre el demandante, José Yofrel Lugo Cabezas, y la sociedad La Liebre LTDA. La apoderada de la demandada argumenta que, aunque existió una relación contractual, esta fue de naturaleza civil y no laboral, dado que la prestación de servicios era esporádica y no existía una subordinación continua.

El alegato enfatiza que el material probatorio presentado por el demandante es insuficiente para demostrar que la relación laboral se extendió hasta el 1 de marzo de 2003, como lo concluyó el juzgado. La apoderada destaca que la evidencia documental y testimonial aportada por la defensa demuestra que la relación contractual cesó en septiembre de 1996, fecha que debería ser reconocida como el término de la relación. Además, se cuestiona la fiabilidad del testimonio del demandante, debido a inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones, así como a la falta de reclamaciones durante más de 28 años, lo cual, según la defensa, debilita la credibilidad de sus pretensiones.

Asimismo, se cuestiona la validez de la constancia de trabajo emitida en 2002, presentada por el demandante como prueba de una relación laboral, señalando que esta fue emitida como un favor para fines educativos y no como reflejo de una vinculación laboral activa en esa fecha. En consecuencia, la apoderada solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, subsidiariamente, que se fije como fecha de terminación de la relación contractual el 30 de septiembre de 1996, conforme a la evidencia probatoria presentada.

José Yofrel Lugo Cabezas (pdf 07 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión, la parte demandante defiende la sentencia de primera instancia, afirmando que se basó en una valoración probatoria adecuada y conforme a derecho. El apoderado del demandante sostiene que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada no aporta pruebas suficientes para desvirtuar la existencia de la relación laboral ni la fecha de su terminación, fijada correctamente en el 1 de marzo de 2003.

Subraya que, conforme a la carga dinámica de la prueba, correspondía a la empresa demandada acreditar la fecha de finalización de la relación laboral, especialmente cuando emitió certificados laborales que gozan de presunción de veracidad. Asimismo, critica que la apelación no demuestre de manera efectiva un error judicial, limitándose a expresar inconformidades sin un fundamento jurídico sólido. Por estas razones, solicita la confirmación íntegra de la sentencia de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandada.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: i. ¿La valoración probatoria efectuada en primera instancia fue correcta al concluir que entre José Yofrel Lugo Cabezas y Liebre LTDA existió un contrato de trabajo, o, por el contrario, no se acredito tal supuesto?, y ii. El vínculo contractual tuvo vigencia hasta el 1º de marzo de 2003, o como lo alega la recurrente solo se surtió hasta el año 1997, ¿considerando la carga probatoria y la presunción de legalidad de los documentos aportados?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Para resolver la presente causa, esta Sala considera, en primer lugar, que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por el principio de integración normativa que establece el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es responsabilidad de la parte activa probar los hechos que sustentan sus pretensiones, mientras que a la parte demandada le corresponde demostrar los hechos en que se basa su defensa. En este contexto, la demandante debe probar la existencia de una relación laboral para que esta sea declarada; es decir, que prestó servicios personales a la demandada, conforme a lo estipulado en los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, de acuerdo con el [1]artículo 24 del mismo código, basta con demostrar la prestación personal del servicio para que se presuma la existencia de una relación laboral, y es necesario además acreditar su continuidad en el tiempo, ya que de ello depende la imposición de las condenas correspondientes.

Por su parte, la demandada debe desvirtuar esta presunción legal, demostrando que el vínculo entre las partes no se desarrolló dentro de un marco laboral y careció de subordinación o dependencia.

En este escenario, la Sala recuerda, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, que el principio constitucional de primacía de la realidad se fundamenta en la prevalencia de los hechos reales sobre las formas, en consonancia con el respeto a la dignidad humana y la justicia social que rodea al trabajo. Este principio otorga al juez la facultad de privilegiar la realidad sobre lo que los documentos o acuerdos formales puedan aparentar, incluso cuando estos sean el resultado de un intento deliberado de ocultar o alterar la verdadera naturaleza de la relación jurídica. De este modo, se facilita la identificación de una relación laboral y se garantiza la protección de los derechos y prerrogativas inalienables que emanan de ella a favor de los trabajadores.

Esta protección está consagrada no sólo en el artículo 53 de la Constitución, sino que también constituye un eje central del Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 1 y 13, y se refuerza con la Recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo de 2006, la cual forma parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución. Es importante recordar que el papel del juez en estos casos es descubrir la verdad material, aquella que se esconde detrás de las apariencias y de las manipulaciones, sin limitarse a lo que las partes intentan presentar en el proceso judicial.

Con estas premisas, el Juez Plural procede a examinar los puntos fundamentales que sustentan la presente controversia.

III.2. CONTRATO DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES

[1] ARTICULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Evaluación de la Prestación Personal del Servicio y la Subordinación

La prestación personal del servicio es un elemento esencial para la configuración del contrato de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Este elemento jurídico implica que el trabajador se compromete a ejecutar las labores encomendadas de manera directa e intransferible, sin la posibilidad de delegar sus funciones a terceros. La importancia de este requisito radica en que, una vez demostrado, activa la presunción legal de la existencia de una relación laboral, de acuerdo con el artículo 24 del mismo compendio normativo, esta presunción establece una carga probatoria inversa, obligando al empleador a desvirtuar la existencia de subordinación o dependencia, o a probar que la relación entre las partes fue de naturaleza distinta, como un contrato civil de prestación de servicios.

En este sentido, la prueba de la prestación personal del servicio se convierte en un elemento crucial para la determinación de la existencia del vínculo laboral, ya que confirma la obligación personalísima del trabajador en el cumplimiento de sus funciones, garantizando así la protección de sus derechos laborales y la observancia de las normas que rigen el contrato de trabajo.

Para establecer si la relación entre el demandante y la demandada fue de carácter laboral, se cuenta con el siguiente acervo probatorio:

En primer lugar, el representante legal de La Liebre LTDA., José Manuel Jaramillo, reconoce que el demandante prestó servicios desde 1992, aunque sostiene que dichos servicios eran esporádicos y voluntarios. No obstante, en el expediente obra la certificación laboral emitida por la empresa, visible a folio 09 del PDF 01, en la que se deja constancia de que José Yofrel Lugo Cabezas trabajaba en dicha compañía desde hacía diez años, desempeñando el cargo de ajustador de motores y realizando mantenimiento de motores diésel. Este documento, fechado el 12 de septiembre de 2002, constituye un medio de prueba idóneo que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, genera una presunción de veracidad que debía ser desvirtuada por la parte demandada con prueba suficiente en contrario.

Así las cosas, le correspondía al empleador aportar elementos probatorios sólidos que acreditaran la falsedad del contenido de la certificación o que evidenciaran que la relación entre las partes no revestía naturaleza laboral.

Ahora, al evaluar la correspondencia entre las labores desempeñadas por el demandante, José Yofrel Lugo Cabezas, y el objeto social de la empresa *La Liebre LTDA*, tal como se establece en el certificado de la Cámara de Comercio aportado en la demanda (pdf 01 folios 10-13). Según dicho documento, el objeto social de la empresa abarca la "*compra, venta, distribución, almacenamiento, mantenimiento y reparación de automotores*," así como la "*compra y venta de partes, piezas y accesorios para vehículos.*" Estas actividades conforman el núcleo de la operación comercial de la empresa, teniendo como actividad principal registrada el mantenimiento y reparación de vehículos automotores.

Y en efecto, las tareas desempeñadas por el demandante, en su calidad de mecánico y electricista automotriz, consistían precisamente en la reparación y mantenimiento de vehículos, lo que se alinea de manera directa con las actividades principales de *La Liebre LTDA*. Esta correspondencia entre las funciones del demandante y el objeto social de la empresa refuerza la presunción de existencia de una relación laboral formal, dado que sus labores eran esenciales para la consecución del propósito empresarial de la demandada.

Acreditado como se encuentra la prestación personal del servicio, en la medida en que el demandante ejecutaba labores directamente relacionadas con la actividad principal de la empresa y que fueron aceptadas por su representante, dicho reconocimiento resulta suficiente para activar la presunción de existencia de una relación laboral conforme a la normativa aplicable. No obstante, en atención a lo señalado por la jurisprudencia, corresponde a la parte actora no solo la acreditación de la prestación del servicio, sino también la demostración de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que esta se desarrolló. En el presente caso, como se verá más adelante, el material probatorio recaudado en el proceso permitió establecer que la ejecución de las funciones del demandante se realizaba bajo directrices operativas diarias, con indicaciones precisas sobre su labor y horario, lo que configura un indicio de subordinación. En ese sentido, la afirmación de la demandada en el sentido de que la relación era esporádica no resulta suficiente para desvirtuar la presunción que establece el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, máxime cuando se encuentra acreditado que se realizaban pagos periódicos por los servicios prestados, aunque bajo un esquema que la parte demandada intentó caracterizar como civil.

Adicionalmente, la existencia de un horario laboral quedó acreditada con el testimonio del señor Rolando Guido, quien fue compañero de trabajo del señor José Yofrel Lugo Cabezas durante el periodo comprendido entre el segundo semestre de 1998 y septiembre de 2001 y en concordancia con lo dicho por el actor en su interrogatorio de parte, mencionó que la jornada laboral se desarrollaba de lunes a viernes, desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., con una hora de almuerzo, y los días sábados hasta el mediodía. Así mismo, indicaron que se les permitía salir entre las 5:00 p. m. y las 5:30 p. m. con el propósito de facilitar su asistencia a compromisos académicos. Estas declaraciones, al ser concordantes y emitidas por quienes vivenciaron directamente la dinámica laboral en el establecimiento de la demandada, constituyen un indicio adicional de la existencia de una relación de trabajo regida por las normas del derecho laboral y no por una simple vinculación civil esporádica, como lo sostiene la parte demandada.

En ese orden de ideas procede la Sala a examinar si la parte demandada cumplió con su deber probatorio de desvirtuar la presunción antes analizada para en su lugar acreditar que la relación se dio sin visos de subordinación, elemento esencial en la configuración de un contrato de trabajo.

A fin de determinar la naturaleza de la relación contractual entre las partes, se presentaron los testimonios de Rolando Guido, Gonzalo Rodríguez y Marlene García,

quienes desempeñaron funciones en la empresa demandada en distintos periodos y cuyo conocimiento de los hechos deriva de su vínculo con la misma.

El señor Rolando Guido, quien laboró en La Liebre LTDA. entre el segundo semestre de 1998 y septiembre de 2001, manifestó haber sido compañero de trabajo del demandante y afirmó que el representante legal de la empresa, José Jaramillo, asignaba diariamente las labores a los trabajadores. Señaló que el horario de trabajo era de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., con una hora de almuerzo y los sábados hasta el mediodía, aunque se permitía salir entre las 5:00 y 5:30 p. m. para asistir a actividades académicas. Indicó que los pagos se realizaban de manera quincenal en efectivo, con un salario base más comisiones por servicios prestados, y que la empresa suministraba las herramientas necesarias para la ejecución de las labores. Además, aseguró que, tras su retiro, el demandante continuó vinculado a la empresa y que, en su caso, al momento de cesar su relación laboral, no recibió liquidación, sino únicamente el pago de su último salario.

Por su parte, el testigo Gonzalo Rodríguez, quien trabajó en la empresa entre 1995 y 1996, señaló que era mecánico automotriz y que el demandante era su compañero en ese periodo. Expuso que José Jaramillo era quien coordinaba la distribución del trabajo y asignaba los vehículos a reparar, aunque en otro punto de su declaración sostuvo que solo se convocaba a los trabajadores cuando llegaban automóviles al taller, presentando una evidente contradicción en su testimonio. Afirmó que le pagaban un porcentaje por cada trabajo realizado y que, aunque posteriormente volvió en tres ocasiones al taller, estas fueron esporádicas y no recuerda las fechas exactas.

Marlene García, quien trabajó en el área administrativa de La Liebre LTDA. entre 1989 y 2009 y quien, además, es hermana del representante legal de la demandada, testificó que, cuando llegaban trabajos eléctricos, estos eran realizados por el demandante y que este continuó prestando servicios de manera esporádica hasta 2003. Afirmó que a los trabajadores se les pagaba en efectivo un porcentaje por trabajo realizado y que no tenían un horario fijo. No obstante, en contradicción con esta afirmación, señaló que si había trabajo todos los días, entonces todos los días llamaban al demandante para que lo ejecutara, lo que, en efecto, llevaría a inferir que su vinculación era más regular de lo que se pretende hacer ver y que existía una necesidad constante de su labor en la empresa.

Asimismo, indicó que ella le hizo el favor de expedir "las carticas" para que pudiera estudiar, refiriéndose a la certificación laboral de fecha 12 de septiembre de 2002, en la que se dejó constancia de que el demandante había trabajado para la empresa durante diez años. Finalmente, en relación con la novedad de retiro en seguridad social, sostuvo que esta se realizó de manera extemporánea, posiblemente por un descuido de su parte.

El análisis de estos testimonios permite advertir inconsistencias significativas en los relatos presentados por la parte demandada, los que intentan establecer que la prestación del servicio por parte del demandante era esporádica y sujeta a convocatoria, además admiten que José Jaramillo, representante legal de la empresa,

tenía el control sobre la asignación de las labores, lo que constituye un indicio relevante de subordinación. De igual forma, se acreditó que el horario de trabajo se ajustaba a una jornada laboral definida y que existía un pago quincenal con una estructura de salario base y comisiones, elementos que son propios de una relación laboral y no de un contrato civil por obra o labor determinada.

En el presente caso, al no haberse desvirtuado la existencia de subordinación, se configura la existencia de un contrato de trabajo entre las partes. Aunque los servicios prestados por el trabajador hubiesen sido esporádicos, ello no exime al empleador de sus obligaciones en materia de seguridad social. Durante el período en cuestión, la normativa colombiana no contemplaba la posibilidad de cotizar al sistema de pensiones por períodos inferiores a un mes; por lo tanto, el empleador estaba obligado a realizar las cotizaciones completas mensuales por sus trabajadores, independientemente de la duración o intermitencia de los servicios prestados.

La Ley 100 de 1993, que establece el Sistema General de Pensiones, dispone en su artículo 17 que, durante la vigencia de la relación laboral, el empleador debe efectuar las cotizaciones obligatorias al sistema de pensiones sobre el salario devengado por el trabajador. No obstante, en la época de los hechos, la legislación no permitía la cotización por días o períodos inferiores al mes, lo que implicaba que cualquier prestación de servicios, sin importar su duración, generaba la obligación de cotizar por el mes completo.

La jurisprudencia ha sido clara en señalar que la omisión del empleador en el pago de los aportes al sistema de pensiones conlleva la obligación de sufragar dichos aportes mediante un cálculo actuarial, a satisfacción de la respectiva entidad pensional. La Corte Constitucional, en la sentencia T-156 de 2023, enfatizó que el empleador incumplido debe asumir el costo de los aportes omitidos con base en un cálculo actuarial.

Por lo tanto, en este caso concreto, al haberse establecido la existencia de una relación laboral y ante la ausencia de cotizaciones al sistema de pensiones por parte del empleador, procede ordenar el pago del cálculo actuarial correspondiente. Esto garantizará que el trabajador vea reflejado el tiempo laborado en su historial pensional, sin que la naturaleza esporádica de los servicios prestados tenga incidencia en dicha obligación, dado que la normativa vigente en ese momento no permitía la cotización por días.

Así las cosas, la parte demandada no logró desvirtuar la existencia de subordinación en la relación entre José Yofrel Lugo Cabezas y Liebre LTDA, ya que no aportó pruebas contundentes que demostraran la ausencia de control y dirección por parte del empleador sobre las tareas realizadas por el demandante. Aunque intentó caracterizar la relación como esporádica y voluntaria, no presentó evidencia suficiente que contrarrestara los testimonios y hechos que indican que el representante legal de la empresa ejercía control directo al asignar las labores específicas, como la reparación de vehículos, objeto social de la empresa demandada.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL753-2020, ha enfatizado la relevancia de vincular las actividades realizadas por un trabajador con el objeto social de la empresa demandada. En esa oportunidad, la Corte señaló:

> *"Aunque la censura cuestiona la valoración del certificados de existencia y representación legal de la enjuiciada, su planteamiento lejos está de apuntar a la demostración de un error fáctico, que es lo que corresponde a la senda seleccionada para el ataque, en tanto lo que persigue es persuadir a la Sala de que el Tribal no podía relacionar la actividad específica de la demandante con el objeto social de la demandada, por cuanto "Ese tema (…) no fue materia de fijación del litigio, se trata de un hecho nuevo que incluyó el Tribunal, y que no tiene la mínima relación al tema en estudio, pues por parte alguna se tocó el tema de la solidaridad entre las partes"*
>
> *En cualquier caso, tal reproche no tiene de donde asirse, pues la lectura desprevenida de la sentencia gravada permite concluir que el propósito del Tribunal al asentar que "el cargo desempeñado por la demandante hace parte de las labores normales y permanentes de dicha empresa", no era llamar a operar las reglas de la solidaridad, sino destacar que según su análisis no podía dejarse de lado la afinidad entre los servicios prestados por la accionante y la actividad empresarial, desde la perspectiva de la relación de trabajo a término indefinido que halló demostrada"*

En virtud de lo expuesto, esta Sala considera que los principios de favorabilidad e ***in dubio pro operario*** son plenamente aplicables al caso *sub judice*, como mecanismos fundamentales para la protección de los derechos del trabajador, José Yofrel Lugo Cabezas, en el marco de la relación controvertida con la empresa *La Liebre LTDA*.

El principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, establece que, en caso de existir varias interpretaciones posibles en un conflicto laboral, debe adoptarse aquella que resulte más beneficiosa para el trabajador. En el presente caso, este principio se aplica al preferir la interpretación que reconoce la existencia de una relación laboral, considerando la correspondencia entre las funciones desempeñadas por el demandante y el objeto social de la empresa, así como la continuidad en la prestación de los servicios.

Por lo tanto, en aplicación conjunta de estos principios, se concluye que la relación entre José Yofrel Lugo Cabezas y *La Liebre LTDA* fue de naturaleza laboral, lo que obliga a la empresa a cumplir con todas las prestaciones y derechos que de dicha relación se derivan, de conformidad con la normatividad laboral vigente.

En consecuencia, la valoración del acervo probatorio, contrario a lo expuesto por el recurrente, permiten llegar al convencimiento de la existencia de una relación laboral entre José Yofrel Lugo Cabezas y Liebre LTDA., con el resultado que la empresa debe cumplir con las obligaciones laborales derivadas de dicha relación.

Extremos laborales

Una vez acreditado lo anterior, resulta imperativo abordar el estudio de la fecha de finalización de la relación laboral entre José Yofrel Lugo Cabezas y *La Liebre LTDA*.

Del estudio del material probatorio se evidencia inconsistencias significativas en las declaraciones de la parte demandada respecto de la fecha de terminación del vínculo entre el demandante y la empresa *La Liebre LTDA.* En primer lugar, el representante legal de la empresa, José Manuel Jaramillo, afirmó en su declaración que el demandante solo prestó servicios hasta 1997, mientras que en la contestación de la demanda se indicó que la relación civil cesó el 30 de septiembre de 1996, argumentando que a partir de esa fecha el demandante habría iniciado su propio taller. Sin embargo, esta versión resulta contradictoria con los testimonios recaudados.

En efecto, el señor Rolando Guido, quien laboró en la empresa entre el segundo semestre de 1998 y septiembre de 2001, manifestó que al momento de su retiro el demandante aún continuaba prestando servicios en la empresa. En contraste, el testigo Gonzalo Rodríguez, quien laboró entre 1995 y 1996, sostuvo que el demandante se retiró en 1996. A su vez, la señora Marlene García, encargada del área administrativa, declaró que el demandante prestó servicios de manera ocasional hasta el año 2003. Estas inconsistencias evidencian que los testimonios presentados por la parte demandada carecen de uniformidad y solidez en la fijación del extremo final de la relación entre las partes, restando credibilidad a la versión de la empresa.

Además, dentro del expediente se encuentran documentos que refuerzan la continuidad de la relación del demandante con la empresa más allá de 1996. En particular, obran informes trimestrales de seguimiento y evaluación de alumnos patrocinados dirigidos al SENA, los cuales refieren la vinculación del demandante en los siguientes periodos: agosto de 2002 (PDF 01, folio 23), abril de 2002 (PDF 01, folio 24), enero de 2002 (PDF 01, folio 25) y octubre de 2001 (PDF 01, folio 25). Dichos documentos, firmados por la propia empresa, reflejan la existencia de un vínculo entre el demandante y la demandada en fechas posteriores a 1996, lo que desvirtúa la tesis expuesta por la parte accionada. No resultaría lógico que *La Liebre LTDA.* expidiera documentos certificados por la empresa en los años 2001 y 2002 con referencia al demandante si su vinculación hubiera cesado en 1996, lo que refuerza la presunción de la continuidad de la relación laboral hasta una fecha posterior.

Ahora, la parte demandada sostiene que en caso de que sea reconocida la relación laboral, debe valorarse únicamente hasta el año 1996, en virtud de que fue en esa fecha cuando se efectuó el retiro del demandante del sistema de seguridad social por parte de la empresa. No obstante, este argumento carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar la continuidad de la relación laboral más allá de dicha fecha, especialmente por lo consignado en la certificación laboral emitida por la misma empresa demandada, en la que se señala que el promotor del litigio laboró hasta 12 de septiembre de 2002 (pdf 01 fl 9).

Y si bien, la parte accionada ha pretendido tachar de falsedad el referido certificado laboral; no ha aportado pruebas contundentes que sustenten tal afirmación. En consecuencia, y dado que no le logró desvirtuar por la parte demandada la veracidad de dicho documento, se considera como evidencia válida de la continuidad de la relación laboral más allá de 1996.

"En punto al valor de las certificaciones emitidas por el empleador, en reciente decisión, CSJ SL1849-2024, en la que rememoró la CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360, reiterada en la CSJ SL, 23 sep. 2009, rad. 36748; CSJ SL, 24 ago. 2010, rad. 34393; CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666 y CSJ SL17514-2017; CSJ SL 2032-2018 y CSJ SL 4296-2022, La Sala adoctrinó:

> *El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral." (SL 3218 del 2024)*

Por lo tanto, esta Sala estima procedente fijar como fecha de terminación de la relación laboral la última constancia documental verificable en el expediente, correspondiente al 12 de septiembre de 2002, de acuerdo con el certificado laboral expedido por la empresa.

En virtud de lo expuesto, esta Sala concluye que la relación laboral entre José Yofrel Lugo Cabezas y *La Liebre LTDA* debe reconocerse hasta el 12 de septiembre de 2002, lo que implica que la decisión de primera instancia deba ser modificada.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad del recurso presentado por la parte demandada, pues se modificó la fecha del extremo final, no se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO, de la sentencia proferida el día 7 de marzo del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, mismo que quedará así:

*"**SEGUNDO:** CONDENAR a los demandados la LIEBRE LTDA y solidariamente a sus socios JOSÉ LENIN JARAMILLO AGUILAR, MANUEL ANDRÉS JARAMILLO MEDINA, LUZ MÓNICA JARAMILLO MEDINA, y JOSÉ MANUEL ANDRÉS JARAMILLO ORTIZ, hasta el límite de su responsabilidad, a pagar a favor del demandante JOSÉ YOFREL LUGO CABEZAS, y ante la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, los aportes a pensión correspondientes a los períodos comprendidos entre el 12 de noviembre de 1993 y el 4 de diciembre de 1994, entre el 2 de septiembre de 1996 y el 30 de junio de 1997, y entre el 1 de septiembre de 1997 y el 12 de septiembre de 2002, teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente, y conforme al cálculo actuarial que se efectúe por el mencionado Fondo, para validar dichos aportes."*

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el día 7 de marzo de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

TERCERO. SIN LUGAR a condenar en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 040.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Ríos B.

DANIELA DE LOS RÍOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	ANGELA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ
Parte demandada	CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR
Radicación	110013105023-2023-00295 01
Fecha de la decisión	28 DE FEBRERO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	CONTRATO REALIDAD
Acta de Discusión	072
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502320230029501

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, en razón de la sentencia proferida el día 28 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La demandante, Ángela Liliana Contreras Gutiérrez, presentó demanda ordinaria laboral contra la Corporación Defensoría Militar, invocando la existencia de una verdadera relación laboral encubierta bajo la figura de contratos de prestación de servicios. Dichos contratos se suscribieron de manera sucesiva desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2022. La demandante alega que, a pesar de la forma contractual utilizada, los elementos esenciales de una relación laboral, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, se encontraban presentes. Estos elementos incluyen la prestación personal de servicios, la continuada subordinación y el pago de una remuneración fija mensual.

Durante el periodo señalado, la demandante desempeñó el cargo de psicóloga, realizando funciones que excedían las estipuladas en los contratos de prestación de servicios, como atender órdenes directas de superiores, cumplir un horario laboral de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes, y prestar servicios adicionales a familiares y amigos de directivos, así como dictar capacitaciones al personal militar. La

demandante sostiene que tales actividades evidencian una clara subordinación, característica propia de una relación laboral, y que el uso reiterado de contratos de prestación de servicios por parte de la demandada tuvo como único propósito eludir el reconocimiento de los derechos laborales que legítimamente le correspondían.

La demandante asegura que durante la ejecución de la relación laboral no le fueron pagadas las prestaciones sociales, tales como primas de servicios, auxilio de cesantías, vacaciones, ni aportes al sistema de seguridad social. A su vez, afirma que, al finalizar la relación contractual el 30 de noviembre de 2022, la demandada incurrió en despido sin justa causa, sin reconocer la indemnización correspondiente por dicha terminación unilateral, en contravención al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Igualmente, aduce la mala fe de la Corporación Defensoría Militar, que en todo momento pretendió ocultar la verdadera naturaleza de la relación mediante la simulación de contratos de prestación de servicios, incurriendo así en violaciones a derechos ciertos e irrenunciables.

En virtud de lo anterior, la demandante solicita al despacho judicial que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido, desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 30 de noviembre de 2022, y que se condene a la Corporación Defensoría Militar al pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnización por despido sin justa causa, sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y demás conceptos adeudados.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 23 de octubre del 2023 (pdf 05), luego, con providencia del 13 de diciembre de 2023 (pdf 08), tuvo por contestada la demanda por la DEFENSORÍA MILITAR, y se fijó fecha para la celebración de audiencias de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR (PDF 07)

La Corporación Defensoría Militar respondió la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas por la demandante, Ángela Liliana Contreras Gutiérrez, y presentó las excepciones de solicitud de pago de lo no debido, inexistencia de vínculo de carácter laboral y prescripción.

En su contestación, la Corporación argumentó que la relación jurídica entre las partes estuvo regida exclusivamente por contratos de prestación de servicios, los cuales se ajustaron a la normativa vigente y a los términos pactados. La demandada afirmó que dichos contratos fueron celebrados con el propósito de atender necesidades específicas de la Corporación y que, en ningún momento, existió un vínculo laboral entre las partes, dado que la demandante no estaba sujeta a subordinación ni dependencia, elementos esenciales de una relación laboral conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

Asimismo, la Corporación destacó que la demandante actuaba con plena autonomía en la ejecución de sus actividades, sin estar sujeta a un horario laboral ni a la supervisión directa de la Corporación, limitándose esta última a verificar el cumplimiento de los resultados acordados. Sostuvo que los pagos efectuados correspondieron estrictamente a los honorarios por los servicios prestados, sin que exista derecho a reclamar prestaciones sociales o indemnizaciones por despido, dado que los contratos fueron celebrados y ejecutados bajo el régimen civil y no laboral.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 12 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 28 de febrero de 2024, resolvió declarar la existencia de una relación laboral entre Ángela Liliana Contreras Gutiérrez y la Corporación Defensoría Militar para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. El despacho judicial verificó la concurrencia de los elementos esenciales de un contrato de trabajo, conforme a lo previsto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, a saber: la prestación personal del servicio, la subordinación jurídica y la remuneración como contraprestación económica.

En cuanto a la prestación personal del servicio, quedó demostrado que la demandante desempeñó sus labores como psicóloga de manera ininterrumpida, cumpliendo con las obligaciones derivadas de su cargo. Respecto a la subordinación o dependencia, el material probatorio permitió acreditar que la demandante estaba sujeta a un horario laboral y recibía instrucciones directas de sus superiores en relación con la ejecución de sus actividades, lo que configuró una subordinación continuada y efectiva. Adicionalmente, se constató que la demandante percibía una remuneración periódica, inicialmente de $3.000.000 y posteriormente de $4.200.000, lo cual ratificó la existencia de una retribución fija y periódica.

El juzgado aplicó la presunción de existencia de contrato de trabajo prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, la cual establece que toda prestación personal de servicios se presume regida por un contrato laboral, salvo prueba en contrario. En este contexto, la parte demandada no logró desvirtuar dicha presunción respecto del periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, por lo que el despacho declaró la existencia de una relación laboral durante este intervalo temporal.

Sin embargo, a partir del 1º de enero de 2020, la Corporación Defensoría Militar sí consiguió infirmar la presunción de subordinación laboral. El despacho consideró que, para este segundo periodo, se probó que la demandante prestaba sus servicios desde Santa Marta con mayor grado de autonomía, sin la imposición de un horario específico, y sin estar sujeta a instrucciones directas sobre el contenido de sus labores. De igual forma, se acreditó que la demandante no contaba con un puesto de trabajo fijo en las instalaciones de la Corporación y que desarrollaba sus funciones en condiciones propias de un contratista independiente, lo que permitió concluir que, a

partir del 1 de enero de 2020, la relación entre las partes fue de carácter civil, regida por contratos de prestación de servicios, y no por un contrato de trabajo.

En consecuencia, el Juzgado declaró la existencia de la relación laboral únicamente para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, y declaró probada la **excepción de prescripción** para todas las acreencias causadas antes del 31 de diciembre de 2022, salvo lo concerniente a los aportes a seguridad social en pensiones. La Corporación fue condenada pagar el cálculo actuarial correspondiente a dicho periodo y a efectuar el pago ante la administradora de pensiones correspondiente. Por otro lado, la Corporación fue absuelta de las demás pretensiones formuladas por la demandante para el periodo posterior al 1 de enero de 2020

I.5. RECURSO DE APELACIÓN

ANGELA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ (min 00:32:08 video 12)

El apoderado de la demandante interpuso un recurso de apelación, cuestionando la decisión del Juzgado 23 Laboral del Circuito de Bogotá que declaró la existencia de una relación laboral solo hasta el 31 de diciembre de 2019. El apelante argumentó que, de acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la relación laboral se configuró plenamente durante todo el periodo en cuestión, acreditándose los elementos de prestación personal del servicio, subordinación y remuneración.

Sostuvo que la subordinación quedó demostrada no solo por la presunción que se deriva de los otros dos elementos, sino también por las pruebas documentales y testimoniales presentadas, que evidencian que la demandante continuaba bajo las órdenes de la Corporación, incluso después de su traslado a Santa Marta.

El apelante consideró erróneo dividir la relación laboral en dos periodos, dado que el traslado de la demandante y la modalidad de teletrabajo no alteraron la subordinación, ni la naturaleza de las funciones desempeñadas, que seguían siendo las mismas bajo el control de la Corporación. Las pruebas aportadas, como las órdenes de servicio y los informes periciales, confirman que la demandante continuó recibiendo instrucciones específicas sobre el desarrollo de su trabajo, lo que refleja una clara relación de subordinación hasta la fecha de terminación definitiva de sus servicios, el 30 de noviembre de 2022.

Asimismo, el recurso sostiene que la decisión de declarar prescritas las acreencias laborales fue infundada, ya que la relación laboral no concluyó en 2019, sino en 2022, lo que imposibilita la prescripción alegada. Además, el apelante solicitó que se condene a la demandada por despido sin justa causa, dado que la terminación del contrato de prestación de servicios no puede justificar la finalización de una relación laboral a término indefinido, así como el reconocimiento de la indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales.

En consecuencia, el apoderado de la demandante solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la sentencia de primera instancia, reconozca la existencia de la

relación laboral hasta el 30 de noviembre de 2022, y condene a la Corporación Defensoría Militar al pago de las acreencias laborales e indemnizaciones reclamadas en la demanda.

CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR (min 00:51:25 video 12)

El apoderado de la parte demandada, Corporación Defensoría Militar, interpuso recurso de apelación parcial, objetando la condena impuesta en la sentencia respecto de la obligación de pagar aportes al sistema de seguridad social en pensiones por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. El recurrente sostiene que el despacho erró al considerar acreditada la existencia de subordinación durante dicho lapso, lo que desvirtúa la configuración de una relación laboral.

El apelante argumenta que, a pesar de que los testigos Luis Adelmo Sánchez y Gabriel Quiñones Guzmán señalaron la asistencia regular de la demandante a las instalaciones de la Corporación, este hecho no constituye per se una prueba de subordinación. Además, el general Torres Ariza, en su declaración de parte, confirmó que la presencia de la demandante en la Corporación era voluntaria y no derivada de instrucciones ni del cumplimiento de un horario, careciendo de control sobre sus tiempos de trabajo por parte de la Corporación o su supervisor.

Asimismo, el recurso señala que la demandante, en su declaración, afirmó que ejecutaba sus funciones profesionales en psicología de manera autónoma e independiente, sin recibir instrucciones técnicas ni directrices permanentes por parte de la Corporación Defensoría Militar. Esta autonomía, según el apelante, refuerza la inexistencia del elemento de subordinación, que es esencial para la configuración de una relación laboral.

En virtud de lo anterior, la parte demandada solicita al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la condena relativa al pago de aportes a seguridad social, y confirme la inexistencia de subordinación y vínculo laboral en el periodo posterior al 1 de enero de 2020, así como la prescripción de las acreencias laborales reclamadas

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante y demandada, el despacho de conocimiento, con auto de 05 de abril de 2024 (pdf 03), dispuso admitir los recursos presentados, y mediante auto del 3 de mayo del 2024 (pdf 04) se corrió traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

ANGELA LILIANA CONTRERAS GUTIERREZ (pdf 06 segunda instancia)

En sus alegatos de conclusión, el apoderado de la parte demandante solicitó la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia, argumentando que el Juzgado erró al segmentar la relación laboral en dos periodos: del 1 de octubre de 2017 al 31 de diciembre de 2019, y del 1 de enero de 2020 al 30 de noviembre de 2022. Sostuvo que, contrariamente a lo decidido por el despacho, la presunción de subordinación establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo no se desvirtuó durante el segundo periodo por el hecho de que la demandante trabajara de manera remota desde Santa Marta.

El apoderado destacó que las funciones desempeñadas por la demandante como psicóloga, tanto en Bogotá como en Santa Marta, continuaron bajo las mismas condiciones de subordinación y control, sin que el cambio geográfico o la modalidad de teletrabajo afectaran la relación laboral. Subrayó que la subordinación no se basa en la presencia física en el lugar de trabajo, sino en la dirección y supervisión del empleador sobre las labores realizadas, lo cual quedó demostrado en el plenario.

En virtud de lo anterior, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que reconozca la existencia de la relación laboral hasta el 30 de noviembre de 2022, y que condene a la Corporación Defensoría Militar al pago de todas las acreencias laborales generadas durante dicho periodo. Además, solicitó la imposición de una indemnización por despido injustificado y una indemnización moratoria por el no pago de las prestaciones sociales, debido a la mala fe del empleador al ocultar la verdadera relación laboral bajo la apariencia de un contrato de prestación de servicios.

CORPORACIÓN DEFENSORÍA MILITAR (pdf 05 segunda instancia)

En sus alegatos de conclusión, el apoderado de la Corporación Defensoría Militar solicitó la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia que declaró la existencia de una relación laboral entre la demandante y la Corporación por el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Argumentó que, contrariamente a lo concluido por el juzgado, no se acreditó la existencia de subordinación durante dicho lapso, elemento esencial para la configuración de una relación laboral conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

El apoderado enfatizó que la presencia de la demandante en las instalaciones de la Corporación no constituye prueba suficiente de subordinación, pues no se aportaron evidencias que demuestren control sobre horarios o la emisión de instrucciones laborales. Sostuvo que la demandante ejecutaba su contrato de manera autónoma, sin sujeción a las condiciones típicas de una relación laboral, y que no se cumplían los requisitos necesarios para activar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revoque la condena impuesta por la primera instancia en cuanto a la existencia de una relación laboral entre 2017 y 2019, y confirme la sentencia en lo que respecta a la inexistencia de vínculo laboral a partir del 1 de enero de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2022.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandante y demandada

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en las apelaciones presentadas por la parte demandante y demandada, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentran debidamente acreditados los elementos esenciales del contrato de trabajo en la relación jurídica entre la demandante y la Corporación Defensoría Militar dentro de los extremos temporales comprendidos entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de noviembre del 2022? Asimismo, ¿opera la prescripción extintiva respecto de las acreencias laborales reclamadas, y sobre qué conceptos resulta aplicable conforme a las normas que rigen la materia?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Para resolver la presente causa, esta Sala considera, en primer lugar, que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por el principio de integración normativa que establece el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es responsabilidad de la parte activa probar los hechos que sustentan sus pretensiones, mientras que a la parte demandada le corresponde demostrar los hechos en que se basa su defensa. En este contexto, la demandante debe probar la existencia de una relación laboral para que esta sea declarada; es decir, que prestó servicios personales a la demandada, de acuerdo con el [1]artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual, basta con demostrar la prestación personal del servicio para que se presuma la existencia de una relación laboral, siendo necesario además, acreditar su continuidad en el tiempo, ya que de ello depende la imposición de las condenas correspondientes. Por su parte, la demandada debe desvirtuar esta presunción legal, demostrando que el vínculo entre las partes no se desarrolló dentro de un marco laboral y careció de subordinación o dependencia.

En este escenario, la Sala recuerda, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, que el principio constitucional de primacía de la realidad se fundamenta en la prevalencia de los hechos reales sobre las formas, en consonancia con el respeto a la dignidad humana y la justicia social que rodea al trabajo. Este principio otorga al juez la facultad de privilegiar la realidad sobre lo que los documentos o acuerdos formales puedan aparentar, incluso cuando estos sean el resultado de un intento deliberado de ocultar o alterar la verdadera naturaleza de la relación jurídica. De este modo, se

---

[1] ARTICULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

facilita la identificación de una relación laboral y se garantiza la protección de los derechos y prerrogativas inalienables que emanan de ella a favor de los trabajadores. Esta protección está consagrada no sólo en el artículo 53 de la Constitución, sino que también constituye un eje central del Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 1 y 13, y se refuerza con la Recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo de 2006, la cual forma parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución. Es importante recordar que el papel del juez en estos casos es descubrir la verdad material, aquella que se esconde detrás de las apariencias y de las manipulaciones, sin limitarse a lo que las partes intentan presentar en el proceso judicial.

Con estas premisas, el Juez Plural procede a examinar los puntos fundamentales que sustentan la presente controversia.

III.2.1 CONTRATO DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES

a) Evaluación de la Prestación Personal del Servicio y la Subordinación

La prestación personal del servicio es un elemento esencial para la configuración del contrato de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Este elemento jurídico implica que el trabajador se compromete a ejecutar las labores encomendadas de manera directa e intransferible, sin la posibilidad de delegar sus funciones a terceros. Una vez demostrado este requisito, se activa la presunción legal de la existencia de una relación laboral, de acuerdo con el artículo 24 del mismo compendio normativo. Esta presunción traslada la carga probatoria al empleador, quien debe desvirtuar la existencia de subordinación o probar que la relación entre las partes fue de naturaleza distinta.

Ahora, respecto del primer periodo, comprendido entre el 1º de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, la relación laboral entre Ángela Liliana Contreras Gutiérrez y la Corporación Defensoría Militar quedó probada en el plenario, como a continuación se analiza, pues si bien, existieron discrepancias entre los testimonios aportados por ambas partes, la suficiencia argumentativa y probatoria de los testimonios rendidos por los testigos de la parte demandante, en contraprestación con los de la parte demandada, permiten otorgarles mayor credibilidad, en tanto estos fueron consistentes unos con otros. Dichos testigos confirmaron que la demandante cumplía con un horario laboral regular, contaba con implementos de trabajo suministrados por la Corporación, tales como un puesto de trabajo, equipos de oficina y papelería, y recibía órdenes e instrucciones para el desempeño de sus actividades. Estos elementos configuran un claro indicio de subordinación, entendida como la facultad del empleador para dirigir y controlar el modo en que el trabajador ejecuta sus funciones, lo que reafirma la naturaleza laboral de la relación jurídica en este periodo.

En el marco del proceso, se recibieron las declaraciones de Mario Gutiérrez Rubio, representante legal de la Corporación Defensoría Militar, y de la demandante, Ángela

Liliana Contreras Gutiérrez, cuyos testimonios resultan relevantes para la determinación de la naturaleza de la relación jurídica entre las partes.

Mario Gutiérrez Rubio, Representante Legal de la Corporación Defensoría Militar mediante interrogatorio de parte indicó que ha estado vinculado a la Corporación por 11 años, ejerciendo el cargo de representante legal durante los últimos dos años y medio. Afirmó que la demandante prestó servicios en calidad de perito en criminalística y psicología forense, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios con objetos contractuales determinados y duración definida.

Señaló que a la demandante se le asignaban misiones específicas, las cuales podía desarrollar desde su domicilio o en las instalaciones de la Corporación, donde existían oficinas habilitadas para peritos, sin que ello implicara la asignación de un espacio exclusivo. Destacó que la demandante no tenía oficina propia, sino que compartía los espacios dispuestos para el desarrollo de sus actividades con otros profesionales que prestaban servicios en la misma modalidad.

El representante legal enfatizó que no existía un control de horario ni se exigía presencialidad en la Defensoría Militar, pues los peritos tenían autonomía para determinar cuándo y dónde realizar sus labores, salvo cuando debían entregar informes físicos, en cuyo caso asistían a la Corporación para efectuar la radicación de sus resultados. Agregó que, si bien había una coordinación del trabajo, no existía una subordinación jerárquica, pues el supervisor de los peritos no ejercía mando sobre ellos, limitándose a verificar el cumplimiento de las actividades encomendadas.

Respecto a la remuneración, precisó que la demandante recibía pagos mensuales sobre la base de un valor global contractual, condicionado al cumplimiento de los objetivos pactados. Finalmente, explicó que la desvinculación de la demandante obedeció a un proceso de reingeniería interna, dentro del cual se replanteó la necesidad de ciertos perfiles en la Corporación.

Por su parte, la demandante afirmó que sus contratos fueron sucesivos desde octubre de 2017 hasta diciembre de 2021, desempeñándose exclusivamente como psicóloga forense, negando haber sido contratada como perito criminalístico. Aseguró que desde el inicio de su vinculación contó con una oficina propia, equipada con computador, impresora, papelería y demás elementos necesarios para el desempeño de sus funciones, destacando que incluso su nombre figuraba en la puerta de la oficina asignada.

Señaló que siempre laboró en las instalaciones de la Corporación, tanto en Bogotá como en Santa Marta, sosteniendo que tras su traslado en 2020 continuó ejecutando sus funciones en la sede de la Regional Norte de la Defensoría Militar. Explicó que, si bien la llegada a Santa Marta fue por razones personales, contó con autorización del General Torres, quien le indicó que no había inconveniente con su cambio de ubicación residencial, continuando con sus labores bajo la supervisión del Coronel Bernardo Gutiérrez, quien se encontraba en Bogotá.

Indicó que cumplía un horario regular de lunes a viernes, de 7:45 a.m. a 4:30 p.m., en ocasiones hasta las 5:00 p.m., asegurando que su presencia era verificada por la dirección de la Corporación. Explicó que debía informar al General Torres en caso de ausencias o salidas, lo que a su juicio evidenciaba un control sobre su tiempo de trabajo.

Afirmó que realizaba informes periciales conforme a los requerimientos formulados por escrito por parte de los abogados, sin necesidad de desplazarse a los lugares de ocurrencia de los hechos, y que los elaboraba de forma autónoma e independiente, en calidad de perito. Señaló que, en ejercicio de sus funciones, prestó atención psicológica a familiares de miembros de la Corporación, incluyendo a las hijas del Coronel Torres, y que, con ocasión de ello, asistió a reuniones en instituciones educativas. Finalmente, refirió que la señora Blanca Elena Gil podría dar cuenta del horario que observaba durante su permanencia en la sede de Santa Marta.

Igualmente se recibieron las testimoniales de Adelmo Sánchez**,** Gabriel Quiñones Guzmán**,** Bernardo Gutiérrez Camelo, Emilio Torres y Blanca Elena Gil quienes fueron interrogados sobre la relación de la demandante con la Corporación Defensoría Militar, el ejercicio de sus funciones y las condiciones en las que desempeñó sus actividades.

El testigo Adelmo Sánchez indicó que conoció a la demandante en octubre de 2017 en su calidad de psicóloga de la Corporación Defensoría Militar. Manifestó que trabajó en la entidad por 13 años hasta 2021, bajo la figura de contratos de prestación de servicios, y que la demandante recibió la asignación de una oficina en el segundo piso, donde también se encontraba la suya. Señaló que la demandante cumplía un horario habitual, pues la veía ingresar entre las 7:30 a.m. y 7:45 a.m., permaneciendo hasta las 3:30 p.m., aunque no pudo precisar si este horario era impuesto por la entidad.

Afirmó que la demandante participaba en reuniones generales dirigidas por los coroneles, en las cuales se le daban instrucciones para asistir a eventos, dictar conferencias y prestar asistencia psicológica a los afiliados de la Corporación, incluyendo personal en reclusión. Destacó que acompañaba a los afiliados en diligencias y que las actividades encomendadas se generaban diariamente, exigiendo disponibilidad incluso durante los fines de semana.

Indicó que, tras la declaratoria de la emergencia sanitaria en 2020, las actividades pasaron a ejecutarse de manera virtual y que tuvo conocimiento de la continuidad de la demandante en la entidad hasta 2021, aunque no pudo constatar su presencia en las instalaciones tras su traslado a Santa Marta.

El testigo Gabriel Quiñones Guzmán, quien también prestó servicios en la Corporación Defensoría Militar entre 2017 y 2021, corroboró que la demandante ingresó como psicóloga de la entidad y que cumplía un horario regular, iniciando labores a las 8:00 a.m. en las instalaciones de la Corporación, donde atendía a personal vinculado a la entidad.

Aseguró que la demandante contaba con oficina propia en el segundo piso, equipada con los implementos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Confirmó que su labor consistía en el apoyo a los abogados y la parte clínica, y que se verificaba el cumplimiento de su horario por parte de los coordinadores y el personal de recursos humanos.

Resaltó que, en su calidad de coordinador en el área de talento humano, junto con otros funcionarios, advirtió a la dirección sobre la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios, instando a que se formalizaran mediante contratos de trabajo, pero dicha solicitud fue rechazada por la directiva, específicamente por el director Emilio Enrique Torres Ariza.

Manifestó que, hasta el 2021, la demandante continuó desempeñándose en la sede de Bogotá, asegurando haberla visto laborando en su oficina en el segundo piso. No obstante, indicó que no recordaba con exactitud el momento en que se trasladó a Santa Marta y que no podía dar fe de su labor en esa ciudad.

En este sentido, una vez escuchados los testigos, esta Sala resalta que, si bien cada uno pretende probar la tesis de su representado, adquiere especial relevancia el testimonio del General Emilio Torres, quien manifestó que la demandante fue exclusivamente contratista, que su labor nunca se vio subordinada, y que, para la época, la entidad contrató al señor Gabriel Quiñones, abogado, con el propósito de garantizar la correcta estructuración y ejecución de los contratos de prestación de servicios de los contratistas, asegurando así el cumplimiento de las figuras contractuales. Sin embargo, este mismo testigo, Gabriel Quiñones, quien fue el coordinador de recursos humanos para la época, señaló en su declaración que los contratos de prestación de servicios se encontraban desnaturalizados, y que él mismo realizó advertencias a sus superiores sobre esta situación, advirtiéndoles que las condiciones bajo las cuales se desarrollaban las labores de la demandante no se ajustaban a la figura contractual invocada, sino que reflejaban una verdadera relación de subordinación. Este testimonio resulta determinante para corroborar que, en este primer periodo, la vinculación de la demandante con la Corporación fue de naturaleza laboral y no civil, dado que se acreditaron los elementos esenciales del contrato de trabajo y se desvirtuó la contratación formalmente pactada bajo la figura de prestación de servicios.

La existencia de contratos de prestación de servicios durante este periodo no es suficiente para desvirtuar la configuración de una relación laboral, dado que el análisis de la realidad de los hechos prevalece sobre las formalidades contractuales, conforme al principio de la primacía de la realidad consagrado en la legislación laboral. Como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia CSJ SL825-2020:

> *"Debe recordarse, que esta Sala de la Corte ha resaltado en múltiples oportunidades, que el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, constituye un elemento cardinal de nuestro ordenamiento jurídico laboral, el que se encuentra consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con sustento en el cual los jueces pueden dejar a un lado las formas convenidas por las partes de una relación contractual para*

darle prevalencia a lo que en verdad acreditan las condiciones bajo las cuales se desarrolla el negocio jurídico pactado, por lo que si de dichas circunstancias se evidencia el elemento de la subordinación característico de un contrato de trabajo, se impone derivar de ello, las consecuencias jurídicas que prevé la ley".

En este sentido, la Corporación Defensoría Militar no logró desvirtuar la presunción de laboralidad, pues las pruebas presentadas no fueron concluyentes para demostrar que la demandante actuaba con total autonomía. Además, la presunción de laboralidad establecida en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo cobra especial relevancia, ya que, como reiteró la Corte Suprema de Justicia en la mencionada sentencia:

"Se infiere que toda prestación personal de servicio remunerada se presume regida por un contrato de trabajo, disposición que supone que al trabajador le basta demostrar la ejecución personal del servicio, para que se infiera que el mismo se desarrolló bajo una relación de naturaleza laboral y que pone en cabeza del empleador el deber de demostrar que las labores se adelantaron de manera autónoma e independiente y sin el lleno de los presupuestos exigidos por la ley, para tener tal condición".

Por lo tanto, quedó debidamente acreditada la relación laboral para este periodo, dado que los elementos de subordinación y dependencia resultaron probados de manera adecuada, lo cual fue acertadamente valorado por el fallador de primera instancia.

En contra posición, para el segundo periodo comprendido entre el 1º de enero de 2020 y el 30 de noviembre de 2022, pese a encontrarse debidamente acreditado el elemento de la prestación personal del servicio, en la medida en que los testigos admitieron que la demandante hacía presencia en las oficinas de Santa Marta, la prueba testimonial allegada por la parte demandada logró desvirtuar la presunción que recae sobre esa afirmación, pues la prueba testimonial pertinente, ubicada temporal y fácticamente en el contexto de los hechos controvertidos, permiten controvertir cualquier presunción de laboralidad en esta etapa.

En efecto, el testigo Bernardo Gutiérrez Camelo, quien se desempeñó como supervisor de las misiones y tareas encomendadas a la demandante, declaró que no la conoce personalmente, ya que su interacción con ella se limitó a la asignación de misiones de trabajo relacionadas con el área de psicología forense. Explicó que su función consistía en recibir requerimientos de asesoría para suboficiales y oficiales en retiro o en servicio activo, quienes eran llamados a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o enfrentaban procesos disciplinarios.

En cuanto a la modalidad de ejecución de las labores de la demandante, afirmó que no tenía control sobre su cumplimiento ni verificaba su asistencia a la sede de la Corporación, pues su rol se limitaba a la entrega de las misiones y la recepción de los informes finales. Aclaró que no ejercía mando o subordinación sobre los peritos, ya que estos, al ser contratistas, disponían de total autonomía para la ejecución de sus tareas. En esa línea, precisó que no le constaba si la demandante realizaba sus funciones desde su domicilio en Santa Marta, desde la sede de la Corporación o desde

otro lugar, pues no existía un sistema de control sobre su presencialidad o cumplimiento de horarios.

Indicó que su vinculación con la Corporación inició el 15 de julio de 2022, por lo que no tuvo conocimiento directo de las condiciones en las que la demandante prestó sus servicios antes de esa fecha. No obstante, enfatizó que, en el tiempo en el que le correspondió asignarle misiones, la demandante no estaba obligada a acudir presencialmente a la Corporación, ni a coordinar directamente con él el desarrollo de sus actividades, sino que debía articularse con los abogados a cargo de los casos para el cumplimiento de sus tareas.

En cuanto a la ejecución contractual, manifestó que no tenía ninguna injerencia en la supervisión de la labor de la demandante, ya que su función como supervisor se limitaba a asignarle las misiones, sin intervenir en su desarrollo. Explicó que la demandante remitía sus informes finales al área de talento humano para efectos de pago, y que él no firmaba documentos que acreditaran la prestación efectiva del servicio ni certificaba el cumplimiento de sus funciones. En este punto, subrayó que su rol no implicaba validar la manera en que la demandante cumplía con sus compromisos, sino únicamente asegurarse de que las misiones fueran asignadas y que los abogados recibieran los informes en los plazos establecidos.

Agregó que la demandante era la profesional en el área de psicología, por lo que tenía plena autonomía sobre el desarrollo de su labor, y que él, en su calidad de supervisor, no podía interferir en el ejercicio de su especialidad ni dictarle instrucciones sobre la forma en que debía desempeñarse. Además, precisó que, dentro del marco de los contratos de prestación de servicios, la demandante no se encontraba sujeta a un sistema de control de horario ni de cumplimiento presencial, sino que se le asignaban objetivos concretos que debía cumplir bajo su propio criterio y disponibilidad.

Finalmente, manifestó que nunca le asignó a la demandante actividades distintas a las establecidas en los contratos de prestación de servicios suscritos con la Corporación, descartando que se hubieran impuesto funciones ajenas a su objeto contractual.

En el mismo sentido la señora Blanca Elena Gil, testigo presentada por la demandada, quien se encontraba físicamente en la Seccional de Santa Marta en el periodo objeto de debate, manifestó bajo juramento que la demandante no tenía un horario de cumplimiento obligatorio, que su presencia en la oficina era esporádica, y que cuando acudía a las instalaciones se ubicaba en los cubículos dispuestos para los contratistas, sin que existiera control sobre su asistencia o ejecución de funciones. De igual forma, refirió que en múltiples ocasiones la observó realizando entrevistas virtuales, sin que existiera una relación de subordinación materializada en supervisión jerárquica, control de jornada o imposición de directrices sobre la ejecución del servicio. La testigo fue enfática en señalar que la demandante no estaba sujeta a ninguna vigilancia en cuanto a tiempo, modo o cantidad de trabajo, lo que resulta incompatible con la existencia de una verdadera relación de dependencia laboral.

De manera particular, el propio testimonio de la demandante establece que su coordinador continuó siendo Bernardo Gutiérrez Camelo, quien se encontraba en Bogotá, mientras ella ejecutaba sus labores desde Santa Marta, lo que ya de por sí desvanece la posibilidad de un control efectivo y permanente sobre la ejecución de sus tareas. Adicionalmente, el testigo en mención no ubica a la demandante dentro de un esquema de subordinación, limitándose a indicar que le asignaba misiones, pero sin verificar su cumplimiento en un marco de dependencia jerárquica. Expresamente manifestó que no ejercía ninguna injerencia sobre la forma en que la demandante realizaba su labor, que no controlaba su jornada, ni impartía instrucciones sobre la ejecución de sus actividades, y que su rol se limitaba a asignarle las misiones correspondientes, quedando su ejecución a discreción de la demandante y más aún cuando indicó que no conocía a la demandante en persona, aun cuando este último era su supervisor.

En este contexto, el testimonio de Bernardo Gutiérrez Camelo, en concordancia con las declaraciones rendidas por Blanca Elena Gil Herrera, ratifica la ausencia del elemento de la subordinación durante el segundo periodo, dado que se desvirtuó e control sobre la jornada de trabajo, supervisión en la ejecución de funciones o imposición de directrices específicas respecto a la manera en que la demandante debía desarrollar sus actividades, supuestos facticos que permiten, sin lugar a dudas concluir que la parte demandada cumplió con su carga probatoria de desvirtuar la presencia del el elemento de la subordinación respecto de este segundo periodo.

Por otra parte, el único sustento sobre el supuesto cumplimiento de un horario y la ejecución de funciones en un marco de subordinación durante este segundo periodo proviene exclusivamente de la demandante, sin que se allegara elemento probatorio objetivo que sustente su afirmación, aunada a que no existe constancia documental que acredite que, desde su traslado, la demandante permaneciera en condiciones propias de un vínculo laboral.

Adicionalmente, el traslado de la demandante a Santa Marta no obedeció a una directriz impuesta por la Corporación Defensoría Militar, sino que, según las propias manifestaciones de la demandante, respondió a razones personales vinculadas al traslado de quien era su esposo para la época, con el propósito de "reconstruir su vida". Dicho traslado no generó objeción por parte de la demandada, quien le permitió continuar con la ejecución de sus funciones sin restricciones geográficas, lo que fue confirmado por Bernardo Gutiérrez Camelo, quien supervisó su contrato durante este periodo y precisó que la demandante tenía total autonomía respecto al lugar desde donde prestaba sus servicios. De igual forma, reconoció que al momento de su traslado, la entidad no contaba con una sede institucional en la ciudad de Santa Marta, y que esta fue adquirida con posterioridad a su llegada, lo que permite inferir que su ejecución contractual no estaba condicionada a la existencia de una infraestructura física de la Corporación en dicha localidad. Asimismo, manifestó que continuó desarrollando sus funciones bajo modalidad de teletrabajo, enviando los resultados a los abogados según requerimientos a nivel nacional, sin que se evidencie en su declaración la imposición de restricciones sobre su lugar de trabajo, lo que resulta incompatible con la subordinación jurídica característica de una relación laboral.

Aunado a ello, manifestó que los servicios que prestaba obedecían a requerimientos provenientes de diferentes partes del país y que los resultados de su labor eran remitidos a través de medios digitales, lo que refuerza la ausencia de control sobre su lugar y jornada de trabajo. El hecho de que no tuviera una sede física asignada de manera exclusiva, que la entidad no condicionara su lugar de residencia, y que pudiera desarrollar sus actividades de forma remota sin restricciones, impide estructurar una relación de dependencia y refuerza la configuración de un vínculo de naturaleza autónoma.

En consecuencia, las propias declaraciones de la demandante descartan la existencia de un vínculo subordinante en este segundo periodo, pues evidencian la ausencia de un control efectivo por parte de la Corporación sobre su permanencia en un lugar de trabajo, su jornada o la ejecución de sus funciones, desvirtuando con ello la presunción de laboralidad.

Asimismo, revisada la documental correspondiente a las órdenes de trabajo asignadas a la demandante, no se evidencia en ellas imposición alguna respecto del modo, tiempo o lugar de ejecución de sus funciones. Por el contrario, en dichas órdenes se le instruye a tomar contacto con el abogado solicitante para coordinar la labor a desempeñar, lo que denota un margen de autonomía en la ejecución del servicio prestado y descarta la existencia de un control jerárquico propio de una relación laboral subordinada.

En efecto, la necesidad de coordinar con el abogado solicitante responde a la naturaleza propia del objeto contractual y a la entrega de los productos requeridos para el pago del servicio, sin que ello implique una subordinación material en la ejecución de las tareas encomendadas. La facultad de concertar con el solicitante los términos de la labor a desempeñar y la ausencia de directrices taxativas en relación con su jornada o condiciones de desempeño, evidencian un grado de independencia funcional incompatible con el concepto de subordinación jurídica.

Bajo estos parámetros, las órdenes de trabajo revisadas se encuentran dentro de los límites normales de una contratación por prestación de servicios, en la que resulta razonable la existencia de coordinación con el beneficiario del servicio para garantizar la idoneidad de los entregables. No obstante, el hecho de que la demandante gozara de libertad en la determinación de sus horarios, lugar de ejecución y métodos de trabajo refuerza la conclusión de que su vinculación en este segundo periodo no configuró una relación de carácter laboral.

Si bien el teletrabajo no desvirtúa de manera automática la existencia de subordinación, y la jurisprudencia ha sostenido reiteradamente que las relaciones laborales pueden mantenerse en contextos de trabajo remoto, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL1315-2024, al precisar que:

> *"Se equivocan los recurrentes cuando dicen que el hecho de que el demandado hubiera estado fuera del país era indicativo de que no ejerció ninguna subordinación sobre la trabajadora, toda vez que resulta incuestionable que las tecnologías de la información*

que existen en la actualidad permiten que se den relaciones de trabajo formales a larga distancia, el teletrabajo (Ley 1221 de 2008), el trabajo en casa (Ley 2088 de 2021), el remoto (Ley 2121 de 2021), entre otros, pues la subordinación no se ejerce únicamente en la presencialidad".

Es igualmente cierto que, en este caso concreto, las circunstancias extraordinarias derivadas de la pandemia provocaron modificaciones sustanciales en la dinámica de las relaciones laborales. A pesar de que el teletrabajo y la falta de presencialidad no excluyen per se la existencia de subordinación, como lo ha ratificado la Corte, en el presente caso no existe material probatorio que permita acreditar que dicha subordinación persistió de forma clara y continua durante este periodo, lo que implica que, para el segundo periodo, la misma desapareció.

Por el contrario, los elementos probatorios aportados por la parte demandada para desvirtuar la presunción de subordinación fueron superiores en comparación con los presentados por la demandante a nivel de valor procesal y probatorio. Las pruebas documentales y testimoniales introducidas por la demandada lograron desvirtuar eficazmente la presunción de laboralidad que surge de la prestación personal del servicio. Dichos elementos reflejan que, en este segundo periodo, la demandante desarrollaba sus labores con un grado de autonomía que no se corresponde con los parámetros de subordinación jurídica. La ausencia de control directo sobre su jornada laboral y la flexibilidad en la ejecución de las actividades indican que la relación durante este lapso fue de naturaleza civil.

En virtud de lo anterior, y con base en el material probatorio disponible, se concluye que en este segundo periodo se logró desvirtuar el elemento de la subordinación, por lo que se entiende que las condiciones bajo las cuales se prestaron los servicios estuvieron más alineadas con una relación de naturaleza civil, tal como lo sostuvo la parte demandada. En consecuencia, el fallador de primera instancia actuó acertadamente al limitar el reconocimiento de la relación laboral únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019, ya que las pruebas no resultaron concluyentes para sostener que la subordinación se mantuvo durante el segundo periodo de tiempo en cuestión.

III.2.2 RESPECTO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACREENCIAS LABORALES E INDEMNIZACIONES

En relación con la prescripción de las acreencias laborales, el fallador de primera instancia aplicó de manera rigurosa las disposiciones normativas previstas en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las cuales fijan un término de tres años para la prescripción extintiva de las acciones laborales, contados desde el momento en que las respectivas obligaciones se tornan exigibles. Este término se erige como un mecanismo de protección del orden jurídico, tendiente a evitar la indeterminada existencia de derechos laborales no reclamados.

Conforme a los hechos establecidos, la relación laboral fue reconocida hasta el 31 de diciembre de 2019, fecha a partir de la cual comenzó a computarse el término

prescriptivo. En principio, el plazo para la reclamación de las acreencias laborales debía vencer el 31 de diciembre de 2022; sin embargo, dado que los términos judiciales estuvieron suspendidos durante 107 días por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 (del 16 de marzo al 30 de junio de 2020), dicho plazo se extendió en igual proporción, venciendo finalmente el 18 de abril de 2023. En consecuencia, al haberse presentado la demanda el 28 de agosto de 2023, las pretensiones en cuanto a salarios, cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones quedaron afectadas por la prescripción extintiva, configurándose así la excepción propuesta por la parte demandada. Dicho término, de naturaleza perentoria, encuentra su justificación en la necesidad de dotar de estabilidad y certidumbre a las relaciones laborales, impidiendo el ejercicio extemporáneo de derechos cuyo reclamo se torna ineficaz por el transcurso del tiempo.

El fallador, en sintonía con las previsiones legales, concluyó que la inactividad procesal por parte de la demandante generó la extinción de las acciones derivadas de la relación laboral, no existiendo hechos o actuaciones que hubieran interrumpido o suspendido dicho término prescriptivo. En este sentido, la ejecución de contratos de prestación de servicios celebrados con posterioridad al 31 de diciembre de 2019, que carecían de los elementos constitutivos de subordinación, no resulta hábil para interrumpir o afectar el curso de la prescripción de los derechos laborales devengados con anterioridad.

En cuanto a la indemnización moratoria, esta se encuentra sujeta a los mismos parámetros de prescripción que las acreencias laborales de las cuales deriva, conforme al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo. Dado que la relación laboral se declaró extinguida el 31 de diciembre de 2019, y que la demanda fue presentada el 28 de agosto de 2023, resulta claro que la acción para reclamar la indemnización moratoria también se encuentra prescrita, pues la sanción contenida en el artículo 65 del CST es de carácter accesorio y su exigibilidad depende de la vigencia del derecho principal. En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado:

> *"La Sala ha adoctrinado de manera reiterada y pacífica que la cesantía es una prestación social exigible a la terminación del contrato de trabajo (…), cuya prescripción se configura desde ese momento conforme lo disponen los artículos 488 del Estatuto Laboral y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social." (CSJ SL2285-2019, reiterada en la CSJ SL4260-2020)*

Por lo anterior, se concluye que no hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria, al encontrarse afectada por la prescripción y no ser viable su concesión en ausencia de derechos laborales exigibles dentro del término legalmente establecido.

Debe recordarse que la prescripción extintiva en el ámbito laboral cumple una función dual: por un lado, salvaguarda los intereses del trabajador, otorgándole un lapso razonable para ejercer sus derechos; por otro, protege al empleador de la incertidumbre jurídica prolongada. Este instituto, por tanto, es clave para el equilibrio de las partes en la relación laboral. No obstante, la prescripción no se configura en términos absolutos, ya que ciertos derechos, en especial aquellos relacionados con

los aportes a seguridad social en pensiones, son imprescriptibles en virtud de su destinación a la garantía de los derechos fundamentales del trabajador, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia.

En ese orden de ideas, el juzgador determinó que, si bien la prescripción operó respecto de las acreencias laborales ordinarias, no es posible aplicar tal figura en lo que atañe a los aportes pensionales que la Corporación Defensoría Militar debía efectuar en beneficio de la demandante. Dichos aportes, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2019, resultan imprescriptibles, toda vez que se encuentran destinados a la consolidación del derecho pensional, lo cual impone su cumplimiento independiente de la prescripción ordinaria de los derechos laborales.

De este modo, el despacho aplicó con rigor técnico los criterios de prescripción extintiva y prescripción imprescriptible conforme a la normativa vigente, delimitando de manera precisa el ámbito temporal dentro del cual la demandante podía hacer valer sus derechos, y garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos inalienables relacionados con la seguridad social.

En conclusión, tras el análisis exhaustivo de los elementos probatorios aportados por las partes, así como la correcta aplicación de los principios jurídicos que rigen tanto la subordinación laboral como la prescripción extintiva de las acreencias laborales, este tribunal considera que el fallador de primera instancia actuó en pleno respeto del marco normativo y jurisprudencial vigente. El despacho determinó, de manera acertada, la existencia de una relación laboral hasta el 31 de diciembre de 2019, quedando probada la subordinación en ese periodo, y delimitó de forma precisa la aplicación de la prescripción a las pretensiones presentadas por la demandante, sin que se configuraran elementos suficientes para extender la relación laboral al segundo periodo mencionado.

En virtud de todo lo expuesto, y ante la falta de argumentos probatorios contundentes que permitan desvirtuar las conclusiones a las que arribó el juzgador de primera instancia, este tribunal procederá a confirmar en su totalidad la sentencia proferida en la fase inicial del proceso, manteniéndose incólumes las decisiones adoptadas respecto de la configuración de la relación laboral, la prescripción de las acreencias laborales y la obligación de efectuar los aportes a pensiones por el periodo comprendido.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad de los recursos presentados por las partes demandante y demandada, no se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo la sentencia proferida el día 28 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: SIN LUGAR a condenar en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 072.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada-

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	JORGE ANTONIO CRISTANCHO GARCÍA
Parte demandada	SEGURIDAD PERMANENTE LTDA.
Radicación	11001310502420210038801
Fecha de la decisión	26 DE JUNIO DE 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO SIN JUSTA CAUSA
Acta de Discusión	034
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502420210038801

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en razón de la sentencia proferida el día 26 de junio de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

El señor Jorge Antonio Cristancho García, quien actúa a través de apoderado, presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad SEGURIDAD PERMANENTE LTDA, solicitando que se declare que el despido del cual fue objeto el 30 de septiembre de 2019 no obedeció a una justa causa y que, en consecuencia, se condene a la demandada al pago de la indemnización correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Además, solicita el reconocimiento y pago de 96 días de descanso obligatorio laborados, los cuales no fueron compensados en tiempo ni remunerados conforme a la normativa vigente.

El demandante estuvo vinculado a SEGURIDAD PERMANENTE LTDA mediante contrato laboral a término indefinido desde el 1º de febrero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019, desempeñando el cargo de guarda de seguridad. El demandante alega que, mediante comunicación fechada el 1 de octubre de 2019, la empresa justificó su despido argumentando la necesidad de dar cumplimiento a la desvinculación de personas pensionadas, lo que obligaba a la empleadora a prescindir

de sus servicios. No obstante, el señor Cristancho aclara que, aunque cumplía con la edad para pensionarse, en ese momento no era pensionado jurídicamente, ya que solo contaba con el beneficio de un bono pensional. En este sentido, se invoca la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha determinado que la causal de despido contemplada en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo no se activa con el mero cumplimiento de los requisitos para la pensión, sino cuando el fondo de pensiones correspondiente reconoce el derecho pensional y el trabajador es incluido en la nómina de pensionados.

Adicionalmente, el demandante argumenta que, al no estar formalmente pensionado, su despido se realizó sin contar con la autorización previa del inspector de trabajo, la cual es obligatoria cuando el trabajador se encuentra en un estado de debilidad manifiesta por razón de su edad. El señor Cristancho sostiene que, al no haberse solicitado ni obtenido dicho permiso, la terminación de su contrato no puede considerarse válida, lo que refuerza su derecho a la indemnización por despido sin justa causa.

Con base en lo anterior, el demandante fundamenta sus pretensiones en el artículo 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, solicitando la indemnización correspondiente por despido sin justa causa e indemnización moratoria, así como el reconocimiento de los días de descanso laborados sin la debida compensación en tiempo o pago, de acuerdo con lo establecido en los artículos 179 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá, mediante auto de 17 de febrero de 2022 (pdf 09) admitió, corrió traslado de la demanda y requirió a la empresa accionada para que junto con la contestación de la demanda allegara toda la documental que se encontrara en su poder, luego, con providencia del 10 de marzo de 2023 (pdf 15), tuvo por contestada la demanda por SEGURIDAD PERMANENTE LTDA., y mediante auto del 09 de noviembre del 2023 (pdf 19) El Juzgado Cuarenta y Cinco laboral del Circuito de Bogotá asumió conocimiento del presente proceso y fijó fecha para la celebración de la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. SEGURIDAD PERMANENTE LTDA (PDF 14)

SEGURIDAD PERMANENTE LTDA, a través de apoderado, en su contestación a la demanda presentada por el señor Jorge Antonio Cristancho García, admite la existencia de la relación laboral entre las partes en los términos temporales señalados por el demandante, esto es, desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2019, bajo la modalidad de contrato de trabajo a término indefinido. En lo que respecta a la remuneración, se afirma que las partes pactaron un salario mínimo legal mensual vigente, que variaba en función del pago de horas extras, recargos nocturnos

y dominicales, ascendiendo el salario promedio, al momento de la terminación del vínculo laboral, a la suma de $1.302.548, incluido el auxilio de transporte.

La demandada sostiene que, durante la ejecución del contrato de trabajo, se realizaron llamados de atención al trabajador por incumplimientos a sus obligaciones laborales, los cuales incidieron en la evaluación de su desempeño. Asimismo, admite que, por un error involuntario, interpretaron que la devolución de aportes al sistema pensional, en forma de indemnización sustitutiva, configuraba una justa causa para la terminación del contrato de trabajo, de conformidad con lo previsto en el numeral 14 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, una vez advertido dicho error, SEGURIDAD PERMANENTE LTDA procedió a intentar una solución conciliatoria con el demandante, con el fin de evitar el litigio judicial, propuesta que fue rechazada por el trabajador.

En cuanto a las pretensiones del demandante relacionadas con el reconocimiento de recargos y el pago de días de descanso laborados, la parte demandada asegura que todos los recargos nocturnos, horas extras y descansos dominicales fueron oportunamente liquidados y pagados conforme a las disposiciones legales vigentes.

Por lo tanto, se opone a las pretensiones del demandante, sosteniendo que no existe obligación alguna insatisfecha por parte de la empresa. En respaldo de su posición, la demandada plantea varias excepciones de fondo, entre las que se destacan la excepción de cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación, prescripción de la acción, excepción de buena fe y otras excepciones de carácter genérico, conforme a la normativa laboral aplicable.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 31 primera instancia)

Adelantadas las etapas procesales correspondientes y agotado el debate probatorio, el Juzgado 45 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 26 de junio de 2024, resolvió el litigio planteado por Jorge Antonio Cristancho García en contra de SEGURIDAD PERMANENTE LTDA. El objeto del litigio giraba en torno a la determinación del salario devengado por el demandante, la causa de la terminación de la relación laboral, y la procedencia de los reclamos por los 96 días de descanso laborados, además de las indemnizaciones solicitadas de conformidad con los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

En cuanto a la remuneración, el demandante alegó que devengaba un salario fijo de $1.358.946 mensuales, lo cual fue controvertido por la parte demandada, quien presentó desprendibles de nómina que demostraban la variabilidad salarial debido al pago de recargos nocturnos, dominicales y horas extras. El juzgado, tras analizar los medios probatorios aportados, concluyó que el salario del demandante fue variable, promediando $1.091.587 en 2017, $1.149.212 en 2018 y $1.234.166 al momento de la terminación del contrato en 2019.

Respecto a los 96 días de descanso reclamados, el despacho, con fundamento en la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, señaló que la carga probatoria para acreditar la prestación de servicios en dichos días recaía sobre el

demandante. Dado que este no aportó pruebas concluyentes que acreditaran la labor efectuada en los días de descanso reclamados, se decidió denegar esta pretensión por falta de soporte probatorio.

En relación con la terminación del contrato, el juzgado constató que SEGURIDAD PERMANENTE LTDA no invocó una causal específica de terminación al momento de comunicar el despido del demandante. Este incumplimiento de la obligación de indicar de manera clara y precisa la causa de la terminación del contrato impide la invocación posterior de cualquier justificación en sede judicial. En consecuencia, se determinó que la terminación del contrato no obedeció a una justa causa y se condenó a la parte demandada al pago de la indemnización por despido sin justa causa, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

Finalmente, al analizar la mora en el pago de las acreencias laborales, el despacho concluyó que la conducta del empleador no estuvo revestida de la diligencia y buena fe exigidas, por lo que se impuso la condena a la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la cual ascendió a $29.578.847, más los intereses moratorios hasta el pago total de la obligación.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA (min 00:25:19 video 31)

La parte demandada, SEGURIDAD PERMANENTE LTDA, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado 45 Laboral del Circuito de Bogotá, específicamente en lo que respecta a la condena por indemnización moratoria impuesta bajo el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

Argumentó que, en la contestación de la demanda, se reconoció el error involuntario en la terminación del contrato y la consecuente obligación de pagar la indemnización por despido sin justa causa, tal como lo establece la legislación laboral. No obstante, se considera errónea la decisión del juez de primera instancia al aplicar la sanción moratoria prevista en dicho artículo.

El error radica en que el artículo 65 está dirigido a situaciones en las que el empleador incumple con el pago de salarios y prestaciones sociales debidas al trabajador al momento de la terminación del contrato. En este caso, no se trata de la falta de pago de salarios o prestaciones, sino del pago de una indemnización por despido sin justa causa. La sanción moratoria prevista en el artículo 65 no es aplicable a este tipo de indemnizaciones, por lo que la decisión del juez de primera instancia carece de fundamento jurídico al imponerla en este caso concreto.

En lugar de aplicar la sanción moratoria, la parte demandada considera que lo procedente era la indexación del valor de la indemnización, actualizando la suma desde el año 2019 hasta la fecha de la sentencia, de acuerdo con la jurisprudencia aplicable. Por ello, solicita la revocatoria de la sentencia en lo referente a la sanción moratoria, al no ser procedente su imposición sobre el pago de una indemnización por despido sin justa causa, conforme a la interpretación correcta del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada.

El despacho de conocimiento, con auto de 16 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la única que se pronunció al respecto fue la parte demandada SEGURIDAD PERMANENTE LTDA así:

SEGURIDAD PERMANENTE LTDA (pdf 04 segunda instancia)

En el marco del proceso ordinario laboral promovido por el señor Jorge Antonio Cristancho García contra SEGURIDAD PERMANENTE LTDA, la parte demandada, a través de su apoderado judicial Alberto Mario de Jesús Jaramillo Polo, presentó sus alegatos de conclusión ratificando su postura en el recurso de apelación interpuesto.

En primer lugar, la demandada admite que en la terminación del contrato de trabajo se cometió un error involuntario, por el cual se procedió al pago de la indemnización por despido sin justa causa. No obstante, la controversia radica en la interpretación errónea que, según la parte demandada, realizó el juez de primera instancia al imponer la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.

La parte demandada argumenta que la sanción moratoria es aplicable únicamente en situaciones donde se omite el pago de salarios y prestaciones sociales al momento de la terminación del contrato, mientras que en este caso se trataba del pago de una indemnización por despido sin justa causa, la cual no se encuentra sujeta a la aplicación del artículo 65. En este sentido, se señala que el juez incurrió en una errónea aplicación de la norma, ya que la sanción moratoria no puede ser aplicada a una indemnización de esta naturaleza, debiendo haberse aplicado la indexación de conformidad con la legislación laboral y la jurisprudencia vigente.

Finalmente, la parte demandada solicita al tribunal revocar la sentencia de primera instancia en lo que respecta a la imposición de la sanción moratoria y, en su lugar, ajustar el valor de la indemnización de despido sin justa causa mediante la actualización e indexación correspondiente. Así, considera que la decisión del juzgado debe ser corregida en el marco de la correcta interpretación de las normas aplicables y la protección de los derechos de ambas partes.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Es jurídicamente viable la imposición de la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo sobre el incumplimiento en el pago de la indemnización por despido sin justa causa, aun cuando dicha disposición normativa está prevista para sancionar la mora en el pago de salarios y prestaciones sociales?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

La parte demandada, SEGURIDAD PERMANENTE LTDA, interpone recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, limitando su inconformidad al pronunciamiento relacionado con la imposición de la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. En este contexto, la parte recurrente alega que el juzgador incurrió en un yerro al aplicar dicha sanción sobre la indemnización por despido sin justa causa, alegando que tal concepto no se encuentra comprendido dentro de los supuestos que dicha norma busca sancionar.

Al efecto, la apelación plantea la necesidad de revisar la naturaleza de la indemnización y su exclusión de la aplicación de la sanción moratoria, proponiendo en su lugar la actualización monetaria del valor de la indemnización.

Cabe señalar que las restantes cuestiones litigiosas ya han sido resueltas de manera aceptada por las partes. El salario promedio, el vínculo laboral, y las fechas correspondientes a la prestación de los servicios no han suscitado mayor controversia, lo que deja como único punto a debatir la interpretación y aplicación del artículo 65 respecto a la indemnización de despido sin justa causa. En tal sentido, el debate de segunda instancia se centrará exclusivamente en determinar si la sanción moratoria es aplicable a la mora en el pago de la mencionada indemnización o si, por el contrario, resulta procedente la indexación del valor adeudado, como propone la parte apelante.

Análisis de la Procedencia de la Sanción Moratoria en el Marco del Artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo: Aplicabilidad en el Pago de Indemnizaciones por Despido sin Justa Causa.

El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo fue concebido como un mecanismo punitivo destinado a sancionar la mora del empleador en el pago de salarios y prestaciones sociales al momento de la terminación de la relación laboral. Dicha norma, que prevé el pago de una suma igual al último salario diario devengado por cada día de retardo, tiene un objetivo eminentemente resarcitorio y se encuentra vinculada al incumplimiento de obligaciones salariales o prestacionales que afectan

directamente la subsistencia del trabajador. En este sentido, su aplicación responde a la necesidad de proteger derechos laborales fundamentales que tienen una naturaleza salarial, de modo que su retraso pueda conllevar una sanción con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido enfática en delimitar el ámbito de aplicación del artículo 65, aclarando que este no se extiende a todas las obligaciones derivadas de la relación laboral, sino únicamente a aquellas de carácter salarial y prestacional. En consecuencia, no puede aplicarse a conceptos que, aunque relacionados con el contrato de trabajo, no son de naturaleza salarial ni prestacional.

La indemnización por despido sin justa causa, contemplada en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye un mecanismo compensatorio que busca reparar el daño causado por la terminación arbitraria del contrato de trabajo, pero no tiene el carácter de salario o prestación social. Por lo tanto, la mora en el pago de esta indemnización no puede ser sancionada conforme a los parámetros del artículo 65.

Así, resulta evidente que la imposición de la sanción moratoria sobre una indemnización de esta naturaleza desborda el propósito y alcance del artículo 65, cuyo objetivo es sancionar el incumplimiento de obligaciones salariales que atañen directamente al sustento del trabajador. En tal contexto, la pretensión del apelante es jurídicamente válida, dado que la mora en el pago de la indemnización por despido sin justa causa debe dar lugar, exclusivamente, a la indexación de su valor, con el fin de evitar una pérdida del poder adquisitivo del monto adeudado y garantizar que el trabajador reciba una compensación ajustada a la realidad económica actual.

La indexación ha sido reconocida por la jurisprudencia como el mecanismo adecuado para actualizar los valores derivados de obligaciones laborales que, aunque no se refieren directamente a salarios o prestaciones, requieren ser ajustadas conforme a la inflación y la pérdida de valor adquisitivo. De esta forma, se corrige el valor del monto adeudado desde la fecha de la terminación del contrato hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago, lo que garantiza una justa compensación sin desnaturalizar el propósito del artículo 65.

En virtud de lo anterior, se concluye que la imposición de la sanción moratoria en este caso no se ajusta a la normativa vigente ni a la naturaleza de la obligación en discusión. La indemnización por despido sin justa causa no constituye una obligación salarial, por lo que la sanción prevista en el artículo 65 no le es aplicable. En su lugar, la sentencia de primera instancia debe ser modificada en cuanto a la aplicación de la sanción moratoria, procediendo únicamente con la indexación del valor adeudado desde la fecha de la terminación del contrato hasta la fecha de pago. Esta corrección refleja la correcta interpretación del artículo 65 y su aplicabilidad exclusiva a conceptos salariales o prestacionales, quedando la indemnización sujeta únicamente a su actualización monetaria, que, si bien no se solicitó en las pretensiones, se concederá conforme lo ha definido la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL2841 del 2024, SL2594 del 2024, *SL2182 de 2024, SL359-2021.*

"No obstante, como la decisión de segundo grado de absolver por dicha indemnización quedó incólume, es decir no procede su condena, esta Corporación deberá disponer, en su lugar, la indexación de los montos adeudados por prestaciones sociales (CSJSL359-2021)." SL2841 de 2024

En ese sentido se modificará la decisión para en su lugar imponer condena por concepto de indemnización por despido sin justa causa, que se liquidó en la suma de $2.599.976,61, más el monto correspondiente a la indexación que deberá ser calculada al momento del pago efectivo.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad del recurso presentado por la parte demandada, no se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** a la sentencia proferida el 26 de junio del 2024 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, el cual quedará así:

***"SEGUNDO: CONDENAR** a la sociedad **SEGURIDAD PERMANENTE LTDA** al pago, en favor del señor **JORGE ANTONIO CRISTANCHO GARCÍA**, de la suma de $2.599.976,61, correspondiente a la indemnización por despido sin justa causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, se ordena la actualización e indexación de la mencionada indemnización hasta la fecha en que efectivamente se realice el pago, conforme la siguiente formula:*

$$VA = VH \times \frac{IPC\ Final}{IPC\ Inicial}$$

Donde:

VA = Valor actualizado
VH = Diferencias debidas.

IPC Final= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuará el pago.

IPC Inicial= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes de causación de la diferencia.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral **TERCERO** a la sentencia proferida el 26 de junio del 2024 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá

TERCERO. CONFIRMAR en lo restante la sentencia proferida el 26 de junio del 2024 por el Juzgado Cuarenta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia por no haberse causado.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022**,** con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día**,** en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y**,** previa su anotación en el registro respectivo**,** **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 034.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De Los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	JUAN GUILLERMO ROLDAN GONZÁLEZ
Parte demandada	ESDINAMICO SAS
Radicación	110013105025 2019 00389 01
Fecha de la decisión	22 DE AGOSTO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	CONTRATO REALIDAD
Acta de Discusión	071
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502520190038 9-01

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada, en razón de la sentencia proferida el día 22 de agosto de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 03 primera instancia)

El señor Juan Guillermo Roldán González, actuando por medio de su apoderada, presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad Esdinámico S.A.S., representada legalmente por la señora Ismary Lara Rodríguez, con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de prestaciones laborales derivadas de la terminación de su contrato de trabajo, así como el ajuste y reliquidación de las sumas que, en su criterio, fueron erróneamente calculadas por la empleadora.

El demandante expuso que la relación laboral inició el 18 de febrero de 2018, mediante contrato a término indefinido, bajo la figura de *Business Representative*, con un salario básico mensual de $2.600.000. Además del salario básico, el demandante tenía derecho a comisiones pactadas de acuerdo con el cumplimiento de metas comerciales, siendo estas del 2% para niveles de cumplimiento entre el 0% y el 50%, y del 7% para cumplimientos entre el 51% y el 100%. Dichas comisiones, conforme a lo pactado, constituían factor salarial.

A lo largo de la relación laboral, las comisiones generadas ascendieron a la suma de $19.730.481, de las cuales el demandante alega haber recibido únicamente $5.339.927,

quedando pendiente un saldo a su favor de $14.390.554. La empresa procedió a terminar unilateralmente el contrato el 29 de noviembre de 2018, alegando despido sin justa causa, y efectuó una liquidación inicial de las prestaciones sociales sin incluir las comisiones dentro de la base salarial.

Ante la solicitud del actor de reliquidar las prestaciones, Esdinámico S.A.S. realizó un ajuste parcial, incrementando el salario base a $3.161.694, incluyendo una porción de las comisiones, pero sin efectuar dicho ajuste para la indemnización por despido injusto, la cual continuó calculándose únicamente sobre el salario básico. La diferencia generada en la indemnización ascendió a $1.428.083, según el demandante.

El 27 de febrero de 2019 se celebró audiencia de conciliación ante el Ministerio de Trabajo, la cual fracasó debido a que la empresa negó la existencia de cualquier suma pendiente por concepto de comisiones y reliquidaciones.

Por tanto, el demandante solicitó al juez de primera instancia las siguientes declaraciones: (i) que se declare la existencia de un contrato laboral a término indefinido entre las partes, terminado sin justa causa el 29 de noviembre de 2018; (ii) que se ordene el pago de las comisiones pendientes conforme al cumplimiento de las metas comerciales; (iii) que se reliquiden las prestaciones sociales y la indemnización por despido injusto, incluyendo las comisiones como factor salarial; y (iv) que se condene a la demandada al pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en razón de la mora en el pago completo de los salarios y prestaciones adeudadas.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 23 de julio del 2019 (pdf 05), posteriormente, mediante auto del 29 de enero del 2021 (pdf 15), se remite el proceso de referencia al juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá. luego, con providencia del 6 de abril del 2022 (pdf 17), se avoca conocimiento del proceso ordinario de referencia y tuvo por contestada la demanda por ESDINAMICO S.A.S.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ESDINAMICO SAS (PDF 14)

En contestación a la demanda interpuesta por el señor Juan Guillermo Roldán González, la empresa Esdinámico S.A.S., por medio de su apoderado, admitió parcialmente los hechos relatados por el demandante, pero se opuso de manera categórica a las pretensiones elevadas. La demandada reconoció la existencia de la relación laboral, pero enfatizó que las comisiones pactadas no debían ser consideradas como factor salarial para la liquidación de las prestaciones sociales ni para la indemnización por despido sin justa causa, toda vez que dichas comisiones, conforme a la política interna firmada por el trabajador el 21 de febrero de 2018, solo se causaban por el recaudo efectivo de las ventas realizadas durante la vigencia del contrato.

La empresa alegó que, en el momento de la terminación del contrato, las comisiones adeudadas al demandante ya habían sido liquidadas y pagadas conforme al recaudo efectivo de las ventas, desestimando el monto reclamado por el actor, quien señalaba una deuda adicional de $14.390.554. La empresa afirmó que el valor de las comisiones pagadas era correcto, basándose en las ventas efectivamente recaudadas, y que no correspondía a los valores inflados presentados por el demandante, que no tenían en cuenta dicha condición.

En cuanto a la reliquidación de las prestaciones sociales, Esdinámico S.A.S. argumentó que no era procedente, ya que las comisiones no constituían salario base debido a que no habían sido recaudadas en su totalidad al momento de la terminación del contrato. En este contexto, la empresa sostuvo que ya había cumplido con todas sus obligaciones laborales, incluyendo la indemnización por despido sin justa causa, calculada sobre el salario base y las comisiones recaudadas a la fecha de terminación.

Por lo tanto, la empresa formuló la excepción de inexistencia de las obligaciones reclamadas, al considerar que no existía ninguna suma adicional pendiente de pago. Asimismo, Esdinámico S.A.S. invocó la excepción de pago, fundamentada en que todas las acreencias laborales, tales como salarios, cesantías, intereses, primas y vacaciones, habían sido liquidadas y satisfechas conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente. La empresa también alegó la excepción de cobro de lo no debido, argumentando que las pretensiones del demandante se referían a derechos que ya habían sido satisfechos en su totalidad, incluyendo el pago de las comisiones y las prestaciones calculadas sobre el salario real percibido por el trabajador.

Finalmente, la empresa se opuso a la solicitud de imposición de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, alegando haber actuado de buena fe en la liquidación y pago de las acreencias del trabajador, y destacando que no existía evidencia de mala fe que justificara la imposición de dicha sanción. La demandada citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que se señala que la sanción moratoria no es automática ni inexorable, y que sólo puede imponerse cuando se acredita la mala fe del empleador al retener pagos laborales.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 30 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 22 de agosto de 2024, decidió sobre el problema jurídico central consistente en determinar el salario del demandante Juan Guillermo Roldán González, y la procedencia de la reliquidación de las prestaciones sociales pretendidas. Se destaca que no fue objeto de controversia la existencia del vínculo laboral entre el 18 de febrero de 2018 y el 29 de noviembre de 2018, ni la modalidad de terminación del contrato, siendo aceptado por ambas partes que fue sin justa causa y que se pagó la correspondiente indemnización.

El debate probatorio se centró en establecer si las comisiones debían incluirse como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales e indemnización. Según lo dispuesto en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, los pagos que no constituyen salario son aquellos que no se otorgan como contraprestación directa del

servicio, sino como auxilios o beneficios que no buscan enriquecer el patrimonio del trabajador. Sin embargo, en aplicación del principio de primacía de la realidad, tal como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia en decisiones como la SL 4342 de 2020, todo pago que retribuye el trabajo del empleado debe considerarse salario, independientemente de la denominación acordada por las partes.

En este caso, las comisiones por ventas retribuyen directamente la labor del demandante como *Business Representative*, por lo que, conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia vigente, deben ser consideradas como salario. La Corte ha sostenido en sentencias como la SL 5159 de 2018 y la SL 1005 de 2021 que las comisiones nacen como derecho del trabajador una vez este ha cumplido con su labor y materializado las ventas, sin que el recaudo de dichas ventas pueda ser una condición que limite su causación. Por lo tanto, cualquier pacto que condicione el derecho a las comisiones al recaudo efectivo vulnera los derechos mínimos del trabajador.

La documental aportada por el demandante, consistente en informes de gestión emitidos por el gerente comercial de la demandada, acredita que el actor cumplió con las metas de venta para los diferentes trimestres del período laboral. Estos informes demuestran que el demandante tenía derecho a comisiones por un total de $19.730.417, las cuales debieron ser incluidas en el salario mensual promedio del trabajador, resultando en una base salarial de $4.706.450. Este valor debió utilizarse como referencia para la liquidación final de las prestaciones sociales y la indemnización por despido sin justa causa.

Finalmente, el despacho declara no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido alegadas por la demandada, dado que las comisiones debieron ser liquidadas con base en el salario real. Sin embargo, se declara parcialmente probada la excepción de pago en relación con los valores que ya fueron reconocidos por la demandada y aceptados por el demandante. En cuanto a la solicitud de indemnización moratoria, se absuelve a la demandada, al no haberse configurado mala fe en el pago de las acreencias laborales, habiendo actuado bajo el convencimiento de que se cumplía lo pactado.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN

JUAN GUILLERMO ROLDAN GONZÁLEZ (min 00:20:50 video 30)

La apoderada del demandante interpuso un recurso de apelación, cuestionando la absolución decretada en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, en lo que respecta a la indemnización contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. El recurso se centra en la inconformidad con el criterio del Despacho, que consideró que la actuación de la parte demandada estuvo enmarcada en la buena fe, lo que justificó la exoneración de las sanciones solicitadas.

La apelante argumenta que la aceptación de los hechos no discutidos en el proceso no puede interpretarse como un actuar de buena fe, ya que el material probatorio aportado al proceso, particularmente los informes de gestión y otros documentos allegados con

la demanda, fue tan contundente que no dejó al demandado otra opción más que aceptar las circunstancias del contrato laboral, su modalidad y la forma en que terminó. En consecuencia, la aceptación de estos hechos no puede considerarse como una manifestación de buena fe, sino como el resultado inevitable ante las pruebas irrefutables presentadas por la parte demandante.

La apoderada además cuestiona la justificación del empleador para no pagar las comisiones, señalando que la imposición de la condición de recaudo efectivo es inaplicable, ya que el despido injustificado del trabajador imposibilitó que pudiera cumplir con dicha cláusula. En lugar de reflejar un comportamiento de buena fe, esto demuestra una conducta contraria a los principios que rigen el derecho laboral, ya que el empleador era plenamente consciente de que los resultados de las ventas no eran inmediatos, sino que se materializaban a largo plazo. Esta situación fue incluso reconocida por la representante legal de la empresa, quien señaló que los contratos a largo plazo eran parte de la naturaleza del trabajo del demandante.

Por lo tanto, la apoderada solicita que se revoque la absolución relacionada con las sanciones contempladas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, argumentando que el actuar del empleador no reflejó buena fe y, por el contrario, perjudicó los derechos del trabajador al condicionar el pago de las comisiones a circunstancias que el propio empleador hizo imposibles de cumplir.

ESDINAMICO SAS (min 00:24:00 video 30)

La parte demandada, por medio de su apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando que el superior jerárquico revise la decisión y absuelva a la empresa de todas las pretensiones formuladas en su contra. El fundamento principal del recurso radica en que el salario real devengado por el trabajador fue debidamente probado en el proceso, y la liquidación realizada por la empresa reflejó correctamente los valores a los que tenía derecho el demandante, conforme a la normativa laboral vigente. Dicho pago fue efectuado de manera oportuna, transfiriéndose los montos correspondientes a la cuenta bancaria del trabajador.

En cuanto a las comisiones reclamadas por el demandante, el apelante sostiene que la política de comisiones presentada en el proceso, la cual fue suscrita por el trabajador, establece como requisito para la causación de dichas comisiones el recaudo efectivo de lo vendido. Sin embargo, en el proceso no se demostró la existencia de negocios cerrados y perfeccionados por el demandante que cumplieran con este requisito. Además, tampoco se acreditó que se hubiera producido el recaudo efectivo de los montos correspondientes a las ventas realizadas, lo cual era una condición esencial para que las comisiones fueran pagaderas.

La parte demandada señala que, en virtud de lo anterior, las comisiones reclamadas no pueden considerarse parte del salario del trabajador y, por ende, no procede la reliquidación de prestaciones sociales ni la indemnización por despido sin justa causa con base en dichas comisiones. En este sentido, no debe proceder la reliquidación de la prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, ni ninguna de las demás condenas impuestas en la sentencia recurrida.

Finalmente, el apelante comparte la decisión del Despacho en lo que respecta a la buena fe observada por la empresa, tanto en la celebración del contrato como en la ejecución de la política de comisiones, y reitera que la actuación de la demandada se ajustó a los principios de buena fe tanto durante la relación laboral como en el desarrollo del proceso. En consecuencia, solicita al superior jerárquico que revoque la sentencia en su totalidad y absuelva a la empresa de todas las pretensiones del demandante.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante y demandada, el despacho de conocimiento, con auto de 06 de septiembre de 2024 (pdf 04), dispuso admitir los recursos presentados, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; se tiene que ninguna de las partes se pronunció al respecto.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandante y demandada.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante y demandada, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentra acreditado que el demandante devengó comisiones durante la relación laboral y, de ser así, dichas sumas constituyen salario conforme a lo dispuesto en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo? Y, en caso afirmativo, ¿procede su inclusión en la base de liquidación de las prestaciones sociales e indemnización por despido sin justa causa, así como la imposición de sanciones moratorias previstas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, dada la actuación del empleador?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Comisiones como factor salarial: viabilidad jurídica y su impacto en la reliquidación de prestaciones e indemnizaciones

El análisis de la naturaleza jurídica de las comisiones en el marco de la relación laboral implica una interpretación integral del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual prescribe que constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que el trabajador recibe como contraprestación directa de los servicios prestados. Este concepto incluye expresamente las comisiones y porcentajes sobre

ventas, lo que sitúa a estas dentro del conjunto de pagos que, en virtud de la ley, tienen carácter salarial, independientemente de la denominación o del acuerdo contractual que se haya establecido entre las partes.

La norma en cuestión pone de manifiesto que la esencia del salario radica en la naturaleza del pago, es decir, en la retribución por el servicio prestado, y no en la forma en que este pago es designado o clasificado. Bajo esta lógica, las comisiones devengadas por la labor del trabajador constituyen salario en los términos del [1]artículo 127, y como tal, deben ser tenidas en cuenta no solo para la liquidación de prestaciones sociales, sino también para la determinación de cualquier indemnización derivada de la terminación del contrato de trabajo, sin que las partes puedan disponer lo contrario mediante acuerdos que busquen excluirlas del salario.

En este contexto, es crucial el papel que desempeña el artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que las estipulaciones que limiten los derechos irrenunciables del trabajador deben tenerse por no escritas. Esta disposición resulta particularmente relevante cuando se analizan cláusulas contractuales que intentan condicionar la causación de las comisiones al recaudo efectivo de las ventas. Estas cláusulas, lejos de ajustarse al marco normativo laboral, constituyen una vulneración de los derechos mínimos del trabajador al introducir barreras artificiales que impiden el reconocimiento de una retribución justa por los servicios efectivamente prestados.

La Corte Suprema de Justicia ha sido clara en su jurisprudencia al señalar que las comisiones se generan en el momento en que el trabajador materializa las ventas, independientemente de que el recaudo de las mismas se produzca antes o después de la terminación del contrato. Esta línea de interpretación se sustenta en el principio de primacía de la realidad sobre las formas, principio rector del derecho laboral que exige que prevalezca la realidad del servicio prestado sobre las formalidades contractuales que pudieran desnaturalizar la relación laboral o afectar los derechos irrenunciables del trabajador. En consecuencia, cualquier acuerdo que sujete el pago de las comisiones a condiciones ajenas al control del trabajador, como lo es el recaudo efectivo, debe ser considerado ineficaz y, por tanto, tenerse por no escrito, en los términos del artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo. La Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1005 de 2021, estableció:

> *"En correspondencia con lo anterior, esta Sala de la Corte ha determinado que, por regla general, las comisiones por ventas se generan por la efectiva prestación personal del servicio del trabajador en la gestión y materialización del respectivo negocio jurídico, independientemente de que el pago o recaudo se dé con posterioridad a la finalización de la relación laboral (CSJ SL, 16 jun. 1989, rad. 2963 y CSJ SL, 16 jun. 1989, rad. 2437, reiteradas en CSJ SL, 14 ag. 2012, rad. 37192).*
>
> *Igualmente, en la sentencia CSJ SL, 17 abr. 2013, rad. 41423, la Sala concluyó que los pactos que sujetan el nacimiento de las comisiones por ventas al recaudo de los dineros,*

[1] ARTÍCULO 127. ELEMENTOS INTEGRANTES. <Artículo modificado por el artículo 14 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

en vigencia de la relación laboral, son contrarios a los derechos mínimos del trabajador. Dijo la Corte en esa oportunidad:

Ahora, en lo relacionado con las ventas realizadas en vigencia del contrato, pero en proceso de facturación a la fecha de retiro, obra en el expediente, a folio 25, copia del contrato de trabajo, que, en el parágrafo quinto, señala:

"Para ser exigibles la remuneración y comisiones mencionadas debe haber sido cancelada la factura en su monto total. EL TRABAJADOR y LA EMPRESA conviene expresamente en que deben cumplirse ineludiblemente los siguientes requisitos y condiciones:

A) Que el presente contrato de trabajo esté en plena vigencia, completa ejecución y no haya terminado por ninguna causa. Por consiguiente, es expresamente entendido que no habrá derecho al pago de comisiones sobre negociaciones iniciados por el TRABAJADOR y que sean perfeccionados después de retirarse o de ser retirado por la EMPRESA.

Con fundamento en ella, tanto los rubros a los que se hace referencia en el hecho 4° de la demanda, que admite el recurrente "se encontraban en proceso de facturación a la fecha de su retiro," aunque correspondían a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2004, como la factura de Holcim, identificada con el número 4530014048, por la suma de $49.648.406, de 6 de octubre de 2004 (folios 131 y 132), en la que se pacta su cancelación 30 días después, fueron excluidos por la empresa.

Sin embargo, ***ese acuerdo es lesivo de los derechos del trabajador, pues así como la misma demandada lo acepta, Barbosa Chavarro realizó esas ventas, aunque solo se obtuvo su pago luego de que el contrato terminó, lo cierto es que tales ventas se concretaron por virtud de la prestación personal del servicio del actor, siendo evidente que debe recibir la comisión correspondiente.***

En efecto, la empresa, según el objeto incorporado en la cláusula primera del contrato de trabajo, pactó con el trabajador la obligación, entre otras, de "poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las funciones propias del oficio mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR directamente o a través de sus representantes", a cambio de una remuneración que incluía el pago de las comisiones, y si aquel objeto se cumplió no existe razón valedera para excluirlas, ni siquiera bajo el argumento de las contingencias propias de los negocios ya finiquitados, dado que esa es una discusión que ya no le compete al trabajador.

Así lo ha estimado esta Corte, incluso en reciente decisión de 14 de agosto de 2012, radicado 37192, en la que, en lo pertinente consideró:

"es evidente el desatino del fallador de alzada al inferir que conforme la reflexión jurisprudencial que copió en parte, la comisión está supeditada a la prestación del servicio hasta la recolección efectiva de su costo, y que al no constituir tal rubro derecho adquirido, no le asistía derecho al trabajador a percibir la comisión pretendida, pues como antes se observó, la jurisprudencia prevé que es muy distinto el caso de las ventas que, realizadas en vigencia del contrato su pago sólo lo obtiene el patrono después de que éste

ha terminado porque en ese caso, como claramente lo tiene definido la Sala, el trabajador debe recibir la comisión correspondiente (Rad. 2437, 16 junio/89)".

En esos términos, incluso si la Corte considerara que la cláusula adicional al contrato de trabajo sujetó el pago de las comisiones al efectivo recaudo, en vigencia de la relación laboral, una estipulación de tal magnitud resultaría ineficaz, por vulnerar los derechos mínimos del trabajador, más si se tiene en cuenta que, como ya se advirtió, debido a los plazos generados a favor de los clientes, no era posible física y legalmente para el actor realizar esa tarea".

Este pronunciamiento reafirma que los acuerdos que pretenden despojar de su carácter salarial a ciertos pagos, tales como comisiones, carecen de validez jurídica cuando esos pagos constituyen, en realidad, una contraprestación directa por los servicios prestados. No es suficiente que las partes hayan pactado la exclusión de dichos pagos del salario, ya que el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo establece que cualquier remuneración percibida por el trabajador en razón de su labor debe ser considerada salario. Así, las comisiones, al ser una retribución directa por las ventas logradas por el trabajador, deben ser tratadas como salario para todos los efectos legales, incluidos la liquidación de prestaciones sociales y la indemnización por despido injusto.

El [2] artículo 43 del Código Sustantivo del Trabajo refuerza esta postura, al declarar ineficaces los acuerdos que restrinjan los derechos irrenunciables del trabajador, como es el derecho a recibir una retribución justa y proporcional por el servicio prestado. En este sentido, cualquier disposición que condicione el derecho a las comisiones al recaudo efectivo no solo desnaturaliza la función de las comisiones como parte del salario, sino que también contraviene los principios fundamentales del derecho laboral, en especial el de primacía de la realidad. La Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1609 de 2024, estableció lo siguiente:

"(…)el acuerdo de voluntades que le resta naturaleza salarial a un rubro o beneficio que en verdad es salario, resulta insuficiente para desvirtuar su condición remuneratoria directa del servicio, pues tal determinación no está sujeta al arbitrio de las partes; por tanto, si un pago cumple las condiciones previstas en la ley para ser salario, seguirá predicándose tal condición «aun cuando exista estipulación en contrario, ya que se impone la realidad sobre las formalidades. De esta manera lo entendió la corporación en sentencia CSJ SL5481, 12 feb. 1993 al referirse a la hermenéutica de los artículos 127 y 128 del estatuto laboral, según la modificación introducida en la Ley 50 de 1990» (CSJ SL3272-2018)".

En consecuencia, las comisiones deben ser incluidas en el cálculo del salario base para la liquidación de todas las prestaciones sociales, tales como la prima de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, y la indemnización por despido injusto. Aunque se reconoce que el empleador, al momento de realizar el pago de las prestaciones, incluyó las comisiones ya pagadas durante la relación laboral, es preciso señalar que, conforme a lo expuesto,

---

[2] ARTÍCULO 43. CLAUSULAS INEFICACES. En los contratos de trabajo no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto; pero a pesar de la ineficacia de esas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas, que constituya por sí mismo una actividad lícita, da derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que haya durado el servicio hasta que esa ineficacia se haya reconocido o declarado judicialmente.

también debieron incluirse aquellas comisiones que, aunque pagaderas después del despido, ya habían sido causadas por ventas realizadas durante la vigencia del contrato. Al excluir estas comisiones bajo la condición del recaudo efectivo, el empleador contraviene tanto la ley como la jurisprudencia que establece que debe prevalecer la realidad del trabajo efectivamente realizado. Por tanto, cualquier liquidación que no contemple estas comisiones debe ser revisada, y las prestaciones e indemnizaciones recalculadas conforme al salario real devengado, que incluye las comisiones causadas, independientemente de su recaudo posterior.

A la luz de los argumentos expuestos, queda demostrado que las comisiones devengadas por el trabajador constituyen salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y que cualquier disposición que condicione su pago al recaudo efectivo debe ser considerada ineficaz, conforme al artículo 43 del mismo estatuto. La jurisprudencia ha sido clara al señalar que los pagos que retribuyen directamente el servicio prestado no pueden ser desnaturalizados por pactos contractuales. Por lo tanto, se concluye que la sentencia de primera instancia actuó en estricto apego a la normatividad vigente y a la doctrina jurisprudencial, y se confirmará en todos sus aspectos, al haber incluido correctamente las comisiones como parte del salario y ordenado su consideración en la reliquidación de prestaciones sociales e indemnización por despido.

Alcance de la buena fe en la ejecución de contratos laborales y su influencia en la exoneración de sanciones moratorias

La *ratio decidendi* en torno a la imposición de sanciones moratorias en el marco del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo se vincula estrechamente con la interpretación de la buena fe exenta de culpa, principio fundamental que informa tanto las relaciones laborales como el orden jurídico en general. En el caso *sub examine*, el fallador de primera instancia consideró que la conducta del empleador se ajustaba a los parámetros de la buena fe objetiva, lo que excluía la existencia de un ánimo defraudatorio en su proceder.

El juez de primer grado concluyó que la parte demandada no actuó con la intención de ocultar dolosamente las acreencias laborales, sino que su proceder estuvo guiado por una interpretación errónea, pero razonable, de los pactos contractuales y las normativas aplicables. En consecuencia, debe analizarse si este error puede ser asimilado a un comportamiento temerario o fraudulento, lo cual es un requisito indispensable para la imposición de la sanción moratoria. No obstante, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que la sanción no es automática, sino que debe analizarse en cada caso concreto si la omisión en el pago de las acreencias laborales tuvo un sustento legítimo o si, por el contrario, constituyó una retención injustificada del derecho del trabajador.

En este caso, se observa que la parte demandada implementó una política de comisiones suscrita el 21 de febrero de 2018 (pdf 03. Fl. 19), es decir, dos días después de la firma del contrato de trabajo. En dicha política, si bien se reconoce expresamente que "*las comisiones hacen parte del salario*", también se estipuló que "*el pago de las comisiones será contra recaudo*", lo que genera una contradicción normativa y pone en entredicho la validez de dicha cláusula a la luz del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia reiterada de la Corte

Suprema de Justicia. La exigencia de un recaudo efectivo como condición para el pago de una remuneración que constituye salario desconoce el principio de primacía de la realidad, pues subordina la causación del derecho a un hecho ajeno a la prestación personal del servicio.

Este criterio ha sido abordado de manera reiterada por la Corte Suprema de Justicia, que ha señalado que cualquier estipulación que condicione el pago de las comisiones al recaudo posterior debe ser desestimada, dado que vulnera la irrenunciabilidad de los derechos laborales y el carácter retributivo del salario. En efecto, en la sentencia CSJ SL1005-2021, la Sala de Casación Laboral se pronunció sobre la ineficacia de los acuerdos que subordinan el reconocimiento del salario al pago de terceros, señalando que:

> *"Los pactos que sujetan el nacimiento de las comisiones por ventas al recaudo de dineros en vigencia de la relación laboral son contrarios a los derechos mínimos del trabajador".*

Aun cuando el empleador no desconoció por completo la naturaleza salarial de las comisiones –pues incluyó dentro de la base salarial aquellas que fueron efectivamente recaudadas–, ello no resulta suficiente para eximirlo de la responsabilidad de reconocer y liquidar las prestaciones sociales sobre la totalidad de las comisiones causadas, sin condicionar su pago a la materialización del recaudo. Así lo ha señalado la Corte en sentencias como CSJ SL1259-2023, donde se indicó que:

> *"Nótese que la intención no fue ocultar o negar de manera rotunda y total el carácter salarial de la bonificación de asistencia, sino solo de manera parcial y en torno a unas precisas acreencias laborales, que para la Sala provino de una confusión conceptual que, en todo caso, no entraña mala fe ni, se repite, algún ánimo defraudatorio".*

Sin embargo, en este caso no se trata simplemente de una confusión conceptual sobre la naturaleza de un pago, sino de la aplicación de una política empresarial que contradice el ordenamiento jurídico y que generó una omisión en la liquidación correcta de las prestaciones sociales del demandante. En ese sentido, no puede acogerse la tesis de la buena fe exenta de culpa, pues la demandada tenía conocimiento del carácter salarial de las comisiones, como lo indica expresamente en su propia política interna, y pese a ello, estableció una limitación ilegal en su pago, contraviniendo la normativa laboral.

Bajo esta óptica, resulta procedente la sanción moratoria, en tanto la parte demandada no acreditó la existencia de razones serias y atendibles que justificaran la omisión en el pago de la totalidad de las acreencias laborales del trabajador. En este sentido, la jurisprudencia ha sido clara en que la interpretación errónea de la norma no exime al empleador de sus responsabilidades cuando con su actuar restringe el acceso del trabajador a sus derechos irrenunciables.

Por lo tanto, en este caso se configura la retención injustificada del salario en lo que respecta a las comisiones causadas y no recaudadas, lo que impone la aplicación de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en lo relativo a la indemnización equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de las acreencias laborales. Dicha sanción se computará desde el día siguiente a la fecha de terminación del vínculo laboral (30 de noviembre de 2018), es decir, a partir del 1 de diciembre de 2018, y hasta por 24 meses, esto es, hasta el 30 de noviembre de

2020 conforme al artículo 118 del Código General del Proceso, en atención a que la demanda fue presentada el 29 de mayo de 2019, dentro del término legalmente establecido. Para efectos de su liquidación, se tomará como base el salario declarado en primera instancia, equivalente a $4.706.450, lo que asciende a la suma de $112.954.800.

A partir del 1 de diciembre de 2020, en aplicación del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se generarán intereses moratorios sobre las sumas adeudadas, los cuales deberán liquidarse conforme a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, hasta el pago efectivo de las obligaciones reconocidas.

> *"De una lectura al parágrafo 2, se desprende que la indemnización de un salario diario hasta por el término de 24 meses por el retardo del empleador en el pago de los salarios y prestaciones debidas, tiene como destinario aquellos trabajadores que devenguen más de un salario mínimo como el aquí demandante y que hubieren ejercido acción judicial entro de los 24 meses siguientes, contados a partir de la fecha de terminación del vínculo laboral." (*SL649-2018)

Por consiguiente, en este caso se confirmará la reliquidación de todas las prestaciones sociales e indemnizaciones con base en el salario real devengado, incluyendo la totalidad de las comisiones causadas durante la relación laboral. Así mismo, se ordenará la imposición de la indemnización por falta de pago precitada, dado que el incumplimiento del empleador no se debió a una circunstancia excusable ni a una discrepancia genuina sobre la naturaleza del pago, sino a la aplicación de una política de comisiones que resultaba abiertamente contraria a la legislación laboral vigente.

Es necesario precisar que, aunque en el curso del proceso se hizo alusión al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, relativo a la indemnización por la no consignación de las cesantías a un fondo), dicha disposición no fue invocada expresamente como fundamento de una pretensión autónoma dentro de la demanda. En efecto, al examinar el libelo introductorio (doc. 03, pág. 3), no se encuentra formulada ninguna pretensión específica tendiente a obtener el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en dicho artículo. Tampoco se evidencia solicitud de reforma de la demanda que subsane tal omisión, por lo que no corresponde emitir pronunciamiento alguno sobre su procedencia ni efectuar liquidación al respecto, en atención a los principios de congruencia y de limitación del juez por el marco de las pretensiones. En consecuencia, el análisis y la condena se circunscriben exclusivamente a lo establecido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que sí fue objeto de discusión procesal y apelación.

En consecuencia, y conforme a lo expuesto, se revocará la decisión del a quo en lo referente a la exoneración de la sanción moratoria, imponiéndose la condena correspondiente en aplicación de la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad del recurso presentado por la parte demandante, se condenará en costas en esta instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,** Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. ADICIONAR al numeral **SEGUNDO** de la sentencia proferida el día 22 de agosto del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído. Mismo que quedará así:

> ***"SEGUNDO: CONDENAR** a la demandada **ESDINAMICO SAS**, a reconocer y pagar a **JUAN GUILLERMO ROLDAN GONZÁLEZ**, los siguientes conceptos:*
>
> *a) A la suma de $14.930.490 por concepto de comisiones causadas y no pagadas durante toda la relación laboral.*
> *b) A la suma de $1.196.984 por reliquidación de las cesantías.*
> *c) A la suma de $111.292 por reliquidación de los intereses a las cesantías.*
> *d) A la suma de $617.501 por reliquidación de la prima de servicios.*
> *e) A la suma de $598.492 por reliquidación de las vacaciones, valor que deberá ser indexado conforme al IPC certificado por el DANE, desde el 30 de noviembre de 2018 hasta la fecha de pago efectivo.*
> *f) A la suma de $1.328.740 por reliquidación de la indemnización por despido sin justa causa, valor que deberá ser indexado conforme al IPC certificado por el DANE, desde el 30 de noviembre de 2018 hasta la fecha de pago efectivo.*
> *g) A la suma equivalente a un (1) día de salario por cada día de retardo en el pago de las acreencias laborales, durante los primeros veinticuatro (24) meses contados desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2020, conforme a la sanción prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Para su liquidación, se tomará como base el salario mensual de $4.706.450, ascendiendo la suma de la indemnización a $112.954.800.*
>
> *h) A partir del 1 de diciembre de 2020, una vez finalizado el periodo de veinticuatro (24) meses de sanción moratoria, las sumas adeudadas que no hayan sido satisfechas devengarán intereses moratorios, los cuales deberán liquidarse conforme a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Dichos intereses se generarán desde el 1 de diciembre de 2020 y hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de las obligaciones reconocidas en esta sentencia.*

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia proferida el día 22 de agosto del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Uno Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

TERCERO: CONDENAR a condenar en costas en esta instancia a cargo de **ESDINAMICO SAS** y en favor de **JUAN GUILLERMO ROLDAN GONZÁLEZ.**

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 071.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada-

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de uno (1) salario mínimo mensual legal vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
Parte demandada	ALIANSALUD - EPS
Radicación	11001310502520220002501
Fecha de la decisión	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD
Acta de Discusión	059
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502520220002501

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en razón de la sentencia proferida el día 13 de septiembre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 y 04 primera instancia)

La **Agencia Nacional de Infraestructura (ANI),** quien actúa a través de su apoderado Elber Andrés Estupiñán Bautista, presentó demanda contra **ALIANSALUD EPS,** pretendiendo por esta vía ordinaria laboral el reembolso de los valores pagados en concepto de incapacidades no reconocidas para el servidor público César Augusto García Montoya. La demandante también solicita el pago de intereses moratorios derivados de la falta de reconocimiento oportuno de dichas incapacidades, fundamentando su pretensión en la normativa vigente sobre Seguridad Social y la protección del derecho a la salud y el mínimo vital del trabajador incapacitado. Finalmente, la **ANI** solicita la condena en costas y agencias en derecho.

Los hechos relevantes expuestos detallan que, en múltiples ocasiones, la **Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)** solicitó a **ALIANSALUD EPS** el pago de incapacidades otorgadas a César Augusto García Montoya para el período comprendido entre el 3 de mayo y el 22 de junio de 2018. El 8 de noviembre de 2018, la Coordinación del Grupo de Talento Humano de la ANI envió un derecho de petición,

radicado bajo el número 1221778-281, solicitando el reconocimiento de las incapacidades por 30 días (del 3 de mayo al 1 de junio de 2018) y por 21 días (del 2 de junio al 22 de junio de 2018). Este requerimiento fue respondido por **ALIANSALUD** el 26 de noviembre de 2018, rechazando el pago de estas incapacidades bajo el fundamento del Artículo 12 de la Resolución 2266 de 1998, que limita la expedición retroactiva de certificados de incapacidad para atenciones ambulatorias.

Posteriormente, el 6 de diciembre de 2018, la **ANI** reiteró su solicitud mediante un nuevo derecho de petición, fundamentando la improcedencia del rechazo inicial. **ALIANSALUD** mantuvo su postura y dejó sin respuesta otras solicitudes relacionadas con el mismo diagnóstico, lo que generó, según la **ANI**, un perjuicio económico a la entidad al haber asumido previamente los pagos al trabajador incapacitado.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, la **ANI** invoca el artículo 206 de la Ley 100 de 1993, que impone a las EPS la obligación de reconocer incapacidades por enfermedad general a los afiliados cotizantes, en consonancia con los derechos fundamentales de seguridad social, salud y dignidad humana. La **ANI** sostiene que **ALIANSALUD EPS** incumplió con su obligación de respuesta oportuna, afectando el derecho al mínimo vital del servidor. También se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que reafirma la obligación de las EPS de cubrir incapacidades para proteger la dignidad y el bienestar del trabajador incapacitado.

Finalmente, la ANI solicita que se declare que César Augusto García Montoya cumplió con todos los requisitos legales para el reconocimiento de estas incapacidades y que **ALIANSALUD EPS** debe reembolsar los valores correspondientes y asumir los intereses moratorios calculados, con el fin de garantizar el cumplimiento de las EPS en su papel protector de los derechos fundamentales en el marco de la seguridad social.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 10 de febrero del 2023 (pdf 05), luego, con providencia del 31 de julio del 2024 (pdf 08) tuvo por contestada la demanda por ALIANSALUD - EPS. Posteriormente, con providencia del 31 de julio del 2024 (pdf 11) el Juzgado Cuarenta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, avocó conocimiento del proceso de referencia y fijó la fecha para la celebración de audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ALIANSALUD - EPS (PDF 07)

ALIANSALUD EPS, mediante apoderada, contestó la demanda interpuesta por la **Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)**, oponiéndose a todas las pretensiones y formulando excepciones para exonerarse del pago de las incapacidades solicitadas para el servidor César Augusto García Montoya.

En su contestación, la EPS argumenta que las incapacidades reclamadas fueron emitidas de manera retroactiva, meses después de los periodos de incapacidad, lo cual excede los plazos normativos establecidos en el artículo 12 de la Resolución 2266 de 1998. Según **ALIANSALUD**, esta normativa limita el reconocimiento de incapacidades retroactivas, y dado que las incapacidades de García Montoya fueron emitidas en agosto de 2018 tras la radicación de la solicitud por la **ANI** el 4 de septiembre de 2018, se anula la obligación de la EPS para su pago.

ALIANSALUD fundamenta su oposición principalmente en la excepción de prescripción extintiva de las pretensiones de la ANI, con base en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPTSS) y el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, que establecen un término de tres años para solicitar el reembolso de prestaciones económicas. Sostiene que dicho término inició el 4 de septiembre de 2018, cuando la ANI presentó la solicitud de pago, y venció el 4 de septiembre de 2021. Como la demanda fue radicada en enero de 2022, **ALIANSALUD** considera que la prescripción ha operado, lo cual extingue cualquier derecho a reclamo por parte de la ANI respecto de estas incapacidades.

También plantea la excepción de inexistencia de la obligación, al sostener que, dado el incumplimiento de los términos establecidos para la emisión de las incapacidades, no hay fundamento jurídico que obligue a **ALIANSALUD** al pago de las mismas. En este contexto, invoca la excepción de cobro de lo no debido, pues considera que la reclamación carece de base normativa y constituye un enriquecimiento sin causa, ya que la normativa aplicable no ampara el pago de incapacidades emitidas fuera del plazo permitido.

Finalmente, **ALIANSALUD** invoca el principio de buena fe, asegurando que ha actuado conforme a derecho y de manera diligente en la gestión de las incapacidades, y formula una excepción genérica o innominada, amparada en el artículo 282 del Código General del Proceso. Con esta última, solicita al juez considerar cualquier otra excepción que pueda desprenderse de los hechos probados en el expediente, exonerándola así de responsabilidad.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 14 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Cuarenta y Ocho (48) Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 13 de septiembre de 2024, resolvió declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la demandada ALIANSALUD EPS, con lo cual absolvió a esta entidad de todas las pretensiones formuladas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La decisión implica que ALIANSALUD EPS no estará obligada a efectuar el reembolso de las incapacidades pagadas por la ANI al trabajador César Augusto García Montoya, así como tampoco al pago de intereses moratorios reclamados ni a otras obligaciones pretendidas en la demanda.

Adicionalmente, se impuso condena en costas a la ANI, incluyendo agencias en derecho, que fueron tasadas en una suma equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La fundamentación de la decisión se basó en el análisis de la normativa que regula el término de prescripción para las acciones de reembolso de prestaciones económicas en el ámbito de la seguridad social, particularmente el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y el artículo 28 de la Ley 1438 de 2011. El juzgado consideró que el término de prescripción trienal comenzó a contarse a partir de la fecha en que la ANI presentó la primera solicitud de reembolso de las incapacidades ante ALIANSALUD EPS, el 4 de septiembre de 2018. Según la normativa aplicable, dicha reclamación interrumpió el término de prescripción, que se renovó por un periodo adicional de tres años, concluyendo el 26 de noviembre de 2021. Al haber interpuesto la ANI la demanda el 14 de enero de 2022, fuera del término prescriptivo, el juzgado encontró que la acción estaba legalmente prescrita y, por ende, carecía de efectos jurídicos.

En cuanto a la naturaleza de la interrupción de la prescripción, el fallo subraya que, conforme a la normativa laboral, este fenómeno se produce una única vez y no es susceptible de interrupciones sucesivas por reclamaciones posteriores. Con base en la jurisprudencia aplicable, el despacho enfatizó que la prescripción se interrumpe solo una vez, lo cual implica que los reclamos subsiguientes efectuados por la ANI, incluyendo los realizados el 6 de diciembre de 2018 y el 18 de enero de 2019, resultaban irrelevantes para efectos de un nuevo cómputo del término prescriptivo. Esto se sustenta en la interpretación restrictiva de la prescripción extintiva en el ámbito laboral, la cual permite a las partes un único acto interruptivo del término trienal.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE (min 00:31:57 video 16)

La apoderada de la demandante, interpuso un recurso de apelación, cuestionando la sentencia de primera instancia por su enfoque exclusivo en la prescripción de la acción, argumentando que el término de tres años para la presentación de la demanda debió ajustarse debido a la suspensión de términos judiciales ocasionada por la pandemia de COVID-19. Señaló que, mediante acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, tales como los PCSJA 11517 y 11546, se suspendieron términos judiciales entre marzo y julio de 2020, lo cual impactaría el cómputo de la prescripción concluido en noviembre de 2021 según la sentencia.

En vista de lo anterior, solicitó que se conceda el recurso de alzada para que el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, revise el fallo y determine si la suspensión de términos justifica la presentación de la demanda el 14 de enero de 2022 dentro del plazo permitido. Por tanto, solicita que se revoque la sentencia absolutoria de primera instancia y se acceda a las pretensiones relativas al reembolso de las incapacidades reclamadas.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte

demandante, el despacho de conocimiento, con auto del 02 de octubre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente manera:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI (pdf 04 segunda instancia)

En sus alegatos de conclusión, la **Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)**, a través de su apoderado Elber Andrés Estupiñán Bautista, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia en la cual se declaró probada la excepción de prescripción a favor de **ALIANSALUD EPS**. La **ANI** argumenta que el juzgado no valoró adecuadamente los elementos probatorios ni tuvo en cuenta circunstancias relevantes, como la suspensión de términos durante la pandemia por COVID-19. Según la **ANI**, el Consejo Superior de la Judicatura suspendió términos judiciales entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, afectando el cálculo de prescripción, lo que habría mantenido su demanda dentro del término legal.

La ANI cuestiona el análisis de prescripción realizado en primera instancia, pues considera que la interrupción del término al presentar su reclamación ante **ALIANSALUD** el 8 de noviembre de 2018 fue extendida por la suspensión mencionada. En este sentido, sostiene que el juzgado debió sumar el período de suspensión a los tres años de prescripción, en lugar de descontarlo, permitiendo que la demanda fuera interpuesta de manera oportuna en enero de 2022.

En cuanto al fondo, la **ANI** insiste en que César Augusto García Montoya cumplió con los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, fundamentándose en la Resolución 927 de 2018. Además, solicita el reembolso a su favor por las sumas pagadas al trabajador, así como el reconocimiento de intereses moratorios conforme al Decreto 4023 de 2011, argumentando que estos pagos representan una obligación no cumplida por **ALIANSALUD**.

Por todo lo anterior, la ANI solicita que se revoque la decisión absolutoria y se ordene a **ALIANSALUD EPS** el reembolso de los valores correspondientes a las incapacidades, el pago de los intereses moratorios y la condena en costas, reiterando que el juzgado debe ajustar el término prescriptivo a las circunstancias extraordinarias derivadas de la emergencia sanitaria.

ALIANSALUD - EPS (pdf 05 segunda instancia)

ALIANSALUD EPS, representada por su apoderada Mónica Paola Quintero Jiménez, solicita la confirmación de la sentencia de primera instancia en la que se declaró probada la excepción de prescripción. La EPS argumenta que, conforme al artículo

151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el término de prescripción de tres años, interrumpido el 4 de septiembre de 2018 con la solicitud de pago de la ANI, culminó el 4 de septiembre de 2021. Por tanto, sostiene que la demanda presentada en enero de 2022 se radicó de manera extemporánea.

Frente a la apelación de la ANI, que señala que la suspensión de términos judiciales durante la pandemia debe extender el plazo de prescripción, ALIANSALUD afirma que dicha suspensión no es aplicable, dado que la interrupción ya había ocurrido y el término no se extiende más allá de los tres años iniciales. La EPS reconoce que, incluso sumando la suspensión por la emergencia sanitaria, el plazo de prescripción se habría extendido como máximo hasta el 12 de enero de 2022, por lo que igualmente se cumpliría el término prescriptivo.

Además, ALIANSALUD enfatiza que las incapacidades reclamadas fueron emitidas de manera retroactiva en incumplimiento del artículo 12 de la Resolución 2266 de 1998, el cual limita la emisión de incapacidades fuera del tiempo del evento incapacitante. En consecuencia, la EPS solicita que se confirme la sentencia absolutoria y se mantenga la exoneración de cualquier obligación de pago respecto de las incapacidades reclamadas por la ANI.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Corresponde declarar probada la excepción de prescripción frente a las pretensiones presentadas en el proceso de referencia?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del presente proceso, se advierte que ciertos elementos estructurales han quedado plenamente acreditados y fuera de controversia, conformando así la plataforma fáctica esencial sobre la cual se sustentan las pretensiones y excepciones invocadas. En particular, se encuentra suficientemente demostrado que el señor César Augusto García Montoya detenta la calidad de trabajador vinculado a la **Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)** (fl.23 - 25 pdf 01), entidad que, en su rol de empleadora, asumió el pago de incapacidades por enfermedad general, en consonancia con los principios de protección social previstos en la normatividad vigente. De igual forma, consta en el expediente la afiliación del trabajador a **ALIANSALUD EPS** (fl.42 pdf 07), en su calidad de entidad promotora de salud, responsable de asumir las prestaciones económicas por incapacidad conforme a los lineamientos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

En consecuencia, no es materia de discusión la existencia de la relación laboral entre la **ANI** y el trabajador, ni su afiliación a la EPS demandada, así como tampoco los periodos de incapacidad comprendidos entre mayo y junio de 2018. Por el contrario, el núcleo del debate procesal radica en la procedencia de la excepción de prescripción planteada por **ALIANSALUD EPS**, la cual se fundamenta en la interpretación y aplicación de los términos prescriptivos conforme a los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 28 de la Ley 1438 de 2011.

Configuración y Procedencia de la Excepción de Prescripción en el Ámbito Laboral: Análisis en Contexto de Suspensión de Términos por Emergencia Sanitaria

La figura de la prescripción en materia laboral constituye un pilar estructural en el ordenamiento jurídico, orientado a garantizar la estabilidad y certeza jurídica en las relaciones entre trabajadores y empleadores, y a evitar la perpetuación de controversias que, en su prolongación indefinida, comprometan el equilibrio procesal y el principio de seguridad jurídica. En este sentido, la prescripción extintiva en el ámbito laboral se erige como un mecanismo mediante el cual se extingue el derecho a ejercer una acción judicial, en virtud del transcurso de un término preestablecido sin que la parte afectada haya ejercido sus derechos, en cumplimiento de los parámetros temporales estipulados. El artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social prevé un término de tres años para la interposición de acciones de esta naturaleza, en cuyo transcurso el titular de la pretensión tiene la posibilidad, en condiciones normales, de solicitar la resolución de su controversia dentro del sistema de justicia laboral.

La doctrina y la jurisprudencia han desarrollado la prescripción como un instituto cuya función trasciende la mera limitación temporal, consolidándose como un resguardo de la economía procesal y la confianza legítima en el sistema jurídico. Esta figura opera mediante la fijación de un término que, una vez expirado, priva al titular de la acción de su derecho a obtener un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, evitando así la afectación a derechos patrimoniales de la contraparte que podrían verse vulnerados por la inactividad prolongada del accionante. No obstante, dicha prescripción no es absoluta, y en determinados contextos excepcionales, como las emergencias nacionales, se han adoptado disposiciones específicas que contemplan la suspensión de los términos prescriptivos, introduciendo un efecto suspensivo que paraliza el cómputo del tiempo, el cual se reanuda una vez cesadas las circunstancias excepcionales.

En el caso concreto, la pandemia generada por el COVID-19 constituyó un acontecimiento de impacto global que dio lugar a la declaratoria de emergencia manifiesta por parte del Estado, situación que requirió la implementación de medidas de carácter extraordinario tanto por el Gobierno Nacional como por el Consejo Superior de la Judicatura, a fin de preservar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia en un contexto de excepcionalidad. Con la expedición del Decreto 564 de 2020, se dispuso en su artículo primero la suspensión de términos de prescripción y caducidad, medida que entró en vigencia el 16 de marzo de 2020 y permaneció vigente hasta el 1 de julio de 2020, fecha en que, mediante el Acuerdo PCSJA20-11567

de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura levantó la suspensión de términos. Así, el periodo de suspensión se extendió por tres meses y 16 días, paralizando el cómputo de los términos prescriptivos y, por ende, afectando el análisis de prescripción en todos aquellos casos en curso durante dicho periodo.

Para el caso particular de la solicitud de reembolso de incapacidades realizada por la **Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)** ante **ALIANSALUD EPS**, se tiene que la interrupción del término prescriptivo operó el 4 de septiembre de 2018, fecha en que se efectuó la primera solicitud de pago. En condiciones normales, el término de prescripción trienal estipulado en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social habría culminado el 4 de septiembre de 2021, generando la extinción del derecho de la ANI a reclamar judicialmente el reembolso de las incapacidades. Sin embargo, al haberse implementado la suspensión de términos por la emergencia sanitaria, resulta imperativo contabilizar el periodo de suspensión, sumándolo al término prescriptivo.

Al momento en que se suspendieron los términos el 16 de marzo de 2020, habían transcurrido 1 año, 6 meses y 12 días del periodo de prescripción. Con la reanudación de términos el 1 de julio de 2020, el plazo restante volvió a contarse hasta completarse el término trienal. Sumado el periodo de suspensión, el nuevo término de prescripción quedó fijado para el 19 de diciembre de 2021, fecha límite en la cual la acción habría prescrito.

A la luz de lo expuesto y tras un análisis minucioso del cómputo de la prescripción en el caso concreto, se advierte que la presentación de la demanda por parte de la **Agencia Nacional de Infraestructura** el 14 de enero de 2022 se efectuó fuera del término legal prescriptivo. La inclusión del periodo de suspensión de términos, establecido como medida de emergencia entre el 16 de marzo y el 1 de julio de 2020, resulta fundamental para determinar que la fecha límite para la acción, considerando dicha suspensión, se extendió únicamente hasta el 19 de diciembre de 2021. En este sentido, resulta innegable que la acción interpuesta excede el término de tres años previsto por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, quedando consolidado el fenómeno prescriptivo como una barrera insuperable que impide acceder al fondo del asunto.

La configuración de la prescripción se erige en este contexto no sólo como un cumplimiento estricto de la normativa procesal, sino como una garantía de seguridad jurídica y de equilibrio procesal que el legislador ha determinado precisamente para evitar la perpetuación indefinida de las reclamaciones. La prescripción se manifiesta, así, como un derecho sustancial de la parte demandada que debe ser reconocido en este contexto, al cumplirse con los presupuestos necesarios para su procedencia. En virtud de lo anterior, este despacho se encuentra relevado de analizar el fondo de las pretensiones de la demanda, limitando su alcance a confirmar la decisión de primera instancia, en la cual se declaró probada la excepción de prescripción, con todas las consecuencias jurídicas que de ello derivan en términos de absolución de la demandada y la imposibilidad de prosperidad de las pretensiones formuladas por la parte demandante.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandante, se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,** Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI** y en favor de la demandada.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 059.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

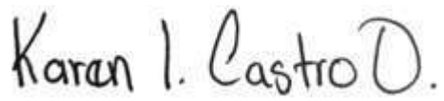
Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MARIO ARTURO OSORIO CABRERA
Parte demandada	PROTECCIÓN S.A. - PORVENIR S.A. - COLPENSIONES
Radicación	11001310502520220003201
Fecha de la decisión	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA DE TRASLADO
Acta de Discusión	068
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502520220003201

AUTO

Se reconoce personería adjetiva a la Doctora ANGY GERALDINE VILLAMIL PEÑA, quien se identifica con Cedula de Ciudadanía No. 1.015.428.360 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio portador(a) de la Tarjeta Profesional No. 322.886 del C. S. de la J., para actuar en nombre y representación de Colpensiones, de conformidad con la sustitución del poder efectuada por la Doctora Karina Vence Peláez en su condición de representante legal de la firma VENCE SALAMANCA LAWYERS GROUP S.A.S. (pdf 06 Cdno 2da insta)

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las demandadas, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 12 de septiembre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

El presente proceso ordinario laboral fue promovido por Mario Arturo Osorio Cabrera, quien actúa mediante apoderada, en contra de las entidades Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., AFP Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., y la

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones. El actor persigue que se declare la ineficacia de los actos de afiliación y traslado realizados hacia el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), y que, en consecuencia, se reconozca su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), junto con la reparación integral de los perjuicios derivados de dicha situación.

En concreto, el demandante solicita que se declare la ineficacia de los actos de afiliación suscritos con Porvenir S.A. y Protección S.A., al alegar que estas administradoras incumplieron con el deber de asesoría personalizada y adecuada, exigido por la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia aplicable. Argumenta que dichas entidades omitieron proporcionar información sustancial sobre las implicaciones financieras y jurídicas del traslado, y que, como consecuencia de esta omisión, el actor se vio inducido a realizar decisiones contrarias a sus intereses patrimoniales y previsionales. En adición, solicita que Colpensiones sea compelida a aceptar su afiliación retroactiva al RPM y a recalcular su historia laboral para efectos pensionales.

En cuanto a los hechos, el demandante alega que, al momento de su afiliación inicial al RAIS en 1995 y de su posterior traslado horizontal en 2002, no se le brindó la información clara, precisa y suficiente que exige el marco normativo vigente de la Ley 100 de 1993. Asimismo, señala que las administradoras no cumplieron con su obligación de presentar simulaciones pensionales que le permitieran tomar una decisión informada. El actor fundamenta sus pretensiones en que tales omisiones vulneraron su derecho a la seguridad social, el principio de información y su autonomía decisoria en la elección del régimen pensional.

Desde el plano jurídico, el demandante respalda su petición en los principios constitucionales de buena fe y protección a la seguridad social, así como en la doctrina jurisprudencial que reconoce la necesidad de garantizar a los afiliados una asesoría oportuna, clara y eficaz. Alega que el incumplimiento de estas obligaciones genera la ineficacia de los actos suscritos y obliga a restablecer su afiliación al RPM administrado por Colpensiones, respetando el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y la integridad del sistema pensional.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 09 de febrero del 2019 (pdf 03), luego, con providencia del 18 de agosto del 2022 (pdf 09), tuvo por contestada la demanda por COLPENSIONES y PORVENIR S.A., y no contesta por PROTECCIÓN S.A., igualmente fijó fecha para la celebración de audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. PORVENIR S.A. (PDF 05)

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., representada legalmente por el abogado Alejandro Miguel Castellanos López, contestó oportunamente la demanda interpuesta por Mario Arturo Osorio Cabrera, solicitando que se absolviera a su representada de todas las pretensiones formuladas. En su respuesta, señala que el traslado inicial del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), efectuado el 11 de septiembre de 1995 mediante el formulario N° 609828, fue producto de una decisión libre, informada y espontánea, cumpliendo con las exigencias de la Ley 100 de 1993.

La demandada sostiene que se proporcionó información clara, precisa, veraz y suficiente sobre las condiciones y ventajas del RAIS, incluyendo el derecho de retracto, y que la afiliación cumplió con los requisitos legales de la época. Asimismo, subraya que la normativa que obliga a entregar proyecciones pensionales sólo entró en vigor con el Decreto 1748 de 2014, resultando inaplicable al caso. Adicionalmente, destaca que el demandante no manifestó inconformidad durante más de 27 años, lo que refuerza la validez de su decisión de permanecer en el RAIS.

Porvenir S.A. también fundamenta su oposición en el principio de buena fe y en la presunción de autenticidad de los documentos suscritos. Argumenta que no se han probado vicios en el consentimiento ni conductas dolosas que invaliden el traslado. En respaldo, cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que refuerza la validez de los actos de relacionamiento entre el afiliado y la administradora, descartando un desequilibrio informativo y confirmando la legalidad del procedimiento.

En cuanto a las excepciones propuestas, la demandada invoca las siguientes: prescripción de las acciones relacionadas con hechos ocurridos hace más de tres décadas; inexistencia de la obligación de trasladar nuevamente al actor al Régimen de Prima Media (RPM) debido al cumplimiento de la normatividad vigente al momento de los traslados; y la excepción de buena fe exenta de culpa, considerando que todas las actuaciones de la administradora se ajustaron a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables; y compensación en caso de acceder a las pretensiones. Estas excepciones son invocadas con el fin de demostrar la ausencia de responsabilidad de Porvenir S.A. y garantizar la legalidad de las decisiones adoptadas en relación con el caso.

I.3.2. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 06)

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, representada legalmente por la abogada Jenny Carolina Vargas Fonseca, dio contestación oportuna a la demanda ordinaria laboral presentada por Mario Arturo Osorio Cabrera. En su respuesta, solicitó que se absolviera a la entidad de todas las pretensiones formuladas por el actor, argumentando el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y la inexistencia de vicios en el traslado inicial al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y su posterior permanencia en el mismo.

La demandada sostuvo que los traslados realizados por el demandante al RAIS en los años 1995 y 2002 se efectuaron en ejercicio del derecho de libre escogencia contemplado en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Alegó que dichos traslados cumplieron con los requisitos normativos vigentes, incluyendo la información adecuada sobre las características y condiciones del sistema, y que la alegada falta de información no puede ser considerada un vicio del consentimiento. Además, recalcó que el demandante no manifestó inconformidad alguna durante un lapso superior a 27 años, lo que refuerza la validez de sus decisiones.

Jurídicamente, Colpensiones fundamentó su defensa en el principio de buena fe y en la presunción de legalidad de los actos administrativos, destacando que las solicitudes del actor contrarían la normativa que regula el sistema pensional, particularmente en lo relacionado con la imposibilidad de efectuar traslados a menos de 10 años del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión. Asimismo, presentó como excepciones de fondo las siguientes: la prescripción extintiva respecto de las acciones encaminadas a discutir hechos acaecidos hace más de tres décadas; la inexistencia de obligación de reincorporación al Régimen de Prima Media (RPM), considerando que los traslados se efectuaron conforme a la normativa vigente; y la imposibilidad jurídica de acceder a las pretensiones, al no cumplirse los requisitos legales exigidos. Adicionalmente, solicitó que se declarara probada la buena fe de sus actuaciones, reafirmando que estas se ajustaron a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables, concluyendo que las pretensiones del demandante carecen de fundamento jurídico.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (pdf 37 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 12 de septiembre de 2024, profirió sentencia en el proceso ordinario laboral promovido por Mario Arturo Osorio Cabrera en contra de las administradoras de fondos de pensiones Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones. Se declaró la ineficacia de los traslados efectuados por el demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y se ordenó su reincorporación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones, sin solución de continuidad. Asimismo, se condenó a las demandadas Porvenir S.A. y Protección S.A. a trasladar a Colpensiones los valores acumulados en las cuentas del demandante, incluyendo aportes, bonos pensionales, rendimientos, intereses, gastos de administración y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, indexados y actualizados. Dispuso además que Colpensiones deberá registrar la afiliación del demandante, actualizar su historia laboral y garantizar sus derechos pensionales bajo el RPM. Igualmente, se declara no probada la excepción de prescripción propuesta por las demandadas, dado que la acción de ineficacia es imprescriptible por su naturaleza declarativa.

El despacho concluyó que las administradoras demandadas incumplieron con el deber de brindar una información adecuada, suficiente y clara al demandante al momento de los traslados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Se constató que no se presentaron simulaciones comparativas ni explicaciones

comprensibles sobre las implicaciones jurídicas y económicas de dichos traslados, contraviniendo la Ley 100 de 1993. La omisión de estos deberes configuró una afectación al consentimiento informado del demandante, lo que llevó a declarar la ineficacia de los actos de afiliación, en consonancia con los precedentes jurisprudenciales aplicables.

En el análisis probatorio, el juzgador de primera instancia concluyó que las administradoras demandadas no acreditaron haber brindado una asesoría clara, completa y comprensible sobre las características y condiciones del RAIS, tal como lo exige la normativa y la jurisprudencia aplicable. La ausencia de simulaciones comparativas y explicaciones detalladas sobre los beneficios y riesgos de los traslados constituye una omisión que afecta el consentimiento informado del demandante, lo que lleva a declarar la ineficacia de los actos de afiliación.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADAS

1.5.1 PROTECCIÓN S.A. (min 01:13:41 video pdf 37)

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., por intermedio de su apoderado, interpuso recurso parcial de apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, en lo relativo al numeral segundo de la parte resolutiva. La apelación se centra en la orden impartida que obliga a la administradora a trasladar a Colpensiones los gastos de administración de manera indexada, así como la indexación del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

La recurrente argumenta que los gastos de administración constituyen comisiones causadas durante la vigencia de la afiliación del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), las cuales fueron deducidas conforme a la normativa vigente y como contraprestación a la gestión de administración de los recursos de la cuenta de ahorro individual. Argumenta que, tales gastos no pueden ser considerados para su devolución, toda vez que ya han sido aplicados a la operación del fondo, y su devolución generaría un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones.

Finalmente, se solicita que se revoque la decisión apelada y se exima a la administradora Protección S.A. de la obligación de trasladar los gastos de administración y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, evitando su indexación, en virtud de los precedentes jurisprudenciales y la naturaleza consolidada de las obligaciones cumplidas durante el tiempo de afiliación del demandante al RAIS.

1.5.2. PORVENIR S.A. (min 01:17:40 video pdf 37)

La Administradora de Fondos de Pensiones Porvenir S.A., por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación parcial en contra del numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá. Señala la recurrente que la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU 107 de

2024, fue enfática en determinar que conceptos como las primas de seguro previsional, los gastos de administración y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima no son susceptibles de devolución ni traslado, ya que se trata de situaciones consolidadas en el tiempo que no pueden retrotraerse ante la declaración de ineficacia del traslado pensional. Así mismo, se enfatiza que dichos valores fueron aplicados conforme a las disposiciones legales vigentes durante el tiempo en que el afiliado estuvo vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

Adicionalmente, Porvenir S.A. argumenta que la normativa aplicable, particularmente el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993, establece que, en caso de traslado de régimen pensional, únicamente deben transferirse los saldos de la cuenta de ahorro individual, incluidos sus rendimientos. En este sentido, se resalta que otros conceptos, como los gastos de administración y las primas de seguro previsional, no están destinados a financiar la pensión del afiliado, por lo que su devolución o traslado configuraría un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones.

Por otro lado, se subraya que los aportes voluntarios realizados por el afiliado mientras estuvo vinculado al RAIS, los cuales pudieron generar beneficios tributarios, compra de acciones u otro tipo de inversiones, tampoco son susceptibles de devolución en virtud de su naturaleza consolidada. La Corte Constitucional ha advertido que ordenar el traslado de tales conceptos podría afectar la sostenibilidad financiera del sistema pensional, tanto en el Régimen de Prima Media como en el RAIS, lo que contraría el artículo 48 de la Constitución Nacional, que protege la estabilidad del sistema de seguridad social.

En consecuencia, se solicita respetuosamente a los honorables magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que revoquen la decisión apelada y excluyan de la condena los valores correspondientes a las primas de seguro, gastos de administración y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en atención a los precedentes jurisprudenciales y la normativa vigente.

1.5.3. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES (min 01:20:49 video pdf 37)

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, por intermedio de su apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de la oportunidad procesal pertinente, manifestando que, en el caso concreto, la declaración de ineficacia no se fundamenta en la falta de información suministrada al demandante, sino en una inconformidad del actor respecto al monto de su mesada pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Argumenta que, conforme a los precedentes jurisprudenciales aplicables, dicha inconformidad de carácter económico no es suficiente para sostener la declaratoria de ineficacia del traslado pensional.

Asimismo, señala que el supuesto desconocimiento de información por parte del demandante no puede ser atribuido a las administradoras, toda vez que la Ley 100 de 1993, como marco normativo del sistema pensional, constituye información de público conocimiento, accesible para cualquier ciudadano. En este sentido, la administradora enfatiza que no se configuró una omisión en el cumplimiento del deber de información que pueda dar lugar a la declaración de ineficacia.

Por lo anterior, Colpensiones solicita respetuosamente al Honorable Tribunal Superior de Bogotá revocar el fallo de primera instancia, argumentando que las condiciones jurídicas y fácticas del caso no justifican la declaración de ineficacia del traslado pensional ni las condenas impuestas en su contra.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, el despacho de conocimiento, con auto del 02 de octubre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

MARIO ARTURO OSORIO CABRERA (pdf 04 segunda instancia)

La apoderada del señor Mario Arturo Osorio Cabrera presentó alegatos de conclusión solicitando confirmar en su integridad la sentencia emitida por el Juzgado Veinticinco (25) Laboral del Circuito de Bogotá el 12 de septiembre de 2024. Fundamenta esta petición en la demostrada omisión de las administradoras demandadas de proporcionar la información clara, suficiente y oportuna exigida por la Ley 100 de 1993 y los precedentes jurisprudenciales, particularmente la sentencia SU 107 de 2024 de la Corte Constitucional, que refuerza la obligación de brindar asesoría integral para decisiones informadas sobre traslados pensionales.

Se destaca que las pruebas documentales y testimoniales, incluido el interrogatorio del demandante, evidenciaron que no se explicaron las características esenciales de cada régimen, las implicaciones económicas y las modalidades disponibles. Este incumplimiento, sumado a la ausencia de asesoría adecuada, vulneró los derechos a la seguridad social y al consentimiento informado del demandante, configurando la ineficacia de los actos de afiliación. Además, se señala que las administradoras no desvirtuaron su carga probatoria en el proceso, confirmando la procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado.

Finalmente, se solicita mantener las órdenes relativas a la reincorporación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), el traslado de valores acumulados y la declaración de no probada de la excepción de prescripción, reiterando que esta acción tiene carácter declarativo e imprescriptible. Se insta a la Sala a observar el principio de favorabilidad en materia laboral y pensional para garantizar la protección de los derechos del demandante.

PORVENIR S.A. (PDF 05)

La apoderada de Porvenir S.A. presentó sus alegatos de conclusión solicitando revocar parcialmente la sentencia de primera instancia, particularmente en lo referente a las condenas impuestas por el traslado de valores adicionales a los de la cuenta de ahorro individual del demandante, tales como los gastos de administración, primas de seguros previsionales y el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM). Fundó su petición en la regla de decisión establecida por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 de 2024, que dispone que tales conceptos no son susceptibles de devolución ni indexación, dado que constituyen situaciones consolidadas en el tiempo que no pueden retrotraerse.

En cuanto a la ineficacia declarada en la afiliación, argumentó que esta no se fundamentó en el desconocimiento de información relevante por parte del demandante, sino en una interpretación extensiva del deber de información, desconociendo que el formulario de afiliación suscrito constituye prueba suficiente de consentimiento libre y espontáneo. Asimismo, insistió en que el desconocimiento por parte del demandante de los efectos de su decisión no exonera su deber de indagar y cerciorarse sobre las características del régimen al que decidió trasladarse, conforme a lo dispuesto por la jurisprudencia reciente.

Finalmente, Porvenir solicitó que, de confirmarse el fallo, se limite la condena al traslado del capital acumulado en la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos y, de ser el caso, el bono pensional pagado, en estricta aplicación del literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993. Además, se enfatizó que la indexación de valores relacionados con los gastos de administración y las primas de seguros sería incompatible, dado que los rendimientos generados en la cuenta ya compensan la pérdida de valor adquisitivo.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por las partes demandadas y el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por las partes demandadas, y otorgado en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el traslado efectuado por el demandante del RPM al RAIS

resulta ineficaz, y de salir avante tal declaración se procederá a verificar cuáles son las consecuencias jurídicas que tal declaratoria de ineficacia conllevaría.

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del análisis fáctico y probatorio del presente litigio, resulta indispensable delimitar los hechos que, por su naturaleza incontrovertida, no requieren de mayor análisis, así como aquellos que, por su controversia, constituyen el núcleo de la Litis y deberán ser objeto de valoración jurídica por parte del despacho. Esta distinción no solo facilita la precisión en la conducción del proceso, sino que también permite centrar el debate en los puntos neurálgicos de la controversia, conforme al principio de economía procesal y al mandato de garantizar una resolución justa y expedita.

No son objeto de controversia los siguientes hechos: (i) la afiliación inicial del señor Mario Arturo Osorio Cabrera al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones; (ii) su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) mediante el acto de afiliación al fondo de pensiones Porvenir S.A. el 11 de septiembre de 1995; (iii) el traslado horizontal dentro del RAIS mediante afiliación al fondo de pensiones Protección S.A. el 31 de enero de 2002; (iv) el traslado horizontal de regreso al fondo de pensiones Porvenir S.A. el 18 de julio de 2003; y (v) la validez formal de los documentos correspondientes en cuanto a su suscripción y recepción por parte de las administradoras de pensiones.

Por el contrario, subsisten como aspectos objeto de controversia: (i) la verificación del cumplimiento del deber de información cualificada por parte de las administradoras demandadas, el cual implica la entrega de asesoría amplia, suficiente y oportuna respecto de los beneficios, riesgos y características inherentes a los regímenes pensionales; (ii) la existencia de vicios en el consentimiento del demandante al momento de los traslados, derivados de la presunta omisión de dicho deber de información; (iii) la procedencia de las excepciones propuestas por las demandadas, tales como la prescripción de la acción, la inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y buena fe; y (iv) la responsabilidad que podría recaer sobre las administradoras por el presunto impacto negativo en los derechos pensionales del demandante, particularmente en relación con su congrua subsistencia y la protección de su seguridad social.

Esta distinción preliminar permite encauzar el análisis hacia la determinación de si el traslado al RAIS estuvo acompañado de las garantías mínimas legales y constitucionales, así como si concurren los presupuestos jurídicos para declarar su ineficacia y, en consecuencia, restablecer la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Sobre el deber de información al surtirse el traslado de régimen pensional

Sentado lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con

Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021, SL 509 de 2024 y SL 2999 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 "*…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…"*, lo cual hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, pues frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

> *"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a*

él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas.

Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.

(…)

También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.

También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

De este modo, habida cuenta de que el accionante, conforme a la solicitud de vinculación No. 609828 del 11 de septiembre de 1995 (archivo 05, folio 98) , efectuó su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en septiembre de 1995, a través del fondo de pensiones Porvenir S.A., que posteriormente, efectuó traslado horizontal a la AFP Santander, hoy Protección S.A. mediante la solicitud de vinculación No. 0716389 del 31 de enero del 2001 (archivo 20, folio 33), y que finalmente, se trasladó en retorno a la AFP Porvenir S.A. mediante la solicitud de vinculación o traslado No. 01884457 del 18 de julio del 2003 (archivo 05, folio 99), resulta pertinente atender tanto los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL 2999 de 2024) como los desarrollos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024 la carga probatoria recae sobre la administradora de fondos de pensiones para demostrar que el traslado de régimen fue adoptado por el afiliado de manera libre y voluntaria, habiéndole proporcionado información suficiente, veraz y comprensible acerca de las características, condiciones de acceso, implicaciones y riesgos inherentes a cada uno de los regímenes pensionales disponibles.

Sobre la carga de la prueba – frente al cumplimiento del deber de información

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar en este caso que a la demandante al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de la AFP demandada, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Empero dicha postura, fue modulada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS..."*

Así pues, al sopesarse los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Corte Constitucional en la decisión previamente referida, se advierte que, en el caso sub examine, se arribaría a la misma conclusión a la que llegó el a quo, esto es, la

procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

Caso concreto

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala concluye que no existe en el plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento cabal del deber de información por parte de la AFP Porvenir S.A. al momento del traslado del demandante del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), ni por parte de la AFP Protección S.A. en el momento del traslado horizontal, pues los formularios aportados por las demandadas, no son tan siquiera prueba somera del cumplimiento al deber de información que le acaecía.

Aunado a lo antes expuesto, resulta improcedente la tesis esgrimida por la parte demandada, según la cual la permanencia del demandante en el RAIS convalida el traslado inicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en las sentencias SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, ha reiterado que los traslados horizontales entre AFP del mismo régimen no subsanan la falta de información en el momento del traslado inicial desde el RPM. El análisis central en estos litigios radica en verificar si el afiliado recibió una información adecuada que le permitiera tomar una decisión consciente y fundamentada, y no en evaluar su permanencia posterior en el RAIS ni los deberes adquiridos como afiliado (CSJ SL1055-2022).

De otro lado, debe destacarse que el argumento de la AFP demandada, relativo a que la sola firma del formulario de afiliación implica una manifestación libre y voluntaria de voluntad por parte del afiliado, es insuficiente para cumplir con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.). En este contexto, incumbía a Porvenir S.A. y Protección S.A. demostrar que el asesor de servicios responsable de la afiliación cumplió con el deber legal de brindar una asesoría integral, proporcionando al afiliado una información comprensible y exhaustiva. La falta de acreditación de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que el traslado no se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables atrás vertidos.

En síntesis, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T. y S.S.), que faculta al juzgador para formar libremente su convicción mediante una apreciación integral y crítica del acervo probatorio, esta Sala concluye que la decisión del demandante de trasladarse al RAIS adolece de los elementos de validez derivados de una elección consciente, autónoma e informada. No se encuentra acreditado que el asesor responsable del traslado hubiera desplegado una asesoría adecuada que incluyera una exposición clara y pormenorizada sobre las repercusiones del cambio de régimen, tales como los riesgos inherentes al RAIS, la necesidad de realizar cotizaciones adicionales, las consecuencias de no cumplir con el capital mínimo requerido para la pensión de vejez, la garantía de la pensión mínima, el régimen aplicable a la devolución de saldos, así como las diversas modalidades pensionales disponibles en el sistema. La omisión de estos aspectos esenciales evidencia un incumplimiento sustancial del deber de

información, viciando así la decisión adoptada y afectando el derecho fundamental del afiliado a contar con una orientación precisa y completa que le permitiera sopesar los riesgos y beneficios de manera adecuada, conforme a los estándares de diligencia exigidos en el marco de la seguridad social integral.

En lo relativo a los efectos jurídicos derivados de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, resulta pertinente acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-107 de 2024, en la cual se señaló:

> "*...En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)*
>
> *(...)*
>
> *y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 327)."*

La decisión en cuestión cabe señalar, se extiende de manera vinculante a todas las demandas que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria laboral, según lo establece el ordinal octavo, razón por la cual esta Sala acoge dicho pronunciamiento en su integridad. No obstante, se precisa que se mantendrá la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo que respecta al deber originario de las AFP de proporcionar asesoría integral y adecuada a sus potenciales afiliados, cuya omisión inevitablemente acarrea la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen.

Finalmente, en relación con el punto de apelación referido a los aportes voluntarios efectuados por el afiliado mientras estuvo vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), se advierte que la sentencia de primera instancia no formuló pronunciamiento expreso sobre su restitución o traslado. No obstante, resulta necesario precisar que, conforme a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 2.2.2.3.1 del Decreto 1833 de 2016, en los casos en que un afiliado se traslada del RAIS al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), las cotizaciones voluntarias cuyo retiro no se haya efectuado al momento del traslado deben ser devueltas al afiliado, dado que en el RPM la financiación de las prestaciones no se sustenta en este tipo de aportes. Así las cosas, en el marco de la declaratoria de ineficacia de la afiliación de la parte demandante al RAIS, tales sumas no pueden ser objeto de traslado a Colpensiones, sino que, en su lugar, deben ser restituidas al afiliado, en la medida en que no forman parte del acervo financiero destinado a la consolidación del derecho pensional bajo el régimen de reparto. En consecuencia, se reitera que los aportes voluntarios, los cuales pudieron haber sido realizados con la

finalidad de incrementar el capital disponible para el financiamiento de la pensión obligatoria o con el objeto de acceder a los beneficios tributarios previstos en la normativa aplicable, constituyen recursos de libre disposición del afiliado y, por tanto, no están llamados a ser integrados al sistema de financiamiento del RPM, sino a ser devueltos conforme al marco normativo vigente.

Con fundamento en el precedente constitucional citado, esta Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de acoger los recursos de apelación presentados por Porvenir S.A. y Protección S.A. En tal virtud, se dispone que no resulta viable ordenar el traslado del porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima, ni los gastos de administración, tal como lo señala la sentencia SU-107 de 2024, limitando los efectos de la declaratoria de ineficacia al traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional, si este ha sido efectivamente redimido.

Análisis de las Excepciones Propuestas por Colpensiones

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se concluye que estas carecen de soporte jurídico para prosperar dentro del contexto del presente litigio. Respecto del cobro de lo no debido, debe señalarse que las consecuencias inherentes a la declaratoria de ineficacia del traslado, así como la afiliación originaria del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), imponen a Colpensiones la obligación de readmitirlo como afiliado. Este deber encuentra sustento en la normativa vigente y en los principios rectores de solidaridad y eficiencia que gobiernan el sistema de seguridad social integral. Aunque Colpensiones no tuvo participación directa en el acto jurídico de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), su posición como administrador del régimen inicial establece un vínculo jurídico ineludible que la obliga a asumir las consecuencias legales del restablecimiento del derecho pensional del demandante.
En lo concerniente a la excepción de inexistencia del derecho resulta improcedente al haberse declarado la ineficacia del traslado de régimen pensional y ya que las responsabilidades de Colpensiones derivan directamente de su rol en la administración del RPM, así como de los efectos legales que emanan de la afiliación originaria del demandante. Asimismo, el principio de buena fe, si bien invocado por Colpensiones, no opera como un mecanismo eximente de las responsabilidades inherentes a su condición de entidad garante del derecho fundamental a la seguridad social.

En lo que respecta a la excepción de prescripción planteada, se concluye que este medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, toda vez que el traslado de régimen pensional afecta derechos inherentes al ser humano, los cuales, por su naturaleza fundamental, son imprescriptibles. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en pronunciamientos como las sentencias SL 3937-2018, SL 1688-2019 y SL 1949-2021, al reconocer que la acción para solicitar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen no puede estar sujeta a términos de prescripción, dado que no se trata de derechos de carácter patrimonial, sino de garantías esenciales vinculadas a la dignidad humana y a la seguridad social.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala procederá a la modificación parcial de la sentencia de primera instancia, confirmando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante. Tal determinación se adopta en observancia estricta del marco normativo y jurisprudencial vigente, atendiendo particularmente al precedente establecido en la sentencia SU-107 de 2024, cuyo alcance y obligatoriedad fueron analizados en el desarrollo del presente litigio.

Así las cosas, se declaran resueltas las apelaciones interpuestas por las partes demandadas, estimando los argumentos de los apelantes Porvenir S.A. y Protección S.A. en lo concerniente a la improcedencia del traslado del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás conceptos no contemplados dentro de los límites señalados por el precedente constitucional.

Con lo anterior, se da por agotado el análisis de las cuestiones litigiosas, configurándose la ejecutoria de lo resuelto en los términos que se han indicado, en estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales que subyacen en el régimen de seguridad social integral.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por COLPENSIONES, se condenará en costas de segunda instancia a favor de la parte demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia proferida el día 12 de septiembre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, el cual quedará así:

> ***SEGUNDO. CONDENAR*** *a las demandadas* ***Administradoras de Fondos de Pensiones PORVENIR S.A.*** *y* ***Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A****. a trasladar con dirección a* ***COLPENSIONES*** *los valores obtenidos en virtud de la vinculación del señor* ***MARIO ARTURO OSORIO CABRERA*** *ya identificado, como los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado con todos los rendimientos, frutos e intereses que se hubieren causado de la cuenta del demandante. Así mismo,* ***ORDENAR*** *a* ***COLPENSIONES*** *a recibirlo como su afiliado, sin solución de continuidad hasta el día de hoy por lo motivado en precedencia.*

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia proferida el día 12 de septiembre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veinticinco Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

TERCERO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES** y a favor de la demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 068.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

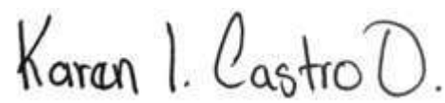
Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo mensual legal vigente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	FRANCISCO ANDRES GÓMEZ MOLANO
Parte demandada	OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S. BIC.
Radicación	11001310502820200051901
Fecha de la decisión	04 DE DICIEMBRE DE 2023
Motivo	APELACION
Tema	DESPIDO INJUSTO ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502820200051901
Acta de discusión	038

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el día 04 de diciembre de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 04 primera instancia)

El señor FRANCISCO ANDRÉS GÓMEZ MOLANO, presentó demanda ordinaria laboral contra OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A. pretendiendo que se declarara la protección de su derecho fundamental al trabajo, en el marco de su estabilidad laboral reforzada debido a su discapacidad, asimismo solicitó que se declarara que la OUTSOURCING tenía la capacidad operativa para mantenerlo en su planta de personal, y que la terminación de su contrato era ilegal al no contar con la autorización del ministerio del trabajo. En consecuencia, solicitó que se ordenara su reintegro al puesto de trabajo o a uno compatible con su condición, en iguales o mejores condiciones laborales, junto al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir y la condena en costas a la demandada.

Subsidiariamente, solicitó que se reconociera que existió una relación laboral entre las partes, extendida hasta el 6 de noviembre de 2020, y que se ordenara el pago de una indemnización por terminación unilateral sin justa causa.

Para sustentar sus pedimentos, sostuvo que existió una relación laboral con la empresa demandada desde el 28 de enero de 2019 hasta el 6 de noviembre de 2020, bajo sucesivos contratos a término fijo y un contrato de obra o labor.

Durante este periodo, el demandante prestó servicios para el Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de un contrato comercial entre la demandada OUTSOURCING y el Ministerio.

Expuso que, durante la relación laboral comenzó a experimentar un deterioro en su estado de salud, que el 31 de marzo de 2020, presentó fatiga y visión borrosa en su ojo derecho, síntomas que se intensificaron hasta que, el 13 de abril de 2020, fue diagnosticado con trastornos del nervio óptico, no clasificados en otra parte (HH470), lo que afectó severamente su visión en ese ojo, ocasionando una incapacidad médica que expone fue informada al empleador, quien conocía plenamente su situación de salud (fols. 65 – 73).

Afirmó que, a pesar de su situación, la OUTSOURCING S.A. decidió dar por terminada la relación laboral el 11 de mayo de 2020, bajo el argumento de la culminación de la obra o labor contratada (fol. 36). Ante esta decisión, el actor interpuso una acción de Tutela que resultó en un fallo favorable, que ordenó su reintegro. En cumplimiento de este fallo, el demandante fue reincorporado a su puesto de trabajo el 1º de julio de 2020 (fols 83-103).

Sin embargo; se duele que el 6 de noviembre de 2020, la demandada nuevamente le comunicó la terminación del contrato, aduciendo que el periodo de protección transitorio ordenado en el fallo de tutela había expirado (fol. 35), sin contar con la autorización previa del Ministerio del Trabajo para despedir al trabajador, lo cual, según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, es un requisito indispensable cuando se trata de trabajadores en condición de discapacidad o debilidad manifiesta.

Finalmente, argumentó que el despido del demandante había sido discriminatorio debido a su discapacidad, lo cual violaba el derecho a la estabilidad laboral reforzada consagrado por la Corte Constitucional en diversas Sentencias.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Auto del 03 de febrero de 2022 admitió la demanda interpuesta y corrió traslado de la misma (pdf 07), luego, con providencia del 26 de marzo de 2023, tuvo por contestada la demanda por parte de OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. (pdf 13).

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. CONTESTACIÓN OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. (PDF 12)

En su contestación la parte demandada solicitó que se negaran todas las pretensiones del demandante, exponiendo que la terminación del contrato había sido legal y que la empresa no había vulnerado ningún derecho del trabajador, ya que el despido se basó en la finalización de la obra o labor contratada, proponiendo la excepción de inexistencia de la obligación, argumentando que no se acreditaban las condiciones legales ni jurisprudenciales para que el demandante pudiera beneficiarse del fuero de salud, y que, por lo tanto, no procedía el reintegro ni el pago de las prestaciones sociales solicitadas. Asimismo, planteó la de prescripción, señalando que algunas de las pretensiones del demandante estaban prescritas conforme a lo dispuesto en el Código Procesal del Trabajo, dado que los periodos reclamados ya habían caducado.

De igual manera, presentó excepción de pago, alegando que la empresa ya había cumplido con todas las obligaciones económicas correspondientes, incluyendo salarios y prestaciones, lo cual dejaba sin fundamento la reclamación del demandante. y finalmente planteó la excepción de compensación, solicitando que, en caso de que el juez considerara procedente alguna condena en su contra, se compensaran los montos ya pagados al demandante, incluidos los derivados de su reintegro temporal.

Para fundamentar sus medios exceptivos, la demandada aclaró que el vínculo laboral entre las partes había finalizado en dos ocasiones, la primera, el 11 de mayo de 2020, debido a la culminación de la obra o labor contratada, y la segunda, el 6 de noviembre de 2020, luego de que la empresa cumpliera con una orden de reintegro temporal emitida por un Juez de Tutela.

Además, arguyó que la terminación inicial del contrato fue completamente legal y se basó en el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, que permite la finalización del contrato cuando la obra o labor para la cual se contrató al trabajador ha concluido, explicando que el contrato del demandante estaba ligado a un proyecto específico de la Cancillería, cuya finalización justificó la terminación del vínculo laboral. En este sentido, la defensa sostuvo que el demandante había suscrito de manera voluntaria las prórrogas y modificaciones del contrato, que incluían esta condición, por lo que no había razones para considerar que el despido fue injustificado.

En cuanto a la presunta vulneración del derecho al trabajo debido al estado de salud del actor, la empresa rechazó tajantemente esta acusación, puesto que el demandante no había informado a la empresa sobre ninguna enfermedad durante la vigencia del contrato, salvo por una incapacidad de dos días en abril de 2020, la cual fue superada sin generar recomendaciones ni restricciones médicas, y subrayó que la única vez que el demandante notificó a la empresa sobre su condición médica fue después de la terminación del contrato, lo que llevó a la interposición de una acción de Tutela que resultó en un reintegro temporal, que concedió al demandante un amparo transitorio de cuatro meses, tiempo durante el cual la empresa acató la orden y reincorporó al trabajador.

En su contestación, también argumentó que el demandante no cumplía con los requisitos legales y jurisprudenciales para ser beneficiario del deprecado fuero. Según la empresa, la jurisprudencia ha sido clara en que para que opere la estabilidad

reforzada, el trabajador debe estar incapacitado o tener una pérdida de capacidad laboral superior al 15%, lo cual no aplicaba en este caso.

Finalmente expuso que, conforme a las evidencias aportadas por el mismo demandante, las recomendaciones médicas recibidas después del reintegro no impedían el desarrollo normal de sus funciones laborales y que dichas recomendaciones, de hecho, solo se mantuvieron vigentes por 60 días, lo que indicaba que no había una incapacidad permanente ni una afectación grave de salud.

De igual manera, se argumentó que la patología del demandante, relacionada con su vista, no tenía ninguna conexión con las labores desempeñadas en la empresa y que no se había demostrado que esta afectara su capacidad laboral de manera significativa.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 21 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, la operadora del Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá resolvió absolver a la sociedad Outsourcing Servicios Informáticos S.A.S. BIC de todas las pretensiones formuladas por el demandante, declarando probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por la parte demandada.

La Jueza recalcó que el contrato de trabajo estaba pactado por obra o labor, y que la finalización de este se debió a la culminación del proyecto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), conforme a la orden de compra 34274, lo que constituía una causa objetiva de terminación del contrato según el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.

Para sustentar su decisión, la *A Quo* revisó las pruebas aportadas, entre ellas el contrato de trabajo, las prórrogas suscritas por las partes, la orden de compra del Ministerio de Relaciones Exteriores, los informes de actividades, y los testimonios presentados por la demandada, que confirmaron que el contrato se dio por terminado por la culminación de la obra contratada. Asimismo, tuvo en cuenta que el demandante había recibido atención médica en abril de 2020 por un problema visual, sin embargo; no se acreditó que su empleador hubiera conocido de una situación de discapacidad que generara una barrera laboral o que impidiera el desempeño de sus funciones.

Así también consideró la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en relación con la estabilidad laboral reforzada, y concluyó que no se cumplían los requisitos para aplicar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, pues no se acreditó una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial de mediano o largo plazo, ni barreras que afectaran al demandante en su entorno laboral. Asimismo, resaltó que el despido se fundamentó en una causa objetiva, lo que exoneraba a la empresa de solicitar autorización ante el Ministerio de Trabajo para la terminación del contrato.

Finalmente, ante la falta de pruebas que demostraran que el despido fue discriminatorio o que el demandante gozara de una estabilidad laboral reforzada, la jueza decidió negar las pretensiones principales, como el reintegro, los salarios dejados de percibir y la indemnización, así como las subsidiarias relacionadas con el despido sin justa causa.

APELACIÓN PARTE DEMANDANTE

El apoderado de la parte demandante, interpuso recurso de apelación, solicitando que se revocara la sentencia de primera instancia y se accediera a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que su representado demostró durante el proceso que se encontraba en una situación de debilidad manifiesta, lo que, a la luz del artículo 53 de la Constitución, le otorgaba una protección especial por parte del Estado. Afirmó que la historia clínica presentada evidenciaba que el demandante sufría una patología que afectó su capacidad para ejecutar el contrato laboral, específicamente un trastorno del nervio óptico, el cual surgió durante la ejecución del contrato.

Asimismo, señaló que el Juzgado de primera instancia no otorgó el valor probatorio adecuado a las pruebas documentales y testimoniales presentadas, las cuales demostraban que la empresa demandada tenía conocimiento de la condición médica del demandante. Afirmó que el demandante informó continuamente a su jefe inmediato sobre su situación de salud, lo que evidenciaba que la empresa estaba al tanto de su patología.

Sostuvo que, debido a la vulneración de los derechos laborales de su representado, era necesario aplicar una protección constitucional que garantizara la estabilidad laboral reforzada, especialmente en casos de debilidad manifiesta. Argumentó que, aun cuando el empleador alegara una justa causa o una causa objetiva para el despido, la jurisprudencia ha extendido la protección de estabilidad laboral reforzada más allá de los contratos laborales, incluso a los contratos civiles de prestación de servicios.

Por ello, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y que se concedieran las pretensiones principales y subsidiarias de la demanda, insistiendo en la necesidad de una protección constitucional estricta para su representado.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, por lo que el despacho de conocimiento, con auto de 04 de marzo de 2024 (pdf 03), dispuso admitir los recursos presentados, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión mediante providencia del 16 de abril de 2024.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se refirieron al respecto así:

DEMANDANTE FRANCISCO ANDRES GÓMEZ MOLANO (archivo 06)

En sus alegatos de conclusión, argumentó que el demandante tenía derecho a ser reintegrado a su puesto de trabajo o a otro de iguales o mejores condiciones, junto con el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 6 de noviembre de 2020. Argumentó que la terminación del contrato fue ineficaz al no contar con la autorización del Ministerio de Trabajo, tal como exige la Ley 361 de 1997 para personas en situación de debilidad manifiesta por razones de salud.

Explicó que el demandante, quien trabajaba para la demandada, prestando servicios al Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a su empleador sobre sus problemas de salud visual en abril de 2020. Sin embargo; la empresa terminó su contrato en mayo de 2020 alegando la finalización de la obra contratada. Tras una acción de tutela, el demandante fue reintegrado temporalmente, pero el 6 de noviembre de 2020 fue nuevamente despedido sin la autorización ministerial requerida.

Citó Jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, argumentando que, al estar el demandante en una situación de debilidad manifiesta, gozaba de estabilidad laboral reforzada, y el despido sin autorización del Ministerio debía ser considerado ineficaz. Por ello, solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y el reconocimiento de todas las pretensiones, incluyendo el reintegro, los salarios, prestaciones y la indemnización por despido.

DEMANDADA OUTSOURCING SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S. (archivo 07)

En su escrito de alegatos la parte demandada, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia y absolver a la empresa demandada de todas las pretensiones del demandante, argumentando que no se daban las condiciones para reconocer la estabilidad laboral reforzada por un fuero de salud, ya que el demandante no presentó pruebas de una discapacidad o pérdida de capacidad laboral que justificara tal protección.

Destacó que, aun cuando el demandante sufrió problemas de visión en abril de 2020, estos no generaron incapacidades prolongadas ni recomendaciones médicas que afectaran su capacidad para trabajar. Las únicas incapacidades fueron de dos días, y no se demostró que el empleador tuviera conocimiento de alguna condición de salud relevante para el 11 de mayo de 2020, cuando se dio por terminado el contrato debido a la culminación de la obra contratada, conforme al artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.

Además, explicó que la terminación del contrato en noviembre de 2020 fue consecuencia del vencimiento de la protección temporal otorgada por una acción de tutela. El reintegro del demandante fue concedido por cuatro meses como amparo transitorio, y una vez vencido ese plazo, la empresa actuó conforme a la orden

judicial, lo que exoneraba a la demandada de tramitar una autorización adicional para el despido.

Finalmente argumentó que no existían pruebas de que el demandante estuviera en una situación de discapacidad que justificara una protección de estabilidad laboral reforzada, y que la terminación del contrato fue por causas objetivas, sin relación con una condición de salud.

2.2. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Cuenta el demandante con garantía de estabilidad laboral reforzada por su estado de salud al momento de finalizar su contrato laboral? Y en caso afirmativo ¿resulta procedente ordenar el reintegro del demandante junto a las demás condenas solicitadas?

SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Luego de lo anterior, resulta fácil concluir que no es objeto de discusión que entre las partes en contienda se suscribió un contrato a término fijo desde el 28 de enero hasta el 27 de abril de 2019 (fols 37-45 pdf 04), mismo que se prorrogó de manera sucesiva hasta el 27 de enero de 2020, y que fue objeto de adición o modificación a partir del 28 de enero de 2020 en cuanto al termino de duración, pasando a ser por obra o labor contratada, mientras exista el contrato de prestación de servicios del proyecto *cancillería* (fol 83 pdf 12); tampoco es discutido que el 11 de mayo de 2020 le fue notificado al actor la terminación de su contrato de trabajo por haber finalizado el contrato de prestación de servicios con la cancillería ese mismo día (fol 36 pdf 04); de igual manera, se tiene demostrado que por una acción de Tutela, el demandante fue reintegrado a la empresa demandada desde el 01 de julio de 2020 por el termino de 4 meses (fols. 83-103 pdf 04); finalmente, se tiene por probado que, mediante comunicación del 06 de noviembre de 2020, se informó al demandante sobre la terminación del contrato de trabajo a partir de la antedicha fecha, por haberse cumplido el termino ordenado por la Sentencia de Tutela.

DE LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA EN PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

Inicialmente, resulta menester traer a colación el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, mismo que tiene como propósito amparar a las personas en condición de discapacidad para evitar que aquellas sean despedidas o su contrato sea terminado por razón de tal circunstancia; asimismo, prevé, como consecuencia del acto

discriminatorio, el reintegro y el pago de la sanción de 180 días de salario, sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

Por su parte, el criterio que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia tenía respecto a la protección contenida en la norma anterior, procedía si se acreditaba una discapacidad por lo menos moderada, esto es, dentro de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 15%, y no cualquier patología o incapacidad médica, y así lo explicó en sentencia SL10538-2016, en la que fijó el alcance de la protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la cual fue reiterada, entre otras, en las decisiones SL17945-2017, SL24079-2017, SL471-2018, SL685-2018 y SL3982-2018.

Sin embargo, en pronunciamiento reciente, la H. Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, rectificó la mentada postura, exponiendo en Sentencia SL 1152 de 2023, que:

"Por ello, la Sala reexamina la composición del bloque de constitucionalidad con relación a los derechos de las personas en situación de discapacidad y concluye que la mencionada convención es vinculante no solo para el entendimiento del concepto de discapacidad, sino de la protección de estabilidad contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997; o en otros términos, que constituye el parámetro para interpretar los derechos humanos de las personas con discapacidad contenidos en la Constitución, especialmente, en lo que concierne a las medidas de integración social en igualdad de oportunidades de las demás personas.

(…)

Realizado el estudio del ordenamiento jurídico vigente, la Corte debe concluir que la identificación de la discapacidad a partir de los porcentajes previstos en el artículo 7. º del Decreto 2463 de 2001 es compatible para todos aquellos casos ocurridos antes de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el 10 de junio de 2011 y, de la ley estatutaria 1618 de 2013.

(…)

En suma, la protección de estabilidad laboral reforzada que refiere el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, a la luz de la convención analizada, se determina conforme a los siguientes parámetros objetivos:

a) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo. Entiéndase por deficiencia, conforme a la CIF, «los problemas en las funciones o estructurales corporales tales como una desviación significativa o una pérdida»;

b) La existencia de una barrera para el trabajador de tipo actitudinal, social, cultural o económico, entre otras, que, al interactuar con el entorno laboral, le impiden ejercer efectivamente su labor en condiciones de igualdad con los demás;

c) Que estos elementos sean conocidos por el empleador al momento del despido, a menos que sean notorios para el caso.

(…)

Así, a juicio de la Sala, sin que esto implique un estándar probatorio, sí es conveniente anotar que al momento de evaluar la situación de discapacidad que conlleva a la protección de estabilidad laboral reforzada, es necesario establecer, por lo menos, tres aspectos:

(i) La existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, una limitación o discapacidad de mediano o largo plazo - factor humano-;

(ii) El análisis del cargo, sus funciones, requerimientos, exigencias, el entorno laboral y actitudinal específico -factor contextual-; y

(iii) La contrastación e interacción entre estos dos factores -interacción de la deficiencia o limitación con el entorno laboral-.

Si del análisis referido se concluye que el trabajador está en situación de discapacidad y la terminación del vínculo laboral es por esta razón, el despido es discriminatorio y, es preciso declarar

su ineficacia por lo que procede el reintegro con el pago de salarios y demás emolumentos respectivos, junto con la orden de los ajustes razonables que se requieran y la indemnización contemplada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997.
(…)
Por último, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en su función de unificación de la jurisprudencia, se aparta de las interpretaciones que consideran que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 aplica para personas que sufren contingencias o alteraciones momentáneas de salud o que padecen patologías temporales, transitorias o de corta duración toda vez que, conforme se explicó, la Convención y la ley estatutaria previeron tal protección únicamente para aquellas deficiencias de mediano y largo plazo que al interactuar con barreras de tipo laboral impiden su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Aquí, vale precisar que las diferentes afectaciones de salud per se no son una discapacidad, pues solo podrían valorarse para efectos de dicha garantía si se cumplen las mencionadas características."

Es así que, en síntesis, y de acuerdo a la actual posición de nuestro órgano de cierre, la deprecada garantía procede para las personas en situación de discapacidad física, psíquica o sensorial que padezcan una limitación a mediano o largo plazo, que afecte en manera significativa su capacidad para desempeñarse en sus labores en condición de igualdad respecto a las demás personas, y que esta situación sea conocida por el empleador.

De lo anterior se extrae que, no por la sola circunstancia de que el trabajador sufra alguna enfermedad o haya presentado incapacidades médicas, o que su padecimiento lo afecte a corto plazo, no lo hace merecedor de la garantía de estabilidad reforzada.

Con todo lo antes mencionado, y descendiendo a nuestro caso concreto es preciso advertir inicialmente que, para esta Sala, la acción objeto de estudio, recae sobre la comunicación de la terminación del contrato de trabajo del 11 de mayo de 2020 (fol 36 pdf 04), y no sobre la finalización contractual comunicada el 06 de noviembre de 2020 (fol 35 pdf 04), puesto que esta última se produjo a causa de una orden judicial de Tutela, que protegió transitoriamente (por 4 meses) los derechos fundamentales del demandante teniendo en cuenta que en su momento no le era posible acceder a la jurisdicción laboral, debido al cierre determinado por la pandemia del Covid-19 y que al ser despedido no se tuvo en cuenta su situación médica.

Claro lo anterior, este Tribunal encuentra inicialmente, al revisar el acervo documental probatorio, que el actor no cuenta con una calificación de pérdida de capacidad laboral, que, si bien no es un requerimiento para que se entienda sujeto de protección, para esta Sala resulta necesario ponerlo de presente.

De igual manera, debe resaltarse que no se encuentra medio de convicción diferente que dé cuenta de una discapacidad para la fecha del despido, pues para el presente caso no basta con la incapacidad presentada y los diagnósticos médicos de los que el actor fue sujeto tales como *trastorno del nervio óptico no clasificados en otra parte (h470), derecho (a)* (fols. 65-73 pdf 04), pues, aunado a que la primera es del 13 de abril de 2020 y por solo 2 días, y las valoraciones son posteriores al despido, de ellos no se puede extraer que sus padecimientos hayan generado alguna incapacidad para los días en que fue finiquitada la relación laboral, o que lo aquejara alguna enfermedad de mediano o largo plazo que le impidiera el desempeño de sus funciones en

condiciones de igualdad, pues como se evidencia la incapacidad generada el 13 de abril, únicamente fue por 2 días y aún después de la finalización contractual que aquí se estudia ilegal, el actor pudo continuar sin dificultad su labor, en razón a la Tutela interpuesta.

Sin embargo; aunque la afectación antes referida, en su ojo derecho, bien podría ser considerada para efectos de determinar la existencia del denominado fuero de salud, lo cierto es que se desconoce si el mismo generó en el actor una limitación a mediano o largo plazo, ni tampoco si esta afecta en manera significativa su capacidad para desempeñarse en sus labores en condición de igualdad respecto de las demás personas.

Asimismo, considera esta Corporación, que no pueden ser objeto de valoración las órdenes médicas de procedimientos remitidas al actor, pues estas son posteriores a la terminación del contrato (fols 76 – 82).

Por otra parte, con el fin de verificar la causal objetiva de terminación del contrato de trabajo del actor, que afirmó la demandada fue por la terminación de la obra o labor contratada, resulta necesario analizar el contrato de trabajo suscrito entre las partes, para deducir que, en efecto se efectuó bajo la mentada modalidad temporal, como se logra verificar con el otro si suscrito el 28 de enero de 2020 (fol. 83 pdf 12), mismo que refiere que tendrá duración hasta tanto finalice el contrato de prestación de servicios con la cancillería, que, como se puede ver en el informe de actividades de la orden de compra 34274, finalizó el 11 de mayo de 2020 (fols. 85-96 pdf 12); por lo cual, resulta procedente concluir que dicho contrato finalizó sin miras a la situación de salud del trabajador.

Lo anterior cobra peso al analizar el interrogatorio de parte del demandante, pues resulta importante extraer que este afirmó que se encontraba vinculado mediante contrato de obra o labor relacionado con la campaña de la Cancillería, que firmó el paz y salvo al momento de la terminación de su contrato sin hacer anotaciones, que solo tuvo dos días de incapacidad en abril de 2020, que después continuó trabajando normalmente y que no se le generaron restricciones médicas relevantes, que en la actualidad trabaja en empleos temporales sin continuidad, proporcionados por un amigo.

En igual sentido, se confirmó lo antedicho con el testimonio de Diana Carolina Flores Díaz quien declaró que conocía al demandante pues trabajaron juntos en la campaña de la Cancillería para la empresa Outsourcing entre 2018 y abril de 2020, fecha en la cual finalizó la orden de compra, indicando que ambos tenían contratos de obra o labor. La testigo afirmó que el actor notificó su problema de salud a la compañía, aunque no pudo confirmar si esto afectó su trabajo, ya que trabajaban de manera remota debido a la pandemia. Además, señaló que ella notificó la terminación de los contratos a unas 30 personas por la finalización del proyecto cancillería.

Luego, se concluye lo mismo, al revisar el dicho del testigo Juan José Melo Becerra, quien afirmó conoció al demandante en 2018 mientras trabajaban juntos en Outsourcing en la Cancillería, aduciendo que Francisco era coordinador del área del

call center (SIAC) y que Juan coordinaba el área de apostilla. Ambos trabajaron hasta 2020, cuando finalizó el contrato.

Finalmente, el testigo Crisanto Orlando Torres Pavón expuso que conoció al actor mientras trabajaban en la Cancillería, donde Francisco era supervisor en el área de SIAC a través de Outsourcing. También mencionó que Francisco le comentó sobre problemas de visión y dolores en los ojos, y le aconsejó seguir el protocolo médico con la Outsourcing. Adujo que no conocía detalles específicos de su condición de salud, mencionando que Francisco continuaba trabajando cuando podía y lo describió como un empleado dedicado y profesional. Confirmó que no tenía conocimiento de documentos relacionados con la enfermedad ni de permisos solicitados por Outsourcing para finalizar el contrato.

Por otro lado, se estudiaron los testimonios de los deponentes de la parte demandada, como la declaración del señor Jairo Prieto Rodríguez, quien expuso ser director de operaciones en la Outsourcing, y confirmó que el actor trabajó con la empresa, en una de las campañas en la de la Cancillería, que finalizó en abril de 2020 debido a la terminación de la orden de compra. Explicó que el demandante pidió permiso para una cita médica, pero no recordaba que hubiese solicitado otros permisos frecuentemente.

Finalmente se revisó el testimonio del señor Juan José Pinzón, quien ejerció el cargo de director de personal en la Outsourcing, relató que el actor trabajó como supervisor en la cuenta de la Cancillería entre enero de 2019 y mayo de 2020, y su contrato terminó cuando finalizó la obra. Informó que Francisco tuvo una incapacidad breve en 2020, pero no presentó recomendaciones médicas adicionales.

Por todo lo anterior, la Sala concluye que las razones de la finalización del contrato de trabajo entre el demandante y la demandada, se produjo por razones objetivas, sin que medie prueba alguna que logre deducir lo contrario, pues como se expuso, la terminación fue producto del finiquito del contrato de prestación de servicios entre la aquí convocada y la cancillería, como lo afirmaron todos los testigos, tanto del demandante como de la demandada, y que no fue solo al demandante a quien se le terminó su relación laboral a causa de este hecho, sino a otros trabajadores más.

Asimismo, no logra extraerse, ni con las documentales obrantes, ni con los testimonios allegados, que la empresa haya tenido conocimiento de quebrantos de salud del actor, o afectación alguna, al momento de finalizar su contrato y que hayan generado disminución o capacidad en sus labores.

Ahora bien, en este punto resulta necesario aclarar, que la Sala no desconoce las Sentencias SU049-2017, SU087-2022 y SU061-2023 en las cuales la Corte Constitucional reiteró su criterio, según el cual, el derecho a la estabilidad ocupacional reforzada no deriva exclusivamente de la Ley 361 de 1997, esto es para personas con una discapacidad igual o superior a la moderada, sino que es predicable de todas aquellas que tengan una afectación de salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares. Puesto que tal criterio guarda relación con el sostenido por nuestro órgano de cierre, en

aplicación del cual la Colegiatura tampoco arribaría a una decisión diferente, en tanto que de ninguno de los medios de convicción emerge que, como consecuencia de las patologías atrás descritas, al actor se le impida o dificulte el desempeño de sus labores en condiciones de igualdad.

Conforme lo anterior, no resulta entonces discriminatoria la terminación del contrato de trabajo, por no estar acreditado que el actor tenga una limitación funcional que le impida ejercer su labor.

Por lo expuesto, el Tribunal considera que no es viable conceder el reintegro previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y con ello también caen por su peso las demás pretensiones.

DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INJUSTO

Ahora bien, como quiera que como pretensión subsidiaria la parte actora solicitó que se declare que hubo un despido injustificado por parte de la empresa demandada, como consecuencia del contrato suscrito entre las partes desde el 28 de enero de 2019 hasta el 20 de noviembre de 2020, esta misma pretensión se derrumba igual que la principal, pues como se pudo establecer anteriormente, la causa que dio origen a la terminado el contrato de trabajo, obedeció a la finalización de la obra o labor por la cual fue contratado el actor, como se evidenció con el otro sí suscrito entre las partes, como se mencionó. Causa que, como lo expone el artículo 61[1] del Código Sustancio del Trabajo en su literal D, se produce cuando se termina la obra o labor contratada, sin que ello se especifique como un despido.

2.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, las costas en esta instancia, quedarán a cargo de la parte demandante esto es el señor FRANCISCO ANDRES GÓMEZ MOLANO y en favor de la parte demandada, como quiera que el recurso de alzada no gozó con vocación de prosperidad.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el día 04 de diciembre de 2023 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá. Por las razones vertidas en el presente proveído.

---

[1] 1. El contrato de trabajo termina: (…) d). Por terminación de la obra o labor contratada; (…) g). Por sentencia ejecutoriada

SEGUNDO. CONDENAR en **COSTAS** de segunda instancia a la parte demandante FRANCISCO ANDRES GÓMEZ MOLANO, en favor de la parte demandada OUTSOURCING SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.S.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 038.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De Los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente FRANCISCO ANDRES GÓMEZ MOLANO y en favor de la demandada, se fija como agencias en derecho la suma de (1 SMLMV) un salario mínimo mensual legal vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Karen L. Castro O.

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MARTHA NASLIN SÁNCHEZ DE CRESPO
Parte demandada	SERVILIMPIEZA S.A.
Radicación	11001310502820210050201
Fecha de la decisión	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	SOLICITUD REINTEGRO LABORAL
Acta de Discusión	041
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310502820210050201

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en razón de la sentencia proferida el día 22 de agosto del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La señora Martha Naslin Sánchez de Crespo, a través de su apoderada, presentó demanda ordinaria laboral en contra de la sociedad Servi Limpieza S.A. solicitando el reconocimiento de diversas pretensiones derivadas de una relación laboral bajo un contrato de trabajo por obra o labor. Las pretensiones incluyen la declaración de la existencia de dicha relación laboral, así como el reconocimiento de salarios, cesantías, primas de servicios, intereses a las cesantías, vacaciones y el pago de aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Estas pretensiones se fundamentan en el hecho de que la accionante desempeñó el cargo de operaria de limpieza y desinfección en la demandada.

En cuanto a los hechos fácticos, la señora Sánchez de Crespo relata que su relación laboral con Servi Limpieza S.A. inició mediante un contrato de obra, devengando un salario mensual de novecientos ochenta mil seiscientos cincuenta y siete pesos ($980.657). Afirma que la terminación del contrato por parte de la demandada ocurrió el 21 de abril de 2020 y que a través de una acción de tutela se le ordenó el reintegro

transitorio, el cual se materializó el 22 de septiembre de 2020. A partir de ese momento, continúa vinculada laboralmente con la empresa, cumpliendo las mismas funciones.

Los fundamentos jurídicos de la demanda se sustentan en la Constitución Política de Colombia, en particular los artículos 1, 16, 25 y 53, que garantizan los derechos laborales fundamentales, así como en los artículos del Código Sustantivo del Trabajo que regulan el contrato de trabajo y sus efectos. La parte demandante alega que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, el reintegro ordenado implica el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir por la señora Sánchez de Crespo durante el período en el que estuvo cesante.

Finalmente, la parte demandante ha solicitado que se decrete la práctica de pruebas, incluyendo interrogatorio de parte al representante legal de Servi Limpieza S.A. y la aportación de documentos relacionados con la relación laboral de la accionante, tales como las nóminas de pago, para sustentar las pretensiones formuladas.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 24 de mayo de 2023 (pdf 14), luego, con providencia del 10 de noviembre de 2023 (pdf 17), tuvo por contestada la demanda por SERVILIMPIEZA S.A., y fijó fecha para celebración de audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y S.S.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. SERVILIMPIEZA S.A. (PDF 16)

La sociedad Servi Limpieza S.A., a través de su apoderada Annyie Liliana Serrano Anaya, contestó la demanda presentada por la señora Martha Naslin Sánchez de Crespo, oponiéndose a la mayoría de las pretensiones planteadas por la accionante.

En cuanto a las pretensiones declarativas, aceptó parcialmente las relacionadas con la existencia del contrato de trabajo, pero objetó las solicitudes condenatorias referentes al pago de salarios, prestaciones y otros conceptos, alegando la legalidad de la terminación de la relación laboral. La demandada sostuvo que la finalización del contrato de la señora Sánchez se dio en virtud de la terminación de la obra o labor para la cual fue contratada.

En relación con los fundamentos fácticos, Servi Limpieza señaló que la señora Sánchez de Crespo había suscrito cinco contratos de obra o labor con la empresa desde 2013 hasta el 21 de abril de 2020. La terminación de su más reciente contrato ocurrió cuando la Secretaría de Educación de Bogotá, entidad beneficiaria de los servicios prestados por la demandada, dio por terminado el contrato comercial con Servi Limpieza. La demandada destacó que la accionante fue reintegrada temporalmente por un fallo de tutela, pero que la causa de la terminación de su

contrato fue la finalización de la obra contratada, conforme al artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.

Argumenta que la terminación del contrato de la señora Sánchez fue legítima y no constituyó un despido arbitrario ni discriminatorio, para ello afirma que la señora Sánchez no contaba con fuero de pre-pensionada, pues tenía 62 años al momento de su desvinculación y 1103,43 semanas cotizadas, lo cual no le otorgaba estabilidad laboral reforzada. También se opuso a la pretensión de discriminación por edad, aclarando que el retiro de la accionante se dio como parte de una desvinculación masiva de 1.080 trabajadores al finalizar el contrato con la Secretaría de Educación.

Finalmente, Servi Limpieza sostuvo que cumplió con sus obligaciones legales y contractuales respecto de los pagos y aportes al sistema de seguridad social durante el tiempo que la señora Sánchez de Crespo estuvo vinculada. Rechazó las pretensiones económicas formuladas por la accionante, argumentando que no adeudaba ninguna acreencia, y solicitó que se desestimara la condena en costas, dado que su proceder fue ajustado a derecho.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 19 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado 28 Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 22 de agosto de 2024, decidió sobre el caso de Martha Naslin Sánchez de Crespo contra Servi Limpieza S.A. El despacho, conforme al artículo 280 del Código General del Proceso, omitió la necesidad de sintetizar la demanda y su contestación, ya que eran conocidas por las partes. El problema jurídico resuelto en esta instancia se centró en determinar si la demandante tenía derecho al reintegro definitivo y al pago de salarios y prestaciones sociales correspondientes al periodo comprendido entre el 21 de abril de 2020, fecha de su desvinculación, y el 22 de septiembre de 2020, cuando fue reintegrada temporalmente mediante acción de tutela.

Respecto a la procedencia del reintegro, el juzgado advirtió que no se configuraban hechos que dieran lugar a una estabilidad laboral reforzada a favor de la trabajadora, tales como fuero por discapacidad, maternidad o prepensión. El reintegro transitorio ordenado por tutela no resultó suficiente para justificar uno definitivo en este proceso. Además, la demandante manifestó en su interrogatorio haber estado en óptimas condiciones de salud al momento de su desvinculación, lo que debilitó su alegato de discriminación, considerando que la razón de la terminación del contrato fue la culminación de la obra o labor contratada.

Tampoco se demostró que la demandante tuviera calidad de prepensionada, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, la estabilidad reforzada para prepensionados solo aplica cuando al trabajador le faltan tres años o menos para cumplir con los requisitos para la pensión de vejez. La demandante, con 1103.43 semanas cotizadas al momento de su desvinculación, no cumplía con este requisito.

En consecuencia, el despacho concluyó que la demandante no tenía derecho al reintegro definitivo ni al pago de las acreencias laborales reclamadas. Se declaró probada la excepción de inexistencia de obligaciones propuestas por la demandada, y, dado que la demandante resultó vencida en el juicio, se le condenó en costas a favor de la parte demandada.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE (min 00:09:44 video 19)

La apoderada de la demandante interpuso recurso de apelación solicitando la modificación total de la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar a Servi Limpieza S.A. al pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la señora Martha Naslin Sánchez de Crespo durante el tiempo que estuvo cesante. Argumenta que, conforme al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, el reintegro implica que el empleador debe pagar al trabajador los salarios y prestaciones sociales no percibidos desde la fecha del despido hasta la fecha de reintegro, pues este busca restablecer la situación laboral previa al despido.

La apelación resalta que la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en señalar que el reintegro conlleva no solo la reincorporación del trabajador, sino también el reconocimiento de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, como si nunca hubiera sido separado de su cargo. Además, señala que Servi Limpieza S.A. no presentó oposición al reintegro ni inició ninguna acción judicial contra la trabajadora, lo que, según la apelante, refuerza el derecho de la demandante a reclamar dichas acreencias.

Finalmente, la apoderada argumenta que el silencio del empleador frente al reintegro puede interpretarse como una aceptación tácita de la obligación de pagar todas las prestaciones y salarios dejados de percibir. Por lo tanto, solicita que se modifique la sentencia de primera instancia y se condene a la demandada al pago de todas las pretensiones, incluyendo los salarios y prestaciones no percibidos durante el periodo en que la trabajadora estuvo apartada de su empleo.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, el despacho de conocimiento, con auto de 06 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; se tiene que ninguna de las partes se pronunció al respecto.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Está obligada la empresa Servi Limpieza S.A. a pagar los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir por la trabajadora durante el periodo en que estuvo cesante, tras haberse ordenado su reintegro en sede de tutela?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Análisis sobre la improcedencia del reintegro laboral definitivo

En virtud de los fundamentos fácticos y jurídicos que constan en el expediente, resulta evidente que existe una clara distinción entre los argumentos empleados en la acción de tutela y aquellos que se debaten en el presente proceso ordinario laboral. Mientras que en sede constitucional se plantearon aspectos relacionados con un eventual fuero prepensional y la presunta discriminación por edad, tales disgresiones no forman parte del debate en esta jurisdicción ordinaria, pues en la demanda no se han alegado ni discutido dichas cuestiones. En consecuencia, aun cuando en la apelación de la parte demandante se solicitó la revocatoria total de la sentencia de primera instancia, esta Sala se abstendrá de referirse a los aspectos no discutidos en este proceso, en tanto no fueron objeto de debate ni pretensión dentro de los lineamientos establecidos por la demanda ordinaria.

Adicionalmente, al analizar la naturaleza de la relación laboral que vinculaba a la demandante con Servi Limpieza S.A., encontramos que dicha relación se enmarca dentro de un contrato por obra o labor, el cual tiene un sustento normativo claro en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta disposición establece de manera inequívoca que el contrato de trabajo puede pactarse por el tiempo que dure una obra o labor determinada, quedando sujeto a su extinción cuando se cumpla el objeto contratado. En el presente caso, la finalización del contrato de la señora Sánchez de Crespo se produjo tras la culminación de la labor específica pactada entre Servi Limpieza S.A. y la Secretaría de Educación Distrital, en virtud de un acuerdo de tercerización para la prestación de servicios de aseo. De este modo, al haberse agotado el objeto contractual, el vínculo laboral se extinguió de manera legítima y ajustada a derecho.

Asimismo, es necesario traer a colación lo resuelto en la sentencia de primera instancia, en la cual se concluyó que la demandante no ostentaba una condición que le otorgara estabilidad laboral reforzada, y que la terminación de su contrato se dio de manera regular, conforme a las estipulaciones del mismo. El juzgador de primera instancia, en su considerando, destacó que no se hallaron elementos que permitieran inferir una terminación arbitraria o injustificada del contrato, ya que el mismo fue suscrito para una labor determinada, cuya conclusión era conocida de antemano por

las partes. En ese orden de ideas, este Tribunal no encuentra razones para modificar la decisión adoptada en primera instancia, puesto que la extinción del vínculo laboral se ajustó a los términos del contrato de obra o labor, y no existe fundamento jurídico que permita sustentar el reintegro de la demandante, quien aceptó las condiciones contractuales desde el inicio de la relación laboral.

Por lo tanto, confirmar la improcedencia del reintegro es la única decisión jurídicamente viable, dado que el contrato de la demandante concluyó conforme a la ley, sin que exista vulneración de derechos o situación alguna que justifique el restablecimiento de su relación laboral. Cualquier pretensión que busque reabrir el debate en torno a una estabilidad laboral reforzada, o la declaración de un despido discriminatorio, carece de sustento, toda vez que tales argumentos no fueron materia de controversia en este proceso, y la extinción del contrato se produjo dentro del marco de la legalidad.

Análisis de la procedencia del pago de salarios y prestaciones sociales tras el reintegro transitorio del trabajador en sede de tutela

A la luz de la lectura de la sentencia de tutela emitida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Oralidad de Bogotá D.C., resulta indudable que dicha providencia protegió de manera transitoria los derechos fundamentales de la señora Martha Naslin Sánchez de Crespo, tal como consta en el numeral primero de la parte resolutiva de dicha decisión, ordenando su reintegro provisional. No obstante, es necesario resaltar que la misma sentencia de tutela dejó explícitamente claro que esta protección tenía un carácter temporal y que la accionante debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que, en dicha instancia, se resolviera de manera definitiva el conflicto laboral suscitado. Así, la orden de reinstalación y el reconocimiento de derechos laborales derivados, tales como el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, estaban condicionados al resultado del proceso ordinario laboral, escenario en el cual debía determinarse, con base en los hechos y las normas aplicables, si había lugar al reconocimiento de tales derechos.

En este sentido, al ser la tutela un mecanismo excepcional y temporal, cuya finalidad no es resolver de manera definitiva controversias de naturaleza laboral, sino garantizar la protección inmediata de derechos fundamentales, resulta improcedente revocar la totalidad de la sentencia de primera instancia o acceder a la solicitud de la parte demandante respecto al pago de salarios y prestaciones sociales por el periodo comprendido entre el 22 de abril y el 22 de septiembre de 2020, lapso en el que se produjo su reintegro transitorio. La acción de tutela, en este caso, fue meramente instrumental y carece de vocación de permanencia, razón por la cual los efectos derivados de la misma —incluyendo el restablecimiento de la relación laboral y los derechos económicos correlativos— no son definitivos ni inmodificables. Así lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, indicando que, cuando una decisión de tutela se otorga de manera transitoria, el pago de salarios y prestaciones sociales ordenado durante el periodo de separación del cargo debe considerarse provisional, quedando sujeto a lo que se resuelva de manera definitiva en la jurisdicción ordinaria, que es la competente para dirimir los conflictos laborales de fondo.

En este contexto, debe subrayarse que el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá D.C. condicionó claramente en su sentencia de tutela que la accionante activara la vía ordinaria para resolver el conflicto de manera definitiva, dejando constancia expresa de que cualquier reclamación relacionada con los salarios y prestaciones sociales que la demandante considerara dejados de percibir durante el periodo de separación del cargo debía ser discutida y resuelta en esta sede judicial. Por consiguiente, a la luz de lo expuesto, el reintegro transitorio ordenado en sede de tutela no confiere a la demandante el derecho automático al pago de los salarios reclamados, en la medida en que dicha decisión ha sido desvirtuada por la jurisdicción ordinaria laboral, la cual ha descartado la procedencia de un reintegro definitivo y, en consecuencia, la generación de derechos económicos a favor de la trabajadora durante el periodo en cuestión.

En virtud de lo anterior, se torna improcedente tanto la revocatoria de la sentencia como la declaración de procedencia del pago de salarios y prestaciones sociales exigidos por la demandante en este proceso. Frente a este análisis, la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente en sentencia SL1905 de 2023:

> *"Pues bien, para la Corte el reproche formulado por el apoderado judicial de la empresa apelante está llamado a prosperar, pues en efecto, el señor Eduardo Méndez Polanía debe restituir la suma que recibió en cumplimiento del fallo de tutela dictado por el Juzgado 51 Penal del Circuito de Bogotá, que protegió transitoriamente su derecho a la «estabilidad laboral reforzada», habida cuenta que esa decisión constitucional que ordenó cancelar el equivalente a $74.966.224 a título de salarios, cesantías y prestaciones causadas desde el retiro hasta la reinstalación, desapareció o quedó sin sustento jurídico, al no haber lugar a reintegro alguno por fuero de discapacidad tal como se definió por la justicia ordinaria laboral, quien era la competente para resolver de manera definitiva la situación del reintegro y sus consecuencias, conforme lo advirtió la Corte Constitucional al conceder en forma temporal y transitoria la acción de amparo.*
>
> *Cabe recordar que cuando se produce el reintegro de un trabajador como consecuencia de una orden de tutela y ello sucede en forma transitoria, como ocurre en este caso, los efectos del restablecimiento del contrato de trabajo deberán darse de manera inmediata; sin embargo, dado ese carácter temporal de la protección constitucional, la decisión adoptada de reinstalación y consecuente pago de salarios y prestaciones del tiempo cesante no es definitiva e inmodificable, toda vez que el amparo otorgado podrá ser revocado o modificado en forma parcial o total, ya sea con la impugnación, ora en sede de revisión, o inclusive, como se dio en el sub examine, con lo resuelto en el proceso ordinario laboral que inició el trabajador en cumplimiento de lo dispuesto por el juez constitucional, decisión en la que el juez del trabajo no encontró acreditados los presupuestos para conceder la protección foral contenida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, por ende, infirió que no había lugar al restablecimiento del trabajador al cargo que venía desempeñando.*
>
> *En ese contexto, cabe señalar que esta corporación tuvo la oportunidad de analizar un caso análogo, en el cual precisó que en aquellos asuntos en que se ordena el*

reintegro de un trabajador por vía de tutela y se dispone el consecuente pago de salarios y prestaciones dejados de percibir entre la fecha del despido y la data de reinstalación, pero posteriormente, dicha decisión es modificada o revocada o en definitiva pierde su eficacia jurídica, deberá entenderse que «la suma de dinero reconocida al demandante quedó sin sustento jurídico» y, por ende, es procedente el reembolso de lo pagado."

En este contexto, resulta claro que el análisis definitivo del derecho en este proceso ordinario, cuya protección en sede de tutela se otorgó de manera transitoria, conlleva el retorno a la situación jurídica anterior, siempre que sea posible y no desproporcionado. En el presente caso, la anulación de los efectos del reintegro provisional de la actora es jurídicamente viable, ya que no existe ningún obstáculo legal ni una desproporción que impida el restablecimiento del estado previo. La tutela emitida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá D.C. no ordenó el pago de salarios ni prestaciones sociales, sino que dejó explícitamente claro que esta cuestión debía resolverse en la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, ordenar a la empresa Servi Limpieza S.A. el pago de salarios y prestaciones por el periodo de cesantía, sin la efectiva prestación del servicio, y basado en una orden judicial meramente provisional, carecería de sustento jurídico. De este modo, la confirmación de la sentencia de primera instancia es plenamente acertada, ya que no se advierte fundamento legal alguno para el reconocimiento de tales pagos, siendo posible revertir las consecuencias jurídicas del reintegro provisional sin menoscabar los derechos laborales o fundamentales de la demandante.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandante, se la condenará en costas de segunda instancia a favor de la parte demandada.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el día 22 de agosto de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Veintiocho Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte **DEMANDANTE MARTHA NASLIN SÁNCHEZ DE CRESPO** y en favor de la parte demandada.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación

de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 041.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada -

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente demandante y en favor de la demandada, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MARITZA ROJAS LARA
Parte demandada	COMCEL S.A.
Radicación	11001310503020200369 01
Fecha de la decisión	07 DE MARZO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	ESTABILIDAD REFORZADA
Acta de Discusión	073
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503020200369-01

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en razón de la sentencia proferida el día 07 de marzo de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 02 y 04 primera instancia)

La señora **Maritza Rojas Lara**, quien actúa a través de apoderado, presentó demanda contra la empresa **COMCEL S.A.**, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral que se declare la existencia de una relación laboral a término indefinido entre las partes, iniciada el 13 de junio de 2005. Asimismo, solicita que se declare que su despido, efectuado el 20 de junio de 2019, se realizó sin justa causa, contraviniendo el debido proceso disciplinario previsto en la Convención Colectiva de Trabajo. En consecuencia, pretende su reintegro en las mismas condiciones laborales o en un cargo adecuado a su estado de salud.

La demandante aduce que, durante su relación laboral, desempeñó el cargo de Consultora de Servicio Personalizado a Clientes y que, a pesar de cumplir con sus funciones, fue objeto de sanciones y procedimientos disciplinarios por no cumplir con metas comerciales impuestas unilateralmente por la empresa, las cuales no formaban parte de sus obligaciones contractuales. Afirma que dichas metas fueron

establecidas sin que se le brindara la capacitación adecuada para su cumplimiento, lo cual vulneró sus derechos laborales.

Además, la señora **Maritza Rojas** sostiene que, en el año 2005, fue diagnosticada con glaucoma secundario en su ojo derecho, lo que le ocasionó una pérdida total de la visión en dicho ojo en el año 2007. Debido a esta condición médica, su capacidad para cumplir con ciertas funciones laborales se vio afectada, lo que generó incapacidades recurrentes durante el año 2018. A pesar de su estado de salud, la demandada continuó exigiéndole el cumplimiento de metas y objetivos comerciales que no estaban dentro de sus competencias.

Finalmente, la demandante argumenta que el procedimiento disciplinario llevado a cabo para su desvinculación fue irregular, ya que no se cumplieron las disposiciones establecidas en el artículo 12 de la Convención Colectiva de Trabajo, ni se respetó su derecho al debido proceso. Por lo anterior, solicita el reintegro a su cargo, el reconocimiento de salarios y prestaciones desde la fecha del despido hasta su reincorporación, o, en su defecto, la indemnización correspondiente por despido injustificado, junto con la indexación y los intereses moratorios.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 26 de julio del 2021 (pdf 05), luego, con providencia del 13 de diciembre del 2021 (pdf 09), tuvo por contestada la demanda por **COMCEL S.A.**, y se fijó fecha para la celebración de audiencias de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. COMCEL S.A. (PDF 06 y 10 primera instancia)

COMCEL S.A., respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones, y presentando las excepciones de inexistencia de la obligación, prescripción de la acción, buena fe, cobro de lo no debido, y excepciones genéricas. Fundamenta su defensa en que el despido de la señora **Maritza Rojas Lara** se produjo con justa causa, dado el incumplimiento de metas comerciales establecidas contractualmente y la falta de entrega oportuna de contratos con inconsistencias. Según la empresa, dichas faltas constituían causales graves conforme al artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo y al contrato de trabajo suscrito entre las partes.

En el ámbito fáctico, **COMCEL S.A.** sostiene que la demandante, en su cargo de Consultora de Servicio Personalizado a Clientes, estaba sujeta a cumplir con metas mensuales de ventas que le eran comunicadas oportunamente. La demandada aportó pruebas documentales, como notificaciones mensuales de metas y la carta de terminación del contrato, para demostrar que la trabajadora incumplió dichas metas en repetidas ocasiones durante los meses de noviembre de 2018 a marzo de 2019. También se argumenta que, pese a las oportunidades brindadas, la demandante no

entregó varios contratos con las correcciones debidas, lo cual afectó el cumplimiento de sus funciones.

Jurídicamente, la empresa se apoya en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que faculta al empleador a dar por terminado el contrato de trabajo con justa causa cuando se presenten faltas graves. Además, invoca las disposiciones contractuales y la política interna de remuneración variable, en las que se especificaba que el incumplimiento de metas sería considerado una falta grave. También señala que la terminación del contrato no implicó la violación de ningún procedimiento disciplinario, dado que no se trató de una sanción sino de la aplicación de una causal de despido, por lo que no había necesidad de seguir un procedimiento adicional.

Por último, **COMCEL S.A.** argumenta que las pretensiones de la demandante son infundadas, ya que el despido se ajustó a derecho y se siguió el debido proceso. De esta forma, solicita que se la absuelva de todas las pretensiones de la demandante, y que se apliquen las excepciones mencionadas para desestimar cualquier reclamación económica o laboral adicional.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (pdf 30 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 7 de marzo de 2024, decidió declarar ineficaz el despido de la señora Maritza Rojas Lara, efectuado por COMCEL S.A. el 20 de junio de 2019. El Juzgado consideró que la terminación del contrato desconoció el fuero de estabilidad laboral reforzada que protegía a la trabajadora, debido a su condición de salud, sin que la empresa hubiera obtenido autorización de la autoridad laboral competente para efectuar el despido.

En este sentido, se ordenó el reintegro de la señora Maritza Rojas Lara a su cargo habitual, o a uno de igual o superior jerarquía, que se ajuste a su estado de salud y sin que se desmejoren sus condiciones laborales. El fallo también establece que la empresa debe atender las recomendaciones médicas y restricciones ocupacionales que la trabajadora requiera para el adecuado desempeño de sus funciones, garantizando el respeto de sus derechos laborales.

Además, el Juzgado declaró sin solución de continuidad el contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, vigente desde el 13 de junio de 2005. En consecuencia, se condenó a COMCEL S.A. al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales causados desde la fecha del despido hasta el reintegro efectivo de la trabajadora, debidamente indexados. No obstante, se autorizó a la empresa descontar los pagos realizados por concepto de liquidación final de las prestaciones sociales.

Adicionalmente, se ordenó a COMCEL S.A. reconocer y pagar los aportes al sistema general de pensiones desde la fecha del despido hasta el momento del reintegro, y en adelante, mientras continúe vigente el vínculo laboral. Igualmente, se impuso a la

empresa la obligación de pagar una indemnización de 180 días de salario, conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, debido a la terminación del contrato sin la debida autorización administrativa.

Finalmente, el Juzgado declaró no probadas las excepciones propuestas por COMCEL S.A., relacionadas con la inexistencia de la obligación y la prescripción de la acción, y condenó a la empresa al pago de las costas procesales, incluyendo una suma por concepto de agencias en derecho, ascendiendo a $2.500.000.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA (min 02:00:32 video pdf 30 primera instancia)

El apoderado de la demandada interpuso recurso de apelación, cuestionando la sentencia de primera instancia y solicitando su revocatoria, con fundamento en varias consideraciones de orden técnico y normativo. En primer lugar, argumenta que el juez de primera instancia basó su decisión en el Decreto 2463 de 2001, el cual establece porcentajes de pérdida de capacidad laboral para determinar la existencia de una debilidad manifiesta. A pesar de que se reconoció que la Corte Constitucional ha abandonado parcialmente dicho criterio, el juez se apoyó en un dictamen que señalaba una pérdida de capacidad del 30%, lo que llevó a la conclusión de que la demandante gozaba de la protección del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y, en consecuencia, a declarar la ineficacia del despido.

El apelante advirtió que el Decreto 2463 de 2001 fue derogado por el Decreto 1352 de 2013 y que la jurisprudencia reciente, tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, ha avanzado en la interpretación de que el criterio numérico no es suficiente para activar la estabilidad laboral reforzada. Citando la Sentencia SU-087 de 2022, señaló que la calificación numérica de la pérdida de capacidad laboral no es determinante, y que lo relevante es que el trabajador sufra una afectación que impida o dificulte significativamente el desempeño de sus funciones. En este caso, el dictamen pericial y el testimonio del perito médico demostraron que la demandante, aunque había perdido la vista en su ojo derecho en 2016, continuó desarrollando sus labores sin restricciones significativas durante varios años.

El apoderado de la demandada también cuestionó la valoración que el juez hizo de los testimonios de los compañeros de trabajo de la demandante, quienes mencionaron ausencias esporádicas de la misma. No obstante, destacó que las pruebas documentales acreditan que en los últimos seis meses de la relación laboral no se presentaron incapacidades médicas ni restricciones laborales que afectaran de manera significativa su desempeño. En consecuencia, considera que la valoración probatoria del juez fue errada al basarse en dichos testimonios no respaldados por evidencia documental.

Finalmente, el apoderado afirmó que la decisión del juez de no considerar el incumplimiento de las metas comerciales por parte de la trabajadora fue equivocada, ya que ella misma admitió haber incurrido en esa falta, lo cual constituía una causa justa de despido conforme a la legislación laboral y las disposiciones contractuales.

Por lo tanto, solicitó la revocatoria de la sentencia, argumentando que no se puede sostener la presunción de discriminación sin un análisis exhaustivo y coherente de las pruebas y hechos del caso.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada. El despacho de conocimiento, mediante auto del 21 de agosto de 2024 (pdf 06), avocó conocimiento del proceso de referencia, el cual contaba con un auto del 4 de abril de 2024 (pdf 02) que dispuso la admisión del recurso presentado, corriendo traslado a las partes para la presentación de sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

COMCEL S.A. (pdf 03 segunda instancia)

COMCEL S.A., a través de su apoderado, presentó sus alegatos de conclusión solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia en los apartes desfavorables a la empresa y la absolución de todas las pretensiones incoadas por la demandante. La compañía argumenta que la señora **Maritza Rojas Lara** no contaba con estabilidad laboral reforzada al momento de su despido, ya que, según lo expuesto por el perito en juicio, la condición médica de la demandante, que llevó a la pérdida del ojo derecho en 2016, no experimentó ningún cambio o agravamiento significativo entre esa fecha y la terminación del contrato en 2019.

En cuanto, a la calificación de pérdida de capacidad laboral, **COMCEL** sostiene que la Junta Regional de Calificación de Invalidez situó incorrectamente la fecha de estructuración en 2018, dado que la condición médica de la demandante ya estaba consolidada en 2016. Además, durante ese período, la trabajadora no presentó incapacidades prolongadas ni necesitó ayuda de terceros para llevar a cabo sus actividades laborales. Por tanto, la empresa alega que, al momento del despido, la demandante no se encontraba en una situación de discapacidad que ameritara la protección de estabilidad laboral reforzada.

COMCEL también señala que el despido se produjo con justa causa, debido al incumplimiento reiterado de las metas comerciales establecidas contractualmente, lo cual constituía una falta grave. Aporta pruebas que demuestran el incumplimiento de las metas por parte de la demandante en los meses previos a la terminación del contrato. La empresa insiste en que no existieron barreras ni limitaciones que impidieran a la demandante cumplir con sus obligaciones laborales, por lo que el trato recibido no puede considerarse discriminatorio.

Finalmente, **COMCEL** argumenta que, en caso de mantenerse alguna condena, se debe tener en cuenta la compensación de los valores ya pagados por la empresa en la liquidación del contrato de la demandante. Solicita, por tanto, la confirmación de las absoluciones ya decretadas y la revocatoria de cualquier condena en su contra.

MARITZA ROJAS LARA (pdf 04 carpeta segunda instancia)

La parte demandante, a través de su apoderado, solicita la confirmación de la sentencia de primera instancia, argumentando que está plenamente probado que la señora Maritza Rojas Lara sufría de hipotiroidismo y glaucoma, condiciones que le impedían y dificultaban el adecuado desempeño de sus funciones laborales. Estas afecciones, que provocaban dolor ocular persistente, no se extinguieron con la pérdida de su ojo derecho en 2016. Además, el dictamen de pérdida de capacidad laboral del 31 de mayo de 2018, que estableció un porcentaje del 30%, confirma que la demandante sufría una limitación parcial que afectaba su capacidad para rendir al 100% en comparación con sus compañeros de trabajo.

La demandante sostiene que, a pesar de esta condición, fue sometida a la misma carga laboral que sus compañeros en óptimo estado de salud y que la empresa no tuvo en cuenta sus períodos de incapacidad ni las limitaciones médicas al momento de evaluarla. Se destaca que, durante los descargos que precedieron su despido, informó reiteradamente a la empresa sobre su condición de salud, lo cual fue corroborado por testimonios de sus compañeros y su supervisora, quienes confirmaron que debía interrumpir su trabajo frecuentemente para aplicarse gotas debido a la presión ocular elevada.

En conclusión, la parte demandante refuta la afirmación de la demandada de que su discapacidad se consolidó en 2016 y que no hubo afectaciones posteriores. La demandante argumenta que la historia clínica y las incapacidades emitidas en 2018 demuestran lo contrario, y que su estado de salud continuó deteriorándose, lo que justificaba la protección de estabilidad laboral reforzada conforme al artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por ello, solicita que se confirme la decisión del A quo y se impongan costas a la parte apelante.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Reunía la trabajadora Maritza Rojas Lara las condiciones exigidas por el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 para ser beneficiaria de la estabilidad laboral reforzada? y, en caso afirmativo, ¿podía la empresa COMCEL S.A. terminar su contrato de trabajo sin autorización del Ministerio del Trabajo bajo la causal de incumplimiento de metas?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el presente proceso no se discute la existencia de una relación laboral entre la señora Maritza Rojas Lara y COMCEL S.A., ya que ambas partes han reconocido la vigencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 13 de junio de 2005, así como su posterior terminación el 20 de junio de 2019. Asimismo, no es objeto de controversia el cargo desempeñado por la demandante, quien laboraba como Consultora de Servicio Personalizado a Clientes. En consecuencia, el debate jurídico se centra exclusivamente en la aplicación de la protección de estabilidad laboral reforzada en virtud del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, y en la justificación de la terminación del contrato laboral sin la autorización previa del Ministerio del Trabajo.

La cuestión principal a dilucidar es si, al momento del despido, la señora Maritza Rojas Lara se encontraba en una situación de debilidad manifiesta debido a su condición de salud, lo que activaría la protección prevista en la normativa mencionada. Además, se evaluará si COMCEL S.A. tenía conocimiento de dicha situación y, en consecuencia, la obligación de implementar ajustes razonables en su entorno laboral para mitigar los efectos de su discapacidad, así como la legitimidad del despido fundamentado en el incumplimiento de metas comerciales.

El análisis en esta instancia se basará en la valoración de las pruebas aportadas, tales como el dictamen de pérdida de capacidad laboral, los testimonios de sus compañeros de trabajo y otros elementos que permiten esclarecer si la condición de salud de la trabajadora era conocida y si la empresa adoptó las medidas correspondientes o vulneró sus derechos al proceder con la terminación del contrato sin observar las obligaciones legales que surgen en contextos de debilidad manifiesta.

Protección Constitucional y Legal de la Estabilidad Laboral Reforzada: Aplicación del Artículo 26 de la Ley 361 de 1997

La estabilidad laboral reforzada es una garantía constitucional y legal que busca proteger a los trabajadores en situación de debilidad manifiesta, con el fin de evitar despidos arbitrarios motivados por una condición de discapacidad o afectación de salud significativa. El artículo 26 de la Ley 361 de 1997 establece que ningún trabajador en situación de discapacidad puede ser despedido sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, so pena de que dicho despido sea declarado ineficaz. Este precepto tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho al trabajo, particularmente para personas que, debido a su condición de salud, enfrentan barreras físicas, actitudinales o sociales que dificultan su desempeño en condiciones de igualdad con los demás trabajadores.

A la luz de la jurisprudencia desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, la protección de estabilidad laboral reforzada no se activa de manera automática por la mera existencia de quebrantos de salud o incapacidades médicas temporales. Para que dicha protección opere, es necesario que el trabajador se encuentre en una situación de discapacidad que represente una afectación significativa y prolongada en su capacidad para desarrollar su labor en igualdad de condiciones con los demás trabajadores. Tradicionalmente, la jurisprudencia ha considerado que la existencia de

una limitación física, psíquica o sensorial con un impacto moderado o severo sobre la capacidad laboral puede ser indicativa de la necesidad de protección especial, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 7.º del Decreto 2463 de 2001. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado que la pérdida de capacidad laboral debe predicarse de la deficiencia física, mental, intelectual o sensorial y la afectación a mediano y largo plazo, para que se configure discapacidad relevante a efectos de la estabilidad reforzada.

Bajo esta perspectiva, el análisis no radica en la cuantificación del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino en las barreras que dicha condición imponga al trabajador en el ejercicio de sus funciones y en la respuesta del empleador frente a tales circunstancias. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha enfatizado que la estabilidad laboral reforzada no depende exclusivamente de un dictamen técnico sobre la discapacidad, sino de la existencia de obstáculos significativos en el desarrollo del trabajo y del conocimiento que el empleador haya tenido sobre dicha condición. La evaluación de la procedencia del despido debe, por tanto, centrarse en verificar si el empleador implementó los ajustes razonables necesarios para garantizar la continuidad laboral del trabajador y si, en ausencia de tales medidas, la terminación del contrato se efectuó en contravención de los principios de protección reforzada.

En este caso, la demandante acreditó mediante dictamen técnico una pérdida de capacidad laboral del 30%, lo que confirma la existencia de una limitación de carácter significativo. No obstante, más allá del porcentaje, es determinante analizar si la empresa adoptó medidas efectivas para eliminar o mitigar las barreras que esta condición representaba para la trabajadora en su entorno laboral. En la medida en que tales ajustes no fueron implementados y que la trabajadora fue sometida a exigencias desproporcionadas en comparación con sus compañeros, sin que se considerara su situación particular, se configura una afectación sustancial al derecho a la estabilidad laboral reforzada. Asimismo, dado que el empleador tenía conocimiento de la condición de salud de la demandante, su proceder debía ajustarse a la normativa que impone la necesidad de autorización previa del Ministerio del Trabajo para la terminación del contrato, lo que en este caso no ocurrió, configurando una vulneración de las garantías laborales protegidas por el ordenamiento jurídico.

La parte apelante sostiene que la empleadora desconocía el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la demandante hasta que este fue revelado en audiencia. Sin embargo, dicha afirmación resulta infundada, toda vez que la Corte ha sido enfática en que la protección derivada de la estabilidad laboral reforzada no depende del conocimiento exacto del porcentaje de discapacidad, sino de la identificación de una situación de debilidad manifiesta que imponga barreras significativas en el ejercicio de las funciones del trabajador. En este sentido, el empleador tiene la obligación de garantizar la estabilidad laboral del trabajador en condición de vulnerabilidad y no puede proceder a la terminación del contrato de manera unilateral sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo.

En el presente caso, el material probatorio evidencia de manera contundente que la empleadora tenía conocimiento de la condición de salud de la demandante mucho

antes del despido, circunstancia que desvirtúa su pretensión de desconocimiento. Prueba de ello es el acta de diligencia de descargos realizada el 29 de mayo de 2019, en la cual la trabajadora manifestó expresamente su historial médico y las múltiples cirugías a las que se había sometido. A ello se suman los testimonios de sus compañeros de trabajo, quienes señalaron que su afectación visual era notoria y evidente, así como el testimonio de su supervisora directa, quien reconoció que la trabajadora presentaba incapacidades recurrentes. Finalmente, en el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada, este admite tener conocimiento de las reiteradas incapacidades médicas de la accionante, lo que confirma que la empresa estaba plenamente informada sobre su condición de salud. Así las cosas, la alegación de la apelante en cuanto a la falta de conocimiento sobre la condición de la trabajadora no tiene sustento probatorio.

El testigo Gennys Álvarez Navarro, quien compartió espacio de trabajo con la demandante entre el 27 de noviembre de 2017 y marzo de 2019 afirmó en su declaración que la afectación de salud de la trabajadora era "evidente y notoria", al punto de que tanto sus compañeros de trabajo como sus supervisores eran plenamente conscientes de su condición. Indicó que la demandante padecía problemas en su ojo derecho, lo que dificultaba el desarrollo de sus funciones debido a la exigencia del uso permanente del computador en sus labores diarias. Agregó que, en varias ocasiones, la demandante se veía obligada a ausentarse durante la jornada laboral para atender sus molestias oculares y que su afectación era tan evidente que incluso los clientes preguntaban por su estado de salud, lo que reafirma la notoriedad de su condición.

Por su parte, el testigo Erwin Robles, quien laboró en la misma oficina durante el período comprendido entre 2013 y 2021, corroboró que la afectación de salud de la trabajadora era "notoria" y que sus ausencias frecuentes, algunas de ellas prolongadas, obedecían a la severidad de su problema visual. Precisó que, en múltiples ocasiones, la trabajadora se ausentaba hasta 15 días en un mes debido a su estado de salud, lo que demuestra que su condición médica tenía un impacto significativo en su desempeño laboral.

Sin embargo, la postura de la demandada resulta ineficaz para desvirtuar la obligación patronal de implementar un seguimiento diligente y oportuno a las incapacidades médicas de sus trabajadores, particularmente cuando estas son reiteradas según afirmó la representante legal en su declaración de parte, quien indicó que tenía conocimiento de la incapacidad otorgada a la demandante por una afección en el ojo, que, aunque sin brindar mayor información respecto de la temporalidad de dicha incapacidad, evidencian una afectación en el estado de salud de la demandante y que era de conocimiento de su empleador. Dicho deber recae sobre el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como sobre el área de Recursos Humanos, instancias que deben identificar y adoptar ajustes razonables que permitan mitigar los efectos de las limitaciones del trabajador en el entorno laboral. En consecuencia, la parte demandada no puede alegar desconocimiento de la situación de la trabajadora, especialmente considerando que las incapacidades médicas reportadas fueron recurrentes a lo largo del año 2018. Esta circunstancia fue incluso reconocida por la propia demandada en la contestación de

la demanda, específicamente al responder el hecho 11, en el cual la actora detalló los periodos de incapacidad. Dichas incapacidades fueron debidamente reconocidas por COMCEL S.A. para los periodos mencionados, aunque se limitó a desconocer su origen. No obstante, la reiteración de dichas incapacidades y su reconocimiento por parte de la empresa evidencian que la empleadora tenía conocimiento de la afectación de salud de la trabajadora y su impacto en la relación laboral. Lo anterior demuestra que la empleadora no podía alegar desconocimiento sobre la situación de la demandante, lo que conlleva la obligación de garantizar los derechos derivados de su estabilidad laboral reforzada. Además, estas circunstancias, lejos de ser meramente incidentales, imponían a la empleadora un deber reforzado de verificación y adaptación de las condiciones laborales, conforme a los principios de prevención y protección del trabajador. La omisión de estas obligaciones por parte del empleador podría configurar un desconocimiento de las garantías mínimas en materia de estabilidad laboral reforzada y el deber de adecuar el entorno de trabajo a las necesidades del empleado afectado.

- Incapacidad laboral de doce (12) días a partir del doce (12) de junio al veintitrés (23) de junio de 2018.
- Incapacidad laboral de tres (3) días a partir del tres (3) de agosto de 2018.
- Incapacidad laboral de treinta (30) días a partir del tres (3) de octubre al primero (1) de noviembre de 2018.
- Incapacidad laboral de seis (6) días a partir del veintisiete (27) de noviembre y el dos (2) de diciembre de 2018.

Aunado a lo anterior, la inconsistencia en la postura de la demandada queda en evidencia con el interrogatorio de parte rendido por su representante legal, quien, al ser preguntada directamente "Dígale al despacho si la empresa tuvo conocimiento de las afecciones al estado de salud de la trabajadora en materia ocular", respondió categóricamente "Tuvo conocimiento de incapacidad que se generó por afecciones en el ojo, que tenía que ver con la visión". Esta manifestación resulta contradictoria respecto de la negación de la demandada en su escrito de contestación y desvirtúa su intento de desconocer la relación entre las incapacidades y la patología ocular de la trabajadora. Adicionalmente, quedó acreditado que la demandante expuso de manera clara y reiterada sus padecimientos de salud a lo largo de la relación laboral. En la diligencia de descargos previa al despido, visible a folios 37 a 48 del pdf 02 del expediente digital, en la pregunta 35, la trabajadora indicó que, durante el segundo semestre de 2018, en los meses de junio y diciembre, le fueron practicadas dos cirugías, acumulando un total de 16 intervenciones quirúrgicas desde el inicio de sus afectaciones visuales. Asimismo, se probó que la empleadora tenía conocimiento de las incapacidades de la demandante, como lo reconoció el representante legal en su interrogatorio de parte. Aunque la empresa no admitió expresamente el origen de dichas incapacidades, la testigo Dabeiba Rodríguez, quien fungía como jefe directa de la trabajadora al momento del despido, reconoció que tenía conocimiento de la afectación ocular de la demandante. Esto evidencia que la condición de salud de la trabajadora era un hecho conocido por la empleadora, lo que conlleva la obligación de garantizar los derechos derivados de su estabilidad laboral reforzada.

En tal virtud, se corrobora que la empresa tenía plena conciencia de la condición médica de la demandante, lo que refuerza la configuración de una situación de

debilidad manifiesta, y, por ende, imponía la obligación de adoptar medidas de protección reforzada y contar con la autorización del Ministerio del Trabajo antes de proceder con la terminación del vínculo laboral.

Adicionalmente, el artículo 27 literal i) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificado por la ley 1346 del 2009, establece la obligación del empleador de realizar los ajustes razonables para acomodar las necesidades del trabajador con discapacidad, con el fin de mitigar las barreras que este pueda enfrentar en el desarrollo de sus funciones laborales. Estos ajustes deben ser proporcionales y adecuados a las capacidades del trabajador, y su omisión por parte del empleador constituye una violación del derecho a la igualdad en el trabajo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad también obliga a los empleadores a realizar modificaciones o adaptaciones necesarias para garantizar que las personas con discapacidad puedan desempeñar sus labores en igualdad de condiciones con los demás trabajadores.

"De acuerdo con lo expuesto, para la aplicación de la protección de estabilidad laboral reforzada establecida en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, la Sala considera que la discapacidad se configura cuando concurren los siguientes elementos:

(i) La deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, a mediano y largo plazo

(ii)La existencia de barreras que puedan impedir al trabajador que sufre la deficiencia el ejercicio efectivo de su labor, en igualdad de condiciones con los demás.

En cuanto a las barreras, el artículo 2.5 de la Ley 1618 de 2013 señala que son «cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad». La Sala destaca que el término discapacidad empleado en este precepto debe entenderse como «algún tipo de deficiencia a mediano y largo plazo».

Dicha disposición, sin pretender realizar un listado exhaustivo, señala que las barreras pueden ser:

a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad;

b) Comunicativas: Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas.

c) Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad.

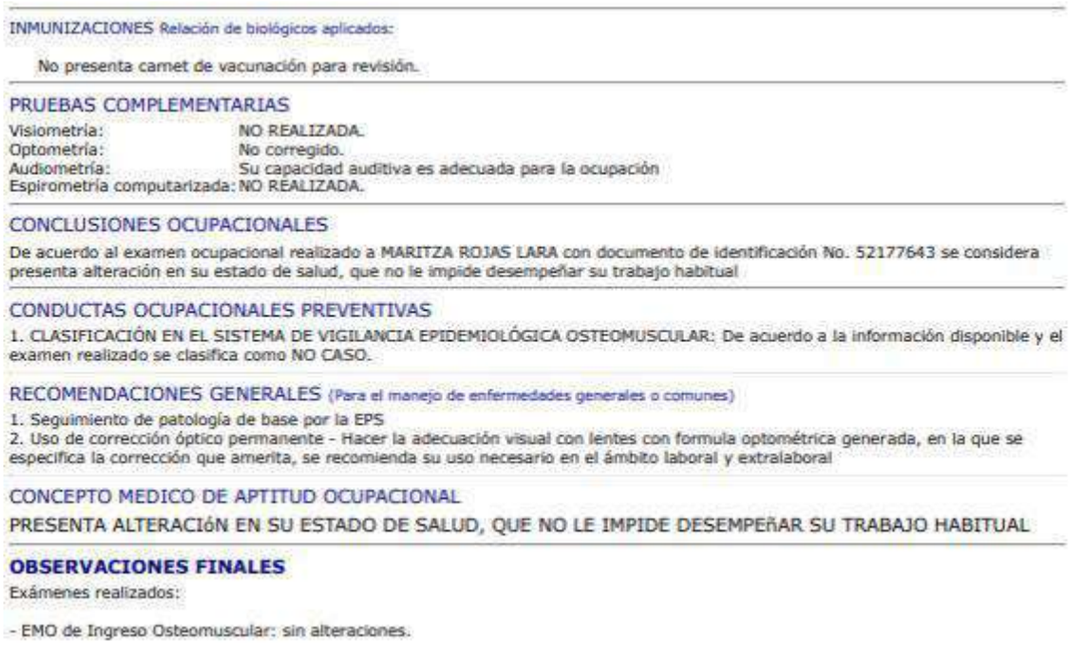
Al respecto, debe destacarse que, en el ámbito laboral, el trabajador tiene el derecho a que esas barreras comunicadas o conocidas por el empleador, sean mitigadas mediante los ajustes razonables en el trabajo que, según los define la convención en el artículo 2, consisten en:

[…] las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Por tanto, el empleador tiene la obligación de realizar los ajustes razonables para procurar la integración al trabajo regular y libre (artículo 27 de la convención), en iguales condiciones que las demás. Para tales efectos la Sala entiende por ajustes razonables, una lista no cerrada de medidas o adaptaciones que los empleadores pueden implementar para eliminar o mitigar esas barreras y permitir la plena participación de las personas con discapacidad en el trabajo.

*Asimismo, los ajustes razonables deben fundarse en criterios objetivos y no suponer «una carga desproporcionada o indebida» para el empleador. La determinación de la razonabilidad o proporcionalidad de los ajustes requeridos podrían variar, según cada situación, lo que implica para los empleadores hacer un esfuerzo razonable para identificar y proporcionar aquellos que sean imprescindibles para las personas con discapacidad. Y en caso de no poder hacerlos debe comunicarle tal situación al trabajador." (*SL1184-2023, radicación 91581 M.P. Omar Ángel Mejía Amador)

El análisis probatorio del plenario permite advertir que, si bien obra en el expediente prueba documental en la carpeta "anexos contestación", específicamente en el PDF 20, consistente en el examen ocupacional de fecha 29 de mayo de 2019, en el cual se consignó la observación "*presenta alteración en su estado de salud, que no le impide desempeñar su trabajo habitual*", dicha conclusión resulta altamente cuestionable para esta Sala. En primer lugar, el dictamen se encuentra desprovisto de las pruebas complementarias esenciales para evaluar la condición visual de la trabajadora, tales como visiometría y optometría, de las cuales se registra "*no realizada*" y "*no corregido*", lo cual genera una seria duda sobre la practicidad del examen médico practicado. La omisión de dichas pruebas es particularmente grave, dado que la principal afectación de la demandante era de naturaleza oftalmológica, circunstancia que debía ser objeto de un análisis clínico exhaustivo para determinar el impacto real de su condición en el ejercicio de sus funciones laborales.



INMUNIZACIONES Relación de biológicos aplicados:

No presenta carnet de vacunación para revisión.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

Visiometría: NO REALIZADA.
Optometría: No corregido.
Audiometría: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación
Espirometría computarizada: NO REALIZADA.

CONCLUSIONES OCUPACIONALES

De acuerdo al examen ocupacional realizado a MARITZA ROJAS LARA con documento de identificación No. 52177643 se considera presenta alteración en su estado de salud, que no le impide desempeñar su trabajo habitual

CONDUCTAS OCUPACIONALES PREVENTIVAS

1. CLASIFICACIÓN EN EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA OSTEOMUSCULAR: De acuerdo a la información disponible y el examen realizado se clasifica como NO CASO.

RECOMENDACIONES GENERALES (Para el manejo de enfermedades generales o comunes)

1. Seguimiento de patología de base por la EPS
2. Uso de corrección óptico permanente - Hacer la adecuación visual con lentes con formula optométrica generada, en la que se especifica la corrección que amerita, se recomienda su uso necesario en el ámbito laboral y extralaboral

CONCEPTO MEDICO DE APTITUD OCUPACIONAL

PRESENTA ALTERACIÓN EN SU ESTADO DE SALUD, QUE NO LE IMPIDE DESEMPEÑAR SU TRABAJO HABITUAL

OBSERVACIONES FINALES

Exámenes realizados:

- EMO de Ingreso Osteomuscular: sin alteraciones.

Aunado a lo anterior, los testimonios de Gennys Alfonso Álvarez y Erwin Robles García ratifican que la limitación visual de la trabajadora era evidente y notoria a simple vista, lo que pone de manifiesto que la empresa tenía pleno conocimiento de su condición de salud, al punto de que incluso los clientes notaban la afectación visual de la demandante. A su vez, el interrogatorio de parte rendido por la representante legal de la demandada, así como la declaración de la testigo Dabeiba Rodríguez, refuerzan esta conclusión, al admitir que la empleadora tenía conocimiento de las dolencias visuales de la trabajadora.

Esta prueba testimonial se complementa con el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca, el cual determinó un 30% de pérdida de la capacidad laboral, con fecha de estructuración 31 de mayo de 2018. Resulta relevante destacar que, en audiencia, el médico perito citado fue categórico al afirmar: *"se constata que es un ojo derecho ciego"*, *"se encuentra en fase terminal de glaucoma"*, precisando que la *"fase terminal significa que ya perdió el ojo"*. Estas aseveraciones refuerzan la conclusión de que la demandante padecía una afectación visual severa y permanente, lo que imponía al empleador el deber de evaluar rigurosamente su capacidad funcional y adoptar las medidas de adaptación necesarias.

El dictamen establece con claridad que el inicio sintomático de la demandante se remonta al año 2004, es decir, antes del inicio de la relación laboral. Asimismo, fija la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral en el 31 de mayo de 2018, lo que significa que su condición de discapacidad se encontraba plenamente consolidada antes de la terminación del contrato de trabajo, ocurrida el 20 de junio de 2019. No obstante, el dictamen fue emitido el 20 de abril de 2023, lo que, si bien implica una valoración posterior al despido, no desvirtúa la existencia previa de la afectación.

En este sentido, el perito fue enfático al señalar que la demandante carece de visión en su ojo derecho, que dicha condición es irreversible y que el dictamen da cuenta de las patologías con las que contaba la trabajadora al momento del despido. Esto

evidencia que la afectación visual no solo era preexistente, sino que ya generaba limitaciones funcionales concretas al momento de la terminación del contrato, por lo que el empleador no podía sustraerse de la obligación de valorar la incidencia de dicha discapacidad en el desempeño laboral y garantizar el respeto a la estabilidad reforzada de la trabajadora.

Frente a este panorama, resulta absolutamente irrazonable y contrario a los principios de seguridad y salud en el trabajo que, en el examen ocupacional periódico del 29 de mayo de 2019, no se hayan practicado las evaluaciones médicas complementarias indispensables para establecer el estado real de su capacidad visual. La omisión de dichas pruebas es aún más reprochable si se tiene en cuenta que la trabajadora contaba únicamente con un ojo viable, el cual, debido al uso constante de computador en el desempeño de sus funciones, estaba expuesto a un riesgo adicional de deterioro. Adicionalmente, según consta en el referido examen ocupacional, en las observaciones finales únicamente se consignó la evaluación "examen de ingreso osteomuscular: sin alteraciones", sin que se hubiese realizado ninguna prueba relacionada con la visión, lo que denota una grave deficiencia en la valoración médica realizada por la empleadora.

En este contexto, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de la Protección Social, norma que se desarrolla conforme al Decreto 614 de 1984, el cual impone a los empleadores la obligación de organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de salud ocupacional. En particular, el artículo 3, de la Resolución 2346 de 2007, establece de manera expresa que "El empleador deberá ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como posincapacidad o por reintegro, para identificar condiciones de salud que puedan verse agravadas o que puedan interferir en la labor o afectar a terceros, en razón de situaciones particulares". En consecuencia, la ausencia de pruebas específicas para evaluar la capacidad visual de la trabajadora constituye un incumplimiento flagrante de las obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente considerando que la demandante presentaba incapacidades recurrentes durante el año 2018, ya reconocidas por la propia parte demandada en la contestación de la demanda en réplica del hecho 11 de la misma como se explicó en precedencia.

A partir de lo expuesto, se evidencia que la empresa no adoptó los ajustes razonables necesarios para adaptar las condiciones laborales de la trabajadora a su realidad de salud, lo que constituye una vulneración directa al principio de igualdad en el ámbito laboral. En efecto, el empleador no puede aplicar un tratamiento homogéneo a trabajadores que presentan condiciones de salud significativamente distintas, como ocurrió en este caso, donde la demandante fue sometida a las mismas exigencias en el cumplimiento de metas comerciales que sus compañeros, sin que se considerara su afectación visual y las dificultades que esta representaba en el desempeño de sus funciones. Si bien es cierto que no obra prueba documental de sus incapacidades, la deficiencia física de la trabajadora era evidente a simple vista, conforme lo manifestaron sus compañeros de trabajo, lo que impone al empleador una obligación reforzada de implementar medidas especiales para garantizar que la trabajadora pudiera desarrollar su labor en condiciones justas y equitativas.

En el presente caso, la estabilidad laboral reforzada de la demandante debe ser analizada bajo el prisma del principio de libertad probatoria y formación del convencimiento del juez, conforme lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia. Si bien el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá D.C. y Cundinamarca fue emitido con posterioridad a la terminación del contrato, su contenido permite establecer que, para la fecha del despido, la demandante ya se encontraba en una condición de discapacidad que le generaba limitaciones sustanciales en el ejercicio de su labor.

El dictamen certifica una pérdida de capacidad laboral del 30% con fecha de estructuración el 31 de mayo de 2018, es decir, más de un año antes de la terminación del contrato. Además, el perito médico que compareció en audiencia ratificó que la demandante padecía ceguera en su ojo derecho y que la patología se encontraba en fase terminal, lo que significa que la afectación era irreversible y permanente. En este sentido, no se trata de una condición meramente subjetiva o transitoria, sino de una discapacidad consolidada, es decir, afectación a largo plazo que le generaba barreras en el ejercicio de su labor respecto de sus compañeros, mismas que debían ser valoradas por el empleador antes de proceder a la terminación del vínculo laboral.

> "Ahora bien, la estabilidad laboral aquí analizada surge a partir de la existencia de una condición de discapacidad para lo cual lo ideal es contar con una evaluación de carácter técnico científico que valore el estado real del trabajador y su afectación; sin embargo, en virtud del principio de libertad probatoria y formación del convencimiento, en el evento de que no exista la evaluación referida, el juez del trabajo puede inferir la afectación o limitación del estado de salud del servidor, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, y precedido de elementos que constaten la necesidad del amparo, por tener, entre otros, restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo o encontrarse en tratamiento médico especializado.
>
> Frente a esta temática la Corte en providencia CSJ SL572-2021, reiterada en CSJ SL1251-2021 y CSJ SL1959- 2021, adoctrinó que:
>
> > [...] Por esta razón se destaca el carácter relevante que tiene una calificación técnica descriptiva del nivel de la limitación que afecta a un trabajador en el desempeño de sus labores; sin embargo, en virtud del principio de libertad probatoria y formación del convencimiento, en el evento de que no exista una evaluación y, por lo tanto, se desconozca el grado de la limitación que pone al trabajador en situación de discapacidad, esta limitación se puede inferir del estado de salud en que se encuentra, siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de elementos que constaten la necesidad de la protección, como cuando el trabajador viene regularmente incapacitado, se encuentra en tratamiento médico especializado, tiene restricciones o limitaciones para desempeñar su trabajo, cuenta con concepto desfavorable de rehabilitación o cualquier otra circunstancia que demuestre su grave estado de salud o la severidad de la lesión, que limita en la realización de su trabajo.

> Ahora, demostrada la limitación para trabajar o la situación de discapacidad, en virtud de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el empleador debe contar con la autorización de las autoridades del trabajo para efectuar despidos unilaterales y sin justa causa, sin que le sea exigible al trabajador la prueba de la razón real de la decisión del despido, por resultar desproporcionado." (SL 3432 del 2024)

De acuerdo con la doctrina jurisprudencial invocada, en ausencia de una calificación técnica al momento del despido, la limitación puede inferirse de los elementos probatorios que constaten la necesidad de protección, tales como las incapacidades médicas recurrentes, la necesidad de tratamiento especializado y las restricciones funcionales que dificultaban el desempeño laboral en condiciones normales. En este caso, el conjunto probatorio permite concluir que la demandante se encontraba en una situación de vulnerabilidad que imponía al empleador un deber reforzado de protección y adaptación de sus funciones, lo que, a su vez, restringía su facultad unilateral de terminación del contrato.

Es importante resaltar que, si bien la parte apelante ha argumentado que no estaba en conocimiento del porcentaje exacto de pérdida de capacidad laboral al momento del despido, dicha omisión no exonera a la empresa de su responsabilidad. La jurisprudencia ha sido clara al establecer que no es indispensable que el empleador conozca el grado exacto de discapacidad al momento de la terminación del contrato para que se configure la protección de estabilidad laboral reforzada, pues basta con que la condición de debilidad manifiesta sea conocida o debidamente inferida a partir de las circunstancias evidentes. En este caso, las evidencias presentadas, demuestran de manera contundente que la empresa tenía conocimiento de su afectación. En consecuencia, la empresa estaba obligada a garantizar un debido proceso que le permitiera determinar, con base en un análisis riguroso, si el despido de la trabajadora era posible bajo las circunstancias, o si, por el contrario, debía solicitar la autorización previa del Ministerio del Trabajo, conforme lo establece el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Al omitir esta verificación, la empresa vulneró de manera grave los derechos de la trabajadora, haciendo improcedente el despido ejecutado en su contra.

Justa Causa y Cumplimiento de Metas: Análisis de la Relación entre la Condición de Salud y el Desempeño Laboral

La terminación del contrato de trabajo de la señora Maritza Rojas Lara bajo la causal de incumplimiento de metas comerciales debe ser evaluada en función de su condición de salud y los estándares legales aplicables a la evaluación de rendimiento laboral. La imposición de metas equivalentes a las exigidas a sus compañeros, quienes no sufrían las mismas limitaciones de salud, coloca a la trabajadora en una posición de desventaja, lo cual debió ser considerado por el empleador al momento de fijar las metas de desempeño. La condición visual severa de la demandante, documentada y corroborada por testigos, hacía imperativo que el empleador adoptara medidas de ajuste razonable, en cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación.

La jurisprudencia ha sido clara en señalar que, en casos de debilidad manifiesta, el empleador está obligado a realizar los ajustes necesarios para asegurar que el trabajador pueda desempeñar sus funciones sin que su discapacidad le imponga barreras adicionales que impidan su pleno desarrollo. En el presente caso, **COMCEL S.A.** no realizó los ajustes razonables correspondientes y sometió a la demandante a cumplir metas idénticas a las de sus compañeros en condiciones de salud óptimas, lo cual resultó en una exigencia desproporcionada y no ajustada a su capacidad real.

El análisis de la terminación del contrato de trabajo de la señora Maritza Rojas Lara debe abordarse desde una doble perspectiva: la causal invocada por la empleadora y el procedimiento que debía seguirse para justificar el despido. En la carta de terminación del contrato, COMCEL S.A. fundamentó la desvinculación en la causal 6 del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), en remisión expresa al numeral 1 del artículo 58 del CST, el cual impone al trabajador la obligación de "realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartan el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido". En consecuencia, el análisis jurídico debe centrarse en determinar si efectivamente hubo un incumplimiento grave de las funciones de la trabajadora y si este justificaba la terminación del vínculo laboral.

No obstante, al revisar los fundamentos expuestos en la carta de terminación del contrato, se advierte que los argumentos de la empleadora se sustentan en el presunto incumplimiento de metas comerciales, lo que, en principio, se enmarcaría dentro del concepto de bajo rendimiento laboral. En tal sentido, si bien la causal formalmente invocada fue la del numeral 1 del artículo 58 del CST, en remisión expresa al numeral 6 del artículo 62 del CST, los hechos descritos en el documento de terminación del contrato llevan a concluir que, en la práctica, se trató de un despido por insuficiencia en el desempeño laboral, lo que exigiría la aplicación del procedimiento de terminación unilateral por rendimiento deficiente consagrado en el artículo 2.2.1.1.3 del Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) . Dicho procedimiento establece que, antes de proceder con la terminación unilateral del contrato por bajo rendimiento, el empleador debía cumplir con las siguientes etapas:

> *"ARTÍCULO 2.2.1.1.3. Procedimiento terminación unilateral por rendimiento deficiente. Para dar aplicación al numeral 9) del artículo 70. del Decreto 2351 de 1965, el empleador deberá ceñirse al siguiente procedimiento:*
> *1. Requerirá al trabajador dos (2) veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho (8) días.*
> *2. Si hechos los anteriores requerimientos el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a éste un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes; y*
> *3. Si el empleador no quedare conforme con las justificaciones del trabajador, así se lo hará saber por escrito dentro de los ocho (8) días siguientes."*

En el expediente no obra prueba alguna de que la empleadora hubiera agotado este procedimiento antes de proceder con el despido de la trabajadora, lo que evidencia

un desconocimiento del debido proceso en la terminación del contrato, aun cuando su justificación material parece corresponder a una insuficiencia en el cumplimiento de metas. Esta omisión no solo desconoce las garantías fundamentales del trabajador en relación con el debido proceso, sino que también desvirtúa la presunción de que el despido se basó en una causal objetiva y debidamente probada.

Por tanto, la Sala considera que la terminación del contrato no se ajustó a los requisitos normativos exigidos, ya que, si la intención del empleador era desvincular a la trabajadora por bajo rendimiento, debía sujetarse a las exigencias del Decreto 1072 de 2015 y otorgarle la oportunidad de mejorar su desempeño antes de adoptar la decisión de despido. Así mismo, si la causal invocada correspondía efectivamente a una falta grave, debía probarse de manera fehaciente el incumplimiento de funciones y su gravedad, cuestión que no se evidencia con suficiencia en el expediente, pues tampoco se adjuntó copia del Reglamento Interno de Trabajo de COMCEL S.A. al que se hace referencia en la carta de terminación.

En consecuencia, se concluye que COMCEL S.A. no cumplió con los requisitos legales exigidos para proceder con la terminación del contrato de trabajo, tanto en lo relativo a la protección de estabilidad laboral reforzada por la condición de debilidad manifiesta de la trabajadora, como en lo concerniente al procedimiento aplicable a la terminación unilateral por presunto rendimiento deficiente. La omisión de estos requisitos procesales y sustantivos lleva a inferir que la terminación del contrato de trabajo se efectuó sin observar las garantías mínimas de protección al trabajador, razón por la cual resulta improcedente desde el punto de vista jurídico.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad parcial del recurso presentado por la parte demandada, se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo la sentencia proferida el día 07 de marzo del 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte **DEMANDADA COMCEL S.A**. en favor de la demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación

de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 073.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada-OBSERVADO

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de uno y medio (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	CARLOS ANTONIO SERNA TAPIAS
Parte demandada	COLPENSIONES - PORVENIR
Radicación	11001310503020230001401
Fecha de la decisión	18 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA DE TRASLADO
Acta de Discusión	060
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503020230001401

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes demandadas, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 18 de noviembre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

Carlos Antonio Serna Tapias, por intermedio de su apoderada judicial, presentó demanda ordinaria laboral en contra de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, con el propósito de que se declare la ineficacia de su traslado y afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, con fundamento en la presunta falta de asesoría adecuada y omisión en la entrega de información veraz, clara, cierta y suficiente sobre las implicaciones de dicho traslado. En consecuencia, solicitó que se declare que su afiliación a Colpensiones se mantuvo vigente sin solución de continuidad y, como efecto de lo anterior, que se ordene a Porvenir S.A. transferir a Colpensiones la totalidad de los aportes, rendimientos, frutos, intereses, comisiones, seguros previsionales y gastos de administración, debidamente indexados. Así mismo, requirió la activación de su afiliación al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, con la consecuente actualización de su historia laboral, el reconocimiento de perjuicios morales y la condena en costas del proceso.

Como sustento fáctico de su pretensión, el demandante adujo que inicialmente se afilió al Instituto de Seguros Sociales –hoy Colpensiones– y cotizó en dicho régimen desde el 16 de septiembre de 1986 hasta el 30 de junio de 1997, acreditando un total de 413.57 semanas. Posteriormente, el 27 de junio de 1997, se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad, afiliándose a la Administradora de Fondos de Pensiones Colpatria –hoy Porvenir S.A.–, y en una segunda oportunidad, el 11 de enero de 2000, realizó una nueva afiliación directa con la mencionada administradora. Sostiene que dicho traslado y afiliación se realizaron sin que los asesores de la entidad demandada le informaran de manera clara, oportuna y suficiente sobre las consecuencias jurídicas de su decisión, ni le proporcionaron una comparación objetiva entre los regímenes de prima media y ahorro individual, omitiendo la entrega de una proyección pensional detallada.

En el plano jurídico, la parte actora fundamentó su demanda en la obligación legal y jurisprudencial de las administradoras de fondos de pensiones de suministrar información precisa, completa y veraz sobre las características de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda tomar una decisión informada. Alegó que la falta de asesoría y el desconocimiento de aspectos esenciales, como la restricción a la movilidad entre regímenes establecida en la Ley 797 de 2003, afectaron de manera sustancial su derecho a la pensión, pues le impidieron evaluar correctamente las condiciones en que se reconocería su derecho a la prestación. En esa medida, afirmó que su traslado se encuentra viciado de nulidad, por cuanto careció del consentimiento informado que exige el ordenamiento jurídico.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 03 de marzo del 2023 (pdf 03), luego, con providencia del 04 de marzo del 2024 (pdf 10), tuvo por contestada la demanda por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES y SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS - PORVENIR S.A. y fijó fecha para celebración de audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 05)

Colpensiones, a través de su apoderado judicial, respondió la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas y solicitando su absolución. Argumentó que la afiliación y traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fueron producto de una decisión autónoma y libremente adoptada, sin que existiera vicio en su consentimiento. Enfatizó que el actor, tras más de veinticinco años de cotización ininterrumpida en dicho régimen, no manifestó inconformidad alguna hasta la solicitud de retorno a Colpensiones, la cual fue rechazada conforme

al artículo 2 de la Ley 797 de 2003, que prohíbe el traslado de afiliados con menos de diez años para cumplir la edad de pensión.

Como fundamento jurídico de su oposición, la administradora adujo la presunción de legalidad de los actos administrativos y la imposibilidad de aplicar con efecto retroactivo normativas expedidas con posterioridad al traslado del demandante, como la exigencia de doble asesoría establecida en la Ley 1328 de 2009. Así mismo, sostuvo que el deber de información es una carga compartida entre la administradora y el afiliado, quien, en su calidad de consumidor financiero, debía asumir un rol activo en la verificación de las condiciones del régimen escogido. Reiteró que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento, pues el ordenamiento jurídico es de obligatorio conocimiento para todos los ciudadanos, conforme lo ha establecido reiteradamente la jurisprudencia.

En su defensa, Colpensiones propuso las siguientes excepciones de fondo: posibilidad de condena a la AFP privada para que trate al demandante conforme a las reglas del Régimen de Prima Media, en caso de verificarse una omisión en la información brindada; aplicación del precedente de la sentencia SL 373 de 2021, según la cual, los casos en que la parte demandante se trate de una persona que ya se encuentre pensionada en el RAIS, no podría declararse la ineficacia de traslado; prescripción de la acción, conforme al artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, dado el prolongado tiempo de afiliación al RAIS sin impugnación alguna; cobro de lo no debido, ya que el demandante pretende beneficiarse de las condiciones del Régimen de Prima Media sin haber contribuido a su sostenibilidad financiera; y buena fe, al haber obrado Colpensiones dentro del marco normativo aplicable.

Por último, reiteró la improcedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado, ya que este se efectuó conforme a la normatividad vigente y no existe disposición que permita su anulación con base en regulaciones posteriores. Adicionalmente, argumentó que permitir el traslado forzoso de afiliados al Régimen de Prima Media sin que hubiesen efectuado aportes suficientes para su financiación generaría un grave impacto en la sostenibilidad financiera del sistema pensional, afectando los principios de solidaridad y equidad previstos en el artículo 48 de la Constitución Política. En consecuencia, solicitó que se denegaran todas las pretensiones del demandante y, de ser el caso, se impusieran las costas procesales a la parte actora.

I.3.2. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS - PORVENIR S.A. (PDF 06)

Porvenir S.A., a través de su apoderada judicial, contestó la demanda oponiéndose a la totalidad de las pretensiones e insistiendo en la legalidad del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Señaló que dicho traslado fue producto de una decisión informada y libremente adoptada por el afiliado, quien suscribió los documentos respectivos sin acreditar la existencia de vicio del consentimiento. Sostuvo que la obligación de brindar doble asesoría sobre los regímenes pensionales no existía al momento del traslado y que no es posible aplicar normas expedidas con posterioridad, como la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2071 de

2015, para cuestionar la validez de una afiliación realizada en vigencia de la normatividad anterior.

En respaldo de su oposición, propuso las excepciones de prescripción e improcedencia de la acción de nulidad, advirtiendo que el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece un término de prescripción que ya se encuentra extinguido, pues el demandante permaneció afiliado al RAIS por más de dos décadas sin formular reclamo alguno. Alegó que la prescripción opera igualmente respecto de la supuesta nulidad del traslado, dado que la acción no fue ejercida dentro de los plazos legales. Además, invocó la excepción de cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, argumentando que no puede pretenderse el reconocimiento de una pensión conforme a las reglas del Régimen de Prima Media cuando el demandante realizó sus aportes en el esquema de capitalización individual y percibió los beneficios propios de dicho régimen.

Finalmente, Porvenir S.A. formuló la excepción de buena fe, resaltando que actuó conforme a la normatividad vigente, en el marco de la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia y sin incurrir en irregularidad alguna en el manejo de los aportes del demandante. Afirmó que la información brindada en el proceso de afiliación cumplió con las disposiciones aplicables para la época y que, en todo caso, el afiliado tenía el deber de informarse sobre las condiciones del sistema pensional. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se desestimaran las pretensiones del actor.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video pdf 16 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 18 de noviembre de 2024, decidió declarar ineficaz el traslado de régimen pensional efectuado por Carlos Antonio Serna Tapias el 27 de junio de 1997, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por el extinto Instituto de los Seguros Sociales (ISS), hoy COLPENSIONES, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), a través de la AFP Colpatria, actualmente Porvenir S.A. Asimismo, resolvió que el actor quedará válidamente vinculado al RPM sin solución de continuidad, y condenó a Porvenir S.A. a transferir a Colpensiones todos los valores que reposan en la cuenta de ahorro individual del demandante, incluidos los rendimientos y las comisiones cobradas por administración, seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados.

En el análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos, el juzgado destacó la existencia de posiciones totalmente antagónicas entre las partes. El demandante alegó que su traslado al RAIS fue realizado sin recibir la información suficiente sobre las implicaciones de dicha decisión, lo que viciaba su consentimiento. Por su parte, las entidades demandadas, COLPENSIONES y AFP Porvenir S.A., se opusieron a las pretensiones, argumentando la legalidad del procedimiento y la inexistencia de omisión en el deber de información. No obstante, el despacho, tras valorar las pruebas aportadas, concluyó que el traslado careció de la asesoría adecuada y que el

demandante no recibió la información necesaria para tomar una decisión informada sobre su futuro pensional.

El juzgado sustentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como en la reciente sentencia de unificación SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional, que establece que la ineficacia del traslado pensional procede en aquellos casos donde las administradoras de fondos de pensiones omiten su deber de información. El análisis evidenció que Porvenir S.A. no demostró haber cumplido con este deber, lo que llevó al operador judicial a concluir que el traslado del demandante al RAIS fue ineficaz. En consecuencia, se ordenó la transferencia de los fondos a COLPENSIONES y la actualización de la historia laboral del actor para garantizar sus derechos pensionales bajo las normas del Régimen de Prima Media.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADAS

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (min 01:32:50 video pdf 16)

El apoderado de AFP Porvenir S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando que se revoque la decisión que declaró la ineficacia del traslado de Carlos Antonio Serna Tapias al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y las condenas derivadas de dicha declaratoria. Sostuvo que el traslado se realizó de manera voluntaria y consciente, en cumplimiento de la normatividad vigente al momento de la afiliación. Argumentó que la sentencia incurrió en un error de interpretación al asumir que la falta de asesoría detallada constituye, por sí sola, causal suficiente para declarar la ineficacia del traslado, desconociendo que el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento. Resaltó que el demandante tuvo acceso a la información general del sistema pensional consagrada en la Ley 100 de 1993 y que la carga de informarse sobre las características del régimen también recae sobre el afiliado en su calidad de consumidor financiero.

Por otro lado, la apelante objetó la condena que le impone la obligación de transferir a Colpensiones no solo los aportes y rendimientos acumulados en la cuenta individual del demandante, sino también las primas de seguros previsionales, los gastos administrativos y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, con cargo a sus propios recursos. Alegó que la sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional estableció límites claros en este aspecto, precisando que la devolución de dichos conceptos no procede, dado que los costos de administración y seguros corresponden a servicios efectivamente prestados y riesgos asumidos durante la afiliación. Además, indicó que el traslado de los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima representaría un enriquecimiento sin causa para el Régimen de Prima Media (RPM), afectando la sostenibilidad del RAIS. Finalmente, solicitó que, en caso de no prosperar la revocatoria total, se modifique la sentencia en lo relativo a los conceptos económicos condenados y su indexación, excluyendo los valores que no corresponden estrictamente a los aportes y rendimientos de la cuenta individual.

Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones (min 01:37:54 video pdf 16)

El apoderado de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2024 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando que se revoque en su totalidad la decisión y absuelva a su representada de todos los cargos impuestos. Argumentó que la sentencia no aplica de manera íntegra la Ley 100 de 1993, desconociendo el principio de inescindibilidad. Además, resaltó que el demandante ratificó su permanencia en el Régimen de Ahorro Individual (RAIS) durante más de 20 años, realizando traslados horizontales y beneficiándose de las características propias de este régimen, claramente diferenciadas del Régimen de Prima Media (RPM). Sostuvo que esta conducta demuestra una conformidad tácita y continuada, lo que desvirtúa cualquier alegación de desinformación inicial.

Adicionalmente, COLPENSIONES advirtió que la declaratoria de ineficacia afecta la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y compromete el principio de equidad al permitir que personas que no contribuyeron adecuadamente al régimen de prima media accedan a pensiones subsidiadas, en detrimento de quienes sí asumieron los riesgos y cotizaciones correspondientes. Argumentó que esta situación genera una descapitalización injustificada del fondo público y desvirtúa el valor de la justicia material al permitir que afiliados que no cumplieron con los requisitos necesarios, como el demandante, obtengan beneficios no merecidos. En caso de que la Sala confirme la sentencia apelada, solicitó que el cumplimiento del fallo por parte de COLPENSIONES se condicione a la devolución previa y completa de todas las sumas sobrantes en la cuenta de ahorro individual del actor, incluidos aportes, rendimientos financieros, bonos pensionales, gastos de administración y descuentos por seguros previsionales, todos debidamente indexados. Asimismo, que no se le impongan costas en ninguna de las instancias, toda vez que no participó en el acto que se presume ineficaz y su actuación se limitó a respetar el traslado voluntario y prolongado del demandante al RAIS.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de las partes demandadas, el despacho de conocimiento, con auto de 06 de diciembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

CARLOS ANTONIO SERNA TAPIAS (pdf 04 segunda instancia)

La apoderada de Carlos Antonio Serna Tapias presentó sus alegatos de conclusión solicitando se confirme íntegramente la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2024 por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá. En sus argumentos, la apoderada reiteró que las pruebas aportadas y debidamente valoradas en primera instancia demostraron la omisión del deber de información por parte de AFP Porvenir S.A., lo que vicia el consentimiento del demandante y justifica la declaratoria de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Señaló que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la reciente sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional, corresponde a las administradoras de fondos de pensiones demostrar que cumplieron con su obligación de brindar información clara, precisa y suficiente al momento del traslado, carga probatoria que no fue satisfecha en el presente caso.

La apoderada enfatizó que no existen pruebas documentales que acrediten que el demandante recibió asesoría adecuada sobre las características, ventajas y desventajas de los regímenes pensionales. El formulario de afiliación suscrito por el actor no contiene información detallada sobre las modalidades de pensión, montos requeridos, posibilidad de aportes voluntarios ni las implicaciones económicas del traslado. Además, las demandadas no demostraron la idoneidad del asesor que gestionó el traslado ni aportaron evidencia sobre la entrega del reglamento de derechos y deberes al afiliado. En consecuencia, la falta de asesoría y la omisión en el deber de información llevaron al actor a tomar una decisión desinformada, vulnerando su derecho a la seguridad social. Por lo tanto, solicitó que se mantenga la declaratoria de ineficacia y las condenas impuestas en primera instancia, considerando la jurisprudencia aplicable y el principio de favorabilidad al trabajador.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. (pdf 05 segunda instancia)

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., a través de su apoderada, presentó sus alegatos de conclusión sosteniendo que la sentencia de primera instancia incurrió en errores al declarar la ineficacia del traslado del señor Carlos Antonio Serna Tapias del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). La defensa argumenta que no se cumplen los presupuestos jurídicos para dicha declaratoria, resaltando que el traslado se realizó conforme a la normativa vigente, incluyendo el cumplimiento del principio de libre escogencia de régimen pensional consagrado en el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Señalan, además, que el formulario de afiliación suscrito por el demandante no puede considerarse un mero requisito formal, pues constituye una manifestación válida de su voluntad, respaldada por el hecho de que el demandante permaneció en el RAIS por más de veinte años sin ejercer su derecho de retracto, aun cuando tuvo múltiples oportunidades legales para regresar al RPM.

Porvenir sostiene que la falta de diligencia en la búsqueda de información sobre las implicaciones del traslado no puede atribuirse exclusivamente a la administradora, ya

que el demandante tenía la responsabilidad de indagar y exigir la asesoría necesaria. En este sentido, argumentan que la diferencia en la mesada pensional entre los dos regímenes no constituye, por sí sola, una causal válida para la ineficacia del traslado, y que el verdadero reproche del demandante radica en su descontento económico, no en una supuesta omisión en el deber de información. Además, Porvenir señala que la devolución de los valores indexados ordenada por el fallo de primera instancia representa una doble sanción, dado que los rendimientos financieros obtenidos en la cuenta individual ya compensan la depreciación monetaria, por lo que solicitan la revocatoria de este aspecto de la sentencia.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por las partes demandadas y el grado jurisdiccional de consulta.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante y las partes demandadas, y otorgado en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el traslado efectuado por el demandante del RPM al RAIS resulta ineficaz, y de salir avante tal declaración se procederá a verificar cuáles son las consecuencias jurídicas que tal declaratoria de ineficacia conllevaría.

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del análisis fáctico y probatorio del presente litigio, resulta indispensable delimitar los hechos que, por su naturaleza incontrovertida, no requieren de mayor análisis, así como aquellos que, por su controversia, constituyen el núcleo de la Litis y deberán ser objeto de valoración jurídica por parte del despacho. Esta distinción no solo facilita la precisión en la conducción del proceso, sino que también permite centrar el debate en los puntos neurálgicos de la controversia, conforme al principio de economía procesal y al mandato de garantizar una resolución justa y expedita.

No son objeto de controversia los siguientes hechos: (i) la afiliación inicial del señor Carlos Antonio Serna Tapias al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por el extinto Instituto de los Seguros Sociales (ISS), hoy COLPENSIONES, desde el 16 de septiembre de 1986 hasta el 30 de junio de 1997; (ii) su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) mediante la suscripción de un formulario de afiliación con AFP Colpatria (hoy Porvenir S.A.) el 27 de junio de 1997, con efectividad a partir del 1 de agosto de 1997, y una segunda vinculación directa con Porvenir S.A. el 11 de enero de 2000; y (iii) la validez formal de dichos documentos de afiliación, en cuanto a su suscripción y recepción por parte de la administradora de pensiones.

Por el contrario, subsisten como aspectos objeto de controversia: (i) la verificación del cumplimiento del deber de información cualificada por parte de la administradora demandada, Porvenir S.A., que exige la entrega de asesoría clara, precisa y suficiente

sobre los beneficios, riesgos y características diferenciadoras de ambos regímenes pensionales, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la reciente sentencia de unificación SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional; (ii) la existencia de vicios en el consentimiento del señor Serna Tapias al momento de los traslados, derivados de la presunta omisión de dicho deber de información, y la posible nulidad o ineficacia de dichos actos jurídicos; (iii) la procedencia de las excepciones propuestas por las demandadas, tales como la prescripción de la acción, la aceptación tácita de las condiciones del RAIS por la permanencia prolongada en el régimen, y la inexistencia de la obligación de revertir el traslado por falta de prueba de desinformación efectiva; y (iv) la responsabilidad que podría recaer sobre Porvenir S.A. por el presunto impacto negativo en los derechos pensionales del demandante, en términos de su congrua subsistencia y la protección de su derecho a la seguridad social, así como la obligación de transferir valores adicionales como los gastos de administración, seguros previsionales y aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuya devolución ha sido controvertida en sede de apelación.

Esta distinción preliminar permite encauzar el análisis hacia la determinación de si el traslado al RAIS estuvo acompañado de las garantías mínimas legales y constitucionales, así como si concurren los presupuestos jurídicos para declarar su ineficacia y, en consecuencia, restablecer la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Sobre el deber de información al surtirse el traslado de régimen pensional

Sentado lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021, SL 509 de 2024 y SL 2999 de 2024, tiene acentuado

que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 "*…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…*", lo cual hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	**Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información**	**Contenido mínimo y alcance del deber de información**
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.

Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, pues frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

> *"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas.*
>
> *Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.*
>
> *(…)*
>
> *También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información*

fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.

También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

De este modo, habida cuenta de que la accionante, conforme a la solicitud de vinculación del 28 de junio de 1997 (archivo 01, folio 30), efectuó su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en junio de 1997, a través de la AFP Colpatria, el posterior traslado a la AFP Porvenir S.A. con número de solicitud No. 01293279 del 11 de enero del 2000 (archivo 01, folio 31) y atendiendo tanto los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL 2999 de 2024) como los desarrollos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024 la carga probatoria recae sobre la administradora de fondos de pensiones para demostrar que el traslado de régimen fue adoptado por el afiliado de manera libre y voluntaria, habiéndole proporcionado información suficiente, veraz y comprensible acerca de las características, condiciones de acceso, implicaciones y riesgos inherentes a cada uno de los regímenes pensionales disponibles.

Sobre la carga de la prueba – frente al cumplimiento del deber de información

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar en este caso que a la demandante al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de la AFP demandada, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Empero dicha postura, fue modulada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen

de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS..."*

Así pues, al sopesarse los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Corte Constitucional en la decisión previamente referida, se advierte que, en el caso sub examine, se arribaría a la misma conclusión a la que llegó el a quo, esto es, la procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

Caso concreto

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala concluye que no existe en el plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento cabal del deber de información por parte de la AFP Colpatria y Porvenir S..A al momento del traslado del demandante del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y los traslados horizontales realizados, pues los formularios aportados por las demandadas, no son tan siquiera prueba somera del cumplimiento al deber de información que le acaecía.

Aunado a lo antes expuesto, resulta improcedente la tesis esgrimida por la parte demandada, según la cual la permanencia del demandante en el RAIS convalida el traslado inicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en las sentencias SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, ha reiterado que los traslados horizontales entre AFP del mismo régimen no subsanan la falta de información en el momento del traslado inicial desde el RPM. El análisis central en estos litigios radica en verificar si, al momento del traslado, el afiliado recibió una información adecuada que le permitiera tomar una decisión

consciente y fundamentada, y no en evaluar su permanencia posterior en el RAIS ni los deberes adquiridos como afiliado (CSJ SL 1055-2022).

De otro lado, debe destacarse que el argumento de la AFP demandada, relativo a que la sola firma del formulario de afiliación implica una manifestación libre y voluntaria de voluntad por parte del afiliado, es insuficiente para cumplir con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.). En este contexto, incumbía a Porvenir S.A. demostrar que el asesor de servicios responsable de la afiliación cumplió con el deber legal de brindar una asesoría integral, proporcionando al afiliado una información comprensible y exhaustiva. La falta de acreditación de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que el traslado no se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables atrás vertidos.

En síntesis, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T. y S.S.), que faculta al juzgador para formar libremente su convicción mediante una apreciación integral y crítica del acervo probatorio, esta Sala concluye que la decisión de la demandante de trasladarse al RAIS adolece de los elementos de validez derivados de una elección consciente, autónoma e informada. No se encuentra acreditado que los asesores responsables del traslado hubieran desplegado una asesoría adecuada que incluyera una exposición clara y pormenorizada sobre las repercusiones del cambio de régimen, tales como los riesgos inherentes al RAIS, la necesidad de realizar cotizaciones adicionales, las consecuencias de no cumplir con el capital mínimo requerido para la pensión de vejez, la garantía de la pensión mínima, el régimen aplicable a la devolución de saldos, así como las diversas modalidades pensionales disponibles en el sistema. La omisión de estos aspectos esenciales evidencia un incumplimiento sustancial del deber de información, viciando así la decisión adoptada y afectando el derecho fundamental del afiliado a contar con una orientación precisa y completa que le permitiera sopesar los riesgos y beneficios de manera adecuada, conforme a los estándares de diligencia exigidos en el marco de la seguridad social integral.

En lo relativo a los efectos jurídicos derivados de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, resulta pertinente acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-107 de 2024, en la cual se señaló:

> "*…En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)*
>
> *(…)*
>
> *y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible*

ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 327).”

La decisión en cuestión, cabe señalar, se extiende de manera vinculante a todas las demandas que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria laboral, según lo establece el ordinal octavo, razón por la cual esta Sala acoge dicho pronunciamiento en su integridad. No obstante, se precisa que se mantendrá la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo que respecta al deber originario de las AFP de proporcionar asesoría integral y adecuada a sus potenciales afiliados, cuya omisión inevitablemente acarrea la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen.

Con fundamento en el precedente constitucional citado, esta Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de acoger parcialmente el recurso de apelación presentado por Porvenir S.A. En tal virtud, se dispone que no resulta viable ordenar el traslado del porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima, los gastos de administración ni las primas de seguros provisionales, tal como lo señala la sentencia SU-107 de 2024, limitando los efectos de la declaratoria de ineficacia al traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional, si este ha sido efectivamente redimido, por lo que tampoco se accederá a la petición de Colpensiones.

Análisis de las Excepciones Propuestas por Colpensiones

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se concluye que estas carecen de soporte jurídico para prosperar dentro del contexto del presente litigio. Respecto del cobro de lo no debido, debe señalarse que las consecuencias inherentes a la declaratoria de ineficacia del traslado, así como la afiliación originaria del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), imponen a Colpensiones la obligación de readmitirlo como afiliado. Este deber encuentra sustento en la normativa vigente y en los principios rectores de solidaridad y eficiencia que gobiernan el sistema de seguridad social integral. Aunque Colpensiones no tuvo participación directa en el acto jurídico de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), su posición como administrador del régimen inicial establece un vínculo jurídico ineludible que la obliga a asumir las consecuencias legales del restablecimiento del derecho pensional del demandante.

En lo concerniente a la excepción de inexistencia del derecho resulta improcedente, ya que las responsabilidades de Colpensiones derivan directamente de su rol en la administración del RPM, así como de los efectos legales que emanan de la afiliación originaria del demandante. Asimismo, el principio de buena fe, si bien invocado por Colpensiones, no opera como un mecanismo eximente de las responsabilidades inherentes a su condición de entidad garante del derecho fundamental a la seguridad social.

En lo que respecta a la excepción de prescripción planteada, se concluye que este medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, toda vez que el traslado de

régimen pensional afecta derechos inherentes al ser humano, los cuales, por su naturaleza fundamental, son imprescriptibles. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en pronunciamientos como las sentencias SL 3937-2018, SL 1688-2019 y SL 1949-2021, al reconocer que la acción para solicitar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen no puede estar sujeta a términos de prescripción, dado que no se trata de derechos de carácter patrimonial, sino de garantías esenciales vinculadas a la dignidad humana y a la seguridad social.

En relación con la excepción basada en el precedente establecido en la sentencia SL 373 de 2021, reiterado posteriormente en la SU 107 de 2024, esta Sala considera imperioso delimitar su aplicabilidad dentro del marco del caso concreto. Dichos precedentes estipulan que la calidad jurídica de pensionado constituye un estado consolidado que imposibilita la declaratoria de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), habilitando únicamente la vía para reclamar una indemnización de perjuicios, conforme Decreto 758 de 1990 y el Decreto 1833 de 2016. Sin embargo, su aplicación requiere de condiciones objetivas que, en el presente asunto, no se acreditan.

La calidad de pensionado exige el cumplimiento de un procedimiento administrativo específico, que establece la obligación del afiliado de presentar la solicitud de reconocimiento de pensión ante la entidad administradora correspondiente. Este requisito es reafirmado por el artículo [1]13 del Decreto 758 de **1990**, el cual exige no solo el cumplimiento de los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas, sino también la desafiliación formal del régimen para que se materialice el derecho pensional. Así, la consolidación jurídica de esta calidad requiere una manifestación expresa del afiliado, acompañada de los documentos necesarios, como condición sine qua non para su reconocimiento formal.

En el caso sub examine, no consta en el acervo probatorio que el demandante ostente la calidad jurídica de pensionado, ni fue un hecho objeto de discusión durante el desarrollo del proceso. Por lo tanto, se desvirtúa la aplicación del precedente invocado.

A partir de lo anterior, es claro que el estado jurídico del accionante no encuadra en los supuestos que impiden la declaratoria de ineficacia del traslado. La falta de consolidación de su calidad de pensionado implica que el traslado al RAIS puede ser examinado bajo los parámetros de legalidad y cumplimiento del deber de información, sin que ello suponga una colisión con el precedente judicial. En efecto, el análisis de las garantías mínimas que debían asistir al acto de traslado sigue siendo un aspecto susceptible de control judicial, máxime cuando se alega la ausencia de información cualificada, lo cual impacta de manera directa en los derechos fundamentales de la accionante.

En conclusión, la inexistencia de una pensión consolidada, unida a la omisión en la formulación de objeciones por parte de las demandadas, permite desestimar la

---

[1] **Causación y disfrute de la pensión por vejez.** La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.

excepción basada en el precedente jurisprudencial. Ello legitima, por tanto, la declaratoria de ineficacia del traslado y la consecuente restitución de derechos de la accionante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales vigentes.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala procederá a la modificación parcial de la sentencia de primera instancia, confirmando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante. Tal determinación se adopta en observancia estricta del marco normativo y jurisprudencial vigente, atendiendo particularmente al precedente establecido en la sentencia SU-107 de 2024, cuyo alcance y obligatoriedad fueron analizados en el desarrollo del presente litigio.

Así las cosas, se declaran resueltas las apelaciones interpuestas por las partes, estimando parcialmente los argumentos del apelante Porvenir S.A. en lo concerniente a la improcedencia del traslado del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás conceptos no contemplados dentro de los límites señalados por el precedente constitucional. De igual forma, se desestiman las excepciones presentadas por Colpensiones, concluyendo su improcedencia en atención a la fundamentación jurídica previamente desarrollada.

Con lo anterior, se da por agotado el análisis de las cuestiones litigiosas, configurándose la ejecutoria de lo resuelto en los términos que se han indicado, en estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales que subyacen en el régimen de seguridad social integral.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad parcial del recurso presentado por la AFP Porvenir S.A., no se condenará en costas de segunda instancia a esta parte procesal; sin embargo, se condena en costas a Colpensiones a quien no le prosperó el recurso presentado.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral **TERCERO** de la sentencia proferida el día 18 de noviembre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, el cual quedará así:

> ***TERCERO: CONDENAR** a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.** a transferir a la **ADMINISTRADORA***

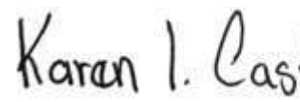
COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES *todos los valores que reposan en la cuenta de ahorro individual de* ***CARLOS ANTONIO SERNA TAPIAS****, incluidos sus rendimientos financieros y los bonos pensionales.*

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia proferida el día 18 de noviembre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

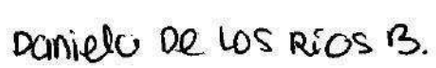
TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

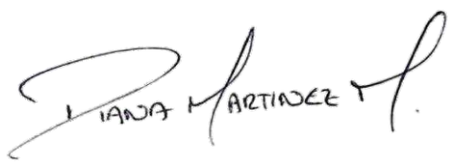
Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 060.



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente



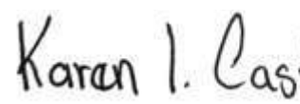


DANIELA DE LOS RIOS BARRERA **DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ**
Magistrada **Magistrada**

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente COLPENSIONES y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de uno y medio (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	CAROLINA GRANADOS OVALLE
Parte demandada	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
Radicación	11001310503320210036901
Fecha de la decisión	20 DE FEBRERO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	CONTRATO REALIDAD
Acta de Discusión	069
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503320210036901

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en razón de la sentencia proferida el día 20 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La señora Carolina Granados Ovalle, quien actúa a través de su apoderado, presentó demanda contra la Caja de Compensación Familiar – Compensar, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral que se declare la existencia de una relación laboral entre las partes, comprendida entre el 15 de marzo de 2011 y el 29 de marzo de 2019. Expone que, aunque la vinculación fue formalizada mediante un contrato de prestación de servicios, solicita que se reconozca la existencia de un único contrato de trabajo a término indefinido, argumentando que las condiciones de la prestación de sus servicios encajan dentro de los elementos esenciales que configuran una relación laboral, según el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

Relata que, durante el tiempo de vinculación, se desempeñó el cargo de médico familiar en la Clínica Compensar y se encontraba sujeta a subordinación, con la obligación de cumplir horarios establecidos por la demandada, con supervisión constante de jefes designados por ésta, tales como los doctores Arturo Valoyes, Leyvi Yen Amado y Katherine Montañez. Además, que sus funciones se desarrollaban

exclusivamente en las instalaciones de la clínica, lo que implicaba una dependencia organizacional evidente, que se le imponía la asistencia a reuniones y capacitaciones obligatorias, así como el uso de distintivos y herramientas proporcionadas por la entidad. Por lo tanto, la demandante argumenta que las condiciones bajo las cuales prestó sus servicios exceden las características propias de un contrato de prestación de servicios, ya que no había autonomía en la ejecución de su labor, y, en cambio, cumplía con los requisitos propios de un contrato laboral de subordinación, personalización del servicio y remuneración.

En adición a lo anterior, la demandante solicita la nivelación salarial con el personal de planta que desempeñaba funciones similares, el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes, como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones, las cuales no le fueron pagadas durante su vinculación. Asimismo, reclama el reconocimiento de la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo por el no pago oportuno de las acreencias laborales, así como la indemnización contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la no consignación de las cesantías dentro de los plazos estipulados por la ley. En sustento de sus pretensiones, se acoge al principio de primacía de la realidad consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, el cual dispone que, cuando en una relación de trabajo concurren los elementos de subordinación, prestación personal y salario, debe primar la realidad sobre las formalidades aparentes, lo que lleva a concluir que existió una verdadera relación laboral durante todo el periodo en cuestión.

La actora también fundamenta su demanda en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha sostenido que, cuando concurren los elementos propios de una relación laboral, la mera existencia de un contrato de prestación de servicios no desvirtúa la naturaleza laboral de la relación. Adicionalmente, argumenta que la existencia de personal en planta que desempeñaba el mismo cargo bajo un contrato de trabajo constituye una violación al principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. Por todo lo anterior, solicita que se declare la existencia del contrato de trabajo y que se condene a la demandada al pago de las acreencias laborales, prestaciones sociales e indemnizaciones adeudadas.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 31 de enero de 2022 (pdf 03), luego, con providencia de 27 de julio de 2023 (pdf 11) tuvo por contestada la demanda por CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (PDF 05)

La Caja de Compensación Familiar – Compensar, representada por su apoderada, contestó la demanda interpuesta en su contra alegando que, durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo de 2011 y el 29 de marzo de 2019, no existió

subordinación ni vínculo laboral, ya que la demandante prestó sus servicios bajo la modalidad de un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, en la especialidad de medicina familiar. Según la demandada, este contrato fue suscrito con total autonomía técnica y administrativa, elementos que desvirtúan la configuración de una relación laboral.

La defensa se fundamenta en que la demandante reconoció haber suscrito dicho contrato civil, lo cual excluye la existencia de subordinación o dependencia laboral. Compensar argumenta que la relación contractual siempre se desarrolló dentro de los parámetros de independencia, donde la demandante fijaba sus propios horarios y determinaba la modalidad en que prestaba sus servicios. En tal sentido, la entidad sostiene que no existió control ni imposición de órdenes que pudieran ser interpretadas como subordinación, y que cualquier supervisión realizada estuvo orientada exclusivamente a garantizar la calidad del servicio médico ofrecido a los afiliados.

Además, Compensar indica que la actora tenía plena autonomía en la ejecución de su labor, incluida la fijación de los horarios y la oferta de su tiempo disponible, lo que reafirma la ausencia de cualquier tipo de subordinación. Alega que las herramientas y los consultorios médicos en los que la demandante prestaba sus servicios fueron proporcionados por la demandada sólo como parte de los estándares de calidad requeridos para la atención médica. Sin embargo, ello no implica subordinación, ya que la demandante era la única responsable de sus decisiones profesionales, lo que refuerza el carácter civil de la relación contractual.

Finalmente, Compensar recalca que, dado que el vínculo fue estrictamente civil, no corresponde el reconocimiento de prestaciones sociales, ni mucho menos de indemnizaciones derivadas del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues no hubo mala fe en su proceder.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 21 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 20 de febrero de 2024, resolvió de manera favorable las pretensiones elevadas por la demandante, Carolina Granados Ovalle, declarando la existencia de una relación laboral entre esta y la Caja de Compensación Familiar – Compensar, desde el 15 de marzo de 2011 hasta el 29 de marzo de 2019.

El juzgador fundamentó su decisión en un análisis exhaustivo del material probatorio, aplicando el principio de primacía de la realidad sobre las formas contractuales, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo, y la jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia, en particular las sentencias radicadas bajo los números 86905 de 2022 y SL 3345 de 2021.

El juzgado señaló que, si bien las partes formalizaron su vínculo a través de un contrato de prestación de servicios, el análisis de las pruebas recaudadas demostró que, en los hechos, se configuró una relación laboral con los elementos esenciales de

una subordinación estructural y permanente. La demandante, quien se desempeñaba como médica familiar en la entidad demandada, estuvo sujeta a un control constante por parte de Compensar, ya que esta le imponía horarios, asignaba las sedes en las cuales debía prestar el servicio y determinaba los tiempos de consulta con los pacientes. Estos hechos fueron determinantes para concluir que la prestación del servicio no fue autónoma, sino que existió una dependencia y subordinación por parte de la demandada.

Además, el despacho observó que el suministro de herramientas y medios de trabajo, como consultorios, equipos médicos y el acceso a los aplicativos y sistemas de la entidad para el diligenciamiento de historias clínicas, incapacidades y fórmulas médicas, reforzaba la subordinación en la relación. En este sentido, se concluyó que las actividades desempeñadas por la demandante estaban plenamente integradas dentro de la estructura operativa de la demandada, lo que permitió constatar la configuración de una relación laboral bajo los parámetros del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

El fallo también se refirió a las consecuencias económicas de esta declaración, condenando a la demandada al pago de las acreencias laborales derivadas de la relación laboral, como cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones, que no le fueron pagadas a la demandante durante su vinculación. Asimismo, se ordenó la imposición de la sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, debido al incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la demandada. Esta sanción se liquidó con base en la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Financiera, aplicable desde el 30 de marzo de 2019 hasta la fecha de pago efectivo de las acreencias.

Finalmente, el juzgador destacó que la vinculación de la demandante se prolongó por más de 8 años bajo la figura de contratos de prestación de servicios, lo cual fue considerado como un intento deliberado por parte de la demandada para disfrazar la verdadera relación laboral y eludir el cumplimiento de las obligaciones propias de un empleador. Por ello, el juzgado concluyó que la demandada actuó de mala fe y, en consecuencia, se impuso la sanción moratoria y se ordenó el pago de las costas del proceso, incluyendo agencias en derecho fijadas en 10 salarios mínimos.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA (min 01:01:29 video 21)

La Caja de Compensación Familiar – Compensar, presentó recurso de apelación en contra de la decisión proferida por el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia. La parte apelante argumentó que no se demostró la existencia de subordinación, elemento esencial para la configuración de un contrato de trabajo, y que, por el contrario, se desvirtuó la presencia de los elementos que configuran dicha relación. Según Compensar, la relación contractual fue de naturaleza civil, limitándose a un canal de verificación y asignación de citas médicas, sin que esto configurara una subordinación sobre la demandante.

En relación con la verificación de los pacientes, la apelante sostuvo que Compensar solo cumplía con su función administrativa de confirmar si los pacientes cumplían con los requisitos de afiliación a la EPS o IPS, lo cual no implica una subordinación o control sobre la demandante. Este proceso no fue una imposición de pacientes, sino una verificación de los derechos de los afiliados para acceder a los servicios médicos, lo cual debe interpretarse como un procedimiento administrativo y no como una subordinación.

Asimismo, Compensar alegó que no impuso las condiciones del servicio, como los horarios o las sedes, sino que la demandante tenía libertad para escoger las franjas horarias dentro de la disponibilidad operativa de las sedes. Estas decisiones respondían a la estructura operativa de la entidad, que distribuye servicios especializados en determinadas sedes por razones logísticas y normativas. Se enfatizó que la demandante no fue sancionada ni obligada a cumplir horarios o sedes específicas, sino que su participación fue voluntaria dentro de las opciones disponibles.

Sobre la duración de las consultas, Compensar aclaró que esta no fue impuesta por la entidad, sino que fue una exigencia derivada de la Resolución 5261 de 1994 del Ministerio de Protección Social, la cual establece que las consultas médicas no pueden durar menos de 20 minutos. Asimismo, respecto a la gestión de historias clínicas, se indicó que Compensar estaba obligada por la Resolución 1995 de 1999 a custodiar estos documentos, lo que no constituye subordinación, sino el cumplimiento de una obligación legal propia del prestador de servicios de salud.

Finalmente, la apelante solicitó al Tribunal que se revoque la sanción moratoria impuesta, argumentando que no se acreditó la mala fe de Compensar en la relación contractual. Todas las actuaciones desplegadas por la demandada, según afirmó, se realizaron bajo el principio de buena fe y dentro de los límites legales, por lo cual solicitó que se absuelva a la entidad de todas las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, el despacho de conocimiento, con auto de 11 de marzo de 2024 (pdf 04), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

CAROLINA GRANADOS OVALLE (pdf 05 segunda instancia)

La señora Carolina Granados Ovalle, quien actúa a través de su apoderado, presentó alegatos de conclusión en los que sostiene que la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado 33 Laboral del Circuito de Bogotá, fue acertada y debidamente fundamentada en los hechos y en la jurisprudencia. La demandante solicita que se mantenga incólume la decisión que declaró la existencia de una relación laboral entre las partes, desvirtuando la naturaleza civil alegada por la demandada, Caja de Compensación Familiar – Compensar.

En su escrito, el apoderado de la demandante argumenta que las labores desempeñadas por la señora Granados Ovalle como médica no correspondían a funciones transitorias propias de un contrato de prestación de servicios, sino que desarrollaban la actividad misional de la entidad y se ejecutaban de manera permanente. El apoderado reitera que el encubrimiento de la relación laboral por parte de Compensar, que intentó disfrazar como civil, constituye un acto de mala fe patronal, en la medida en que la demandada impuso a la actora horarios, control de asistencia, entrega de herramientas, uso de uniforme institucional, y asistencia obligatoria a reuniones, todo lo cual desvirtúa cualquier noción de autonomía propia de un contratista independiente.

Además, el apoderado solicita que se mantenga la condena impuesta en primera instancia por el reconocimiento de prestaciones sociales y la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la sanción por la no consignación de cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. Argumenta que dichas indemnizaciones no operaron de manera automática, sino que fueron correctamente fundamentadas por el juzgador con base en la mala fe demostrada por la demandada a lo largo de la relación laboral.

Finalmente, el apoderado resalta que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en establecer que la subordinación y el control ejercido sobre la actora configuran los elementos esenciales de una relación laboral, por lo que solicita al Tribunal Superior de Bogotá que confirme en su totalidad la sentencia de primera instancia, desestimando los argumentos presentados por la demandada en su apelación.

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR (pdf 06 segunda instancia)

La Caja de Compensación Familiar – Compensar, a través de su apoderada, presentó alegatos de conclusión en los que solicita la revocatoria de la sentencia de primera instancia, argumentando que la relación sostenida entre las partes estuvo regida por un contrato de prestación de servicios de naturaleza civil, y no por un contrato laboral, como fue erróneamente declarado. En este sentido, el punto jurídico central planteado por la defensa es la inexistencia de los elementos esenciales establecidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, a saber, la subordinación, la prestación personal y la remuneración. La defensa hace especial énfasis en que, a lo largo de la relación contractual, no se configuró el elemento de subordinación, necesario para calificar la existencia de un contrato de trabajo.

En cuanto a la autonomía en la ejecución de los servicios, se argumenta que la demandante tenía plena libertad para fijar sus horarios de atención, organizar su agenda de pacientes y modificarla sin necesidad de solicitar autorización previa, características que son propias de un contratista independiente. Asimismo, la demandada señala que, en la práctica, la demandante no estuvo sujeta a control directo por parte de Compensar ni a evaluaciones de desempeño o procesos disciplinarios, lo que refuerza la inexistencia de subordinación. La relación, según se plantea, fue autónoma y se desarrolló bajo las condiciones propias de un contrato de prestación de servicios.

Otro aspecto clave abordado en los alegatos es la entrega de herramientas e insumos médicos. La defensa argumenta que el suministro de equipos y espacios de trabajo, tales como los consultorios, no puede considerarse como un indicio de subordinación, dado que estos se proporcionaron para garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de salubridad y estándares de calidad, lo cual no desvirtúa la autonomía del contratista. Este argumento se apoya en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ha reiterado que la provisión de medios materiales para la correcta prestación del servicio no implica, por sí misma, la existencia de una relación laboral.

Finalmente, la defensa sostiene que la imposición de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es improcedente, ya que Compensar siempre actuó de buena fe, con el convencimiento de que la relación contractual estaba regida por los términos de un contrato de prestación de servicios. En este sentido, se resalta la falta de pruebas que demuestren la existencia de mala fe por parte de la demandada, lo cual torna injustificada la sanción impuesta en primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentra demostrado en el caso sub examine que la relación entre las partes estuvo regida por un contrato de trabajo, en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, o, por el contrario, corresponde a un contrato de prestación de servicios sin vínculo subordinante?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

III.2.1. CONTRATO DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES JURÍDICAS

Para resolver la presente causa, esta Sala considera, en primer lugar, que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por el principio de integración normativa que establece el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es responsabilidad de la parte activa probar los hechos que sustentan sus pretensiones, mientras que a la parte demandada le corresponde demostrar los hechos en que se basa su defensa.

En este contexto, la demandante debe probar la existencia de una relación laboral para que esta sea declarada; es decir, que prestó servicios personales a la demandada, conforme a lo estipulado en los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, de acuerdo con el [1]artículo 24 del mismo código, basta con demostrar la prestación personal del servicio para que se presuma la existencia de una relación laboral, y es necesario además acreditar su continuidad en el tiempo, ya que de ello depende la imposición de las condenas correspondientes. Por su parte, la demandada debe desvirtuar esta presunción legal, demostrando que el vínculo entre las partes no se desarrolló dentro de un marco laboral y careció de subordinación o dependencia.

En este escenario, la Sala recuerda, como lo ha hecho en otras ocasiones, que el principio constitucional de primacía de la realidad se fundamenta en la prevalencia de los hechos reales sobre las formas, en consonancia con el respeto a la dignidad humana y la justicia social que rodea al trabajo. Este principio otorga al juez la facultad de privilegiar la realidad sobre lo que los documentos o acuerdos formales puedan aparentar, incluso cuando estos sean el resultado de un intento deliberado de ocultar o alterar la verdadera naturaleza de la relación jurídica. De este modo, se facilita la identificación de una relación laboral y se garantiza la protección de los derechos y prerrogativas inalienables que emanan de ella a favor de los trabajadores.

Esta protección está consagrada no sólo en el artículo 53 de la Constitución, sino que también constituye un eje central del Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 1 y 13, y se refuerza con la Recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo de 2006, la cual forma parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución. Es importante recordar que el papel del juez en estos casos es descubrir la verdad material, aquella que se esconde detrás de las apariencias y de las manipulaciones, sin limitarse a lo que las partes intentan presentar en el proceso judicial.

Con estas premisas, el Juez Plural procede a examinar los puntos fundamentales que sustentan la presente controversia.

Análisis de la Subordinación Laboral en la Prestación de Servicios Médicos en el Marco del Principio de Primacía de la Realidad: Evaluación de los Elementos de Control y Dependencia en el caso en concreto

---

[1] ARTÍCULO 24. PRESUNCIÓN. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Una vez agotado el análisis integral del material probatorio, esta Sala procede a valorar los elementos relevantes que permiten definir la naturaleza de la relación entre las partes en conflicto. Conforme al principio de primacía de la realidad y los lineamientos jurisprudenciales aplicables, resulta imperioso determinar si la prestación de servicios ejecutada por la demandante se realizó en el marco de una relación laboral encubierta bajo la apariencia de un contrato civil. A la luz de las pruebas aportadas, es posible concluir que se configuran los elementos propios de una relación laboral, tal como lo establece el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con la presunción de laboralidad del artículo 24, cuya desvirtuación, en este caso, no fue lograda por la parte demandada.

Del acervo probatorio recaudado en sede judicial, en especial de la prueba testimonial, se extraen elementos relevantes que permiten analizar las condiciones en las que se desarrolló la prestación del servicio por parte de la demandante. La señora Carolina Granados Ovalle, en su declaración, manifestó que inició su vinculación con Compensar en marzo de 2011 tras ser contactada por una coordinadora de la sede de Suba, quien le indicó que el único horario disponible era de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Indicó que no presentó una oferta espontánea de servicios, sino que fue informada sobre la vacante por una colega y asignada a un horario y sede determinados sin opción de negociación. Afirmó que la agenda médica era administrada por la entidad demandada y que, en caso de requerir ausentarse, debía informarlo previamente para la reprogramación de pacientes. Manifestó que, a lo largo del tiempo, su jornada sufrió modificaciones, pasando de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. a 7:00 a.m. a 2:00 p.m., posteriormente a 6:00 a.m. a 3:00 p.m., y finalmente a 6:00 a.m. a 1:00 p.m. Señaló que debía asistir a reuniones organizadas por la EPS y que, aunque tenía autonomía técnica en la atención médica, Compensar establecía lineamientos respecto a la solicitud de exámenes y procedimientos diagnósticos.

Por su parte, la señora Paula Natalia Carreño, en calidad de representante legal de Compensar, reconoció que la demandante debía prestar sus servicios de manera personal y presencial, argumentando que fue contratada por su especialidad y, por lo tanto, no podía delegar sus funciones en terceros. Indicó que la demandante presentaba cuentas de cobro mensuales y que los consultorios contaban con equipos informáticos en los que debía registrar las historias clínicas de los pacientes. Manifestó que la demandante tenía autonomía para determinar los días en que prestaba sus servicios, siempre que notificara con anticipación, pero admitió que, en caso de que ya tuviera una agenda programada, debía cumplir con los turnos asignados. Señaló que la demandante portaba un carnet de identificación, el cual no tenía carácter institucional sino de control de acceso, y mencionó que la sede de prestación del servicio fue Suba, aunque no participó en la validación de la oferta inicial.

A su vez, la señora Sandra Milena Correa, quien se desempeñó como gerente de contratación de Compensar entre 2011 y 2019, señaló que los médicos especialistas eran contratados como profesionales adscritos, sin una vinculación subordinada, y que la EPS no imponía horarios. Afirmó que los médicos proponían su horario de disponibilidad y que la entidad organizaba la agenda en función de esas propuestas. No obstante, reconoció que los médicos debían presentarse en las unidades de

servicio de la EPS y que no podían delegar sus funciones. Sostuvo que la especialidad de medicina familiar no tenía vocación de permanencia en la EPS. En relación con la indumentaria, indicó que en los consultorios se disponía de batas con el logotipo de la entidad, las cuales eran utilizadas por razones de higiene y protocolo médico.

La señora Erika Liliana Cifuentes Peña, supervisora administrativa en Compensar, refirió que los médicos ofrecían sus horarios de disponibilidad, y que la entidad se encargaba de la programación de las agendas. Aseguró que, si un médico debía suspender una jornada, solo debía notificarlo para la reubicación de los pacientes, sin que esto implicara consecuencias disciplinarias. Manifestó que la demandante no recibía órdenes directas, sino que se encontraba sujeta a protocolos de atención, aunque no detalló su contenido específico. Indicó que todos los médicos contratistas portaban un carnet de identificación y que los especialistas asistían a reuniones de seguimiento donde se socializaban indicadores de productividad, aunque no eran de asistencia obligatoria. Finalmente, sostuvo que la especialidad de medicina familiar hacía parte del giro ordinario de funciones de Compensar, y que la demandante debía utilizar el software institucional para registrar las consultas realizadas a los pacientes.

La señora Nancy Marinela Peña Parra, nutricionista en Compensar entre 2012 y 2017, señaló que coordinaba su labor con médicos familiares en el programa de atención a pacientes crónicos. Manifestó que los profesionales de salud debían seguir directrices establecidas por la EPS respecto a la atención de pacientes, estrategias de intervención y cumplimiento de metas. Sostuvo que las agendas eran organizadas por el área administrativa y que la demandante no tenía injerencia en la estructuración de su programación diaria. Explicó que la atención médica solo podía realizarse en las instalaciones de Compensar, dado que el acceso a los registros clínicos y a los sistemas de información de la EPS solo estaba habilitado en los computadores de la entidad.

En conclusión, el material testimonial aporta elementos adicionales que resultan relevantes para la determinación de la naturaleza jurídica del vínculo entre las partes. En primer lugar, la periodicidad en el pago de honorarios fue mencionada tanto por la demandante, Carolina Granados Ovalle, como por Paula Natalia Carreño, representante legal de Compensar, quienes coincidieron en que la liquidación se realizaba mensualmente con base en la cantidad de consultas efectuadas, de acuerdo con tarifas preestablecidas por la entidad. Si bien la parte demandada sostuvo que esta modalidad de pago era propia de un contrato de prestación de servicios, la forma en que se realizaban las liquidaciones y la continuidad del pago en los mismos términos a lo largo del tiempo permite analizar si este esquema respondía, en realidad, a una estructura salarial típica de un contrato laboral.

Otro punto relevante es el uso de formatos institucionales y herramientas tecnológicas de la EPS para el ejercicio de la labor médica. La demandante manifestó que debía registrar cada consulta en la plataforma informática de Compensar, lo cual fue corroborado por Nancy Marinela Peña Parra, quien indicó que la historia clínica de los pacientes solo podía ser diligenciada dentro del sistema de la EPS, utilizando los equipos dispuestos por la entidad. Erika Liliana Cifuentes Peña, supervisora administrativa, también mencionó que todos los médicos adscritos utilizaban un

software interno para el registro de atenciones y seguimiento de casos clínicos, sin posibilidad de modificar la plataforma o emplear registros externos. Estos testimonios sugieren que la demandante no tenía plena autonomía en la administración de sus registros médicos, lo que denota un grado de control funcional por parte de Compensar sobre su labor.

En cuanto a las reuniones periódicas de seguimiento, Sandra Milena Correa y Erika Liliana Cifuentes Peña indicaron que los médicos debían asistir a encuentros donde se socializaban indicadores de productividad y lineamientos de la EPS. Si bien se afirmó que estas reuniones no eran de asistencia obligatoria, su recurrencia y el propósito de evaluar el desempeño de los médicos permiten analizar si la demandante estaba sujeta a un control institucional en el desarrollo de su actividad. Nancy Marinela Peña Parra también refirió que en estas reuniones se establecían directrices sobre la atención de pacientes crónicos y el cumplimiento de objetivos en los programas de salud, lo que refuerza la existencia de lineamientos definidos por la EPS en la prestación del servicio.

Otro aspecto relevante es el acceso restringido a la información de los pacientes fuera de las instalaciones de Compensar. Carolina Granados Ovalle y Nancy Marinela Peña Parra manifestaron que el acceso a la historia clínica solo podía realizarse desde los consultorios de la EPS, dado que los sistemas de información de la entidad estaban configurados exclusivamente para su uso en los equipos internos. Paula Natalia Carreño también hizo referencia a este punto, señalando que los médicos debían registrar la totalidad de la información en la plataforma institucional, lo que sugiere una dependencia operativa de la demandante frente a la infraestructura tecnológica de Compensar.

Además, se destacó la utilización de papelería institucional y la expedición de órdenes médicas bajo parámetros definidos por la EPS. Sandra Milena Correa indicó que las incapacidades, fórmulas médicas y remisiones debían emitirse en formatos preestablecidos por la entidad, mientras que Nancy Marinela Peña Parra añadió que la demandante debía sujetarse a las directrices institucionales respecto a la solicitud de exámenes y procedimientos diagnósticos. Paula Natalia Carreño precisó que estas exigencias respondían a protocolos internos de la EPS, pero este aspecto puede ser objeto de análisis en relación con el grado de autonomía real de la demandante en la prestación del servicio.

Finalmente, la dinámica de terminación de los contratos y su renovación sucesiva fue abordada por Paula Natalia Carreño, quien reconoció que la relación contractual con la demandante se extendió de manera continua por varios años mediante prórrogas sucesivas. A su vez, Carolina Granados Ovalle afirmó que, a lo largo del tiempo, su jornada sufrió modificaciones impuestas por la entidad sin que mediara una negociación formal. Sandra Milena Correa, por su parte, sostuvo que la especialidad de medicina familiar no tenía vocación de permanencia dentro de Compensar, pero admitió que los contratos eran renovados sin interrupciones sustanciales. Este elemento permite analizar si la naturaleza del vínculo realmente respondía a una necesidad temporal y accesoria, como lo sostiene la parte demandada, o si, por el

contrario, se trataba de una relación con vocación de estabilidad dentro de la estructura de la EPS.

En relación con la oferta de servicios que la demandante presuntamente suscribió, Paula Natalia Carreño, representante legal de Compensar, afirmó que la señora Carolina Granados Ovalle presentó voluntariamente una oferta en la que indicó la sede y el horario en el que prestaría sus servicios. No obstante, Carolina Granados Ovalle negó haber realizado dicha oferta de manera espontánea, señalando que fue contactada por una coordinadora de la EPS, quien le indicó las condiciones bajo las cuales podía vincularse, sin que mediara una real posibilidad de elección. A su vez, Erika Liliana Cifuentes Peña refirió que el procedimiento habitual en Compensar consistía en que la administración de la sede informara sobre los horarios y sedes disponibles a los médicos interesados, quienes podían aceptar dentro de esas opciones ya definidas. En este sentido, Sandra Milena Correa precisó que la oferta de servicios firmada por la demandante no fue directamente gestionada por su área, lo que deja sin aclarar el proceso mediante el cual se formalizó la vinculación inicial. Este punto adquiere relevancia en la medida en que incide en la configuración del elemento de subordinación, pues plantea la duda de si la demandante realmente tuvo margen de negociación o si, por el contrario, se limitó a aceptar las condiciones previamente establecidas por la EPS, lo que afectaría la naturaleza jurídica del vínculo contractual.

En efecto, las circunstancias fácticas debidamente acreditadas permiten colegir que la demandante no solo estuvo sujeta a estándares específicos de la empresa, tales como el uso de bata con el logotipo de Compensar y la utilización de papelería oficial para la expedición de remisiones médicas, sino que, además, su agenda diaria de trabajo era estrictamente impuesta por la entidad, sin margen de negociación ni autonomía real para gestionar sus horarios. Estos elementos, que trascienden la mera apariencia formal del contrato de prestación de servicios, revelan un control riguroso y constante sobre las condiciones de prestación del servicio, lo que pone de manifiesto la existencia de subordinación jurídica, en concordancia con los parámetros normativos y jurisprudenciales que rigen la materia.

Asimismo, los testimonios rendidos a lo largo del proceso evidencian contradicciones e inconsistencias que debilitan los argumentos presentados por la parte demandada. En particular, se cuestiona la supuesta libertad de la demandante para gestionar sus propios horarios, pues la evidencia muestra que era la entidad quien, en función de sus necesidades operativas, determinaba de manera unilateral el horario en el que la demandante debía cumplir sus funciones. En este contexto, las contradicciones testimoniales generan serias dudas que, conforme al principio de favorabilidad laboral, deben resolverse en favor de la parte actora, dado que la carga probatoria sobre la inexistencia de subordinación recae sobre la demandada, en aplicación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

Igualmente, relevante resulta el control ejercido por Compensar sobre el número de pacientes que la demandante debía atender, así como el tiempo que debía destinar a cada uno de ellos. Si bien la parte apelante sostiene que la Resolución 5261 de 1994 del entonces Ministerio de Protección Social estableció un mínimo de duración de

consulta de 20 minutos, lo cierto es que el material probatorio corrobora que Compensar fijó dicho tiempo como parámetro uniforme y máximo dentro de su estructura operativa. En efecto, Nancy Marinela Peña, compañera de trabajo de la demandante, afirmó en su testimonio que la entidad demandada imponía a los médicos un tiempo determinado de consulta de 20 minutos por paciente, sin que se les permitiera exceder dicho lapso, lo que configura un ejercicio de control administrativo sobre la ejecución de las funciones médicas. Este aspecto evidencia que, más allá de lo dispuesto por la normativa ministerial como tiempo mínimo, fue la propia EPS quien estableció dicho término como tiempo fijo y predefinido, lo que limita cualquier margen de autonomía en la prestación del servicio y refuerza el carácter subordinante del vínculo. Este control operativo integral, que se extendía tanto a la organización de la agenda diaria como a las condiciones específicas de la consulta médica, demuestra que la demandante se encontraba plenamente integrada dentro de la estructura funcional de la entidad, desarrollando funciones esenciales y permanentes dentro del marco de la actividad principal de la demandada.

Por otro lado, no puede perderse de vista el hecho de que la relación entre las partes se prolongó por un periodo cercano a una década, lo que refuerza la conclusión de que las funciones desempeñadas por la demandante no eran de carácter temporal o accesorio, sino que respondían a una necesidad estructural y permanente dentro del objeto social de la empresa. Este prolongado lapso de tiempo, en el que la demandante desempeñó las mismas funciones, es incompatible con la noción de un vínculo civil o eventual, lo que refuerza la naturaleza laboral de la relación y desvirtúa cualquier alegación en contrario por parte de la demandada.

Finalmente, cabe hacer referencia a los numerales 5 y 26 de la cláusula 5 del contrato de prestación de servicios, los cuales estipulan que la demandante debía cumplir con las agendas pactadas para la prestación del servicio a los usuarios de Compensar y utilizar los formatos definidos por la entidad para solicitar ayudas diagnósticas, terapéuticas, incapacidades y medicamentos. Estas disposiciones contractuales constituyen, a juicio de esta Sala, indicios adicionales de la subordinación existente, en tanto que demuestran que la actora estaba sujeta a los estándares y procedimientos internos de la empresa, sin posibilidad de apartarse de las directrices impuestas.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto del tema de la siguiente forma en sentencia SL1233 del 2022:

> *"De similar manera, con la advertencia de que no se trata de una enumeración taxativa, ni exhaustiva de reglas, dado el carácter dinámico y circunstancial de las relaciones de trabajo, en proveído CSJ SL1439-2021, esta Sala recopiló varios elementos que la jurisprudencia ha identificado como indicadores de la presencia de un vínculo subordinado:*
>
> > *[…] la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona (CSJ SL4479-2020); la exclusividad (CSJ SL460- 2021); la disponibilidad del trabajador (CSJ SL2585-2019); la concesión de vacaciones (CSJ SL6621-2017); la aplicación de*

sanciones disciplinarias (CSJ SL2555-2015); cierta continuidad del trabajo (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo (CSJ SL981-2019); realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el beneficiario del servicio (CSJ SL4344-2020); el suministro de herramientas y materiales (CSJ SL981-2019); el hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios (CSJ SL4479-2020); el desempeño de un cargo en la estructura empresarial (SL, 24 ag. 2010, rad. 34393); la terminación libre del contrato (CSJ SL6621-2017) y la integración del trabajador en la organización de la empresa (CSJ SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020) (Subrayas fuera de texto).

Incumbe remembrar que, tratándose de profesiones liberales, esta Corporación ha enfatizado que el ejercicio de una actividad cualificada, como sin duda lo es la profesión médica, no significa que siempre habrá de considerarse que se trata de una labor independiente o autónoma, pues debe tenerse en cuenta «que sobre ellos también aplica la referida presunción legal del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo» (CSJ SL3345-2021).

Entre otras razones, porque no puede dejarse de lado que la ejecución de labores propias de las denominadas profesiones liberales, en muchas ocasiones se presenta en el marco de una relación de trabajo subordinada, pública o privada, de suerte que quienes las desarrollan están expuestos a que los derechos y garantías instituidas a favor de todos los trabajadores, puedan ser desconocidas, de suerte que «no existe razón alguna para excluirlos de la presunción de contrato realidad e imponerles una carga probatoria que agudiza las desventajas que ya deben soportar» (CSJ SL225-2020) Al respecto, en sentencia CSJ SL1439-2021, se explicó:

Los trabajadores cualificados, como los de las profesiones liberales, gozan de una independencia técnica en la ejecución de su trabajo -para eso se les contrata-. Respecto de ellos la subordinación no se expresa como frente a los obreros de las fábricas' o los trabajadores no cualificados, pues poseen una relativa libertad de trabajo. La doctrina ha señalado que en estos casos «el poder de dirección no se ejerce ya en el corazón mismo de la prestación, sino tan sólo [sic] en su periferia, sobre las condiciones de ejecución de la prestación»2. Por consiguiente, la subordinación en las profesiones liberales recibe una respuesta adecuada a partir del criterio de la integración en un servicio organizado, que implica la dirección, no tanto del contenido de las prestaciones, sino de las condiciones de su ejecución (intuitu personae, remuneración periódica, jornadas y horarios, lugar de prestación del servicio, medios de trabajo físicos y digitales suministrados por el empleador, ajenidad en los frutos, cantidad de trabajo) (Subrayas fuera de texto).

Bajo el anterior marco dogmático-jurídico, cobra sentido memorar el análisis fáctico efectuado al resolver el recurso extraordinario. Tal ejercicio devino útil para hallar indemostrado algún elemento de juicio que pudiera resultar suficiente para persuadir a la Sala de que la presunción legal contenida en el artículo 24 del estatuto laboral había sido infirmada. Por ello, como juzgadora de segundo grado, la Sala no puede menos que avalar la inferencia de la operadora judicial de la instancia inicial, en el sentido de que Luis Alberto Villadiego Chisays prestó personalmente el servicio de médico, por más de 11 arios continuos a la E.P.S. Sanitas S.A., bajo la égida de un

contrato de trabajo, en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo (CSJ SL225-2020).

Tal presunción no fue desvirtuada, toda vez que el profesional de la salud no contaba con autonomía y libertad para ejecutar sus funciones. Por el contrario, como lo relataron los testigos Carlos Gómez Castillo y José Orlando Oquendo Rodríguez, estuvo sometido al horario definido por la empresa y, en su práctica médica, debía realizar las valoraciones de los pacientes del Banco de la República bajo los parámetros diseñados por la empleadora. Además, solo podía atender a los usuarios afiliados a la entidad promotora de salud.

Por su parte, las declarantes Lorena Lucía Mahuad Puche y Lenys Leonor Rodríguez, fueron contestes en aseverar que Villadiego Chisays solo podía prestar sus servicios a personas vinculadas a la organización llamada a juicio; también, debía seguir las instrucciones de la accionada para el diligenciamiento de las historias clínicas, se le entregó un recetario y los pacientes le eran asignados de tal suerte que fueran atendidos durante su turno en horas de la mañana (CSJ SL13020-2017). De ahí que, además de que se trataba del desempeño de actividades esencialmente ligadas al desarrollo del objeto social de la convocada a juicio, hacen evidente que la labor del médico Villadiego Chisays fue personal, subordinada y relevante para los fines de la EPS."

De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales señalados en la sentencia CSJ SL1233-2022, esta Sala constata que las solicitudes de la parte apelante carecen de fundamento jurídico suficiente para desvirtuar los elementos que configuran la relación laboral en los términos de los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo. En lo que respecta a la autonomía técnica alegada por la demandada, la Corte ha sido clara en señalar que, en las profesiones liberales, como es el caso de la actora, la subordinación no se traduce en la ejecución técnica de la labor, sino en las condiciones periféricas de su prestación, las cuales se manifestaron de manera evidente en el control ejercido por Compensar sobre la agenda, los horarios, los pacientes y los procedimientos administrativos a seguir.

El carácter técnico de la profesión médica no desvirtúa per se la existencia de una relación subordinada, pues la integración de la actora en la estructura organizativa de la entidad demandada, bajo parámetros operativos predefinidos, confirma el ejercicio de un poder de dirección que recae sobre la forma y las condiciones en que se ejecutaban sus servicios. La dependencia se refleja en la asignación diaria de los pacientes, el control sobre la jornada de trabajo, y la utilización de medios provistos por la empresa para el desarrollo de las labores médicas, lo cual no se compadece con la autonomía que alega la demandada.

El principio de integración en el servicio organizado, ampliamente desarrollado en la jurisprudencia citada, resulta determinante para confirmar la existencia de subordinación en este caso. Los testimonios y las pruebas documentales, incluidos los numerales 5 y 26 de la cláusula 5 del contrato, evidencian que la demandante no ejercía su labor de manera independiente, sino sujeta a las directrices operativas de

Compensar, lo que refuerza el carácter laboral de la relación, en contraposición a la naturaleza civil invocada por la apelante.

Así, las pretensiones de la parte apelante no logran modificar el criterio jurídico adoptado en primera instancia, encontrándose ajustado a derecho el reconocimiento de la relación laboral y las condenas derivadas de su configuración.

Alcance de la buena fe en la ejecución de contratos laborales y su influencia en la exoneración de sanciones moratorias

En el caso *sub examine*, esta Sala encuentra plenamente acreditada la mala fe del accionado en su proceder, lo que justifica, sin lugar a dudas, la imposición de la sanción moratoria en los términos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. A diferencia de situaciones en las que un *error iuris* razonable o una confusión conceptual han sido considerados elementos atenuantes que permiten exonerar de dicha sanción, el contexto fáctico y jurídico de la presente controversia evidencia que la conducta del accionado tuvo por objeto disfrazar una relación laboral bajo la apariencia de un contrato civil, con el animus deliberado de evitar el cumplimiento de las obligaciones propias de un empleador.

En efecto, no puede pasarse por alto que la relación entre las partes se extendió durante casi una década, lo que refuerza la conclusión de que la naturaleza del vínculo era de carácter laboral y no accesorio ni temporal, como pretende sostener la parte demandada. La prolongación de la relación en el tiempo y el desempeño de funciones esenciales para el objeto social de la empresa son indicios claros de que la relación jurídica que pretendió presentarse como civil, en realidad, estaba sujeta a los elementos constitutivos del contrato de trabajo. A ello se suma que la empresa, con un equipo jurídico especializado, no puede alegar ignorancia o error en la calificación jurídica de la relación, pues dicha entidad cuenta con los recursos y asesoría legal suficiente para haber identificado correctamente la naturaleza laboral del vínculo.

La jurisprudencia ha sido enfática en señalar que la buena fe, exigida para evitar la imposición de sanciones moratorias, debe ser objetiva y exenta de culpa. Sin embargo, en este caso concreto, se advierte un *dolus* claro por parte del accionado, quien, mediante el uso de contratos de prestación de servicios, intentó eludir las obligaciones inherentes a una relación laboral, afectando así los derechos irrenunciables de la trabajadora. La conducta reiterada en el tiempo, sin ninguna rectificación voluntaria por parte de la demandada, confirma el ánimo en su proceder.

A diferencia de lo planteado en decisiones como la CSJ SL1259-2023, en la cual se exoneró de la sanción moratoria al acreditarse un error honesto en la interpretación de los elementos salariales, aquí no se vislumbra ningún tipo de *error iuris* razonable, sino un claro intento de desnaturalizar una relación laboral. En la presente controversia, no hay lugar a considerar una confusión conceptual o error de interpretación normativa, puesto que la demandada actuó con pleno conocimiento de las implicaciones de su proceder.

En este sentido, la parte demandada no logró desvirtuar la mala fe que subyace en la configuración del vínculo contractual, más aún cuando las condiciones de prestación del servicio no eran eventuales ni aisladas, sino estructurales y permanentes en el marco de su objeto social. Es claro que la demandada pretendió usar el contrato civil como una herramienta para disfrazar una relación que, en su esencia, era laboral, lo que constituye un fraude a los derechos del trabajador.

De igual forma, la jurisprudencia en CSJ SL705-2024 reitera que la sanción moratoria sólo puede excluirse cuando se demuestre que el empleador actuó de buena fe, con razones objetivas y sostenibles. Sin embargo, en el presente caso, el proceder del accionado carece de toda justificación razonable, y los hechos demostrados en el proceso conducen a la irremediable conclusión de que hubo un ánimo fraudulento para evadir sus responsabilidades laborales, afectando de manera directa los derechos de la demandante.

> *"[…] lo cierto es que la sociedad demandada formuló razones atendibles y ceñidas a la buena fe para dejar de pagar la diferencia que encontró acreditada el juzgador de primer grado, en tanto que, su actuar se encontró supeditado a la firme convicción, de que estaba amparada por un «pacto de exclusión salarial», que como ya lo señaló la Sala en el precedente citado; «provino de una confusión conceptual que, en todo caso, no entraña mala fe ni, se repite, algún ánimo defraudatorio», por lo tanto, se revocará la decisión adoptada por el juez de primer grado, para en su lugar absolver a la sociedad demandada de esta pretensión."*

Por lo tanto, resulta insoslayable para esta Sala concluir que la conducta del accionado no solo fue dolosa, sino que se mantuvo de manera constante durante la relación laboral, sin que se evidencie ningún intento por parte del empleador de rectificar su proceder. Esto permite colegir que la sanción moratoria impuesta es no solo procedente, sino necesaria, dado que la parte demandada incurrió en una violación flagrante de los derechos laborales, con la intención deliberada de disfrazar la verdadera naturaleza del vínculo jurídico.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandada, se condenará en costas de segunda instancia a favor de la demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo la sentencia proferida el día 20 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo del recurrente **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR** y en favor de la demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 069.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte demandada y a favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	FÉLIX HUMBERTO LEÓN SARMIENTO
Parte demandada	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.
Radicación	11001310503320220011 1 01
Fecha de la decisión	25 DE JULIO DE 2024
Motivo	APELACION
Tema	PENSION DE INVALIDEZ
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503320220011 1 01
Acta No.	***046***

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación presentado por la demandada Protección S.A., contra la sentencia proferida el día 25 de julio de 2024 en el proceso de la referencia por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpera primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

El señor Félix Humberto León Sarmiento presentó demanda ordinaria laboral contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., con el fin de cambiar la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral asignada por la entidad para el 19 de agosto de 2014 considerando que la fecha real de estructuración era el 27 de marzo de 2017. En consecuencia, se le reconociera la pensión de invalidez, incluyendo el pago retroactivo de las mesadas causadas, los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de la primera mesada y el pago de costas procesales.

Para sustentar sus pedimentos, refirió que el progresivo deterioro visual que sufrió el demandante, desde el año 2014, donde le fue diagnosticado un desprendimiento de retina en el ojo izquierdo, por el cual fue intervenido quirúrgicamente, seguido de varios procedimientos oftalmológicos posteriores. Expresó que, a pesar de estos esfuerzos, su visión continuó deteriorándose, y en el año 2017, fue oficialmente

declarado ciego por su especialista tratante, quien le estableció una incapacidad laboral total y permanente y lo remitió a medicina laboral para gestionar su pensión de invalidez (fols 19-26 pdf 02). Sin embargo, expuso, que la entidad demandada, Protección S.A., determinó que la fecha de estructuración correspondía al primer diagnóstico de desprendimiento de retina el 19 de agosto 2014 (fols. 29 – 36 pdf 02), sin tener en cuenta el agravamiento de la condición del demandante, lo cual, para el demandante, violó sus derechos fundamentales, al no reflejar adecuadamente la evolución de la enfermedad ni el momento en que perdió de manera definitiva su capacidad laboral.

Cimentó sus pretensiones en jurisprudencia relevante de la Corte Constitucional, donde subrayó la obligación de realizar una valoración integral que considere los aspectos funcionales, biológicos, psíquicos y sociales del demandante, a fin de determinar una fecha de estructuración adecuada, especialmente en enfermedades progresivas.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Auto del 26 de mayo de 2022, decidió admitir la demanda y corrió traslado a la demandada (pdf 04), luego, con providencia del 02 de febrero de 2023, tuvo por contestada la demanda por parte de Protección S.A. (pdf 06).

1.3. CONTESTACIÓN PROTECCIÓN S.A. (pdf 04)

Protección S.A., en su contestación, rechazó los argumentos y pretensiones presentadas en la demanda, proponiendo como excepciones la de *prescripción* para los derechos que, de acuerdo con el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo, ya habrían perdido su oportunidad de exigibilidad debido al paso del tiempo. También invocó la de *cobro de lo no debido*, indicando que el demandante no había acreditado el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y, por lo tanto, no existía obligación por parte de la entidad, asimismo, alegó *buena fe* en todas sus actuaciones, destacando que siempre había actuado conforme a la normativa y sin intención de perjudicar al demandante. Solicitó también la *compensación* de cualquier valor a favor del demandante con posibles sumas ya devueltas al mismo.

La entidad argumentó que la calificación de la pérdida de capacidad laboral, realizada por Suramericana en nombre de Protección S.A., había sido elaborada en cumplimiento del Manual Único de Calificación de Invalidez y las disposiciones del Decreto Ley 019 de 2012, afirmando que dicha calificación estableció que el demandante presentaba una pérdida del 75.52% de su capacidad laboral, con una fecha de estructuración del 19 de agosto de 2014, decisión que, fue debidamente notificada al actor, el 27 de agosto de 2017, donde se le recordó su derecho a apelar dentro de los diez días hábiles posteriores, plazo que el actor no respetó, dejando el dictamen en firme, por lo que, según Protección, este hecho hacía improcedente cualquier cambio de la fecha de estructuración solicitada por el demandante.

Además, sostuvo que el demandante no cumplía con el requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, establecido en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 y modificado por la Ley 860 de 2003, exponiendo que protección señaló que, revisando la historia laboral del demandante, este solo había cotizado 0.05 semanas en el periodo anterior a la fecha de estructuración del 19 de agosto de 2014 incumpliendo así los requisitos que la ley dicta para la pensión de invalidez. Añadió que, incluso en el supuesto de que se aceptara la fecha de estructuración de 2017 propuesta por el demandante, este solo alcanzaría alrededor de 48 semanas de cotización, cifra insuficiente para satisfacer el requisito legal.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, resolvió reconocer la pensión de invalidez al señor Félix Humberto León Sarmiento, misma que debía otorgarse a partir del 27 de marzo de 2017, calculando una tasa de reemplazo del 54% y se ordenó su pago en una cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente; además, el Juez ordenó a Protección S.A. el pago del retroactivo desde el 1 de marzo de 2019 hasta la fecha en que el demandante sea incluido en la nómina de pensionados, aplicando los intereses moratorios hasta el cumplimiento del pago de las mesadas adeudadas, y lo condenó en costas.

El *A Quo* fundamentó su decisión en el derecho a la seguridad social, y el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, así como también consideró sentencias relevantes de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, como la SU-588 de 2016, que señala la necesidad de realizar una evaluación detallada en enfermedades degenerativas, crónicas y congénitas, donde la fecha de estructuración de la invalidez puede no coincidir con el inicio de la pérdida de capacidad laboral, por lo que determinó que el momento en el que el demandante quedó legalmente incapacitado ocurrió el 27 de marzo de 2017, fecha en la que se le diagnosticó ceguera legal y una incapacidad laboral total y permanente.

El juzgador de instancia valoró extensamente el historial clínico del demandante y los dictámenes médicos aportados, especialmente el emitido por Suramericana en agosto de 2017 y las múltiples evaluaciones de la Clínica de Ojos que documentaban la progresión de la enfermedad desde 2014. Las pruebas demostraron que el demandante padecía de un deterioro visual progresivo que, aunque comenzó en 2014, no le impidió continuar laborando hasta que en 2017 se le declaró legalmente ciego. Adicionalmente, consideró el interrogatorio del demandante, en el que explicó las circunstancias de las cotizaciones efectuadas entre 2014 y 2017, las cuales, según su testimonio, correspondían a labores realizadas con capacidad residual visual. Estas cotizaciones fueron realizadas en su mayoría de forma independiente, y se interpretaron como pruebas de una capacidad laboral parcial pero efectiva en esos años. Concluyendo que estas cotizaciones no fueron realizadas con la intención de defraudar el sistema, sino que reflejaban una actividad laboral genuina del demandante, compatible con una capacidad visual parcial.

Con lo anterior, el Juez determinó que el demandante cumplía con el requisito contar con 50 semanas de cotización en los tres años anteriores a la fecha de estructuración. Con base en la historia laboral, constató que, desde el 27 de marzo de 2014 hasta la fecha de estructuración en 2017, el demandante acumuló un total de 50.4 semanas de cotización.

El despacho de instancia, reconoció la excepción de prescripción para las mesadas anteriores al 1 de marzo de 2019, indicando que, aunque el derecho a la pensión se consolidó en 2017, las reclamaciones administrativas y la demanda judicial no fueron presentadas de manera oportuna para proteger la totalidad del retroactivo. Así, se ordenó el pago de retroactivos desde el 1 de marzo de 2019, cuyo monto ascendió a $58,755,321 hasta julio de 2024.

Por su parte, respecto a los intereses moratorios, dispuso su cálculo desde el 1º de marzo de 2019 hasta la inclusión en nómina de pensionados del demandante, ascendiendo a $38,624,330 hasta la fecha de la sentencia, sin perjuicio de los intereses adicionales que se acumulen hasta el cumplimiento del pago, sin lugar a aplicar la indexación en dichas mesadas.

1.5. APELACIÓN PROTECCIÓN S.A.

En su recurso de apelación, la apoderada de Protección S.A. solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia, argumentando que el juez erró al modificar la fecha de estructuración de la invalidez y al otorgar el reconocimiento de la pensión de invalidez, ya que no se acreditó suficientemente que las cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración dada por Suramericana, se hayan realizado en ejercicio de una capacidad laboral residual real del demandante.

Protección argumentó que, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema permite modificar la fecha de estructuración en enfermedades degenerativas, esta posibilidad está condicionada a la prueba de una capacidad residual efectiva. Según la apelante, el demandante no aportó evidencia concreta, como contratos de prestación de servicios o testimonios de terceros, que demostraran que sus cotizaciones respondían a un trabajo realizado con dicha capacidad. Alegó que el juez otorgó un valor excesivo al interrogatorio del demandante, quien, en su propio beneficio, afirmó que las cotizaciones realizadas después de 2014 correspondían a una actividad laboral, sin pruebas adicionales que respaldaran estas declaraciones.

La apoderada también señaló que, incluso si se aceptara la fecha de estructuración de marzo de 2017, el demandante no cumplía con las 50 semanas de cotización requeridas, ya que solo alcanzaba 49 semanas. Solicitó al tribunal recalcular las semanas cotizadas y argumentó que la sentencia del juez sobrestimó el tiempo de cotización, lo cual era un error que afectaba la decisión.

En cuanto a los intereses moratorios y retroactivos, Protección los recurrió, aduciendo además que, en caso de confirmarse la condena, se calcularan teniendo en cuenta la prescripción y solo a partir de la fecha en que pudiera determinarse sin lugar a dudas que el demandante contaba con una capacidad laboral residual al momento

de realizar las cotizaciones. Alegó que el cálculo de estos intereses desde el 1 de marzo de 2019, como dispuso el juez, era improcedente, ya que Protección no podía verificar la actividad laboral del demandante en el momento de los pagos.

Por lo anterior, Protección solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revocara la sentencia en su totalidad, absolviendo a la entidad de la condena de reconocimiento pensional y demás obligaciones establecidas en el fallo de primera instancia.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión en razón a la apelación presentada por la demandada Protección S.A., por lo que el despacho de conocimiento, mediante Auto de 02 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión,

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se refirieron al respecto así:

2.1.1. PROTECCIÓN S.A. (PDF 04)

En los alegatos de conclusión, Protección S.A. solicitó que se revoque la sentencia, argumentando que la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez, del 30 de abril de 2014 al 27 de marzo de 2017, no estaba debidamente fundamentada. Según la entidad, el demandante no cumplía con las 50 semanas de cotización requeridas en los tres años anteriores a la fecha inicial y tampoco demostró que las cotizaciones posteriores se realizaron bajo una capacidad laboral residual efectiva. Protección cuestionó el valor dado por el juez al testimonio del demandante, al considerar que no se presentaron pruebas objetivas, como contratos o certificaciones, que acreditaran una actividad laboral real.

Además, Protección argumentó que, incluso si se aceptara la nueva fecha de estructuración, el demandante apenas alcanzaría 49 semanas de cotización, lo cual sería insuficiente.

2.1.2. DEMANDANTE FÉLIX HUMBERTO LEÓN SARMIENTO

En los alegatos de conclusión, el apoderado del demandante solicitó la confirmación de la Sentencia de primera instancia, argumentando que el análisis de la historia clínica y el progreso de la pérdida de visión del demandante respaldan la modificación de la fecha de estructuración de la invalidez al 27 de marzo de 2017. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, señalando que los jueces pueden valorar libremente las pruebas, incluyendo los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, que no son definitivos ni inmodificables y deben evaluarse en el contexto de cada caso.

El apoderado resaltó que la libertad de apreciación permite al Juez priorizar la historia clínica y el contexto de salud del demandante sobre el dictamen de Suramericana. También defendió la aplicación de una protección especial para el demandante, en tanto su situación de invalidez afecta sus derechos a la seguridad social y a una vida digna.

III. CONSIDERACIONES

Con base en la apelación presentada por la parte demandada Protección S.A., le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentra acreditado dentro del plenario que el demandante contaba con capacidad laboral residual después de haber sido calificado por la demandada en el año 2014?

SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Luego de lo anterior, es correcto afirmar que los hechos que se encuentran acreditados dentro del proceso son, que el actor se encuentra en estado de invalidez por haber sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del 75.52%; que el actor padece desprendimiento de retina en ambos ojos (fols. 29-36 pdf 02 primera instancia); y que nació el 06 de septiembre de 1979 (fol 15 pdf 02 primera instancia)

DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ CON OCASIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS, CONGENITAS O DEGENERATIVAS

Inicialmente, resulta oportuno destacar que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 1.º de la Ley 860 de 2003, dispone:

> ***"Artículo 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez.*** *Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:*
> *1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.*
> *2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.*
> *PARÁGRAFO 10. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.*
> *PARÁGRAFO 20. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años."*

Según lo expuesto, en relación con el requisito de densidad de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común, la normatividad vigente establece por regla general que el afiliado debe acreditar 50 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de estructuración de tal condición.

Ahora bien, al ser la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral del actor el punto crucial de la presente Litis, esta Sala memora que el decreto 1507 de 2014, por medio del cual se expidió el Manual Único para la Calificación de la Perdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional, en su artículo 3, definió dicha fecha así:

"Fecha de estructuración: Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.

Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al Sistema de Seguridad Social Integral."

Por su parte, la Corte Constitucional ha establecido que esta fecha de estructuración, al tratarse en casos de enfermedades congénitas, crónicas y/o degenerativas, debe analizarse con mayor detenimiento, como lo explicó en sentencia SU 588 de 2016, así:

"Cuando la solicitud pensional proviene de personas a las que se les ha calificado una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y se les ha establecido como fecha de estructuración una que coincide con el momento del nacimiento, con uno cercano a éste, con la fecha del primer síntoma o con la del diagnóstico, la Administradora de Fondos de Pensiones no puede limitarse a hacer el conteo mecánico de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a ese momento. En realidad, tratándose de patologías congénitas, crónicas y/o degenerativas, debe hacerse un análisis especial caso a caso, en el que además de valorar el dictamen, deberán tenerse en cuenta otros factores tales como, las condiciones específicas del solicitante y de la patología padecida, así como su historia laboral."

En igual sentido, cimentó el criterio de la capacidad laboral residual que tiene una persona que ha sido declarada en estado de invalidez, al sostener que:

"Respecto de la capacidad laboral residual, esta Corte ha indicado que se trata de la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, pese a las consecuencias de la enfermedad. En consideración de este elemento, a la Administradora de Fondos de

Pensiones le corresponde comprobar que el beneficiario trabajó y, producto de ello, aportó al Sistema durante el tiempo que su condición se lo permitió o que consideró prudente (en el caso de las enfermedades únicamente congénitas). De la misma manera, tendrá que corroborar si los aportes realizados se hicieron con la única finalidad de acreditar las 50 semanas exigidas por la norma o si, por el contrario, existe un número importante de cotizaciones que resulten de una actividad laboral efectivamente ejercida. El análisis de lo anterior busca evitar el fraude al sistema general de pensiones y, a su vez, garantiza la sostenibilidad fiscal del mismo , en tanto que, si una persona ha cotizado durante varios años de manera ininterrumpida o, en su defecto, lo ha hecho de forma interrumpida, pero durante periodos de tiempo importantes, es fácil deducir que los aportes se han hecho gracias a la capacidad laboral residual con la cual ha podido ejercer un oficio que le ha permitido garantizar para sí y para su familia un mínimo vital."

Con lo anterior, es posible concluir que es dable otorgar el reconocimiento de la prestación pensional de invalidez teniendo en cuenta la capacidad laboral residual, desde la óptica de las enfermedades crónicas, congénitas y degenerativas, que le permiten cotizar aún después de la fecha de estructuración consignada en el dictamen de PCL.

De igual manera, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, decantó en aquellas situaciones en las cuales una persona se enfrenta a una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, resulta inadecuado no contabilizar las semanas cotizadas con posterioridad a la fecha de estructuración de su estado de invalidez, debido a las condiciones particulares que se presentan en este tipo de afecciones médicas. Por consiguiente, y atendiendo al propósito fundamental del sistema de seguridad social y de la prestación por invalidez, que es brindar cobertura cuando la salud del asegurado ya no le permite continuar trabajando, se le debe garantizar al afiliado una calidad de vida óptima con sus propios medios.

Lineamientos que tienen su génesis, en consideración a la naturaleza de la prestación, su estrecha relación con el trabajo, la especial protección que corresponde, según el bloque de constitucionalidad; y de esta manera, lo ha explicado en sentencia reciente SL 3143 de 2023 y cuyos criterios se han reiterado entre otras, en la SL 3852 de 2022, SL1172-2022, SL198-2021, SL770-2020, SL 3275-2019, SL4567-2019, y en las que ha trazado una línea jurisprudencial que posibilita tomar como fecha para el estudio de la causación del derecho, no sólo la que generó tal estado sino también los que se puedan contabilizar con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez, en aras de garantizar el derecho a la seguridad social de los afiliados que han venido sufriendo un deterioro paulatino en su estado de salud, pero que conservan una capacidad laboral que les permite continuar ejerciendo dentro del mercado de trabajo e ir forjando su situación prestacional.

La posición actual de la Corte plasmada en la sentencia CSJ SL2345-2023 y que alude especialmente a la SL1172-2022 es la siguiente:

"[…] esta Sala de la Corte ha establecido que existen determinadas situaciones en las que hay cotizaciones que resultan válidas y contables más allá de la fecha de

estructuración de la invalidez, eventos especiales que deben ser cuidadosamente esclarecidos por el juez, como es el caso de las enfermedades de carácter congénito, crónico o degenerativo o, como también se ha aceptado, las que se derivan de secuelas que con el paso del tiempo afectan la salud en una magnitud más gravosa y posterior al diagnóstico primigenio del padecimiento, pero que, en uno u otro caso, permiten al afiliado mantener su fuerza de trabajo y, por tanto, continuar laborando y aportando al sistema pensional con el fin de cubrir los riesgos de invalidez, vejez o muerte."

Frente a la densidad de semanas cotizadas cuando se trata de enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas; la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL2332-2021, estableció que:

"Conforme al criterio doctrinal actual de la Sala, sin desconocer las exigencias de la normativa aplicable en cuanto a la densidad de semanas cotizadas dentro de un lapso o tiempo determinado, anterior a la fecha de estructuración de la invalidez cuando se configura una pérdida de la capacidad laboral superior al 50%, para accederse a la prestación por invalidez, como con acierto lo anotó el Tribunal, excepcionalmente, en tratándose de enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas, es posible contabilizar las semanas posteriores a la estructuración de invalidez, siempre y cuando sean producto de la capacidad laboral productiva que le permita al afiliado desempeñar una labor y, en esa medida, trabajar y cotizar"

Conforme a lo anterior, y al aplicarlo a nuestro caso concreto, se precisa inicialmente que el actor, padece desprendimiento de retina en ambos ojos (fols. 29-36 pdf 02 primera instancia); con una pérdida de capacidad laboral del 75.52%; que, para la demandada, la fecha de estructuración de dicho padecimiento fue el 19 de agosto de 2014, lo que significaría la pérdida del deprecado derecho del actor, de ser beneficiario de la pensión de invalidez, puesto que no acumularía las semanas necesarias que establece la ley, toda vez que antes del año 2014, únicamente posee cotizaciones en el año 2005 y anteriores.

Sin embargo, la Sala se logra percatar, inicialmente, que, de la historia laboral aportada al plenario, el actor posee cotizaciones al sistema general de pensiones, administrado por la demandada Protección S.A. posteriores a la fecha en comento (fols 101-168 pdf 02 primera instancia), lo que permite deducir que el actor pudo continuar trabajando, lo que también se extrae con la certificación laboral obrante al plenario, expedida por la empresa de calzado Beverly Hills del 24 de marzo de 2021 (fol. 105 pdf 02 primera instancia), que certificó que el actor, laboró desde el 16 de noviembre de 2011 hasta el 28 de febrero de 2017, lo que logra coincidir con el dicho del actor en su interrogatorio.

De igual manera, esta Corporación anota, que, del diagnóstico inicial, realizado por la Clínica de Ojos (CLINIOJOS) S.A. del 19 de agosto de 2014 (fol. 16 pdf 02 primera instancia), se desprende que el padecimiento del actor (*h335-otro desprendimiento de la retina*) resulta ser de carácter degenerativo, análisis que también tuvo en cuenta la entidad que realizó el dictamen de PCL del actor para su emisión, como lo describió Suramericana en su dictamen; asimismo, se extrae de aquel, que su padecimiento, hasta dicho momento, no generaba una pérdida total de su visión, pues se remitió de

manera urgente de retina por *miopía degenerativa en ojo único.* A tal conclusión también se llega, al analizar la intervención quirúrgica realizada al actor el 06 de julio de 2016 y 30 de noviembre de 2016 (fols. 17-18 pdf 02 primera instancia), toda vez que con ellas se esperaba que el actor continuara con su visión.

Sin embargo, esta Sala advierte, que, dada las complicaciones de su enfermedad, y luego de haber sido revisado por IMEVI S.A.S. el 06 de marzo de 2017 (fols 19 – 21 pdf 02 primera instancia), esta misma entidad, por medio del Doctor JOVAN FREDY DIAZ QUIROGA, el 27 de marzo de 2017, concluyó que el demandante no tenía forma de mejorar su visión, y que, para su concepto, era legalmente ciego (fols 22-24 pdf 02 primera instancia)

En este contexto, y aplicando los criterios jurisprudenciales antes mencionados, se deberán contabilizar las semanas cotizadas, anteriores a la fecha en que el actor, perdió totalmente la visión, esto es el 27 de marzo de 2017.

CONTABILIZACIÓN DE SEMANAS COTIZADAS PARA PENSIÓN DE INVALIDEZ

Ahora bien, en respuesta a la apelación presentada por la apoderada por la parte demandada en cuanto a que, aun contabilizando el número de semanas desde el 27 de marzo de 2017, el actor no acumularía las 50 semanas mínimas, resulta necesario exponer que, esta Sala comparte lo establecido recientemente por la Corte Suprema de Justicia, misma que luego de un estudio riguroso y juicioso de la normatividad y jurisprudencia, concluyó, en cuanto a la contabilización de semanas, que las mismas deben sumar todos los días calendario, respecto a la cotización que se haya realizado, como lo sustentó en Sentencia SL138 del 31 de enero de 2024 con ponencia del Doctor Luis Benedicto Herrera Díaz, así:

> *"En suma, para la facturación y pago de aportes los días cotizados son 30 en cada período, pero como la cotización cubre todos los días del período de trabajo cubierto por el salario o ingreso asegurado, durante el cual, además, el afiliado ha estado expuesto a los riesgos materia de la cobertura, se impone entender que todos los períodos -- semana, mes o año-- se contabilicen en días calendario para poder establecer el número de semanas cotizadas para de esa forma, hacer el cálculo pertinente al reconocimiento de las prestaciones del sistema general de pensiones, criterio jurisprudencial que será tenido en cuenta en adelante, recogiéndose así cualquiera otro anterior que lo contraríe."*

De esta manera, se realizará el cálculo de las semanas cotizadas por el actor, teniendo en cuenta en su historia laboral (fols. 101-104 pdf 02 primera instancia) el número de días calendario que se encuentre dentro del periodo correspondiente a cada mes, y no solamente por 30 días, resultando así un total de 50,29 semanas de cotización en los últimos 3 años, como se puede ver en la siguiente tabla:

SEMANAS COTIZADAS ULTIMOS 3 AÑOS		
Fecha Inicial	**Fecha Final**	**Número días**
1/02/2016	28/02/2016	20
1/03/2016	31/03/2016	31
1/04/2016	30/04/2016	30
1/05/2016	31/05/2016	31
1/06/2016	30/06/2016	30
1/07/2016	31/07/2016	31
1/08/2016	31/08/2016	31
1/09/2016	30/09/2016	30
1/10/2016	31/10/2016	1
1/12/2016	31/12/2016	31
1/01/2017	31/01/2017	31
1/02/2017	28/02/2017	28
1/03/2017	27/03/2017	27
TOTAL DIAS COTIZADOS		**352**
SEMANAS COTIZADAS		**50,29**

Por lo anterior, concluye la Sala que el actor, es beneficiario del derecho de la pensión de invalidez a partir del 27 de marzo de 2017; sin embargo, como lo estableció el *A Quo,* únicamente se condenará al pago de las mismas a partir del 01 de marzo de 2019, pues el dictamen de PCL fue notificado al actor el 01 de septiembre de 2017 (fols 63-64 pdf 04), y, sin que se logre extraer que el actor haya solicitado ante Protección, alguna prestación en su favor, se logra verificar que el 30 de abril de 2018, la entidad mediante comunicación enviada al demandante (fols. 65-66 odf 04), resolvió otorgar en su favor la prestación subsidiaria de devolución de saldos, lo que llevó al afiliado a interponer recurso de apelación el 08 de mayo de 2018 (fols.74-77 pdf 04), resuelto el 30 de mayo de 2018 (fols. 78-80 pdf 04); y la demanda fue presentada el 01 de marzo de 2022, es decir, que ya había transcurrido más de los 3 años que el artículo 151 del CPTSS, entre esta y aquella, lo que en efecto, hace que las anteriores mesadas, a la presentación de la demanda, sufran este efecto jurídico.

DE LOS INTERESES MORATORIOS

Finalmente, respecto a los intereses moratorios, mismos que fueron objeto de reproche por la parte demandada, esta Sala considera que los mismos no se encuentran llamados a prosperar, toda vez que, la negación de la prestación pensional por parte de la entidad demandada, se realizó teniendo en cuenta la legislación aplicable, sin que haya podido conocer en su momento, los cambios jurisprudenciales que respecto a los criterios aquí enunciados, se han suscitado, pues respecto a la contabilización de la densidad de aportes o semanas validas en cuanto a las enfermedades congénitas, ello se dio a partir de la Sentencia SL 3275 de 2019, y la negación de la prestación, se realizó el 30 de mayo de 2018. Lo anterior, en concordancia con lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL 1079 DE 2024, así:

> *"Del mismo modo, la Corporación ha precisado que aquellos deben ser impuestos con independencia de la buena o mala fe en el comportamiento en que haya incurrido el deudor, siempre y cuando se demuestre el retardo injustificado en la cancelación de la prestación pensional (CSJ SL7893-2015), asentando, además, que no en todos los casos es imperativo condenar por ese concepto, estableciendo algunas excepciones a dicho criterio, solo en eventos puntuales, como cuando:*

1. La negativa de las entidades para reconocer las prestaciones a su cargo, tiene respaldo en las normas que en un comienzo regulaban la situación o su postura proviene de la aplicación minuciosa de la ley sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces (CSJ SL704-2013).
2. Se otorga una prestación pensional en aplicación de un cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL787-2013, reiterada en la sentencia CSJ SL2941-2016).
3. Se inaplica el requisito de fidelidad al sistema (CSJ SL10637-2014, reiterada en CSJ SL6326-2016, CSJ SL070-2018).
4. La controversia se define bajo una interpretación normativa, como sucede en la aplicación del principio de la condición más beneficiosa (CSJ SL12018-2016).
5. Existe «algún conflicto entre potenciales beneficiarios de la pensión, que solo puede ser dirimido por la justicia ordinaria» (CSJ SL454-2021, reiterada, entre otros, en los fallos CSJ 1476-2021 y CSJ SL2893-2021), con la precisión de que, en esta última hipótesis, la controversia entre el derecho pensional debe implicar una disputa real y no supuesta ni eventual entre beneficiarios excluyentes de la prestación (CSJ SL5654-2021)." (subraya y negrita por fuera)

Por ello, se revocará el numeral tercero de la decisión de instancia, para exonerar a la demandada al reconocimiento y pago de intereses moratorios.

INDEXACIÓN

Por otro lado, si bien, no hay lugar a condenar a la demandada al pago de los intereses moratorios, como quedó resuelto, lo cierto es que la demandada deberá pagar los valores causados por el demandante de forma indexada a la hora de cancelarse, ello teniendo en cuenta que, como lo estableció la Honorable Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, en Sentencia SL4092 de 2022, - *la indexación no es otra cosa que traer a valor presente una suma de dinero o crédito para contrarrestar los efectos inflacionarios de la economía o la pérdida de valor adquisitivo de la moneda o medio de cambio por el transcurso del tiempo, sin que ello signifique un aumento o incremento del mismo.-*, en ese sentido, se adicionará el numeral sexto de la Sentencia, para condenar a Protección S.A., a pagar al demandante a la actualización e indexación de los valores adeudados, conforme a la siguiente formula:

$$VA = VH \times \frac{IPC\ Final}{IPC\ Inicial}$$

Donde:

VA = Valor actualizado

VH = Diferencias debidas.

IPC Final= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuará el pago.

IPC Inicial= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes de causación de la diferencia.

3.1. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dado que el recurso interpuesto por la demandada, prosperó parcialmente, no se condenará en costas en esta instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,** Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. REVOCAR el numeral tercero de la sentencia proferida el día 25 de julio de 2024 en el proceso de la referencia por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá.

SEGUNDO. ADICIONAR el numeral sexto a la sentencia proferida el día 25 de julio de 2024 en el proceso de la referencia por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá. El cual quedará así:

> *"**SEXTO: CONDENAR** a Protección S.A., a pagar al demandante la actualización e indexación de los valores adeudados, conforme a la siguiente formula:*
>
> *VA = VH x IPC Final*
> *IPC Inicial*
>
> *Donde:*
>
> *VA = Valor actualizado*
> *VH = Diferencias debidas.*
>
> *IPC Final= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes en el que se efectuará el pago.*
> *IPC Inicial= Índice de precios al consumidor correspondiente al mes de causación de la diferencia."*

TERCERO: CONFIRMAR en lo restante la sentencia.

CUARTO. Sin lugar a condena en costas en esta instancia**.**

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 046.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada Ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada-

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	NUMA GILBERTO NEUTA MUÑOZ
Parte demandada	COLPENSIONES
Radicación	11001310503320220037201
Fecha de la decisión	09 DE AGOSTO DE 2024
Motivo	APELACION Y CONSULTA
Tema	RELIQUIDACION PENSION – RETROACTIVO
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503320220037201
No. de Acta	067

AUTO

Teniendo en cuenta que el doctor JAHNNIK INGRID WEIMANNS SANCLEMENTE, en su calidad de representante legal de la firma UNION TEMPORAL W&WLC UT, integrado por las sociedades World Legal Corporation SAS y Bae Bufete de Abogados Expertos SAS; quien actúa en nombre y representación de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, mediante poder general otorgado por la escritura pública No. 1765 del 18 de Julio de 2023 de la Notaria Sesenta y Cuatro (64) del Círculo de Bogotá, presentó sustitución de poder al abogado JUAN PABLO MELO ZAPATA mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.551.950 expedida en Bogotá D.C. y portador de la Tarjeta Profesional No. 268.106 del Honorable C.S. de la J (fols 14- 65 pdf 04 carpeta segunda instancia), y que una vez verificado lo anterior y la calidad de abogado del sustituto, se dispone **ACEPTAR** la sustitución de poder otorgada, y en consecuencia, **RECONOCER** personería adjetiva para actuar en el presente asunto.

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita, y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada COLPENSIONES contra la Sentencia proferida el 09 de agosto de 2024, por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, así como el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

El señor NUMA GILBERTO NEUTA MUÑOZ, en su demanda, solicitó que se condenara a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones al pago del valor retroactivo de la pensión de vejez, desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020, así como los intereses de mora sobre las mesadas dejadas de pagar. También pidió que se declarara que su desafiliación del sistema ocurrió en febrero de 2019 y que el valor retroactivo no había sido cancelado. Adicionalmente, solicitó el pago de las costas y agencias en derecho.

Para fundamentar sus pedimentos, expuso que el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 28 de marzo de 2019, revocó una decisión anterior y condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez del demandante a partir de su desafiliación. No obstante, Colpensiones cumplió erradamente la sentencia mediante la Resolución No. SUB 37629 del 10 de febrero de 2020, reconociendo el pago de la pensión solo desde marzo de 2020, sin incluir el valor retroactivo adeudado.

Explicó que su empleador cometió un error al incluirlo en la planilla de pagos del sistema en julio de 2019, lo que generó una inconsistencia en la base de datos de Colpensiones; sin embargo, el empleador informó a Colpensiones sobre el error y solicitó la corrección, pero la administradora de pensiones insistió en negar el pago del retroactivo argumentando la ausencia de cotización en el período reclamado.

El demandante presentó solicitudes de pago del retroactivo en noviembre de 2020, las cuales fueron negadas mediante la Resolución No. SUB 274411 del 17 de diciembre de 2020 (fols 22-33). Contra dicha resolución interpuso recursos de reposición y en subsidio de apelación (fols 34-42), los cuales fueron resueltos, según el actor, en forma errónea y equívoca mediante la Resolución No. SUB 55420 del 2 de marzo de 2021 (fols. 60-69), confirmando la negativa sin considerar correctamente los fundamentos legales y la realidad de la desafiliación del demandante.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda, y corrió traslado de la misma a la convocada, mediante Auto del 24 de noviembre de 2024 (pdf 03), luego, tuvo por contestada la demanda por parte de demandada Colpensiones mediante providencia del 22 de febrero de 2024 (pdf 09).

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. CONTESTACIÓN COLPENSIONES (PDF 07)

En su contestación, Colpensiones solicitó al juzgado que se le absolviera de todas las pretensiones formuladas en su contra y que se condenara al demandante en costas, presentando como excepciones la inexistencia del derecho, el cobro de lo no debido, la buena fe de Colpensiones, el pago ya efectuado de la pensión y la presunción de legalidad de los actos administrativos. También alegó la improcedencia del pago de costas por tratarse de una entidad de seguridad social y planteó la prescripción de

cualquier derecho que hubiera podido causarse en favor del demandante. Argumentó que el reconocimiento de la pensión de vejez se efectuó correctamente a partir del 1 de febrero de 2020, conforme a la normativa aplicable, y que no existía derecho al pago del retroactivo pensional solicitado.

La entidad sostuvo que el demandante no cumplía con el requisito de desafiliación al sistema de pensiones en la fecha en la que alegaba tener derecho al pago del retroactivo. Explicó que, al revisar la historia laboral, no se encontró la novedad de retiro con el último empleador en el ciclo de julio de 2019, lo que impidió que la pensión se reconociera desde marzo de 2019. En consecuencia, aplicó lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, según el cual el disfrute de la pensión solo es posible una vez se haya producido la desafiliación formal.

Para fundamentar su defensa, enfatizó que la desafiliación del sistema es una condición necesaria para el disfrute de la pensión y que no puede entenderse como automática solo por el cese de aportes. También argumentó que no se configuraba el derecho al pago de intereses moratorios ni a la indexación, ya que no existía mora en el pago de las mesadas, pues el reconocimiento se realizó conforme a la normativa vigente.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 14 primera instancia)

El *A Quo,* decidió declarar que la fecha de disfrute de la pensión de vejez reconocida al señor Numa Gilberto Neuta Muñoz debía ser a partir del 1 de abril de 2019 y no desde el 1 de febrero de 2020, como lo había fijado la entidad demandada. En consecuencia, condenó a Colpensiones a pagar al demandante el retroactivo pensional correspondiente al período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de enero de 2020, por un valor de $8.340.847.

Asimismo, condenó a la entidad demandada al pago de intereses moratorios desde el 24 de marzo de 2021 hasta la fecha en que se realice el pago efectivo del retroactivo pensional, estableciendo que, a la fecha de la decisión, estos ascendían a $7.320.479, sin perjuicio de los intereses adicionales que se generen hasta el cumplimiento total de la obligación, declarando no probadas las excepciones de prescripción y cobro de lo no debido propuestas por la parte demandada.

Para concluir lo anterior, el Juez consideró que, aunque Colpensiones reconoció la pensión del demandante, omitió el pago del retroactivo a pesar de la existencia de una novedad de retiro registrada en el sistema desde marzo de 2019. Además, recordó que la entidad alegó, que una cotización realizada por el empleador en julio de 2019 impedía el reconocimiento del retroactivo, argumento que fue desestimado, ya que dicha cotización se debió a un error que posteriormente fue corregido.

El Juzgador sostuvo que el Tribunal Superior de Bogotá ya había reconocido el derecho pensional del demandante en segunda instancia y que la entidad tenía la obligación de verificar la fecha de desafiliación para determinar el pago correcto de la mesada retroactiva.

Ajustó su decisión en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, según la cual, en ausencia de una novedad de retiro explícita, se podía acudir a otros elementos de prueba para establecer la fecha en que el afiliado manifestó su intención de pensionarse. Sin embargo, en este caso, la historia laboral reportaba claramente la novedad de retiro en marzo de 2019, por lo que no había lugar a discusión sobre la fecha de inicio del derecho pensional.

Para finalizar, analizó la procedencia de los intereses moratorios, concluyendo que estos eran exigibles desde el 24 de marzo de 2021, es decir, cuatro meses después de que el demandante solicitó el pago del retroactivo, en aplicación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las disposiciones jurisprudenciales aplicables, determinando que no había operado la prescripción de la acción, ya que la reclamación se había presentado el 21 de noviembre de 2020 y la demanda se radicó en agosto de 2022, dentro del término legal de tres años.

1.5. APELACIÓN

1.5.1. DEMANDADA COLPENSIONES

Colpensiones, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida, solicitando al Tribunal Superior de Bogotá su revocatoria. Fundamentó su solicitud en que el demandante, según certificación de conciliación de 26 de mayo de 2023, manifestó ánimo conciliatorio, aceptando el reconocimiento del retroactivo pensional a partir del 1 de agosto de 2019, argumentando que dicha fecha correspondía al día siguiente a la última cotización realizada por el empleador del demandante, la cual figuraba en su historia laboral para el período de julio de 2019.

Explicó que con base en la Circular 02 de 2021, que modificó la Circular 01 de 2012, indicó que el reconocimiento del retroactivo debía hacerse a partir del día siguiente a la última cotización, a pesar de la existencia de una novedad de retiro, pues en la historia laboral quedaba evidenciado el último pago.

En consecuencia, solicitó que se modificara la sentencia de primera instancia y se ordenara el pago del retroactivo pensional desde el 1 de agosto de 2019 y no desde el 1 de abril de 2019, como lo había determinado el juez de primera instancia.

Asimismo, deprecó la revocatoria de la condena en intereses moratorios, argumentando que su representada no incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales, las cuales fueron reconocidas mediante acto administrativo y canceladas de forma mensual desde el 1 de febrero de 2020, en cumplimiento del fallo judicial del Juzgado 31 Laboral del Circuito de Bogotá, que posteriormente fue revocado por el Tribunal Superior de Bogotá.

Señaló que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 establecía que los intereses moratorios eran una sanción por mora en el pago de mesadas pensionales reconocidas mediante acto administrativo, y que la Corte Suprema de Justicia había indicado que dichos intereses no procedían sobre reajustes pensionales. Además, argumentó que, en caso de que el Tribunal considerara procedente el pago de los

intereses moratorios, estos solo debían liquidarse hasta el 26 de mayo de 2023, fecha en la cual su representada expidió la fórmula de conciliación mediante el Comité de Conciliación No. 079332023 (pdf 11), sin que la parte demandante la acogiera.

Finalmente, solicitó la revocatoria de la condena en costas, sosteniendo que actuó con ánimo conciliatorio en todo momento y que, en virtud de ello, no debía ser condenada al pago de dichas erogaciones procesales. En consecuencia, pidió que se revocara la sentencia en su totalidad y se absolviera a Colpensiones de las pretensiones de la demanda.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada COLPENSIONES, por lo que el despacho de conocimiento, con Auto de 06 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Así también se estudiará la presente decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad COLPENSIONES.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se refirieron al respecto así:

COLPENSIONES (PDF 05)

En sus alegatos, Colpensiones requirió del Tribunal Superior de Bogotá que revocara la sentencia y absolviera a la entidad, argumentando que las decisiones tomadas por su entidad estaban ajustadas a derecho. Sostuvo que la última cotización del demandante se realizó en julio de 2019 y que, conforme a la Circular OAL-02-2021, el retroactivo debía pagarse desde el 1 de agosto de 2019, no desde abril de 2019 como lo ordenó el juez de primera instancia.

Asimismo, solicitó que no se condene a pagar intereses moratorios, alegando que la entidad no incurrió en mora, pues pagó la pensión desde su reconocimiento. También rechazó la indexación, señalando que las mesadas ya se reajustan anualmente por ley. Finalmente, propuso una conciliación con un pago único de $5.312.299 por el retroactivo desde agosto de 2019 hasta enero de 2020, sin intereses ni ajustes adicionales.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada Colpensiones, así como también el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada y el grado de consulta en su favor, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Cuál es la fecha en la cual debe hacerse efectiva la pensión de vejez del actor? Y ¿hay lugar a condenar al pago de intereses moratorios y costas procesales?

SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Luego de lo anterior, es correcto afirmar y no es objeto de discusión:

(i) El derecho a la pensión de vejez que le asiste al demandante, otorgado mediante Sentencia del 28 de marzo de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá en su Sala Laboral (expediente administrativo pdf GDJ-SEN-SI-2019_7700756-20190610113324).
(ii) Que el demandante, solicitó el reconocimiento de su pensión el 04 de abril de 2019 (exp. adtivo. pdf GRP-FSP-AF-2019_4464071-20190404040100).
(iii) La negación del derecho al actor mediante Resolución SUB 337161 del 10 de diciembre de 2019 (exp. adtivo. Pdf GRF-AAT-RP-2019_16492100_9-20191210081939)
(iv) Tampoco lo es que con oficio del 06 de septiembre de 2019 la empresa Ladrillera de Santander notificó a Colpensiones que por error involuntario se realizó un aporte en nombre del demandante en el periodo de julio de 2019 el día 13 de julio de 2019 (exp. adtivo. Pdf GEN-ANX-CI-2021_952198-20210129093002.).
(v) De igual manera que la historia laboral del actor, refleja una novedad de retiro en el periodo de marzo de 2019 (exp adtivo. Pdf GEN-REQ-IN-2021_952198-20210219105509).
(vi) Que con Resolución SUB 37629 del 10 de febrero de 2020 Colpensiones resolvió dar cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, y reconoció pensión de vejez al actor a partir de 01 de febrero de 2020 por valor de un salario mínimo (exp. adtivo. Pdf GRF-AAT-RP-2019_16271474-20200914035119).
(vii) Asimismo, que con Resolución SUB 45501 del 19 de febrero de 2020, la entidad demandada declaró improcedente el recurso de reposición y apelación contra la resolución de 10 de diciembre de 2019 (exp. adtivo. GRF-AAT-RP-2020_1076370-20200219103613).
(viii) Que posteriormente, con Resolución SUB 274411 del 17 de diciembre de 2020, resolvió negar la solicitud del demandante de pagar el retroactivo pensional (exp. adtivo. Pdf GRF-AAT-RP-2020_11978039-20201217042109)
(ix) Que el demandante solicitó el mentado retroactivo el 24 de noviembre de 2020 (GRP-FSP-AF-2020_11978039-20201124090040).
(x) Finalmente, que con Resolución DPE 2905 del 26 de abril de 2021, confirmó la resolución que negó el retroactivo (exp. adtivo. Pdf GRF-AAT-RP-2021_952198_2-20210426024005).

FECHA DE DISFRUTE Y CAUSACIÓN DE LA PRESTACIÓN PENSIONAL Y RETROACTIVO

Inicialmente, es menester recordar, que los conceptos entre causación y disfrute de la pensión, tal como lo ha reiterado la Corte Suprema de Justicia, son disímiles, y se dan en momentos diferentes, como lo recordó en Sentencia SL 3108 de 2024, al hacer tal diferencia, así:

> *"Esta Corporación tiene definida la diferencia entre la «causación» y el «disfrute» de la pensión de vejez. El primero de los eventos, «se estructura cuando se reúnen los requisitos mínimos exigidos en la ley para acceder a la prestación pensional», y el segundo, «supone el cumplimiento del primero y se da cuando se solicita el reconocimiento de la pensión a la entidad de seguridad social, debiendo como regla general, **llevarse a cabo la previa desafiliación del régimen**». (CSJ SL, 6 de jul. 2011, rad. 38558).*
> *En lo concerniente a la desafiliación, esta Sala ha considerado que acontece **cuando el afiliado exterioriza su indudable voluntad de no continuar amparado para los riesgos Invalidez, Vejez o Muerte**, en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, manifestación que bien puede ser expresa**, reportando la novedad de retiro**, o tácita, mediante actos inequívocos que así lo den a entender."* (Negrita y subraya por fuera)

En ese sentido, y abordando el caso de marras, se tiene inicialmente, que el actor, como quedó demostrado, inicialmente solicitó ante la entidad demandada, su deseo de obtener su pensión de vejez, el 04 de abril de 2019, siendo esta negada por la demandada el 10 de diciembre de 2019, y que solo concedió el 10 de febrero de 2020 en cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, a partir de 01 de febrero de 2020 en cuantía de un salario mínimo.

De igual manera, se evidencia por parte de la Sala, que, dentro de la Historia Laboral del demandante, hubo una novedad de retiro en el periodo de marzo de 2019, novedad que fue reportada en su momento, por el empleador, según se extrae de la mentada historia. Así como también resalta este Tribunal la solicitud realizada por la empresa empleadora del demandante, donde, con oficio de 06 de septiembre de 2019, solicitó a Colpensiones que no se tuviera en cuenta la cotización realizada en el periodo de julio de 2019, en razón a un error involuntario.

Con todo lo anterior, y sin lugar a mayores elucubraciones, es fácil concluir que la fecha de disfrute de la pensión del actor es a partir del 01 de abril de 2019, día siguiente a la última cotización, pues esta fue en el periodo de marzo de 2019, fecha en la cual también se reportó novedad de retiro, y mayor fuerza toma tal conclusión, cuando se denota la voluntad inequívoca del afiliado de obtener su estado de pensión, sin que esta Corporación acoja la afirmación de la demandada al establecer que la pensión deberá otorgarse a partir de 01 de febrero de 2020 dada la última cotización realizada por el empleador en julio de 2019 y que luego de esta no hubo ninguna novedad de retiro, pues esta fue realizada debido a un error involuntario, error que no puede ser soportado por el afiliado, aun cuando el empleador se retractó de aquello.

Por su parte, resulta menester aclarar a la parte recurrente, en cuanto a que la parte demandada presentó formula de conciliación ante el demandante para aceptar el pago a partir del mes de agosto de 2019, inicialmente se debe indicar que el actor en ningún momento de la audiencia aceptó tal oferta, ni tampoco se logra extraer ello de alguna documental obrante, sin embargo; de haber sido así, las apreciaciones o manifestaciones realizadas en la audiencia de conciliación, no pueden catalogarse como una confesión realizada por las partes en contienda.

Por todo ello, se confirmará la Sentencia objeto de análisis en cuanto a la fecha de disfrute de la pensión de vejez a partir del 01 de abril de 2019, cuyo retroactivo hasta el 31 de enero de 2020, fecha anterior al pago y reconocimiento de la pensión por parte de la demandada, y que luego de hacer el cálculo matemático por esta Corporación, resultó ser de NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($9.158.963,00), valor mayor al establecido por el *A Quo,* como se pasa a estudiar:

Tabla Retroactivo Pensional					
Fecha inicial	***Fecha final***	***Incremento %***	***Valor mesada calculada***	***N°. Mesadas***	***Subtotal***
01/04/19	*31/12/19*	*3,18%*	*$ 828.116,00*	*10,00*	*$ 8.281.160,0*
01/01/20	***31/01/20***	*3,80%*	*$ 877.803,00*	*1,00*	*$ 877.803,0*
Total retroactivo				***$ 9.158.963,00***	

Sin embargo; en aplicación al principio de *non reformatio in pejus*, mismo que se denota como la garantía jurídica de no agravar la situación y condena del recurrente, en este caso Colpensiones, se confirmará también el monto ordenado por el *A Quo*.

INTERESES MORATORIOS

Definido lo anterior, se procede a estudiar lo concerniente a los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que dispone:

> *"ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago".*

Estos intereses se refieren expresamente a la procedencia de una consecuencia económica por el pago inoportuno de mesadas pensiónales, teniendo en cuenta para ello que las administradoras cuentan con un término de cuatro (04) meses para decidir lo referente al reconocimiento de las pensiones, tal y como se dispuso en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, al señalar que *«[…] El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses[…]»*

Es de advertir que esta procede siempre y cuando haya retardo en el pago de las mesadas, independientemente de la buena o mala fe en la conducta del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional, en tanto cuentan con un carácter resarcitorio, encaminado a aminorar los efectos adversos que producen al acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de una obligación, como lo recordó la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 1079 de 2024.

Conforme a lo expuesto y a lo allegado en el acervo probatorio, esta Sala observa que la solicitud inicial de pensión elevada por el actor a Colpensiones, solicitando el mentado derecho, se efectuó el 04 de abril de 2019 (exp. adtivo. pdf GRP-FSP-AF-2019_4464071-20190404040100), y tal como se evidenció, los intereses deben contarse a partir de los 4 meses siguientes a esta, esto es a partir del 04 de agosto de 2019, sin embargo; en virtud del grado de Consulta y dado que ello no fue objeto de apelación, la fecha en que deberá contarse los deprecados intereses, será la que el *A Quo* definió en su Sentencia, esto es a partir del 24 de marzo de 2021.

En mérito de lo expuesto, para la Sala no queda sino confirmar la decisión de instancia, que condenó a la demandada a los intereses moratorios

EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR COLPENSIONES

La demandada COLPENSIONES, al contestar el escrito inaugural, propuso como excepciones la inexistencia del derecho, el cobro de lo no debido, la buena fe de Colpensiones, el pago ya efectuado de la pensión y la presunción de legalidad de los actos administrativos, sin que ninguna de ellas alcance prosperidad porque con ellas se buscaba enervar las pretensiones elevadas por la parte activa de la Litis y ello, como ya se analizó, no ocurrió.

En lo que respecta a la excepción de prescripción, de conformidad con lo estatuido en los artículos 488 y 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., y teniendo en cuenta que el actor, elevó la reclamación de su derecho pensional el 04 de abril de 2019, misma que fue negada por la parte convocada mediante Resolución SUB 337161 del 10 de diciembre de 2019 (exp. adtivo. Pdf GRF-AAT-RP-2019_16492100_9-20191210081939) y la demanda se interpuso el 02 de agosto de 2022 (pdf 01), se constata que esta no operó.

Por otra parte, como fue motivo de alzada la condena en costas decretada por la *A Quo* contra Colpensiones, al considerar que actuó conforme a los postulados de la buena fe y por haber propuesto formula de conciliación al actor, sin que ella haya sido acogida por este, resulta pertinente memorar el artículo 365 del Código General del Proceso que, entre otras cosas, enuncia que *se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,* sin que se encuentre dentro de aquella norma o alguna otra diferente, excepción alguna por actuar o no bajo el principio de la buena fe, o tener animo conciliatorio, pues lo único que se desprende de tal disposición legal, es que, quien se oponga a las pretensiones de una demanda en juicio y sea vencido en este, será condenado al pago de aquellas.

Por lo anterior, y al haberse demostrado dentro del litigio que la demandada Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, y que en el proceso resultó vencida, es procedente tal condena.

3.1. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dado que no tuvo prosperidad el recurso presentado, las costas en esta instancia quedarán a cargo de la demandada Colpensiones y en favor de la demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el 09 de agosto de 2024, por el Juzgado Treinta y Tres Laboral del Circuito de Bogotá**.** Por las razones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO. CONDENAR en **COSTAS** de segunda instancia a la parte demandada COLPENSIONES en favor de la parte demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 067.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

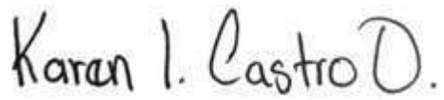
Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la **SENTENCIA** que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente y en favor del demandante**,** se **FIJA** como agencias en derecho la suma de uno y medio (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	CLAUDIA CAMACHO PEÑA
Parte demandada	COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
Radicación	11001 31 05 035 2023-00472 01
Fecha de la decisión	17 DE OCTUBRE DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA DE TRASLADO
Acta de Discusión	061
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503520230047201

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y las partes demandadas, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 17 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

Claudia Camacho Peña, actuando a través de su apoderado judicial, presentó demanda ordinaria laboral contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). Por esta vía, solicita que se profiera sentencia declarando la ineficacia del traslado realizado en mayo de 2003 al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), con el consecuente retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), administrado actualmente por Colpensiones, y el reconocimiento y pago de la pensión de vejez conforme al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, incluyendo intereses moratorios, indexación y mesadas retroactivas.

Como fundamento fáctico, se afirma que la demandante se afilió al extinto Instituto de Seguros Sociales (ISS) en 1984, acumulando 1002,2 semanas cotizadas hasta el momento de su traslado en 2003 al RAIS, decisión adoptada, según alega, bajo una asesoría deficiente e información incompleta suministrada por Porvenir S.A. La

actora sostiene que no se le explicó con claridad las implicaciones, riesgos y desventajas del cambio de régimen, ni se le ofreció una proyección pensional adecuada que demostrara que las condiciones en el RAIS eran más favorables, lo que generó una expectativa errónea respecto de su futuro pensional. Este traslado, aduce, le causó un perjuicio al perder la posibilidad de pensionarse en condiciones más beneficiosas bajo el RPMPD.

En el plano jurídico, la demandante argumenta que las administradoras de fondos de pensiones tienen la obligación de brindar información transparente, veraz y suficiente a los afiliados en el momento de decidir sobre su régimen pensional, tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En el caso concreto, se señala que Porvenir S.A. incumplió este deber, configurándose la ineficacia del acto de traslado conforme a los parámetros del artículo 1746 del Código Civil y los principios de buena fe y transparencia consagrados en el sistema de seguridad social. Por lo anterior, solicita la devolución de los valores administrados por Porvenir S.A., incluyendo cotizaciones, bonos pensionales y rendimientos, para su transferencia al RPMPD.

Con base en estos argumentos, la parte actora plantea que la afiliación al RAIS fue inválida, solicitando, además, que Colpensiones reconozca y pague la pensión de vejez a la que considera tener derecho desde el 15 de octubre de 2023, fecha en que cumplió los requisitos legales de edad y semanas cotizadas, conforme al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 09 de julio del 2024 (pdf 07), luego, con providencia del 27 de agosto del 2024 (pdf 16), tuvo por contestada la demanda por COLPENSIONES y PORVENIR S.A., y fijó fecha para la celebración de audiencia de que trata el artículo 77 y 80 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 11)

Colpensiones, en su contestación, se opuso a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que estas carecen de fundamento jurídico y probatorio. En primer lugar, manifestó que la demandante no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003 para un traslado retroactivo al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), al encontrarse dentro de la prohibición de cambio de régimen para afiliados que están a menos de 10 años de la edad mínima de pensión. Además, señaló que el traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) se realizó voluntariamente en 2003, bajo las reglas legales vigentes en ese momento, con plena manifestación de su consentimiento.

Asimismo, la entidad subrayó que las características del RAIS estaban disponibles en la Ley 100 de 1993 y que no existía una obligación normativa de proyecciones pensionales o asesorías personalizadas en esa época. Por lo tanto, argumentó que no se configuró un incumplimiento del deber de información que pueda dar lugar a la ineficacia del traslado. De igual manera, indicó que acceder a las pretensiones de la demandante generaría un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del RPMPD, afectando a otros afiliados que han contribuido consistentemente al sistema solidario.

En cuanto a las excepciones, Colpensiones invocó la aplicación del precedente de la sentencia SL373 de 2021 y error sobre un punto de derecho que no vicia el consentimiento. También presentó las excepciones de cobro de lo no debido, mencionando que la demandante nunca estuvo afiliada al RPMPD; buena fe, en tanto ha actuado conforme a la legalidad; prescripción, por el tiempo transcurrido desde el traslado; y una excepción innominada o genérica. Finalmente, señaló la no procedencia del pago de costas.

I.3.2. PORVENIR S.A. (PDF 12)

Porvenir S.A., a través de su apoderada, respondió a la demanda presentada por Claudia Camacho Peña, oponiéndose a todas las pretensiones y planteando diversas excepciones de mérito. En primer lugar, sostuvo que el traslado de régimen realizado en marzo de 2003 se llevó a cabo conforme a la normativa vigente y que la demandante recibió información suficiente, veraz y adecuada sobre las características del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). La entidad alegó que el formulario de afiliación firmado por la actora constituye prueba suficiente del cumplimiento del deber de información y que este documento se presume auténtico y válido.

Asimismo, Porvenir presentó las siguientes excepciones: buena fe, argumentando que actuó dentro de los límites legales y cumpliendo con las obligaciones normativas vigentes en el momento del traslado; ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, dado que no se demostró la configuración de causales que justifiquen tal declaración; aceptación tácita de las condiciones del RAIS, ya que la demandante no manifestó objeción alguna durante más de dos décadas desde su traslado; prescripción, aduciendo que los términos legales para reclamar cualquier acción relacionada con el traslado han expirado; y prescripción de los gastos de administración, que no pueden ser objeto de devolución al formar parte de los costos inherentes al régimen administrado. Además, invocó la compensación, argumentando que cualquier reconocimiento debería descontar los beneficios ya percibidos por la demandante en el RAIS; inexistencia de la obligación, ya que no existe sustento jurídico para el pago o devolución de sumas en favor de la demandante; y una excepción genérica.

Finalmente, Porvenir argumentó que en ningún caso procedía la devolución de los gastos de administración, primas de seguros o porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, ya que estos corresponden a obligaciones propias del RAIS que no deben ser trasladadas al Régimen de Prima Media. La entidad concluyó

solicitando que se desestimen las pretensiones de la actora y que se la absuelva de toda responsabilidad.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 29 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 17 de octubre de 2024, decidió declarar la ineficacia del traslado de Claudia Camacho Peña del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por Porvenir S.A., debido al incumplimiento del deber de información por parte de la administradora. En consecuencia, se ordenó a Porvenir S.A. reintegrar a Colpensiones todos los valores recibidos por concepto de cotizaciones, bonos pensionales, intereses y frutos, incluyendo el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debidamente indexados, y realizar las gestiones administrativas necesarias para anular el traslado y actualizar la historia laboral de la demandante. Asimismo, se dispuso el retorno de la señora Camacho Peña al RPM y el reconocimiento de la pensión de vejez desde el 15 de octubre de 2023, condicionada a su desafiliación de otros regímenes.

La decisión se fundamentó en el incumplimiento del deber de información establecido en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, el artículo 15 del Decreto 656 de 1994 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El análisis probatorio evidenció que Porvenir S.A. no suministró a la demandante información clara, completa y suficiente sobre las condiciones, beneficios, desventajas y riesgos del RAIS al momento del traslado en 2003. Esto incluyó la falta de asesoramiento personalizado sobre factores como edad, semanas cotizadas e impacto económico del traslado. Según lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la SL 2324 de 2019 y SL 4964 de 2018, el deber de información debe garantizar una decisión autónoma y consciente del afiliado, lo cual no ocurrió en este caso.

Finalmente, el despacho desestimó las excepciones propuestas por las partes demandadas, incluidas la prescripción y la inexistencia de la obligación, al considerar que las acciones relacionadas con la ineficacia del traslado de régimen son imprescriptibles, según lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1688 de 2019. Así, se resolvió garantizar el derecho fundamental a la seguridad social de la demandante, retrotrayendo las cosas al estado anterior al traslado y ordenando a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, junto con el pago de las mesadas retroactivas, en los términos previstos por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDANTE (min 00:57:36 video 29)

El apoderado del demandante interpuso recurso de apelación solicitando la modificación del numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia y del numeral séptimo, relativo a la absolución de costas en favor de Colpensiones. En cuanto al numeral segundo, argumentó que Porvenir S.A. está obligada a devolver no solo los valores correspondientes a cotizaciones y bonos pensionales, sino también los gastos

de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, debidamente indexados. Para sustentar su petición, citó jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia, como las sentencias SL 1046, SL 764, SL 689 y SL 509 del año 2024, que reafirman que la ineficacia del traslado implica el retorno total de las cosas al estado anterior, incluyendo la devolución de todos los recursos manejados por el RAIS.

Respecto al numeral séptimo, el apelante solicitó que se impongan costas procesales a Colpensiones, argumentando que esta entidad fue vencida en el litigio y que la condena en costas debe regirse por los artículos 365 y 366 del Código General del Proceso. Señaló que Colpensiones actuó como parte procesal activa en todas las etapas del litigio, incluyendo la contestación de la demanda y la formulación de excepciones, por lo que no hay justificación para eximirla del pago de costas. Asimismo, solicitó que, en caso de que los recursos de apelación interpuestos por Porvenir o Colpensiones sean resueltos desfavorablemente, se les condene en costas objetivas por las actuaciones realizadas en la segunda instancia.

I.6. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDADA COLPENSIONES (min 01:01:53 video 29)

El apoderado de Colpensiones interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria total de las condenas impuestas en su contra en la sentencia de primera instancia. Argumentó que el traslado de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue realizado con plena voluntad y conforme a las disposiciones legales vigentes, incluyendo el diligenciamiento adecuado del formulario de afiliación y más de 21 años de cotizaciones al régimen privado. Resaltó que la demandante no estaba cubierta por el régimen de transición ni cumplía con los requisitos para el retorno automático al Régimen de Prima Media (RPM) según el artículo 1 del Decreto 3800 de 2003 y la Ley 797 de 2003. Además, se refirió a la jurisprudencia, como la sentencia SU 107 de 2024, que exige demostrar el engaño sufrido en el traslado, lo cual no ocurrió en el presente caso.

Colpensiones también argumentó que el fallo desconoció la evolución normativa sobre el deber de información, señalando que las obligaciones intensificadas con la Ley 1328 de 2009 no pueden aplicarse retroactivamente a traslados realizados en años anteriores. Asimismo, solicitó que, en caso de confirmarse la sentencia, la devolución de conceptos como gastos de administración, primas de seguros y porcentajes destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima quede sujeta a condiciones específicas. Esto incluiría que dichas obligaciones sean exigibles únicamente después de que la AFP anule el traslado y transfiera la información y los recursos correspondientes al RPM, en virtud de las disposiciones de los artículos 20 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 3995 de 2008.

I.7. RECURSO DE APELACIÓN PARTE DEMANDADA PORVENIR S.A. (min 01:09:30 video 29)

El apoderado de Porvenir interpuso recurso de apelación solicitando la revocatoria de la condena que le ordena devolver el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de

Pensión Mínima (FGPM) y la indexación de las sumas ordenadas para traslado al Régimen de Prima Media (RPM). Argumentó que el artículo 113, literal b, de la Ley 100 de 1993 establece que, ante la declaratoria de ineficacia del traslado, únicamente deben trasladarse los recursos de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros y, si es aplicable, el bono pensional efectivamente redimido, sin incluir valores como el FGPM, las primas de seguros o los gastos de administración. Afirmó que el fallo se aparta de la jurisprudencia de la SU 107 de 2024, la cual limita el alcance de los recursos a trasladar en estos casos.

En relación con el FGPM, sostuvo que este dinero es recaudado y administrado en una cuenta especial para fines específicos, sin que Porvenir pueda disponer de él ni obtener beneficios económicos. Por tanto, consideró improcedente que se ordene su devolución desde el patrimonio de la AFP. Respecto a la indexación de las sumas trasladadas, señaló que ya se trasladan los rendimientos financieros obtenidos por la cuenta de ahorro individual, lo que hace incompatible ordenar adicionalmente su indexación, ya que ello constituiría una doble sanción para la AFP. Solicitó respetuosamente que se revoquen las condenas impuestas o, en su defecto, que se establezca que la devolución del FGPM se realice desde la cuenta específica del fondo y no del patrimonio de la entidad.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante y las partes demandadas, el despacho de conocimiento, con auto del 01 de noviembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

COLPENSIONES (pdf 04 segunda instancia)

Colpensiones, a través de su apoderado judicial, solicita la revocatoria total del fallo de primera instancia, argumentando que no se demostró que el traslado de régimen pensional se realizó en contravención de la normativa vigente o con desconocimiento de los derechos de la demandante. Señalan que la selección de régimen es una decisión libre y voluntaria del afiliado, conforme lo establecido en el literal "b" del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. Además, sostienen que la demandante no presentó pruebas suficientes que evidencien engaño o falta de información al momento de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), agregando que permaneció en este régimen por más de 20 años sin manifestar inconformidades.

También recalcan que la demandante incumple las condiciones necesarias para un traslado automático, por encontrarse a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión al momento de la solicitud.

Asimismo, Colpensiones enfatiza que el deber de información, regulado con mayor detalle a partir de la Ley 1328 de 2009, no puede aplicarse retroactivamente para exigir un estándar de asesoría que no era requerido al momento del traslado. Argumentan que el fallo desconoce las disposiciones normativas y jurisprudenciales relacionadas con el sistema de pensiones, como el artículo 107 de la Ley 100 de 1993 y las sentencias C-789 de 2000 y SU-107 de 2024, las cuales establecen los límites y condiciones del traslado de régimen pensional. En cuanto a las pretensiones económicas, manifiestan que imponer obligaciones a Colpensiones sin una evaluación exhaustiva de las gestiones administrativas pendientes por parte de las AFP demandadas, afectaría la sostenibilidad financiera del régimen público.

PORVENIR (pdf 05 segunda instancia)

Porvenir S.A., a través de su apoderada, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá la revocatoria integral de la sentencia de primera instancia, argumentando que la misma desconoció el precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU-107 de 2024. Según Porvenir, en casos de declaratoria de ineficacia del traslado, solo deben trasladarse los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual del afiliado, los rendimientos financieros y el bono pensional si este ha sido redimido, pero no los valores correspondientes a primas de seguros, gastos de administración o porcentajes del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, y menos su indexación. Sostuvo además que tales conceptos, consolidados en el tiempo, no son susceptibles de devolución, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, Porvenir enfatizó que la sentencia de primera instancia impuso cargas procesales inexistentes y no realizó un análisis crítico y en conjunto de las pruebas aportadas, ignorando que la afiliación de la demandante al régimen de ahorro individual fue libre, informada y voluntaria. Porvenir argumentó que cualquier orden de indexación constituye una doble sanción, dado que los rendimientos generados ya compensan la depreciación de la moneda. En consecuencia, pidió que, de confirmarse la condena, se autorice la deducción de gastos de administración y otros conceptos para preservar el principio de restituciones mutuas.

CLAUDIA CAMACHO PEÑA (pdf 06 segunda instancia)

El apoderado de la demandante solicitó que se confirme parcialmente la sentencia de primera instancia, reiterando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional y el reconocimiento de la pensión de vejez. Alega que las AFPs demandadas incumplieron con el deber de información al momento del traslado, vulnerando la obligación de suministrar información clara, comprensible y suficiente sobre los regímenes pensionales, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Sostuvo que el formulario de afiliación no puede considerarse prueba suficiente del cumplimiento de dicho deber y que, al no haberse demostrado este, resulta procedente restituir las condiciones previas al traslado.

Adicionalmente, el demandante solicita modificar los numerales 2° y 7° de la parte resolutiva de la sentencia para incluir la obligación de Porvenir S.A. de devolver los gastos de administración, primas de seguros y aportes previsionales de invalidez y sobrevivencia, debidamente indexados. También pide que se condene en costas a Colpensiones por haber sido vencida en el litigio, invocando normas del Código General del Proceso y diversos precedentes jurisprudenciales que determinan la procedencia objetiva de estas condenas frente a la parte vencida.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandante y las partes demandadas y el grado jurisdiccional de consulta.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante y las partes demandadas, y otorgado en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el traslado efectuado por la demandante del RPM al RAIS resulta ineficaz, y de salir avante tal declaración se procederá a verificar cuáles son las consecuencias jurídicas que tal declaratoria de ineficacia conllevaría.

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del análisis fáctico y probatorio del presente litigio, resulta indispensable delimitar los hechos que, por su naturaleza incontrovertida, no requieren de mayor análisis, así como aquellos que, por su controversia, constituyen el núcleo de la Litis y deberán ser objeto de valoración jurídica por parte del despacho. Esta distinción no solo facilita la precisión en la conducción del proceso, sino que también permite centrar el debate en los puntos neurálgicos de la controversia, conforme al principio de economía procesal y al mandato de garantizar una resolución justa y expedita.

No son objeto de controversia los siguientes hechos: (i) la afiliación inicial de la señora Claudia Camacho Peña al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones; (ii) su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en virtud de acto de afiliación a Porvenir en marzo del 2003; (iii) la validez formal de dicho documento en cuanto a la suscripción y recepción por parte de la administradora de pensiones; y (iv) el hecho de que la demandante acredita los requisitos establecidos para causar su derecho pensional.

Por el contrario, subsisten como aspectos objeto de controversia: (i) la verificación del cumplimiento del deber de información cualificada por parte de la administradora demandada, el cual implica la entrega de asesoría amplia, suficiente y oportuna respecto de los beneficios, riesgos y características inherentes a los regímenes pensionales; (ii) la existencia de vicios en el consentimiento del demandante al momento de los traslados, derivados de la presunta omisión de dicho deber de información; (iii) la procedencia de las excepciones propuestas por las demandadas,

tales como la prescripción de la acción, aceptación tácita de las condiciones del RAIS y la inexistencia de la obligación; y (iv) la responsabilidad que podría recaer sobre las administradoras por el presunto impacto negativo en los derechos pensionales del demandante, particularmente en relación con su congrua subsistencia y la protección de su seguridad social.

Esta distinción preliminar permite encauzar el análisis hacia la determinación de si el traslado al RAIS estuvo acompañado de las garantías mínimas legales y constitucionales, así como si concurren los presupuestos jurídicos para declarar su ineficacia y, en consecuencia, restablecer la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Sobre el deber de información al surtirse el traslado de régimen pensional

Sentado lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021, SL 509 de 2024 y SL 2999 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 "*…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les*

permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…", lo cual hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información	Ley 1748 de 2014.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener

, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, pues frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas.

Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.

(…)

También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.

También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

De este modo, habida cuenta de que la accionante, conforme a la solicitud de vinculación con n° 1874216 del 04 de marzo del 2003 (archivo 12, folio 86) , efectuó su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en marzo del 2003, a través de la AFP Horizonte, hoy Porvenir S.A., y atendiendo tanto los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL 2999 de 2024) como los desarrollos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024 la carga probatoria recae sobre la administradora de fondos de pensiones para demostrar que el traslado de régimen fue adoptado por el afiliado de manera libre y voluntaria, habiéndole proporcionado información suficiente, veraz y comprensible acerca de las características, condiciones de acceso, implicaciones y riesgos inherentes a cada uno de los regímenes pensionales disponibles.

Sobre la carga de la prueba – frente al cumplimiento del deber de información

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar en este caso que a la demandante al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de la AFP demandada, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Empero dicha postura, fue modulada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes*

como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS…"

Así pues, al sopesarse los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Corte Constitucional en la decisión previamente referida, se advierte que, en el caso sub examine, se arribaría a la misma conclusión a la que llegó el a quo, esto es, la procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

Caso concreto

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala concluye que no existe en el plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento cabal del deber de información por parte de la AFP Porvenir S.A. al momento del traslado del demandante del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), pues el formulario aportado por la demandada, no es tan siquiera prueba somera del cumplimiento al deber de información que le acaecía.

Aunado a lo antes expuesto, resulta improcedente la tesis esgrimida por la parte demandada, según la cual la permanencia del demandante en el RAIS convalida el traslado inicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en las sentencias SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, ha reiterado que los traslados horizontales entre AFP del mismo régimen no subsanan la falta de información en el momento del traslado inicial desde el RPM. El análisis central en estos litigios radica en verificar si, al momento del traslado, el afiliado recibió una información adecuada que le permitiera tomar una decisión consciente y fundamentada, y no en evaluar su permanencia posterior en el RAIS ni los deberes adquiridos como afiliado (CSJ SL1055-2022).

De otro lado, debe destacarse que el argumento de la AFP demandada, relativo a que la sola firma del formulario de afiliación implica una manifestación libre y voluntaria de voluntad por parte del afiliado, es insuficiente para cumplir con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.). En este contexto, incumbía a Porvenir S.A. demostrar que el asesor de servicios responsable de la afiliación cumplió con el deber legal de brindar una asesoría integral, proporcionando al afiliado una información comprensible y exhaustiva. La falta de acreditación de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que el traslado no se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables atrás vertidos.

En síntesis, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T. y S.S.), que faculta al juzgador para formar libremente su convicción mediante una apreciación integral y crítica del acervo probatorio, esta Sala concluye que la decisión de la demandante de trasladarse al RAIS adolece de los elementos de validez derivados de una elección consciente, autónoma e informada. No se encuentra acreditado que el asesor responsable del traslado hubiera desplegado una asesoría adecuada que incluyera una exposición clara y pormenorizada sobre las repercusiones del cambio de régimen, tales como los riesgos inherentes al RAIS, la necesidad de realizar cotizaciones adicionales, las consecuencias de no cumplir con el capital mínimo requerido para la pensión de vejez, la garantía de la pensión mínima, el régimen aplicable a la devolución de saldos, así como las diversas modalidades pensionales disponibles en el sistema. La omisión de estos aspectos esenciales evidencia un incumplimiento sustancial del deber de información, viciando así la decisión adoptada y afectando el derecho fundamental del afiliado a contar con una orientación precisa y completa que le permitiera sopesar los riesgos y beneficios de manera adecuada, conforme a los estándares de diligencia exigidos en el marco de la seguridad social integral.

En lo relativo a los efectos jurídicos derivados de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, resulta pertinente acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-107 de 2024, en la cual se señaló:

> "*…En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)*
>
> *(…)*
>
> *y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 327)."*

La decisión en cuestión, cabe señalar, se extiende de manera vinculante a todas las demandas que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria laboral, según lo establece el ordinal octavo, razón por la cual esta Sala acoge dicho pronunciamiento en su integridad. No obstante, se precisa que se mantendrá la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo que respecta al deber originario de las AFP de proporcionar asesoría integral y adecuada a sus potenciales afiliados, cuya omisión inevitablemente acarrea la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen.

Con fundamento en el precedente constitucional citado, esta Sala procederá a

modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de acoger parcialmente el recurso de apelación presentado por Porvenir S.A. En tal virtud, se dispone que no resulta viable ordenar el traslado del porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima, tal como lo señala la sentencia SU-107 de 2024, limitando los efectos de la declaratoria de ineficacia al traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional, si este ha sido efectivamente redimido.

Por otra parte, no es posible acceder a las peticiones formuladas por los restantes apelantes, en razón de que el precedente constitucional invocado descarta la posibilidad de trasladar valores correspondientes a primas de seguros, gastos de administración o fondo de garantía, configurándose situaciones consolidadas que no pueden ser objeto de retroacción jurídica. En consecuencia, se modifica la sentencia en los términos aquí dispuestos, atendiendo la solidez de los lineamientos jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional.

Análisis de las Excepciones Propuestas por Colpensiones

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se concluye que estas carecen de soporte jurídico para prosperar dentro del contexto del presente litigio. Respecto del cobro de lo no debido, debe señalarse que las consecuencias inherentes a la declaratoria de ineficacia del traslado, así como la afiliación originaria del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), imponen a Colpensiones la obligación de readmitirlo como afiliado. Este deber encuentra sustento en la normativa vigente y en los principios rectores de solidaridad y eficiencia que gobiernan el sistema de seguridad social integral. Aunque Colpensiones no tuvo participación directa en el acto jurídico de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), su posición como administrador del régimen inicial establece un vínculo jurídico ineludible que la obliga a asumir las consecuencias legales del restablecimiento del derecho pensional del demandante.

En cuanto a la aseveración formulada por Colpensiones respecto de que la demandante nunca ostentó la condición de afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), dicha afirmación se desvirtúa con las propias manifestaciones vertidas por la entidad a lo largo del presente trámite. Conviene resaltar que este aspecto no configura un punto de controversia dentro del litigio, habida cuenta de que fue expresamente reconocido por Colpensiones en su escrito de contestación de la demanda. En efecto, conforme a sus propias afirmaciones, se admitió que la demandante estuvo afiliada al RPM antes de la materialización del traslado cuestionado, consolidándose así un hecho incontrovertible que, por su naturaleza, no puede ser objeto de ulterior discusión en el presente proceso.

AL HECHO 2; ES CIERTO; Que, en el mes de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), la señora CLAUDIA CAMACHO PEÑA se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD), administrado para esa data por el hoy extinto INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (I.S.S.); conforme las documentales que integran el expediente administrativo de la accionante y demás que reposan en el plenario.

Aunado a ello, obra en el plenario material probatorio documental que corrobora fehacientemente dicha circunstancia, dentro del cual se encuentra la solicitud de traslado de régimen pensional suscrita por la demandante con la AFP HORIZONTE, identificada con el número 2003 - 1874216 del 4 de marzo de 2003, en la cual se consigna expresamente que la administradora de origen correspondía al Instituto de Seguros Sociales. Igualmente, se allegó la historia laboral consolidada expedida por Porvenir, en la que se consignan las semanas cotizadas en "las entidades públicas", lo que robustece la evidencia de su adscripción inicial al RPM, conforme se advierte en el documento identificado como PDF 12 del expediente.

En lo concerniente a la excepción de inexistencia de la obligación resulta improcedente, ya que las responsabilidades de Colpensiones derivan directamente de su rol en la administración del RPM, así como de los efectos legales que emanan de la afiliación originaria del demandante. Asimismo, el principio de **buena fe**, si bien invocado por Colpensiones, no opera como un mecanismo eximente de las responsabilidades inherentes a su condición de entidad garante del derecho fundamental a la seguridad social. Finalmente, la excepción de **compensación** resulta inaceptable, en la medida en que no se configura una relación obligacional recíproca susceptible de extinguirse mediante este mecanismo, especialmente cuando se trata de derechos de carácter irrenunciable y vinculados al núcleo esencial del sistema de seguridad social.

En lo que respecta a la excepción de prescripción planteada, se concluye que este medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, toda vez que el traslado de régimen pensional afecta derechos inherentes al ser humano, los cuales, por su naturaleza fundamental, son imprescriptibles. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en pronunciamientos como las sentencias SL 3937-2018, SL 1688-2019 y SL 1949-2021, al reconocer que la acción para solicitar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen no puede estar sujeta a términos de prescripción, dado que no se trata de derechos de carácter patrimonial, sino de garantías esenciales vinculadas a la dignidad humana y a la seguridad social.

En relación con la excepción basada en el precedente establecido en la sentencia **SL 373 de 2021**, reiterado posteriormente en la **SU 107 de 2024**, esta Sala considera imperioso delimitar su aplicabilidad dentro del marco del caso concreto. Dichos precedentes estipulan que la calidad jurídica de pensionado constituye un estado consolidado que imposibilita la declaratoria de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), habilitando únicamente la vía para reclamar una indemnización de perjuicios, conforme Decreto 758 de 1990 y el Decreto 1833 de 2016. Sin embargo, su aplicación requiere de condiciones objetivas que, en el presente asunto, no se acreditan.

La calidad de pensionado exige el cumplimiento de un procedimiento administrativo específico, que establece la obligación del afiliado de presentar la solicitud de reconocimiento de pensión ante la entidad administradora correspondiente. Este

requisito es reafirmado por el artículo [1]13 del **Decreto 758 de 1990**, el cual exige no solo el cumplimiento de los requisitos mínimos de edad y semanas cotizadas, sino también la desafiliación formal del régimen para que se materialice el derecho pensional. Así, la consolidación jurídica de esta calidad requiere una manifestación expresa del afiliado, acompañada de los documentos necesarios, como condición sine qua non para su reconocimiento formal.

En el caso sub examine, la accionante manifestó, en interrogatorio de parte, que no ha adelantado el trámite para la solicitud de pensión ante Porvenir, y este hecho no fue controvertido ni objetado por las partes demandadas, quienes guardaron silencio frente a dicha afirmación y mucho menos presentaron documentación que acredite lo contrario. Consecuentemente, aunque se tiene acreditado que la demandante ha causado su derecho al cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 100 de 1993, esta no ostenta la calidad jurídica de pensionada, dado que no ha realizado los actos formales necesarios para consolidar su derecho. Por lo tanto, no está percibiendo mesada pensional alguna, lo que desvirtúa la aplicación del precedente invocado.

A partir de lo anterior, es claro que el estado jurídico de la accionante no encuadra en los supuestos que impiden la declaratoria de ineficacia del traslado. La falta de consolidación de su calidad de pensionada implica que el traslado al RAIS puede ser examinado bajo los parámetros de legalidad y cumplimiento del deber de información, sin que ello suponga una colisión con el precedente judicial. En efecto, el análisis de las garantías mínimas que debían asistir al acto de traslado sigue siendo un aspecto susceptible de control judicial, máxime cuando se alega la ausencia de información cualificada, lo cual impacta de manera directa en los derechos fundamentales de la accionante.

En conclusión, la inexistencia de una pensión consolidada, unida a la omisión en la formulación de objeciones por parte de las demandadas, permite desestimar la excepción basada en el precedente jurisprudencial. Ello legitima, por tanto, la declaratoria de ineficacia del traslado y la consecuente restitución de derechos de la accionante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales vigentes.

Sobre la Imposición de Costas a COLPENSIONES.

El instituto de las costas procesales, consagrado en el artículo 361 del Código General del Proceso (C.G.P.), en concordancia con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T.S.S.), constituye una herramienta jurídica orientada a garantizar la reparación de los gastos razonables en que incurre la parte triunfante en el marco de un litigio, como resultado directo de la actuación procesal de la parte vencida. Este precepto no solo busca resarcir los costos derivados de la defensa de los derechos del litigante victorioso, sino que también desempeña una función disuasiva frente a actuaciones procesales carentes de fundamento o

[1] **Causación y disfrute de la pensión por vejez.** La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.

abiertamente temerarias, contribuyendo al principio de eficiencia y celeridad en la administración de justicia.

La Corte Suprema de Justicia, en múltiples pronunciamientos, ha señalado que la imposición de costas encuentra su justificación en el principio de reparación integral y en la necesidad de preservar el equilibrio entre las partes procesales, obligando a quien ha resultado vencido a asumir las consecuencias económicas de su actuación en el proceso.

En el caso sub examine, Colpensiones fue vencida en sus pretensiones. En este contexto, la imposición de costas no solo resulta procedente, sino imperativa conforme al marco normativo aplicable y en atención al principio de reparación económica a favor de la parte vencedora, este despacho considera que es jurídicamente procedente imponer las costas del proceso a COLPENSIONES., incluidas las agencias en derecho, en cuantía que será determinada de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 365 del C.G.P., en aras de garantizar una justa compensación por los gastos razonables asumidos por la parte demandante en la defensa de sus derechos, por lo que la decisión sobre su absolución será revocada para condenar en costas de primera instancia a cargo de Colpensiones.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala procederá a la modificación parcial de la sentencia de primera instancia, confirmando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante. Tal determinación se adopta en observancia estricta del marco normativo y jurisprudencial vigente, atendiendo particularmente al precedente establecido en la sentencia SU-107 de 2024, cuyo alcance y obligatoriedad fueron analizados en el desarrollo del presente litigio.

Así las cosas, se declaran resueltas las apelaciones interpuestas por las partes, estimando parcialmente los argumentos del apelante Porvenir S.A. en lo concerniente a la improcedencia del traslado del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás conceptos no contemplados dentro de los límites señalados por el precedente constitucional. De igual forma, se desestiman las excepciones presentadas por Colpensiones, concluyendo su improcedencia en atención a la fundamentación jurídica previamente desarrollada.

Con lo anterior, se da por agotado el análisis de las cuestiones litigiosas, configurándose la ejecutoria de lo resuelto en los términos que se han indicado, en estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales que subyacen en el régimen de seguridad social integral.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

En atención a la prosperidad parcial del recurso presentado por la parte demandante y demandada PORVENIR S.A., no se les impondrá condena en costas en esta instancia. Por el contrario, Colpensiones, cuya apelación fue desestimada en su totalidad, será condenada al pago de las costas procesales en esta instancia a favor de la demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia proferida el día 17 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, el cual quedará así:

> ***"SEGUNDO: CONDENAR** a la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR a reintegrar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** los valores correspondientes a los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual de la demandante CLAUDIA CAMACHO PEÑA, así como los rendimientos financieros y el bono pensional si este ha sido efectivamente redimido y pagado, las cuales deberán ser debidamente reintegradas una vez se encuentre en firme la presente providencia. Así como realizar los trámites administrativos pertinentes en aras de anular el traslado del demandante afiliado en el SIAFP, precisando que dentro de los 30 días siguientes a la sentencia emitida deberán entregar la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada período cotizado, especificando cada valor, "…junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen …"*

SEGUNDO. MODIFICAR el numeral **TERCERO** de la sentencia proferida el día 17 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, el cual quedará así:

> ***"TERCERO: CONDENAR** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** a recibir todos los valores que reintegren la **SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A** con motivo de la afiliación de **CLAUDIA CAMACHO PEÑA** como los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, bonos pensionales y rendimientos financieros e intereses."*

TERCERO. REVOCAR el numeral **SEPTIMO** de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, y en su lugar **CONDENAR** a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** al pago de las costas procesales en primera instancia, en virtud de su condición de parte vencida, conforme a lo previsto en la normativa aplicable.

CUARTO. CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia proferida el día 17 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Cinco Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído

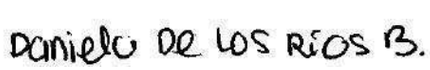
QUINTO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandada **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**.

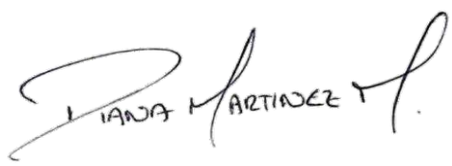
Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 061.



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente





DANIELA DE LOS RIOS BARRERA **DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ**
Magistrada **Magistrada**

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente COLPENSIONES y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de uno y medio (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	LUZ MARINA TRUJILLO MATEUS
Parte demandada	COLPENSIONES Y JUAN CAMILO PÉREZ JIMÉNEZ
Radicación	11001310503620220039701
Fecha de la decisión	29 DE AGOSTO DEL 2024
Motivo	CONSULTA
Tema	PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE
Acta de Discusión	035
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503620220039701

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a estudiar el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 29 de agosto de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 03 primera instancia)

La señora Luz Marina Trujillo Mateus, quien actúa a través de apoderada, presentó demanda contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral el reconocimiento de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite del señor Libardo Pérez Castillo (Q.E.P.D.), fallecido el 12 de mayo de 2021. En sus pretensiones, solicita que se declare que es la única beneficiaria del 100% de la mesada pensional desde la fecha del fallecimiento de su esposo, así como del retroactivo correspondiente hasta su inclusión en nómina, junto con el pago de los intereses moratorios sobre las sumas adeudadas y el reconocimiento de su derecho a los servicios de salud como cotizante.

La demandante argumenta que contrajo matrimonio con el señor Libardo Pérez Castillo el 16 de abril de 1988 y mantuvieron una convivencia continua e ininterrumpida hasta el fallecimiento de éste, en cuyo tiempo ella dependió económicamente de su esposo, quien se encargaba de todos los gastos del hogar y de su seguridad social. A pesar de ello, Colpensiones negó el reconocimiento de la

pensión de sobreviviente a la demandante mediante la Resolución SUB 268516 del 13 de octubre de 2021, en la cual se le otorgó el 100% de la pensión al hijo del causante, Juan Camilo Pérez Jiménez, pero se rechazó su solicitud bajo el argumento de que no se acreditaba la convivencia.

Fundamenta su solicitud en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, el cual establece que el cónyuge supérstite que acredite haber convivido con el causante durante al menos cinco años antes de su fallecimiento tiene derecho a la pensión de sobreviviente. La demandante sostiene que cumple con este requisito, ya que convivió con el señor Pérez Castillo por más de 33 años. Por lo tanto, considera que la negativa de Colpensiones constituye una vulneración a sus derechos, ya que existen pruebas suficientes que acreditan tanto la convivencia como su dependencia económica.

En consecuencia, se solicita que el despacho acceda a las pretensiones, reconociendo su derecho a la pensión de sobreviviente en forma vitalicia, al pago de los retroactivos desde la fecha del fallecimiento del causante y a su inclusión en el sistema de salud como cotizante.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, corrió traslado de la demanda y ordenó la notificación a la **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO** mediante auto de 16 de septiembre de 2022 (pdf 04), luego, con providencia del 18 de abril del 2023 (pdf 15), tuvo por contestada la demanda por **COLPENSIONES**, requirió a **LUZ MARINA QUIROGA RINCON** en calidad de Tercera *Ad Excludendum* conforme al memorial allegado al despacho (pdf 10) para que indicara si intervendría en el proceso, así mismo, se dejó constancia del intento de notificación a **JUAN CAMILO PEREZ JIMÉNEZ** y dado que no fue hallado, se requirió al extremo demandante para que remitiera el aviso. Posteriormente, mediante auto de 21 de septiembre del 2023 (pdf 24) se tuvo por no contestada la demanda por J**UAN CAMILO PEREZ JIMÉNEZ** y se fijó fecha para la celebración de audiencia de que trata el artículo 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 09)

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, a través de su apoderada, presentó la contestación de la demanda interpuesta por la señora Luz Marina Trujillo Mateus, oponiéndose a las pretensiones de la demandante respecto al reconocimiento de la pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge supérstite del señor Libardo Pérez Castillo (Q.E.P.D.). En su defensa, Colpensiones argumenta que la demandante no cumple con el requisito de convivencia de al menos cinco años continuos con el causante antes de su fallecimiento, tal como lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Además, destaca que existe un conflicto entre posibles beneficiarios, dado que también reclama pensión de

sobreviviente la señora Luz Marina Quiroga Rincón, en calidad de compañera permanente, y que el hijo del causante, Juan Camilo Pérez Jiménez, ya fue reconocido como beneficiario del 100% de la pensión mediante la Resolución SUB 192271 de agosto de 2021.

Colpensiones sostiene que la demandante no ha aportado pruebas suficientes para acreditar la convivencia continua con el causante durante los cinco años anteriores a su fallecimiento, indicando que las declaraciones extra juicio que presentó no resultan convincentes ni detallan los extremos de dicha convivencia. Asimismo, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional que subraya la necesidad de una comprobación material de la convivencia y del estado afectivo entre el causante y el solicitante para acceder a la pensión de sobreviviente. Ante esta situación, la entidad considera que es válida la negativa al reconocimiento de la pensión de sobreviviente a la demandante.

Jurídicamente, Colpensiones ampara su defensa en el artículo 34 del Decreto 758 de 1990, que establece que, ante la controversia entre pretendidos beneficiarios de una prestación, el trámite se suspende hasta que se resuelva judicialmente mediante sentencia ejecutoriada. En consecuencia, solicita que el juez resuelva sobre la controversia, integrando a todos los posibles beneficiarios y practicando los medios de prueba necesarios. Por lo tanto, Colpensiones solicita que se nieguen todas las pretensiones de la demandante, incluido el retroactivo pensional y los intereses moratorios, argumentando que la entidad actuó en cumplimiento de la normativa vigente y con fundamento en la buena fe.

Además, solicitó la comparecencia de la señora Ana Isabelia Jiménez Villamil, en calidad de litisconsorte necesario, dado que ésta actúa como representante legal de su hijo menor de edad, Juan Camilo Pérez Jiménez, quien ha sido reconocido como beneficiario del 100% de la pensión de sobreviviente. Alegan que su presencia es indispensable para resolver la controversia sobre los beneficiarios de la prestación reclamada, asegurando la correcta integración del contradictorio en el proceso.

Asimismo, Colpensiones menciona que existe una controversia sobre la convivencia del causante con la señora Luz Marina Quiroga Rincón, lo que agrava la disputa entre las posibles beneficiarias, complicando aún más la resolución de fondo del caso.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 27 primera instancia)

Adelantadas las etapas procesales pertinentes y recaudado el material probatorio correspondiente, el operador judicial del Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Sentencia proferida el 29 de agosto de 2024, resolvió condenar a Colpensiones al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Luz Marina Trujillo Mateus, en su calidad de cónyuge supérstite del señor Libardo Pérez Castillo, fallecido el 12 de mayo de 2021. La pensión fue reconocida en un porcentaje del 50%, a partir de la fecha del fallecimiento del causante, equivalente a la suma de $454.263, debidamente incrementada conforme a los ajustes legales dispuestos por el Gobierno Nacional, junto con la correspondiente mesada adicional.

El despacho fundamentó su decisión en la verificación del vínculo conyugal vigente entre la señora Trujillo Mateus y el causante, lo que acreditó su calidad de beneficiaria de la pensión de sobreviviente, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones. Sin embargo, se limitó el reconocimiento al 50% de la mesada pensional, dado que el otro 50% corresponde a su hijo menor, Juan Camilo Pérez Jiménez, también beneficiario, conforme a lo establecido en la normativa aplicable. Se ordenó que, cuando el menor deje de percibir su porcentaje, ya sea por alcanzar la mayoría de edad o por no cumplir con las condiciones establecidas por la ley (acreditación de estudios hasta los 25 años), el monto de la pensión de la demandante se incremente al 100%.

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se declaró no probada la excepción de prescripción de la acción, al no haberse configurado el término trienal de prescripción establecido en el artículo 151 del Código Sustantivo del Trabajo. El despacho consideró que la demandante presentó su reclamación administrativa en tiempo, por lo que el derecho pensional no se encontraba afectado por dicho fenómeno.

Adicionalmente, el despacho negó la solicitud de intereses moratorios, al no encontrar configuración de mora injustificada por parte de Colpensiones, en virtud de la controversia existente sobre la calidad de los beneficiarios. Se determinó que el litigio entre los reclamantes justificaba la actuación de la entidad demandada, limitando la condena a la indexación de las sumas adeudadas, sin que procediera la imposición de intereses en este caso.

Finalmente, se dispuso que, al no ser apelada la presente decisión, se remitiría el expediente en grado jurisdiccional de consulta ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cumplimiento del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón del grado jurisdiccional de consulta. El despacho de conocimiento, con auto de 23 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS., corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la única que se pronunció al respecto fue la parte demandante LUZ MARINA TRUJILLO MATEUS, así:

LUZ MARINA TRUJILLO MATEUS (pdf 04 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión presentados por la apoderada de la señora Luz Marina Trujillo Mateus, se solicitó la confirmación integral de la sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, al considerar que se ajusta plenamente a las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el reconocimiento de la pensión de sobreviviente. El apoderado fundamenta su solicitud en el hecho de que la demandante acreditó satisfactoriamente su calidad de cónyuge supérstite del causante, señor Libardo Pérez Castillo, en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, habiendo demostrado mediante prueba testimonial y documental la convivencia y el vínculo matrimonial vigente al momento del fallecimiento.

Se destacó que la decisión de primera instancia, al reconocer el 50% de la pensión a la señora Trujillo Mateus, se encuentra conforme con la legislación y la jurisprudencia aplicable, toda vez que se acreditó la existencia de otro beneficiario, el hijo menor del causante, Juan Camilo Pérez Jiménez, quien conforme a derecho percibe el otro 50% de la pensión. Este reparto es acorde con los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia, los cuales disponen la correcta distribución de la pensión de sobreviviente entre el cónyuge supérstite y los hijos menores hasta que estos pierdan su condición de beneficiarios por alcanzar la mayoría de edad o dejar de cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Por lo tanto, se solicita al Tribunal Superior de Bogotá la confirmación del fallo de primera instancia en su integridad, dado que este se ajusta a los parámetros legales vigentes y garantiza el derecho de la señora Trujillo Mateus a percibir el porcentaje correspondiente de la pensión de sobreviviente, con plena observancia de los derechos del otro beneficiario. Se reitera que la sentencia no presenta vicios o irregularidades que ameriten su modificación, por lo que debe ser ratificada en su totalidad.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, al estudio de la decisión de primera instancia en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Otorgado en favor de la parte demandada COLPENSIONES, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Es procedente el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la señora Luz Marina Trujillo Mateus, en calidad de cónyuge del señor Libardo Pérez Castillo, considerando el cumplimiento de los requisitos legales de convivencia y dependencia económica conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En primera medida resulta imperativo delimitar con precisión los aspectos que constituyen objeto de debate en esta instancia, diferenciándolos de aquellos que se encuentran excluidos de controversia.

Se precisa que no es objeto de discusión en esta sede la calidad de afiliado del causante Libardo Pérez Castillo al sistema de seguridad social en pensiones, ni la causación del derecho pensional, pues tales circunstancias se encuentran debidamente acreditadas en el expediente con la documental obrante en los archivos Pdf 12 fl 2, reporte de semanas cotizada en pensiones, en el cual se señala que el señor LIBARDO PEREZ CASTILLO se afilio el 8 de junio de 1984, el pdf 01 fl. 70, Resolución No. SUB 268516 del 13 de octubre de 2021, en la cual se hace referencia a que con Resolución No. SUB 192271 del 17 de agosto de 2021 se reconoció pensión de sobreviviente en un porcentaje del 100% a JUAN CAMILO PEREZ JIMENEZ en su calidad de hijo menor de edad del causante y en cuantía de un s.m.l.m.v, y mediante dicha resolución de 13 de octubre de 2021 se negó el reconocimiento pensional a favor de la demandante en su calidad de cónyuge, y pdf 01 Fl. 24 partida de matrimonio entre el afiliado y la señora LUZ MARINA TRUJILLO MATEUS celebrado el 16 de abril de 1988 (pdf 01 fl. 24) y registrado ante Notaria el 20 de enero de 1992 (pdf 01 fl. 52)

Por el contrario, sí es objeto de discusión en esta instancia la determinación de la titularidad del derecho pensional de la demandante Luz Marina Trujillo Mateus, en su calidad de cónyuge supérstite, y la aplicación de los criterios jurisprudenciales sobre la convivencia como requisito para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente.

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL APLICADO A LA DEMANDANTE

En el sistema jurídico colombiano, el reconocimiento de la pensión de sobreviviente se sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos legales que se encuentran regulados principalmente en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. Dicho precepto establece que para que un cónyuge o compañero permanente pueda ser considerado beneficiario de la pensión de sobreviviente, se debe acreditar una convivencia con el causante durante un periodo mínimo de cinco años previos al fallecimiento. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha matizado esta exigencia mediante una interpretación flexible del requisito de convivencia, particularmente en casos donde el vínculo matrimonial permanece vigente, aun en situaciones de separación de hecho.

La jurisprudencia ha sido clara al precisar que, tratándose de cónyuges, la convivencia durante los cinco años anteriores al fallecimiento no es un requisito indispensable siempre que no se haya disuelto el vínculo matrimonial. En efecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que basta con que se haya acreditado una convivencia de al menos cinco años en cualquier momento de la relación matrimonial para que el cónyuge conserve su derecho a la pensión de sobreviviente, incluso si dicha convivencia no se mantuvo hasta el deceso del causante. Esta línea jurisprudencial responde a la necesidad de proteger el derecho del cónyuge en casos donde la separación de hecho no implica la ruptura del matrimonio, sino una situación temporal que no afecta la existencia jurídica del vínculo conyugal.

Así lo ha reiterado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamientos como la Sentencia SL2151-2024, en la cual se establece:

> *"esta corporación ha insistido en que al armonizar lo previsto en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 con lo fijado en el inciso 3 del literal b) ibídem, en caso de separación de hecho, el cónyuge con vínculo matrimonial vigente, como es el caso, no pierde el derecho pensional si acredita la convivencia de cinco años, en cualquier tiempo."*

Conforme a este precedente, el requisito de convivencia no exige necesariamente que ésta subsista de manera ininterrumpida hasta la muerte del causante si el matrimonio se mantiene vigente.

En el presente caso, los elementos probatorios recaudados en el curso del proceso, tanto los documentales como los testimoniales practicados en juicio, han suscitado una posible duda sobre la existencia de una separación de hecho en algún momento de los aproximadamente 33 años de relación que la señora Luz Marina Trujillo Mateus sostuvo con el causante, señor Libardo Pérez Castillo. No obstante, tal duda carece de trascendencia jurídica en este contexto, dado que la normativa aplicable y la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia han precisado que la separación de hecho, en sí misma, no desvirtúa el derecho del cónyuge supérstite a la pensión de sobreviviente, siempre que el vínculo matrimonial se mantenga vigente y se acredite una convivencia de al menos cinco años en cualquier momento a lo largo de la relación matrimonial, tal como lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones.

En virtud de los lineamientos jurisprudenciales reiterados, especialmente en fallos como la Sentencia SL2151-2024, se ha sentado un criterio claro en cuanto a que la convivencia continua durante los cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento del causante no es un requisito indispensable cuando el vínculo matrimonial no ha sido disuelto por sentencia judicial. El derecho del cónyuge a la pensión de sobreviviente se mantiene incólume siempre que se demuestre una convivencia acumulada de cinco años, en cualquier tiempo durante el matrimonio, siendo irrelevantes las interrupciones temporales derivadas de una separación de hecho no formalizada. En consecuencia, y bajo este entendimiento, la señora Luz Marina Trujillo Mateus ha acreditado cabalmente los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a la pensión de sobreviviente, en virtud de la existencia de un vínculo matrimonial intacto y la acreditación suficiente de la convivencia requerida. La eventualidad de una separación, en el marco de este análisis, no constituye un obstáculo jurídico para la titularidad de su derecho a la prestación pensional.

LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE: ESTÁNDARES LEGALES Y JURISPRUDENCIALES APLICADOS AL CASO DE LUZ MARINA TRUJILLO MATEUS

En el contexto del presente caso, la valoración de la prueba para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente debe ajustarse estrictamente a los estándares legales establecidos por el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que confiere al juez la facultad de formar libremente su convencimiento, siempre inspirado por los principios científicos que informan la crítica de la prueba. En este sentido, se considera fundamental analizar la calidad y la consistencia de los elementos probatorios recaudados en el proceso, tanto documentales como testimoniales, en relación con la convivencia entre la señora Luz Marina Trujillo Mateus y el señor Libardo Pérez Castillo, así como los hechos que sustentan el derecho de la demandante a la pensión de sobreviviente.

El material probatorio aportado al proceso, compuesto por testimonios, documentos y declaraciones, ha suscitado una controversia sobre la continuidad de la convivencia entre la señora Luz Marina Trujillo Mateus y el causante. Sin embargo, los testimonios recabados bajo juramento durante la audiencia han sido consistentes en cuanto a la duración de la convivencia y el vínculo matrimonial vigente entre las partes.

En primer lugar, el testimonio de Jhon Alexander Pérez, hijo mayor de edad de la pareja, resultó determinante, pues manifestó que sus padres siempre convivieron juntos. Señaló que la única duda que le surge es respecto al año 2010, cuando se retiró del hogar para prestar servicio militar, sin embargo, aclaró que al regresar en el año 2012 sus padres seguían juntos. Confirmó que su madre fue quien se encargó del cuidado del causante durante toda su enfermedad, y que era a ella a quien el hospital llamaba para rendir informes sobre el estado de salud de su padre. También afirmó que los gastos del hogar eran asumidos en su totalidad por el causante, mientras que su madre únicamente realizaba trabajos ocasionales de lavado y planchado. Asimismo, indicó que no le consta que su padre hubiera convivido con otra mujer, aunque reconoció que no era fiel a su madre.

Por su parte, la testigo Deyanira Fonseca Moreno afirmó haber sido vecina de la casa donde residía la pareja en Vélez, asegurando haberlos visto convivir juntos durante al menos 15 años, desde que ella se trasladó a dicho barrio. Manifestó que no le consta que el causante hubiese convivido con alguien más y reiteró que durante todo ese tiempo la pareja mantuvo su cohabitación hasta el fallecimiento del señor Libardo Pérez Castillo.

A su vez, Hilda Pérez Díaz, hermana del causante, confirmó que la pareja contrajo nupcias el 16 de abril de 1988, según consta en el registro civil de matrimonio. Aseguró conocer a Gloria María Franco, madre de dos hijos del causante, pero precisó que esta relación fue previa al matrimonio con la señora Luz Marina Trujillo Mateus. Enfatizó que no le consta que su hermano haya convivido con otra persona después de casarse y que ella siempre los vio juntos hasta el deceso del causante. Si bien reconoció que su hermano tenía inclinación por las mujeres, enfatizó que su esposa siempre fue su esposa y que la demandante dependía económicamente de él.

Por último, María Nelly Parra, amiga de la infancia del causante, declaró que conoció a la señora Luz Marina Trujillo Mateus desde el momento en que se casó con el señor Libardo Pérez Castillo. Aunque solo compartió con ellos en una ocasión como pareja,

dos años antes del fallecimiento del causante, sostuvo que los veía juntos con frecuencia en la plaza de mercado, lo que ratifica la cohabitación.

Estos testimonios, congruentes y concordantes entre sí, no evidencian una separación de cuerpos entre la señora Luz Marina Trujillo Mateus y el causante, sino, por el contrario, dan cuenta de una convivencia continua y estable desde el matrimonio hasta el fallecimiento del señor Libardo Pérez Castillo. De hecho, según el registro civil de matrimonio visible en folio 52 del PDF 01, la pareja contrajo nupcias el 16 de abril de 1988, sin que se acredite la existencia de un proceso de divorcio o disolución del vínculo matrimonial.

Es relevante señalar que, según la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia, en casos donde el vínculo matrimonial permanece vigente, no se exige una convivencia continua durante los cinco años previos al fallecimiento, sino que basta con acreditar cinco años de convivencia en cualquier momento de la relación matrimonial para garantizar el derecho a la pensión de sobreviviente. Este criterio se encuentra avalado por la Corte en múltiples pronunciamientos, lo cual refuerza la solidez de la posición de la demandante.

Y ello es así en tanto, la prueba testimonial ofrecida por la señora Luz Marina Trujillo Mateus ha sido determinante para establecer los hechos que soportan su derecho. A pesar de la posible duda generada en torno a una separación temporal, dicha incertidumbre se desprende del memorial allegado por la señora Luz Marina Quiroga Rincón (pdf 10), quien manifestó haber convivido con el señor Libardo Pérez Castillo desde el 12 de febrero de 2004 hasta el 21 de mayo de 2021. En sustento de su afirmación, adjuntó copia de un proceso de demanda declarativa de existencia de unión marital de hecho en curso ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Vélez, Santander, donde una de las partes demandadas es precisamente la señora Luz Marina Trujillo Mateus.

No obstante, durante el curso del proceso, la juzgadora de primera instancia, en ejercicio de sus facultades de apreciación probatoria, interrogó directamente y bajo juramento a cada uno de los testigos sobre si conocían a la señora Luz Marina Quiroga Rincón, y todos negaron conocerla. Jhon Alexander Pérez, hijo de la pareja, Deyanira Fonseca Moreno, vecina de la pareja, Hilda Pérez Díaz, hermana del causante, y María Nelly Parra, amiga de la infancia del señor Libardo Pérez Castillo, fueron categóricos en afirmar que nunca habían tenido conocimiento de la existencia de la señora Luz Marina Quiroga Rincón ni de una relación entre ella y el causante.

Por el contrario, los testigos únicamente reconocieron la existencia de la relación entre el señor Libardo Pérez Castillo y la señora Gloria María Franco, quien fue madre de dos hijos extramatrimoniales del causante, pero cuya relación fue anterior al matrimonio con Luz Marina Trujillo Mateus. Así, de los testimonios rendidos en juicio no se extrae ningún indicio probatorio que corrobore la convivencia alegada por la señora Luz Marina Quiroga Rincón, ni siquiera la existencia de una relación sentimental con el causante posterior a su matrimonio con la demandante.

El material probatorio evidencia de forma concluyente la convivencia acreditada durante el matrimonio, pues los testimonios recogidos bajo juramento en audiencia corroboran la existencia de una convivencia que, conforme a los criterios jurisprudenciales aplicables, satisface los requisitos exigidos por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones. La falta de contradicción directa a estos testimonios, sumada a la claridad de las pruebas documentales aportadas, refuerzan la validez de la prueba testimonial como fundamento para reconocer el derecho pensional.

En conclusión, el análisis probatorio realizado permite concluir que la señora Luz Marina Trujillo Mateus ha acreditado suficientemente su derecho a la pensión de sobreviviente, en consonancia con los estándares normativos y jurisprudenciales vigentes. Los testimonios ofrecidos en juicio, al ser congruentes y estar respaldados por el principio de inmediación, permiten formar un convencimiento claro y robusto sobre la existencia de la convivencia exigida, sin que las posibles dudas sobre una separación temporal afecten la titularidad del derecho que asiste a la demandante.

PROCEDENCIA DE LA COMPENSACIÓN

La compensación, como mecanismo jurídico, encuentra su fundamento en el artículo 5 de la Ley 1204 de 2008, el cual faculta a las administradoras de pensiones a recuperar, mediante deducción de futuras mesadas, los pagos realizados indebidamente o en exceso a un beneficiario que no resulte titular exclusivo del derecho pensional. Este principio opera de pleno derecho, permitiendo que la entidad administradora ajuste las prestaciones sin necesidad de una orden judicial específica, preservando así el equilibrio financiero del sistema pensional y evitando un enriquecimiento sin causa por parte de los beneficiarios que hubiesen recibido montos superiores a los que realmente les correspondían. Este mecanismo ha sido avalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencias como SL226-2021, donde se reiteró que la compensación puede ser aplicada directamente por la administradora en virtud de su obligación de gestionar los recursos del sistema con sostenibilidad y equidad.

En este sentido, la pensión de sobreviviente fue reconocida a favor de Juan Camilo Pérez Jiménez mediante la Resolución SUB192271 del 17 de agosto de 2021, en la que se estableció su derecho a recibir el 100% de la mesada pensional, a partir del 12 de mayo de 2021. No obstante, en data 19 de agosto de 2021 la cónyuge LUZ MARINA TRUJILLO MATEUS solicitó el reconocimiento pensional a su favor, misma que fue negada con Resolución SUB 268516 del 13 de octubre de 2021 argumentando la presunta falta de convivencia con el causante (pdf 01 fl. 70); sin embargo, con lo ya analizado en este trámite de segunda instancia, esto es que la señora Luz Marina Trujillo Mateus si cumple con los requisitos legales para acceder a la prestación, se genera una reconfiguración en la titularidad del derecho, lo que impone la necesidad de ajustar las mesadas y aplicar la compensación respectiva, obligando a la entidad administradora a efectuar los ajustes necesarios en las mesadas pensionales previamente liquidadas y pagadas de manera íntegra a favor del hijo menor de edad, para lo cual se trae a colación lo señalado por nuestro órgano de cierre, Sala de Casación Laboral en Sentencia SL 2231 de 2023:

"...En tal contexto, debe memorarse que estando en curso este juicio, la AFP accionada reconoció desde la muerte del asegurado el 100% de la prestación debatida en favor de Álvaro Jacobo Ospina Muñoz, hijo menor edad que nació de la relación que hubo entre el causante y Yenny Muñoz Tabares. Asimismo, también es importante recordar que, de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores, la cónyuge supérstite Luz Carime Rico Moreno demostró la calidad de acreedora del 50% restante del derecho.

En tal dirección, esta Sala desde la sentencia CSJ SL226-2021, adoctrinó que, si la AFP realiza el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes en favor de un beneficiario por haberse acreditado los respectivos requisitos y, de manera ulterior aparecen otros nuevos, estos no pueden verse perjudicados en su derecho por lo concedido al primero, pues este «debe ser reconocido desde el momento de su nacimiento», es decir, a partir del deceso del asegurado.

Ahora, en aras de evitar un desequilibrio con base en el principio de sostenibilidad financiera, el legislador otorgó a las administradoras diferentes herramientas para recuperar los recursos pagados de más. Así, el artículo 5 de la Ley 1204 de 2008 estatuye:

ARTÍCULO 50. TÉRMINOS PARA DECIDIR LA SUSTITUCIÓN PENSIONAL DEFINITIVA. Si no se presentare controversia, la sustitución, de manera definitiva, se resolverá dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del término del edicto emplazatorio. En caso de controversia se resolverá dentro de los veinte (20) días siguientes.
En caso de que los beneficiarios iniciales tuvieren que hacer compensaciones a los nuevos por razón de las sumas pagadas, así se ordenará en el acto jurídico y lo ejecutará la entidad pagadora.
Las compensaciones se harán descontando el valor correspondiente de las futuras mesadas (subrayado es de la Sala).

Al respecto, en la sentencia citada, esta corporación llamó la atención en que, de acuerdo a dicha norma, la AFP tiene dos opciones: i) «compensar las sumas de dinero con las mesadas que a futuro reciban quienes inicialmente fueron aceptados como beneficiarios iniciales», o ii) «iniciar las acciones de recuperación de esos rubros pagados sin justificación». Igualmente, en la misma providencia se aclaró que para cumplir tales finalidades no es necesaria una declaración judicial previa, pues los efectos de la disposición en referencia operan de pleno derecho. La Sala lo precisó así:

Las compensaciones se harán descontando el valor correspondiente de las futuras mesadas. (Subrayado fuera del original)".

Esta norma opera de pleno derecho, y no es necesario que el operador judicial acuda a ella en el instante de resolver una controversia entre beneficiarios de la prestación pensional, para que la entidad se encuentre habilitada a recuperar aquellas sumas de dinero que perdieron su causa, y en aquellos casos en que no es

posible esa compensación, pueda ejercer la acción judicial pertinente ante el enriquecimiento sin causa de aquellas personas que perdieron la calidad de beneficiarios y recibieron unas mesadas sin respaldo normativo alguno.

De manera que existe un mecanismo para evitar una doble erogación a cargo del Estado cuando se presentan nuevos beneficiarios, como es la compensación, que significa, como se ha venido explicando, que los beneficiarios iniciales deben ir devolviendo los dineros percibidos en el pasado, hasta lograr que se ajusten los porcentajes definitivos desde el momento en que se causó el derecho pensional, lo cual aplica no solo por decisión propia de la administración sino incluso cuando el asunto es resuelto definitivamente por la jurisdicción.

Por lo tanto, aunque en la sentencia dictada el 28 de septiembre de 2018, el Tribunal no acudió a la norma que permite la compensación de los dineros recibidos por la cónyuge supérstite, eso no convierte la decisión judicial en abiertamente ilegal, o que se haya patrocinado un exceso en la cuantía de la prestación pensional sin ninguna justificación, por cuanto la entidad recurrente está habilitada para recuperar los dineros con los mecanismos legales pertinentes; como tampoco el hecho de que la señora Juana Beatriz Alomia de Suárez hubiera percibido un porcentaje mayor desde el inicio, puede limitar la declaración del derecho de la compañera permanente supérstite, a partir de la fecha de la muerte del causante pensionado, y mucho menos, que sus efectos fiscales se aplacen o trasladen al momento del ajuste definitivo, pues el nuevo beneficiario no puede correr con las consecuencias de ese tipo de estudio o que le imponga una carga adicional, como es, que tenga que perseguir por su cuenta los dineros entregados al beneficiario inicial, porque el Estado cuenta con las herramientas necesarias para sanear las finanzas de las cuales se provee el sistema pensional. (subrayado de la Sala).

Por lo visto, es claro que, ante la ocurrencia del supuesto descrito, la compensación opera de pleno derecho y por ministerio de la ley, sin ser necesario que medie orden judicial que la habilite a recuperar los dineros cancelados de más o sin causa, a través de esta figura…"

En este sentido, Colpensiones está facultada para proceder con la compensación de los montos pagados de más a Juan Camilo Pérez Jiménez, aplicando dicha compensación mediante la deducción de las futuras mesadas que le corresponden.

Esta actuación se sustenta en el marco normativo vigente y en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ha reconocido la validez de este mecanismo como una medida eficaz para evitar un detrimento al sistema pensional. En consecuencia, la excepción de compensación resulta procedente y Colpensiones deberá descontar los pagos ya realizados en exceso a favor de Juan Camilo Pérez Jiménez, ajustando las mesadas futuras de acuerdo con los derechos de los beneficiarios reconocidos en este proceso.

En conclusión, después de un exhaustivo análisis de las excepciones propuestas por Colpensiones, se determina que únicamente han sido probadas las excepciones de compensación, buena fe y la inexistencia de intereses moratorios. La excepción de

compensación resulta procedente al haber demostrado Colpensiones, conforme al artículo 5 de la Ley 1204 de 2008, que existía una controversia legítima entre los beneficiarios, lo cual justifica la recuperación de los montos previamente pagados mediante la deducción de futuras mesadas.

Asimismo, la excepción de buena fe es reconocida, ya que la actuación de Colpensiones, al otorgar inicialmente la pensión a favor de Juan Camilo Pérez Jiménez, estuvo fundada en la normativa aplicable y no en actos negligentes o dolosos. Finalmente, también se da por probada la inexistencia de intereses moratorios, dado que el retardo en el pago de la pensión de sobreviviente a la señora Luz Marina Trujillo Mateus obedeció a la controversia jurídica sobre la titularidad del derecho, sin que Colpensiones incurriera en mora injustificada.

Por tanto, al no encontrarse probadas las demás excepciones invocadas por Colpensiones, se confirma la sentencia de primera instancia en cuanto al reconocimiento del derecho pensional a la señora Luz Marina Trujillo Mateus, en los términos ya establecidos, sin lugar al pago de intereses moratorios y con la aplicación de la compensación mencionada.

Prescripción de mesadas pensionales en el marco del reconocimiento de la pensión de sobreviviente

En el régimen general de seguridad social en pensiones, la prescripción de mesadas pensionales está regulada en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el cual dispone que las acciones para el cobro de mesadas pensionales prescriben en un término de tres años contados desde la fecha en que la obligación se hace exigible. Dicho término ha sido interpretado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en el sentido de que la prescripción no afecta el reconocimiento del derecho pensional en sí mismo, sino únicamente las mesadas que no hayan sido reclamadas dentro del plazo legalmente establecido.

En el caso concreto, el fallecimiento del causante ocurrió el 12 de mayo de 2021, y la demandante presentó su reclamación administrativa ante Colpensiones el 19 de agosto de 2021, es decir, dentro de los términos legalmente establecidos para reclamar la pensión de sobreviviente. Posteriormente, al haber sido negado su derecho mediante Resolución SUB268516 del 13 de octubre de 2021, la demandante radicó la demanda ordinaria el 27 de julio de 2022, lo que implica que no operó la prescripción sobre las mesadas reclamadas, ya que el ejercicio del derecho fue oportuno y dentro del marco normativo vigente.

Así las cosas, al haberse promovido la acción dentro del término de tres años desde la fecha de causación de la primera mesada (12 de mayo de 2021), y dado que la controversia judicial fue iniciada oportunamente, no resulta aplicable la prescripción respecto de las mesadas reconocidas en este fallo.

Retroactivo e Indexación de las sumas adeudadas

Por otra parte, la indexación de las sumas adeudadas responde a la necesidad de garantizar la protección del valor adquisitivo de los montos pensionales que han sido reconocidos con posterioridad a su exigibilidad. En términos jurisprudenciales, la indexación de sumas adeudadas en materia pensional ha sido reiterada como un derecho de orden constitucional, en aplicación del principio de actualización de las obligaciones dinerarias y la prohibición del enriquecimiento sin causa.

En este contexto, al haberse determinado la procedencia del reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la demandante desde el 12 de mayo de 2021, en un 50% y en razón de 13 mesadas, se ordenará modificar el numeral primero de la sentencia consultada, cuantificando en $55.398.050 el retroactivo pensional adeudado, desde el 12 de mayo de 2021 hasta el 28 de febrero de 2025.

Del valor reconocido como retroactivo se autoriza a la entidad a descontar lo correspondiente al sistema de salud y en lo que respecta a la indexación está será liquidada por la entidad administradora una vez proceda a realizar el pago del retroactivo pensional.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, no se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR a la sentencia proferida el día 29 de agosto de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá; el numeral **QUINTO,** el cual quedará así**:**

> ***"QUINTO: ORDENAR** a **COLPENSIONES** que realice los ajustes necesarios para compensar las sumas pagadas en exceso a **Juan Camilo Pérez Jiménez**, quien recibió el 100% de la pensión de sobrevivientes desde el 12 de mayo del 2021. Dicha compensación se realizará a través de los mecanismos previstos en la ley, garantizando que las mesadas futuras reflejen la distribución correcta del beneficio."*

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral **PRIMERO** de la sentencia proferida el día 29 de agosto de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá; mismo que quedará así:

> *"**PRIMERO: CONDENAR** a COLPENSIONES a pagar la pensión de sobrevivientes a la señora LUZ MARINA TRUJILLO MATEUS, dada su condición de cónyuge supérstite del señor LIBARDO PÉREZ CASTILLO, en un porcentaje del 50%, a partir del 12 de mayo de 2021 en un monto equivalente $454.263 y al que se debe hacer los*

incrementos legales que establece el gobierno nacional junto con la mesada adicional e incrementarlo en un 100% en el momento en que JUAN CAMILO PÉREZ hijo del causante deje de percibir el 50% adicional, conforme a lo descrito en la parte motiva del fallo.

El valor del retroactivo pensional causado con corte a 28 de febrero de 2025, asciende a la suma de $55.398.050 **.**

Sumas que deberán ser debidamente indexadas al momento de realizar el pago.

Del valor reconocido como retroactivo se autoriza a la entidad a descontar lo correspondiente al sistema de salud y en lo que respecta a la indexación está será liquidada por la entidad administradora una vez proceda a realizar el pago del retroactivo pensional."

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo restante sentencia proferida el día 29 de agosto de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

CUARTO: SIN LUGAR a condenar en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 035.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	BELKIS DEL ROSARIO NARVAEZ NEGRETTE
Parte demandada	COLPENSIONES y PROTECCIÓN SA
Radicación	11001310503620230001101
Fecha de la decisión	26 DE AGOSTO DE 2024
Motivo	APELACION Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA TRASLADO
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	***11001310503620230001101***
No. de Acta	048

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada Colpensiones, contra de la Sentencia proferida el día 26 de agosto de 2024 por el Juzgado Treinta Y Seis Laboral del Circuito de Bogotá. Así como también se resolverá el grado jurisdiccional de Consulta, en favor de Colpensiones.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01, 10 primera instancia)

La señora BELKIS DEL ROSARIO NARVAEZ NEGRETTE presentó demanda ordinaria laboral contra COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A., pretendiendo con ello que se declarara la ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual realizada por la AFP Colmena Pensiones y Cesantías, hoy Protección S.A., y que se ordenara el traslado de la demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por Colpensiones. Asimismo, que se declarara que la demandante nunca dejó de pertenecer al régimen de Prima Media, además de condenar a las demandadas a realizar el traslado de fondos necesarios y a asumir los costos del proceso.

Para sustentar sus pedimentos, afirmó que nació el 27 de diciembre de 1960 (fol. 33) y que se había afiliado inicialmente al régimen de Prima Media en 1986, realizando aportes hasta 1987 (fol 36). Posteriormente, entre 1987 y 1989, trabajó como empleada oficial en la Armada Nacional (fols 37-40), además, expuso que estuvo afiliada al ISS desde el 01 de octubre de 1988. En 1999, fue afiliada al Régimen de

Ahorro Individual, administrado por AFP Colmena (fol. 45), sin recibir información adecuada y completa sobre los efectos de ese cambio de régimen.

Luego, en 2022, la demandante solicitó a Colpensiones el traslado al régimen de Prima Media, lo cual fue negado (fols. 46-49).

Argumentó la responsabilidad de las administradoras de pensiones de brindar información completa y veraz, haciendo referencia a la omisión en el deber de información por parte de Colmena. Expuso los principios constitucionales como el derecho a la seguridad social, la imprescriptibilidad de los derechos pensionales y la buena fe, señalando que el derecho de la demandante de pertenecer al régimen de Prima Media no debía ser afectado por una decisión tomada sin la debida información.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, admitió la demanda, y corrió traslado de la misma a las convocadas mediante Auto del 15 de marzo de 2023 (pdf 03), luego, con providencia del 15 de junio de 2023, tuvo por contestada la demanda por parte de las convocadas a juicio (pdf 16), finalmente con auto del 28 de febrero de 2024, tuvo por contestada la reforma de la demanda por Protección y no contestada la reforma por Colpensiones (pdf 22).

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. CONTESTACIÓN COLPENSIONES (PDF 07)

En la contestación de demanda, Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones, presentando como excepciones la *validez de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS)*, argumentando que el traslado fue realizado libre y voluntario por la demandante, y que cualquier nulidad debió ser alegada dentro de un plazo de cuatro años, por lo cual se configuró el saneamiento. También invocó la *prescripción* sobre las reclamaciones de la demandante y alegó la *imposibilidad jurídica de reconocer derechos fuera del ordenamiento legal*, dada la naturaleza pública de Colpensiones. Además, enfatizó el principio de *buena fe* en las actuaciones de Colpensiones y solicitó que, de prosperar la demanda, se ordenara el traslado de los recursos administrados por la AFP.

Frente a los hechos, Colpensiones se pronunció admitiendo algunos y negando conocer otros por considerarlos ajenos a su gestión directa. En particular, aceptó ciertos eventos documentales del expediente de la demandante, pero manifestó no tener constancia de otros hechos que involucraban a la AFP demandada.

Colpensiones afirmó que la demandante había elegido el traslado a la AFP de manera libre, sin coacción, y que cualquier reclamo sobre la validez del traslado estaba prescrito. Además, argumentó que el derecho a elegir un régimen pensional no es absoluto y debe alinearse con los principios de sostenibilidad financiera y el respeto a los recursos de los afiliados. En este sentido, defendió que las acciones de la

demandante debían dirigirse al resarcimiento de perjuicios y no a la nulidad del traslado, ya que la afiliación al RAIS fue voluntaria y documentada bajo juramento.

1.3.2. PROTECCIÓN S.A. (PDF 08)

La demandada Protección S.A., propuso como excepciones la *validez y eficacia del acto jurídico de afiliación*, argumentando que la afiliación al Régimen de Ahorro Individual fue realizada de forma libre y voluntaria, sin vicios de consentimiento. Además, invocó la *inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir*, la *prescripción, la buena fe* en sus actuaciones, así como el *aprovechamiento indebido de recursos públicos del sistema de pensiones* si se pretendía declarar la nulidad o ineficacia de la afiliación. También solicitó que, en caso de declararse la nulidad, se reconociera la restitución mutua de las prestaciones recibidas, incluyendo los rendimientos generados por la cuenta de ahorro individual.

Frente a los hechos, admitió algunos y negó otros, especialmente aquellos relacionados con el supuesto desconocimiento de las implicaciones del Régimen de Ahorro Individual. La entidad aseguró que había proporcionado a la demandante una asesoría integral, informándole sobre las características y diferencias entre el Régimen de Ahorro Individual y el Régimen de Prima Media. Resaltó que la demandante fue informada adecuadamente sobre las condiciones variables de la pensión en el RAIS, debido a factores como la edad, los beneficiarios, y la expectativa de vida, lo cual fue debidamente explicado en su momento.

Defendió la irretroactividad de las normas jurídicas, indicando que las disposiciones sobre asesoría detallada a los afiliados fueron introducidas después de la afiliación de la demandante, por lo que no podía exigírsele el cumplimiento de normas no vigentes en ese momento. Además, subrayó que la demandante tuvo diversas oportunidades para retornar al Régimen de Prima Media, que no aprovechó, consolidando su permanencia en el RAIS. La entidad enfatizó que cualquier diferencia en el monto proyectado de la pensión no constituía un vicio de consentimiento ni causal de nulidad, ya que la variabilidad del régimen había sido explicada.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 26 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, la operadora judicial del Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá decidió declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional realizado por la demandante, Belkis del Rosario Narváez Negrette, desde el Régimen de Prima Media con Prestación Definida hacia el Régimen de Ahorro Individual en 1999, ordenando a Protección S.A. trasladar a Colpensiones los valores acumulados en la cuenta de ahorro individual, junto con los rendimientos y los bonos pensionales, debidamente indexados a la fecha del pago. También dispuso que Colpensiones incorporara estos valores en la historia laboral de la demandante.

Adicionalmente, rechazó la excepción de prescripción planteada por la defensa, dado que consideró que el derecho a la pensión es imprescriptible, y condenó a Protección

en costas y agencias en derecho, estableciendo como monto un salario mínimo mensual vigente.

La *A Quo* tuvo en cuenta el deber de información que recae sobre las administradoras de fondos de pensiones, como exige el artículo 97 del Decreto 663 de 1993 y como lo interpretó la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia, desde la sentencia 3189 de 2008, que establece la ineficacia del traslado de régimen en caso de incumplimiento de este deber. Citó múltiples sentencias de la Corte Suprema, que han consolidado esta doctrina, como las sentencias SL 1421 de 2019 y SL 373 de 2021, entre otras, las cuales refuerzan la idea de que el incumplimiento del deber de información genera ineficacia. También recurrió a la sentencia C-107 de 2024 de la Corte Constitucional, que enfatiza que no deben imponerse cargas excesivas ni a los afiliados ni a los fondos en el juicio.

En cuanto a la carga de la prueba, la jueza consideró que correspondía a Protección demostrar que sí había cumplido con el deber de informar, y no al afiliado probar la falta de esta información. En el caso concreto, Protección no aportó suficientes pruebas para demostrar que había cumplido con este deber de manera efectiva. La jueza destacó que, aunque Protección proporcionó un formulario de afiliación firmado por la demandante, en este no se evidenciaba información detallada sobre las implicaciones del cambio de régimen, sino apenas una constancia de consentimiento.

La jueza concluyó que el traslado debía ser ineficaz puesto que Protección no había cumplido con este deber en el momento de la afiliación de la demandante.

1.5. APELACIÓN

1.5.1. COLPENSIONES

Inconforme con la decisión Colpensiones presentó recurso de apelación en contra de la sentencia, argumentando que las cotizaciones de la demandante se habían realizado en el Régimen de Ahorro Individual (RAIS) durante más de 20 años, sin que hubiera existido culpa ni responsabilidad por parte de Colpensiones en el proceso de traslado.

La entidad alegó que no era obligatorio brindar información a la demandante sobre la fecha en que cumplía la edad de 47 años, lo que le habría permitido evaluar su decisión de traslado. Colpensiones se basó en la Ley 797 de 2003 y en la normativa correspondiente, afirmando que la demandante había tomado la decisión de cambiar de régimen de manera libre y sin vicios, y que, por lo tanto, no había una obligación por parte de Colpensiones de advertirle sobre el momento adecuado para tal cambio.

Solicitó al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, que revocara el fallo en contra de su representada, insistiendo en que el traslado al RAIS había sido realizado conforme a la normativa vigente y en ejercicio de la voluntad libre de la demandante, eximiendo a Colpensiones de responsabilidad en el traslado realizado en 1999.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada COLPENSIONES, y el grado jurisdiccional de consulta en su favor, por lo que el despacho de conocimiento, con auto de 23 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se refirieron al respecto así:

COLPENSIONES (PDF 04)

En los alegatos, Colpensiones solicitó revocar la sentencia de primera instancia, argumentando que, conforme a la Ley 797 de 2003, la demandante estaba impedida para cambiar de régimen al faltarle menos de diez años para la edad de pensión. Además, no tenía 15 años de cotización en 1994, lo cual la excluía del régimen de transición.

Colpensiones resaltó que la ineficacia del traslado afectaría la sostenibilidad del sistema pensional y la seguridad social de otros afiliados, citando sentencias de la Corte Constitucional. Defendió que la demandante había aceptado su afiliación en el RAIS al permanecer en él durante más de 20 años sin reclamos y que la responsabilidad de la asesoría recaía sobre la AFP, no sobre Colpensiones. Solicitó también que, de mantenerse la sentencia, se ordenara la devolución completa de las cotizaciones y valores en la cuenta individual y que se eximiera a Colpensiones de costas.

DEMANDANTE (PDF 05)

En sus alegatos de conclusión, la demandante, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, argumentando que la AFP Protección no cumplió con el deber de informar de manera adecuada al momento del traslado al Régimen de Ahorro Individual (RAIS). La defensa alegó que la demandante no recibió una asesoría completa y que la simple firma de un formulario no acreditaba el cumplimiento del deber de información. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema que señala que la suscripción de un formulario sin una explicación detallada no prueba que el consentimiento haya sido informado, sino apenas libre de vicios.

La representación también indicó que la carga de la prueba no puede recaer en la afiliada, ya que es responsabilidad de las entidades financieras, dada su posición y experiencia, proporcionar toda la información sobre las implicaciones de un traslado de régimen. Con base en estos argumentos, solicitó que se mantuviera la decisión.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandada COLPENSIONES, así como también el grado jurisdiccional de consulta en su favor.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada COLPENSIONES, y el otorgamiento del grado jurisdiccional de consulta en su favor, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Es ineficaz el traslado de la demandante del RPM al RAIS? En caso afirmativo dilucidar si ¿corresponde ordenar a la demandada PROTECCIÓN S.A. a reintegrar todos los valores que hicieron parte de la cuenta individual de la actora?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS

Los hechos que se encuentran acreditados dentro del proceso son, i)la fecha de nacimiento de la demandante, esto es el 27 de diciembre de 1960 (fols 33 pdf 01 primera instancia), ii) que la demandante estuvo afiliada al ISS, desde octubre de 1998 (fols 48-53 pdf 10 primera instancia), ii) que se trasladó de Colpensiones a Colmena S.A., el 13 de abril de 1999, traslado que se hizo efectivo desde el 01 de junio de 1999 (fol. 45 pdf 01 primera instancia); iii) que luego se trasladó de Colmena a la AFP ING el 01 de abril de 2000 hasta el 30 de diciembre de 2012 y que finalmente se trasladó de AFP ING a Protección S.A., desde el 31 de diciembre de 2012 hasta la actualidad (fols 37-40 pdf 08 primera instancia); iv) así como también se encuentra acreditado la solicitud de nulidad realizada a Colpensiones el 22 de junio de 2022, con respuesta negativa de 22 de junio de 2022 emitida por Colpensiones (fols 46-49 pdf 01 primera instancia).

SOBRE EL DEBER DE INFORMACIÓN AL SURTIRSE EL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL

Con lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de

otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021 y SL 509 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993:

> *"…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…"*

Ello, hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un paralelo entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en Sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información

Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, donde puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

> *"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas. Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa.*

Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.
(…)
También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.
También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

Conforme a las anteriores consideraciones, y en aplicación a nuestro caso concreto, la Sala advierte inicialmente que para la fecha en la que la accionante se trasladó al RAIS a través de la AFP Colmena inicialmente, esto es en el 01 de junio de 1999 (fols. 37-40 pdf 08), y, luego, en el mes de abril de 2000 realizó un traslado a la AFP ING, (fol. 30 pdf 09), para finalmente en diciembre de 2012 se trasladó a la AFP Protección, ahora demandada, por lo que tales traslados se enmarcan en el periodo antes referido, según el cual se le debía entregar información suficiente y transparente que le permitiera elegir *libre y voluntariamente* la opción que mejor se ajustara a sus intereses, lo cual implicaba la ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales.

SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA – FRENTE AL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE INFORMACIÓN

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar que al demandante, al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de las AFP demandadas, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de

2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Sin embargo, dicha postura fue modulada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de traslados hechos del RPM al RAIS..."*

En tal sentido, y al ponderarse los lineamientos trazados por la Corte Constitucional dentro del caso concreto, la Sala llega a la misma conclusión que el *A Quo* sostuvo en su fallo, ello teniendo en cuenta el caudal probatorio que fuese acreditado en juicio por todos los sujetos que integran el contradictorio, debidamente decretado, inclusive el interrogatorio de parte practicado a la aquí demandante señora BELKIS DEL ROSARIO NARVAEZ NEGRETTE, pues no se aprecia algún medio de convicción suficiente que permita demostrar que la AFP COLMENA hoy PROTECCIÓN S.A., con la que la actora realizó el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en el año 1999 y luego, la AFP ING, en 2000, ni Protección S.A. en el año 2012 , hubiesen llevado a cabo una asesoría con los pormenores mínimos de información sobre el régimen privado, como tampoco las ventajas y desventajas que existían entre este y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

De otro lado, la actora no confesó que se le hubiese brindado una asesoría ajustada a derecho para la conformación del supuesto de que trata el artículo 191 del C.G.P., incluidas las implicaciones, ventajas y desventajas entre ambos regímenes pensionales, y otras situaciones de asesoría que entendiera de manera fehaciente la total información suministrada, sin advertirle características propias incluso del

mismo Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tales como la cuenta de ahorro individual, aportes voluntarios, modalidades por vejez dentro del régimen privado, el derecho de retracto, etc.

De allí que se pueda colegir la notoria falta de información por parte de las AFP Colmena, ING y Protección S.A., por cuanto no se obtuvo confesión alguna de la debida asesoría al tenor de los preceptos emanados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, carga probatoria que por demás guarda plena consonancia con lo dispuesto en el artículo 167 del C.G.P., 176 y 242 del C.G.P. según las reglas para el análisis probatorio expuestas por la Corte Constitucional. Pues la única confesión que se obtuvo por parte de la demandante, fue que suscribió los formularios de afiliación.

Por otro lado, tal como lo regulan ambas Cortes, no puede atenderse el formulario de afiliación de cambio de régimen pensional, para la demostración de una asesoría necesaria acerca de los pormenores que condujeran a que el potencial afiliado en su momento hubiese sido informado de aspectos mínimos que repercutirían la consecuencia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Aunado a lo antes expuesto, es preciso poner de presente que la tesis de que la afiliación de la demandante y su permanencia en el RAIS genera un acto de relacionamiento que implica su voluntad de permanecer en dicho régimen, resultan inadmisible ya que nuestro máximo órgano de cierre ha reiterado que los traslados horizontales no convalidan el traslado inicial, como se estudió en sentencia SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, en la medida que el punto neurálgico a analizar en esta clase de procesos es si al momento del traslado del RPM al RAIS la persona contó con información suficiente para tomar esa decisión, mas no la permanencia del afiliado ni sus deberes como tal (SL1055-2022).

En síntesis, conforme el artículo 61 del C.P.T y de la S.S, que dispone que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que sirven de norte para acometer adecuadamente la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, a fin de llevar al juzgador la suficiente convicción para decidir con certeza sobre el objeto materia de litigio, colige la Sala que, la decisión de trasladarse de régimen pensional, la aquí demandante no la adoptó de manera informada, autónoma y consciente, habida cuenta que no se encuentra acreditado de manera alguna que los asesores que gestionaron la afiliación de régimen pensional RAIS, le explicara las implicaciones que le generaba el traslado solicitado y si dicho cambio le reportaba o no beneficio a sus intereses pensionales, los riesgos propios del RAIS, las posibilidades de efectuar cotizaciones adicionales, las consecuencias que tendría el no reunir el capital mínimo exigido para pensionarse por vejez, la garantía de la pensión mínima, la devolución de saldos, las modalidades pensionales que existen en el RAIS, entre otros aspectos básicos de funcionamiento del régimen.

Información esta que debió suministrarse al gestionar la afiliación del accionante y mutuo propio por la demandada, toda vez que la información técnica, clara y precisa que se le exige a tales entidades resulta necesaria e indispensable, como ya se dijo, para la toma de la decisión de afiliación inicial, pues con base en ella es que el posible afiliado realiza la escogencia del régimen pensional al cual desea pertenecer para que tal manifestación se torne en libre y voluntaria (CSJ SCL SL3179 de 2023).

Así las cosas, la Sala concluye que le asiste razón al fallador de instancia al declarar la ineficacia del traslado, dado que la demandada AFP Colmena, ahora PROTECCIÓN S.A, no probó el cumplimiento del deber de información en el momento del traslado de régimen de la promotora, por tanto, los traslados verticales como horizontales, realizados por la aquí demandante, sufren la misma consecuencia.

EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

En cuanto a las consecuencias que conlleva la ineficacia del traslado de régimen, ha de tenerse en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional en la ya citada sentencia SU 107 de 2024, en la que indicó:

> "*…En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)*
> *(…)*
> ***y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada*** *(supra 327)."* (negrita y subraya por fuera)

Decisión que no está por demás decir, se extiende a todas las demandas que estén en curso ante la jurisdicción ordinaria laboral, como lo refiere el ordinal octavo, de ahí que sea acogida por esta Sala de decisión en esa parte, aclarando que se seguirá con la línea jurisprudencial de la CSJ SCL, en lo referente a la obligación que les asistía desde sus orígenes a las AFP de brindar una debida asesoría a sus posibles afiliados y que tal omisión conlleva la declaratoria de ineficacia.

Así las cosas, se confirmará la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por la demandante del RPM al RAIS, así como también las ordenes entregadas en cuanto a la devolución de la totalidad del capital ahorrado, los rendimientos financieros y los bonos pensionales que hayan sido efectivamente pagados, sin lugar a ordenar la devolución, de conceptos diferentes a los ordenados en la sentencia de instancia puesto que el Máximo Órgano Constitucional ha establecido como no susceptibles de devolución.

Cabe resaltar en este punto, que el *A Quo,* en su decisión, dispuso que se indexaran las sumas reconocidas, y al ser esto beneficioso para Colpensiones, no se puede modificar tal decisión.

Luego, respecto a la solicitud especial realizada por el apoderado de la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, en cuanto a que se ordene condenar a las codemandadas a pagar a COLPENSIONES *"un cálculo actuarial equivalente al valor total de mesadas pensionales a pagar, liquidadas bajo los parámetros del Régimen de Prima Media, teniendo en cuenta para ello, la expectativa de vida de la demándate y la de sus beneficiario",* esta Sala reitera que en el presente asunto las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia solicitada en la demanda son retrotraer las condiciones de la afiliada al momento antes de realizar el traslado de régimen, razón por la cual se ordena el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea procedente como lo solicita el apoderado de la parte demandada COLPENSIONES, ordenar un pago por cálculo actuarial, pues este concepto corresponde al valor que deben asumir los empleadores que hayan omitido la afiliación o vinculación de sus trabajadores y para trabajadores independientes que omitieron su afiliación o vinculación al sistema general de pensiones.

Con todo, la Sala advierte que frente al término en que debe proceder la AFP Protección S.A., al devolver los antes aludidos conceptos, la Jueza de primera instancia no emitió pronunciamiento alguno, por lo que en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, se modificará el numeral segundo de la Sentencia en el sentido de ordenar que ello deberá materializarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ya que ello tiene sustento en el término señalado en el inciso 3° del artículo 16 del Decreto 692 de 1994, y las devoluciones en mención deberán cumplirse siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.2.4.8. del Decreto 1833 de 2016.

EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR COLPENSIONES

La demandada COLPENSIONES, al contestar el escrito inaugural, propuso además las excepciones de fondo que denominó *validez de la afiliación al rais, saneamiento de una presunta nulidad; imposibilidad juridica para reconocer y pagar derechos por fuera del ordenamiento legal; buena fe; imposibilidad de condena en costas;* sin que ninguna de ellas alcance prosperidad porque con ellas se buscaba enervar las pretensiones elevadas por la parte activa de la Litis y ello, como ya se analizó, no ocurrió.

Con respecto a la excepción de prescripción, la sentencia SL1688-2019, Radicación No. 68838 del 8 de mayo de 2019, dispuso lo siguiente:

> *"la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible […] pues, recuérdese, «la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo*

la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción".

Por lo tanto, se puede colegir del párrafo anterior que la acción de ineficacia del traslado de régimen pensional es imprescriptible.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dado que no tuvo prosperidad en el recurso presentado, las costas en esta instancia quedarán a cargo de COLPENSIONES, en favor de la demandante BELKIS DEL ROSARIO NARVAEZ NEGRETTE.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral segundo de la Sentencia proferida el día 26 de agosto de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído. Los cuales quedarán así:

"SEGUNDO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. normalizar la afiliación del actor en el Sistema de Información de los Afiliados a los Fondos de Pensión SIAFP y trasladar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-, la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual del demandante, incluidos los rendimientos y bonos pensionales, sumas debidamente indexadas. Así como entregar el archivo y el detalle de aportes realizados durante la permanencia en el RAIS. Dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, ya que ello tiene sustento en el término señalado en el inciso 3° del artículo 16 del Decreto 692 de 1994, y las devoluciones en mención deberán cumplirse siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 2.2.2.4.8. del Decreto 1833 de 2016, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de la decisión."

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás, la Sentencia proferida el día 26 de agosto de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá

TERCERO: CONDENAR en **COSTAS** de segunda instancia a la parte demandada COLPENSIONES, en favor de la parte demandante BELKIS DEL ROSARIO NARVAEZ NEGRETTE.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el

mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia, fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha, según acta No. 048.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente COLPENSIONES y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de uno y medio (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	JOSE SIERVO GARZON CASTELLANOS
Parte demandada	COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA.
Radicación	110013105-037202100024 01
Fecha de la decisión	16 DE FEBRERO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	CONTRATO REALIDAD
Acta de Discusión	036
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503720210002401

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en razón de la sentencia proferida el día 16 de febrero de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

El demandante, José Siervo Garzón Castellanos, por conducto de su apoderado judicial, promovió demanda contra la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda. (COOINPAZ) en el marco de un proceso ordinario laboral, con el fin de obtener la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo a término indefinido desde el 1º de marzo de 1998 hasta el 17 de noviembre de 2018, así como el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas, tales como cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, y los aportes al sistema de seguridad social integral, junto con la imposición de la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y los correspondientes intereses moratorios.

El demandante afirma que la relación laboral se desarrolló durante más de dos décadas en el cargo de Asesor Comercial, devengando un salario mensual correspondiente al salario mínimo legal vigente, es decir, $781,242. Señala que, el 21 de noviembre de 2015, sufrió un accidente de tránsito en horario laboral, que le

ocasionó una fractura de platillos tibiales, resultando en una incapacidad permanente total. Este hecho, según el demandante, afectó su capacidad para continuar desempeñando sus labores en condiciones normales.

Asimismo, sostiene que, desde junio de 2016, fue objeto de discriminación laboral debido a su condición de seropositivo, lo cual, según su relato, deterioró su entorno laboral y personal. El demandante afirma que esta situación se vio agravada cuando la demandada, a partir de esa fecha, suspendió unilateralmente el pago de su salario, argumentando un supuesto incumplimiento de metas comerciales. Como consecuencia de esta decisión, sus ingresos se redujeron exclusivamente a las comisiones obtenidas por ventas, las cuales disminuyeron progresivamente debido a su estado de salud.

Adicionalmente, el demandante señala que la Cooperativa incumplió con el pago de las prestaciones sociales mencionadas, y omitió realizar los aportes al sistema de seguridad social, lo que derivó en su desafiliación del sistema de salud, afectando su acceso a tratamientos médicos esenciales y vulnerando sus derechos fundamentales.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y siete Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 16 de febrero del 2021 (pdf 05), luego, con providencia del 13 de septiembre del 2023 (pdf 20), señala procedente convocar audiencia especial que trata el artículo 85A CPT y SS a fin de resolver solicitud de medidas cautelares, fijando fecha de audiencia para esta y para celebrar audiencias de los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LTDA. (COOINPAZ). (PDF 6 Y 13)

La Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda. (COOINPAZ) contestó la demanda promovida por José Siervo Garzón Castellanos, oponiéndose en su totalidad a las pretensiones formuladas por el demandante, y proponiendo las excepciones de inexistencia de la relación laboral, cumplimiento de las obligaciones contractuales y falta de legitimación en la causa. COOINPAZ sostiene que la relación entre las partes no constituyó, en términos generales, un vínculo de naturaleza laboral, salvo en un periodo específico, y que estuvo regulada principalmente por contratos de carácter civil y comercial, los cuales no reúnen los elementos esenciales del contrato de trabajo conforme al artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

La demandada reconoce que existió una relación laboral con el demandante únicamente durante el periodo comprendido entre el 6 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004, bajo un contrato de trabajo a término fijo, en el que el demandante se desempeñó en el cargo de Coordinador Comercial. COOINPAZ afirma que este contrato concluyó mediante la renuncia libre y voluntaria presentada por el demandante, tras lo cual se procedió a la liquidación y pago de todas las

prestaciones sociales a las que tenía derecho, según lo acreditan las pruebas documentales aportadas al proceso (folios 18 y 20).

Adicionalmente, COOINPAZ admite que existió una relación de naturaleza civil y comercial con el demandante, iniciada el 5 de enero de 2015, bajo un contrato de distribución. De acuerdo con la demandada, este contrato se mantuvo vigente hasta octubre de 2018, cuando fue terminado unilateralmente por el distribuidor, es decir, por el demandante. Durante este periodo, COOINPAZ argumenta que la relación se caracterizó por la autonomía del demandante en la ejecución de sus actividades, sin que existiera subordinación o dependencia, elementos esenciales para la configuración de una relación laboral.

En lo que respecta al accidente de tránsito alegado por el demandante, COOINPAZ niega categóricamente que dicho evento hubiera ocurrido en el marco de una relación laboral o durante la ejecución de funciones laborales, calificándolo como un hecho fortuito y desvinculado de cualquier responsabilidad atribuible a la empresa.

Asimismo, la demandada rechaza las acusaciones de discriminación laboral basadas en la condición de seropositivo del demandante, y sostiene que todas las decisiones empresariales adoptadas respecto del demandante se fundamentaron exclusivamente en la naturaleza comercial de la relación contractual y no en motivos discriminatorios.

En virtud de lo anterior, COOINPAZ solicitó al juzgado la desestimación de las pretensiones del demandante, la absolución de todas las reclamaciones formuladas en su contra, y la imposición de costas procesales al demandante, considerando la falta de sustento jurídico en sus alegaciones.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video PDF 22 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Treinta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia proferida el 16 de febrero de 2024, decidió declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante, José Siervo Garzón Castellanos, y la demandada, Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Limitada (COOINPAZ), durante el periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2000 y el 17 de noviembre de 2018. El fallo se fundamentó en la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas jurídicas, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

El juzgado consideró acreditada la prestación personal del servicio por parte del demandante, lo que activó la presunción de la existencia de un contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. A pesar de los alegatos de la demandada, que sostenía que la relación se había regido por contratos de naturaleza civil y comercial, el despacho concluyó que no se logró desvirtuar la presunción de laboralidad, dado que el demandante se encontraba bajo un régimen de subordinación durante el periodo en cuestión.

El análisis probatorio incluyó la valoración de testimonios y documentos que evidenciaron la existencia de un vínculo laboral continuo, caracterizado por la subordinación y dependencia del demandante frente a la demandada. Entre los elementos probatorios más relevantes, se destacaron los testimonios de Paola Constanza Sánchez, Omar Herrera Torres y Nancy Esperanza Díaz Morales, quienes confirmaron la naturaleza subordinada de la relación laboral y describieron las instrucciones precisas y el control ejercido por la demandada sobre el demandante.

Con base en lo anterior, el juzgado condenó a COOINPAZ al pago de diversas acreencias laborales a favor del demandante, incluyendo auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicios y compensación de vacaciones. Asimismo, se declaró probada parcialmente la excepción de prescripción, absolviendo a la demandada de las demás pretensiones invocadas en su contra.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA (min 00:29:48 video pdf 22)

El apoderado de la demandada interpuso un recurso de apelación, cuestionando la decisión del juzgado de primera instancia al considerar que no se valoró correctamente la naturaleza del contrato de distribución comercial entre las partes. La apelante sostiene que el demandante, en su rol de distribuidor, actuaba de manera independiente y autónoma, lo que desvirtúa la existencia de una relación laboral y, por lo tanto, exonera a la demandada de las condenas impuestas.

Se solicita al Tribunal la revocatoria de la sentencia, afirmando que no se configuró una relación laboral en los términos alegados por la parte actora, excepto en el período comprendido entre el 6 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004.

Solicitó al revocatoria de la sentencia, en el entendido que no existió durante esos extremos procesales la relación laboral que aduce la parte actora y solo se reconoció de manera parcial de 6 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2004.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, el despacho de conocimiento, con auto del 3 de mayo de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; se pronunciaron al respecto de la siguiente forma:

Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda. (pdf 05)

El apoderado de la demandada, Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda., ratifica su postura expresada en el recurso de apelación sustentado en audiencia el 16 de febrero de 2024. Solicita al Tribunal Superior de Bogotá la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado 37 Laboral del Circuito de Bogotá, al considerar que los hechos y las pruebas presentadas no justifican las condenas impuestas en primera instancia.

JOSE SIERVO GARZON CASTELLANOS (pdf 06)

El apoderado del demandante, José Siervo Garzón Castellanos, presentó sus alegatos de conclusión ratificando la existencia de un contrato de trabajo verbal a término indefinido entre su mandante y la demandada, Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda., desde el 1 de marzo de 1998 hasta el 17 de noviembre de 2018. El apoderado destacó que, durante el proceso, se acreditó la prestación personal del servicio por parte del demandante, lo que configura la presunción legal de un contrato laboral según el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.

Asimismo, se enfatizó que la empresa demandada actuó con temeridad y mala fe al hacer firmar documentos en blanco al demandante, presentándolos como contratos a término fijo, lo que fue desvirtuado por los testimonios presentados. Además, se argumentó que el juzgador de primera instancia erró al no aplicar la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que la demanda se presentó dentro del término legal, interrumpiendo la prescripción.

Por lo tanto, se solicita al Tribunal que confirme el fallo de primera instancia, reconociendo la existencia del contrato laboral y condenando a la demandada al pago de las prestaciones sociales y las sanciones indemnizatorias correspondientes.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandada.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Se encuentra debidamente acreditado los elementos esenciales para declarar la existencia de una relación laboral, o por el contrario lo que unió a las partes fue un contrato de distribución comercial?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Para resolver la presente causa, esta Sala considera, en primer lugar, que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por el principio de integración normativa que establece el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la

Seguridad Social, es responsabilidad de la parte activa probar los hechos que sustentan sus pretensiones, mientras que a la parte demandada le corresponde demostrar los hechos en que se basa su defensa. En este contexto, el demandante debe probar la existencia de una relación laboral para que esta sea declarada; es decir, que prestó servicios personales a la demandada. conforme a lo estipulado en los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, de acuerdo con el [1]artículo 24 del mismo código, basta con demostrar la prestación personal del servicio para que se presuma la existencia de una relación laboral, y es necesario además acreditar su continuidad en el tiempo, ya que de ello depende la imposición de las condenas correspondientes. Por su parte, la demandada debe desvirtuar esta presunción legal, demostrando que el vínculo entre las partes no se desarrolló dentro de un marco laboral y careció de subordinación o dependencia.

En este escenario, la Sala recuerda, como lo ha hecho en múltiples ocasiones, que el principio constitucional de primacía de la realidad se fundamenta en la prevalencia de los hechos reales sobre las formas, en consonancia con el respeto a la dignidad humana y la justicia social que rodea al trabajo. Este principio otorga al juez la facultad de privilegiar la realidad sobre lo que los documentos o acuerdos formales puedan aparentar, incluso cuando estos sean el resultado de un intento deliberado de ocultar o alterar la verdadera naturaleza de la relación jurídica. De este modo, se facilita la identificación de una relación laboral y se garantiza la protección de los derechos y prerrogativas inalienables que emanan de ella a favor de los trabajadores. Esta protección está consagrada no sólo en el artículo 53 de la Constitución, sino que también constituye un eje central del Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 1 y 13, y se refuerza con la Recomendación número 198 de la Organización Internacional del Trabajo de 2006, la cual forma parte de nuestro ordenamiento jurídico mediante el bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93 de la Constitución. Es importante recordar que el papel del juez en estos casos es descubrir la verdad material, aquella que se esconde detrás de las apariencias y de las manipulaciones, sin limitarse a lo que las partes intentan presentar en el proceso judicial.

Con estas premisas, el Juez Plural procede a examinar los puntos fundamentales que sustentan la presente controversia.

III.2.1 CONTRATO DE TRABAJO EN EL MARCO DEL PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES JURÍDICAS

a) Evaluación de la Prestación Personal del Servicio, la Subordinación y los extremos temporales

La prestación personal del servicio es un elemento esencial para la configuración del contrato de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Este elemento jurídico implica que el trabajador se compromete a ejecutar las labores encomendadas de manera directa e intransferible, sin la

[1] ARTICULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

posibilidad de delegar sus funciones a terceros. La importancia de este requisito radica en que, una vez demostrado, activa la presunción legal de la existencia de una relación laboral, de acuerdo con el artículo 24 del mismo compendio normativo. Esta presunción impone una carga probatoria inversa al empleador, quien debe demostrar la inexistencia de subordinación o la naturaleza distinta del vínculo, como podría ser un contrato comercial de distribución. En este sentido, la prueba de la prestación personal del servicio se convierte en un pilar crucial para la determinación del vínculo laboral, confirmando la obligación personalísima del trabajador en el cumplimiento de sus funciones y asegurando la protección de sus derechos laborales.

En el presente caso, la prestación personal del servicio constituye un factor determinante para establecer si existió una relación laboral entre el demandante, José Siervo Garzón Castellanos, y la demandada, Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda. Según el interrogatorio de parte rendido por el accionante y los testimonios practicados en audiencia, correspondientes a Paola Constanza Sánchez Ortegón, Omar Herrera Torres y Nancy Esperanza Díaz, quienes en distintos periodos de tiempo fueron compañeros de trabajo del demandante en la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda., se acreditó la prestación personal del servicio del demandante.

En su interrogatorio de parte, el demandante manifestó que su jornada iniciaba entre las 7:00 y 8:00 a. m., horario en el cual debía presentarse en la empresa. Explicó que, todos los días a la hora de entrada, se realizaba una reunión en la que se impartían instrucciones a los asesores comerciales sobre las condiciones de modo, tiempo y lugar en que debían prestar el servicio, indicándoles específicamente el sector asignado para la comercialización de los contratos de seguros exequiales. Asimismo, refirió que el traslado a los distintos puntos de venta se efectuaba en una camioneta de propiedad de la empresa, la cual portaba publicidad de la misma, y que, al finalizar la jornada, todos los asesores comerciales tenían la obligación de regresar a la sede de la demandada a las 5:00 p. m. para rendir informe sobre las ventas realizadas durante el día. Estas circunstancias evidencian la existencia de directrices operativas diarias y control sobre la ejecución del servicio, aspectos que resultan determinantes para evaluar la configuración de la subordinación jurídica.

La señora Paola Constanza Sánchez Ortegón, contadora pública, afirmó haber laborado para la empresa demandada entre 2009 y 2016 en diferentes cargos, inicialmente encargada de papelería y posteriormente como auxiliar del área de recursos humanos. Identificó al demandante como vendedor de la empresa durante todo el tiempo en que ella trabajó en la misma. Indicó que el horario de trabajo del demandante iniciaba a las 7:00 a. m., y que diariamente los vendedores asistían a una reunión grupal donde se les asignaban diez contratos. Afirmó que ella misma recogía el dinero de los contratos suscritos y que el salario del demandante consistía en un salario mínimo más comisiones por ventas. También señaló que, desde su rol en papelería, expedía el paz y salvo necesario para que tesorería realizara los pagos, y que en las reuniones diarias se establecían las áreas donde debían vender, las condiciones aplicables y si existían modificaciones en la cuota mínima dependiendo del plan a contratar y la edad de los afiliados. Manifestó que la empresa exigía un mínimo de 30 ventas mensuales para que los vendedores recibieran el pago del salario

mínimo y que, en caso de no cumplir con la meta, no se les pagaba este salario base. Indicó que los vendedores estaban directamente vinculados con la empresa y que tenía conocimiento de ello por su labor en el área de recursos humanos. Además, sostuvo que la empresa gestionaba la seguridad social de los vendedores y que, durante el tiempo en que ella estuvo vinculada, el demandante se desempeñó como vendedor de manera ininterrumpida hasta noviembre de 2015, cuando sufrió un accidente. Afirmó que el demandante presentaba sus incapacidades médicas ante la empresa y que esta realizaba los trámites correspondientes. También indicó que el director de ventas, Jaime Ovalle, era la persona a la que se reportaban las irregularidades, quien realizaba llamados de atención y supervisaba el cumplimiento de horarios. Señaló que la empresa proporcionaba carpetas con publicidad, contratos y carnets a los vendedores, quienes utilizaban una camioneta de la cooperativa para transportarse cuando el trabajo era en municipios, mientras que dentro de la ciudad se movilizaban a pie. Manifestó que, tras agotarse las incapacidades del demandante, este fue reasignado a labores de oficina para la recuperación de cartera. También declaró que a los vendedores se les exigía firmar un contrato y cuatro hojas en blanco como requisito para ser contratados o para la renovación del contrato, y que, aunque se firmaban contratos a término indefinido, nunca se entregaba copia a los trabajadores. Finalmente, indicó que el demandante asistía a la oficina en muletas tras su accidente, pero que, al no cumplir la meta de ventas, dejaron de pagarle el salario mínimo y lo desafiliaron de la seguridad social bajo el argumento de que "ya no servía".

Seguidamente, rindió testimonio el señor Omar Herrera Torres, quien trabajó para la demandada entre 1998 y 2004 en el cargo de asesor comercial. Manifestó que firmó un contrato a término indefinido, que su jornada laboral se extendía desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. y que, diariamente, a las 7:00 a. m., se realizaban reuniones en las que se les indicaban las actividades que debían desarrollar y las zonas en las que debían operar. Afirmó que el reporte de ventas debía efectuarse de manera presencial en la empresa todos los días a las 5:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. Sostuvo que la empresa exigía la firma de contratos en blanco como condición para mantener el empleo y que nunca se entregaban copias de los mismos a los trabajadores. Indicó que la remuneración consistía en el pago de un salario mínimo mensual más comisiones de aproximadamente $5.000 por venta. Señaló que el jefe de ventas y la gerente realizaban llamados de atención y supervisaban el desempeño de los vendedores. También mencionó que la empresa proporcionaba un vehículo, identificado como una "topi", una camioneta pequeña, para facilitar el transporte de los trabajadores en sus desplazamientos. Indicó que el demandante tenía el mismo horario que él y que inicialmente fue asesor comercial, pero que posteriormente fue ascendido a jefe de grupos.

Por último, la señora Nancy Esperanza Díaz, quien trabajó en la empresa como asesora comercial entre 2001 y 2008, ratificó varios de los aspectos mencionados por los otros testigos. Afirmó que, al igual que los demás trabajadores, fue obligada a firmar contratos en blanco como condición para continuar en el cargo. Indicó que la remuneración consistía en un salario mínimo más comisiones por ventas y que el demandante ocupaba el cargo de supervisor cuando ella ingresó a laborar. Manifestó que el horario de trabajo era de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y que diariamente se realizaban

reuniones a las 7:00 a. m. donde se impartían instrucciones específicas. Señaló que el pago del salario se realizaba en efectivo y que la empresa contaba con un vehículo utilizado para el traslado de los vendedores a los municipios, mientras que dentro de la ciudad se desplazaban a pie. Afirmó que el jefe de ventas asignaba diariamente las funciones y lugares de trabajo de los vendedores.

Bajo esta perspectiva, se evidencia que el demandante ejecutó directamente las tareas asignadas, lo cual activa la presunción de la existencia de un contrato de trabajo, conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta presunción exige que la demandada desvirtúe la configuración de la relación laboral, demostrando que el vínculo se desarrolló sin subordinación o bajo una figura contractual distinta, como el contrato de distribución comercial alegado.

La demandada, sin embargo, reconoció la existencia de una relación laboral únicamente durante el período comprendido entre el 6 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. No obstante, no aportó material probatorio suficiente para desvirtuar la presunción de una relación laboral continua más allá de este periodo. Dentro del escaso material probatorio aportado por la demandada, se encuentran cartas escritas a puño y letra por el demandante, visibles a folios 19 y 22 del anexo 6 del expediente, en las que solicita la distribución comercial de los planes de afiliación en calidad de difusor comercial independiente y posteriormente informa que no desea continuar con el contrato de distribución comercial.

Sin embargo, en su interrogatorio de parte, el demandante explicó que la empresa le exigía firmar documentos en blanco anualmente como condición para la renovación del contrato, lo cual era una práctica generalizada dentro de la compañía. Afirmó que, si bien no existía una coacción directa, los asesores comerciales debían firmar dichos documentos para conservar su trabajo. Indicó que no solo firmó la carta presentada por la demandada, sino que existen múltiples documentos con su firma, incluyendo pagarés y otras cartas con fechas abiertas. Explicó que entre estos documentos figuraba una carta de solicitud de trabajo con fecha abierta y otra con un preaviso de finalización de labores, práctica que sostuvo haber cumplido reiteradamente a lo largo de su permanencia en la empresa. Expresó que este tipo de cartas las firmaban todos los asesores comerciales, que ello era de conocimiento general dentro de la organización y que, en caso de que la demandada debería haber aportado al menos 20 cartas similares firmadas en los años en que prestó sus servicios.

Respecto de este dicho, se le otorga validez en tanto que resulta congruente con los testimonios practicados en audiencia, donde todos los testigos fueron coincidentes en afirmar la exigencia de la firma de documentos en blanco como condición para la continuidad de la relación de trabajo. La prueba testimonial acreditó que esta práctica se llevaba a cabo anualmente y que los asesores comerciales eran requeridos a firmar documentos sin recibir copia de los mismos.

Adicionalmente, la demandada no contrainterrogó a los testigos que respaldaron la existencia de una relación laboral continua ni presentó testigos propios que pudieran refutar estas declaraciones. La falta de una refutación sólida y la ausencia de pruebas que acrediten la autonomía del demandante debilitan su posición. En consecuencia,

el material probatorio recaudado permite inferir que las cartas presentadas por la demandada no constituyen prueba suficiente para demostrar la inexistencia de subordinación, en tanto se inscriben dentro de la práctica reconocida por el demandante y los testigos de exigir la firma de documentos en blanco.

En este contexto, es esencial aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades jurídicas. Un documento que establece un contrato comercial no puede, por sí solo, desvirtuar la presunción de laboralidad cuando la realidad de la relación muestra indicios claros de subordinación y dependencia. Este principio establece que, en caso de conflicto entre la realidad de los hechos y lo que se establece formalmente en los documentos, prevalece la realidad de la prestación de servicios y la relación que efectivamente se desarrolló entre las partes.

La presunción de laboralidad, una vez activada, obliga a la parte demandada a demostrar que el vínculo carecía de subordinación, un elemento esencial en la configuración de un contrato de trabajo. La subordinación se manifiesta cuando el trabajador está sujeto a la dirección, control y supervisión del empleador en la ejecución de sus labores. La ausencia de pruebas concluyentes por parte de la demandada para demostrar la autonomía del demandante refuerza la presunción de una relación laboral. Este control, evidenciado en la asignación directa de tareas, se desprende del interrogatorio de parte del demandante, el cual resulta congruente con los testimonios rendidos por Paola Constanza Sánchez Ortegón, Omar Herrera Torres y Nancy Esperanza Díaz. Todos los testigos fueron consistentes en establecer que diariamente, en la reunión de las 7:00 a. m., se les indicaban y asignaban las zonas de venta y las funciones específicas a desarrollar durante la jornada laboral. Asimismo, refirieron que el demandante y los demás vendedores se transportaban directamente en vehículos de la empresa cuando el trabajo debía realizarse en municipios y que, dentro de la ciudad, se movilizaban a pie. Además, señalaron que a las 5:00 p. m. los vendedores debían acudir a la sede de la empresa para rendir informe sobre lo acontecido en el día, entregando los resultados de las ventas realizadas.

Este esquema de control operacional sobre la ejecución de la actividad comercial constituye un indicio claro de subordinación, toda vez que refleja la existencia de una organización empresarial que disponía y dirigía la forma en que se prestaba el servicio. Dicho control se traduce en la imposición de lineamientos obligatorios en la ejecución de las funciones, en la fiscalización diaria de la labor desempeñada y en la exigencia de reportes de cumplimiento dentro de la jornada establecida. Estas características, propias de una relación de trabajo dependiente, desvirtúan la tesis de autonomía e independencia alegada por la demandada.

La falta de pruebas que acreditaran una relación contractual de carácter comercial impidió que la demandada desvirtuara la presunción de existencia de una relación laboral. Por el contrario, los elementos probatorios analizados permiten concluir que el demandante no tenía libertad en la determinación de su jornada ni en la forma de ejecución de sus funciones, sino que estaba sujeto a directrices empresariales precisas, lo que confirma la existencia de subordinación jurídica en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

En consecuencia, la evaluación de la prestación personal del servicio y la subordinación en este caso permite concluir que la relación entre José Siervo Garzón Castellanos y la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda. Fue de naturaleza laboral. Este análisis confirma la existencia de una relación laboral continua entre las partes, lo que implica que la empresa debe cumplir con todas las obligaciones laborales derivadas de dicha relación.

Para resolver el cuestionamiento planteado en la apelación respecto de los extremos temporales de la relación laboral, se parte del análisis efectuado en primera instancia, el cual, a partir del material probatorio recaudado, permitió establecer con certeza que la relación laboral entre las partes se extendió desde el 5 de agosto del 2000 hasta el 17 de noviembre de 2018. La decisión adoptada por el juzgado de primera instancia se fundamentó en una valoración integral de la prueba testimonial y documental, cuya solidez se verifica en esta instancia, en la medida en que el apelante no aportó elementos de convicción que permitan desvirtuar tales conclusiones.

Respecto del extremo inicial, se advierte que el juzgado analizó la existencia de indicios sobre la prestación del servicio con anterioridad al año 2000, pero concluyó que el propio demandante incurrió en inconsistencias respecto de una supuesta vinculación en 1998, dado que en su relato mencionó haber estado vinculado con otro empleador en esa anualidad y a su vez mencionó que su vinculación con la empresa se dio a finales de 1999. A su vez, se determinó que la empresa demandada, si bien fue formalmente constituida en el año 2003, inició su actividad comercial desde el 5 de agosto de 2000, según se verifica en el capítulo de constitución del certificado de Cámara de Comercio aportado por la misma demandada, lo que, en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas jurídicas, permitió fijar esa fecha como el punto de inicio de la relación laboral. Este análisis resulta ajustado a derecho, pues parte de la realidad probatoria y evita otorgarle valor a periodos en los que no se tiene certeza sobre la existencia de una relación de trabajo con la demandada.

Por otro lado, el extremo final se estableció con base en documentos que acreditan la calidad de asesor comercial del demandante hasta al menos septiembre de 2018 (pdf 01, fl. 43), que coincide también con lo manifestado frente a la terminación de los contratos de distribución por parte de la empresa demandada. Este razonamiento parte de una valoración objetiva de la prueba documental, en la que se verifica que la demandada mantuvo un vínculo con el demandante hasta esa fecha, siendo consistente con la prueba testimonial rendida en el proceso.

El argumento de la parte apelante, que sostiene que la relación laboral únicamente existió entre el 6 de enero y el 31 de diciembre de 2004, carece de soporte probatorio suficiente, en tanto no se desvirtúa el cúmulo de pruebas que permitieron fijar los extremos temporales establecidos en la sentencia de primera instancia y siendo que el representante legal de la parte demandada, reconoció así mismo que el demandante tuvo vinculaciones directas temporales durante las anualidades 2001, 2002 y 2003. La empresa demandada no aportó documentos que acrediten la inexistencia de la relación laboral en los periodos posteriores ni logró controvertir,

mediante testigos propios o contrainterrogatorios efectivos, la credibilidad de las declaraciones que sustentan la continuidad del vínculo.

En consecuencia, valoradas las pruebas en su conjunto y en aplicación de los criterios jurisprudenciales que rigen la determinación de la relación laboral, se confirma lo decidido en primera instancia en cuanto a los extremos temporales de la relación, fijados entre el 5 de agosto de 2000 y el 17 de noviembre de 2018, periodo en el cual se configura un contrato de trabajo a término indefinido en favor del demandante.

b) *In dubio pro operario* y principio de favorabilidad

En virtud de lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que los principios de favorabilidad e *in dubio pro operario* son plenamente aplicables al caso sub judice, como mecanismos fundamentales para la protección de los derechos del trabajador, José Siervo Garzón Castellanos, en el marco de la relación controvertida con la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda.

El principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, establece que, en caso de existir varias interpretaciones posibles en un conflicto laboral, debe adoptarse aquella que resulte más beneficiosa para el trabajador. En el presente caso, este principio se aplica al preferir la interpretación que reconoce la existencia de una relación laboral continua, considerando la naturaleza de las actividades desempeñadas por el demandante y su integración en la estructura organizacional de la demandada.

El principio *in dubio pro operario* adquiere relevancia particular en este caso, dado que la parte demandada no demostró el interés probatorio necesario para desvirtuar la presunción de laboralidad. La demandada no contrainterrogó a los testigos presentados por la parte actora, quienes afirmaron la existencia de una relación laboral, ni aportó testimonios propios que pudieran ofrecer una versión alternativa de los hechos. Ante esta omisión, las dudas que pudieran surgir respecto a la naturaleza de la relación deben resolverse en favor del trabajador, presumiendo la existencia de una relación laboral y, en consecuencia, imponiendo a la empresa el cumplimiento de las obligaciones legales derivadas de dicha relación.

Por lo tanto, en aplicación conjunta de estos principios, esta Sala concluye que la relación entre José Siervo Garzón Castellanos y la Cooperativa Inversiones y Planes de la Paz Ltda. fue de naturaleza laboral, lo que obliga a la empresa a cumplir con todas las prestaciones y derechos que de dicha relación se derivan, de conformidad con la normatividad laboral vigente.

En virtud de lo expuesto, esta Sala de Decisión confirma en su integridad la sentencia de primera instancia, con excepción de un error de redacción en el acta de audiencia respecto de los extremos laborales, modificando a fin de conservar la congruencia según la sentencia dictada oralmente mediante audiencia virtual. Se considera que las pruebas y argumentos presentados por la parte demandante fueron suficientes para acreditar la existencia de la relación laboral y las obligaciones derivadas de la misma, y que la parte demandada no logró desvirtuar la presunción de laboralidad.

No obstante, esta Sala se abstiene de pronunciarse sobre las peticiones adicionales formuladas por la parte demandada en sus alegatos de conclusión, en particular en lo que respecta a la revisión de intereses moratorios. Esta decisión se fundamenta en la observancia estricta de los principios procesales y en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 320 del Código General del Proceso, dado que dicha solicitud no fue realizada en la oportunidad procesal pertinente. Al no haberse presentado en el momento oportuno, cualquier consideración sobre este aspecto queda fuera del alcance de esta Sala en el presente fallo.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandada, se condenará en costas de segunda instancia a favor del demandante.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO, de la sentencia proferida el día 16 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y siete Laboral del Circuito de Bogotá, mismo que quedará así:

> ***PRIMERO: DECLARAR*** *que entre el señor JOSÉ SIERVO GARZÓN CASTELLANOS en calidad de trabajador medio la existencia de un contrato de trabajo con la demandada COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LIMITADA, durante el periodo comprendido entre el 05 de agosto 2000 y el 17 de noviembre de 2018, para desempeñar el cargo de vendedor comercial.*

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo la sentencia proferida el día 16 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y siete Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

TERCERO: COSTAS a cargo de la **COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA PAZ LIMITADA**

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 036.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente demandada y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de un salario mínimo legal mensual vigente. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	PAULA ROCIO MORENO MUÑOZ
Parte demandada	CLÍNICA VASCULAR NAVARRA S.A.
Radicación	11001310503820220042201
Fecha de la decisión	21 DE FEBRERO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	DESPIDO SIN JUSTA CAUSA
Acta de Discusión	074
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310503820220042201

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en razón de la sentencia proferida el día 21 de febrero del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 y 06 primera instancia)

Paula Rocío Moreno Muñoz, quien actúa a través de apoderado, presentó demanda contra la Clínica Vascular Navarra S.A., formulando pretensiones orientadas al reconocimiento de diversas prestaciones laborales. Solicita, en primer término, la declaratoria de existencia de un vínculo laboral a término indefinido entre las partes, vigente desde el 16 de enero de 2019 hasta el 28 de junio de 2019. Pretende que se determine que la terminación del contrato se produjo por causas imputables al empleador, configurando un despido sin justa causa y que se ordene el pago de la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

Además, la demandante reclama el pago de las cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y primas de servicios, indicando que la demandada omitió su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por lo que solicita el pago del cálculo actuarial correspondiente.

Fácticamente, la actora sostiene que suscribió un contrato de trabajo como médico general, con una remuneración mensual de $2.800.000, desempeñándose bajo subordinación y siguiendo las instrucciones del empleador. Alega que la demandada incumplió con el pago de los salarios correspondientes a los meses de mayo y junio de 2019, además de no liquidar las prestaciones sociales al finalizar la relación laboral. Señala que estas omisiones, junto con la falta de insumos para el desempeño de sus funciones, motivaron su renuncia el 28 de junio de 2019, la cual atribuye a causas imputables al empleador.

Jurídicamente, la demanda se fundamenta en el artículo 53 de la Constitución Política, que establece el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales y la primacía de la realidad sobre las formalidades. Además, se invocan disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, como el artículo 64, que regula la indemnización por despido sin justa causa, y el artículo 65, que establece la sanción moratoria por el no pago oportuno de salarios y prestaciones sociales. Asimismo, se cita la Ley 100 de 1993 en lo referente a la obligación del empleador de afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Seguridad Social, particularmente el artículo 33, que permite el cómputo de semanas para efectos pensionales en casos de omisión de afiliación, siempre que se realice el pago del cálculo actuarial. En cumplimiento del auto del 9 de febrero de 2023, el apoderado presentó un escrito de subsanación, donde se aclararon y precisaron los fundamentos fácticos y jurídicos, anexando pruebas adicionales, como el contrato de trabajo, desprendibles de nómina, la carta de renuncia y el derecho de petición radicado el 22 de octubre de 2019, en el que se reclamaban las obligaciones laborales adeudadas.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 07 de junio del 2023 (pdf 07), luego, con providencia del 25 de julio del 2023 (pdf 10), tuvo por contestada la demanda por **CLÍNICA VASCULAR NAVARRA S.A.**, y fijó fecha para celebración de audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. CLÍNICA VASCULAR NAVARRA S.A. (PDF 09)

La Clínica Vascular Navarra S.A., mediante apoderado, presentó contestación a la demanda instaurada por Paula Rocío Moreno Muñoz, reconociendo la existencia de una relación laboral a término indefinido entre el 16 de enero de 2019 y el 28 de junio de 2019, así como los términos pactados respecto del cargo y la remuneración. Sin embargo, negó que la terminación del contrato fuera atribuible a su actuación, aduciendo que la renuncia de la demandante se debió a dificultades económicas ocasionadas por el incumplimiento de pagos por parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), lo que afectó gravemente su flujo de caja y llevó a retrasos en el pago de salarios y otras obligaciones laborales.

En respuesta a las pretensiones de la actora, la demandada sostuvo que todas las obligaciones derivadas de la relación laboral fueron debidamente liquidadas al finalizar el vínculo, incluyendo cesantías, intereses sobre cesantías, primas de servicios y vacaciones, tal como consta en la liquidación de prestaciones sociales presentada como prueba. Asimismo, la demandada rechazó la alegación de omisión en la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, argumentando que la actora ya se encontraba afiliada con anterioridad al inicio de la relación laboral. Frente a la solicitud de indemnización moratoria, la empresa invocó su buena fe, afirmando que los incumplimientos en los pagos se debieron a circunstancias ajenas a su control, derivadas de problemas estructurales en el Sistema de Seguridad Social en Salud y de la descapitalización por impagos de las EPS.

La Clínica Vascular Navarra S.A. también argumentó que la renuncia presentada por la demandante no configura despido injusto, ya que los motivos de la misma se enmarcaron en una crisis económica generalizada que afectó a múltiples trabajadores y no obedeció a incumplimientos directos de la empleadora, sino a la falta de pagos por parte de terceros. Además, la demandada manifestó que la carta de renuncia y la liquidación aceptada por la demandante evidencian la ausencia de inconformidades adicionales al momento de la terminación del contrato, por lo que considera que las pretensiones de la demanda carecen de sustento fáctico y jurídico.

En este contexto, la demandada solicitó al despacho que se desestimen las pretensiones de la actora, considerando que los hechos invocados no constituyen causal suficiente para el reconocimiento de indemnizaciones por despido injusto ni para la procedencia de la indemnización moratoria establecida en los artículos 64 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo. La defensa se basa en la demostración de su buena fe, el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la acreditación documental de la liquidación de prestaciones sociales efectuada, invocando además las dificultades financieras ocasionadas por causas externas e imprevisibles que limitaron su capacidad de pago.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video pdf 13 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 21 de febrero de 2024, decidió acoger las pretensiones de Paula Rocío Moreno Muñoz. Ante la inasistencia de la Clínica Vascular Navarra S.A. a la audiencia final, el Juzgado aplicó la presunción de veracidad de los hechos expuestos en la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 205 del Código General del Proceso. En consecuencia, el numeral primero de la sentencia de primera instancia declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, vigente del 16 de enero de 2019 al 28 de junio de 2019, durante el cual la demandante se desempeñó como médico general con un salario mensual de $2.800.000.

El Juzgado condenó a la Clínica Vascular Navarra S.A. al pago de las acreencias laborales reclamadas por la demandante, tales como cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, compensación por vacaciones y una indemnización por despido sin justa causa. Además, se impuso el pago de intereses moratorios en los

términos del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, considerando el incumplimiento en el pago oportuno de las obligaciones laborales. El despacho también ordenó la indexación de las sumas reconocidas, aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el DANE, desde junio de 2019 hasta la fecha en que se efectúe el pago.

Adicionalmente, se dispuso que la demandada efectúe el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones correspondientes al periodo entre el 1 de mayo y el 28 de junio de 2019, calculados sobre la base del salario percibido por la actora, debiendo ser consignados a Colpensiones junto con los intereses moratorios generados, sin perjuicio de que dicha entidad pueda adelantar acciones de cobro coactivo para el recaudo de estas sumas.

El Juzgado declaró no probadas las excepciones, dado que la demandada no presentó ninguna oposición formal en su contestación. Se impusieron costas procesales a cargo de la Clínica Vascular Navarra S.A., incluyendo agencias en derecho a favor de la demandante.

Notificadas las partes en estrados, el apoderado de la demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, el cual fue concedido en efecto suspensivo para ante la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE (min 00:59:47 video pdf 13)

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, manifestando como motivo de inconformidad principal el hecho de que la propia accionada, Clínica Vascular Navarra S.A., reconoció explícitamente adeudar a la actora salarios pendientes. Señaló que este hecho fue mencionado en la demanda y confesado por la demandada al aportar la liquidación final de prestaciones sociales, documento que evidencia la existencia de una deuda no controvertida durante el proceso. Adicionalmente, el apoderado subraya que la parte demandada indicó un salario superior al mencionado en la demanda, lo cual, a juicio del apelante, debió ser tomado como base para la liquidación de las condenas impuestas. Este aspecto, sostiene, eleva el monto de las prestaciones reconocidas y no fue considerado adecuadamente en la sentencia apelada, por lo que solicita la revisión y corrección de las sumas a liquidar en favor de la demandante.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia y no encontrándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión en razón de la apelación interpuesta por la parte demandante. Mediante auto del 21 de agosto de 2024 (pdf 07), el despacho avocó conocimiento del proceso, el cual contaba con auto previo del 11 de abril de 2024 (pdf 04), que admitió el recurso de apelación y ordenó correr traslado a las partes para la presentación de sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la única que se pronunció al respecto fue la parte demandante **PAULA ROCIO MORENO MUÑOZ**, así:

PAULA ROCIO MORENO MUÑOZ (pdf 05 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión presentados por el apoderado de Paula Rocío Moreno Muñoz, se enfatiza la prueba aportada por la propia Clínica Vascular Navarra S.A., consistente en la liquidación final de prestaciones sociales, donde se reconoce explícitamente una deuda pendiente hacia la demandante por valor de $10.316.705, lo que constituye una confesión directa por parte de la demandada. El abogado destaca que esta suma incluye un saldo adeudado por concepto de salarios no pagados, específicamente de $7.953.706, cuyo pago no fue ordenado en la sentencia de primera instancia, pese a haberse probado su existencia documentalmente.

Asimismo, el apoderado señala una inconsistencia en la determinación del salario base utilizado para la liquidación de las condenas impuestas por el Juzgado. Indica que, en la liquidación aportada como prueba por la demandada, se establece que la asignación salarial era de $3.283.972, sin embargo, el Juzgado tomó como referencia un salario inferior de $2.800.000, lo cual impacta directamente en el cálculo de las prestaciones e indemnizaciones reconocidas. En consecuencia, solicita una corrección en la sentencia para que se efectúe la liquidación conforme al salario real confesado por la demandada.

En sus conclusiones, el apoderado insiste en que la evidencia recaudada durante el proceso demuestra de manera irrefutable tanto la existencia de las deudas salariales como el error en el cálculo de las acreencias laborales. Por lo tanto, solicita que se modifique el fallo apelado para incluir el pago completo de los salarios adeudados y se ajuste la base salarial a $3.283.972, en consonancia con lo reconocido por la propia demandada en el proceso.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar los siguientes problemas jurídicos: i)¿Debe revisarse la liquidación de las condenas impuestas en la sentencia de primera instancia, ante la posible existencia de errores en la determinación del salario base y el reconocimiento de obligaciones salariales pendientes? y ii)¿Es procedente condenar al pago de salarios insolutos a favor de la demandante, considerando el reconocimiento expreso de la obligación por parte de la demandada?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En esta instancia, la Sala procede a revisar el fallo de primera instancia, atendiendo los cuestionamientos formulados en el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.

Se aclara que no es objeto de debate la existencia del contrato de trabajo a término indefinido entre Paula Rocío Moreno Muñoz y la Clínica Vascular Navarra S.A., ni los extremos temporales de la relación laboral (16 de enero de 2019 y 28 de junio de 2019, respectivamente), así como tampoco la procedencia de las condenas relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios, vacaciones y la indemnización por despido sin justa causa. Estas cuestiones fueron admitidas y reconocidas por la demandada, quien no impugnó dichas determinaciones.

El análisis se centrará, por tanto, en los aspectos específicos alegados en la apelación, a saber: la valoración de la prueba documental presentada por la demandada, que incluye la liquidación final de prestaciones sociales en la que se reconoce expresamente una deuda salarial pendiente hacia la demandante; y la determinación del salario base utilizado para la liquidación de las prestaciones sociales e indemnizaciones, que el apelante considera inferior al salario confesado por la propia demandada en dicho documento. La revisión se enfocará en establecer si estos puntos fueron correctamente valorados por el operador judicial de primera instancia, o si se configura un error que amerita la modificación de las condenas impuestas.

Valoración de la Prueba Documental y Confesión de Deuda Salarial: Análisis del Reconocimiento Expreso por parte de la Demandada

En este análisis, es fundamental abordar la valoración de la prueba documental en relación con la deuda salarial alegada por la parte demandante, así como el alcance jurídico de la confesión presunta aplicada en el proceso de primera instancia. La accionante, en el hecho décimo segundo de su demanda, afirmó que la Clínica Vascular Navarra S.A. le adeudaba los salarios correspondientes al periodo del 1 de mayo al 28 de junio de 2019. No obstante, dicha afirmación no fue objeto de un reconocimiento explícito en el escrito de contestación de la demanda por parte de la sociedad demandada. A pesar de ello, la sentencia de primera instancia consideró configurada la confesión presunta prevista en el artículo 205 del Código General del Proceso, debido a la inasistencia reiterada del representante legal de la demandada a la audiencia de conciliación obligatoria y al interrogatorio de parte, así como la falta de comparecencia del apoderado a la audiencia de juzgamiento.

El artículo 205 del Código General del Proceso establece que, cuando la parte citada no comparece a rendir el interrogatorio de parte, se presumirán como ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión que se aleguen en su contra, salvo prueba en contrario. En este contexto, el juez de primera instancia consideró que la inasistencia de la demandada implicaba aceptar los hechos relativos a la deuda salarial, al tratarse de hechos que, por su naturaleza, son susceptibles de prueba

mediante confesión. No obstante, este tribunal debe realizar una revisión técnica sobre el alcance de dicha presunción y su compatibilidad con los principios de congruencia procesal y preclusión de la instancia.

Si bien la confesión presunta establecida en el artículo 205 del Código General del Proceso genera una fuerte presunción en favor de la parte demandante respecto de los hechos contenidos en la demanda, es crucial determinar sobre cuáles de estos recayó específicamente dicha presunción y en qué etapa procesal se configuró. En este caso, el juez de primera instancia aplicó la presunción de manera general sobre la totalidad de los hechos expuestos en el libelo introductorio, al considerar que todos ellos eran susceptibles de confesión, con fundamento en la inasistencia del representante legal de la demandada a la audiencia de conciliación obligatoria y a la diligencia de interrogatorio de parte. Sin embargo, se precisó que se trata de una presunción de carácter legal que admite prueba en contrario, trasladando a la demandada la carga de desvirtuarla, lo que no ocurrió en el presente proceso. No obstante, es preciso advertir que la aplicación generalizada y automática de esta presunción sobre la totalidad de los hechos afirmados en la demanda debe ser matizada, pues el artículo 205 del Código General del Proceso exige una evaluación concreta de la naturaleza de cada hecho a efectos de establecer si es susceptible de prueba por confesión. No todo enunciado fáctico reúne esta condición, y la afirmación de una deuda laboral requiere un análisis individualizado que distinga entre lo que constituye una manifestación de voluntad de las partes y lo que exige prueba documental o contable.

Aun cuando se haya aplicado la confesión presunta sobre la totalidad de los hechos de la demanda, ello no implica automáticamente que el juez pudiera extender su fallo más allá de las pretensiones expresamente formuladas por la parte actora. En aplicación del principio de congruencia procesal, las decisiones judiciales deben circunscribirse a las pretensiones incluidas en la demanda, sin que sea posible para el juez de instancia condenar por conceptos que no fueron objeto de petición expresa. En este sentido, el reconocimiento y pago de los salarios adeudados no fueron planteados como una pretensión autónoma dentro del libelo introductorio, por lo que solicitar su reconocimiento en la apelación implicaría una modificación sustancial de la Litis, vulnerando así el principio de estabilidad de los actos procesales y el derecho de defensa de la parte demandada.

En ese sentido, aun cuando el apelante invoque en esta instancia la presunción derivada del artículo 205 del Código General del Proceso y la acreditación probatoria contenida en la liquidación final de prestaciones sociales aportada por la demandada, debe observarse que dicha solicitud carece de sustento procesal, dado que no fue formulada oportunamente como una pretensión concreta dentro del escrito de demanda. La confesión presunta permite dar por acreditados ciertos hechos dentro del proceso, pero no habilita per se la procedencia de una condena por un concepto no solicitado, pues ello implicaría un desbordamiento del marco procesal previamente fijado y una vulneración del principio de congruencia que rige el proceso.

Aun si se entendiera que el hecho relacionado con la existencia de una deuda salarial fue objeto de la presunción legal de veracidad, dicha circunstancia no permite, por sí

sola, fundamentar una condena judicial, en la medida en que la demanda no incluyó pretensión alguna dirigida al reconocimiento y pago de dichos emolumentos. La jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar que los jueces no pueden fallar más allá o por fuera de lo solicitado por las partes, pues ello vulneraría el principio de congruencia y afectaría el derecho de defensa. La mera incorporación del hecho en la narrativa fáctica del libelo no tiene la virtualidad de habilitar un pronunciamiento de condena si no ha sido formalmente solicitado a través de una pretensión autónoma. Así, no puede el juez en sede de apelación extender el objeto del proceso más allá de las solicitudes formuladas oportunamente, so pena de incurrir en una extralimitación incompatible con la estructura dispositivo-adversarial del proceso laboral ordinario.
Adicionalmente, es pertinente recordar que el juez de primera instancia, aun si contaba con la facultad de fallar ultra o extra petita —esto es, concediendo más de lo pedido o concediendo algo distinto a lo solicitado—, no estaba jurídicamente obligado a hacerlo. Estas facultades son de naturaleza discrecional y excepcional, y su ejercicio exige una justificación concreta vinculada a la protección de derechos fundamentales o a la necesidad de evitar una denegación de justicia. En ausencia de tales presupuestos, la omisión del juez en pronunciarse sobre una condena no solicitada no puede ser reprochada como una decisión contraria a derecho. Así, la alegación del apelante, fundada en la prueba documental aportada por la propia demandada —esto es, la liquidación final de prestaciones sociales visible en el folio 14 del pdf 09—, no tiene la aptitud de subsanar la omisión en el petitum de la demanda, por cuanto el documento, aún si es idóneo y representativo de una obligación reconocida, no puede ampliar por sí solo el alcance del litigio.
En consecuencia, si bien la confesión presunta aplicada en primera instancia permite tener por acreditado el hecho relativo a la existencia de una deuda salarial, la ausencia de una pretensión concreta encaminada a obtener su pago impide que, tanto en primera como en segunda instancia, se profiera condena alguna por ese concepto. El juez de segunda instancia se encuentra vinculado por el marco procesal delimitado en el escrito de demanda, y no le es dable pronunciarse sobre aspectos que no fueron formalmente debatidos ni oportunamente solicitados. Por tanto, esta Sala desestima la solicitud formulada en sede de apelación en relación con los salarios adeudados, por carecer de respaldo procesal suficiente y por encontrarse por fuera del ámbito de competencia del juez en virtud del principio de congruencia y de la preclusión de los actos procesales.

Determinación del Salario Base para la Liquidación de Prestaciones: Análisis del Error en la Valoración del Salario Confesado y su Impacto en las Condenas

En lo que concierne a la determinación del salario base para la liquidación de las prestaciones sociales reconocidas en la sentencia de primera instancia, se advierte que el operador judicial de conocimiento adoptó como parámetro el salario pactado contractualmente, ascendiente a $2.800.000, conforme consta en los folios 12 a 15 del expediente (pdf 01). Este monto fue ratificado tanto en el libelo demandatorio como en la contestación de la demanda, evidenciando la ausencia de controversia en torno a la remuneración básica devengada por la demandante. Adicionalmente, en el folio 16 del mismo documento, obra un desprendible de nómina que corrobora dicho valor salarial, si bien se advierte que la accionante percibía, en determinados periodos, sumas superiores derivadas de recargos nocturnos y trabajo suplementario,

lo que llevó a que su devengado efectivo alcanzara valores superiores en ciertos meses, como ocurrió en febrero de 2018, cuando ascendió a $3.130.750. Esta circunstancia permite inferir que, si bien el salario base era fijo, su estructura remunerativa tenía una naturaleza variable, susceptible de afectación por los factores adicionales propios de la jornada laboral.

El apelante, en su inconformidad, sostiene que el cálculo de las prestaciones sociales debió realizarse sobre la base de un salario superior, apoyando su pretensión en una prueba documental aportada por la propia demandada, consistente en una liquidación final de prestaciones sociales (pdf 09, folio 14). Dicha prueba documental, elaborada y presentada por la accionada, cuenta con su membrete y estructura formal, por lo que satisface las exigencias de autenticidad propias de los documentos emanados de una parte dentro del proceso. Adicionalmente, en el escrito de contestación de la demanda, la Clínica Vascular Navarra S.A. reconoció expresamente la existencia de una obligación pendiente de pago por la suma de $10.316.705, cifra que coincide con el valor reflejado en la liquidación obrante en el expediente.

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, resulta imprescindible precisar que la sentencia de primera instancia no se apartó de la legalidad ni incurrió en yerro alguno al establecer el salario base de liquidación en $2.800.000, por cuanto dicho monto corresponde al único expresamente invocado en la demanda. Si bien la prueba documental aportada por la accionada sugiere la existencia de un salario superior, la consideración de este último para efectos de modificar la base de liquidación de las acreencias prestacionales habría requerido el ejercicio de las facultades ultra petita o extra petita, prerrogativas de naturaleza excepcional que no constituyen una obligación para el juez, sino una facultad que debe ser ejercida con sujeción a las circunstancias del caso concreto. En tal sentido, si bien el operador judicial pudo, dentro de su margen decisorio, haber considerado el salario consignado en la liquidación final aportada por la demandada, la omisión de este aspecto no constituye un defecto que vicie la validez de la sentencia, en tanto que el fallo se ajustó estrictamente a los límites impuestos por las pretensiones formuladas en la demanda.

En conclusión, la Sala constata que la decisión adoptada en primera instancia se encuentra debidamente fundamentada, al haber tomado como referencia el salario pactado contractualmente, corroborado con prueba documental fehaciente y sin exceder el marco delimitado por las pretensiones de la demanda. Si bien la prueba documental aportada por la demandada permite advertir que en determinados periodos la accionante percibió una remuneración superior como consecuencia de recargos nocturnos y trabajo suplementario, su utilización para efectos de incrementar la base salarial de liquidación de prestaciones resultaría improcedente, en tanto que ello desbordaría el ámbito de debate jurídico planteado en la Litis. En consecuencia, al no advertirse yerros sustanciales en la determinación del salario base tomado como referencia, no se configura un defecto que amerite la modificación del fallo de primera instancia.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, al no encontrar errores en la valoración de la prueba ni en la determinación del salario base para la liquidación de prestaciones. La decisión del juez de primera instancia se considera ajustada a derecho, basada en evidencia válida y en el análisis adecuado de las pretensiones y documentos aportados al proceso.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandante, se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

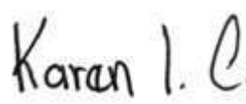
RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR en todo la Sentencia proferida el día 21 de febrero del 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

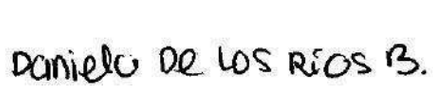
SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte **DEMANDANTE PAULA ROCIO MORENO MUÑOZ** y en favor de la demandada.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

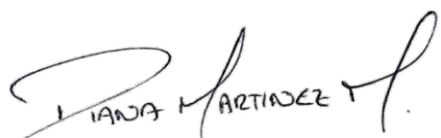
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 074.



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente



DANIELA DE LOS RÍOS BARRERA
Magistrada



DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada, se fija como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo mensual legal vigente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	NÉSTOR ALEXANDER ULLOA SALGADO
Parte demandada	IGLESIA CRISTIANA CARISMÁTICA TABERNÁCULO DE FE
Radicación	11001310504020210019801
Fecha de la decisión	25 de enero de 2024
Motivo	APELACION
Tema	CONTRATO REALIDAD – DESPIDO INJUSTO
Acta de Discusión	049
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310504020210019800

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere sentencia en forma escrita y procede a resolver la apelación presentada por la parte demandante y demandada contra la sentencia proferida el día 25 de enero de 2024 por el Juzgado Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES

El señor Néstor Alexander Ulloa Salgado, presentó, por intermedio de apoderado, demanda ordinaria laboral contra la Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe, pretendiendo que se declare que entre ellos existió una relación laboral desde marzo de 1999 hasta noviembre de 2020. Además, que se reconozca el incumplimiento de la iglesia en el pago de prestaciones sociales, seguridad social y vacaciones durante el periodo comprendido entre marzo de 1999 y diciembre de 2008, y que se declare que su despido fue sin justa causa.

En consecuencia, solicitó la condena de la demandada al pago de las prestaciones laborales a las cuales tiene derecho, la indexación de estas, y el cálculo actuarial para las cotizaciones de pensión. Así como también se condenará a la demandada al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por no haber pagado las prestaciones sociales adeudadas durante el periodo comprendido entre marzo de 1999 y diciembre de 2008, y por no haber realizado la consignación oportuna de las cesantías correspondientes al mismo periodo.

Sustentó sus pedimentos, afirmando que trabajó como cantante para la iglesia desde marzo de 1999 bajo un contrato verbal y, a partir de diciembre de 2008, su relación laboral se formalizó mediante un contrato escrito (Fls. 6-8 pdf 04), asumiendo además la dirección de la escuela de música de la iglesia. Sin embargo, según indicó, su empleador no cumplió con sus obligaciones laborales en relación con el pago de prestaciones y seguridad social durante el periodo inicial de la relación verbal.

Posteriormente, adujo, que, en noviembre de 2020, la iglesia decidió terminar su contrato de trabajo, debido a la falta de condiciones propicias y el impacto financiero causado por la pandemia de COVID-19 Fls. 13-14 pdf 04), lo cual el demandante cuestionó, alegando mala fe por parte del empleador.

Por ello, planteó que el despido fue injustificado, ya que las razones esgrimidas por la iglesia no fueron válidas, dado que las funciones del demandante en la institución continuaban siendo necesarias.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, con Auto del 22 de octubre de 2021, inadmitió la demanda presentada por el actor (pdf 08), misma que después de subsanada, fue admitida con providencia del 14 de febrero de 2022, por la cual también se corrió traslado de la misma a la demandada (pdf 11). Posteriormente, con Auto de 02 de mayo de 2023, tuvo por contestada la demanda (pdf 19).

1.3. CONTESTACIÓN DEMANDA

IGLESIA CRISTIANA CARISMÁTICA TABERNÁCULO DE LA FE

En la contestación de la demanda, la Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe, propuso las excepciones de *prescripción*, *inexistencia de las obligaciones* que se pretenden deducir en juicio, *cobro de lo no debido, buena fe* de la Iglesia, *mala fe del demandante, falta de causa, y pago*.

Argumentó que las pretensiones del demandante estaban prescritas, ya que los derechos reclamados supuestamente se causaron entre marzo de 1999 y diciembre de 2008. Además, sostuvo que no existió una relación laboral entre las partes durante ese período, razón por la cual no había lugar a las obligaciones deprecadas. En cuanto al vínculo laboral posterior, sostuvo que el único contrato de trabajo entre las partes fue desde el 2 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2020, y que, durante dicho período, la Iglesia cumplió en debida forma con todas sus obligaciones laborales, incluyendo el pago de cesantías, aportes a seguridad social y demás prestaciones.

Asimismo, la Iglesia argumentó que la terminación del contrato de trabajo no se debió a una decisión unilateral, sino a la desaparición de la causa que le dio origen, lo cual ocurrió por ministerio de la ley, conforme al artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Por tanto, consideró improcedente el pago de indemnización por despido sin justa causa.

Frente a los hechos, negó que entre marzo de 1999 y diciembre de 2008 hubiera existido un vínculo laboral, afirmando que durante ese período el demandante no prestó servicios laborales ni recibió remuneración. También rechazó que hubiera habido una relación de subordinación o cualquier obligación de pago de prestaciones sociales, argumentando que cualquier servicio prestado por él durante ese tiempo, fue estrictamente voluntario y motivado por convicciones religiosas, sin que existiera un contrato de trabajo formal.

La demandada afirmó que el único vínculo laboral comenzó el 2 de diciembre de 2008, cuando el demandante fue contratado como director de la Escuela de Música, y que dicho vínculo terminó el 30 de noviembre de 2020 debido a la desaparición de la causa del contrato. También negó que el demandante hubiera desempeñado otros cargos además del de director de la Escuela de Música.

Basó su defensa en los artículos 23 y 47 del Código Sustantivo del Trabajo, destacando que no se cumplieron los elementos esenciales de una relación laboral antes de diciembre de 2008, como la subordinación, la prestación personal de servicios y el pago de un salario.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (Audiencia 30 primera instancia)

En sentencia de 25 de enero de 2024, el Juez Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, decidió negar las pretensiones del demandante en relación con el periodo comprendido entre marzo de 1999 y el primero de diciembre de 2008, al considerar que no se acreditó la existencia de una relación laboral durante ese tiempo. Por otro lado, reconoció la existencia de una relación laboral entre el demandante y la Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe desde el 2 de diciembre de 2008 hasta el 30 de noviembre de 2020. Además, concluyó que la terminación del contrato en 2020 fue sin justa causa, por lo cual condenó a la demandada al pago de la indemnización solicitada, y las costas del proceso por parte de la Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe.

El *A Quo,* llegó a esta conclusión tras analizar, en primer lugar, los testimonios presentados, incluyendo los interrogatorios de las partes. Tuvo en cuenta que, aun cuando se probó la prestación personal del servicio por parte del demandante entre el periodo 1999 y 2008, no se logró acreditar los otros elementos esenciales de una relación laboral, como la subordinación y el salario, para ello, se basó en las declaraciones de testigos y la falta de pruebas contundentes que demostraran una remuneración consistente y una subordinación efectiva durante ese periodo, pues el único documento presentado por el demandante para probar un salario durante el periodo en cuestión fue un comprobante de egreso que mencionaba una ayuda de transporte.

El Juez desestimó la mayoría de los testimonios presentados por la parte demandante para probar la relación laboral antes de 2008, dado que los consideró de oídas o que no proporcionaban evidencia directa.

En cuanto al periodo comprendido entre diciembre de 2008 y noviembre de 2020, al ser aceptado por la parte demandada la existencia de una relación laboral, el Juez encontró que la terminación del contrato de trabajo no se ajustaba a las causales de justa causa establecidas por la ley. Aunque la demandada haya argumentado que la causa de la terminación fue la desaparición de la materia del trabajo, debido a factores como la pandemia de COVID-19, en ese sentido, el Juez de conocimiento no consideró esta razón como válida para exonerar a la demandada de pagar la indemnización correspondiente.

Finalmente concluyó, que el contrato de trabajo suscrito no especificaba claramente las funciones del demandante, lo que debilitaba la justificación de la demandada para la terminación del contrato.

1.5. RECURSO DE APELACIÓN

DEMANDANTE

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada del demandante interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia, el demandante expresó su desacuerdo parcial con la sentencia emitida, específicamente en los numerales primero y cuarto, donde se negó la existencia de una relación laboral entre marzo de 1999 y el 1º de diciembre de 2008.

La queja principal del apelante radicó en que, a lo largo del proceso, se logró demostrar la prestación personal del servicio en ese periodo, bajo un vínculo continuo que se extendió por más de 20 años, con una remuneración periódica que, aunque inicialmente denominada como ayuda de transporte, evidenciaba la existencia de un salario.

La parte apelante argumentó que, a pesar de la terminología utilizada por la Iglesia para describir las labores del demandante, lo relevante era la naturaleza continua, fija y prolongada del servicio prestado. Sostuvo que los elementos de una relación laboral, como la subordinación y la remuneración, estaban probados, y que, por tanto, correspondía reconocer las prestaciones laborales pertinentes.

Además, destacó que la supervisión y las órdenes recibidas por parte de los líderes de la Iglesia reforzaban la existencia de subordinación. La parte actora, en consecuencia, deprecó la revocatoria de los numerales primero y cuarto de la sentencia y que se reconociera la existencia de una relación laboral entre marzo de 1999 y diciembre de 2008, con todas las prestaciones correspondientes.

DEMANDADA

La apoderada de la parte demandada, no conforme con la decisión adoptada por el Juzgado, interpuso recurso de apelación, manifestando que se encuentra igualmente parcialmente en desacuerdo con la Sentencia, específicamente en lo que respecta a la condena por indemnización por despido sin justa causa, así como las costas y

agencias en derecho. La demandada argumentó que la decisión del Juez no fue congruente con las pruebas aportadas y practicadas en el proceso.

Enfatizó que el vínculo laboral del demandante con la Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe inició el 2 de diciembre de 2008 y estuvo ligado a la creación de la escuela de música, lo cual quedó demostrado tanto por la certificación laboral como por el testimonio del propio demandante y otros testigos.

Según su apelación, expuso que el único motivo para dar inicio a la relación laboral fue la existencia de dicha escuela, y cuando esta dejó de ser viable por factores como la falta de matriculados, el fin del patrocinio y la imposibilidad de mantener la escuela económicamente, el contrato de trabajo terminó de manera justificada.

La demandada argumentó que, contrariamente a lo que concluyó la Sentencia, la terminación del contrato se dio por la desaparición de la causa que originó el vínculo laboral, lo cual está contemplado en el numeral segundo del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. En este sentido, sostuvo que no debía procederse al pago de una indemnización por despido sin justa causa, ya que el contrato finalizó por una causa justificada. Por lo tanto, también consideró improcedente la condena al pago de las costas y agencias en derecho.

Finalmente, solicitó que revocara la sentencia de primera instancia en lo que respecta a las condenas impuestas y que, en todo lo demás que no fue objeto de condena, se confirmara la decisión del juez de primera instancia.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, y la Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de Fe, dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, con auto de 16 de abril de 2024 (Folio 04 segunda instancia)

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

DEMANDADA (archivo 05 segunda instancia)

Mediante correo electrónico del 23 de abril de 2024, a través de su apoderado, la demandada solicitó que se revocara parcialmente la sentencia de primera instancia, específicamente en lo que respecta a la condena por indemnización por despido sin justa causa, así como a las costas y agencias en derecho. La apoderada de la iglesia argumentó que el contrato de trabajo del demandante, Néstor Alexander Ulloa, que inició el 2 de diciembre de 2008, no terminó sin justa causa, sino por la desaparición de las causas que le dieron origen, conforme al numeral 2 del artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo.

Sostuvo que el juez de primera instancia no valoró adecuadamente las pruebas documentales y testimoniales que demostraban que el demandante fue contratado

específicamente como director de la Escuela de Música, y que la terminación del contrato fue consecuencia de la inviabilidad del proyecto de la escuela, la falta de alumnos y la imposibilidad de mantener la escuela económicamente. Por tanto, según la demandada, el contrato finalizó por ministerio de la ley, y no había lugar al pago de indemnización.

Asimismo, la iglesia se opuso a la apelación presentada por la parte demandante, defendiendo la decisión del juez de primera instancia de declarar la inexistencia de un vínculo laboral entre marzo de 1999 y diciembre de 2008. Argumentó que, durante ese periodo, el demandante participaba en actividades de la iglesia como voluntario, sin recibir remuneración ni estar sujeto a subordinación, lo cual fue corroborado por testimonios y el interrogatorio del representante legal de la iglesia. Por lo tanto, solicitó que se mantuviera la absolución de las pretensiones del demandante para ese periodo.

DEMANDANTE (archivo 06 segunda instancia)

En los alegatos presentados mediante correo del 24 de abril de 2024, por la parte demandante, solicitó al Tribunal Superior de Bogotá que revocara parcialmente la sentencia de primera instancia, específicamente en lo que respecta a los numerales primero y cuarto, en los cuales se declaró la inexistencia de un vínculo laboral entre marzo de 1999 y el 1 de diciembre de 2008.

Argumentó que, durante ese periodo, se acreditaron los elementos esenciales de una relación laboral, como la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración.

El demandante afirmó que, durante ese tiempo, desempeñó labores de dirección del grupo de alabanza, recibiendo órdenes y supervisión por parte de los líderes de la iglesia, lo que evidenciaba la subordinación. Además, señaló que existían pagos periódicos realizados por el empleador, lo cual no sería propio de un trabajo voluntario.

Por tanto, solicitó que se reconociera la relación laboral desde marzo de 1999 y se condenara a la demandada al pago de las prestaciones sociales correspondientes, incluyendo auxilio de cesantías, intereses, prima de servicios, y vacaciones no pagadas, así como las sanciones moratorias.

Asimismo, la parte demandante defendió la condena por despido sin justa causa en relación con el periodo posterior a diciembre de 2008, argumentando que la disminución de la rentabilidad de la escuela de música no justificaba la terminación del contrato sin el pago de la indemnización correspondiente. Se insistió en que la desaparición de la causa y materia del trabajo no exoneraba al empleador de su obligación de indemnizar al trabajador.

Finalmente, se solicitó que el Tribunal revocara los apartados de la sentencia que declaraban la inexistencia del vínculo laboral y se condenara a la demandada al pago de todas las prestaciones reclamadas desde marzo de 1999.

2.2. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por las partes.

2.3. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante y demandada, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿se encuentra acreditada la relación laboral entre las partes durante el periodo comprendido entre marzo de 1999 y diciembre de 2008?, ¿Se ajusta a derecho la decisión de primera instancia de imponer condena por concepto de despido injustificado y la condena en costa a la parte demandada? y por último, si ¿resulta procedente la condena en costas impuesta a la partes vencida?

2.4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO Y CASO CONCRETO

DEL CONTRATO REALIDAD

De acuerdo a la queja realizada por la parte demandante, en cuanto a la absolución de la declaración de la relación laboral suscitada entre este y la demandada, durante el periodo de marzo de 1999 y diciembre de 2008, es importante memorar las condiciones y exigencias que se deben cumplir para que se acredite la existencia de un contrato laboral.

Es así, que resulta menester acotar que el artículo 22 del C.S.T. define el contrato de trabajo como aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra, persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. A su vez, el artículo 23 *ejusdem* determina los elementos del contrato de trabajo, ellos son la actividad personal, la continuada subordinación o cumplimiento de órdenes, y un salario como retribución del servicio.

Reunidos los citados elementos, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, tal como estipula el artículo 24 del C.S.T. al esbozar la presunción legal de que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.

Por ello la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha determinado que, al promotor del proceso le incumbe acreditar la prestación del servicio, para que se active la presunción de la citada norma, evento en el cual le corresponde al eventual empleador desvirtuarla, y en ese caso asumir la carga probatoria que le asiste, ello según sentencias SL1389-2020, SL1390 de 2020, SL2240-2022, SL2186-2022, SL2189-2022, entre otras.

En efecto, en sentencia SL1439-2021, Radicación No. 72624 del 14 de abril de 2021, en lo que atañe al elemento subordinante determinó como pilar fundamental de dicho elemento lo siguiente:

*"**1.1. La subordinación: clave de bóveda en la determinación de una relación de trabajo subordinada***

*"Bien tiene sentado la Corte que la subordinación es el elemento diferenciador entre una relación laboral y una civil o comercial (SL2885-2019). En efecto, tanto en contratos comerciales como en laborales, **pueden estar presentes la prestación personal del servicio y la remuneración, por tanto, la dependencia es el factor que marca la diferencia entre uno y otro**.*

"La subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, «faculta a éste [sic] para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato».

"La doctrina ha subrayado que la subordinación es la causa del contrato de trabajo, pues el empleador busca a través de este reservarse la facultad de dirigir y controlar la fuerza laboral, conforme sea necesario para el logro de sus objetivos empresariales. La jurisprudencia de esta Sala ha resaltado también como causa del contrato de trabajo la facultad del empleador de disponer de la capacidad de trabajo según sus necesidades organizativas. Por ejemplo, en la sentencia CSJ SL4479-2020 la Corte refirió:

"No debe olvidarse que una de las razones principales por las que los empleadores vinculan trabajadores a su servicio es para reservarse el derecho de controlar y dirigir la labor de sus empleados.

*"A diferencia de otros contratos no laborales en los que el objeto es un **resultado - entrega de un bien o un servicio- y, por tanto, se procura fijar las condiciones para el logro de esa meta**, en el contrato de trabajo **el empleador procura ejercer un control sobre la actividad del trabajador o sobre su comportamiento, para adecuarlo al logro de sus fines empresariales**. Por este motivo, la ley lo autoriza para dirigir, vigilar y sancionar su conducta, mientras que, en los ordenamientos civiles o comerciales, la ley faculta a las partes con acciones o penalidades encaminadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual. (Subrayado y negrita de la Sala)*

De esta manera, es claro que, en realidad, lo que logra configurar la relación laboral, es el elemento de la subordinación cuando se descubra la existencia de la prestación personal de un servicio, elemento que debe ser desvirtuado por la parte demandada, correspondiéndole a esta demostrar que aquel no se configuró. Ello en virtud de lo contemplado en el artículo 24 del CST y lo decantado por nuestro Órgano Supremo de Cierre, que en tratándose de la existencia o no de una relación laboral, en Sentencia SL3070 de 2023 del 16 de agosto de 2023, ha señalado:

"En este punto es oportuno destacar que a partir de la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, la Corte ha consolidado un criterio sólido respecto a que uno de los indicios fundamentales para determinar la existencia de una verdadera relación laboral, es precisamente «la integración del trabajador en la organización de la empresa» (CSJ SL 4479-2020, CSJ SL5042-2020, CSJ SL1439-2021 y CSJ SL3345-2021), lo que sumado a otros indicios como el cumplimiento de horario, que se requiera disponibilidad del trabajador, que la labor implique el

suministro de herramientas, materiales o maquinarias por parte de la persona que la requiere, que tenga cierta continuidad, entre otros, puede revelar claramente la existencia de un verdadero contrato de trabajo."

Ahora bien, como dentro del caso de marras, nos encontramos frente a una labor realizada en favor de una comunidad religiosa, por parte del actor, resulta menester traer a colación lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia frente a la aplicación de la normatividad laboral dentro de este tipo de congregaciones en Sentencia SL2610 de 2020, con ponencia del Doctor GERARDO BOTERO ZULUAGA, así:

"(…) por el solo hecho de acreditarse su ejecución en forma personal de esa labor en estas instituciones de educación de la convocada al proceso, ***no es suficiente para inferir que aquella relación estaba amparada por la presunción consagrada en el artículo 24 del CST, por cuanto su vinculación con la comunidad religiosa a la cual pertenecía y de la que era miembro, sin lugar a dudas tuvo como origen un carácter netamente espiritual, a los cuales accedió de manera voluntaria****, y las labores como docente se evidencia estaba intrínsecamente ligada y hace parte de su vocación y compromiso religioso con la comunidad, más no a un móvil económico que es el propio del canon 22 de nuestro estatuto laboral, siendo relevante hacer notar que el elemento de retribución al que alude este precepto legal, tampoco aparece pactado o cancelado (…)*

"pues no de otra manera se puede explicar que en los más de veinte años en los que desarrolló esas labores, no haya percibido una remuneración salarial (o al menos no se acreditó) (…)." (Subraya y negrita por fuera)

Con todo lo anterior, y descendiendo al caso bajo estudio, para la Sala, no es materia de discusión entre las partes que el actor prestó sus servicios personales mediante un contrato laboral suscrito entre diciembre de 2008 y noviembre de 2020 con la demandada Iglesia Cristiana Carismática Tabernáculo de la Fe. No obstante, frente a la relación laboral deprecada por el actor entre marzo de 1999 y diciembre de 2008 no puede concluirse lo mismo, pues es a lo que se circunscribe el debate.

En ese sentido, al analizar las pruebas obrantes en el plenario, se logra colegir del propio dicho del demandante en su interrogatorio, que este ingresó inicialmente como voluntario, sirviendo y preparando a personas para la alabanza, que anteriormente también lo hizo en otras iglesias; que luego fue requerido por el Pastor y representante de la iglesia demandada, para participar allí y continuar con las actividades de dirección del grupo de alabanza, sin que se haya podido demostrar con su dicho, ni con las pruebas allegadas, algún tipo de remuneración realizada por la llamada a juicio, máxime cuando se cuenta con el testimonio del señor ALFONSO RESTREPO VEGA, quien fungió como pastor de la congregación aquí demandada y conoció al demandante en la iglesia y manifestó que ambos entraron como voluntarios, sin necesidad de recibir remuneración alguna por la labor que se realizaba para la comunidad religiosa y que ambos servían a la Iglesia en el grupo musical de manera voluntaria y por vocación, al igual que otras personas de la comunidad, durante el periodo comprendido entre el año 1999 y el 2008.

Menos puede llegarse a la conclusión de la remuneración deprecada, con el solo comprobante de egreso allegado por el actor (fol. 5 pdf 04 primera instancia), cuando en el mismo se describe como concepto de *"ayuda transportes"* por un único valor de $200.000 pesos.

Por otro lado, al analizar el único testimonio traído por el demandante, la señora OLGA RODRIGUEZ PULIDO, quien afirmó ser la esposa del hermano del demandante, se extrae inicialmente, que para el periodo laboral aquí controvertido, la testigo no tuvo conocimiento directo de ello, pues como expresó en su dicho, ella conocía sobre las labores realizadas por el actor en dicho momento, porque él le contaba; sin embargo, resulta importante la afirmación realizada por la compareciente, al exponer que una de las actividades del señor Ulloa, era la compra y venta de vehículos automotores e instrumentos musicales, lo que realizaba entre semana. Esto resulta *prima facie* que su labor económica principal era la venta de esos bienes, y no, como lo pretender hacer ver ahora, las de director del grupo de alabanza, pues estas, al ser voluntarias nada impide que, mientras desarrollan su vocación ministerial, pudiera tener una actividad económica lucrativa para obtener su sustento y el de su familia, tal y como lo expuso la testigo.

Por ello, para esta Sala, resulta acertado afirmar, como lo hizo el a quo, que la labor desarrollada por el actor en el periodo comprendido entre 1999 y 2008 fue voluntaria, pues así lo confesó el mismo en su interrogatorio de parte y ello fue confirmado con la declaración del testigo allegado por la parte demandada, señor Alfonso Restrepo, quien expuso que las labores de las personas que llegaban a la iglesia, así como él mismo lo hizo, las realizaban de manera voluntaria, por vocación y sin esperar retribución alguna, al servicio de la comunidad religiosa a la que pertenecían, en tal sentido, y al compartir el razonamiento de nuestro órgano de cierre, en este caso específico, la presunción que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no resulta aplicable.

Asimismo, y sin realizar mayores elucubraciones respecto al elemento de subordinación, tampoco se reviste demostrado en este escenario, pues de las pruebas allegadas al plenario, no se logra colegir este requisito, al contrario, si se pudo ver desvirtuado por la demandada con el acervo probatorio, en especial con el testimonio del pastor antes referido, quien, al compartir los mismos escenarios dentro de la iglesia con el actor, expuso que este no tenía la obligación de participar pues todo era voluntario.

Por lo expuesto, esta Corporación confirmará la decisión del *A Quo*, en cuanto a no haberse suscitado una relación laboral entre el señor NÉSTOR ALEXANDER ULLOA SALGADO y la IGLESIA CRISTIANA CARISMÁTICA TABERNÁCULO DE FE durante el periodo comprendido entre marzo de 1999 y diciembre de 2008.

DEL DESPIDO INJUSTIFICADO

La parte demandada, repuso que la terminación del contrato de trabajo comprendido entre el año 2008 y 2020 obedeció a una causal objetiva, pues la escuela de música por la que había sido contratado el actor, no continuó con su funcionamiento, debido

a la falta de demanda de estos servicios por los miembros de la iglesia, causal que justifica en el numeral 2 del artículo 47 del CST pues que establece lo siguiente:

> *"ARTICULO 47. DURACIÓN INDEFINIDA.:*
> *(...)*
> *20) El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, para que el {empleador} lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 80., numeral 70. <del Decreto 2351 de 1965, 64 de este Código>, para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir."*

En ese sentido, y al analizar el caso de marras, el Tribunal pasa a revisar las pruebas obrantes en el proceso con ánimo de establecer la aplicación que trata el articulo antedicho, iniciando con el contrato de trabajo suscrito entre el señor Ulloa y la Iglesia, con ánimo de verificar las razones y causas que dieron origen a su labor (fols. 6 – 8 pdf 04 primera instancia), de donde se extrae, que brilla por su ausencia la mención del cargo u oficio que este desempeñaría, tampoco se logra dar cuenta esta Sala que dentro del objeto del mismo se hayan delimitado las labores o funciones que desempeñaría como director de la Escuela de Música de la Iglesia, por lo que de este documento no puede concluirse que la causa que dio origen a su vinculación fuere la creación e inicio de la mentada escuela;

Más adelante, se encuentra un otro sí al contrato, suscrito entre las partes el 01 de octubre de 2009 (fol. 3 pdf 14 primera instancia), donde, en su cláusula tercera se estableció que *"El contratista desarrollará como actividad principal, desarrollar la Escuela de Música del Tabernáculo de la Fe",* de donde se deduce sin objeciones, que sus funciones dentro de la Iglesia, no eran exclusivamente la de ser el director de la Escuela, pues esta, como se lee literalmente, era la actividad principal y no única. Por tanto, con este documento, tampoco es posible declarar lo exigido por la demandada, en cuanto al origen de las labores del demandante.

Por su parte, al revisar la certificación expedida por la demandada (fol. 14 pdf 14), se evidencia que el cargo desempeñado por el actor, era el de *Director Escuela de Música,* sin embargo; tal prueba, para la Sala, no podría ser valorada para concluir que su contratación inicial fue exclusivamente para dicho fin, pues la misma se expidió el mismo día en que fue despedido el trabajador, dejando duda respecto a su veracidad, en tanto la demandada conocía de su oposición al despido, antes de emitir tal constancia (fol. 10 pdf 14), más cuando el señor Ulloa escribió en aquella que se reservaba el derecho de reclamar.

Empero, se extrae de los formularios de afiliación a SaludCoop y al ISS (fols. 4-6 pdf 14), que el trabajador consignó en estos que el cargo u ocupación a desempeñar era la de director de música, lo que deja por sentado que el contrato surgió con ocasión a tal cargo, lo mismo sucede, y resulta más importante para esta Sala, con lo consignado en el hecho 7 de la demanda, donde el actor, por medio de su apoderado,

confesó que se desempeñó, a partir del 2 de diciembre de 2008 como director de la escuela de música de la iglesia.

Ahora bien, con los testimonios de la parte demanda, rendidos por los señores ALFONSO RESTREPO VEGA y JAVIER ALFREDO ORTÍZ, donde ambos lograron establecer que la causa por la cual el señor demandante dejó de prestar sus labores a la iglesia, fue porque la escuela de música ya no tenía financiación a raíz de la pandemia generada por el virus COVID-19, y porque, además, no había alumnos que participaran en tal escuela.

Por ello, concluye la Sala, que la terminación del contrato del señor NESTOR ALEXANDER ULLOA tuvo vigencia hasta el 30 de noviembre de 2020, teniendo en cuenta que las causas que dieron origen a su contratación, esto es la creación de la escuela de música, no perduraron después de la mentada data, puesto que la escuela de música dejó de funcionar, sin embargo, es importante mencionar en este punto, que el artículo 47 del CST, al darse aplicación e interpretación literal, no se desprende de este, que se excluya al empleador de indemnizar al trabajador, pues esta no se encuentra enmarcada en las justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo por parte del empleador, según el artículo 62 del CST en su literal b., por lo que, al no estar involucrada como causa justificada, resulta imperante aplicar el artículo 64 *ibidem,* en cuanto a la indemnización deprecada por el demandante, precepto considerado por la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia SL 2525-2023 del 11 de septiembre de 2023.[1]

Es así, que en cuanto a la decisión del *A Quo*, de haber declarado el despido injustificado, también ello se confirmará.

COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA

Como la apoderada de la parte demandada presentó recurso de apelación, además, frente a la condena en costas impuestas por el *A Quo,* es preciso memorar lo que emana del artículo 365 del Código General del Proceso, así:

> *"ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:*
>
> *1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. (…)*

En ese sentido, y tal como se pudo concluir, la parte vencida en el presente pleito, fue la demandada IGLESIA CRISTIANA CARISMÁTICA TABERNÁCULO DE FE, por tanto, la condena, se encuentra ajustada a derecho.

2.5. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

[1] "No le asiste razón alguna a la impugnante en los planteamientos que esboza en el cargo, pues, aunque ciertamente el artículo 47 del CST establece que al desaparecer las causas que dieron origen a la contratación y la materia del trabajo, el contrato puede terminarse legalmente por parte del empleador, también lo es que prevé el pago de la respectiva indemnización, consagrada en el artículo 64 ibidem. Y ello es así, pues sabido es que las justas causas de terminación de la relación contractual laboral están contempladas de manera taxativa en el artículo 62 del CST"

Sin costas en esta instancia teniendo en cuenta que no prosperó recurso alguno presentado por las partes en contienda.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,** Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMA la Sentencia proferida el día 25 de enero de 2024 por el Juzgado Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO. SIN LUGAR A IMPONER COSTAS en esta instancia teniendo en cuenta que no prosperó recurso alguno presentado por las partes en contienda.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 049.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada Ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada -

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MYRIAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Parte demandada	COLPENSIONES
Radicación	11001310504420230025401
Fecha de la decisión	29 DE JULIO DE 2024
Motivo	CONSULTA
Tema	PENSION DE VEJEZ
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	**11001310504420230025401**
No. de Acta	050

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 29 de julio de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

1.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La señora MYRIAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ, quien actúa a través de apoderado, presentó demanda contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral, el reconocimiento y pago de una pensión de vejez, basándose en su afiliación al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993, a partir del 01 de septiembre de 2007, pagando los intereses moratorios y las indexación de los valores obtenidos.

La demandante expuso que nació el 1 de septiembre de 1952; que tiene 70 años de edad (fol. 20), además que acreditó más de 958 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral, superando el mínimo exigido de 500 semanas para acceder a la prestación deprecada; de igual manera, refirió que comenzó a cotizar desde el 2 de abril de 1973 (fols. 22-27). Afirmó que, a lo largo de su carrera, tuvo varios empleos

tanto en el sector privado como en el público, incluyendo su vinculación con la Secretaría de Educación de Bogotá como docente en 1993 (fols. 58-62).

Por otro lado, refirió que, en 2004, le fue reconocida una pensión de invalidez por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) (fols. 64-66), razón por lo que, Colpensiones mediante resolución SUB312089 del 11 de noviembre de 2022 (fols. 32-36) le negó la pensión de vejez que fue solicitada en julio de 2022 (fols. 28-30), argumentando que dicha prestación no era compatible con la pensión de invalidez previamente reconocida por el FOMAG, según lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Tras apelar esta decisión (fols. 42-46), Colpensiones confirmó la negativa en enero de 2023 con Resolución DPE664 (48-56)

En sus fundamentos, pronunció la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 758 de 1990 y el Acto Legislativo 01 de 2005, destacando que la demandante cumplía con los requisitos de edad y semanas cotizadas, lo que le otorgaba el derecho a una pensión de vejez bajo el régimen de prima media anterior a la ley 100 de 1993. Además, argumentó que la prohibición constitucional de doble asignación del tesoro público no aplicaba en este caso, ya que los fondos de pensiones del Seguro Social y del FOMAG provienen de aportes de empleadores y trabajadores, no del erario público.

1.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, luego de inadmitir la demanda (pdf 03) y haberse subsanado esta, la admitió y corrió traslado a Colpensiones mediante auto de 11 de enero de 2024 (pdf 04), luego, con providencia del 15 de julio de 2024 (pdf 12), tuvo por contestada la demandad por COLPENSIONES.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 09)

Colpensiones, respondió la demanda, oponiéndose a todas las pretensiones, proponiendo las excepciones de mérito que describió como *la inexistencia del derecho reclamado*, *cobro de lo no debido, buena fe, no configuración de intereses moratorios ni indexación, prescripción, compensación, imposibilidad de condenar en costar, y la genérica;* argumentó que la demandante, no cumplía con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, debido a la incompatibilidad entre la pensión de invalidez que le fue otorgada por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la pensión de vejez solicitada. Se citó el artículo 2.2.4.5.6 del Decreto 1833 de 2016, que establece la incompatibilidad entre pensiones de invalidez y de vejez. Adicionalmente, mencionó que los beneficios del régimen de transición, al cual la demandante se acoge, finalizaron el 31 de julio de 2010, y solo podrían extenderse hasta el 2014 si la demandante hubiera cotizado 750 semanas antes del 25 de julio de 2005, lo cual no fue el caso.

En relación con los hechos, Colpensiones no negó ninguno de ellos, y los aceptó en su totalidad, basándose en el expediente administrativo de la demandante. Sin embargo, la entidad insistió en que, aun cuando los hechos eran ciertos, estos no le otorgaban a la demandante el derecho reclamado debido a la incompatibilidad de prestaciones.

En sus fundamentos, hizo referencia a jurisprudencia relevante, incluyendo sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que confirman la improcedencia de conceder una pensión de vejez cuando ya se ha otorgado una pensión de invalidez por el FOMAG, insistió en que no había base legal para el reconocimiento concurrente de ambas prestaciones.

Finalmente, Colpensiones solicitó que se absolviera a la entidad de las pretensiones de la demanda, que no se condenara en costas.

1.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 15 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, la operadora judicial a cargo del Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, en Sentencia del 29 de julio de 2024, decidió reconocer el derecho de la demandante, MIRIAM RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, a recibir una pensión de vejez a partir del 1 de septiembre de 2007, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, por catorce mensualidades al año. Se declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, limitando el retroactivo pensional a las mesadas causadas desde el 28 de julio de 2019, y rechazó las demás excepciones propuestas por Colpensiones. Además, condenó a la entidad demandada a pagar los intereses moratorios a partir del 28 de noviembre de 2022 sobre las mesadas adeudadas.

Par arribar a dicha decisión La jueza recordó que, conforme a la Ley 100 de 1993 y el artículo 279, las prestaciones a cargo del FOMAG y del Sistema General de Pensiones pueden coexistir cuando se trata de servicios prestados tanto en el sector público como en el privado. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que no existe incompatibilidad entre una pensión de invalidez por parte del FOMAG y una pensión de vejez financiada con aportes de empleadores privados.

Por su parte, revisó el acervo probatorio, tales como el registro civil de la demandante, la solicitud de pensión, las resoluciones administrativas de Colpensiones que negaron la pensión de vejez, la resolución que le reconoció la pensión de invalidez en 2004, y la historia laboral que demostró las cotizaciones realizadas a Colpensiones desde 1973 hasta el 2000, sin superposición con las cotizaciones al FOMAG.

La jueza también concluyó que la demandante también era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, señalando que la demandante cumplía con los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, según el Acuerdo 049 de 1990, por lo que la pensión solicitada era procedente y compatible con la pensión de invalidez, sin que existiera conflicto con lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución.

Finalmente, ordenó a Colpensiones reconocer el retroactivo pensional desde el 28 de julio de 2019 y pagar los intereses moratorios por las mesadas adeudadas desde esa fecha, así como cubrir las costas procesales del caso.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, por así disponerlo el artículo 69 del C.P.L. y S.S., modificado por el art. 14 de la Ley 1149 de 2007.

2.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión (pdf 03), en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022, las partes se pronunciaron así.

DEMANDANTE (PDF 04)

En los alegatos presentados por la parte demandante, el apoderado reiteró que, a su mandante, le asistía el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, conforme a lo establecido en las leyes aplicables a su caso, destacando que la demandante cuenta con más de 70 años de edad y prestó sus servicios como docente para la Secretaría de Educación de Bogotá desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 22 de marzo de 2004 de manera ininterrumpida.

Señaló que el habérsele reconocido una pensión de invalidez por parte del Magisterio, ello no impide que tenga derecho a una pensión de vejez bajo el régimen de transición. En este sentido, indicó que la demandante acreditó cotizaciones tanto en el sector público como en el privado, lo cual le permite cumplir con los requisitos para acceder a una pensión de vejez en el ISS, hoy Colpensiones, sin que ello genere incompatibilidad con las prestaciones económicas que ya recibe. Asimismo, el apoderado mencionó que, para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, Myriam Rodríguez tenía más de 35 años de edad, contaba con 41 años, y había cotizado más de 750 semanas al momento de la entrada en vigor del Acto Legislativo 001 de 2005, por lo que continuaba con el beneficio del régimen de transición.

Recordó que la actora cumplió 55 años el 1 de septiembre de 2007, fecha en la cual ya contaba con 563 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años, cumpliendo así con los requisitos de edad y semanas exigidos para acceder a la pensión de vejez. Finalmente, el apoderado solicitó que se accediera a todas las pretensiones de la demanda, argumentando que su representada ha cumplido con todos los requisitos legales para obtener el reconocimiento de su pensión de vejez, sin que exista ninguna incompatibilidad con la pensión de invalidez que ya disfruta.

COLPENSIONES (pdf 06 segunda instancia)

De los alegatos presentados por Colpensiones, la Sala avizora que los mismos no corresponden a la Litis de este proceso, pues los mismos, a pesar de que en su encabezado y referencia enuncia el radicado de este proceso y las partes del mismo, se refieren a un proceso de traslado de régimen, lo cual no se discute. Por tanto, estos no se tendrán en cuenta.

III. CONSIDERACIONES

Le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Es ajustada a derecho la decisión adoptada por el A Quo al aceptar la compatibilidad de la pensión de vejez y jubilación, y en consecuencia reconocer la pensión pretendida, bajo el régimen de transición de la ley 100 de 1993; así como la condena al retroactivo pensional y los intereses moratorios a favor del demandante?

3.1. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

HECHOS NO DISCUTIDOS (carpeta primera instancia)

Tal como se puede avizorar con la contestación de la demanda realizada por Colpensiones y lo que obra en el expediente, no es objeto de discusión, la edad de la demandante (fol. 20); el reconocimiento a la actora de una pensión de invalidez por parte del Magisterio (fols. 64-66); la reclamación administrativa realizada a Colpensiones el 28 de julio de 2022 (fols. 28-30); tampoco las resoluciones que negaron la pensión de vejez (fols. 32-36, 48-56); ni las semanas de cotización obtenidas por la convocante (22-27).

DE LA COMPATIBILIDAD DE LA PENSIÓN DE VEJEZ DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES CON LAS PRESTACIONES DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO

Inicialmente, es menester recordar, que el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptúa de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social, regulado por esta ley, a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, permitiendo a sus afiliados la compatibilidad de sus prestaciones con otras pensiones o remuneraciones, estableciendo además que dicho fondo será el responsable de la expedición y pago de los bonos pensionales en favor de los educadores que se retiren del servicio, así:

> *"ARTÍCULO 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos*

pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida." (Subraya por fuera)

Del mismo modo el artículo 31 del Decreto 692 de 1994[1] consagra la posibilidad de que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que adicionalmente presten sus servicios al sector privado, tienen derecho a que sus aportes a pensión sean realizados a cualquier otro fondo y como consecuencia del cumplimiento de los requisitos en el régimen administrado por COLPENSIONES o los fondos privados, accedan a las prestaciones que cada régimen contemple, sin que ello se encuentre restringido, postura que fue definida desde vieja data por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia No. 40818 de diciembre de 2011, M.P. CAMILO TARQUINO GALLEGO.

En suma, se precisa en nuestro caso que los dineros con los cuales la actora realizó cotizaciones al I.S.S. en su época y a Colpensiones, no provenían del tesoro público, pues eran aportes de trabajos en entidades privadas, contrario a los dineros con que se financia la pensión de jubilación legal reconocida por el Magisterio; y así lo entendió la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral en Sentencia CSJ SL3775-2021:

"(…) al compás de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, a la demandante le resultaba válido prestar sus servicios a establecimientos educativos oficiales y, por virtud de ello, adquirir una pensión de jubilación oficial y, al mismo tiempo, prestar sus servicios a instituciones privadas y financiar una posible pensión de vejez en el Instituto de Seguros Sociales (…) precepto reglamentario que sólo puede ser interpretado en su sentido natural y obvio, es decir, que los docentes oficiales vinculados a la entidad que maneja las pensiones de ese sector, si paralelamente laboran para una persona jurídica o natural de carácter privado, pueden afiliarse a una administradora de pensiones, cotizar a la misma, con el subsecuente efecto de que, al cumplimiento de las exigencias previstas en su régimen, accederán a las prestaciones propias del mismo."

Por su parte, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003[2] estableció que el régimen prestacional del magisterio se mantendría para los docentes vinculados antes de su vigencia, permitiéndoles continuar bajo las disposiciones anteriores. Así, los docentes podían realizar aportes tanto al ISS como a administradoras privadas, financiando una pensión de vejez.

---

[1] POSIBILIDAD DE ACUMULAR COTIZACIONES EN EL CASO DE PROFESORES. Las personas actualmente afiliadas o que se deban afiliar en el futuro, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley 91 de 1989, que adicionalmente reciban remuneraciones del sector privado, tendrán derecho a que la totalidad de los aportes y sus descuentos para pensiones se administren en el mencionado fondo, o en cualquiera de las administradoras de los regímenes de prima media o de ahorro individual con solidaridad, mediante el diligenciamiento del formulario de vinculación. En este caso, le son aplicables al afiliado la totalidad de condiciones vigentes en el régimen seleccionado.

[2] "ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres."

Descendiendo al presente caso, se tiene que el demandante, empezó a construir su historia laboral en el año 1973, trabajando con entidades privadas, las cuales realizaron cotizaciones a seguridad social ante el entonces Instituto de Seguros Sociales I.S.S. y a Colpensiones, realizando cotizaciones como independiente hasta el enero de 2000 (fols. 22-27 pdf 01 primera instancia). En ese orden de ideas, pese a que el demandante cuenta con una pensión de invalidez reconocida por el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO con Resolución 02773 del 22 de junio de 2004 (fols. 64 – 73 pdf 01), ello no es impedimento, para que, como se viene decantando, pueda acceder a la pretensión pensional solicitada, esto es, la pensión de vejez, pues claramente, estas dos prestaciones resultan compatibles.

DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y PENSIÓN DE VEJEZ

El artículo 36 de la ley 100 de 1993, trae consigo el régimen de transición que establece lo siguiente:

> *"ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.*
> *La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley."*

Por su parte, el parágrafo 4 del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2005, limitó la aplicación del mentado régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, así:

> *"(…) Parágrafo transitorio 4. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014 (…)*"

De esta manera, al verificar la cedula de ciudadanía de la actora (fol. 20 pdf 01), se logra constatar que nació el 01 de septiembre de 1952, por lo que, para el primero de abril de 1994, fecha en la que entró a regir el sistema que trata la ley 100 de 1993, la demandante contaba con 41 años de edad, en ese sentido, sería beneficiaria del régimen de transición que se señaló antes, por contar con más de 35 años de edad para dicha data, por lo que, en uso de dicho derecho, tendría la expectativa de ser pensionada con la normatividad anterior, esto es, el decreto 758 de 1990[3], mismo que,

[3] Artículo 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se

refiere que para acceder a la pensión de vejez, se requiere cumplir 55 años de edad y 500 semanas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o mil semanas en cualquier tiempo.

En el caso de marras, la actora, cumplió 55 años de edad para el 01 de septiembre de 2007, fecha para la cual contaba con el cumplimiento de 500 semanas durante los veinte años anteriores de la edad mínima, teniendo en cuenta la historia laboral obrante (fols. 22-27). De este modo, resulta preciso concluir que a la demandante le asiste el derecho a recibir la pensión que trata el decreto 758 de 1990, pues como se puede avizorar no lo perdió, ello teniendo en cuenta que al límite que trata el precitado acto legislativo, ya había cumplido con los requisitos para obtener su mesada pensional, que igualmente, por lo antes concluido, será de 14 catorce mesadas anuales, teniendo en cuenta que una vez realizada la liquidación correspondiente, esta corresponde a un Salario Mínimo, ello a partir del 01 de septiembre de 2007, fecha en la cual cumplió los requisitos exigidos por la norma aplicable, con retroactividad desde dicha fecha, como lo concluyó la *A Quo.*

Sin embargo, se encuentra llamada a prosperar la excepción de prescripción solicitada por la demandada, de manera parcial, ello teniendo en cuenta que la reclamación administrativa solo fue hasta el 28 de julio de 2022 (fols. 28-30 pdf 01), misma que fue resuelta mediante Resoluciones SUB 312089 del 11 de noviembre de 2022, que negó el derecho a la demandante, y DPE 664 del 17 de enero de 2023, que confirmó la anterior. (fols. 32-36, 48-56), por ello, solo se deberá reconocerse el pago de las mesadas causadas durante los 3 años anteriores al 28 de julio de 2022, y la demanda fue presentada el 18 de mayo de 2023 interrumpiendo el termino prescriptivo; todo ello de conformidad con los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo, y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y S.S.

DEL RETROACTIVO PENSIONAL

Si bien el Juzgador de instancia condenó al pago del retroactivo pensional a la demandante MYRIAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ, omitió haber realizado su cálculo, por tanto, la Sala modificará el numeral Tercero de la Sentencia, para adicionar el valor de dicho retroactivo, así:

---

es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

Tabla Retroactivo Pensional					
Fecha inicial	**Fecha final**	**Incremento %**	**Valor mesada calculada**	**N°. Mesadas**	**Subtotal**
01/01/07	31/12/07	4,48%	$ 433.700,00	0,00	$ 0,0
01/01/08	31/12/08	5,69%	$ 461.500,00	0,00	$ 0,0
01/01/09	31/12/09	7,67%	$ 496.900,00	0,00	$ 0,0
01/01/10	31/12/10	2,00%	$ 515.000,00	0,00	$ 0,0
01/01/11	31/12/11	3,17%	$ 535.600,00	0,00	$ 0,0
01/01/12	31/12/12	3,73%	$ 566.700,00	0,00	$ 0,0
01/01/13	31/12/13	2,44%	$ 589.500,00	0,00	$ 0,0
01/01/14	31/12/14	1,94%	$ 616.000,00	0,00	$ 0,0
01/01/15	31/12/15	3,66%	$ 644.350,00	0,00	$ 0,0
01/01/16	31/12/16	6,77%	$ 689.455,00	0,00	$ 0,0
01/01/17	31/12/17	5,75%	$ 737.717,00	0,00	$ 0,0
01/01/18	31/12/18	4,09%	$ 781.242,00	0,00	$ 0,0
01/07/19	31/12/19	3,18%	$ 828.116,00	7,00	$ 5.796.812,0
01/01/20	31/12/20	3,80%	$ 877.803,00	14,00	$ 12.289.242,0
01/01/21	31/12/21	1,61%	$ 908.526,00	14,00	$ 12.719.364,0
01/01/22	31/12/22	5,62%	$ 1.000.000,00	14,00	$ 14.000.000,0
01/01/23	31/12/23	13,12%	$ 1.160.000,00	14,00	$ 16.240.000,0
01/01/24	31/12/24	9,28%	$ 1.300.000,00	14,00	$ 18.200.000,0
01/01/25	**31/01/25**	5,20%	$ 1.423.500,00	1,00	$ 1.423.500,0
Total retroactivo				**$ 80.668.918,00**	

En ese sentido, el valor del retroactivo pensional para la demandante MYRIAM RODRIGUEZ RODRIGUEZ, desde el 01 de julio de 2019, teniendo en cuenta que la mesada del mes de julio se paga en agosto de 2019, por ello, el reclamo se realizó dentro del término anterior; liquidado hasta el 31 de enero de 2025, en 14 mesadas, será de **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($80.668.918),** y los valores que resulten hasta que se produzca su pago.

INTERESES MORATORIOS

Definido lo anterior, se procede a estudiar lo concerniente a los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que dispone:

> *ARTÍCULO 141. INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago.*

Estos intereses se refieren expresamente a la procedencia de una consecuencia económica por el pago inoportuno de mesadas pensiónales, teniendo en cuenta para ello que las administradoras cuentan con un término de cuatro (04) meses para decidir lo referente al reconocimiento de las pensiones, tal y como se dispuso en el artículo 19 del Decreto 656 de 1994, al señalar que *«[…] El Gobierno Nacional*

establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y sobrevivencia, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses[…]»

Es de advertir que esta procede siempre y cuando haya retardo en el pago de las mesadas, independientemente de la buena o mala fe en la conducta del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional, en tanto cuentan con un carácter resarcitorio, encaminado a aminorar los efectos adversos que producen al acreedor por la mora del deudor en el cumplimiento de una obligación.

Conforme a lo expuesto y a lo allegado en el acervo probatorio, esta Sala observa que la solicitud elevada por la demandante se efectuó el 28 de julio de 2022 ante Colpensiones, tal como lo aceptó la demandada en su contestación, la mora se debería contar a partir de los 4 meses siguientes a esta, esto es a partir del 28 de noviembre de 2022.

Por ello, encuentra esta Sala que la parte demandante teniendo cumplidos los requisitos, solicitó el reconocimiento de la pensión pretendida, por tanto, no hay lugar a la negativa de la institución argumentando la incompatibilidad de la pensión que ya disponía la actora, con la pensión ante ellos pretendida, cuando el *A Quo* y esta Sala encuentra que no existió ninguna incompatibilidad toda vez que la actora gozaba de unos derechos adquiridos.

En mérito de lo expuesto, para la Sala no queda sino confirmar la decisión de instancia, que reconoció la pensión de vejez de la demandante y condeno a Colpensiones al pago del retroactivo pensional y los intereses moratorios.

EXCEPCIONES DE MÉRITO PROPUESTAS POR COLPENSIONES

La demandada COLPENSIONES, al contestar el escrito inaugural, propuso además las excepciones de fondo que denominó *la inexistencia del derecho reclamado*, *cobro de lo no debido, buena fe, no configuración de intereses moratorios ni indexación, prescripción, compensación, imposibilidad de condenar en costar, y la genérica*, sin que ninguna de ellas alcance prosperidad porque con ellas se buscaba enervar las pretensiones elevadas por la parte activa de la Litis y ello, como ya se analizó, no ocurrió.

En lo que respecta a la excepción de *prescripción*, de conformidad con lo estatuido en los artículos 488 y 489 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la S.S., como se expresó, se debe declarar respecto a las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de julio de 2019.

3.2. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Sin lugar a condenar en costar por haberse surtido el grado jurisdiccional de consulta.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ,** Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **TERCERO** de la Sentencia proferida el día 29 de julio de 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá. Por las razones vertidas en el presente proveído. Mismos que quedará así:

> "***TERCERO: CONDENAR*** *a la* ***ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES*** *a pagar a la señora MYRIAM RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ identificada con CC 41.568.501 el retroactivo pensional correspondiente a las mesadas pensionales causadas a partir del 28 de julio de 2019, por efectos prescriptivos, y hasta el 31 de enero de 2024, por 14 mesadas pensionales al año, por valor de* **OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($80.668.918)** *y los valores que resulten hasta que se produzca hasta la inclusión en nómina, por las razones expuestas."*

SEGUNDO: sin lugar a **CONDENAR** en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 050.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

.

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	YOMAR RODRÍGUEZ BLANCO
Parte demandada	COLPENSIONES, PORVENIR, SKANDIA
Radicación	11001 31 05 044 2023 00561 01
Fecha de la decisión	12 DE AGOSTO DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN
Tema	INEFICACIA
Acta de Discusión	070
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310504420230056l-01

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en razón de la sentencia proferida el día 12 de agosto del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 01 primera instancia)

La señora Yomar Rodríguez Blanco, a través de su apoderada, presentó demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, Porvenir S.A. y Skandia S.A., solicitando la nulidad de su traslado del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual (RAIS). Pretende que se declare la ineficacia de dicho traslado y su afiliación al RAIS, argumentando que fue engañada por los asesores de las AFP demandadas, quienes le aseguraron que el Instituto de Seguros Sociales desaparecería y que obtendría mejores rendimientos en el RAIS. Pide que se ordene su traslado al Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones, con todos los valores correspondientes a cotizaciones, bonos y sumas adicionales.

Los hechos que sustentan las pretensiones refieren que la demandante, desde el 1 de enero del 2000, fue afiliada a Porvenir y posteriormente a Skandia, sin haber recibido una adecuada asesoría sobre las implicaciones de su afiliación. Se afirma que no fue informada de las desventajas del RAIS, ni de las ventajas del Régimen de Prima Media, y que se le ocultó su derecho de retracto. Además, sostiene que no se le

entregó un plan de pensiones y que las AFP no realizaron la simulación pensional correspondiente. La proyección en el Régimen de Prima Media le habría permitido obtener una mesada mucho mayor que en el RAIS.

Jurídicamente, la demandante invoca el derecho fundamental a la seguridad social consagrado en la Constitución, así como el derecho a la libre escogencia del régimen pensional establecido en la Ley 100 de 1993. Alega que su consentimiento fue viciado por error inducido por los asesores de las AFP, quienes no brindaron la información completa, clara y veraz sobre los regímenes pensionales. Por tanto, solicita que se declare la ineficacia del traslado y que se ordene su afiliación al Régimen de Prima Media sin solución de continuidad.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 07 de julio del 2023 (pdf 06), luego, con providencia del 22 de febrero del 2024 (pdf 20), tuvo por contestada la demanda por LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A., SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y ordenó la notificación a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. (pdf 15)

Skandia, en su contestación a la demanda presentada por Yomar Rodríguez Blanco, se opuso a todas las pretensiones formuladas, argumentando que la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue realizada de manera libre y voluntaria, cumpliendo con la normativa vigente. La entidad afirma haber cumplido con su deber de información mediante asesorías suficientes y oportunas, las cuales incluyeron la firma de los formularios de afiliación en dos ocasiones, el 10 de junio de 2011 y el 2 de agosto de 2013. Además, Skandia refuta cualquier tipo de engaño o persuasión indebida hacia la demandante, destacando que las diferencias entre el Régimen de Prima Media y el RAIS son características propias del sistema que le fueron explicadas debidamente a la afiliada. Skandia sostiene que la proyección de la pensión en el RAIS depende del capital acumulado y los rendimientos, por lo que estas estimaciones no constituyen derechos adquiridos.

Skandia presenta diversas excepciones de mérito. La primera es la inexistencia de la obligación, señalando que no hay justificación legal para declarar la nulidad del traslado ni el reintegro de las cotizaciones al Régimen de Prima Media. La segunda excepción es el cobro de lo no debido, dado que las sumas reclamadas por la demandante carecen de fundamento, ya que fueron administradas conforme a la ley. En tercer lugar, Skandia plantea el cumplimiento del deber de información, argumentando que se le brindó a la demandante toda la asesoría necesaria para

tomar una decisión informada sobre su traslado al RAIS, tanto de manera verbal como escrita.

Finalmente, Skandia defiende la legalidad de la afiliación, destacando que el proceso de afiliación de la demandante cumplió con todos los requisitos normativos aplicables y que se realizó sin ningún tipo de coacción. Asimismo, invoca la prohibición de traslado, en virtud del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que prohíbe a los afiliados regresar al Régimen de Prima Media si se encuentran a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. Skandia sostiene que, en el caso de la demandante, quien se afilió al RAIS a los 47 años, dicha prohibición es plenamente aplicable, lo que imposibilita su retorno al Régimen de Prima Media.

I.3.2. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 13)

Colpensiones, en su contestación a la demanda presentada por Yomar Rodríguez Blanco, se opone a todas las pretensiones formuladas, argumentando que no existe fundamento para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). La entidad afirma que la demandante nunca estuvo afiliada al Régimen de Prima Media (RPM), por lo que no es predicable la ineficacia de un traslado, dado que su afiliación fue inicial al RAIS. Colpensiones sostiene que la demandante actuó de manera libre y voluntaria al escoger el régimen en el que deseaba permanecer, y que la legislación vigente no permite el retorno al RPM para aquellos que no cumplan con los requisitos específicos señalados por la ley. Además, destaca que no existe evidencia de que la afiliación al RAIS haya sido realizada bajo error o vicio en el consentimiento.

Colpensiones propone varias excepciones, entre las que destaca la afiliación inicial al RAIS, señalando que, al tratarse de una primera afiliación, no se puede aplicar el concepto de ineficacia del traslado. También menciona la prohibición de traslado, dado que la demandante, al momento de presentar su petición de ineficacia, ya se encontraba dentro de la prohibición legal de trasladarse de régimen por tener más de 10 años para cumplir la edad de pensión. Además, Colpensiones resalta la ausencia de vicios del consentimiento, argumentando que no existen pruebas de que la demandante haya sido inducida en error por los asesores de las AFP, ni se demostró que haya habido engaño o falta de información que pueda invalidar la afiliación.

Finalmente, Colpensiones recalca que, conforme a la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, no es posible declarar la ineficacia de una afiliación inicial, ya que no existía un régimen anterior al cual la demandante hubiera pertenecido. Además, la entidad subraya que permitir el traslado de la demandante al RPM implicaría una descapitalización del Sistema General de Pensiones, afectando su sostenibilidad y generando un precedente contrario a los principios de equidad y eficiencia que rigen el sistema pensional en Colombia.

I.3.3. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. (pdf 16)

Porvenir, en su contestación a la demanda presentada por Yomar Rodríguez Blanco, se opone a todas las pretensiones formuladas, argumentando que la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue realizada de manera libre, voluntaria y conforme a la normativa vigente. La entidad asegura que se cumplió con el deber de información en cada uno de los traslados efectuados por la demandante entre diferentes fondos, y que se explicó con claridad las características del régimen al cual la actora se estaba afiliando, incluyendo los beneficios y las modalidades de pensión. Asimismo, Porvenir niega cualquier vicio en el consentimiento y asegura que la demandante conocía las implicaciones de su afiliación al RAIS, habiendo recibido asesoría adecuada en múltiples oportunidades, como lo demuestran los formularios de afiliación firmados.

Porvenir también propone diversas excepciones. Entre ellas destaca la inexistencia de vicios en el consentimiento, señalando que la demandante suscribió los formularios de afiliación de manera libre e informada, y que no existió error, fuerza o dolo en su decisión de trasladarse al RAIS. Además, Porvenir invoca la prohibición de traslado, argumentando que, conforme a la Ley 797 de 2003, la demandante no puede regresar al Régimen de Prima Media debido a que ya cuenta con menos de 10 años para cumplir la edad de pensión. Igualmente, refuta la solicitud de traslados de los aportes hacia Colpensiones, señalando que el acto de vinculación es válido y legal, y que no existen causales para declarar la nulidad de la afiliación.

Finalmente, Porvenir resalta la buena fe en sus actuaciones, argumentando que se cumplió con todas las obligaciones normativas, facilitando toda la información requerida y manteniendo canales de atención abiertos para cualquier consulta de la demandante. La entidad subraya que, de declararse la ineficacia del traslado al RAIS, se deben aplicar las restituciones mutuas en los términos de la legislación vigente, para evitar un enriquecimiento sin justa causa por parte de la demandante o de Colpensiones.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 26 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 12 de agosto de 2024, decidió absolver a las entidades demandadas, Colpensiones, Porvenir S.A. y Skandia S.A., de todas las pretensiones incoadas por la demandante Yomar Rodríguez Blanco. Esta decisión se fundamentó en el análisis detallado de los hechos expuestos y las pruebas presentadas por las partes, particularmente en lo relacionado con la naturaleza de la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). El juzgador determinó que, al no haber existido un traslado efectivo desde el Régimen de Prima Media (RPM) hacia el RAIS, la figura de ineficacia del traslado, invocada por la demandante, no resulta aplicable en este caso concreto.

La sentencia se sustentó en la premisa de que la demandante nunca estuvo afiliada al Régimen de Prima Media administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) o Colpensiones. De acuerdo con los documentos obrantes en el expediente, la afiliación inicial de la señora Rodríguez Blanco se realizó directamente al RAIS, con fecha de

efectividad del 24 de enero de 2000, en la AFP Porvenir. Este hecho desvirtúa el argumento de la demandante respecto de un traslado mal informado entre regímenes pensionales, ya que no se acreditó la existencia de una afiliación previa al RPM que pudiera haber sido objeto de un traslado susceptible de ser declarado ineficaz bajo los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional.

Asimismo, el operador judicial resaltó que la figura de la ineficacia del traslado ha sido desarrollada con el fin de proteger a los afiliados que, por falta de información adecuada, se trasladaron del RPM al RAIS, afectando negativamente sus derechos pensionales. Dicha figura tiene como objetivo restituir al afiliado al régimen al que pertenecía antes del traslado, corrigiendo así los efectos perjudiciales sobre su expectativa de pensión. No obstante, en el caso de la señora Rodríguez Blanco, al no haberse configurado un traslado, sino una afiliación inicial al RAIS, el juzgador consideró improcedente aplicar los mecanismos de protección previstos para los casos de traslado indebido.

En virtud de lo anterior, el Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá resolvió confirmar la validez de la afiliación inicial de la demandante al RAIS y denegar las pretensiones que buscaban declarar la ineficacia del traslado. Se recordaron, además, las limitaciones legales para el retorno al RPM establecidas por el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y su modificación por la Ley 797 de 2003, señalando que la demandante, para la fecha de la solicitud de retorno, ya se encontraba dentro del término prohibido de diez años antes de la edad de pensión, lo que imposibilita su traslado al RPM.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE (min 00:16:25 video 26)

La apoderada de la demandante, interpuso un recurso de apelación, cuestionando la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá, el 12 de agosto de 2024, en la cual se absolvieron a Colpensiones, Porvenir S.A., y Skandia S.A. de todas las pretensiones formuladas. En su apelación, la apoderada argumentó que la señora Yomar Rodríguez Blanco no recibió la asesoría adecuada por parte de las AFP involucradas, incumpliendo así las obligaciones impuestas por la normativa vigente, específicamente en cuanto a la información sobre las características, riesgos y beneficios de los regímenes pensionales, y las implicaciones de afiliarse al RAIS.

La recurrente señala que, en ningún momento, los asesores de Porvenir y Skandia explicaron a su poderdante las modalidades de pensión disponibles, ni las ventajas y desventajas entre el Régimen de Ahorro Individual y el Régimen de Prima Media. Tampoco se le informó sobre los bonos pensionales, la posibilidad de retracto o los requisitos para obtener una pensión. La falta de una proyección pensional y la omisión en la información sobre los efectos que tendría su afiliación en su expectativa pensional son, según la apelante, claras violaciones del deber de información consagrado en la Ley 100 de 1993 y desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia.

Asimismo, la apelación recalca que la ineficacia del traslado no debe ser condicionada a la existencia de cotizaciones en el Régimen de Prima Media, ya que el derecho a recibir información clara, suficiente y precisa es independiente de la existencia de un traslado efectivo entre regímenes. Argumenta que las AFP incumplieron su deber de asesoramiento integral, lo que conlleva a que la afiliación inicial de la demandante al RAIS sea nula por falta de cumplimiento de los requisitos legales que rigen dicho proceso, en particular, la omisión de información sobre las consecuencias económicas y sociales de optar por un régimen determinado.

Finalmente, la apoderada solicita que, en virtud de la falta de información y asesoría adecuada por parte de las AFP, se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda. La apelante sostiene que la ausencia de una adecuada orientación técnica privó a la señora Rodríguez Blanco de la posibilidad de tomar una decisión informada, lo que justifica la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación y el reconocimiento de su derecho a ser trasladada al Régimen de Prima Media.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandante, el despacho de conocimiento, con auto de 16 de septiembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la única que se pronunció al respecto fue la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

II.1.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

En los alegatos de conclusión presentados por la apoderada de Colpensiones, se solicita que se absuelva a la entidad de todas las pretensiones formuladas por la demandante. Se argumenta que Colpensiones ha actuado conforme a la ley, respetando los principios constitucionales, particularmente el de la buena fe establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. La apoderada resalta que Colpensiones no tuvo ninguna participación en el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), ya que la demandante nunca estuvo afiliada al Régimen de Prima Media (RPM), por lo que no existe ningún fundamento para que la entidad deba asumir responsabilidad en este caso.

En cuanto a la prohibición legal para el traslado, se recuerda que la demandante no podía regresar al Régimen de Prima Media por estar inmersa en la prohibición contenida en la Ley 797 de 2003, que impide el traslado de régimen a aquellos afiliados que se encuentren a menos de 10 años de cumplir la edad de pensión. En el

momento de presentar la demanda, la demandante ya contaba con más de 67 años, lo que claramente impedía cualquier traslado a Colpensiones, dado que dicho movimiento afectaría la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Finalmente, se señala que una eventual declaración de ineficacia del traslado podría generar una descapitalización del sistema, lo cual desfinanciaría el Régimen de Prima Media y pondría en peligro la sostenibilidad del sistema pensional y el derecho a la pensión de otros afiliados. En caso de que se decidiera la responsabilidad de Colpensiones en este caso, la apoderada solicita que se condicione el cumplimiento de la sentencia a la devolución de los recursos por parte de las AFP involucradas

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandante, le corresponde a esta Sala de Decisión desatar el siguiente problema jurídico: ¿Debe declararse la ineficacia de la afiliación inicial de la señora Yomar Rodríguez Blanco al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) ante la presunta falta de información y asesoría adecuada por parte de las AFP demandadas, a pesar de no haberse producido un traslado desde el Régimen de Prima Media?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

Sobre la Procedencia de la Ineficacia del Traslado en el Caso de Yomar Rodríguez Blanco

En el presente caso, la señora Yomar Rodríguez Blanco plantea la ineficacia de su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), argumentando una presunta omisión por parte de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en su deber de información, según lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 y las posteriores modificaciones y desarrollos jurisprudenciales. La demandante sustenta que, al no haber recibido una adecuada asesoría, se viciaron los actos que permitieron su vinculación al RAIS, lo cual conllevaría la nulidad de dicha afiliación, conforme a los parámetros establecidos en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, tales como la SL31989 de 2008 y la SU-107 de 2024.

Sin embargo, la situación particular de la señora Rodríguez Blanco presenta matices que impiden la aplicación directa de la figura de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, tal como ha sido desarrollada por la jurisprudencia. Un análisis minucioso de los antecedentes del caso revela que la demandante no fue trasladada desde el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS) o su sucesora, Colpensiones, al RAIS, sino que su afiliación fue directamente al régimen de ahorro individual. Esta circunstancia resulta determinante, pues la ineficacia del traslado, como ha sido estructurada

normativamente y doctrinalmente, presupone la existencia de un cambio efectivo entre regímenes, y no una afiliación inicial.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara al establecer que el deber de información debe ser exhaustivo, preciso y continuo, y que su omisión puede llevar a la declaratoria de ineficacia del traslado, en aquellos casos en que el afiliado se haya movido de un régimen a otro sin haber recibido una explicación clara y suficiente de las implicaciones de dicha decisión. No obstante, en el caso sub judice, al no haberse configurado un traslado, sino una afiliación directa al RAIS, los fundamentos de dicha doctrina no encuentran un terreno fértil para su aplicación. De esta forma, la relación jurídica que se pretende invalidar carece del elemento necesario del traslado, sin el cual no es factible recurrir a la figura de ineficacia.

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que la ineficacia del traslado solo es aplicable cuando ha existido un cambio efectivo entre regímenes, descartando su procedencia en casos de afiliación inicial al sistema. Así lo afirmó en la sentencia SL1806 de 2022, reiterada en la SL4059 de 2022, en los siguientes términos:

> *"…Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que lo que puede invalidarse es el acto de traslado entre regímenes, no la selección inicial, y menos cuando no existe acto previo de afiliación al sistema pensional. De esa forma, no puede aceptarse que la violación del deber de informar afecta directamente la validez del acto jurídico de vinculación al sistema, pues no existe, antes de ese acto ninguna expectativa, aún simple, de consolidar un derecho…")*

De acuerdo con este criterio, la ineficacia del traslado no puede aplicarse en el presente caso, dado que la demandante no estuvo afiliada previamente al Régimen de Prima Media y su vinculación al RAIS se configuró como una afiliación inicial, no como un traslado susceptible de ser revisado bajo esta figura.

Si bien la demandante podría argumentar que la falta de información incidió negativamente en su decisión inicial de afiliarse al RAIS, no existe un soporte jurídico que habilite la reversión de dicha afiliación bajo la figura de ineficacia, toda vez que el marco normativo y la interpretación jurisprudencial de dicha figura se han limitado exclusivamente a aquellos casos en los que efectivamente se produce un traslado entre el RPM y el RAIS o viceversa. Al no haber transitado previamente por el régimen administrado por el ISS o Colpensiones, la demandante no puede alegar que sus derechos en el RPM fueron vulnerados o comprometidos por un traslado mal informado, puesto que nunca estuvo afiliada a dicho régimen.

En ese sentido, los precedentes emitidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, aunque protectores de los derechos de los afiliados, no pueden ser entendidos como mecanismos para corregir decisiones iniciales de afiliación, cuando no existe evidencia de un cambio entre regímenes que haya comprometido la estabilidad pensional del afiliado.

En consecuencia, la ineficacia del traslado no es aplicable en el presente caso, dado que no se configura el presupuesto esencial de un traslado efectivo desde el Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). La demandante no se encontraba dentro de los parámetros que la jurisprudencia ha delimitado para activar la protección que otorga esta figura, pues su afiliación al sistema pensional se realizó directamente en el RAIS, sin una vinculación previa al RPM que pudiera haber sido objeto de un traslado susceptible de ser revisado bajo esta institución jurídica.

Por lo tanto, cualquier pretensión de invalidar la afiliación inicial al RAIS bajo la figura de ineficacia del traslado no tiene fundamento en el marco normativo y jurisprudencial vigente. En este caso, la ausencia de una afiliación previa al RPM imposibilita la restitución al mismo, y con ello, la aplicación de los principios que han orientado los fallos de las altas cortes en materia de traslados mal informados. Lo que queda en evidencia, entonces, es la improcedencia de la pretensión de la demandante en lo que concierne a la reversión de su afiliación.

En conclusión, se confirmará la sentencia de primera instancia en los términos que ya se discutieron, toda vez que los elementos expuestos en el presente caso no permiten la aplicación de la figura pretendida. Es importante recordar que la finalidad de dicha figura es restablecer el estado inicial en que se encontraba el afiliado antes de que su derecho pensional resultara afectado negativamente por un traslado entre regímenes sin la debida información y asesoría. Sin embargo, en el caso de la señora Yomar Rodríguez Blanco, no se configura tal situación. Por tanto, no se observa que el derecho pensional de la demandante haya sido perjudicado en los términos que justificarían la aplicación de la ineficacia del traslado.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la no prosperidad del recurso presentado por la parte demandante, se condenará en costas de segunda instancia.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia proferida el día 12 de agosto de 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Cuatro Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la parte **DEMANDANTE YOMAR RODRÍGUEZ BLANCO** en favor de la parte demandada.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS,** conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 070.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente y en favor de la demandada, se fija como agencias en derecho la suma de medio salario mínimo mensual legal vigente dividido para cada demandado. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	MARIBEL DEL ROSARIO BARRAZA OSORIO
Parte demandada	COLPENSIONES - PORVENIR Y COLFONDOS
Radicación	11001310504620230032501
Fecha de la decisión	07 DE OCTUBRE DEL 2024
Motivo	RECURSO DE APELACIÓN Y CONSULTA
Tema	INEFICACIA DE TRASLADO
Acta de Discusión	063
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310504620230032501

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes demandadas, así como también se estudiará el grado de consulta en favor de Colpensiones, en razón de la sentencia proferida el día 07 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 02 primera instancia)

La señora Maribel del Rosario Barraza Osorio, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.721.822 y domiciliada en Barranquilla, Atlántico, actuando mediante su apoderada, presentó demanda ordinaria laboral contra las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías COLFONDOS S.A., PORVENIR S.A., y la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, para resolver las controversias surgidas en relación con su afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).

La parte demandante solicita, entre otros aspectos, declarar la ineficacia de su vinculación al Régimen de Ahorro Individual administrado por COLFONDOS y la validez de su afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por COLPENSIONES. Pide condenar a COLFONDOS y PORVENIR a transferir los aportes acumulados y rendimientos al RPM, que COLPENSIONES reciba la solicitud de traslado, y que se actualice su historia laboral. Además, solicita

que las demandadas sean condenadas a costas procesales y a cumplir el fallo en un plazo no mayor a 30 días.

En sus fundamentos fácticos, la actora afirma que su afiliación al RAIS se realizó sin recibir información adecuada, suficiente ni oportuna sobre las características y consecuencias de los regímenes pensionales. Argumenta que su consentimiento estuvo viciado por la omisión de asesoría por parte de COLFONDOS y PORVENIR, así como por la presión ejercida en el momento de los traslados de régimen. Sostiene que estos traslados se realizaron sin un comparativo pensional adecuado, vulnerando su derecho a una decisión informada.

Desde un punto de vista jurídico, invoca el incumplimiento del deber de información y asesoría establecido en normas como el artículo 11 del Decreto 692 de 1994 y el artículo 97 de la Ley 100 de 1993. Además, menciona el artículo 48 de la Constitución Política, que protege el derecho a la seguridad social, y diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que enfatizan la obligación de las administradoras de pensiones de garantizar la asesoría integral en las decisiones de sus afiliados. Con base en ello, sostiene que los traslados de régimen carecen de validez jurídica y que debe restablecerse su afiliación al RPM.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 25 de julio del 2023 (pdf 08), luego, con providencias del 17 de septiembre de 2023 y del 19 de enero del 2024 (pdf 15 y 19), tuvo por contestada la demanda por COLPENSIONES, COLFONDOS S.A. y PORVENIR S.A., y fijó fecha para la celebración de audiencia de que trata el artículo 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES (PDF 10)

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, representada por su apoderado Jhon Ferney Patiño Hernández, solicitó al juzgado absolverla de todas las pretensiones formuladas en la demanda y condenar en costas a la parte demandante. Argumenta que las actuaciones realizadas se ajustaron plenamente a la normativa vigente y que no existe fundamento para las reclamaciones presentadas. COLPENSIONES destaca que los traslados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fueron realizados por la demandante de manera voluntaria, libre y consciente, respaldados por la firma de formularios bajo juramento, reflejando su aceptación explícita de las condiciones del régimen.

En su defensa, la demandada presentó varias excepciones, entre ellas la inexistencia del derecho, al considerar que no se configuraron vicios en el proceso de afiliación; la prescripción extintiva, dado el tiempo transcurrido desde los hechos cuestionados; la excepción de buena fe, basada en que las administradoras de pensiones actuaron

conforme a derecho; aplicación del precedente SL 373 del 2021; el error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento; presunción de legalidad de los actos administrativos y la excepción de cobro de lo no debido, ya que no existen elementos para ordenar el traslado de recursos acumulados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Además, COLPENSIONES subraya que la demandante permaneció más de dos décadas en el RAIS sin cuestionar su afiliación, lo cual ratifica la validez de su voluntad inicial.

Desde el ámbito jurídico, la contestación resalta que el deber de asesoría e información fue cumplido conforme a las normas aplicables al momento de los traslados, incluyendo el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. También señala que la carga de la prueba recae sobre la demandante para demostrar que hubo error o insuficiencia en la información suministrada. COLPENSIONES cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional para reforzar su posición, enfatizando que no se configuran las causales de nulidad ni ineficacia alegadas en el libelo introductorio.

I.3.2. COLFONDOS S.A. (pdf 12)

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, representada por su apoderada Jeimmy Carolina Buitrago Peralta, respondió a la demanda formulada por Maribel del Rosario Barraza Osorio en el marco de un proceso ordinario laboral. En su contestación, solicitó la absolución de todas las pretensiones de la demandante y la imposición de costas, fundamentando que sus actuaciones se ajustaron al marco legal vigente y que las decisiones cuestionadas carecen de irregularidades.

COLFONDOS plantea diversas excepciones, como la inexistencia de la obligación reclamada, argumentando que la afiliación de la demandante al RAIS fue realizada de manera libre, consciente y conforme a los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993. Alegó también la prescripción extintiva de la acción, debido al tiempo transcurrido desde la afiliación y los traslados cuestionados, y la excepción de buena fe, enfatizando que actuó dentro del marco de la normatividad vigente. Finalmente, se propuso la excepción de falta de legitimación en la causa, argumentando que las pretensiones carecen de fundamento legal, especialmente en lo referente al traslado de aportes al RPM.

En su defensa, COLFONDOS señala que la afiliación y los traslados al RAIS contaron con el debido soporte documental, incluyendo formularios firmados por la demandante, que reflejan su consentimiento informado. Además, resalta que la demandante permaneció en el RAIS durante más de dos décadas sin presentar reclamación alguna, lo que refuerza la validez de su afiliación. COLFONDOS también argumenta que las modificaciones normativas posteriores a los hechos no pueden aplicarse retroactivamente. Finalmente, invoca jurisprudencia relevante que respalda sus actuaciones, concluyendo que no se configuraron los vicios de consentimiento ni las irregularidades alegadas, por lo que solicita el rechazo de las pretensiones formuladas en su contra.

I.3.3. PORVENIR S.A.

La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., representada por su apoderado Javier Sánchez Giraldo, respondió a la demanda interpuesta por Maribel del Rosario Barraza Osorio. En su contestación, solicitó la absolución de todas las pretensiones, fundamentando que sus actuaciones se ajustaron a la normativa vigente. Adicionalmente, destacó que cualquier declaratoria de ineficacia o nulidad debe respetar el principio de restituciones mutuas, para evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la demandante.

PORVENIR formuló diversas excepciones, entre las cuales se destacan la no retroactividad de la norma para exigir obligaciones inexistentes al momento del traslado, restituciones mutuas, enriquecimiento sin causa, improcedencia de devolución de gastos de administración y prima de seguro previsional, aceptación tácita de las condiciones del RAIS y prescripción. Asimismo, se mencionó la improcedencia de las pretensiones en cuanto al traslado de aportes, bajo el argumento de que no existe causal que justifique la declaratoria de nulidad o ineficacia del traslado realizado.

La contestación de PORVENIR enfatiza que la afiliación de la demandante al RAIS se realizó de manera voluntaria y con pleno conocimiento de las condiciones del régimen. Argumentó que en el año 2005 no existía la obligación legal de entregar simulaciones pensionales ni proyecciones actuariales, lo cual fue introducido posteriormente mediante el Decreto 1748 de 2014. Asimismo, señaló que la demandante tuvo acceso a información clara y suficiente sobre las ventajas del RAIS y sus diferencias con el RPM, lo que desvirtúa cualquier vicio en el consentimiento.

En relación con las restituciones mutuas, PORVENIR indicó que, de declararse la ineficacia del traslado, solo se deberían restituir los valores estrictamente correspondientes a los aportes realizados, excluyendo gastos de administración, primas de seguros previsionales y rendimientos generados en el RAIS. Por último, invocó jurisprudencia relevante sobre el enriquecimiento sin causa y los efectos de la declaratoria de ineficacia, solicitando que cualquier decisión judicial respete estos principios para evitar desequilibrios patrimoniales injustificados.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 28 primera instancia)

En el marco del proceso ordinario laboral promovido por Maribel del Rosario Barraza Osorio contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, la AFP Porvenir S.A. y Colfondos S.A., el Juzgado declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional efectuado por la demandante del régimen de prima media con prestación definida (RPMPD) al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), realizado el 15 de mayo de 1995. Asimismo, se ordenó a las AFP demandadas transferir a Colpensiones los valores correspondientes a los aportes realizados, rendimientos financieros y los montos descontados por concepto de gastos de administración, primas de seguros previsionales y el fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados. Colpensiones fue condenada a mantener la afiliación de la demandante en el RPMPD y a actualizar su historia laboral.

En cuanto a los fundamentos fácticos, se estableció que la afiliación al RAIS se llevó a cabo sin que la AFP Colfondos S.A. cumpliera con su deber de brindar información suficiente, clara y oportuna sobre las condiciones, beneficios y riesgos de este régimen frente al RPMPD, tal como lo establece la Ley 100 de 1993 y su reglamentación. La demandante manifestó que el asesoramiento recibido fue superficial y que no se le realizaron simulaciones o proyecciones pensionales que le permitieran tomar una decisión informada. Además, se evidenció que los traslados posteriores entre AFP tampoco corrigieron esta omisión inicial.

Desde el punto de vista jurídico, el Juzgado fundamentó su decisión en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que exige a las AFP garantizar el derecho a una elección informada del régimen pensional. El incumplimiento de este deber genera la ineficacia del traslado, dado que el consentimiento de la afiliada estuvo viciado por falta de información adecuada. Asimismo, se determinó que la ausencia de reclamaciones previas por parte de la demandante no constituye una ratificación del traslado, ya que ello no subsana la falta de información inicial.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDADA

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES (mín 1:36:41 video 28)

Colpensiones, a través de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación contra las condenas impuestas en la sentencia de primera instancia, argumentando que la declaratoria de ineficacia del traslado pensional de la demandante del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) no le es oponible. La entidad señaló que no participó en el trámite administrativo que llevó a cabo la demandante para realizar el traslado y que su única obligación fue aceptar la solicitud, sin tener un deber legal adicional en el marco normativo vigente de la época. Además, Colpensiones enfatizó que la aplicación de la carga dinámica de la prueba no puede utilizarse indiscriminadamente, y que el artículo 167 del Código General del Proceso establece que corresponde a cada parte probar los hechos que sustentan sus pretensiones, salvo excepciones debidamente analizadas.

La entidad también resaltó que, conforme a las sentencias T-122 de 2017, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010 de la Corte Constitucional, nadie puede alegar su propio error para obtener beneficios que perjudiquen el esquema solidario del RPMPD, ya que ello podría descapitalizar el sistema en detrimento de otros afiliados. En este sentido, Colpensiones indicó que la demandante contó con tiempo y mecanismos suficientes para informarse adecuadamente durante el proceso de traslado. Por estas razones, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que se le absuelva de todas las pretensiones formuladas en su contra.

PORVENIR S.A. (min 1:38:56 video 28)

Porvenir S.A., a través de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación manifestando su inconformidad frente a la orden de devolución de las primas de seguros, los gastos de administración y el porcentaje del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, argumentando que estos conceptos no son susceptibles de devolución, ya sea de forma individual, combinada o indexada, conforme a lo dispuesto en la sentencia SU 107 de 2024. La recurrente sostuvo que dichos montos configuran situaciones consolidadas en el tiempo que no pueden retrotraerse por la simple declaratoria de ineficacia del traslado pensional, dado que ello implicaría desconocer las reglas contractuales y la gestión realizada durante el periodo en que la afiliada permaneció vinculada al RAIS.

Asimismo, Porvenir expresó su desacuerdo con la condena en costas, señalando que actuó de manera diligente y conforme a la normatividad vigente, respetando principios como el debido proceso, la igualdad y la eficiencia. Argumentó que la entidad gestionó los recursos aportados por la demandante de forma correcta, buscando los mejores rendimientos en beneficio de la afiliada y en cumplimiento de las disposiciones legales

COLFONDOS S.A. (min 1:40:21 video 28)

Colfondos S.A., a través de su apoderada judicial, interpuso recurso de apelación contra la sentencia proferida en primera instancia, manifestando su inconformidad con las decisiones adoptadas en perjuicio de la administradora. La recurrente argumenta que, conforme a las pruebas practicadas en el proceso, no existió vulneración alguna a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993. Sostuvo que la afiliación de la demandante al RAIS se realizó de manera libre, consciente, informada y voluntaria, como se evidencia en el diligenciamiento del formulario firmado el 15 de mayo de 1995. En ese momento histórico, no existía la obligación legal de entregar soportes adicionales a la asesoría verbal que se brindaba, cumpliendo con las exigencias normativas vigentes.

Colfondos también solicitó la aplicación de la sentencia de unificación SU-107 de 2024, emitida por la Corte Constitucional, para que se abstenga de imponer condenas relacionadas con el traslado del porcentaje de garantía mínima, gastos administrativos y primas de seguros previsionales, indexados y con cargo al patrimonio de la administradora. Argumentó que dichas disposiciones generarían un desequilibrio financiero y vulnerarían el orden fiscal del sistema pensional, dado que estos conceptos nacieron y se desarrollaron conforme a la legislación que regula a las administradoras de fondos de pensiones. Asimismo, afirmó que imponer tales condenas implicaría un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones, lo que pondría en desbalance al sistema solidario.

Finalmente, Colfondos cuestionó la condena en costas impuesta en la primera instancia, argumentando que actuó conforme a la normatividad vigente desde el momento de la afiliación de la demandante y durante toda la vinculación con la administradora. Sostuvo que realizó todas las tareas legales y normativas que le correspondían como administradora, demostrando diligencia en la gestión de la

cuenta de la afiliada. Por estas razones, solicitó al honorable Tribunal que revoque en su totalidad la sentencia apelada.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a examinar la decisión, en razón de la apelación de la parte demandada, el despacho de conocimiento, con auto del 01 de noviembre de 2024 (pdf 03), dispuso admitir el recurso presentado, corriendo traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión. Asimismo, este Tribunal estudiará en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta en aplicación al artículo 69 del CPT y SS.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; las partes se pronunciaron al respecto de la siguiente manera:

MARIBEL DEL ROSARIO BARRAZA OSORIO (pdf 05 segunda instancia)

En los alegatos presentados, la apoderada de la demandante, Maribel del Rosario Barraza Osorio, solicitó confirmar el fallo de primera instancia que declaró la ineficacia del traslado de régimen pensional de su representada del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Argumenta que dicho traslado se realizó sin que las administradoras cumplieran el deber de información y asesoría, lo cual vició el consentimiento de la demandante y vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la estabilidad pensional. Resalta que la falta de información sobre los riesgos y desventajas del RAIS derivó en una decisión desfavorable y contraria a los intereses de su representada.

Asimismo, la apoderada enfatiza que las administradoras Porvenir y Colfondos deben devolver los valores relacionados con comisiones, primas previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, por cuanto estos forman parte del patrimonio de la demandante y su no restitución generaría un enriquecimiento sin causa. Invoca el principio de buena fe y la normativa vigente, incluida la Ley 100 de 1993, para justificar la condena en costas y la reparación integral, solicitando que estas medidas aseguren el pleno restablecimiento de los derechos pensionales de la demandante.

PORVENIR S.A.

En los alegatos presentados por Porvenir S.A., a través de su apoderado, se solicitó al honorable tribunal que se revoque la sentencia de primera instancia argumentando que la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue libre, consciente y voluntaria, tal como se evidencia en el formulario firmado por la demandante el 15 de mayo de 1995. Porvenir sostuvo que para la época

de los hechos no existía obligación legal de entregar soportes adicionales a la asesoría verbal, la cual se cumplió conforme a la normatividad vigente. Además, destacó que el cambio de precedente introducido por la sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional debe ser aplicado para determinar la improcedencia de las condenas impuestas.

La administradora enfatizó que no es viable la devolución de los valores correspondientes a primas de seguros, gastos administrativos ni porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, ni mucho menos indexados, ya que estos conceptos están destinados por ley al funcionamiento del RAIS y no representan un enriquecimiento sin justa causa para el afiliado. Porvenir también resaltó que los rendimientos generados por los aportes de la demandante fueron producto de una gestión eficiente, que sería desbalanceada si se ordena devolver los gastos necesarios para generarlos. Finalmente, solicitó al tribunal reconsiderar la condena en costas, argumentando que actuó diligentemente y conforme a la normativa aplicable durante toda la vinculación de la demandante al sistema.

COLFONDOS S.A.

En los alegatos presentados por la apoderada de Colfondos S.A., se solicita al honorable tribunal revocar la sentencia de primera instancia y absolver a la administradora de todas las pretensiones formuladas. Argumenta que la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) fue voluntaria, libre e informada, tal como consta en el formulario de afiliación firmado en mayo de 1995, el cual no fue tachado ni desconocido durante el proceso. Señala que, para la fecha del traslado, la normativa no exigía documentación adicional que respaldara la asesoría verbal brindada al afiliado, y que, en todo caso, la demandante tenía el deber de informarse sobre las condiciones del sistema elegido. Colfondos también destaca que el precedente de la sentencia SU-107 de 2024 debe aplicarse en el presente caso, lo que exime a la administradora de la devolución de los gastos de administración, las primas de seguro previsional y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, ya que estas contribuciones no forman parte del patrimonio de la afiliada y son necesarias para el funcionamiento del sistema.

La administradora enfatiza que la condena impuesta por el juzgado genera un desequilibrio financiero al sistema de seguridad social y representa un enriquecimiento sin causa para Colpensiones, especialmente al ordenar la devolución de conceptos que garantizaron la administración eficiente de los recursos. Argumenta que los rendimientos financieros obtenidos son resultado de la correcta gestión de la cuenta individual de la demandante y que el traslado de dichos rendimientos, junto con los gastos de administración, desconoce los principios de justicia y equidad. Por último, solicita que se tenga en cuenta la sostenibilidad fiscal del sistema pensional y la naturaleza contributiva del RAIS, advirtiendo que las decisiones judiciales deben alinearse con las disposiciones constitucionales que garantizan la estabilidad financiera del sistema de seguridad social.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandada.

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Con base en la apelación presentada por la parte demandada y otorgado en favor de Colpensiones, el grado jurisdiccional de consulta, le corresponde a esta Sala de Decisión determinar si el traslado efectuado por la demandante del RPM al RAIS resulta ineficaz, y de salir avante tal declaración se procederá a verificar cuáles son las consecuencias jurídicas que tal declaratoria de ineficacia conllevaría.

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En el marco del análisis fáctico y probatorio del presente litigio, resulta indispensable delimitar los hechos que, por su naturaleza incontrovertida, no requieren de mayor análisis, así como aquellos que, por su controversia, constituyen el núcleo de la Litis y deberán ser objeto de valoración jurídica por parte del despacho. Esta distinción no solo facilita la precisión en la conducción del proceso, sino que también permite centrar el debate en los puntos neurálgicos de la controversia, conforme al principio de economía procesal y al mandato de garantizar una resolución justa y expedita.

No son objeto de controversia los siguientes hechos: (i) la afiliación inicial de la señora Maribel del Rosario Barraza Osorio al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones; (ii) su posterior traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), en virtud de acto de afiliación a fondo de pensiones Colfondos el 15 de mayo de 1995 y su posterior traslado horizontal al fondo de pensiones Porvenir S.A. el 29 de abril del 2005; y (iii) la validez formal de dicho documento en cuanto a la suscripción y recepción por parte de la administradora de pensiones.

Por el contrario, subsisten como aspectos objeto de controversia: (i) la verificación del cumplimiento del deber de información cualificada por parte de la administradora demandada, el cual implica la entrega de asesoría amplia, suficiente y oportuna respecto de los beneficios, riesgos y características inherentes a los regímenes pensionales; (ii) la existencia de vicios en el consentimiento del demandante al momento de los traslados, derivados de la presunta omisión de dicho deber de información; (iii) la procedencia de las excepciones propuestas por las demandadas, tales como la prescripción de la acción, aceptación tácita de las condiciones del RAIS y la inexistencia de la obligación; y (iv) la responsabilidad que podría recaer sobre las administradoras por el presunto impacto negativo en los derechos pensionales del demandante, particularmente en relación con su congrua subsistencia y la protección de su seguridad social.

Esta distinción preliminar permite encauzar el análisis hacia la determinación de si el traslado al RAIS estuvo acompañado de las garantías mínimas legales y constitucionales, así como si concurren los presupuestos jurídicos para declarar su ineficacia y, en consecuencia, restablecer la afiliación del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.

Sobre el deber de información al surtirse el traslado de régimen pensional

Sentado lo anterior y para resolver el problema jurídico planteado, corresponde a esta Colegiatura recordar que conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100 de 1993, el sistema general de pensiones está compuesto por el Régimen de Prima Media con prestación de definida – RPM y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras que el literal B del artículo 13 de la misma norma establece como uno de sus principios, que su selección es libre y voluntaria por parte del afiliado, debiendo para tal efecto manifestar por escrito la elección al momento del traslado, al igual que en el artículo 271 se prevé que en caso que se evidencie que el empleador o cualquier persona natural o jurídica impidió o atentó contra la libertad de afiliación y selección de organismo e institución del sistema de seguridad social integral, la afiliación efectuada en tales condiciones quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador; dicho de otro modo, conlleva la ineficacia del traslado en sentido estricto y por tal motivo, en este tipo de asuntos, no se examina la validez del traslado bajo la premisa de si se configuraron o no las nulidades sustanciales por presentarse vicio en el consentimiento, pues lo que se debe aplicar es la consecuencia expresa que el legislador estableció (CSJ SL 1465-2021 y SL 3179 de 2023).

Ahora bien, para efectos de tener por materializados los presupuestos fácticos de libertad y voluntad antes enunciados, se tiene que la doctrina probable emitida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia entre otras, en sentencias SL 33083 del 22 de noviembre de 2011, SL 17595 de 2017, SL 19447 de 2017, SL 4964 de 2018, SL 782 de 2021, SL 1949 de 2021, SL 509 de 2024 y SL 2999 de 2024, tiene acentuado que las AFP deben suministrar información suficiente, clara y comprensible sobre las características de los dos regímenes pensionales junto con las consecuencias reales de dicho traslado, con el fin de que el posible afiliado pueda tomar decisiones informadas e inclusive se le llegue a persuadir de trasladarse.

Lo anterior, como quiera que se verifica que tal obligación se concibió desde que se implementó el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y la existencia de las AFP, pues en atención a lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 97 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero – Decreto 663 de 1993 "*…las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas…"*, lo cual hace referencia a la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el posible afiliado pudiera conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, conforme lo consideró la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1688 de 2019, manifestando que el deber de información es independiente de la condición de beneficiario del régimen de transición del afiliado, como se puede leer también en sentencias SL 19447 de 2017 y SL 1688 de 2019.

Ahora, frente a la información que se debía brindar para el momento en que acaeció el traslado del RPM al RAIS, conviene rememorar lo expuesto por dicha Corporación en proveído SL 1452 de 2019, reiterada en la SL 1217 de 2021 y SL 3179 de 2023, en las que identificó distintas etapas de la evolución normativa respecto del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones, como se describe a continuación:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993. Art. 97, numeral 1 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003. Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal.	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009. Decreto 2241 de 2010.	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle.
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014. Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015. Circular Externa n. 016 de 2016.	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

Bajo idéntico derrotero se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia SU 107 de 2024, pues frente al deber de información que las administradoras de pensiones debieron cumplir al momento de asesorar a quienes efectuaron traslado de regímenes pensionales entre los años 1994 a 2009, puntualmente señaló que a las mismas les correspondía informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, las condiciones y consecuencias que tendría su

vinculación a ellas. En tal sentido precisó:

"El deber de información es clave en las relaciones contractuales que emprendan los particulares y es vinculante para aquella parte que, por su experticia, puede ofrecer a la parte débil de la relación los datos mínimos que caracterizan el objeto contractual. Las AFP siempre han estado legitimadas para promocionar el régimen de ahorro individual con solidaridad con el fin de lograr que cada vez más personas se afilien a él y así ser más competitivas en el sistema pensional. De cualquier modo, dichas AFP tienen el deber de informar a los potenciales afiliados, con criterios de transparencia y suficiencia, sobre las condiciones y consecuencias que tendrá su vinculación a ellas.

Este deber es consecuencia de la regla prevista en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 según el cual la afiliación de una persona al RAIS o al RPM debe ser libre y voluntaria. Es decir, la escogencia de una u otra opción, debe contar con conocimiento de causa. Esto supone que la persona debe reconocer, cuando menos, el funcionamiento, condiciones y reglamentación del régimen al que pretende pertenecer. Valga advertir que la decisión de afiliarse y permanecer afiliado a alguno de los dos regímenes, impactará el futuro de la persona y sus condiciones económicas en la vejez, razón por la cual, la relación contractual que se da entre una persona y las administradoras del RAIS, al momento en que aquel se afilia a estas, y mientras permanece afiliado, debe estar mediada por el principio de la buena fe que incorpora el de confianza legítima.

(…)

También puede señalarse, como conclusión preliminar, que el deber de información fue modificándose y haciéndose más exigente con el tiempo. En esto, también hay una coincidencia con la Corte Suprema de Justicia. En efecto, de 1993 a 2009, se debía informar sobre las características esenciales del régimen al que la persona pretendía trasladarse.

También se coincide con la Corte Suprema de Justicia en el hecho de que no informar debidamente a los usuarios, conforme al estándar exigido por las normas vigentes al momento en que estos efectuaron su respectivo traslado, genera la ineficacia del mismo pues esa es la consecuencia jurídica que determina el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 a la práctica de obstruir (en este caso a través del ocultamiento de datos relevantes) el derecho a la libre elección entre regímenes…"

De este modo, habida cuenta de que la accionante, conforme a la solicitud de vinculación del 15 de mayo de 1995 (archivo 12, folio 283) , efectuó su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) en enero de 1995, a través del fondo de pensiones Colfondos, y que posteriormente, efectuó traslado horizontal a la AFP Porvenir S.A. mediante la solicitud de vinculación No.02268205 del 29 de abril del 2005 (archivo 14, folio 99), resulta pertinente atender tanto los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (SL 2999 de 2024) como los desarrollos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024 la carga probatoria recae sobre la administradora de fondos de pensiones para demostrar que el traslado de régimen fue adoptado por el afiliado de manera libre y voluntaria, habiéndole proporcionado información

suficiente, veraz y comprensible acerca de las características, condiciones de acceso, implicaciones y riesgos inherentes a cada uno de los regímenes pensionales disponibles.

Sobre la carga de la prueba – frente al cumplimiento del deber de información

Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que la carga de demostrar en este caso que a la demandante al momento del traslado del RPM al RAIS se le explicó de forma detallada, clara y precisa las condiciones y garantías pensionales en cada régimen, las ventajas, desventajas y por ende las consecuencias que le generaba su traslado al RAIS, para que conociera a ciencia cierta cuál de los mismos le reportaba mayor beneficio y con base en dicha información tomara de forma consiente, libre y voluntaria la decisión de pertenecer a uno u otro régimen pensional, se encuentra a cargo de la AFP demandada, no por decisión arbitraria o caprichosa y en contravía del derecho a la igualdad de las partes, sino porque a la administradora de pensiones le corresponde acreditar el cumplimiento del deber de información, puesto que exigir al afiliado una prueba de este alcance, es un despropósito en la medida que la afirmación de no recibir información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación, como se indicó en sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 4426 de 2019, SL 1949 de 2021, SL 373 de 2021, SL 2229 de 2022 y SL 3179 de 2023.

Empero dicha postura, fue modulada por la Corte Constitucional en la sentencia SU 107 del 09 de abril de 2024, en lo que respecta a los procesos ordinarios donde se discute la ineficacia del traslado de afiliados del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad por deficiencias en la información brindada entre los años de 1993 a 2009, precisando al respecto:

> *"En suma, las partes deben aportar al proceso todas las pruebas que estén a su alcance y que siendo necesarias, pertinentes y conducentes para la resolución del litigio el juez debe decretar y practicar, al tiempo que el juez debe hacer uso de sus poderes o facultades oficiosas en materia probatoria para lograr desentrañar la verdad de lo ocurrido. En ese contexto, la inversión de la carga de la prueba puede ser excepcionalmente una opción de la que puede hacer uso el juez, pero no la única herramienta probatoria para desentrañar los hechos ocurridos y con ellos la verdad que le permitan luego de su valoración conforme a las reglas de la sana crítica resolver los casos sometidos a su escrutinio y decisión. En otras palabras, tanto las partes como el juez deben contribuir a la reconstrucción de los hechos, haciendo uso de las herramientas que conforme a las reglas constitucionales del debido proceso ya se encuentran dispuestas en el CPTSS y en el CGP. En criterio de esta Corte, esta regla supone que, en ningún caso, se podrá despojar al juez de su papel de director del proceso, de su autonomía judicial para decretar y practicar todas las pruebas que sean necesarias, pertinentes y conducentes, y para valorarlas al momento de analizar y resolver las pretensiones o las excepciones propuestas. En efecto, luego de haber recabado todos los medios de prueba que considere útiles, pertinentes, necesarios y conducentes, el juez debe conforme a las reglas de la sana crítica, proceder a valorarlos con el objeto de resolver los casos donde se discuta la ineficacia de*

traslados hechos del RPM al RAIS…"

Así pues, al sopesarse los lineamientos jurisprudenciales esbozados por la Corte Constitucional en la decisión previamente referida, se advierte que, en el caso sub examine, se arribaría a la misma conclusión a la que llegó el a quo, esto es, la procedencia de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional.

Caso concreto

A la luz de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala concluye que no existe en el plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento cabal del deber de información por parte de la AFP Colfondos al momento del traslado del demandante del Régimen de Prima Media (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y de la AFP Porvenir S.A. respecto del traslado horizontal, pues los formularios aportados por las demandadas, no son tan siquiera prueba somera del cumplimiento al deber de información que le acaecía.

Aunado a lo antes expuesto, resulta improcedente la tesis esgrimida por las partes demandadas, según la cual la permanencia de la demandante en el RAIS convalida el traslado inicial. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en las sentencias SL 1561 de 2022 y más recientemente en sentencia SL 4205 de 2022, ha reiterado que los traslados horizontales entre AFP del mismo régimen no subsanan la falta de información en el momento del traslado inicial desde el RPM. El análisis central en estos litigios radica en verificar si el afiliado recibió una información adecuada que le permitiera tomar una decisión consciente y fundamentada, y no en evaluar su permanencia posterior en el RAIS ni los deberes adquiridos como afiliado (CSJ SL1055-2022).

De otro lado, debe destacarse que el argumento de las AFP demandadas, relativo a que la sola firma del formulario de afiliación implica una manifestación libre y voluntaria de voluntad por parte del afiliado, es insuficiente para cumplir con la carga probatoria establecida en el artículo 167 del Código General del Proceso (C.G.P.). En este contexto, incumbía a Colfondos S.A. y a Porvenir S.A. demostrar que el asesor de servicios responsable de la afiliación cumplió con el deber legal de brindar una asesoría integral, proporcionando al afiliado una información comprensible y exhaustiva. La falta de acreditación de esta obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994 y el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, permite inferir que el traslado no se ajustó a los lineamientos normativos y jurisprudenciales aplicables atrás vertidos.

En síntesis, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T. y S.S.), que faculta al juzgador para formar libremente su convicción mediante una apreciación integral y crítica del acervo probatorio, esta Sala concluye que la decisión de la demandante de trasladarse al RAIS adolece de los elementos de validez derivados de una elección consciente, autónoma e informada. No se encuentra acreditado que los asesores responsables de los trasladó hubieran desplegado una asesoría adecuada que incluyera una exposición clara y pormenorizada sobre las repercusiones del cambio de régimen,

tales como los riesgos inherentes al RAIS, la necesidad de realizar cotizaciones adicionales, las consecuencias de no cumplir con el capital mínimo requerido para la pensión de vejez, la garantía de la pensión mínima, el régimen aplicable a la devolución de saldos, así como las diversas modalidades pensionales disponibles en el sistema. La omisión de estos aspectos esenciales evidencia un incumplimiento sustancial del deber de información, viciando así la decisión adoptada y afectando el derecho fundamental del afiliado a contar con una orientación precisa y completa que le permitiera sopesar los riesgos y beneficios de manera adecuada, conforme a los estándares de diligencia exigidos en el marco de la seguridad social integral.

En lo relativo a los efectos jurídicos derivados de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, resulta pertinente acoger lo dispuesto por la Corte Constitucional en la referida sentencia SU-107 de 2024, en la cual se señaló:

> "…*En suma, ni las primas de seguros, los gastos de administración, o el porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ya sea de forma individual, combinada o indexada son susceptibles de devolución o traslado al configurar situaciones que se consolidaron en el tiempo y que no se pueden retrotraer por el simple hecho de declarar la ineficacia del traslado pensional". (supra 303)*
>
> *(…)*
>
> *y, (iii) en los casos en los que se declare la ineficacia del traslado solo es posible ordenar el traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional si ha sido efectivamente pagado, sin que sea factible ordenar el traslado de los valores pagados por las distintas primas, gastos de administración y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima ni menos dichos valores de forma indexada (supra 327)."*

La decisión en cuestión, cabe señalar, se extiende de manera vinculante a todas las demandas que actualmente se tramitan ante la jurisdicción ordinaria laboral, según lo establece el ordinal octavo, razón por la cual esta Sala acoge dicho pronunciamiento en su integridad. No obstante, se precisa que se mantendrá la línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, particularmente en lo que respecta al deber originario de las AFP de proporcionar asesoría integral y adecuada a sus potenciales afiliados, cuya omisión inevitablemente acarrea la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen.

Con fundamento en el precedente constitucional citado, esta Sala procederá a modificar la sentencia de primera instancia en el sentido de acoger parcialmente el recurso de apelación presentado por Colfondos S.A. y Porvenir S.A. En tal virtud, se dispone que no resulta viable ordenar el traslado del porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima, las primas de seguro previsional y los gastos de administración, tal como lo señala la sentencia SU-107 de 2024, limitando los efectos de la declaratoria de ineficacia al traslado de los recursos disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y el bono pensional, si este ha sido efectivamente redimido.

Análisis de las Excepciones Propuestas por Colpensiones

En relación con las excepciones propuestas por Colpensiones, se concluye que estas carecen de soporte jurídico para prosperar dentro del contexto del presente litigio. Respecto del cobro de lo no debido, debe señalarse que las consecuencias inherentes a la declaratoria de ineficacia del traslado, así como la afiliación originaria del demandante al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), imponen a Colpensiones la obligación de readmitirlo como afiliado. Este deber encuentra sustento en la normativa vigente y en los principios rectores de solidaridad y eficiencia que gobiernan el sistema de seguridad social integral. Aunque Colpensiones no tuvo participación directa en el acto jurídico de traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), su posición como administrador del régimen inicial establece un vínculo jurídico ineludible que la obliga a asumir las consecuencias legales del restablecimiento del derecho pensional del demandante.

En lo concerniente a la excepción de inexistencia del derecho resulta improcedente, ya que las responsabilidades de Colpensiones derivan directamente de su rol en la administración del RPM, así como de los efectos legales que emanan de la afiliación originaria del demandante. Asimismo, el principio de buena fe, si bien invocado por Colpensiones, no opera como un mecanismo eximente de las responsabilidades inherentes a su condición de entidad garante del derecho fundamental a la seguridad social.

En lo que respecta a la excepción de prescripción planteada, se concluye que este medio exceptivo carece de vocación de prosperidad, toda vez que el traslado de régimen pensional afecta derechos inherentes al ser humano, los cuales, por su naturaleza fundamental, son imprescriptibles. Así lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en pronunciamientos como las sentencias SL 3937-2018, SL 1688-2019 y SL 1949-2021, al reconocer que la acción para solicitar la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen no puede estar sujeta a términos de prescripción, dado que no se trata de derechos de carácter patrimonial, sino de garantías esenciales vinculadas a la dignidad humana y a la seguridad social.

En relación con la excepción basada en el precedente establecido en la sentencia SL 373 de 2021, reiterado posteriormente en la SU 107 de 2024, esta Sala considera imperioso delimitar su aplicabilidad dentro del marco del caso concreto. Dichos precedentes estipulan que la calidad jurídica de pensionado constituye un estado consolidado que imposibilita la declaratoria de ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), habilitando únicamente la vía para reclamar una indemnización de perjuicios, conforme Decreto 758 de 1990 y el Decreto 1833 de 2016. Sin embargo, su aplicación requiere de condiciones objetivas que, en el presente asunto, no se acreditan, por cuanto el demandante no ostenta la calidad de pensionado.

A partir de lo anterior, es claro que el estado jurídico de la accionante no encuadra en los supuestos que impiden la declaratoria de ineficacia del traslado. La falta de consolidación de su calidad de pensionada implica que el traslado al RAIS puede ser examinado bajo los parámetros de legalidad y cumplimiento del deber de

información, sin que ello suponga una colisión con el precedente judicial. En efecto, el análisis de las garantías mínimas que debían asistir al acto de traslado sigue siendo un aspecto susceptible de control judicial, máxime cuando se alega la ausencia de información cualificada, lo cual impacta de manera directa en los derechos fundamentales de la accionante.

Sobre la Imposición de Costas en primera instancia.

El instituto de las costas procesales, consagrado en el artículo 361 del Código General del Proceso (C.G.P.), en concordancia con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (C.P.T.S.S.), constituye una herramienta jurídica orientada a garantizar la reparación de los gastos razonables en que incurre la parte triunfante en el marco de un litigio, como resultado directo de la actuación procesal de la parte vencida. Este precepto no solo busca resarcir los costos derivados de la defensa de los derechos del litigante victorioso, sino que también desempeña una función disuasiva frente a actuaciones procesales carentes de fundamento o abiertamente temerarias, contribuyendo al principio de eficiencia y celeridad en la administración de justicia.

La Corte Suprema de Justicia, en múltiples pronunciamientos, ha señalado que la imposición de costas encuentra su justificación en el principio de reparación integral y en la necesidad de preservar el equilibrio entre las partes procesales, obligando a quien ha resultado vencido a asumir las consecuencias económicas de su actuación en el proceso.

En el caso sub examine, Colpensiones, Colfondos y Porvenir S.A. fueron vencidas en sus pretensiones. En este contexto, la imposición de costas no solo resulta procedente, sino imperativa conforme al marco normativo aplicable y en atención al principio de reparación económica a favor de la parte vencedora, este despacho considera que es jurídicamente procedente imponer las costas del proceso las partes demandadas, incluidas las agencias en derecho, en cuantía que fue determinada de acuerdo con los parámetros establecidos en el artículo 365 del C.G.P., en aras de garantizar una justa compensación por los gastos razonables asumidos por la parte demandante en la defensa de sus derechos, razón por la cual la decisión de imponer a costas a cargo de las demandadas será confirmado.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala procederá a la modificación parcial de la sentencia de primera instancia, confirmando la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional de la demandante. Tal determinación se adopta en observancia estricta del marco normativo y jurisprudencial vigente, atendiendo particularmente al precedente establecido en la sentencia SU-107 de 2024, cuyo alcance y obligatoriedad fueron analizados en el desarrollo del presente litigio.

Así las cosas, se declaran resueltas las apelaciones interpuestas por las partes, estimando parcialmente los argumentos del apelante Porvenir S.A. en lo concerniente a la improcedencia del traslado del porcentaje correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y demás conceptos no contemplados dentro

de los límites señalados por el precedente constitucional. De igual forma, se desestiman las excepciones presentadas por Colpensiones, concluyendo su improcedencia en atención a la fundamentación jurídica previamente desarrollada.

Con lo anterior, se da por agotado el análisis de las cuestiones litigiosas, configurándose la ejecutoria de lo resuelto en los términos que se han indicado, en estricto apego a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de los derechos fundamentales que subyacen en el régimen de seguridad social integral.

III.3. COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

Para concluir, dada la prosperidad parcial de los recursos presentados por las partes demandadas PORVENIR S.A. y COLFONDO, no se las condenará en costas de segunda instancia; sin embargo, respecto de COLPENSIONES al resultar fallido el recurso formula se le impondrán costas.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia proferida el día 07 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído, el cual quedará así:

> ***SEGUNDO. - ORDENAR*** *a la* ***AFP PORVENIR S.A****. El traslado de todos los valores recibidos en la cuenta de ahorro individual de la accionante por concepto de cotizaciones, aportes adicionales y los rendimientos financieros causados incluidos intereses, por todo el tiempo de permanencia de la actora en esa AFP. Al momento de cumplirse esta orden, los conceptos deberán discriminarse con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique. Para lo cual, se le concede un plazo de 30 días a la AFP PORVENIR S.A., contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, para que ponga a disposición de Colpensiones las sumas ordenadas.*

SEGUNDO: REVOCAR el numeral **TERCERO** de la sentencia proferida el día 07 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo restante la sentencia proferida el día 07 de octubre del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

CUARTO. CONDENAR en costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES y en favor de la parte demandante.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 063.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De los Ríos B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

Diana Martinez M.

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada

AUTO DE PONENTE

Como quiera que mediante la SENTENCIA que se acaba de proferir se impuso condena en costas de segunda instancia a cargo de la parte recurrente COLPENSIONES y en favor de la demandante, se fija como agencias en derecho la suma de uno y medio (1.5) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Tal suma será liquidada en primera instancia conforme al artículo 366 del Código General del Proceso. Decisión notificada en **ESTADOS**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Karen L. Castro O.

KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

República de Colombia - Rama Judicial

Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá
Sala Decisión Laboral Octava

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Clase de proceso	Ordinario laboral
Parte demandante	DAVID ERNESTO GORDO GRANADOS
Parte demandada	TEXTILES LAFAYETTE S.A.S
Radicación	11001310504720230014001
Fecha de la decisión	06 DE AGOSTO DEL 2024
Motivo	GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA
Tema	CONTRATO TERMINO INDEFINIDO
Acta de Discusión	064
Mag. Ponente	KAREN LUCÍA CASTRO ORTEGA
Link expediente	11001310504720230014001

El asunto.

Siguiendo las preceptivas de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 la Sala profiere Sentencia en forma escrita y procede a estudiar el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, en razón de la sentencia proferida el día 06 de agosto del 2024, en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES (carpeta primera instancia)

I.1. HECHOS Y PRETENSIONES (pdf 03 primera instancia)

David Ernesto Gordo Granados, quien actúa a través de apoderado, presentó demanda contra **Textiles Lafayette S.A.S.**, pretendiendo por esta vía ordinaria laboral obtener, en primer lugar, la declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, vigente desde el 8 de junio de 1992 hasta el 7 de junio de 2020, en el cargo de ayudante de planta, con un salario promedio mensual de $1.603.778,25. En segundo lugar, solicita que se declare la terminación unilateral y sin justa causa de dicho contrato, acontecida el 7 de junio de 2020.

Consecuentemente, el demandante pretende que se condene a **Textiles Lafayette S.A.S.** al pago de una indemnización por terminación injustificada, calculada en $30.471.807,00, junto con la indexación correspondiente sobre las sumas reclamadas. Finalmente, se solicita la imposición de costas y agencias en derecho a cargo de la demandada.

En cuanto a los fundamentos fácticos, el demandante expone que ingresó a la empresa bajo un contrato de trabajo a término fijo el 7 de diciembre de 1992, contrato que fue prorrogado de manera continua hasta el 7 de diciembre de 2020, bajo las mismas condiciones laborales en el cargo de operario de planta. Afirma que sus jornadas laborales se desarrollaban en horarios rotativos, incluyendo turnos de noche y días festivos, sin variación en las funciones desempeñadas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Diagonal 12 C No. 71-98 de Bogotá, D.C. Alega que el 8 de junio de 2020, la empresa, a través de su directora de nómina y bienestar, notificó la terminación de su contrato bajo la causal de "expiración del contrato", sin una justa causa debidamente sustentada, lo cual, a su juicio, configura una terminación unilateral sin justa causa.

Desde el punto de vista jurídico, el demandante fundamenta sus pretensiones en los artículos 1, 2, 13, 25, 28, 46, 48, 49 y 53 de la Constitución Política, que garantizan el derecho a la igualdad, el trabajo digno y la estabilidad laboral. Asimismo, se apoya en los artículos 62, 64, 65 y 66 del Código Sustantivo del Trabajo, los cuales regulan la terminación de los contratos laborales, especificando causales válidas de despido, los requisitos para invocar justa causa y las indemnizaciones aplicables en caso de terminación sin justa causa. En particular, el artículo 64 establece las bases para calcular la indemnización por terminación injustificada de un contrato a término indefinido, que en este caso se extiende desde el inicio de la relación laboral hasta su culminación en 2020.

Finalmente, el demandante complementa su argumentación jurídica con disposiciones adicionales, incluyendo los artículos 5, 12, 25, 50, 51 y 74 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, que establecen el marco procesal en el que se sustenta la demanda. También cita el Decreto 2351 de 1965 y el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en lo concerniente a las relaciones laborales y la modificación de causales de despido.

I.2. TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Cuarenta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, admitió, y corrió traslado de la demanda mediante auto de 10 de agosto del 2023 (pdf 04), luego, con providencia del 15 de noviembre de 2023 (pdf 10), tuvo por contestada la demanda por **Textiles Lafayette S.A.S.** y señaló fecha para celebración de audiencia de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

I.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

I.3.1. TEXTILES LAFAYETTE S.A.S (PDF 06)

Textiles Lafayette S.A.S., representada por la apoderada María Lucía Laserna Angarita, presenta contestación a la demanda interpuesta por **David Ernesto Gordo Granados**, oponiéndose a las pretensiones y esgrimiendo diversas excepciones de mérito. En su defensa, la empresa argumenta que la relación laboral entre las partes se desarrolló bajo un contrato a término fijo, prorrogado sucesivamente, y no bajo un contrato a término indefinido como afirma el demandante. Lafayette asegura haber

cumplido con todas las obligaciones laborales durante la vigencia de la relación laboral y que la terminación se produjo por la expiración del plazo pactado, conforme al artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, luego de haber enviado el preaviso de manera oportuna.

La primera excepción planteada es la inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, con base en que, al concluir la relación laboral, la empresa canceló todas las acreencias salariales y prestacionales adeudadas al demandante, incluida la liquidación final. Lafayette sostiene que, dado que el contrato fue terminado por expiración del plazo fijo pactado y no por despido sin justa causa, no procede el reconocimiento de la indemnización solicitada. La empresa argumenta que la terminación se dio en virtud de una causa legal y objetiva que excluye la obligación de indemnizar, conforme al literal c) del numeral 1 del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo.

En segundo lugar, invoca la excepción de prescripción. **Textiles Lafayette**, sin admitir el derecho reclamado, señala que esta debe declararse conforme al artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. La empresa considera que cualquier reclamación derivada de la relación laboral se encuentra prescrita, dado el término de más de tres años transcurrido entre la terminación del contrato (7 de junio de 2020) y la presentación de la demanda (7 de junio de 2023).

Finalmente, la empresa plantea la excepción de buena fe, argumentando que actuó con absoluta convicción de haber cumplido todas sus obligaciones laborales para con el demandante. **Textiles Lafayette** sostiene que no solo pagó la totalidad de las acreencias laborales en vigencia del contrato, sino que también dio por terminada la relación laboral de acuerdo con el plazo fijo pactado, sustentándose en la legalidad y en un actuar honesto y diligente.

I.4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (video 15 primera instancia)

Adelantadas las etapas propias del proceso laboral y recaudado el material probatorio, el operador judicial a cargo del Juzgado Cuarenta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia del 6 de agosto de 2024, resolvió el conflicto suscitado entre el señor **David Ernesto Gordo Granados** y **Textiles Lafayette S.A.S.** destacando que no fue objeto de controversia la existencia de la relación laboral ni los extremos temporales del contrato, dado que las partes coincidieron en señalar que dicha relación se extendió desde el 08 de junio de 1992 hasta el 7 de junio de 2020, lo cual fue corroborado mediante el contrato de trabajo y la carta de terminación aportados en el proceso.

En relación con la naturaleza del contrato, el despacho verificó que este fue a término fijo, sujeto a prórrogas automáticas sucesivas, de conformidad con la documentación allegada. A pesar de la pretensión del demandante de que se declare como contrato a término indefinido, el análisis probatorio permitió concluir que dicha solicitud carece de fundamento, al haberse demostrado que la relación se rigió por un contrato

de trabajo a término fijo, regulado por el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyas prórrogas automáticas no alteraron su modalidad.

Sobre el despido sin justa causa alegado por el demandante, el despacho examinó la carga de la prueba y concluyó que la terminación del contrato se produjo en virtud de la expiración del plazo pactado, en consonancia con el literal c) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo. La demandada acreditó su cumplimiento del preaviso de 30 días, notificando al demandante el 20 de abril de 2020 su intención de no prorrogar el contrato, lo cual fue validado en el plenario como cumplimiento de los requisitos legales para esta modalidad de terminación.

En consecuencia, el juzgado decidió absolver a **Textiles Lafayette S.A.S.** de todas las pretensiones incoadas, al considerar que la terminación de la relación laboral obedeció a una causal legal y no a un despido sin justa causa.

I.5. RECURSO DE APELACIÓN DEMANDANTE (min 01:19:49 video 15)

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación argumentando que, aunque el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo establece la posibilidad de contratos a término fijo, también dispone que estos deben constar por escrito y no pueden exceder una duración de tres años. Sin embargo, en el caso en cuestión, el contrato laboral de su representado con **Textiles Lafayette S.A.S.** Se mantuvo desde el 8 de junio de 1992 hasta el 7 de junio de 2020, prorrogándose de manera continua y superando así el límite temporal establecido por la norma. Según el apelante, la duración ininterrumpida del contrato confiere al trabajador el derecho a una indemnización, puesto que considera que, bajo estas circunstancias, el contrato debió haberse considerado a término indefinido.

Asimismo, el apoderado enfatizó que la terminación de la relación laboral no contó con una justificación de despido con justa causa. En su criterio, la ausencia de una causal válida para finalizar el vínculo contractual genera el derecho de su representado a recibir la indemnización correspondiente por despido sin justa causa, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo.

II. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA (CARPETA SEGUNDA INSTANCIA)

Surtido el trámite en esta instancia sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Unitaria de Decisión Laboral Octava, en razón de la apelación interpuesta por la parte demandante, dispuso admitir el recurso presentado y corrió traslado a las partes para la presentación de sus alegatos de conclusión mediante auto del 2 de septiembre de 2024 (PDF 03). Posteriormente, mediante auto del 8 de octubre de 2024 (PDF 06), el despacho de conocimiento resolvió admitir el desistimiento formulado por la parte demandante respecto del recurso de apelación previamente interpuesto contra la sentencia de primera instancia y, asimismo, admitir el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante, en aplicación del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

II.1. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Cumplido el traslado a las partes, y concedida la oportunidad para que formulen sus alegatos de conclusión, en la forma establecida en el artículo 13, numeral 1º de la Ley 2213 de 2022; la única que se pronunció al respecto fue la parte demandada **Textiles Lafayette S.A.S.** así:

Textiles Lafayette S.A.S. (pdf 04 segunda instancia)

En los alegatos de conclusión, la apoderada de **Textiles Lafayette S.A.S**. solicitó al Tribunal Superior de Bogotá la confirmación de la sentencia de primera instancia, mediante la cual se absolvió a la empresa de todas y cada una de las pretensiones formuladas por el demandante, **David Ernesto Gordo Granados**. La defensa sostuvo que la relación laboral estuvo regida en todo momento por un contrato de trabajo a término fijo, y que las prórrogas sucesivas de este no implican, en ningún caso, su transformación a un contrato a término indefinido, conforme al criterio pacífico de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que establece que la esencia de un contrato a término fijo no se modifica por la renovación periódica, ni su terminación constituye despido sin justa causa.

La apoderada de la empresa destacó que la terminación del vínculo laboral ocurrió por expiración del plazo pactado, conforme al literal c) del numeral 1 del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, y en observancia del preaviso dado oportunamente. Asimismo, argumentó que, dadas las circunstancias objetivas de disminución en las operaciones de la empresa derivadas de la pandemia de COVID-19 y el desempeño laboral subóptimo del actor, no procede en derecho la indemnización por despido sin justa causa invocada por el demandante, conforme a lo dispuesto en el artículo 64 del CST.

III. CONSIDERACIONES

Procede este Tribunal, a estudiar el grado jurisdiccional de consulta en favor del demandante

III.1. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a esta Sala de Decisión resolver el siguiente problema jurídico en virtud del grado jurisdiccional de consulta otorgado en favor del demandante: ¿Debe confirmarse la decisión absolutoria respecto de las pretensiones del demandante, considerando la terminación de la relación laboral fundamentada en la expiración del plazo fijo pactado?

III.2. SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO

En esta instancia y conforme al grado jurisdiccional de consulta, no serán objeto de discusión los hechos ya probados y sobre los cuales existe consenso entre las partes. En particular, se encuentra plenamente acreditada la existencia de la relación laboral entre el demandante, David Ernesto Gordo Granados, y la demandada, Textiles

Lafayette S.A.S., así como los extremos temporales de dicha relación, fijados entre el 8 de junio de 1992 y el 7 de junio de 2020. Igualmente, no se controvierte la modalidad de contrato a término fijo, suscrito inicialmente por un plazo inferior a un año y prorrogado sucesivamente en 29 ocasiones, aspecto que se reconoce en ambas versiones.

Lo que será objeto de análisis, en cambio, es la evaluación de si tales prórrogas sucesivas modifican la naturaleza del contrato o sí este conserva su carácter de término fijo, conforme al artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. También será materia de discusión la validez de la terminación invocada por la empresa, basada en la expiración del plazo pactado y notificada mediante preaviso en fecha 20 de abril de 2020, y si esta causal excluye el derecho a indemnización.

Naturaleza y Modalidad del Contrato de Trabajo: Análisis del Contrato a Término Fijo y sus Prórrogas

El contrato a término fijo posee una naturaleza jurídica específica que lo distingue del contrato a término indefinido. A diferencia del contrato indefinido, cuya duración no se encuentra previamente limitada, el contrato a término fijo establece con precisión sus extremos temporales, determinando de forma estricta una fecha de inicio y de terminación. Esta rigidez implica que el contrato a término fijo debe contener los elementos temporales de manera inequívoca; de no estar adecuadamente delimitados, la relación podría interpretarse como un contrato a término indefinido, según la normatividad laboral y la jurisprudencia. Esto exige, entonces, una verificación exhaustiva de los términos de dicha modalidad contractual.

En ese contexto, se evidencia en el expediente, visible en el PDF 07, folios 75 y 76, el primer contrato de trabajo suscrito entre las partes, firmado el 5 de junio de 1992 y con fecha de inicio de ejecución el 8 de junio del mismo año. Este contrato, titulado "CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO," establece claramente sus extremos temporales, fijando su duración en seis meses, con inicio de labores el 8 de junio de 1992 y vencimiento el 7 de diciembre de 1992.

Además, el contrato contiene un acápite de modificaciones que evidencia dos prórrogas de seis meses cada una: la primera desde el 8 de diciembre de 1992 hasta el 7 de junio de 1993 y la segunda del 8 de junio de 1993 al 7 de diciembre de 1993. En el folio 101 del PDF 07 se encuentra otra prórroga, la cual extiende el contrato desde el 8 de diciembre de 1993 hasta el 7 de junio de 1994. Estas prórrogas cumplen con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que, si el contrato a término fijo es inferior a un año, solo podrá prorrogarse hasta por tres períodos iguales o inferiores.

Posteriormente, en el folio 102 del PDF 07 se evidencia un otrosí al contrato, con fecha del 12 de abril de 1994, en el cual se acuerda que, a partir del 7 de junio de 1994, el contrato se prorrogará automáticamente por un año. En adelante, el contrato fue renovado anualmente hasta el 7 de junio de 2020, cumpliendo con lo previsto en el

[1]artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, que permite la renovación indefinida de este tipo de contratos. Así, la naturaleza de contrato a término fijo se mantiene intacta a pesar de las prórrogas, sin que ello implique una transformación a contrato indefinido, en concordancia con la norma.

En virtud de lo expuesto, es claro que el contrato celebrado entre las partes ha cumplido rigurosamente con los requisitos legales exigidos para un contrato a término fijo, tal como lo establece el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Cada prórroga se ha ajustado a los parámetros normativos, permitiendo la renovación anual sin alterar la naturaleza jurídica del contrato. Por tanto, le asiste razón al juzgador de primera instancia al concluir que la relación laboral conservó su carácter de contrato a término fijo y que las prórrogas sucesivas no transformaron su modalidad en un contrato indefinido, dado que las renovaciones están expresamente permitidas y no implican un cambio en la naturaleza contractual.

Procedencia de la Terminación de la Relación Laboral por Expiración del Plazo Fijo Pactado

La terminación del contrato en cuestión se fundamenta en una causal objetiva y estrictamente legal, que corresponde a la prevista en el literal c) del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece la expiración del plazo fijo pactado como una causal válida de terminación de la relación laboral. Esta modalidad de finalización responde a la naturaleza misma de los contratos a término fijo, caracterizados por la delimitación precisa de sus extremos temporales, lo cual implica que, una vez cumplido el término estipulado, el vínculo laboral se extingue automáticamente sin requerir una justificación adicional. La expiración del plazo pactado constituye, entonces, un modo legítimo de conclusión de la relación laboral, al amparo de la normatividad vigente, que no compromete al empleador con obligaciones indemnizatorias por despido sin justa causa, al no tratarse de una terminación unilateral en los términos establecidos para los contratos a término indefinido.

En este sentido, la pretensión del demandante que solicita declarar la terminación unilateral y sin justa causa carece de fundamento jurídico y fáctico, dado que la finalización del contrato no obedece a una voluntad unilateral arbitraria, sino a la expiración del plazo contractual acordado de antemano, lo cual excluye cualquier interpretación de despido sin justa causa. La naturaleza temporal del contrato y el cumplimiento del preaviso de terminación (fl. 122 pdf 07) constituyen un marco claro de actuación ajustada a derecho por parte de la demandada, garantizando así el respeto de los términos pactados y del principio de seguridad jurídica que rige este tipo de relaciones laborales. Al no configurarse una causal de despido unilateral injustificado, resulta improcedente la pretensión del demandante en torno a una

---

[1] **ARTÍCULO 46. CONTRATO A TÉRMINO FIJO.** El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres años, pero es renovable indefinidamente.

(…) 2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente. (…)

indemnización por despido, y, por ende, las demás reclamaciones asociadas a dicha terminación.

Asimismo, es pertinente señalar que, a la luz de los elementos probatorios aportados, se encuentra probada la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, en tanto la demandada actuó dentro del marco de la legalidad y conforme a las disposiciones que rigen los contratos a término fijo. La expiración del contrato no genera obligación adicional alguna frente al demandante y, por ende, inválida cualquier reclamo indemnizatorio derivado de una terminación que, en este caso, se justifica plenamente en la causal objetiva señalada.

En virtud de lo anterior, y considerando que la decisión de primera instancia aplicó correctamente los preceptos legales, esta será confirmada, al haberse comprobado que la terminación del contrato de trabajo se ajustó a la causal de expiración del plazo pactado, exenta de cualquier vicio o transgresión de derechos laborales.

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**, Sala de Decisión Laboral Octava, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. PRIMERO. CONFIRMAR en todo la sentencia proferida el día 06 de agosto del 2024 en el proceso de la referencia, por el Juzgado Cuarenta y Siete Laboral del Circuito de Bogotá; conforme las consideraciones vertidas en el presente proveído.

SEGUNDO: SIN LUGAR a condenar en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes en **ESTADOS ELECTRÓNICOS**, conforme lo dispone la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, con inserción de la providencia en el mismo; igualmente por **EDICTO** que permanecerá fijado por un (1) día, en aplicación de lo consagrado en los artículos 4º y 41 del C.P.L. y S.S. De lo aquí decidido se dejará copia en el Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de procedencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de esta fecha según acta No. 064.

Karen L. Castro O.

KAREN LUCIA CASTRO ORTEGA
Magistrada ponente

Daniela De Los Rios B.

DANIELA DE LOS RIOS BARRERA
Magistrada

DIANA DEL PILAR MARTINEZ MARTINEZ
Magistrada